SESIÓN DEL DÍA MARTES 14/08/2018

10.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)".

——Léase el proyecto.

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante en mayoría, señora diputada Lilián Galán.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar en este ámbito mi reconocimiento a todo el equipo de trabajo que participó en el trámite de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Felicito especialmente a todos los funcionarios del Parlamento que nos acompañaron; reconozco la excelente labor de la Secretaría de la Comisión, así como del Cuerpo Técnico de Taquigrafía. También quiero hacer un reconocimiento a las legisladoras y a los legisladores de la bancada de gobierno y de la oposición por haber contribuido a llevar a buen puerto el trámite en la Comisión.

Cuando se me honró con el rol de presidenta de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, la prensa recogió como noticia que era la primera vez que una mujer ocupaba este puesto. Haré una pequeña digresión al respecto.

Por una parte, quiero pedir que reflexionemos: si es noticia que recién en 2018 una mujer pudo ser presidenta de la Comisión de Presupuestos en una rendición de cuentas, tenemos un breve atraso en cuanto a representación; hay una enorme deuda a cubrir con la representación del 50 % de la ciudadanía de este país.

Por otra parte, quiero dejar muy claro que si llegué a ocupar esta posición primero en el Parlamento y ahora como presidenta de esta Comisión es por la lucha de los trabajadores de este país, que hicieron que muchas de estas bancas hoy estén ocupadas por trabajadores. Yo no estaría aquí si no fuera por la ley de cuotas, aplicada por primera vez en las últimas elecciones.

Traigo esto a colación porque hay que deconstruir el discurso que quiere hacer creer que quienes llegamos al Parlamento lo hicimos, exclusivamente, en base a méritos personales. No solo no es así, sino que la reivindicación de la meritocracia es funcional a ocultar todas las luchas que han ido permitiendo que más mujeres y más trabajadores puedan ocupar bancas en el Parlamento.

Dicho esto, ingresaré en la presentación de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2017.

El Presupuesto nacional 2015-2019 y las Rendiciones de Cuentas 2015-2016 asignaron incrementos presupuestales respecto de la línea base por unos $ 16.900.000.000 para el año 2019, expresados a valores de 2018. Creemos que esta información es relevante y refleja la evolución de las asignaciones presupuestales según las prioridades expresadas por este Gobierno.

Las principales asignaciones incrementales para el 2019, respecto de la línea base, corresponden a los siguientes organismos.

La ANEP recibió el 39 % del total de los recursos incrementales, unos $ 6.636.000.000, a lo que se agrega una partida asignada en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que es ejecutada por esta Administración.

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados recibió asignaciones por $ 2.150.000.000, de los cuales $ 749.000.000 fueron asignados al Mides; $ 328.000.000, a la ANEP y $ 1.072.000.000, al INAU.

Se debe considerar que, adicionalmente, se transfirió al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, desde el BPS, una partida de $ 230.000.000, correspondiente a asistentes personales.

La Udelar recibió unos $ 1.756.000.000, lo que representa el 10 % del total de las asignaciones incrementales.

ASSE recibió $ 1.075.000.000, lo que equivale al 6 % del total de los recursos incrementales.

El Ministerio del Interior obtuvo recursos incrementales por $ 1.002.000.000, lo que representa el 6 % del total.

El INAU y el Inisa incrementaron sus recursos por $ 978.000.000, lo que alcanza el 6 % del total de las asignaciones, a lo que se agrega la partida asignada en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

En el Inciso 24 "Diversos Créditos" se destacan las siguientes asignaciones: para los proyectos de Participación Público-Privada, $ 610.000.000; para la Agesic, $ 375.000.000, a fin de cubrir diversos proyectos transversales, como trámites en línea, infraestructura de datos, etcétera; para la infraestructura del área metropolitana, $ 285.000.000, y para el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, $ 228.000.000.

Las asignaciones más relevantes del Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" corresponden a la ANII, con $ 300.000.000 para el programa Educación y Transferencia Tecnológica; con $ 300.000.000 para el Plan Ibirapitá y $ 250.000.000 para el Plan Ceibal.

Otros organismos acumulan incrementos porcentuales significativos respecto a la línea de base, si bien la incidencia en el monto global es relativamente acotada. Por ejemplo, la UTEC tiene el 56 %; el Inumet, el 53 % y la Fiscalía General de la Nación, el 29 %.

Cabe destacar que, a efectos de contribuir al financiamiento de las asignaciones priorizadas, se establecieron abatimientos significativos en la Administración central, lo que demuestra que hubo una gestión eficiente de este Gobierno. Se realizaron abatimientos permanentes en las partidas de remuneraciones por un total de $ 1.584.000.000: $ 870.000.000 en el Presupuesto nacional 2015-2019 y $ 714.000.000 en la Rendición de Cuentas 2015, todo expresado a valores de enero de 2018.

Para nosotros es importante una mirada de largo plazo, contextualizada, para entender esta Rendición de Cuentas, para comprender cómo se llega a los incrementos señalados anteriormente. De lo contrario, estaríamos presentando una mirada muy reducida, sin causas ni consecuencias. Si miramos la evolución del gasto a mediano plazo, advertiremos que creció, en el período 2005-2017, un 88 % en términos reales, situándose en torno al 28 % del producto interno bruto en el año 2017. Estamos hablando de la evolución del gasto presupuestal efectivamente ejecutado.

Los tres períodos presupuestales transcurridos desde el año 2005 tienen características claramente diferentes en cuanto a los ritmos de crecimiento de la economía, de la recaudación fiscal y del gasto endógeno y, por lo tanto, también con respecto a los diferentes márgenes para destinar, según las orientaciones del Gobierno nacional, a aumentos del gasto discrecional con el fin de atender las necesidades definidas como prioritarias.

Por ejemplo, en el período 2005-2009, Uruguay alcanzó un crecimiento acumulado del PBI de un 33 % real -lo que equivale a una tasa promedio anual de 6 %-, mientras que el gasto presupuestal lo hizo a una tasa acumulada del 28 %. En dicho período, se verificó una importante disminución del peso de los gastos no discrecionales, como los intereses de la deuda pública y las transferencias a la seguridad social, que pasaron de representar el 47 % del total del gasto a ser el 33 % en el año 2009.

El proceso de formalización de puestos de trabajo se tradujo en una caída de la tasa de evasión de diecinueve puntos porcentuales en el mismo período, pasando de 46,5 % a 27,1 %. Esto fue acompañado por el incremento de la calidad y cantidad del empleo, y fue estimulado por el crecimiento de la economía, el funcionamiento de los Consejos de Salarios y el fuerte aumento del salario real. Todos estos factores permitieron disminuir la asistencia financiera a la seguridad social, a la vez que se aumentaban las prestaciones.

Más del 60 % del total del incremento del gasto del período se destinó a educación, salud, seguridad y protección social.

En el período 2005-2009, el gasto de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución creció 73 % en términos reales -muy por encima del crecimiento del PBI-, y se reflejó en una mayor participación de ellos en el total del gasto, pasando de representar un 20 % en el 2004 a un 27 % en el 2009.

En el período 2010-2014, la economía continuó creciendo fuertemente aunque a un ritmo algo menor, totalizando un acumulado de 27 % en términos reales, lo que equivale a una tasa promedio anual de 5,4 %.

Además, en este período se frenó el efecto positivo de los gastos que presentan una dinámica endógena, como las transferencias a la seguridad social y los intereses de deuda, cuya participación en el total del gasto se estabilizó en torno al 31 %. Las transferencias a la seguridad social crecieron un 24 % y los intereses de la deuda, un 2 %, ambos en términos reales.

Diversas leyes y decisiones administrativas del BPS llevaron a incrementar sustancialmente el gasto destinado a la seguridad social, lo cual por supuesto compartimos. En particular, se destacan los efectos de la ley que flexibilizó el acceso a las jubilaciones del año 2008, el aumento del número de beneficiarios del subsidio por enfermedad a partir del 2010, los subsidios por maternidad y paternidad a partir de 2013, el aumento de las altas jubilatorias por incapacidad y las pensiones por invalidez, y el proceso de aumento de las jubilaciones mínimas.

Continuando con el proceso de consolidación de los avances sociales, la atención de las prioridades y la continuidad de los procesos de cambio llevados adelante en el período anterior, las asignaciones incrementales discrecionales

se destinaron principalmente a la ANEP, ASSE, el Ministerio del Interior, el INAU y la Udelar. Estas áreas son prioritarias para el Gobierno del Frente Amplio porque representan una distribución del ingreso en cuanto a lo que conocemos como salario indirecto y a una sociedad más inclusiva. En definitiva, significa mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

En el período iniciado en 2015, el país enfrenta un entorno externo desfavorable, conformado por importantes caídas del nivel de actividad de Argentina y Brasil. Lamentablemente, el regreso de las políticas de ajuste en nuestra región es una mala noticia para nosotros y pésima para nuestros hermanos argentinos y brasileños.

Al inicio de este período de gobierno, cambiaron las condiciones internacionales conformando un escenario más desfavorable, existieron tendencias crecientemente proteccionistas a nivel mundial, acompañadas de la caída de los precios principales de nuestros productos exportables, y hubo un panorama de incertidumbre signado por las expectativas de suba gradual de las tasas de interés en los Estados Unidos.

En este contexto, si bien la economía uruguaya continúa creciendo -lo que contrasta con Argentina y Brasil-, lo hace a una tasa sensiblemente menor. En el período 2015-2017, el crecimiento promedio anual fue del 1,6 %, acumulando un incremento del 5,3 % en el período. Por tanto, creció en tres años lo que antes aumentaba en promedio anual.

Como consecuencia de esta situación, las transferencias a la seguridad social y los intereses de deuda comenzaron a incrementar en forma significativa su participación en el gasto total, alcanzando en conjunto el 34 % en el año 2017. Estos gastos, junto con la asistencia financiera al Fonasa, absorben casi el 70 % del incremento del gasto público total del período, debido al ingreso del colectivo de jubilados de menores ingresos.

Esto representó una política totalmente consciente de esta fuerza de gobierno: aunque se resientan las cuentas públicas, para nosotros es muy importante la atención a la vejez más desprotegida.

El incremento de las transferencias a la seguridad social y los problemas con el tipo de cambio, implicó que en un contexto de menor ritmo de crecimiento económico, a pesar de mantener el compromiso con la sustentabilidad de las cuentas públicas, hubiera menos espacio para continuar aumentando la asignación de recursos con el fin de atender las áreas prioritarias para el Gobierno.

En este sentido, los gastos de la Administración central aumentaron un 3 % en términos reales en el período 2015-2017. Si bien el gasto de los organismos comprendidos en el artículo 220 se desacelera, continúa aumentando a una tasa significativamente mayor a la del Producto. Estas son políticas públicas de nuestro Gobierno que alcanzan un incremento del 10 % en términos reales en los últimos tres años. Los recursos fueron destinados a la ANEP, ASSE, el INAU y la Udelar.

Por lo tanto, si se analizan los incrementos del gasto en el período 2005-2017, se destaca que el gasto destinado a los organismos comprendidos en el artículo 220 creció un 155 % en términos reales, absorbiendo un 35 % del total

del aumento del gasto. Por su incidencia, se destaca lo destinado a la ANEP, seguido por lo de ASSE, el INAU y la Udelar.

Si bien el gasto de la Administración central creció fuertemente, incrementándose un 76 % en términos reales en el período 2005-2017, lo hizo a una tasa que es la mitad de la de los organismos comprendidos en el artículo 220. Su incremento representó un 18 % del total del aumento del gasto, y estuvo destinado, sobre todo, a los ministerios del Interior, de Desarrollo Social, de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, y de Transporte y Obras Públicas. Estos Incisos también conforman lo que nosotros llamamos el gasto público social.

En lo que respecta a la composición del gasto presupuestal, el aumento en la Administración central y en los organismos comprendidos en el artículo 220 se destinó en su mayoría a prestaciones de servicios intensivos en la utilización de recursos humanos como la educación, la seguridad y la salud. Como consecuencia, aumentó el peso de las remuneraciones en el total del gasto, pasando del 57 % en 2004 al 64 % en 2017.

Volviendo al análisis del proyecto de Rendición de Cuentas 2017, debemos decir que el Poder Ejecutivo trajo una propuesta para asignar un incremento total de $ 4.420.000.000 para el año 2019. De ese monto, más del 50% se destina a la ANEP y a la Udelar, y un 20 % para atender el acuerdo por el diferendo salarial con los funcionarios del Poder Judicial.

A continuación, vamos a dar el detalle por Inciso y por concepto.

La ANEP tiene $ 1.942.000.000 para incremento de la masa salarial, lo que representa un aumento del 3,5 %. Además, se asignan $ 105.000.000 para contratar auxiliares de servicio. A fin de contribuir a la financiación del organismo, se reasigna crédito de remuneraciones de Presidencia por $ 15.000.000 y del MEF por $ 10.000.000.

La Udelar recibe $ 430.000.000, lo que representa un aumento de la masa salarial del 3,5 %.

Al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se asignan $ 900.000.000 para el 2018 y $ 300.000.000 para el 2019, con el fin de dar respuesta al incremento procesado en el avance de las obras, fundamentalmente, en el régimen cooperativo, lo que también contribuirá a atender la creciente demanda y las diversas iniciativas planteadas en materia de vivienda.

Para atender el diferendo salarial con el Poder Judicial, se destinan $ 831.000.000 para el 2018 y $ 870.000.000 para el 2019.

Para el Ministerio del Interior, se asigna una partida incremental de $ 198.000.000 que, junto con reasignaciones dentro del propio Inciso, permite destinar $ 220.000.000 al pago de nocturnidad, $ 35.000.000 a aumentar en trescientos la cantidad de efectivos en el régimen de PADO y $ 45.000.000 para ampliar la cantidad de becarios. Cabe aclarar que este monto, dedicado a la contratación de becarios, constituye una de las partidas destinadas a la implementación de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Estos becarios serán asentados, en su mayoría, en el interior del país para atender denuncias sobre violencia de género y asesorar a las víctimas.

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados tendrá un incremento de $ 170.000.000.

Al Ministerio de Defensa Nacional se destinan $ 230.000.000 para un aumento salarial del personal subalterno, los que se cubren con reasignaciones del propio Inciso, por lo que no tendría costo neto.

Al INAU se le asignan $ 121.000.000, lo que representa un 3 % de la masa salarial, destinados a reestructura, adecuaciones salariales y creación de cargos.

Para ASSE se propone un incremento de $ 70.000.000, destinándose $ 50.000.000 a la contratación de recursos humanos para el nuevo Hospital de Colonia y para la ampliación del Hospital Pasteur, y $ 20.000.000 para continuar con el proceso de presupuestación de las contrataciones por Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata.

Se destinan $ 65.000.000 a la Fiscalía General de la Nación, principalmente, para contratar recursos humanos con el cometido de implementar el nuevo Código del Proceso Penal. Además, el organismo propone modificaciones en su operativa con el objetivo de avanzar en la aplicación de la ley de violencia basada en género.

A la UTEC se le asignan $ 50.000.000, a los que se agregan otros $ 30.000.000 financiados con reasignaciones desde otros organismos, destinándose ambas partidas a la contratación de docentes y personal de apoyo con el objetivo de culminar las carreras iniciadas.

Al Inisa se destinan $ 44.000.000, lo que equivale al 3 % de la masa salarial para reestructura, adecuaciones salariales y creación de cargos.

En el marco de la ley de violencia contra las mujeres basada en género, se asignan $ 80.000.000. De ese total, $ 30.000.000 se destinan al Mides, para el fortalecimiento de la atención de las víctimas de violencia basada en género en el interior del país; $ 20.000.000 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para el programa de alquileres; $ 25.000.000 al Ministerio del Interior para dispositivos electrónicos; y $ 5.000.000 a Presidencia para campañas de bien público sobre el tema. Si sumamos los recursos destinados al Ministerio del Interior a fin de contratar becarios que -como ya dijimos- también se destinarán a tareas relacionadas con la implementación de la Ley N° 18.580, se totaliza $ 125.000.000.

A los proyectos de Participación Público-Privada se asignan $ 1.140.000.000 destinados a pagos por disponibilidad de estos proyectos. Por normativa constitucional esta partida debe ser asignada para el año 2019, a efectos de que se replique en el 2020. De todas formas, en función del grado de avance de los proyectos, se prevé que la partida se ejecute en el 2020.

Sumado a los incrementos ya mencionados en el proyecto del Poder Ejecutivo, la bancada del Frente Amplio, en coordinación con el Poder Ejecutivo, ha podido adicionar algunas partidas incrementales, apoyando áreas y proyectos juzgados como prioritarios.

Como resultado del trabajo de la bancada del partido de gobierno y del Poder Ejecutivo, esta Rendición de Cuentas se incrementa en $ 350.000.000,

siendo el 80,5 % destinado a la ANEP. Detallando este incremento, podemos señalar que $ 282.000.000 están destinados a la ANEP para contratar personal que trabajará en la nueva infraestructura edilicia. Esto implica un 15 % del aumento sobre la partida de la propuesta del Poder Ejecutivo y lleva a que la ANEP reciba el 38 % del total del incremento que se aprobará en esta ley.

Hay $ 50.000.000 para comenzar a implementar la Ley de Salud Mental aprobada en 2017; $ 14.000.000 para la Fiscalía, a fin de asegurar un avance significativo en la administración de la Justicia, que es una de las variables básicas para mejorar la seguridad pública. Esto implica un incremento adicional del 22 % a lo ya asignado. Por último, se destinan $ 4.000.000 al Inciso 21 "Subsidios y subvenciones" con destino al Centro de Rehabilitación Física de Maldonado (Cerema), a efectos de seguir cumpliendo con su objetivo social.

La UTEC recibe $ 50.000.000 más para gastos de funcionamiento, con el objetivo de continuar su desarrollo curricular en el interior del país. Este incremento parte de la misma institución a la que se habilita a trasponer recursos propios desde gastos de Inversiones hacia gastos de Rubro 0.

A lo largo de esta presentación hemos ido dejando claro el enorme esfuerzo fiscal que se ha realizado durante los tres gobiernos del Frente Amplio con el fin de incrementar el gasto público social, porque asegurar los derechos básicos a toda la población es la base para construir una sociedad con desarrollo y justicia social.

Desde 2005 se han abatido en forma progresiva los índices de pobreza e indigencia; sabemos que ambos índices se miden por ingreso. En forma complementaria a esta mejora, medida por ingreso, tenemos que considerar el avance en la prestación de los servicios públicos, porque son parte fundamental del bienestar e integración de la sociedad. Cada aumento o mejora de la calidad de los bienes públicos que el Estado pone a disposición de los ciudadanos, supone una mejora en la calidad de vida de todos, sin importar su condición social.

Si quisiéramos definir qué políticas públicas aportan más a la integración y a la cohesión social, sin duda, nos decantaríamos por las educativas, las de salud, las de vivienda universal y de mayor calidad posible. Es por eso que desde 2005 en adelante estos gobiernos vienen volcando cada vez más recursos a las áreas antes citadas y el esfuerzo es múltiple, porque se aumenta el gasto para ampliar la cobertura pero, al ampliar la cobertura, surgen las múltiples dimensiones que es necesario atender para que el ingreso a los servicios, que en realidad son derechos educativos de la población más vulnerada, sea real y no solo nominal. Permítaseme ejemplificar lo que acabo de decir.

Cuando se abren plazas para niños de nivel tres años en un centro educativo de un barrio cuya población vive por debajo de la línea de pobreza, se está creando oferta pública para que estos niños accedan a educación temprana, lo que seguramente redundará a futuro en una mayor probabilidad de éxito en las siguientes etapas educativas. Por otro lado, el ingreso de estos niños implica nuevos desafíos para el sistema educativo, que por sí mismo y en coordinación con otros servicios del Estado, deberá dar respuesta a todas las variables relacionadas con la no satisfacción de las necesidades básicas que ellos traen

consigo. Entonces, cuando hablamos de ampliación de cobertura, el incremento del gasto no es necesariamente lineal a la población alcanzada, porque es inevitable desplegar respuestas adaptadas a las nuevas problemáticas que debemos atender.

Está de más decir que la situación ideal para el desarrollo de toda política pública es encontrar a todo el sistema político cohesionado tras un programa común en las grandes líneas estratégicas de acción. No es la situación en la que nos encontramos hoy. Cada dificultad de abordaje que implica la ampliación de la cobertura de servicios es expuesta como una dificultad imprevista o, lisa y llanamente, como una ineficiencia de la gestión.

Vamos a finalizar nuestra intervención dando algunos datos del avance en este período de Gobierno de las políticas de educación pública, porque sirven para ejemplificar lo que acabamos de decir.

Como ya hemos señalado, un objetivo de este Gobierno ha sido extender la cobertura escolar en primera infancia. Se comenzó ampliando a nivel de cuatro años y, luego, se profundizó llegando al nivel tres años.

Las metas de cobertura establecidas por la ANEP para este período de gobierno han sido constantemente superadas. Solo midiendo en términos cuantitativos, encontramos un desafío mayor al esperado. A pesar de que en 2004 ya había una cobertura del 69 % por parte del sistema público para este rango de edad, las metas de cobertura fueron superadas en 22 %, 20 % y casi 7 %, entre los años 2016 y 2018. Esto demuestra la pertinencia de la implementación de esta política, no solo porque se ha encontrado una demanda superior a la que se preveía en las metas del Gobierno, sino porque la apertura de la nueva oferta genera más demanda. Por supuesto, esto incrementa los costos fiscales y, al mismo tiempo, es una muy buena noticia.

Otro de los desafíos que también enfrenta el sistema público de enseñanza es lograr que la transición entre primaria y ciclo básico de enseñanza secundaria capte el cien por ciento de los niños que egresan. Tomando 2014 como año base, se verificó que 4 % de los alumnos que finalizaban primaria no empezaban secundaria al año siguiente. Esto se traduce en mil cuatrocientos muchachos que no continúan estudiando. Ha habido un esfuerzo sistemático, en especial, focalizado en mejorar las cifras de continuidad en el sistema educativo. Para los años 2016 y 2017, el porcentaje de alumnos que no realizó la transición entre ciclos educativos había disminuido a 1,6 % y 1,2 %, respectivamente. ¡Vaya si son logros! Esto implicó un trabajo planificado y muy minucioso. Creemos que ejemplifica muy bien la diferencia entre una mejora cuantitativa o de simple ampliación de cobertura versus un salto cualitativo en el seguimiento de los alumnos.

Por último, quiero comentar algunas cifras que dan cuenta de la complejización de las políticas públicas en educación media y cómo pueden ser parte de las políticas de integración social.

Una variable relevante explicativa del éxito educativo de nuestros jóvenes es la variable socioeconómica. Los porcentajes de asistencia al sistema educativo crecen con relación al quintil de ingreso. Lograr que los jóvenes asistan al sistema educativo en igual proporción, sin importar a qué quintil de ingreso pertenezcan, sería un logro de las políticas de integración y cohesión

social. Definiendo como indicador de la brecha socioeconómica la diferencia entre los porcentajes de asistencia al sistema educativo del quintil 1 y el quintil 5, advertimos que cuanto menor sea este indicador, más avanzaremos en el sentido de incrementar la integración social.

La buena noticia es que este indicador viene mejorando en los últimos años para los jóvenes entre quince y diecisiete años. La brecha socioeconómica disminuyó de 13,2 % a 10,6 % para los jóvenes de quince años, de 24,8 % a 18,3 % para los jóvenes de dieciséis años y de 33,4 % a 21,5 % para los de diecisiete años. Siempre será posible encontrar mejores indicadores de todo lo que falta por hacer. Eso lo tenemos claro y sabemos que falta mucho todavía. Pero, ¡vaya si es un gran logro! Lo que no se puede negar es el enorme esfuerzo fiscal para universalizar el acceso a bienes públicos de calidad. Esto es el Programa del Frente Amplio.

Creo que traer algunos ejemplos de los resultados acumulados en los énfasis sostenidos en cada presupuesto y rendición de cuentas desde 2005 es una buena forma de argumentar nuestro apoyo al proyecto de ley de rendición de cuentas para seguir profundizando cambios estructurales en función de las mayorías de este país y cumpliendo con el compromiso de la fuerza política a la que pertenezco.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor diputado Omar Lafluf Hebeich.

SEÑOR LALUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: antes que nada, quiero agradecer a los funcionarios que trabajaron con nosotros en la Comisión y al Partido Nacional por haberme dado la oportunidad de ser miembro informante. Además, quiero destacar la actitud de responsabilidad del Partido Nacional ante el tratamiento de esta Rendición de Cuentas, que aunque no comparte lo que decía la bancada del partido de gobierno en cuanto a que no había de dónde sacar más dinero, igualmente acompaña lo que según esta es posible.

Al examinar la Rendición de Cuentas 2017, no se puede hacer simplemente una foto de la realidad del año de que se rinde cuentas, sino de todos los antecedentes que llevan a concluir en la presentación hecha por el Poder Ejecutivo.

Para analizar la situación del país y sus perspectivas en las instancias presupuestales, es indispensable tener sobre la mesa la Constitución de la República, el Presupuesto Nacional, la Rendición de Cuentas y el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado.

Las rendiciones de cuentas siguen el modelo de presupuesto por programa que la CIDE incluyó en la reforma constitucional de 1966. La razón de estos presupuestos era, y debería seguir siendo, medir programas contra resultados, que es la única forma de gestionar bien el uso de los recursos para no caer en el error en que ha caído este Gobierno de que mayores recursos equivalen a mejores resultados. Para muestra, basta solamente nombrar la educación y la seguridad.

Dicho esto, llegamos a esta Rendición de Cuentas 2017, enmarcada en el Presupuesto quinquenal 2015-2019, que, como todos sabemos, se elaboró con

un horizonte de planeamiento bianual, hasta 2017, con la mira del equipo económico puesta en que la situación del país mejoraría y se podría cumplir con algunos de los postulados electorales del Frente Amplio, por ejemplo, el 6 % para la educación, entre tantos otros.

Aquí no hay que hablar en difícil: la administración de un país se basa en gestionar y administrar lo que ingresa y lo que egresa, como sucede en cualquier empresa o familia, con la importante salvedad de que el país no es una empresa y, como tal, debe dar a sus ciudadanos la mejor calidad de vida posible, sin hipotecar su futuro.

El país supo crecer a tasas nunca vistas de 6 %, 7 % y 8 % del PBI, y se prometía cerrar el 2014 con un déficit de 0,7 %, pero arrancamos mal, porque cerramos con un déficit de 3,5 %. Quiere decir que gastó todo lo que ingresó y el gasto lo superó. Muchos pensábamos que era año electoral y que se arreglaba en 2015. A escasos tres meses del nuevo gobierno del doctor Vázquez y en medio de comentarios -por lo bajo- de que la situación del país era heredada del presidente Mujica y del vicepresidente Danilo Astori, actual ministro de Economía y Finanzas, la realidad era mucho peor de lo que se había dicho.

En esta circunstancia, debieron echar mano a un ajuste fiscal, que se sumaba al del 2007. A este respecto es importante tener claros algunos datos que sobrepasaron mucho lo que se pensaba recaudar. Por concepto de IRPF, categoría I y categoría II, y de IASS, se recaudó US$ 1.662.000.000 en 2015, US$ 1.735.000.000 en 2016 y $ 2.040.000.000 en 2017.

A este respecto surgió la nueva discusión, es decir, si la promesa electoral era que no habría nuevos impuestos o si era que nos aumentarían los que ya estaban. Todos entendimos lo lógico: no tendríamos que sacar más plata del bolsillo para pagar impuestos, sean estos nuevos o ya existentes.

Esta tremenda recaudación más el crecimiento del país, más transferencias, más el endeudamiento externo que aumentaba, no alcanzó para controlar el déficit, porque el país siguió gastando mal, sin cuidar la calidad de la inversión y sin controlar sus resultados. Era común escuchar a las autoridades del nuevo Gobierno -que, en definitiva, eran casi todos los mismos- decir que el país se había desordenado. Del otro lado, el presidente Mujica afirmaba que todos sabían cómo estaba el país. Esto sucedía a pesar de que desde el año 2012 el Gobierno había definido los compromisos de gestión, que, aparentemente, nadie controló, o si lo hicieron, lo hicieron muy mal.

Hay que recordar que en la Rendición de Cuentas de 2015 se abatieron gastos por $ 2.588.000.000, básicamente, en el área social, monto que en esta Rendición de Cuentas se vuelve a postergar para 2019.

Al entrar a considerar esta Rendición de Cuentas, es necesario dejar claro que, viendo los guarismos actuales, la única salida que tiene el país es gastar mejor y crecer. Se necesita la inversión nacional y la extranjera; no se puede seguir desvistiendo a un santo para vestir a otro en cada rendición de cuentas. En este aspecto, es muy triste ver cómo el Gobierno no presenta un proyecto de país productivo, que nos haga pensar que hay un futuro. No encontramos una frase tendiente al crecimiento de la producción, a crear empleo, a generar riqueza. La premisa es asignar más recursos, o sea, gastar y gastar, aun

sabiendo que su generación no es segura y está sustentada en supuestos. Tampoco se muestran indicios de que preocupe mucho la calidad del gasto y se sigue con una política de gasto ineficaz, como si la plata cayera del cielo.

Queremos que quede claro que cuando hablamos de la calidad del gasto no hablamos del gasto público social: en educación, en salud, en los niños, en abatir la pobreza. No; hablamos -y sabemos que al Gobierno no le gusta que lo recordemos- de la calidad y del cuidado del gasto, y siempre decimos que son consecuencia de algunos errores u horrores. Tenemos que hablar de los US$ 622.000.000 de Ancap, más un crédito de US$ 250.000.000 del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina; de los US$ 300.000.000 de Pluna; de los US$ 80.000.000 del Fondes; de los US$ 90.000.000 que se debió pagar a los funcionarios judiciales por una pésima decisión del Gobierno; de los millones que se llevaron algunos por vender servicios en ASSE; de la estafa millonaria del Fonasa -que no se puede terminar de investigar porque finalizó el plazo de la Comisión Investigadora-; de que OSE pierde el 50 % del agua que potabiliza; de los US$ 177.000.000 que perdimos en la regasificadora; del estudio del puerto de aguas profundas; del gasto del Antel Arena -que eran cuarenta, pero hace unos meses iban ochenta-, y ahora, de la sorpresa con respecto a Aratirí.

Analicemos algunos puntos, como el PBI. A partir del año 2003, el país creció a un ritmo nunca visto. En 2010, creció casi un 8 %; en 2017, un 2,7 %. Sin duda, estos fueron años de tremenda bonanza, y el Gobierno decía que no era solamente por la coyuntura internacional ni por el tremendo aumento de nuestros productos de exportación, en especial, la soja.

El Poder Ejecutivo prevé para el año 2018 un 2,5 % de crecimiento, 3,3 % para 2019 y 3 % para 2020. Quiera Dios que sea así o que sea más. El crecimiento de 2017 se da, principalmente, en comercios, servicios, transporte y comunicaciones. El comercio creció 7,5 % de la mano del consumo privado, que aumentó un 4,4 %, y transporte y comunicaciones, un 8,5 %. Estos incrementos compensaron en parte el descenso de otros sectores: la construcción cayó 6 %; la industria manufacturera, 3,5 %, y actividades primarias, 1,5 %. Hay que considerar lo que influyó el período de mantenimiento de la refinería de Ancap, que demoró más del doble de lo que estaba previsto por conflictos gremiales, y termina impactando entre el 0,5 % y 1 % del PBI.

Las exportaciones crecieron por una excelente temporada turística; la inmensa mayoría de los turistas proviene de la Argentina, pero dada la situación actual en ese país, difícilmente se pueda repetir en 2018, máxime, considerando las restricciones y el control de divisas que le fueron impuestos por el Fondo Monetario Internacional. También crecieron por una cosecha récord de soja, que no se dará en 2018, porque ya se perdió el 56 %, una pérdida cuantificada en mil millones de dólares, y por las exportaciones de carne y de las casi trescientas treinta mil cabezas de ganado en pie.

En cuanto a la política fiscal, en el Presupuesto 2015 el Poder Ejecutivo definía la responsabilidad fiscal como la base de sustento de la estrategia presupuestal y luego agregaba que la sociedad uruguaya ha vivido y sufrido en el pasado los procesos de fragilidad y crisis fiscal que se traducen en menos gasto social y aumento de la carga tributaria.

Ahora, en el informe se expresa: "Así, en la presente Rendición de Cuentas se busca balancear, por un lado, la necesidad de seguir invirtiendo recursos en áreas fundamentales para el desarrollo y, por otro, la prioridad de seguir reduciendo el déficit fiscal".

No se puede decir que la política fiscal se ha basado en la sostenibilidad fiscal, como ha afirmado el ministro Astori porque, sistemáticamente, se ha incumplido con las metas fiscales.

Esta situación se repite en los últimos años: en 2015, el presupuesto preveía un déficit de 3,1 %, que en la Rendición de Cuentas 2015, seis meses después, se llevó a 4,3 %. Finalmente, el déficit real fue de 3,9 %. En 2017, en el presupuesto, fue estimado en 2,9 %; en la Rendición de Cuentas de 2016, se llevó a 3,3 % y terminó siendo 3,5 %, y en mayo de este año, llegó a 4 %. Esto demuestra la poca certeza que hay en las proyecciones y el mensaje que no es creíble. En tanto, para 2018, se preveía un 2,7 % y ahora, 3,3 %. En 2019, se preveía un 2,5 %; ahora, 2,8 %, y se traslada para 2020 la promesa del 2,5 %. Por lo tanto, se puede concluir que lo pronosticado por el Gobierno no se cumplió y que el déficit no se puede controlar a pesar de los ajustes fiscales.

Por otra parte, habiendo pasado en estos años de gobiernos frenteamplistas por períodos de un auge económico formidable, se ha recurrido sistemáticamente al aumento del endeudamiento del país. Al finalizar 2017, la deuda bruta se ubica en el 65,4 % del PBI y la neta, excluyendo encajes, en el 41 %. Esto significa que en dos años se pasó de 59 % a 65,4 %, y la neta de 35,8 % a 41 %. La estimación de estos guarismos era de 61,4 % y 40,7 %. También debemos recordar que el equipo económico pretendía no pasar del 33 % de la deuda neta.

Para 2020, la previsión del Gobierno es una deuda bruta de 65,9 % y neta de 41,6 %. El Gobierno pide en esta Rendición de Cuentas un aumento del tope de endeudamiento para 2018 de US$ 198.400.000 y para 2019 de US$ 66.100.000. El Gobierno sistemáticamente está pagando déficit con mayor endeudamiento y eso lleva a que este año haya que pagar aproximadamente US$ 3.487.000.000 de deuda en intereses y capital.

En cuanto a la inversión, dijo el ministro Astori que el único medio válido para lograr un crecimiento sustentable a largo plazo de la economía y el empleo era la inversión. A mucha gente del Gobierno le cuesta aceptar que el inversor venga a invertir y haga su negocio, no viene a solucionarnos el problema del desempleo. Este será consecuencia de la inversión, y lo que esa inversión le reporte al Estado será responsabilidad del Gobierno distribuirla para el bienestar de su gente; así de simple.

Hay que tener presente que el país ya no representa un atractivo para la inversión extranjera directa, que pasó de 4 % o 5 % del PBI en 2014 a prácticamente 0 % en 2017. Esto es preocupante, porque quiere decir que ya no alcanza con las importantes exoneraciones fiscales, quizás, porque somos un país de poca o nula competitividad en algunos rubros.

Hoy por hoy, lo único que ofrecemos es la exoneración fiscal, y aun así, no atraemos inversión, quizás por algo que el Gobierno no quiere ver: nos hemos transformado en un país caro para producir. Que quede claro que no hablamos solamente de la carga impositiva; hablamos de todo lo que cualquier

emprendimiento necesita para trabajar, producir y crecer: tarifas públicas, costos laborales, costos de servicio, infraestructura y mercados.

El país tiene varias leyes que promueven la inversión, pero todas apuntan a la renuncia fiscal: la de promoción de inversiones, la de participación público-privada, la de viviendas de interés social, la de zonas francas económicas especiales, ex zonas francas. Por supuesto, son importantes, pero no alcanzan. No es menos importante el clima y la actitud del Gobierno en el relacionamiento entre el trabajo y el capital a la interna del país. ¿Por qué digo esto? Porque no es bueno que frente a un planteo respetuoso y en orden, como el del agro, la primera reacción del Gobierno, antes de conocer la proclama, sea tratarlos de reaccionarios, oligarcas y terratenientes; que ante el planteo de un colono al presidente de la República -es opinable, si estuvo bien hecho- se publique que es moroso de los créditos de emergencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tampoco es bueno que, frente al caos de la seguridad pública, la Justicia, la Fiscalía y el ministro se contesten por los medios de prensa, echándose las culpas unos a otros; no está bien. Y no ayuda nada que, frente a la gente en situación de calle, el señor Intendente de Montevideo envíe una carta al señor presidente de la República en vez de hablar con la señora ministra de Desarrollo Social; que retiren de un brazo a la señora presidenta del INAU frente a las cámaras de televisión para que no dé el dato de la gente en situación de calle, o que a la crítica del senador Mujica debido al fracaso de las políticas sociales, conteste el Partido Comunista y no la señora ministra de Desarrollo Social. No es bueno que haya una comunidad enfrentada. Digo esto porque contribuye, también, a crear un ambiente de desarrollo del país.

La inversión a 2017 bajó el 13,8 % respecto del año anterior; la inversión en capital fijo, tanto pública como privada, bajó un 15,5 %; 2017 fue uno de los años de menos inversión en todo el período de gobierno frentista: 6 % del PBI.

Se creó por ley la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad con una cantidad de instituciones y un gabinete de nueve ministerios, dejando afuera al Ministerio de Transporte y Obras Públicas -que, a través de la logística del transporte, puede mejorar la competitividad del sector productivo- y a las cámaras empresariales, que son las que pueden decir, con autoridad, qué necesitan para mejorar su competitividad.

Perdonen que digamos todo esto, pero no vemos una sola propuesta para desarrollar y hacer crecer el país. Lo único que hay son más exoneraciones fiscales, como sucedió hace poco, cuando aumentaron las del IRAE en la ley de inversiones -no decimos que esté mal-, o con la vivienda promovida -que en 2017 costó, con renuncia fiscal, cerca de US$ 190.000.000- cuando, en definitiva, no les llegó ni una vivienda a los que la necesitan y, en algunos casos, terminó siendo un negocio inmobiliario.

Siempre preguntamos dónde viven las quinientas mil personas que, según el PIT-CNT, ganan menos de $ 20.000. ¿Le parece que pueden acceder a una vivienda de US$ 100.000 con una cuota de $ 8.000 o $ 9.000? Termina sucediendo lo que dijo una señora al señor presidente de la República en Nuevo Berlín: "A veces, presidente, no sé si pagar la luz o comer".

Todos recordamos el famoso anuncio de las medidas a los productores rurales que terminaron siendo migajas, como la rebaja del 15 % de la tarifa energética para los lecheros por dos meses.

Es difícil que un país crezca y que sus ciudadanos puedan mantener una buena calidad de vida -en definitiva, es el objetivo- si el Gobierno no ve o no quiere ver, por un problema ideológico, que precisamos a todos -a los grandes, a los medianos y a los pequeños- para desarrollar el país. Para crecer es necesario aumentar la producción, aumentar la productividad o bajar el costo de lo que se produce; no hay magia.

¿Qué elementos tenemos para mejorar la competitividad? El costo del salario no se puede tocar; las tarifas públicas en lugar de bajar, suben, y cada vez más; el valor del dólar no se puede mover mucho, y hacer un TLC -o la modalidad que quieran- es muy difícil. En cuanto a la logística que podría manejarse como mejora de la competitividad, ya dijimos que no se integró el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad. ¿Por qué cree usted que UPM exige el ferrocarril y el puerto? Porque, además de todos los beneficios extraordinarios que se le ha dado, cierra una ecuación perfecta de ganancia con el ahorro en los costos de fletes a través de un transporte multimodal, que el Gobierno se niega a desarrollar, en serio y rápido, en los puertos de la hidrovía del río Uruguay.

Entre las cosas posibles para mejorar nuestro comercio exterior está la posibilidad de realizar acuerdos comerciales, algo que fue tremendamente difícil. En 2016, Uruguay pagó US$ 252.000.000 de aranceles. En varios de los mercados, el principal rubro de exportación es el sector agroindustrial, con un promedio de 7 % de arancel. Festejamos junto al gobierno cuando se abre un mercado -¡claro que sí!-, pero también estamos muy preocupados por bajar estos aranceles que, en definitiva, paga el productor del bien. Tenemos un competidor tremendo, Nueva Zelanda, que en estos momentos está negociando un tratado de libre comercio con China -principal mercado de Uruguay- y, por lo que dicen, podría pasar de venderle US$ 1.500.000.000 a US$ 11.000.000.000.

El gobierno apuesta a las PPP, y en esta Rendición de Cuentas se habló mucho de las obras PPP. Hoy, la única que está terminada totalmente es la cárcel -por US$ 100.000.000-, los corredores viales en ejecución -US$ 21.000.000 y US$ 24.000.000; el resto está en proceso de recepción de oferta o de cierre financiero-, la infraestructura educativa -en proceso de adjudicación- y el ferrocarril central, que está en análisis de ofertas por un total de US$ 870.000.000.

El mecanismo de las PPP genera menos impacto en el déficit fiscal, pero es más caro que otros mecanismos de financiamiento para la inversión. Uno de los temas al que mayor importancia asigna este Gobierno -ha sido reiterado- refiere a no perder el grado inversor. Si bien el financiamiento de las PPP no aparece en el endeudamiento, sí lo hace en el flujo de fondos del presupuesto; tiene el tope del 7 % del PBI de inversión y del 5 ‰ para el pago de amortizaciones anuales. Como la demora para adjudicar es de más de dos años y se comienzan a pagar luego de terminadas, el próximo gobierno corre el riesgo de quedar con poco margen para la convocatoria de obras nuevas en este sistema.

Necesariamente debemos hablar del artículo 310 del proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo, que plantea que los US$ 177.000.000 del Fondo de Estabilización Energética se destinen al financiamiento del ferrocarril central para UPM. Es realmente alarmante, y casi una cachetada a la población, que un fondo que se formó con el pago de una tarifa eléctrica más cara que hizo la población entera -que en vez de bajar, subió sistemáticamente- no se le devuelva a través de una rebaja de dicha tarifa. El total del incremento del gasto de esta Rendición de Cuentas es de US$ 145.000.000, y al ferrocarril central para UPM se destinan US$ 177.000.000. Pero lo peor es que se trata de plata de la población. Pero bueno, el Gobierno define sus prioridades cuando asigna los recursos.

El país está jugado a UPM II. Es alarmante escuchar al Gobierno hablar de su posible construcción, cuando estamos licitando y pagando las tierras para el ferrocarril central. El Gobierno sigue hablando de la posible inversión de UPM, que decidirá en 2020, exclusivamente la empresa. A esto hay que agregar que el señor diputado Iván Posada pidió en la comisión al señor ministro Astori que le hiciera llegar el estudio de esta inversión, pero hasta hoy no llegó.

Otro tema no menos importante es el alto endeudamiento bancario del sector agropecuario, que ronda los US$ 2.500.000.000, lo que tampoco hace prever mucha inversión en ese sector. La deuda del sector lechero está próxima a los US$ 500.000.000; permanentemente se están perdiendo cientos de tambos, pequeñas y medianas empresas lácteas diseminadas en el interior del país.

Con respecto al gasto público, el Gobierno ha decidido hace muchos años seguir aumentándolo y pagarlo con impuestos, endeudamiento y a través de las tarifas públicas. Podemos estar de acuerdo, o no -por supuesto que nosotros no lo estamos-, pero también aceptamos lo que se dijo en esta Cámara varias veces: "Hace trece años la mitad de la población nos dio el gobierno y, por lo tanto, el gobierno del Frente Amplio es el que tiene la responsabilidad de marcar el rumbo y el ritmo, y la población debe tener claro que cada uno cumple su función: oposición y gobierno". Debe quedar claro que no somos todos lo mismo y que las responsabilidades son distintas.

Con respecto a los impuestos, no es que el gobierno del Frente Amplio -aclaro que no hablo del señor ministro Astori, sino del gobierno del Frente Amplio porque, de lo contrario, sobre todo en año electoral, se carga el fardo al ministro de Economía y Finanzas- esté convencido de que no se pueden poner más impuestos; creo que no se anima. Hoy, toda la población sabe -a través de la información más que suficiente que hay, y porque está muy informada- lo que se ha hecho con los recursos públicos en todos estos años y los resultados obtenidos: se creó tremenda burocracia estatal, hubo una mala calidad del gasto e inversiones perdidas, y no supieron controlar los resultados obtenidos donde más se gastó.

Quiero referirme a las tarifas públicas, uno de los aspectos importantes para que crezca el sector productivo, en especial, el agroindustrial. Respecto de la tarifa eléctrica, el gobierno del Frente Amplio, a través del señor ministro Kreimerman, dijo que el día que tuviéramos las energías alternativas, en especial los parques eólicos, los costos bajarían en torno al 30 %.

Pues bien: ha sido exitosa esta política, y hoy el 45 % de la energía que produce el país proviene de energías renovables, pero la tarifa subió, en 2017, el 7,5 %, y en 2018, el 3,2 %. Recordemos que en 2018 la ministra Cosse y las autoridades de la UTE decían que había que bajar la tarifa un 5 %, pero el ministro Astori decía que se debía subir un 7 %; era lógico que quedara en el medio: quedó en el 3 % o 4 %.

En el caso de otras tarifas públicas, en 2017 Ancap y Antel aumentaron el 8 %, y OSE, el 8,2 %, más un incremento del cargo fijo del 7,3 %. En 2018, Antel y OSE subieron el 6,5 %, y Ancap aumentó las naftas un 9,8 % y el gasoil, un 4,8 %.

El caso de OSE es alarmante porque pierde el 50 % del agua potabilizada. No se trata solo de la pérdida del costo de potabilizar el agua y no cobrarla, sino que buena parte de este 50 % se pierde por roturas en la línea de distribución de un recurso que es vital para la humanidad.

En el caso de UTE, es importante decir que, aparte del Fondo de Estabilización Energética -que se transfiere a Rentas Generales para el ferrocarril de UPM-, obtuvo ganancias en estos últimos cinco años por US$ 1.919.000.000. En 2016, la ganancia fue de US$ 410.000.000 y, en 2017, de US$ 492.000.000. De estas ganancias se transfirieron a Rentas Generales US$ 217.000.000 en 2016 y US$ 220.000.000 en 2017.

Es por esto que decimos que el Gobierno utiliza las tarifas públicas que paga la población para sostener el déficit fiscal que, ni aun así, se sostiene.

A pesar de que el producto bruto interno ha aumentado - el porcentaje es bajo-, disminuyó la pobreza y hubo más inversión en educación y seguridad, la población está cada día más desconforme. Esto lo demuestra el índice de confianza del consumidor, que en junio de 2018 lo encuadra en la última franja, de atendible pesimismo, y es el más bajo desde 2007. A pesar de que no sería necesario, vamos a señalar algunos datos para que vuelva a demostrarse que más dinero no significa mejores resultados.

En educación, los resultados son más que elocuentes: no son los esperados. En 2005, el gasto en educación era de 3,2 % del PBI -por supuesto que con un PBI significativamente menor al de 2007, que era del 5,1 %-, lo que implica un crédito de $ 80.500.000.000. Según el informe del Ineed -que figura en el informe económico del Gobierno-, no existen avances significativos en los aprendizajes de los alumnos y preocupan las inequidades en los logros que se dan entre estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. Asimismo, persisten dificultades para que los estudiantes terminen los ciclos educativos y que lo hagan en el tiempo estipulado. Agrega que solo el 74 % de los jóvenes de entre dieciocho y veintiún años termina la educación media básica y que solo un 42 % de jóvenes entre veintiún y veintitrés años termina la educación media superior. Asimismo, el informe dice que el 71 % de los jóvenes del quintil más alto de ingresos culmina la educación media básica, y ese guarismo es del 15 % entre los del quintil más bajo.

Hace poco tiempo, se presentó el proyecto Eduy21 en el que, entre otros, participaron los profesores Mier y Filgueira, a quienes echaron del Gobierno por tener algunas ideas que discrepaban con lo que pensaban las autoridades y por cuestionar el cambio de ADN en la educación. Todos recordarán la respuesta

inmediata del Gobierno a la propuesta Eduy21, que decía: "Esto que presentaron ya se hace". Es difícil lograr algo cuando el Gobierno piensa que nadie en el país puede tener una idea mejor.

En seguridad hay menos resultados. También es grave porque este Parlamento -en especial la oposición- votó para el Ministerio del Interior todo lo que solicitó para su gestión, y no se obtuvieron los resultados esperados; los niveles de delito son los más grandes de la historia. Hoy, a nivel de país, hay una sensación de total indefensión y de que existe un enfrentamiento entre las autoridades que tienen a cargo la seguridad.

Los recursos para políticas sociales -o gasto público social- han aumentado un 137 % desde el año 2005; en este aspecto, los resultados tampoco son los que se esperaban. No lo decimos nosotros; lo dijo, en su momento, el inspector Layera. Y más claramente lo expresó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, al afirmar que le dolía reconocerlo, pero que hacía responsable al Frente Amplio -a su partido- de este fracaso. Hace apenas unos días, el expresidente Mujica manifestó: "Las políticas sociales no han dado los resultados que esperábamos". ¡Luego de trece años! Después de habernos dicho un día sí y otro también: "¿Ustedes quieren bajar el gasto público social? ¡Nosotros no!". Pero los resultados no son los esperados.

Se redujo la pobreza, sacando de la línea de pobreza a los núcleos familiares con dos hijos, que ganan alrededor de $ 29.000. ¡Se evalúa la pobreza solo desde el punto de vista monetario! Si bien debe haber argumentos, ¿se puede medir la pobreza sin considerar la vivienda? ¿Se puede medir la pobreza sin considerar el acceso a los servicios básicos? Creemos que no, y más aún cuando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente manifestó cuando vino a la Comisión que hay 586 asentamientos en el país, de los que en el período 2015-2017 se han regularizado tres, y dos se encuentran en ejecución.

Lo más grave es que, así como se bajó la pobreza monetaria, esta se concentró en los niños. Y para tristeza de todos los uruguayos, la pobreza en niños en menores de seis años es del 17,4 %. Este porcentaje representa 160.000 niños. También debemos decir que, desde el año 2014, la pobreza infantil no se ha movido y se sigue manteniendo en el entorno del 18 %. Y el otro dato no menor es que la inversión más baja del Estado es en los niños más pequeños.

Para agregar otra perla al collar, debemos mencionar a la gente en situación de calle, situación por todos conocida. Según el dato de 2016, desde 2011 había aumentado un 52,6 %.

Esto es grave y corrobora que el Estado gasta muy mal. Todos recordamos que cuando el Frente Amplio asumió el Gobierno decía que todos los problemas de la población tenían que ver con los niños que habían nacido en gobiernos anteriores.

Con respecto al empleo, como dijimos antes, el crecimiento se produjo en aquellos rubros con poca demanda de mano de obra, es decir que nuestro país crece sin que se incremente el empleo, como demuestran las estadísticas. Todas las tasas muestran un deterioro. El peor guarismo es de febrero de 2018, que llegó al 9,3 %. Desde 2014 se han perdido 46.800 puestos de trabajo. De

acuerdo con la Consultora Tea, la tendencia del desempleo pasó de un 6,5 % a un 8,5 %. El mismo informe demuestra que las personas desocupadas son alrededor de 150.000, pero si a esta cifra se suman los desempleados y los que dejaron de buscar trabajo porque no consiguieron, se llega a 300.000. En 2017, el país tuvo un promedio de 40.000 trabajadores por mes en el seguro de desempleo, lo que costó al país más de US$ 200.000.000.

En tres años -según un informe que obra en nuestro poder- cerraron ochenta y ocho empresas. ¿No será momento, como hemos expresado en esta Cámara más de una vez, que en vez de votar los seguros de desempleo, discutamos por qué cierran las empresas? Hace poco, el Gobierno lanzó el programa Empleo Juvenil, para cinco mil jóvenes. Hace más de un año estamos pidiendo ayuda para abordar la situación de varias empresas lácteas antes de que cerraran, por ejemplo, Pili, con la que ya llegamos tarde, a pesar de que en esta Cámara se planteó su problema varias veces, especialmente lo hizo el diputado Olivera.

A veces nos da la impresión de que al Gobierno no le interesa actuar antes. Me van a decir que no es cierto, que el Gobierno actúa. Pero nos queda esa duda. Cuando actúa, lo hace un poquito, como para quedar bien, como hizo con el agro: no arreglamos nada. En otros casos, si precisan diez, les dan uno. Nunca hay un proyecto en serio; parece que prefiere -perdón por lo que voy a decir- que la empresa cierre, que los trabajadores queden en la calle y que sea el Gobierno el que los salve.

Hemos pasado tres años en los que el esquema y el cronograma parecerían estar escritos. Paso uno: la empresa tiene problemas económicos; paso dos: entra en conflicto con los trabajadores; paso tres: juntos o separados vienen la empresa y los trabajadores al Parlamento y al Poder Ejecutivo y plantean el problema; paso cuatro: se le pide a la empresa un proyecto y un plan de pagos; paso cinco: la solución demora y la empresa cierra o entra en concordato; paso seis: aparece el Gobierno, ofrece el seguro de paro y la reconversión laboral; paso siete: la empresa sigue cerrada y los trabajadores sin trabajo, pero con algún curso de formación.

En 2017 se perdieron 4.585 puestos de trabajo, en especial en la industria y las actividades primarias.

Nos pasó inadvertido durante el mundial de fútbol que entre abril y junio se perdieron 9.700 puestos de trabajo netos con respecto a 2016. Solo por mencionar algunas: la empresa de automóviles Lifan, en San José; Orosur Mingin, en Minas de Corrales; Pili, en Paysandú; y la ex Metzen y Sena, cuyo costo más alto, de acuerdo con versiones de prensa, es el de la energía para prender el horno.

La historia se repite, porque en una recorrida de los ministros Murro y Cosse por Minas de Corrales prometieron extender el seguro de paro, instalar un aula y enseñar electricidad y neumática a través del Inefop.

El 29 de junio, cuando compareció el equipo económico a la Comisión, al ministro Astori se le preguntó por el empleo, quien dijo: "Compartimos la preocupación por el empleo. Lo analizamos permanentemente y hacemos capacitación con Inefop y el Programa 'Yo estudio y trabajo'". Quiero hacer una aclaración sobre estas expresiones. De acuerdo con esta Rendición de Cuentas,

el Ministerio de Economía y Finanzas adeuda al Inefop US$ 46.000.000, aproximadamente.

Con relación al empleo público los números son distintos. En números absolutos, los informes dicen que entre 2005 y 2009 ingresaron 23.232 funcionarios públicos; entre 2010 y 2014, 43.134, y entre 2015 y 2016, se fueron 1.822. En números absolutos, entre 2005 y 2017, ingresaron 64.544. El otro día leí un informe que decía que se producían aproximadamente 10.000 vacantes por año y que se habían llenado de alguna forma. Desde este año, la Oficina Nacional del Servicio Civil informa que en entidades con mayoría estatal hay 2.628 funcionarios, y en personas de derecho público no estatal, 6.725. Entre estas cifras no figuran las sociedades anónimas del Estado, las ONG ni las cooperativas monotributistas del Mides, que también venden servicios al Estado.

Cuando la Oficina Nacional del Servicio Civil concurrió a la Comisión dijo que nunca hubo una norma -figura en la versión taquigráfica- que asegurara el llenado de vacantes "tres por dos"; algunos cumplen y otros, no.

Lo mismo sucede con el cumplimiento del cupo de 4 % para personas discapacitadas. Es una vergüenza el casi nulo cumplimiento del Estado; hay honrosas excepciones. Frente a esto, pretendemos obligar al sector privado a que cumpla esta norma.

También es alarmante el panorama presentado en esta Rendición de Cuentas en la que abundan las reasignaciones de millones de pesos para compensar tareas de más responsabilidad, por estar a la orden, para cargos de confianza, para compensar grados. Solo en adscriptos -cargos creados en el Gobierno del Frente Amplio- se pagaron US$ 3.500.000, incluidos los aportes patronales, precisamente la misma cifra que se necesitaba para la UTEC con el fin de que pudiera terminar los dos últimos años de sus carreras.

Este Gobierno ha llevado adelante una concentración de poder muy grande desde la ley de descentralización, que terminó siendo de desconcentración, con mejoras para los municipios -hay que reconocerlo-, pero con muy poca descentralización de las facultades. El Gobierno sigue manteniendo el total control en todo el territorio nacional, a través de su presencia, en una estructura de reparticiones con miles de funcionarios y jerarquías de confianza, muchas veces con funciones superpuestas.

Llama la atención la alarmante concentración de poder en la Presidencia de la República, con 17 secretarías y 2.623 vínculos de funcionarios públicos; para comparar su dimensión, podemos decir que duplica a todo el Poder Legislativo. Muchas de esas secretarías están superpuestas, compitiendo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por otro lado -cosa no menor-, no tienen control parlamentario.

La política de los gobiernos del Frente Amplio ha sido la de no otorgar recursos a los organismos de control, por ejemplo, al Tribunal de Cuentas de la República. Vale la pena detenerse un momento en el informe del Tribunal de Cuentas, que establece que la Contaduría General de la Nación no da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 101 del Tocaf ni a la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas. Asimismo, establece que el Tribunal de Cuentas observó gastos de los diferentes Incisos, por no tener intervención

de dicho organismo -artículo 211 de la Constitución-, "por imputar gastos correspondientes a otros ejercicios (artículo 13 del Tocaf), por falta de disponibilidad presupuestal (artículo 15 del Tocaf), por apartarse de los procedimientos […] (artículo 33 del Tocaf) y por carecer de norma habilitante". Varios Incisos no remitieron información al Tribunal de Cuentas sobre esta rendición.

Por anticipos de tesorería el Tribunal de Cuentas dictó la siguiente resolución: "[…] el Ministerio de Economía y Finanzas otorgó anticipos de tesorería por" $ 12.271.000.000, de los cuales el Tribunal de Cuentas observó y el Ministerio reiteró el gasto por $ 8.442.000.000, por no haberse adjuntado la afectación del crédito o no presentarse las rendiciones de cuentas.

En su comparecencia en la Comisión el Tribunal de Cuentas dejó en claro las observaciones hechas por no cumplir con lo establecido en los artículos 48 y 76 del Tocaf, en especial en los artículos 17, 18, y 21 de esta Rendición de Cuentas.

En el dictamen se hace referencia también a las reiteradas observaciones realizadas a la Corporación Nacional para el Desarrollo por actuaciones fuera de su competencia, y ha observado varios convenios.

Por último en cuanto a este tema, el segundo punto del dictamen dice que la información presentada sobre estados de situación del tesoro, así como de fuentes y uso de fondos, no es suficiente para permitir expresar una opinión y, por lo tanto, se abstienen de darla.

Simplemente como datos ilustrativos para el manejo de esta Cámara, ponemos algunos ejemplos entre lo solicitado por algunos organismos y lo enviado por el Poder Ejecutivo. A la Udelar se le dio el 0,4 % de lo solicitado; a la ANEP, el 19 %; el Tribunal de Cuentas pidió $ 67.000.000 y no se le dio nada; el Poder Judicial solicitó $ 942.000.000 para aplicar la ley de género y se le dieron $ 5.500.000.

Para concluir, de acuerdo con lo manifestado en el presente informe así como en el informe técnico, consideramos que no es posible aprobar el proyecto de Rendición de Cuentas 2017, entre otros, por los siguientes motivos.

Las proyecciones realizadas por el equipo económico del Gobierno ponen otra vez en duda la sostenibilidad del programa fiscal para mantener el grado inversor.

Al igual que en rendiciones de cuentas anteriores, la de 2017 presenta un resultado deficitario del 3,5 % del PBI, que representa US$ 2.071.000.000. El déficit aumentará por dos causas: por el incremento de gastos financiados presupuestalmente por trasposiciones de créditos no ejecutados, pero que sí tienen costo de caja, y por el aumento del gasto endógeno, que no aparece como incremento en esta Rendición de Cuentas.

Se vulnera la regla fiscal de tope al endeudamiento por segunda vez en esta administración de gobierno, que fue fijada en la instancia presupuestal 2015-2019, y que es modificada por sexta vez en la administración del Frente Amplio, aumentando el endeudamiento público en US$ 198.400.000 en el año 2018 y en US$ 66.100.000 en el año 2019.

El Gobierno no tiene voluntad de racionalizar el gasto abatiendo el gasto corriente superfluo o no productivo. En el ejercicio 2017 se constatan gastos en el Grupo 1 "Bienes de Consumo" y en el Grupo 2 "Servicios no personales", incluso abatiendo gastos en suministros, como combustible, energía eléctrica, agua, teléfono, etcétera.

Se continúa aumentando el Rubro 0 -Retribuciones personales y Otros gastos de funcionamiento-, mediante el incremento de las estructuras con más funcionarios y los servicios respectivos, cargos de confianza, complementos por mayor tarea, alta dedicación, lo que terminará con aumento del déficit fiscal y del endeudamiento, sin producir un impacto sustancial en la mejora de los servicios prestados.

Continúan las modificaciones al Tocaf, que deberían contar con la opinión favorable, por lo menos, del Tribunal de Cuentas de la República, tal como establece el artículo 213 de la Constitución.

Se sigue dejando a los organismos de control sin los recursos mínimos, en especial al Tribunal de Cuentas, pero también a la Jutep y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Se llegó al extremo de que la bancada oficialista no votara en la Comisión, solamente el crédito para utilizar…

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar.

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Puede continuar el señor miembro informante en minoría, quien dispone de quince minutos adicionales.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Decía que se llegó al extremo de que la bancada oficialista no haya votado en Comisión el crédito que pedía el Tribunal de Cuentas para utilizar un recurso económico que ya tiene.

Se profundiza la actividad estatal, en el marco del derecho privado, sin estar sujeta a control.

En toda la Rendición de Cuentas se plantean modificaciones a la normativa en temas que no son materia presupuestal como, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial, el Código de Aguas, la Ley Orgánica Policial y la ley de medio ambiente, entre otras.

No se presenta ninguna iniciativa dirigida a la promoción del empleo y de la producción, aunque la falta de empleo es una de las principales preocupaciones de la población y se ha generado con un aparato productivo en marcha.

Llama poderosamente la atención, por ejemplo, que no se otorguen ni por asomo los recursos necesarios para instrumentar la puesta en marcha integral de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género.

No es un tema menor que, luego de presentada la Rendición de Cuentas y habiendo trabajado en ella durante treinta y ocho días, se hayan presentado 145 aditivos. Eso puede no llamar la atención, pero sí que de esos 145 artículos 99 hayan sido presentados por la bancada oficialista.

Como consecuencia de todo lo expuesto y de otras consideraciones que se realizarán en el plenario, se aconseja no aprobar este proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2017.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor diputado Conrado Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: antes que nada y como siempre, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a los secretarios y prosecretarios de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y a los funcionarios que allí trabajaron, que nos dieron una gran mano para realizar esta labor y llegar en tiempo y forma a la discusión de esta Rendición de Cuentas en el plenario de la Cámara.

También quiero agradecer a nuestro compañero de bancada, el diputado Germán Cardoso, con quien no solo trabajamos intensamente en la Comisión, sino en los últimos días en la elaboración del informe, a fin de entregarlo en condiciones para que los demás señores legisladores pudieran contar con él.

Asimismo, vaya el agradecimiento a los distintos miembros de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, quienes hicieron una gran labor durante este mes y medio de discusión. Más allá de los perfiles de cada uno o del que cada bancadas pueda mostrar, lo importante es que en el trabajo conjunto se terminó mejorando la redacción de muchos de los artículos que llegan al plenario de la Cámara.

Finalmente, queremos destacar de manera especial la tarea de la presidenta de la Comisión, señora diputada Lilián Galán: más allá de que tuvimos algunas diferencias en cuanto al régimen de trabajo que definieron las distintas bancadas parlamentarias, gracias a ella se pudo avanzar de buena forma. Por ello, corresponde el destacar y felicitar a la señora diputada Galán por haber ejercido una muy buena presidencia de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

Como aquí se ha dicho, esta es una nueva escena de una larga película, que ha tenido sus diferentes capítulos. Un primer capítulo fue la elaboración y la discusión de la ley de presupuesto nacional; después vinieron las otras etapas, las otras escenas de esta película, que fueron estas rendiciones de cuentas.

En la discusión del presupuesto nacional decíamos, en esta misma sala, que esa ley era de difícil realización. Lo señalábamos en el entendido de que las proyecciones que hacía el Gobierno no tenían asiento en la realidad. Decíamos que esas proyecciones eran totalmente incorrectas y hablábamos del déficit fiscal y, especialmente, del crecimiento de la economía y de las proyecciones que permitían al Gobierno especular con los ingresos fiscales.

En el presupuesto nacional, el Gobierno sostenía que el país iba a crecer a una tasa acumulativa del 14,6 %. En aquella circunstancia, afirmamos que esos supuestos eran totalmente optimistas y que sería muy difícil que el Uruguay pudiera crecer a esa tasa, habida cuenta de la situación del país y de las economías regionales y mundiales. Efectivamente, al año siguiente, en la presentación de la Rendición de Cuentas de 2016, ejercicio 2015, el Gobierno

tuvo que ajustar a la baja esas proyecciones de crecimiento. De aquel 14,6 % pasó a un 7,7 % de crecimiento acumulativo durante cinco años. Obviamente, los ingresos fiscales que proyectaba el Gobierno terminaron siendo muy inferiores a los que quería y deseaba. Esto produjo enormes problemas en lo que tiene que ver con los aumentos que se dieron: prueba de ello es que en la Rendición de Cuentas de 2016, ejercicio 2015, se tuvo que abatir partidas incrementales y luego diferirlas a los años siguientes, a fin de cumplir con esos aumentos que tan pomposamente el Gobierno y la bancada oficialista habían dicho que se iban a dar. Evidentemente, esto se produjo por una situación que nosotros advertimos y que el Ministerio de Economía y Finanzas, el equipo económico, no quiso escuchar.

Iguales predicciones hicimos con respecto al déficit fiscal. En la ley de presupuesto se decía que el Estado uruguayo llegaría a un déficit fiscal del 2,5 % del PBI al final del quinquenio. En la discusión del presupuesto nacional, dijimos claramente que no iba a ser así porque no había ninguna medida concreta que permitiera bajar el déficit fiscal a ese guarismo. De hecho, lo único que decía la exposición de motivos y el Informe Económico Financiero del Gobierno sobre la ley de presupuesto era que reduciría los gastos operativos de las empresas públicas y que esto representaría un ahorro del 0,2 % del PBI.

Por lo tanto, ya en el año 2015, en la primera escena de esa larga película con final anticipado, estábamos avizorando y advirtiéndole al Gobierno que esas proyecciones de crecimiento y de déficit fiscal no se iban a cumplir, no se iban a dar.

Así, cuando llegó la Rendición de Cuentas del año siguiente, lo que se hizo fue claramente un ajuste fiscal. El Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del ministro Astori, hablaron de "consolidación fiscal", apelando a un eufemismo para esconder lo verdadero. Pero se hizo un ajuste fiscal, porque se ajustó sobre los ingresos: sobre los ingresos de los trabajadores y sobre los ingresos de los jubilados. Fue así que se subieron las tasas del IRPF y, en una siguiente instancia se aumentó la tasa del IASS para los jubilados. De esa forma se procuró captar unos US$ 460.000.000, mediante lo que realmente fue un mazazo impositivo a aquellos que viven de su salario, a aquellos que viven de su jubilación.

Luego, en la Rendición de Cuentas 2017, ejercicio 2016, nuevamente, el Gobierno, como se quedó corto con el ajuste fiscal que tuvo que hacer, porque los gastos siguieron aumentando y no hubo forma de contención real, intentó imprimir velocidad, apretar el acelerador e ir hacia una mayor carga impositiva. Fue así que en la Rendición de Cuentas 2017, ejercicio 2016, de nuevo puso otros impuestos o subió los ya existentes. Se estableció un impuesto a los juegos de azar y se subió la tasa consultar sobre las importaciones que venían tanto del Mercosur como de fuera de él. De esa manera, recaudaron una cantidad importante de millones de dólares para financiar las partidas incrementales.

Como no se actuó sobre los egresos, no se bajó el gasto público, que siguió aumentando, mientras el crecimiento económico se fue enlenteciendo lo que, como era obvio, llevó a que Uruguay ingresara en una zona muy problemática. Así arribamos a esta Rendición de Cuentas en la cual, en lugar de dar un

mensaje de austeridad, de contención del gasto, una señal clara a la ciudadanía en cuanto a que la situación económica no estaba respondiendo y por eso no se podía aumentar el gasto, muy por el contrario, lo que se hace es aumentarlo. Se aumenta en US$ 153.000.000 para 2019 y en US$ 165.000.000 para 2020. Se hacen proyecciones de crecimiento y a partir de eso se sacan los ingresos fiscales suficientes para poder invertir y financiar parte de esos aumentos, como también de la rentabilidad del Banco de la República. Todos los economistas importantes del país, los analistas más encumbrados, han dicho que estas proyecciones de crecimiento no están atadas a la realidad; difícilmente se darán estas proyecciones de crecimiento. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Otra vez, Uruguay tendrá que endeudarse para financiar estos aumentos, estas partidas incrementales, sobrepujando el déficit fiscal, sobrepujando el endeudamiento del sector público que ya ha aumentado en los últimos años.

Sumado a ello, el ajuste que se ha dado sobre los ingresos ha tenido un impacto real en el consumo. Si bien se recaudó más por la suba del IASS y del IRPF, bajó el consumo, porque en los últimos ejercicios se retrajo la recaudación, por ejemplo, por concepto de IVA. Habíamos dicho que esto impactaría en el poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores y de los jubilados y, efectivamente, ocurrió.

Esta Rendición de Cuentas se da en un contexto de incertidumbre de la economía regional y mundial, tal como pintó el equipo económico en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Tanto Brasil como Argentina tienen un déficit fiscal abultado, un crecimiento económico totalmente enlentecido; hay una situación de guerra comercial entre Estados Unidos y China, con políticas proteccionistas del Gobierno de Trump.

A pesar de esa situación de incertidumbre internacional y de las dificultades que tiene el Uruguay -se han explicitado en forma clara y han quedado de manifiesto con el cierre de emprendimientos históricos, de industrias emblemáticas del país, lo que afecta la tasa de empleo no solo en Montevideo, sino en localidades pequeñas del interior de la República-, el Gobierno quiere seguir aumentando el gasto para complacer a alguna gente que podrá recibir algunos incrementos, aunque impacte negativamente en la calidad de vida del resto. Cuando se habla de ajustes, hay que tener presente que estos se realizan porque antes hubo una fiesta del gasto -eso fue lo que pasó en la región-, y esa fiesta la termina pagando la gente. ¡Hay que decirlo en forma clara! Lamentablemente, con el nivel de déficit fiscal que tenemos, que llega al 4 % en el año móvil mayo 2017-mayo 2018, y con el Gobierno aumentando el gasto sin poder financiarlo con crecimiento genuino de la economía, el déficit seguirá creciendo, impactando negativamente en la gente, que tendrá que pagar con mayor carga impositiva, con mayores impuestos. ¡Hay que hablarle claro a la ciudadanía! Esto lo tendrá que pagar con aumento de tarifas públicas, como el Gobierno del Frente Amplio lo hace de forma sistemática.

Por supuesto que estamos de acuerdo con el gasto social, con el gasto prioritario del Estado; no obstante, debemos tener en cuenta la situación que está viviendo el Uruguay y, en todo caso, hacer redistribuciones internas en el presupuesto nacional, pero no generando más gasto, sino volviendo a distribuir donde se pueda. El Gobierno del Frente Amplio nos ha demostrado que sí se

puede redistribuir. En las diferentes rendiciones de cuentas, el Parlamento nacional ha redistribuido partidas; por ejemplo, se han buscado partidas en los gastos de funcionamiento del Estado. Ha habido abatimiento de partidas, y en esta Rendición de Cuentas también hay abatimiento de partidas de funcionamiento en cada uno de los organismos. Entonces, ¡vaya si había gasto excesivo en la burocracia estatal, de donde se podía quitar para apuntalar ese gasto social prioritario! ¡Pero no se puede aumentar más el gasto público!

Ya mencionamos el déficit fiscal de la economía uruguaya. Además, se ha asistido a una pérdida continua de fuentes laborales: en los últimos cuatro años, el Uruguay ha perdido 47.000 empleos. Eso nos tiene que llamar a la reflexión, nos tiene que impactar, porque esta cifra se multiplica por las familias de los trabajadores. Esto tiene un impacto real en el consumo y en las políticas sociales, porque si esa gente no consigue trabajo, hay que aplicar políticas sociales y, por ende, aumentar el gasto. No hay políticas fuertes que estimulen el trabajo y que hagan al Uruguay competitivo. No lo estamos logrando con esta carga del déficit fiscal, con la inflación que empieza a aumentar, con la carga tributaria insoportable para las empresas y las familias. Y esto no lo digo yo; el ministro Astori reconoció que ya no se puede subir más la carga impositiva a la población. Todo esto repercute negativamente en la competitividad del Uruguay y en la creación de empleo genuino. Esta es una situación que hemos venido advirtiendo en cada una de las escenas de esta larga película que, lamentablemente, tenemos que calificar como de terror, aunque no quisiéramos.

En esta Rendición de Cuentas se apunta nuevamente al crecimiento del gasto, a crear más cargos de particular confianza. Se han creado cargos de particular confianza de forma sistemática desde 2015; lo digo así para no retrotraerme a gobiernos anteriores del Frente Amplio. El diputado Lafluf Hebeich lo señaló claramente: se han gastado cifras millonarias en los adscriptos de los ministros, que antes no existían y que ahora engrosan una plantilla de cerca de cien funcionarios. ¡Son casi cien adscriptos en los que el año pasado se gastaron más de US$ 2.500.000 por concepto de honorarios! Son cargos políticos, son cargos de la burocracia, son cargos de confianza del Frente Amplio, que sigue acrecentando su número. Se crean cargos en lugares como la Presidencia de la República, que terminan realizando actividades que ya llevan a cabo los ministerios. ¡No me vengan a decir que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no tiene como uno de sus cometidos ocuparse del medio ambiente! ¿Era necesario crear una secretaría en la órbita de la Presidencia con competencias en materia de medio ambiente, como el cambio climático, el agua, teniendo en cuenta que hay otros organismos del Estado que ya tienen esos cometidos establecidos claramente por ley? ¿Era necesaria una duplicación de servicios? No sé por qué lo hacen. Será por las internas del partido de gobierno; será porque tienen que contemplar a los diferentes partidos que componen la coalición gobernante; no lo sé. En definitiva, la señal es pésima; la señal es horrible. Siguen creando cargos de particular confianza; siguen creando unidades ejecutoras para luego poner a su frente un cargo de particular confianza. Obviamente, eso termina repercutiendo en el gasto global. Son señales. Si bien se puede decir que eso no mueve la aguja, son señales importantes: sin importar las premuras que

está viviendo la ciudadanía, se siguen creando cargos políticos para colocar a los amigos. Tenemos que decir esto claramente.

Dado que esta Rendición de Cuentas es la última instancia en la que se pueden realizar modificaciones presupuestales en esta Administración, uno de los capítulos finales, por lo menos, de este quinquenio, hay que hablar de las promesas incumplidas del Gobierno del Frente Amplio.

En la campaña electoral del año 2014, el entonces candidato y actual presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y el actual ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, conjuntamente con otros actores relevantes del Gobierno, dijeron que no subirían la carga impositiva a la gente. Lo manifestaron claramente. Sin embargo, lo hicieron en cada una de las rendiciones de cuentas. Es cierto que esta Rendición de Cuentas tiene la virtud de no establecer nuevos impuestos, pero es porque ya hicieron los ajustes fiscales e incrementaron los impuestos en las últimas dos rendiciones de cuentas.

Sigo con las promesas incumplidas. Se anunció con bombos y platillos -lo digo con mucho respeto; es una realidad- de que se llegaría al 6 % del PBI para la educación. Claramente, eso no se va a dar. No se da en esta Rendición de Cuentas, no se dará para el ejercicio 2019 ni se dará para el ejercicio 2020. Tampoco se llegará al 1 % para ciencia y tecnología, a lo cual también se comprometió el presidente Vázquez.

Por supuesto, el compromiso con respecto al déficit fiscal no es creíble. A esta altura, nadie puede creer que bajará al 2,5 % del PBI al final del quinquenio; no se dará el año 2019 ni el 2020. ¡No es creíble! ¡No se puede llegar a ese guarismo! Reitero: lo único que preveía la ley de presupuesto para abatir y bajar el déficit fiscal era el ahorro de las empresas públicas del 0,2 % del PBI. En esta Rendición de Cuentas no hay ninguna medida concreta de austeridad como para llevar el déficit fiscal al 2,5 % del PBI. Por lo tanto, lamentablemente, el próximo gobierno, sea del partido que sea, tendrá enormes problemas y deberá adoptarlas porque, en definitiva, hay una continuidad del Estado que se debe respetar. Nos sentimos en la obligación de decirlo.

El déficit fiscal está en el 4 % del PBI, cifra realmente histórica. Hay que remontarse al epicentro de la crisis económico-financiera del año 2002 para encontrar un déficit fiscal parecido. Tal como reconoció el ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, el Gobierno del doctor Batlle nos dejó con un déficit fiscal del 1,9 %. Fue una situación muy complicada para el país, pero se actuó con extrema responsabilidad para dejar la casa en orden, las cuentas claras, a fin de que el siguiente gobierno tuviera las cuentas saneadas para impulsar las distintas políticas, que finalmente terminó llevando adelante la Administración del Frente Amplio.

En la exposición de motivos y en el Informe Económico Financiero del Gobierno nuevamente se habla de los guarismos del déficit fiscal, de las proyecciones de crecimiento de la economía, de la situación puntual del empleo, que estima mejorará a partir de determinadas medidas. Teniendo en cuenta esa exposición de motivos y ese Informe Económico Financiero, creo

que el Gobierno padece del síndrome de Alicia en el país de las maravillas. Me refiero a un síndrome clínico, estudiado por la medicina; quien lo padece tiene breves episodios de distorsión en la percepción de la imagen corporal, del tamaño, las distancias, las formas o las relaciones espaciales de los objetos, así como en cuanto al transcurso del tiempo. Ese síndrome no le permite al Gobierno reconocer la realidad; no le permite decir que se equivocaron cuando dijeron que no iban a subir la carga impositiva. No lo han dicho. Y si no quieren reconocer que se equivocaron, entonces, tengo que pensar que en la campaña electoral mintieron. ¡Mintieron!

Reitero que esta Rendición de Cuentas es casi el final de esta saga.

En el 2015 se proyectó un megaplán de inversiones por más de US$ 12.000.000.000. Se incumplió con ese megaplán de inversiones.

Es cierto que se ha gastado más en cada una de las instancias presupuestales, pero los resultados han sido peores. Esta es una percepción unánime en la población. Los servicios de salud han sido peores; los servicios de educación han sido peores; ni qué decir de la situación de la seguridad, porque la gente sabe bien qué es lo que está padeciendo en términos de seguridad.

Hemos vivido una etapa en la que nuestro canciller ha querido insertar a Uruguay en el mundo, pero lamentablemente hemos visto cómo la fuerza política gobernante ha trancado una y otra vez los esfuerzos para hacerlo; ha trancado una y otra vez la posibilidad de que Uruguay logre acuerdos de libre comercio. Costó sangre, sudor y lágrimas votar el acuerdo con Chile. Esta es una pesada mochila. Los trenes pasan y, si uno no los toma, no vuelven a pasar. Se pierden oportunidades, sobre todo, para la gente.

En esta Rendición de Cuentas asistimos, otra vez, al ninguneo de los organismos de control, lo cual no es nuevo, porque se ha dado tanto en la ley de presupuesto nacional como en cada una de las rendiciones de cuentas. Nuevamente, hay un ninguneo al Tribunal de Cuentas, que en cada una de las instancias ha solicitado refuerzo de rubros para gastos de funcionamiento por la ampliación de su nueva sede. Tiene una nueva sede, pero no dispone de los recursos suficientes para utilizarla de buena manera. El Estado ha crecido enormemente, se le han atribuido una cantidad de funciones al Tribunal de Cuentas, pero no los rubros para actuar; para generar transparencia, cristalinidad; para controlar la legalidad del gasto, como establece la Constitución de la República.

También se ha ninguneado a la Jutep. No quiero calificar por qué razón, dado que lo que solicita es una porte ínfima del presupuesto nacional. Sin embargo, tiene que hacer malabares; inclusive, alquila garajes del edificio para costear algunos gastos.

Repito: la Jutep también se pide un refuerzo de rubros, pero no se le da.

Asimismo, se ningunea al Poder Judicial. Lo dijo con mucha precisión el señor diputado Lafluf: se aprobó, con bombos y platillos, la ley contra la violencia de género, pero no se destinan los recursos necesarios para implementarla. Hay cosas que no se entienden. ¡Se llena la barra de gente pidiendo que la ley se apruebe, la bancada oficialista arremete para que la ley

se apruebe, pero al Poder Judicial no se le dan los recursos para implementarla! La verdad es que no se entiende.

A esto yo lo califico de ninguneo. El Poder Judicial no es un órgano de contralor, sino un órgano jurisdiccional de base constitucional. Es un Poder del Estado al que se deja por fuera de las redistribuciones internas que se discutirán en unas horas; realmente, no se entiende.

Esta Rendición de Cuentas era para dar mensajes de austeridad, de contención del gasto, de que Uruguay podría enderezar su rumbo, pero no ha sido así. ¡Esta Rendición de Cuentas es irresponsable porque, sabiendo la situación del Uruguay, sabiendo la situación regional, se aumenta el gasto!

Nuestro Partido ya presentó en la Comisión y planteará también en el plenario de la Cámara una cantidad de artículos que nos parecen importantes para lograr ese espacio fiscal del que tanto habla el equipo económico. Cuando se habla de esfuerzo fiscal, debemos tener en cuenta que lo hace la gente, no el gobernante. El esfuerzo fiscal lo hace la gente. Para tener ese espacio fiscal del que tanto se habla, el Partido Colorado, nuevamente, con mucha seriedad y responsabilidad, propondrá a la Cámara aprobar una norma que suspenda la provisión de vacantes en la Administración central, en las empresas públicas, por un término ínfimo, de menos de tres años, exceptuando aquellos organismos que realizan los cometidos esenciales del Estado, que tienen que ver con la salud, la educación y la seguridad. También excluimos los cargos que se tengan que crear por la implementación del nuevo Código del Proceso Penal.

Esta es una norma en la que hemos insistido una y otra vez. Lo hicimos en la Rendición de Cuentas del año 2016, en la de 2017 -ejercicio 2016-, y lo volvemos a hacer. En esta ocasión, proponemos a la Cámara que sea por un término menor a tres años, a efectos de lograr ese espacio fiscal, hacer los ahorros correspondientes y bajar el déficit fiscal. Esta propuesta también es para los lugares que realmente necesitan la atención del Estado y que tienen que ver con el gasto prioritario, que es social, y también con el gasto a favor de los organismos de control, para que puedan ejercer un buen contralor de la Administración pública.

También propusimos otros aditivos y sustitutivos. Uno de ellos tiene que ver con el artículo 310, relativo al Fondo de Estabilización Energética, al que ya se refirió el señor diputado Lafluf. Como dijimos en mayo de este año, este Fondo fue creado mediante una ley de presupuesto como un fideicomiso. Tiene los aportes fundamentales de los clientes de UTE, que pagaron y conformaron el Fondo a través de contribuciones especiales, de una sobrefacturación en la tarifa eléctrica y de otro porcentaje que iba a Rentas Generales; todo esto, obviamente, está financiado por los contribuyentes. Decimos con claridad que el excedente que definió el Poder Ejecutivo les corresponde y tiene como legítimos propietarios a aquellos que lo generaron con determinada finalidad. Ese excedente tiene que volver a UTE para bajar las tarifas de electricidad a las familias, a las empresas. Eso es justicia. Filosóficamente, es de justicia. El Fondo no se puede utilizar para un destino diferente. No nos importa cuál es el destino; estamos diciendo que filosóficamente no corresponde tocar ese dinero. Si se quería utilizar dinero para otras cosas, se tendría que haber utilizado otro fondo, ¡no este! Así es que el Partido Colorado, nuevamente, presenta un

sustitutivo para modificar el destino planteado y establecer el que debe tener: volver a la UTE para bajar las tarifas eléctricas y que pueda beneficiar a los ciudadanos.

Además, presentamos otros aditivos y sustitutivos que tienen que ver con un financiamiento concreto para el Fondo Nacional de Recursos. Esto se discutió en la Comisión, cuando vino el ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Se habló de la situación presupuestaria y acerca de la posibilidad de financiar los medicamentos de alto costo. Se dice que hay restricciones presupuestarias. Proponemos una fuente de financiamiento real: que el 50 % de los valores decomisados por la Justicia por determinados delitos -narcotráfico, lavado de activos, trata de personas- se transfiera al Fondo Nacional de Recursos, a efectos de financiar los medicamentos de alto costo que están fuera del Formulario Terapéutico de Medicamentos y los procedimientos de medicina altamente especializada para salvar vidas. ¡No es admisible que la gente no pueda acceder a determinada medicación y tenga que recorrer esa intrincada burocracia estatal, primero, en el Ministerio de Salud Pública y, después, a través de la acción de amparo, a efectos de que se le entregue una medicación para mejorar su calidad de vida o vencer una patología! Esto lo presentaremos de nuevo en el plenario.

Hay otros aditivos; seguramente, el señor diputado Cardoso explicará su contenido. Uno trata de la creación de un centro oncológico que se necesita en Maldonado. Lo impulsaremos a través de esos fondos que estimamos se pueden crear con la no provisión de vacantes por el término de casi tres años. Hemos impulsado esta medida en forma ininterrumpida durante los últimos cinco años. El Estado se ahorraría US$ 40.000.000 anuales, y si a esto le sumáramos las empresas públicas, podríamos llegar a US$ 60.000.000, en forma acumulativa, año a año. Es decir que el primer año serían US$ 60.000.000; el segundo, US$ 120.000.000.

Otra vez pondremos a consideración de la Cámara estas propuestas y algunas otras; el Partido Colorado ha actuado nuevamente con seriedad y responsabilidad.

También estamos dispuestos a dar recursos a la UTEC para financiar horas docentes y poder culminar las carreras que ha impulsado. Insisto: esto se lograría con la no provisión de vacantes.

Esta es la propuesta concreta que realizamos a la Cámara. En la discusión particular estamos dispuestos a votar algunos artículos que tienen que ver con redistribuciones internas que no generan más gastos y permitirán prestar ayuda a ámbitos sensibles de la Administración que precisan refuerzo de rubros.

El Partido Colorado votará negativamente el proyecto en general, sin perjuicio de que acompañaremos algunas disposiciones particulares. Durante la discusión, intentaremos convencer a la Cámara de que otorgue recursos a aquellos organismos que realmente los necesitan y hacen a la salud de la República.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor diputado Iván Posada.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: quiero destacar, porque me parece que es de orden -no lo hago habitualmente-, el trabajo que realiza el grupo de funcionarios encargados de atender la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, al cabo de estos casi cuarenta y cinco días en los que el proyecto ha sido considerado en la Cámara de Diputados. Obviamente, me refiero a los secretarios y prosecretarios de ambas Comisiones, y también a todo el grupo que está detrás de la preparación de los materiales, de las coordinaciones para agendar la visita de los distintos organismos y ministerios. Todo constituye un aporte fundamental para que la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, llegue a esta instancia con todos los elementos, la discusión previa y la información, que es capital para una instancia de esta naturaleza. No lo hago habitualmente, pero es de orden destacar este trabajo, que resulta fundamental para que hoy podamos discutir este proyecto de ley de modificación presupuestal, que acompaña la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo.

Además, quiero destacar otro hecho particularmente relevante en la historia parlamentaria. Es la primera vez que una mujer preside la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. En estos tiempos, en los que el reclamo constante de la participación de la mujer en la política es un aspecto que valoramos -debe haber más equidad en la representación parlamentaria, en este Cuerpo y, en general, en todo el Parlamento- resulta particularmente significativo que la señora diputada Lilián Galán haya presidido la Comisión de Presupuestos. Es la primera mujer en asumir esta responsabilidad. Corresponde destacar este hecho al comienzo de nuestra presentación y felicitar a la señora diputada Galán, quien realmente ha hecho una muy buena conducción del trabajo parlamentario durante este período.

Ciertamente, las instancias de rendición de cuentas generan expectativas acerca del control que debe realizar el Poder Legislativo, en particular, la Cámara de Representantes, a través de las comisiones especializadas, en cuanto a los distintos compromisos que en materia programática asume el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo. En los hechos -este ha sido un dato relevante a lo largo de la historia-, el Parlamento no analiza el gasto ejecutado, los resultados de los distintos programas, el cumplimiento de los objetivos en materia de metas ni el desarrollo de las actividades -lo que para nosotros debería ser el punto central-, sino que se limita, durante todo el período de análisis -esto sucede en las leyes de presupuesto y también en todas y cada una de las instancias de rendición de cuentas- a analizar el articulado. Este es el análisis que se hace en el ámbito del Parlamento. No se analiza el gasto público y sus resultados, sino el gasto incremental, es decir, cuánto se incrementa el gasto.

Cuando el Tribunal de Cuentas pasó a ser un organismo independiente del Poder Legislativo, autónomo -recordemos que en nuestra historia constitucional el Tribunal de Cuentas en algún momento fue parte del Poder Legislativo-, generamos una doble debilidad: debilitamos las posibilidades que en materia de control tiene el Poder Legislativo y debilitamos las atribuciones que en materia de control tiene el Tribunal de Cuentas. A lo largo de los años que hemos integrado la Comisión de Hacienda y participado de las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, desde el año 1995 hasta la fecha, hemos visto que los

recursos que se votan para el Tribunal de Cuentas, generalmente, son escasos. Año tras año, en estas instancias, las autoridades del Tribunal de Cuentas vienen al Parlamento a reclamar más recursos para realizar un mejor control del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el Parlamento, el Poder Legislativo, carece del personal necesario como para abocarse a ese análisis sobre el gasto público, sus resultados y el cumplimiento de las metas y los objetivos; en este escaso mes y medio que tiene cada Cámara para su consideración, no se hace un análisis del gasto.

Por eso soy de los que creen que si en algún momento hacemos una reforma constitucional, deberíamos volver a integrar al Tribunal de Cuentas al Poder Legislativo. Sería una forma de fortalecer a la entidad de control y al Poder Legislativo como contralor del Poder Ejecutivo, especialmente, en las instancias definitorias del análisis de cómo se han gastado los dineros públicos y cuáles son los resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta esa limitación del análisis, diría que la otra parte importante que sí se cumple en las instancias de leyes de presupuesto o de rendición de cuentas, es el envío del informe económico financiero del Poder Ejecutivo, que ha enriquecido la discusión a partir de 2005. Se trata de una información indispensable con respecto a las distintas variables macroeconómicas, fundamentales para proyectar y analizar las perspectivas de nuestro país en materia de crecimiento de su economía, sobre todo, para disponer de un estado de situación de dónde estamos parados desde el punto de vista económico. En ese sentido, este Informe Económico Financiero constituyó un elemento fundamental para el trabajo que realizamos en las comisiones integradas.

Lo cierto es que en el escenario macroeconómico mundial ha habido cambios en las perspectivas, que durante el año 2017 ha generado un crecimiento del orden del 3,7 % del producto bruto interno mundial. Ese crecimiento se dio tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, que dieron claras muestras de un mejor desempeño, especialmente, porque aumentó la inversión, porque mejoró el precio de las materias primas y porque hubo condiciones financieras favorables que incidieron en la recuperación del comercio internacional.

El Fondo Monetario Internacional, que es la referencia en materia de proyecciones macroeconómicas -el Informe Económico Financiero se encarga de considerarlas a la hora de proyectar las perspectivas de la economía mundial-, mantiene un crecimiento potencial de la economía mundial del orden del 3,9 % para los años 2019 y 2020. Sin embargo, el más reciente informe -se conoció en el mes de julio- establece algunos aspectos que generan, por lo menos, preocupación con respecto a la consolidación de ese crecimiento, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes.

El informe del mes de julio -aparece con posterioridad al ingreso al Poder Legislativo del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal- destaca que la expansión ya no es tan uniforme y que los riesgos para consolidar las perspectivas de crecimiento del 3,9 % del producto bruto interno mundial se comienzan a agudizar.

Asimismo, el informe del Fondo Monetario Internacional señala que entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo las perspectivas de crecimiento son desiguales, fundamentalmente, porque este contexto está marcado por algunas circunstancias que generan especial preocupación: el incremento del precio del petróleo, el aumento de las rentabilidades en Estados Unidos, las crecientes tensiones comerciales -son un dato de la realidad- y las presiones que genera el mercado en algunas economías con fundamentos económicos más débiles.

En tal sentido, el informe del Fondo Monetario Internacional destaca la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento para tres países: Argentina, Brasil e India. Si bien este último es un país muy importante dentro de la economía mundial, los dos primeros son particularmente relevantes para la economía de Uruguay.

Otro aspecto que merece especial señalamiento del informe del Fondo Monetario Internacional -repito, sirve para el análisis que se hace en el Informe Económico Financiero y que fue actualizado con posterioridad al ingreso al Parlamento del proyecto de Rendición de Cuentas-, tiene que ver con el aumento de los aranceles anunciados hace poco por Estados Unidos y las represalias de los socios comerciales, que han incrementado la probabilidad de tomar medidas comerciales crecientes y sostenidas. De acuerdo con este informe, eso podría descarrilar la recuperación y empañar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, tanto a través del impacto directo en la asignación de recursos y la productividad como debido al recrudecimiento de la incertidumbre y el daño a la inversión. Estas referencias son ineludibles si tratamos de hacer un análisis del contexto económico internacional, particularmente, de la potencialidad de crecimiento del comercio mundial.

Por otra parte, se señala que la constricción de las condiciones financieras también podría trastocar las carteras, sacudir con fuerza los tipos de cambio y reducir más las entradas de capital a los mercados emergentes, sobre todo, en los que tienen fundamentos más débiles o están expuestos a más riesgo político.

En otras palabras, lo que se señala es que puede haber una movilidad de capitales que retornen desde los países periféricos a los países centrales. Históricamente, este ha sido un aspecto que ha jugado en contra de las economías emergentes, menos desarrolladas, como la de nuestro país.

En nuestro informe incluimos las proyecciones que recientemente hizo el Fondo Monetario Internacional. Nos parece que son un elemento de consulta importante para analizar las perspectivas de la economía uruguaya.

Otro documento a considerar es el Informe de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay, correspondiente al segundo trimestre de 2018. A nuestro juicio, este también debe ser un elemento de referencia sustancial, porque constituye el análisis de un área técnica de las mejores que tiene la institucionalidad uruguaya, conjuntamente -por supuesto- con la que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Reiteramos la importancia de tener en cuenta las referencias y las alertas que se incluyen en el Informe de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay.

En el último informe conocido, el del segundo trimestre de 2018, se hace especial referencia a que el escenario base -el que proyecta el informe del Fondo Monetario Internacional al que hacíamos referencia- presenta una serie de riesgos, tanto en la economía global como regional, y destaca la reforma tributaria en Estados Unidos, que puede conducir a mayores presiones inflacionarias que obliguen a la Reserva Federal (FED) -en Estados Unidos, el equivalente al Banco Central del Uruguay- a acelerar la normalización de su política monetaria y a que se eleven las tasas de largo plazo por necesidad de más financiamiento. Este hecho produce un importante impacto en nuestra economía, porque se genera una alerta sobre la posibilidad de aumentar los tipos de interés y, en consecuencia, buena parte de la situación de déficit fiscal de nuestro país tiene que ver con el pago de los intereses de la deuda. Por lo tanto, es un aspecto relevante a la hora de analizar las perspectivas de la economía uruguaya.

Este informe de política monetaria del Banco Central confirma algo que anunciábamos hace un momento: que la aversión de los inversores al riesgo aumentaría la volatilidad y, en consecuencia, la posibilidad de que desde las economías periféricas se trasladaran capitales a las economías centrales. Por lo tanto, se estaría generando una menor liquidez a nivel internacional, más costos de financiamiento, mayor riesgo soberano, mayor fortalecimiento del dólar y mayores salidas de capitales. Todo este escenario se complementa con algunos aspectos a nivel regional que han sido motivo de preocupación para nuestras autoridades económicas -están referidos en el informe- y que, en todo caso, deben tener el conveniente destaque porque son aspectos relevantes para una economía como la uruguaya. Y hago especial referencia a las condiciones políticas que enfrenta la economía de Brasil.

En el informe de política monetaria del segundo trimestre se hace referencia a que esas condiciones políticas podrían generar dificultades para aprobar las reformas fiscales necesarias con el fin de ajustar los desequilibrios, consolidar el crecimiento económico y prevenir la inestabilidad.

Todos sabemos que Brasil está en una situación de gran debilidad institucional, por lo menos en cuanto a los apoyos que genera el sistema político brasileño. Esa situación se da en un escenario económico en el que recién el año pasado se advirtió una leve recuperación y las perspectivas no muestran solidez; en consecuencia, esa inestabilidad es un dato relevante a los efectos de proyectar las posibilidades de consolidar a futuro el leve crecimiento que se dio el pasado año.

Además, este informe de política monetaria alerta sobre el caso de Argentina: se señala el riesgo de incumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional, lo que podría generar salida de capitales y un corte abrupto del financiamiento externo. Eso determinaría presiones al alza sobre el tipo de cambio y la reducción de la tasa de crecimiento de la economía.

Si bien estos señalamientos del informe de política monetaria se hacen con la idea de poner todos los elementos arriba de la mesa, a pesar de que tengan menos probabilidad de ocurrencia, creo que son relevantes para tener claramente planteada la situación en la cual se desarrollará la economía uruguaya. En ese sentido, debemos hacer especial referencia a una economía

que con el paso del tiempo se ha transformado para Uruguay en el principal destino de nuestras exportaciones: la economía china. Por eso creo que es bien importante lo que señala este informe de política monetaria del Banco Central, ya que advierte acerca de los mayores riesgos originados en la economía china, ya sea por una reducción significativa del crecimiento o por un aumento de la volatilidad financiera originada en diversos ámbitos: correcciones bursátiles abruptas, deudas de los gobiernos regionales y las empresas públicas, la banca en las sombras o la depreciación del yuan.

En este escenario, se destacan las recientes tensiones comerciales con Estados Unidos, que derivan en una imposición de aranceles a una serie de productos entre ambos socios, y las amenazas del presidente Trump de ampliar tanto el monto como la extensión de estos gravámenes a otros socios comerciales, lo que puede originar una guerra comercial que tendrá impactos significativos sobre el comercio y el crecimiento global. A esto se agregan, en la llamada zona euro, las tensiones financieras asociadas con las negociaciones del *brexit*.

Dicho sea de paso, ayer leíamos una noticia en la prensa internacional -el diario *The Guardian*- que daba cuenta de que, según una encuesta particularmente significativa, la realidad de hoy en Inglaterra señala la necesidad de un segundo referéndum para minimizar los riesgos y, sobre todo, el impacto negativo que el *brexit* generaría para la economía del Reino Unido, aspecto que a esta altura comienza a visualizarse cada vez con más temor, habida cuenta de que -obviamente, mirado desde afuera- consideramos esto un grave error político y económico de la conducción del Reino Unido.

En este panorama se inserta la economía uruguaya. Si somos conscientes al analizar la realidad, advertiremos que un déficit fiscal que impacta paulatinamente y deteriora lo que todavía es una posición financiera sólida. Pero el goteo del endeudamiento anual está en el orden de US$ 2.000.000.000 y se arrastra desde 2014 a la fecha, lo que representa una alerta sobre las posibilidades de la economía uruguaya.

Quiero ser muy claro en esto. Creo que en esta oportunidad las proyecciones que hace el Gobierno son adecuadas. Pensar que la economía crezca un 2,5 % en 2018 y que tenga un incremento en torno al 3 % en 2019 es razonable porque este año, el mayor impacto negativo en la economía uruguaya lo ha tenido la cosecha de productos agrícolas, especialmente, la de soja, que ha sido muy importante.

Nosotros analizamos el informe de comercio exterior que publica mensualmente el Instituto Uruguay XXI, y pudimos ver que durante el primer semestre del año en curso, comparado con el primer semestre de 2017, ingresaron a nuestra economía US$ 388.000.000 menos por concepto de exportaciones de soja. Es decir, casi US$ 400.000.000 menos están circulando en la economía y eso está pegando en todo el país, especialmente, en los sectores comerciales. La situación de los pequeños comercios en el interior del país es preocupante. Cuando el Informe Económico Financiero analiza la situación desde el punto de vista del mercado de trabajo, establece determinada cifra que ha seguido creciendo en lo que va de este año. El hecho de que desde 2014 al presente se hayan perdido unos 47.000 puestos de trabajo -según se

refiere en el Informe Económico Financiero- determina el grado de impacto que ello ha tenido en nuestra economía, especialmente, porque esos puestos se han perdido en los sectores agrícola, manufacturero y de la construcción.

Estos temas son muy relevantes para trazar las perspectivas de la economía uruguaya y para saber por qué importa la discusión que damos en el marco de una rendición de cuentas.

Cuando se aumenta el gasto público, tiene que haber una contrapartida de financiamiento. Hoy, esa contrapartida representa un mayor endeudamiento de nuestra economía y termina teniendo un impacto negativo en todo su funcionamiento. En nuestro informe abundamos en la inclusión de algunos de los cuadros que son particularmente ilustrativos de esta realidad.

El Informe Económico Financiero señala un dato que recogemos en nuestro informe porque nos parece que tiene especial destaque y refiere a lo que mencionábamos hace un momento. Dice así: "A pesar de que el nivel de actividad económica creció 2,7 % en 2017, el crecimiento no fue acompañado por una mayor creación de puestos de trabajo. Los sectores de actividad que impulsaron el crecimiento de la economía durante los últimos tres años tienen en general una baja intensidad en mano de obra, como las comunicaciones, la electricidad, gas y agua, la intermediación financiera, y los restaurantes y hoteles; representan en total el 8,8 % de la población ocupada. Por su parte, los más intensivos en mano de obra, como la construcción y el comercio representan el 25,6 % del total de ocupados […]". Es decir, más de una cuarta parte de la población ocupada de nuestro país se desempeña en el comercio -a veces lo perdemos de vista- y en la construcción.

El informe continúa diciendo: "[…] registraron caídas del Valor Agregado Bruto (VAB) sectorial, y fueron los que en mayor medida explicaron la caída del empleo. La industria manufacturera y el sector agropecuario, si bien se mantienen estancados, son sectores donde algunas de las actividades económicas que lo componen se encuentran en proceso de reducción de puestos de trabajo hace ya algunos años. En efecto, estos fueron los sectores que más expulsaron mano de obra desde el 2014. En el sector pecuario se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo y 18.000 aproximadamente en la industria manufacturera, seguidos en importancia por la construcción donde se perdieron cerca de 9.500".

Cuando hablamos en términos económicos y consideramos este nuevo aumento del gasto público en una rendición de cuentas, debemos tener presente cómo impacta esto en nuestra realidad.

En el Partido Independiente estamos convencidos de que deberíamos pensar una reforma tributaria que cambiara la naturaleza de los impuestos que afectan, particularmente, a la micro y pequeña empresa porque, a fin de cuentas, los impuestos que pagan los pequeños comerciantes del interior y de Montevideo, las pequeñas industrias y las microempresas equivalen a un salario. En consecuencia, desde el punto de vista económico, deberían ser objeto de un análisis especial y tener un tratamiento similar al del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

Creo que estos aspectos no terminan de estar presentes en la discusión de esta Rendición de Cuentas, aunque nos permitirían hacer un análisis de la

realidad a la cual nos enfrentamos todos los días, que está marcada, fundamentalmente, reitero, por la destrucción de 48.000 puestos de trabajo del año 2014 hasta la actualidad.

Señor presidente, en el informe incluimos un análisis relativo al comportamiento de las exportaciones en 2017. Nos parece especialmente relevante que tengamos presente cómo se distribuye la venta, la comercialización que realiza el Uruguay hacia otros mercados. Hace un momento, señalábamos la importancia que tiene la República Popular China como destino de nuestras exportaciones. Durante 2017, Uruguay exportó a ese destino US$ 2.549.000.000; le sigue la Unión Europea, a la cual exportamos US$ 1.453.000.000; después vienen Brasil, con US$ 1.207.000.000; Estados Unidos, con US$ 532.000.000; Argentina, con US$ 515.000.000, y México, con US$ 327.000.000. Estos son los destinos de nuestras exportaciones. Y agrego que a México le sigue Turquía, con US$ 263.000.000.

¿Por qué hacíamos referencia, especialmente, a estos destinos de las exportaciones? Porque otro aspecto que importa es analizar el comportamiento del tipo de cambio real, un índice que hace mucho tiempo construyó y calcula el Banco Central del Uruguay, y que nos da noticias de cómo está nuestra capacidad de competencia, es decir, de qué ha pasado con el costo de elaboración de los productos en el mercado nacional con respecto a la situación de otros países en el mundo; nos da una idea de cómo ha evolucionado nuestra capacidad de competencia.

Por eso, en base a esos datos incluimos en el informe un comparativo con promedios anuales...

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- ¡Que se prorrogue el plazo de que dispone, señor presidente!

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar.

——Cincuenta y seis en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Puede continuar el miembro informante en minoría, señor diputado Iván Posada, quien dispone de quince minutos adicionales.

SEÑOR POSADA (Iván).- Muchas gracias.

Decía que, en base a los datos del indicador de tipo de cambio real -incluido en la página web del Banco Central del Uruguay- se puede analizar en términos globales la pérdida de competitividad de nuestra economía.

Tomando como base el promedio del año 2017 igual a 100, este indicador de tipo de cambio real muestra que, si comparamos el promedio del último semestre -esto es, enero-junio de 2018- con el promedio del año 2005, la pérdida de competitividad global fue de 45 %. En la globalidad, con respecto a todo el mercado exterior, el país está un 45 % más caro. En el plano extrarregional -es decir, si excluimos a Brasil y a Argentina-, Uruguay está un 40 % más caro respecto al promedio del año 2005, y si medimos exclusivamente la competitividad a nivel regional, está un 47 % más caro en comparación con el promedio de 2005.

Si comparamos el promedio de este último semestre con el año 2010, la competitividad global tuvo una caída del 29 %, o sea que en los últimos ocho años nuestro país está un 29 % más caro; en la situación extrarregional, un 11 % más caro y en la regional, un 40 % más caro.

Finalmente, si comparamos con el promedio de 2014 -a fines del Gobierno anterior-, Uruguay está un 12 % más caro a nivel global, en el plano extrarregional, un 7 %, y en el regional, un 17 %.

Estos valores dan la razón a quienes desde los sectores vinculados a lo agroindustrial señalan la pérdida de competitividad. La realidad es que el país está más caro; en consecuencia, los productos que procesamos y elaboramos tienen menos posibilidades de inserción y de competencia, sobre todo considerando la realidad de los mercados internacionales. En el plano agropecuario Uruguay compite con Nueva Zelanda y con Australia, países que firmaron acuerdos con nuestro principal socio comercial, de manera que muchos de los productos que ellos elaboran entrarán con arancel cero a China en muy pocos años. Esta situación, claramente, es una amenaza a la potencialidad que tiene la producción nacional en materia de ingreso a esos mercados, nada más y nada menos que el principal comprador de productos uruguayos en el mundo. Por eso es que insistimos tanto en el tema de la inserción internacional.

La clave de la consolidación de un desarrollo productivo nacional con mejor calidad de vida para nuestra gente, con mejor potencialidad en materia de generación de puestos de trabajo -al fin y al cabo, es parte de lo que cuenta para una mejor calidad de vida- en un país de tres millones de habitantes es la inserción internacional. A veces, nos cuesta comprender que es el único camino posible, porque no tenemos un mercado interno en el que podamos colocar una producción agropecuaria e industrial que, en realidad, se genera para treinta millones de personas. Me parece que esa es una de las cosas que tendríamos que grabarnos a fuego, porque detrás del objetivo de la inserción internacional todos los partidos políticos deberíamos estar empeñados en llevarla adelante en las mejores condiciones posibles. Al fin y al cabo, si logramos vender nuestros productos en el mercado internacional, seguramente, tendremos más ingresos a nuestra economía y, en consecuencia, mejor calidad de vida para todos los trabajadores.

Al comienzo de nuestra intervención hablamos de este déficit fiscal, de lo que significa desde el punto de vista del endeudamiento de nuestro país. En las distintas rendiciones de cuentas hemos insistido en el impacto negativo del sobredimensionamiento del gasto en 2016 y 2017 como consecuencia de la previsión de un escenario macroeconómico que para todo ese período de gobierno se estimaba en un 14,6 % pero que pocos meses después, en la Rendición de Cuentas de 2015, se redujo a algo menos de 8 %. Por más que el aumento sea menguado, de $ 4.420.000.000 para 2019 y de $ 4.720.000.000 para 2020, se hace sobre la base del déficit que tenemos. Por lo tanto, por más que lo queramos vestir diciendo que lo vamos a financiar con más crecimiento económico y con las utilidades del BROU, la realidad es que lo vamos a pagar con endeudamiento.

Estamos hablando de una situación deficitaria que está en el punto de partida. Por consiguiente, todo lo que se incremente va a representar un

aumento del déficit; ese es un dato de la realidad que, a esta altura, todos deberíamos tomar como una situación de hecho a enfrentar y no a eludir.

La perspectiva es que en 2019 se culmine con una relación de deuda neta -excluyendo encajes- a PBI del 41 % y que a 2020 -si se cumpliera el objetivo, que ha sido trasladado para luego del período de Gobierno, de llegar a un déficit fiscal de 2,5 %; recordemos que el objetivo de déficit fiscal de 2,5 % estaba planteado para 2019 y ahora se traslada a 2020- se dé una relación de deuda neta a PBI del orden del 41,6 %, casi un 42 %. Es importante recordar cuál era el punto de partida, es decir, cómo estábamos cuando cerró 2014. Cuando el Poder Ejecutivo nos planteó el proyecto de ley presupuestal, la relación de deuda neta a PBI era de 33 %. Quiere decir que al cabo de este período de Gobierno, tomando como indicador la deuda neta, la relación de nuestro endeudamiento habrá crecido nueve puntos.

Todos los aspectos mencionados en nuestra intervención, y otros que no señalamos pero que están en la base de nuestros fundamentos, son los que llevan al Partido Independiente a rechazar este proyecto de Rendición de Cuentas 2017 y la modificación presupuestal prevista para 2019 y 2020.

Muchas gracias, señor presidente.

12.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: al empezar esta intervención, también queremos agradecer el trabajo de la Secretaría de la Comisión que nosotros integramos como delegados de sector -o como miembros plenos- porque siempre facilitaron nuestro trabajo. Asimismo, quiero agradecer a la Comisión porque nos permitió presentar nuestras iniciativas, y a la señora presidenta, quien también contempló nuestras necesidades de expresarnos y de realizar nuestros planteos aun sin ser miembros plenos.

Queremos empezar esta intervención reafirmando un concepto que planteamos en cada instancia, ya sea en el presupuesto nacional o en las rendiciones de cuentas: estos proyectos son la expresión más clara del modelo de sociedad que impulsa el Gobierno del momento. Es el marco general y las definiciones esenciales en las que se desarrolla una concepción de país que también tiene que ver con la inserción internacional, con las relaciones dentro de la sociedad. Una vez más, el Gobierno viene a refirmar un modelo al servicio del gran capital transnacional, del sistema financiero, de las multinacionales.

——A nuestro entender, se consolida un modelo esencialmente neoliberal con matices sociales, lo que se da en llamar el socialiberalismo. Lo más grave de estas situaciones es que el Gobierno viene a reafirmar un modelo que está francamente en crisis, que ha fracasado en todas sus definiciones más generales.

Desde que se presentó aquel presupuesto por dos años -un presupuesto atípico-, en las sucesivas rendiciones de cuentas, fallaron todas las proyecciones que el Gobierno planteó. Me refiero a las definiciones esenciales, las

proyecciones esenciales. Cada proyección del crecimiento económico que hizo el Gobierno en este período tuvo que corregirlas a la baja. El crecimiento de la deuda ha sido exponencial, como lo definía el diputado preopinante; hablamos de una proyección de la deuda neta de 42 % o 43 %; una deuda bruta que en ese rango está mucho más arriba. Además, la pregunta es ¿dónde está esa deuda? ¿Por qué creció esa deuda? El crecimiento del déficit fiscal rompió todas las proyecciones que eran de baja y fue de suba; el crecimiento de la desocupación, en cifras oficiales, anda pegando el 8 %, cuando en la realidad todos sabemos que lo que crece es la precarización laboral, la inestabilidad laboral y el subempleo; ahí estarían los datos reales de la desocupación. Obviamente, en este marco, también crece la violencia social.

En esta realidad y ante esta situación ¿qué nos propone el Gobierno en esta Rendición de Cuentas? Más de lo mismo. Podemos decir que, en esta circunstancia, es peor que lo mismo.

Otra vez, todo el peso de la crisis cae sobre los hombros de los trabajadores, porque si analizamos la estructura de los ingresos del Estado es claro -está marcado en las gráficas- que el 90 % son de origen tributario, son impuestos. Ahora bien: ¿quiénes pagan los impuestos? Si lo analizamos surge con claridad que más del 72 % lo pagan los trabajadores. O sea que el peso de la crisis está en los hombros de los trabajadores. Pero ¡claro! Esto tiene una contracara, porque si el 72 % de los impuestos lo pagan los trabajadores, hay sectores que no pagan impuestos o que llevan una carga tributaria mucho menor. Y esa es la contracara de la desigualdad: el privilegio. ¿Quiénes son los privilegiados de este modelo, que nuevamente se privilegian en esta Rendición de Cuentas a través de diversos mecanismos? Las multinacionales, el sistema financiero, el gran capital. Hoy se hablaba de los sectores más dinámicos de la economía que son el de las comunicaciones, el sistema financiero; están amasando fortunas.

No se toca la ley de promoción de inversiones, que ¿a quién privilegia? Al gran capital, en particular, a las multinacionales. No se tocan las exoneraciones fiscales que dejan al Estado sin recaudar importantes recursos que podrían volcarse a la imprescindible inversión pública: vivienda, salud, educación, gasto social. Pero, no; en ese aspecto el modelo es intocable. Insistimos: es un modelo que está en crisis.

En cuanto a las definiciones centrales de esta Rendición de Cuentas, lo primero que debemos señalar es el incumplimiento definitivo de un compromiso -no voy a hablar de promesas- del 6 % del PBI para la educación. Es muy duro confirmar este hecho precisamente en esta fecha, cuando estamos conmemorando el Día de los Mártires Estudiantiles, de quiénes dieron su vida en defensa de la educación pública.

Esta Rendición de Cuentas posterga definitivamente el compromiso del 6 %; aquella aspiración, si mejoraba la economía, quedó por el camino. Realmente, nosotros nos preguntamos la razón de la permanente postergación de la educación, en particular, de la Universidad de la República. ¿Por qué esta postergación? ¿A qué apunta? ¿A quiénes favorece? ¿Qué caminos abre?

A la educación, a la Universidad, le dan una parte ínfima de lo que pide que, además, era un compromiso que el Gobierno había asumido al iniciar el

período; no lo inventaron. Como nos decían las autoridades universitarias, hay carreras que no saben si podrán seguir funcionando en 2019 y 2020. ¿Podemos imaginarnos un proyecto de país, un modelo de país distinto, al servicio de los trabajadores, con soberanía, con desarrollo nacional, sin apostar, sin fortalecer la educación, la Universidad, la investigación? No es posible. Y espacio que se deja vacío, lo ocupa otro. Retrocede la Universidad pública, avanza la universidad privada. Nos preguntamos por qué esta postergación. Será porque no soportan o no toleran la autonomía y la crítica a algunas iniciativas absolutamente cuestionables con lo referente al agua u otro tipo de cosas. Realmente, cuesta entender una justificación para una postergación tan marcada. Esto sí que pone en riesgo un proyecto soberano e independiente.

Frente a la postergación de la educación pública y, ni qué hablar de la vivienda, hay una contracara, porque hay otros sectores que se fortalecen. El permanente fortalecimiento del aparato represivo ha sido la tónica de los presupuestos y de las rendiciones de cuentas. Para esto siempre ha habido recursos y no se ha traducido -ni se va a traducir- en mejores condiciones de convivencia, en paz social, porque el camino para construir la paz social no pasa ni exclusiva ni fundamentalmente por la represión. Hay que invertir en educación, en generación de empleos, en viviendas.

Esta Rendición de Cuentas también confirma un presupuesto paupérrimo para la vivienda: 0,4 % del PBI. Esto es inexistente. Las organizaciones sociales que están en la batalla por la vivienda nos dicen que en Uruguay faltan más de ochenta mil. Después se dice que no, que sí, pero esa es la realidad; basta con salir a la calle. Señores: con 0,4 % del PBI dedicado a la vivienda no resolvemos el problema, y también habría que resolver el problema del trabajo.

Pero ¡claro! Como contratara, en esta Rendición de Cuentas se reafirma el camino de las PPP, de la privatización, particularmente, en la educación, comprometiendo recursos del organismo para el pago a privados. En vez de inversión pública en un modelo tradicional que asegura un costo determinado, nos jugamos a las PPP, porque eso engaña. ¡Y se dice que no creció la deuda! No creció pero, año a año, lo que tenemos que pagar es incalculable.

Hay otras contracaras, porque, sin temor a equivocarnos, podemos decir que esta es la rendición de cuentas para UPM 2. En el proyecto original enviado por el Gobierno se proponía -tal como anunció el ministro Astori hace meses- utilizar todo el excedente del Fondo de Estabilización Energética, US$ 180.000.000, para las obras de UPM ¡para ver si viene! Porque, por ahora, no es seguro que venga. ¡Ojala que no venga! Se nos dice que con esto se reactivará la economía y se generarán fuentes de empleo, pero tenemos dos plantas de celulosa y crecen el déficit fiscal, la deuda y el desempleo. No es el camino para resolver este problema. También crece la desigualdad.

Decíamos que esta Rendición de Cuentas es toda para UPM. Por suerte, la bancada oficialista consiguió arrancar $ 400.000.000: $ 200.000.000 para cada año para destinar a la ANEP, cosa que saludamos. Ahora, el resto ¡para UPM no! ¡Qué mejor que volcar en viviendas la plata que pagamos todos los uruguayos con las tarifas de UTE! Me refiero a lo que sobre de los $ 400.000.000. Sería devolver a la sociedad la inversión que esta hizo.

Todas las partidas que no va a utilizar el MTOP en todas sus reparticiones, y las que no se ejecuten, van para UPM. ¡No se ha visto cosa igual! Todos los beneficios son para UPM, postergando inversiones en aspectos esenciales para la vida del país, como la educación y la vivienda.

También nos encontramos con una propuesta realmente negativa. Me refiero al recorte de las vacantes en general, cuando en algunas áreas de la Administración falta gente. Los funcionarios de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca nos decían que en los pasos fronterizos no tienen gente, que dentro de dos años no podrán cubrir los espacios mínimos y que hay puestos fronterizos que no tienen guardia sanitaria. ¡Y suprimimos las vacantes! ¿En qué se usarán los $ 71.000.000 que se obtendrán por los recortes de las vacantes? En mejoras salariales. Es muy negativo contraponer generación de puestos de trabajo a mejoras salariales, porque no se necesitaban los puestos de trabajo o porque estamos resignando lugares estratégicos de la vida del país a cuenta de alguna mejora salarial.

Por lo tanto, esta Rendición de Cuentas es la consolidación del modelo al que nos oponemos, pero no es de ahora, sino que lo hicimos siempre. Se trata de un modelo que apuesta todo a la inversión extranjera directa, que apuesta todo a las megainversiones que terminan desalojando la producción nacional, eliminando puestos de trabajo, hipotecando soberanía y con pingües beneficios para una minoría asociada a ese gran capital. Es la antítesis del modelo que defendemos y que históricamente han sustentado la izquierda y el movimiento popular.

Nuestro voto en general para este proyecto de ley será negativo. Hay artículos que compartimos y acompañaremos sin ningún problema, pero no compartimos la propuesta esencial de este proyecto.

En el transcurso del debate haremos una serie de propuestas que entendemos pueden mejorar esencialmente el contenido de la Rendición de Cuentas; algunas las planteamos en la Comisión, pero no tuvimos eco. ¡Ojalá que podamos recapitular en alguna de esas propuestas y encontrar apoyo para generar una mejor distribución de los recursos y fortalecer políticas que redundan en justicia social!

Por ejemplo, una de las propuestas que tomamos del movimiento social es que todos los préstamos otorgados por el Ministerio de Vivienda a través de la Agencia Nacional de Vivienda vuelvan a tener el 2 % de interés y no el 5,11 %, como hoy pagan las cooperativas de vivienda entregadas después del 2008. Ese es un interés del mercado financiero que no tiene nada que ver con los préstamos sociales. Entendemos que es una propuesta razonable.

También proponemos aumentar el Imesi a las bebidas azucaradas sin alcohol, fortaleciendo una política de salud impulsada por el Gobierno, en particular, desde la Presidencia de la República, para combatir enfermedades como la diabetes. Nadie podrá decir que el negocio de las bebidas azucaradas sin alcohol, que controlan grandes multinacionales que amasan cuantiosas ganancias, va a tambalear o que se pondrá en riesgo la inversión por un mínimo incremento del Imesi solo para las bebidas con azúcar agregada. No voy a describirlo, pero si del 22 % lo llevamos al 35 % o del 30 % al 50 %

-dependiendo de la bebida-, podríamos recaudar US$ 10.000.000 por año. ¿Cómo que no hay dinero para distribuir?

De todo eso se podría utilizar el 40 % para que el Ministerio de Salud Pública, a través del Fondo Nacional de Recursos y de los organismos correspondientes, asista a los enfermos de diabetes que requieren de asistencia permanente por medio de una bomba de insulina. Con el 40 % restante se podría respaldar al Hospital de Clínicas, que también juega un papel en la investigación y en la atención de estas enfermedades.

Para terminar, vamos a insistir con la irracionalidad de que el Estado uruguayo subvencione con US$ 13.000.000 anuales los premios de las carreras de caballos de una multinacional del juego. ¡Es impresentable! Esto se concretó en el año 2010 a través de una ley de presupuesto que tácitamente derogó dos leyes que de modo explícito prohibían al Estado el financiamiento de los premios de las carreras de caballos. Proponemos que esos US$ 13.000.000 anuales se destinen a ASSE para financiar nuevas obras. También planteamos que el excedente del Fondo de Estabilización Energética, menos los $ 400.000.000 que se destinarán a la educación, se dedique a las políticas de vivienda.

Seguramente, esto pueda alarmar a algunos, aunque otros comparten la idea de usar el 10 % de las reservas utilizables del país. Nos dijo el ministro de Economía y Finanzas que hay US$ 7.700.000.000 de reservas que son utilizables. No sería conveniente utilizar todo, pero el 10 % no moverá la aguja. Es más, en 2017 se utilizaron US$ 295.000.000 para cubrir el déficit fiscal y en 2018 se utilizarán US$ 222.000.000 para cubrir el déficit fiscal. Proponemos emplear de otra forma los US$ 780.000.000, que equivalen al 10 % de las reservas, destinándolos a inversiones en infraestructura edilicia en la ANEP, en la Universidad de la República y para llegar al 1 % del PBI en inversión en vivienda. También servirá para contar con los recursos suficientes que permitan implementar las políticas establecidas en la Ley N° 19.580, de 22 de diciembre de 2017, conocida como ley de violencia de género, dado que hay dificultades para su aplicación por falta de recursos.

¡Acá están los recursos! Lo que se necesita es voluntad política para meterse con la riqueza o para romper las normas o algunas reglas que marcan los organismos financieros internacionales y pensar prioritariamente en las necesidades de nuestro pueblo.

Estas son algunas de las propuestas que vamos a hacer en el transcurso de la discusión; esperemos tener eco, por lo menos, con algunas.

Como decíamos, por los contenidos de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la Unidad Popular no votará su pasaje a la discusión particular.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Facello.

SEÑOR FACELLO (Guillermo).- Señor presidente: en representación del Partido de la Gente, conjuntamente con al señor diputado Daniel Peña, anticipamos que no estamos de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas a consideración de esta Cámara.

No podemos ser cómplices del descalabro económico en el que se encuentra el país, en momentos en que el contexto regional tampoco nos trae esperanza de mejoras. A pesar de la insistencia del equipo económico en reducir las vulnerabilidades del déficit fiscal, en junio se afianzaron registros altos desde un punto de vista histórico. Hay que remontarse a 2003, a la salida de la peor crisis financiera de la historia uruguaya, para encontrar dos registros mensuales consecutivos de 4 %. Las autoridades económicas establecieron una meta de déficit fiscal equivalente al 3,3 % del producto bruto para el cierre de este año. El objetivo es reducir el indicador a 2,8 % en 2019 y a 2,5 % en el primer año de la próxima Administración. Sin embargo, irónicamente, están contemplando un aumento del gasto de $ 4.700.000.000, tanto para 2019 como para 2020. De ese total, cerca de $ 3.000.000.000 serán para aumentar el gasto en áreas prioritarias, como la educación, la salud y la seguridad. Los restantes $ 1.700.000.000 son para aumentos del gasto ya comprometido.

Se busca financiar el presupuesto en forma optimista, mediante un aumento en la recaudación impositiva dada por un crecimiento proyectado de la economía y por fondos excedentes volcados por el Banco de la República. Esos supuestos para rubros muy relevantes de las cuentas nacionales -producto bruto interno, consumo, exportaciones- parecen ignorar lo que está sucediendo en Argentina y subestimar el impacto que ello tendrá en nuestro país; en la medida en que el crecimiento sea menor, el déficit fiscal será mayor y la deuda subirá todavía más. Tememos que terminará sucediendo lo mismo que en los años anteriores: la convergencia hacia una situación fiscal razonable no se va a dar. Un déficit fiscal de 2,5 % del producto bruto es una meta razonable porque mantiene la deuda sostenida en el tiempo; sin embargo, se seguirá muy lejos de esa situación fiscal razonable.

Por otro lado, señor presidente, el incumplimiento de las metas fiscales para el período ha dado lugar a un crecimiento de la deuda mayor al proyectado en el presupuesto de 2015. Se esperaba que la deuda externa, sin encajes, pasara de 33,3 % del producto bruto en 2014 a 37,8 % en 2019, pero ya en 2017 estábamos en 41,7 %, y esta situación no es una definición precisa de sostenibilidad.

Tampoco hay que olvidar que en un entorno externo crecientemente adverso, cuyo impacto en el Uruguay se subestima, las proyecciones de la Rendición de Cuentas otra vez son optimistas y volverán a equivocarse en 2018 y 2019, tal como sucedió en cada uno de los tres años anteriores. ¿Por qué deberíamos creer al ministro Astori si en los casi quince años de su gestión al frente de la economía nacional no fue capaz de gestionar el déficit en forma responsable, haciéndolo converger a niveles macroeconómicos menos riesgosos? ¡Ni que hablar de lograr superávit, lo cual, a esta altura, parece un imposible bajo la administración del partido de gobierno! Cuesta entender que el déficit se encuentre en los niveles actuales, siendo que la economía no ha dejado de crecer en los últimos doce años; ¡imagínese lo que sucedería si entráramos en una recesión!

Es muy fácil entender que el gobierno actual, y en especial el anterior, hayan sido muy generosos en el manejo del gasto público, a tal punto que no solo se ha gastado la extraordinaria recaudación de la bonanza económica de la década pasada -lo que no se va a repetir y no es sostenible en el tiempo-, sino

que hizo crecer el gasto por encima de ella para atender los reclamos de la bancada y de ciertos sectores que miran con desdén los equilibrios macroeconómicos. De hecho, señor presidente, al confeccionarse la actual Rendición de Cuentas, algunos sectores pedían al Poder Ejecutivo incumplir la meta fiscal, cuando esta ya está largamente incumplida.

A comienzos del año pasado, el presidente de la República alertó sobre el peligro de perder el grado inversor si la situación fiscal se deterioraba; por aquella época, el déficit estaba alrededor del 3,5 % del producto bruto. Mejora no ha habido, y las circunstancias ya no son tan favorables para nuestra economía. El panorama, señor presidente, no luce alentador por varias razones. La región, como decíamos, está cada vez más complicada y varios analistas ya han corregido a la baja la estimación del crecimiento económico para este año. Eso impactaría en una menor recaudación de impuestos; por otro lado, la carga de intereses de deuda puede seguir incrementándose por el aumento de tasas a nivel global.

Por fortuna, el país aún tiene buen acceso a los mercados internacionales y buenas reservas, pero lo mismo ocurría en 1999. En aquellos años posdevaluación brasileña, Uruguay presentaba un déficit fiscal alto, pero con grado inversor y buen acceso a los mercados financieros; el ajuste se demoró, con las consecuencias conocidas. Por eso es preciso atacar y sin demoras el tema fiscal, que es una vulnerabilidad grande de este país, y hay que hacerlo conteniendo el gasto.

Por lo expuesto, en consonancia con la visión de la política económica de nuestro partido, como dije antes no vamos a votar el proyecto de Rendición de Cuentas a consideración de la Cámara.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado Óscar Groba.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: como han hecho otros legisladores que integran la Comisión -estoy seguro de que el resto de la Cámara concuerda-, saludamos la eficiencia del trabajo de casi cuarenta días de la Secretaría de la Comisión, del Cuerpo Técnico de Taquigrafía, de los ujieres, de los oficiales de sala, del equipo de limpieza, que durante este período de debate de horas y horas, dejaba todo preparado para que al otro día pudiéramos seguir con nuestro trabajo. Por lo tanto, señor presidente, vaya un reconocimiento especial a esos funcionarios, funcionarias y demás personal.

También queremos felicitar a la presidenta de la Comisión, Lilián Galán, que nos ha ofrecido seguridad en los debates y flexibilidad. Además, ha hecho un informe en mayoría que compartimos en su totalidad. En su informe en mayoría habló de la ANEP, del Sistema Nacional de Cuidados, de la Udelar, de ASSE, del Ministerio del Interior, del INAU, del Inisa, del Inciso 21, de la UTEC y de las fiscalías, entre otras cosas.

En este debate, hasta ahora no ha habido absolutamente nada nuevo: la oposición va a votar en contra, como ya sabíamos. Por lo menos desde que estamos en la Cámara, y en especial en esta Comisión -hace ya muchos años-, previo a conocer el articulado, la oposición ya hacía comentarios de rechazo a

la Rendición de Cuentas. Por lo tanto, no hay novedad en este sentido y nosotros no vinimos a convencer a la oposición. ¡Ojalá que lo podamos hacer porque así sería partícipe de los cambios que en solo trece años ha hecho y está haciendo el Frente Amplio! No va a ser así; no vamos a promover ni a hacer de nuevo el esfuerzo -en algún momento lo hicimos- para que nos acompañe.

Tampoco hay ninguna novedad respecto de los análisis catastróficos que la oposición promueve en cada presupuesto nacional y en cada rendición de cuentas; me refiero a efectos catastróficos de todo tipo. Algunos riesgos son compartidos, porque nosotros vivimos en un Uruguay totalmente dependiente, en el capitalismo internacional. Las crisis del capitalismo internacional han sido y son permanentes, incluso ahora. Nuestro pequeño país, inserto en el Cono Sur, con dos gigantes hermanos, como Argentina y Brasil, siempre está expuesto a los vaivenes de las políticas regionales e internacionales, porque es un país dependiente.

Señor presidente, la ciudadanía sabe que cuando Argentina se resfriaba, Uruguay se engripaba; si el que se resfriaba era Brasil, Uruguay se engripaba. En este contexto -compartimos con la oposición algunos de los riesgos que menciona, y nos ocupamos de ello-, los dos países están más que resfriados a la vez. Sin embargo, con las fortalezas y certezas que desde hace trece años viene construyendo el gobierno del Frente Amplio, con su solidez en la política económica y social, aun con la situación de estos dos países de la región, Uruguay crece; ¡crece y distribuye!

Aun en ese contexto internacional muy complicado, muy variable, en el cual no podemos hacer nada, y aun en la situación de estos dos grandes vecinos, que lamentablemente están en crisis, Uruguay sigue creciendo. Aun así, van trece años consecutivos de crecimiento macroeconómico; aun así -vamos a referirnos a lo que para nosotros es la calidad de los presupuestos y las rendiciones de cuentas, y de lo que interpretamos por calidad de los presupuestos nacionales y rendiciones de cuentas-, en ese marco, en trece años, nuestros jubilados, que son trabajadores del ayer, han tenido aumentos consecutivos por encima de la inflación. En el contexto internacional, los salarios de la actividad privada, inclusive los del trabajador rural y la trabajadora doméstica, han crecido durante trece años consecutivos. Sucedió lo mismo con los salarios de la actividad pública, del Estado. Pero también la pequeña y mediana industria, los grandes terratenientes y la producción agropecuaria han crecido y han hecho muy buenos negocios en este período.

Por lo tanto, a pesar de los anuncios de catástrofes que se hacen en forma permanente, año tras año nosotros tenemos esta realidad, construida desde el programa de gobierno del Frente Amplio. Fue construida y apoyada por la ciudadanía que acompañó al Frente Amplio en solo trece años de gobierno, mientras que la oposición gobernó durante el resto del tiempo en que Uruguay es nación. Nuestro país, con las políticas públicas, económicas y sociales hoy tiene esta situación, a pesar de los datos de la región y de la realidad del mundo.

En el año que pasó, la economía uruguaya siguió desacoplándose de la dinámica regional, como acabo de decir, continuando la fase de expansión

económica más larga en la historia del país; son datos de la realidad. Cuando hablo de la calidad de los presupuestos nacionales y de las rendiciones de cuentas, es en comparación con las anteriores. En el informe del Partido Nacional se dice: "Al estudiar la Rendición de Cuentas 2017 entendemos que no podemos hacer solamente un análisis de la gestión del año que se rinde cuentas, sino de todas las instancias presupuestales anteriores" a 2015. Nosotros estamos de acuerdo.

Por eso, cuando intervenimos hacemos un análisis de toda la situación y no solo del año que corresponde, porque es un período histórico en la vida de la nación, ante un proceso económico y social de la región e internacional también histórico. Son fortalezas y certezas que hemos generado con el Frente Amplio; pero también hay que reconocer que en cada una de las rendiciones de cuentas y de los presupuestos nacionales, actores de la oposición han ayudado a mejorar el presupuesto que llega al plenario con propuestas de redacción diferentes y con sistemas legislativos acordes a una buena presentación de este documento.

Es lógico que discutamos con pasión los dos modelos de país diferentes; de eso se trata cada vez que venimos a presentar un presupuesto o una rendición de cuentas. Por eso es natural que la oposición, que ya estuvo en el gobierno, no lo vote, porque su forma histórica de gobernar ha sido totalmente diferente a la que el Frente Amplio promueve.

Las intervenciones anteriores han hecho que cambiemos algunos temas a los que nos íbamos a referir, pero no queremos irnos por las ramas, y sí ofrecer nuestro informe.

Señor presidente: el crecimiento económico se aceleró el año pasado, ubicándose por encima de lo proyectado en la Rendición de Cuentas 2016. Estoy hablando de las catástrofes que se anunciaban y del resultado final. Esto contrasta totalmente con el desempeño de Argentina y Brasil que no han logrado emprender una senda sostenible de crecimiento debido a su significativo y persistente desequilibrio macroeconómico.

Las políticas de diversificación de mercados de exportación, las políticas de atracción de inversiones productivas de nuevos orígenes, así como políticas macroeconómicas prudentes y consistentes que el país ha seguido desde 2005 han contribuido a la economía uruguaya. Sí, señor presidente: ¡hubo que construir todo eso! Hubo que construir confianza nacional, regional e internacional de la plaza financiera desde 2005 hasta ahora para que pudieran llegar inversiones. ¡Hubo que reconstruirlo! Son datos de la realidad. Yo tengo amigos legisladores y amigas legisladoras en los dos partidos políticos que ya gobernaron, y ellos saben que lo digo porque son datos de la realidad y no por alguna aversión especial. Es así.

En cuanto a la política de diversificación del mercado de exportación, hay una larga lista de países con los que construimos mecanismos de exportación ventajosos para Uruguay, que no voy a mencionar, porque hacerlo excedería el tiempo de que dispongo. Son políticas sociales y económicas, presupuestales y de rendiciones de cuentas reales.

El mayor crecimiento de la economía uruguaya vino acompañado de nuevos avances en el plano social, como lo refleja la reducción de la pobreza y de la

mortalidad infantil. Mientras que en 2004 la pobreza era de un 40 % y la indigencia de un 5 %, en 2017 la pobreza descendió a menos de 9 % y la indigencia está en valores que no se pueden medir.

Eso habla de la calidad de los presupuestos nacionales, de la calidad de las rendiciones de cuentas y de la calidad de las políticas sociales que hay que implementar. ¿Por qué? Porque es necesario llegar a la gente. Los presupuestos nacionales, las rendiciones de cuentas y las políticas sociales tienen que llegar a la gente. Cuando digo "gente", me refiero a los más de 2.500.000 uruguayos y uruguayas. ¡A ellos tiene que llegar! Estoy hablando de la diferencia que hay desde 2004 a este período que estamos analizando; son datos de la realidad.

Entonces ¿hubo presupuestos de calidad? ¿Sí o no? ¿Hubo rendiciones de cuentas de calidad? ¿Sí o no? ¿Hay políticas públicas y sociales de calidad? Y bueno, por eso la gente ha seguido votando por este programa. Lo decimos con respeto por los partidos tradicionales, porque sabemos que su convicción es diferente a la nuestra; sabemos que su forma de hacer política es distinta a la nuestra; sabemos que sus propuestas han sido diferentes a las nuestras. Con respecto a esto también hay datos de la realidad.

El Partido Nacional dice que hay que analizar todas las instancias presupuestales anteriores a 2015. Nosotros podemos decir cómo encontramos el país en el año 2005, qué políticas presupuestales, rendiciones de cuentas y políticas sociales se habían aplicado para llegar a la crisis que tuvimos y en la que llegamos al 15 de febrero de 2015.

Decía que Uruguay, con este proyecto de país, con el programa del Frente Amplio y con su equipo económico ha demostrado que hay formas distintas de hacer política y también calidades diferentes. Y cuando digo que eso se hizo en solo trece años es porque ese también es un dato de la realidad.

Cuando agarramos la zaranda y empezamos a moverla para ver qué dejaron los gobiernos del Partido Colorado y del Partido Nacional o de los blanquicolorados -como suelen decir los ciudadanos en todos lados- nos encontramos con lo que acabo de mencionar, que son datos de la realidad; no los invento yo. Como dije, tengo amigos y amigas en los distintos partidos; manejo datos de la realidad desde el punto de vista político, no ubicando a nadie en particular en el debate.

En estos trece años ha habido anuncios de catástrofes y quejas sostenidas por el gasto público social. ¡Y sí!; esa ha sido una de las principales herramientas de distribución que el Frente Amplio ha promovido. Como es natural, ha habido críticas –las hay en el informe del Partido Nacional- relativas a la competitividad. Y se habla con claridad -figura en la versión taquigráfica; no sé si en el informe, porque no estaba acompañando la lectura- del costo laboral. Eso es totalmente coherente con lo que se hizo antes de 2004. Me refiero a que desde los años noventa hasta 2004, para abatir el costo laboral se tomaron determinadas medidas fiscales y se eliminaron los Consejos de Salarios. Eso mejoró el costo laboral para algunos empresarios, pero no solo fundió la industria nacional -hay cementerios y cementerios de fábricas y talleres que quedaron por el camino-, sino que se alcanzó el 40 % de pobreza y casi el 20 % de desocupación.

Entonces, como en el informe del Partido Nacional se sugiere analizar toda la rendición de cuentas, arranquemos en el año 2005, con el país que recibimos, porque recordemos que el país que recibió el Frente Amplio fue muy diferente al que recibió el Partido Nacional en el año 1990, dado que no le llegó con la terrible crisis que sí tuvo que enfrentar el Frente Amplio. Sin embargo, seguimos en el camino de la certidumbre, de la austeridad, de la seriedad, apoyando y promoviendo el gasto público social y los niveles salariales y de jubilaciones y pensiones que permiten que la gente viva mejor. Esos son los presupuestos y rendiciones de cuentas de calidad que yo mencionaba. ¿Vive la gente mejor o no? Sí, vive mejor.

Esos también son datos de la realidad. No estoy elaborando una teoría sobre lo que el Frente Amplio va a hacer o acerca de lo que los legisladores vamos a aprobar o a analizar. No estoy teorizando. Estoy haciendo un análisis, tal como sugirió el Partido Nacional en su informe, desde el año 2005 hasta ahora, pero arrancando un poquitito más atrás, una *gañotita* hacia atrás, porque lo que recibimos, después de haber pasado la zaranda, es un país con muchas complicaciones. Solo han pasado trece años y vamos a seguir mejorando esta situación.

¿Riesgos? ¡Claro que los hay! Compartimos con la oposición que hay una cantidad de riesgos porque, como dije al inicio, este es un país totalmente dependiente en la región y también a nivel internacional. Estamos en ese vaivén en el que Uruguay -no digo de milagro, porque hay todo un programa detrás- se viene sosteniendo; a pesar de la crisis que lamentablemente se vive en otros lugares, nuestro país sigue creciendo. Hay datos al respecto.

¿Que no alcanza el presupuesto para todo lo que queremos hacer? Puedo asegurar que cuando recibimos delegaciones me encuentro entre los primeros en reconocer que todos tienen razón y que a todos hay que ofrecerles más. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Incrementamos el déficit fiscal, como se hizo en alguna oportunidad? ¿Nos endeudamos más con el Fondo Monetario Internacional, como se hizo históricamente? Inclusive, ya que hablamos del Partido Nacional, fue en el año 1958 cuando se firmó la primera carta intención con el Fondo Monetario Internacional, sin que hubiera necesidad de hacerlo. Hasta hoy, todos los partidos que estuvieron en el gobierno, quedaron presos de eso.

No creemos que haya que endeudarse más, salvo que ocurra una catástrofe o una crisis y sea fundamental para la gente, para los 2.500.000 -o más- de personas. Tampoco creemos que debamos aumentar más el déficit fiscal.

Por eso este es un presupuesto acotado, maduro, con planificación, que no golpea ningún aspecto ya conquistado del gasto público social, que no golpea a jubilados y trabajadores, como en el año 1990, cuando se hizo aquel ajuste fiscal -fiscalazo- en el que a partir de los tres salarios mínimos nacionales, todo lo que caminaba iba a parar al asador. Ese no es nuestro modelo; no lo es.

Por lo tanto, con este modelo seguimos funcionando. Por eso digo que no hay nada nuevo en este debate.

Claro, la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal de los países vecinos ha vuelto a amenazar la incipiente recuperación de sus economías. En el contexto

que estoy relatando, en especial para una economía pequeña y abierta como la de nuestro pequeño país -estamos en Uruguay con este contexto en el Cono Sur y con 3.500.000 de habitantes-, dependiente de la grave crisis del capitalismo económico y social en la región y en el mundo, Uruguay se despega de los vecinos gigantes y crece en todo sentido, económico y social, y es motivo de atención positiva en la región y el mundo.

Entre la cantidad de material que uno puede encontrar, cuento con un ejemplar de un periódico del 21 de diciembre de 2017, que en su sección de economía publica: "Un informe de la Cepal que fue dado a conocer ayer mostró, entre otros, que Uruguay es el país de América Latina y el Caribe con los mejores resultados tanto a nivel de pobreza como de desigualdad […]". Este no es, precisamente, un periódico que impulse el modelo de política económica y social que estamos relatando, ni los presupuestos nacionales y las rendiciones de cuentas, pero esta noticia aparece a página entera. ¿Por qué? Porque son datos de la realidad. Pero en los debates dicen que hay crisis, que hay una especie de desastre o que va a suceder algo. Supongo que los compañeros diputados que ocupan bancas desde 2005 también habrán tenido que polemizar sobre este tema desde ese entonces hasta ahora. Hace siete u ocho años que integro el Parlamento y lo he vivido. Primero me asustaba. Uno tiene que tener mucho respeto por quienes han gobernado durante tantos años el Uruguay; muchísimo respeto. Pero cuando se usó la zaranda en 2004, quedó el resultado que dije hace un momento.

El informe de la Cepal expresa: "En este terreno, Uruguay fue el país que presentó los mejores números: 9,4 % de la población era pobre […]" -nos sigue preocupando cuando llegamos a una pobreza del 40 %- "En el extremo opuesto […]", habla de Honduras con el 65 %, pero no lo voy a leer. El informe continúa: "Si se mira qué pasó con la extrema pobreza, en tanto, Uruguay también fue el mejor del barrio […]". Si se analiza qué pasó con la pobreza extrema, Uruguay también fue el mejor del barrio. Este informe no lo hicimos nosotros -aunque disponemos de muchos más, y seguramente más profundos-; es de la Cepal, del período anterior. Además, habla de la desigualdad y del índice de Gini.

Estamos analizando, con datos de la realidad, lo que se viene a anunciar, año tras año, respecto a la supuesta crisis, a los niveles de vida de la mayoría de la gente, a la calidad de nuestros presupuestos nacionales y rendiciones de cuentas, y a las políticas públicas. Para llegar a estos resultados, se requieren políticas públicas. En los años noventa se creció mucho, pero aumentó la desocupación y cayeron los salarios. Recién al final se recuperaron algo los salarios, pero no había políticas públicas desarrolladas, de distribución, como ahora.

Por eso, no tenemos nada que ver con las políticas neoliberales. ¡Absolutamente nada que ver con las políticas neoliberales! El Frente Amplio es un partido progresista, de izquierda, y está alejado en su totalidad de la política neoliberal que tuvo el país hasta 2004. ¿Qué tiene que ver nuestro programa, el proyecto del Frente Amplio, con las políticas neoliberales? Tenemos Consejos de Salarios, negociación colectiva, fuero sindical; hay más de cincuenta leyes laborales que no había antes de 2004. ¿Qué tiene que ver? Sé que hay un sector de la oposición -no me refiero a toda la oposición, sino a los partidos que

estuvieron en el gobierno- que es la retaguardia de los modelos neoliberales. Además, lo vemos hacer declaraciones públicas todos los días; en realidad, lo ve la gente.

Seguimos trabajando, construyendo, creciendo, con austeridad y responsabilidad para que a la gente le lleguen los cambios que estamos promoviendo.

En cuanto a la economía nacional, hubo un crecimiento económico en 2017 y en el primer trimestre de 2018, impulsado principalmente por el consumo privado. ¿Saben cuántas veces en aquellas épocas decíamos que había que dar aumentos a los trabajadores y a las trabajadoras, porque el mercado interno uruguayo era muy valioso y no podían consumir? Y cerraron boliches, restoranes, y se produjo la crisis de los pequeños y medianos productores del campo.

Esto también es producto de políticas sociales y económicas impulsadas por nuestro Gobierno, principalmente por el consumo privado, basado en el incremento real de los salarios, en los ingresos de los hogares, y en las exportaciones. Se mencionó que hay dificultades para exportar porque Uruguay no es competitivo. Sin embargo, las exportaciones siguen saliendo: algunas, más; otras, menos. La agropecuaria -conozco poco, pero he aprendido y estudiado, y escucho a todos con mucha atención- conlleva producción a cielo abierto. Y está el problema del clima: un día le va bien a uno; otro día le va bien a otro. Esos son los vaivenes del tema. Quienes trabajan en esa área saben los riesgos que corren. Ese impulso también se debió a las exportaciones producidas por la demanda externa: una buena temporada turística, así como una buena cosecha de soja, en 2017.

Tenemos problemas con el empleo. En algunos casos, el tema se ha manejado muy seriamente. Más allá del crecimiento, quiero decir que hace unos días el Instituto Nacional de Estadística, que publicó el dato de desempleo correspondiente a junio estableciendo que -obviamente, transcurrió sin grandes anuncios- la tasa se ubicó en un 7,9 %, lo que reafirma -dice el Instituto- la tendencia a la baja que se viene observando los últimos cinco meses.

¿Esto es la panacea? ¿Nos quedan cosas por hacer? Queda mucho por hacer. Por eso el cambio; por eso hay que seguir cambiando. Precisamente, para seguir cambiando es que promovemos este tipo de presentaciones en la rendición de cuentas y en los presupuestos nacionales que proporcionan políticas de calidad a la inmensa mayoría de la gente, con datos de la realidad.

——Ya termino, señor presidente.

Esto no quiere decir que no queden temas pendientes ni que en estos trece años todos los problemas hayan sido solucionados. De ninguna manera. Sabemos que tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo duro, en muchos aspectos en los que el país se juega el futuro, como en educación, en infraestructura o en otros que preocupan legítimamente a los uruguayos, como la seguridad. Hablaremos de la seguridad y de los períodos anteriores.

Creemos que las instancias en las que se debaten estos temas constituyen la verdadera discusión política, ideológica, económica y social de dos modelos de país. Todos sabemos que el mundo capitalista está en crisis y también la

región. ¿Uruguay está en crisis? No. ¿Uruguay creció en 2017? Sí. ¿Se redujo la indigencia? Sí, a tal punto que no se puede medir. ¿Se sigue reduciendo la pobreza? Sí. El salario mínimo nacional, que en otros períodos se usaba para mantener las jubilaciones bajas, ¿siguió creciendo en 2017? Sí. Por lo tanto, ¿también crecieron las jubilaciones? Sí.

Queda mucho por hacer. Esta es una gran Rendición de Cuentas, austera, acorde con el país, que no toca el gasto público social e impulsa las medidas que se pueden impulsar como país dependiente. Nosotros vamos a votarla afirmativamente, con mucha vocación, porque ha permitido un trabajo de calidad.

Gracias, señor presidente.

14.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Gustavo Penadés.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: como es de estilo, inicio mi intervención agradeciendo el trabajo al que ya nos tienen acostumbrados los funcionarios de la Cámara de Representantes al momento del análisis de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Asimismo, extiendo mis felicitaciones a la señora diputada Lilián Galán, por cómo llevó adelante la Presidencia.

Señor presidente, estamos ante una Rendición de Cuentas muy particular, y lo es por varios motivos. El primero es que se trata de la última Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Gobierno que encabeza el doctor Tabaré Vázquez. Es particular también porque está finalizando el tercer mandato consecutivo de gobierno del Frente Amplio con mayoría absoluta en las Cámaras, legítimamente obtenida. Por último, es particular porque se trata de la peor rendición de cuentas que ha tenido que tratar este Parlamento desde la crisis del año 2002, que se encuadra en la finalización de un ciclo.

Se habló de lo que pasaba antes, cuando lo primero que habría que haber reconocido es que se presentó la peor rendición de cuentas, en materia de déficit fiscal, que el Uruguay ha tenido en los últimos quince años. Esa sumatoria de terminaciones -ojalá con las elecciones del próximo año culmine esta política- demuestra que, en todo el período reciente de la historia en que se produjo el mayor crecimiento económico del país -el producto bruto interno se incrementó casi un 70 % con relación al año 2004-, ha habido problemas muy graves en cuanto a la administración de los recursos, de los fondos.

Nuestro país creció desde el punto de vista económico y vio crecer su producto bruto interno. En algunos momentos, los guarismos de crecimiento fueron históricos, pero luego se inició un proceso de enlentecimiento.

La finalización de este mandato de gobierno tiene dos características muy particulares: la equivocación sistemática en todos los pronósticos del equipo económico -se equivocaron en todos los datos; lamentablemente, se equivocaron en todos los datos, ¡y para peor!- y la no concreción de los resultados que fueron fijados como prioridades al inicio de la gestión.

Yo diría que tampoco se concretarán los compromisos electorales que se asumieron en la última campaña electoral, porque los datos de la realidad lo están demostrando. Para muestra bastan dos botones: el primero, el tan mentado 6 % del producto bruto interno para la educación; el segundo, una mejora sustancial en las políticas de seguridad pública, que redujeran las rapiñas en un 30 %. Este año Uruguay alcanzará niveles históricos en materia de inseguridad pública, como los que no se recuerda en su historia.

Ese fue el contexto de crecimiento económico que se vivió hasta hace poco. Quienes hace muchos años ocupamos bancas en el Parlamento, advertimos la ductilidad, la facilidad con la que se cambia de argumentación: cuando se crecía, no era como consecuencia del mundo exterior, sino de las bondades y de la inteligencia de la conducción de la política económica nacional; cuando el viento se puso en la puerta, abandonaron ese argumento y empezaron a decir: "¿Cómo no quieren que nos vaya como nos va, si el contexto internacional se encuentra en la situación en la que se encuentra?", cosa que es parcialmente cierta. Estos guarismos no son peores porque tuvimos una excelente temporada turística gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de la República Argentina. Esas medidas permitieron que en Uruguay hubiera una explosión del turismo, lo que llevó a que el déficit no fuera mayor debido a la recaudación que hubo.

También el Gobierno de Brasil adoptó medidas que permitieron que ese país volviera a encontrarse entre los principales mercados para nuestros productos. Por supuesto, estas dos medidas se tomaron en esas dos naciones durante gobiernos que ideológicamente no son afines a los del Frente Amplio.

Abro un paréntesis para recordar que las relaciones diplomáticas entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina nunca fueron peores que cuando hubo un gobierno pseudoprogresista en el país vecino, con las consabidas consecuencias para el nuestro. Algo parecido sucedió con la República Federativa de Brasil.

Ahora bien, en el contexto actual empezamos a ver una serie de aspectos que van echando por tierra la argumentación que se ha hecho sobre la Rendición de Cuentas que está a consideración, que es deficitaria. No es verdad que esta Rendición de Cuentas es responsable. ¡No! ¡No! ¡Es tremendamente deficitaria! Se intenta que sea menos deficitaria que las anteriores, pero es deficitaria. Entonces, también como argumentación para quienes manejaban algunas cifras absolutamente antojadizas y equivocadas acerca de la realidad, comparando aspectos del pasado con otros del presente, diré que vale solo un dato para demostrar la delicada situación en la que nos encontramos: el actual déficit fiscal es mayor que el que hubo durante la crisis económica del año 2002, en un contexto que, por suerte -nadie quiere que en nuestro país se vuelva a repetir la zozobra que se vivió en aquella época-, es distinto. ¡El déficit fiscal actual es mayor al que hubo en 2002!

Lo sorprendente es que el producto bruto interno del Uruguay en 2004 era de US$ 15.000.000.000 y, en la actualidad, es de US$ 59.000.000.000. Luego de ese crecimiento exponencial no se tomaron medidas que nos permitieran realizar cambios profundos, estructurales, en la realidad del manejo económico-financiero del país. Luego del crecimiento del producto bruto, hoy tenemos un

déficit fiscal histórico y un endeudamiento ubicado en casi el 60 % de la deuda interna bruta y en el 42 % de la deuda externa neta. O sea que ha habido una política sistemática de endeudamiento, acompañada por un déficit fiscal sostenido. Podemos decir que a raíz de los gobiernos del Frente Amplio el endeudamiento ronda los US$ 13.000.000.000. A esto debemos sumar el crecimiento del endeudamiento externo y -este dato no es nada menor- el sistemático aumento de la presión fiscal sobre la población. Como decía, esto hizo que el país creciera en aproximadamente un 70 % del producto bruto interno y que la presión fiscal aumentara un 117 % del producto bruto interno. Es decir que durante todos estos años, fue mayor el aumento de los impuestos que el incremento del producto bruto interno de nuestro país, lo que ha sido financiado, esencialmente, con el dinero de nuestros compatriotas. Durante dos períodos -en 2007 con la reforma tributaria y en 2016 con el ajuste fiscal que se volvió a sufrir-, el crecimiento de la presión fiscal sobre la población ha sido exponencial. Además, hubo un sistemático aumento de las tarifas públicas a efectos de financiar el presupuesto nacional.

No se debería poner de manifiesto las consecuencias de esta situación con alegría, como si se hubiesen aprovechado para llevar adelante cambios estructurales. Lo digo porque durante esta última gestión de gobierno -lo vemos con esta Rendición de Cuentas— el único aspecto al que está atado y que puede ser considerado clave en el cambio de la matriz productiva, industrial, social y de infraestructura del país es que una empresa multinacional de producción de celulosa haya decidido instalar en Uruguay su segunda fábrica. Más allá de eso no hay un solo dato en tal sentido, y lo cierto es que el decrecimiento económico y el desbarajuste fiscal de estos últimos años repercutirán en la población.

Otro de los datos significativos que se advierte en el trámite de la Rendición de Cuentas es el rezago en la ejecución presupuestal de las inversiones. A pocos meses del comienzo de la campaña electoral y del cambio de gobierno, en algunas áreas no se ha superado el 40 % de la ejecución presupuestal. A esto también debemos sumar que desde 2006 a la fecha el Gobierno ha tenido que elevar en forma sistemática los topes de endeudamiento, precisamente, para poder seguir endeudándose.

En esta Rendición de Cuentas, la última del período de gobierno, figura otra autorización para endeudarse por US$ 198.000.000 y, en el año 2020, por US$ 66.000.000. Desde el año 2006 esta es la sexta modificación que se realiza para elevar el tope de endeudamiento. En algún momento, ante la insistencia del Partido Nacional de establecer una regla fiscal, se pretendió explicarnos que la deuda fiscal consistía, precisamente, en los topes de endeudamiento. Pero bien podían funcionar como regla fiscal los topes de endeudamiento, de modo que cuando necesitábamos más plata, se elevaba sistemáticamente ese tope. Así es como en los últimos años se ha modificado seis veces el tope de endeudamiento.

Señor presidente, los efectos de la consolidación fiscal que Uruguay ha llevado adelante como un elemento más de esta suma de desaciertos ha determinado un aumento permanente de la presión tributaria sobre la población, en particular, sobre los trabajadores. En 2017, la cifra de recaudación por concepto de IRPF y IASS llegó a US$ 2.130.000.000. En 2006 o

2007, cuando en el Uruguay se presentó la reforma tributaria, el ministro de Economía y Finanzas anunció que se pensaba recaudar alrededor de US$ 300.000.000 o US$ 350.000.000. ¡Estamos en US$ 2.130.000.000 de recaudación!

En este contexto, que es delicado y que compromete mucho la viabilidad económico-financiera del país, lo que el Gobierno está haciendo con esta Rendición de Cuentas es, como se dice popularmente, atar con alambre el presupuesto y el Estado, para ver si llega a la próxima campaña electoral. ¡Quiero ver con qué se va a encontrar el próximo gobierno cuando desate ese paquete y tenga que elaborar el presupuesto quinquenal! Aclaro que esto será válido cualquiera sea el gobierno de turno, ya sea nuevamente del Frente Amplio o de alguno de los partidos de la oposición.

Lo cierto es que se advierte fragilidad en la presentación de los objetivos: lo que se busca con esta Rendición de Cuentas es llegar sin mayores sobresaltos a la próxima campaña electoral y al cambio de gobierno en 2020. Si no es así, no se entiende cómo se puede presentar una rendición de cuentas con las características de la que estamos analizando, que prontamente será votada por la mayoría del Parlamento.

Como decía, el contexto en el nos encontramos es tremendamente difícil. La economía del país está en una situación que podemos tildar de "delicada", para no ser tremendistas. A fin de dar una idea al respecto, podemos decir que este año ya se presentaron a concurso más de ciento veintidós empresas. El cierre sistemático de empresas emblemáticas también marca una coyuntura realmente delicada.

En este escenario, lo único que no hemos visto es una decisión del Gobierno de ajustar las cuentas. Sistemáticamente, se ha intentado buscar una solución aumentando la presión fiscal y no ajustando las cuentas públicas.

Además, se pretende realizar una serie de reajustes a través de los artículos de esta Rendición de Cuentas, algunos de los cuales no vienen costeados. Voy a dar algunos ejemplos: el artículo 122, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el artículo 12, de Presidencia de la República; el artículo 148, del Ministerio de Turismo; el artículo 150, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estos artículos autorizan transposición de créditos y refieren a nuevos proyectos que se financiarán con créditos presupuestales; inclusive, en algunos de ellos se hace mención a que determinados excedentes de arrendamientos podrán transferirse a gastos de funcionamiento.

También se crean programas. Por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se crea el Programa Nacional de Promoción de la Conciencia Agropecuaria, pero nadie dice cuánto saldrá ni cómo se financiará.

A mi entender, la responsabilidad fiscal tendría que habernos llevado a otros resultados. Estamos enfrentando una difícil situación, por lo que las finanzas y el presupuesto deberían manejarse con más responsabilidad. Calculo que no es muy difícil de explicar y, menos, de entender, que si el país crecía a una tasa que ya no crece y gastaba un dinero que ya no tiene, tendría que haber habido una operación de realismo en el manejo de los fondos públicos que, por lo menos, no agravara la situación en la que nos encontramos. Y la constatación más clara de que ya no hay nada para rascar en el fondo de la olla

es la reasignación de recursos que hace la bancada de gobierno. En rendiciones de cuentas anteriores fueron cientos de millones de dólares los que se reasignaron; en esta lograron reasignar nada más que US$ 10.000.000, constatación de la delicada y la precaria situación presupuestal que Uruguay enfrenta.

Cuando escucho argumentaciones como: "Bueno; pero en Argentina y Brasil se está peor", recuerdo aquel dicho: "Mal de muchos, consuelo de bobos". Esto es: como hay otros que están peor, nosotros no estamos tan mal. Vamos a ver si somos conscientes de que las posibilidades de salida de unos y de otros son distintas, entre otras cosas, producto de los tamaños y de las oportunidades.

En ese sentido, señor presidente, en esta Rendición de Cuentas uno advierte, permanentemente, que el Gobierno no se da cuenta, no termina de asumir la situación en la que ha colocado al país, ante la que se deberían haber tomado medidas de austeridad fiscal y en los gastos de funcionamiento. Y que conste que nadie está hablando de los gastos sociales, porque lo primero que nos van a decir es: "Ahí están los de siempre, que quieren cortar los gastos sociales". No, no; que no se malinterprete. Y ante las afirmaciones realizadas hace pocos días por el ex presidente de la República, José Mujica, de que las políticas sociales han fracasado, y por el presidente del Frente Amplio reconociendo lo mismo, aprovecho a decir: "A confesión de parte, relevo de pruebas". Nosotros no tenemos que agregar nada más a esos datos. Sí nos preocupa lo que se dicho en sala en cuanto a que algunos de los recortes no van a afectar las políticas sociales.

Recomiendo que tomen conocimiento del recorte que se ha hecho al plan de alimentación del Mides. Vean cómo se está aplicando hoy dicho recorte, que no debería estar haciéndose en ese ministerio.

Esta es una situación en la que únicamente nos debería llamar la prudencia; tendríamos que darnos cuenta de que el Gobierno debería asumir con otro criterio la situación que hoy se está viviendo. Es más: me sorprendió mucho, que después de catorce años de gestión de un mismo partido, el ministro de Economía y Finanzas nos haya venido a hablar en esta, su última rendición de cuentas, de la calidad del gasto, porque si algo ha quedado demostrado en todos estos años -creo que esta constatación no se puede levantar- es que gastar más no es sinónimo de gastar mejor; no es sinónimo de que la población objetivo se vea beneficiada; no es sinónimo de que se hayan obtenido los resultados que se buscaba. Y en eso, simplemente, debemos centrar algunos datos, que sería bueno analizar de manera desapasionada.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado tiene de presupuesto US$ 2.000.000.000 anuales, y un 17 % menos de usuarios. ¿Podemos afirmar que la calidad del servicio de salud que recibe la población objetivo es la correcta? ¿Podemos afirmar que los recursos de todos los uruguayos destinados a la administración de la salud, especialmente de la salud pública, ha sido acertada? En pocos días más conoceremos los resultados de una comisión investigadora que, desde ya, nos adelantamos a señalar que no va a decir eso.

En cuanto a la inversión en educación, nadie pone en tela de juicio la mejora de los salarios de los docentes, pero si vamos a la ecuación tan sencilla

de mayor presupuesto, menor matrícula de población objetivo a atender, ¿cómo los guarismos pueden ser tan malos? Hay más plata, pero se atiende menos cantidad de población, y los resultados demuestran que Uruguay es el peor país en Latinoamérica -ya que les encanta hablar de América Latina- en cuanto a la cantidad de estudiantes que egresan del bachillerato.

Y ya que les gusta hablar de Latinoamérica, también debemos decir que Uruguay es el país con la más alta deuda externa *per cápita*.

Nosotros votamos la creación del Mides y, sistemáticamente, le hemos aprobado los recursos. Uno de los datos más significativos -aprovecho a decirlo en este momento, porque me causó mucha alegría, y va bastante en contra del espíritu progresista del que recién se hacía gala- lo dio el director del Sistema Nacional de Cuidados, y me pareció de lo más importante en esta rendición de cuentas porque es un cambio de mentalidad. Nos informaba que el Mides está pagando un *voucher* educativo a los chicos que deben ir a instituciones preescolares porque no tienen cerca instituciones públicas. Ese me pareció uno de los cambios mentales -de los tantos que hemos visto, porque: "como te digo una cosa, te digo la otra"-, más simpáticos de esta Rendición de Cuentas.

El director del Sistema Nacional de Cuidados -integrante del Partido Socialista y hombre que goza de nuestra simpatía personal, un caballero- hace unos días nos informaba que el gobierno del Frente Amplio avanzó en la creación de los *vouchers* educativos que se pagan en la educación inicial. Esa decisión del Ministerio de Desarrollo Social me pareció muy importante. Para quienes se opusieron a cal y canto y criticaron a esas medidas, a pesar de que Tabaré Vázquez en algún momento las había mencionado, es un adelanto que hoy el Mides -miren dónde- haya permitido privatizar recursos en pos del sistema educativo privado. Reitero que me pareció una medida muy inteligente porque, en definitiva, busca el bienestar de los gurises que no tenían la posibilidad de ingresar a una guardería pública en su zona de residencia.

Pero si esta medida va acompañada de otra cantidad de privatizaciones que se han vivido en estos quince años, la verdad... Empezamos por una de ellas; creo que son datos que vale la pena plantear en el tiempo que me resta: la privatización del Estado, la huída en masa hacia el derecho privado como elemento central en la relación del Estado, la no financiación y, por qué no, hasta el castigo a organismos de control.

El Tribunal de Cuentas se presentó a esta Rendición de Cuentas a informar que está al borde del colapso, de no poder cumplir con el mandato constitucional que se le asigna, y ante esa realidad, nadie se ha conmovido.

Es conocido que hay un permanente ingreso de funcionarios públicos a la Administración central, pero gracias a una medida que propusimos nosotros el año pasado en cuanto a que la Oficina Nacional del Servicio Civil relevara las empresas paraestatales, se conoció que en estas hay más de seis mil novecientas relaciones contractuales. Y en el contexto al que hago referencia -todo parece indicar, lamentablemente, que se acabó lo que se daba y que hay que empezar a ajustarse el cinturón-, lo que hace el Gobierno es tomar conciencia solo parcialmente. La toma cuando hay que apretarle el cinturón a la población, a través del aumento de las tarifas, de los impuestos. Y no la toma cuando hay que apretar el cinturón al Estado. Ahí, no; ahí, dale nomás; echá

hasta que se derrame. Me parece que esa es una de las características más criticables.

Termino mi exposición reflexionando acerca de algo que ya planteé en algún momento. El Parlamento debería pensar para el próximo período de gobierno en la creación de una unidad que permitiera monitorear y estudiar la calidad del gasto de lo que votamos.

Hace unos días se presentó el INAU y nos enteramos de que el 80 % de la población objetivo de este instituto es atendido por instituciones privadas. Entonces, me gustaría saber qué porcentaje del presupuesto se llevan esas instituciones.

El otro dato que nos interpela, que no tiene que ver con la rendición de cuentas, pero sí con el manejo de un gobierno, refiere a que hay más de trescientos niños en condiciones de ser adoptados, pero eso no ocurre. En ese sentido, vemos con simpatía una reestructura de esa institución a efectos de agilizar los procesos de adopción de niños y niñas por familias que hoy, lamentablemente, están en el limbo, y no es lo mejor para un país como el nuestro, con sus desafíos.

Por lo tanto, no vamos a votar esta rendición de cuentas. Queremos dejar de manifiesto que hacemos nuestro y compartimos en su totalidad el informe que en nombre de la bancada del Partido Nacional ha realizado el señor representante Omar Lafluf.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado Germán Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: del mismo modo que los compañeros integrantes de la Comisión que me precedieron en el uso de la palabra, deseo agradecer, fundamentalmente, a los secretarios, a la Presidencia y a los colegas por el buen clima en el cual se trabajó durante las últimas semanas.

Compartimos ciento por ciento lo que ha manifestado el señor diputado Conrado Rodríguez, que en el día de hoy es miembro informante por el Partido Colorado. Además, no vamos a votar esta Rendición de Cuentas porque entendemos que no contiene medidas de austeridad ni de contención del gasto pero que sí crea nuevos cargos de particular confianza. Básicamente, en el articulado se sigue dando a las principales jerarquías del Poder Ejecutivo la posibilidad de continuar, discrecionalmente, aumentando las partidas a sus colaboradores.

Hemos avanzado en la discusión de esta Rendición de Cuentas, y los partidos han informado en un sentido y en otro acerca de su contenido y de la visión de país de cada uno. Quedó claro que tenemos diferencias notorias. A nuestro juicio, felizmente, no son diferencias tan notorias que no podamos compartir con la gente. Son diferencias notorias para quienes realmente se abstraen de la realidad y quieren plantear en el plenario de esta Cámara una realidad que no existe; una realidad que a todos nos encantaría que existiera, pero que evidentemente no es la de todos los seres terrenales que vivimos y

compartimos diariamente la problemática, desde la capital del país hasta el interior profundo.

Hay un problema de muy mala gestión. No podemos hablar de que no hubo recursos, porque ¡vaya si los hubo! Además, el *boom* de los productos, de los *commodities,* de los precios de las materias primas que el Uruguay produce, ha hecho que el país viviera una de las décadas más extraordinarias. El miembro informante en minoría que me antecedió en el uso de la palabra manifestó que, luego de todo el proceso vivido, existe prácticamente el mismo déficit fiscal que en el año 2005, a la salida de la peor de las crisis que arrasó al Uruguay y a la región de la que tengamos memoria.

Esto me lleva a reafirmar el concepto que manifesté al inicio de mi palabras intervención ¿Estamos ante un problema de recursos? Claramente, no. Los ingresos del presupuesto se multiplican varias veces con respecto al de principios de 2000, pero tenemos el mismo resultado deficitario. Estamos ante un grave y serio problema de gestión; se hizo una muy mala gestión. Se gastó muchísimo en todas las áreas del Estado; se gastó muchísimo en seguridad y en educación; sin embargo, tenemos el peor resultado que registre la historia del Uruguay en la aplicación de estas dos políticas públicas. Poco se ha concretado en materia de infraestructura vial a pesar del aumento de las divisas que ingresaron a las arcas del Estado. Cuando en el plenario se habló de los modelos liberales, neoliberales, progresistas, quiero recordar que en el pasado período de Gobierno, el del expresidente Mujica, en la misma Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, que integro, se anunció la creación de las PPP con bombos y platillos. No creo que la participación de los proyectos público-privado en la gestión del Estado y en la concreción de estas obras provengan de ninguna política comunista. Desde el Gobierno se anunció la aplicación de los proyectos de PPP como la panacea, lo que salvaría la inversión en el Uruguay. Hoy, siete u ocho años después, cuando pasamos raya y analizamos qué nos han dejado las PPP, advertimos que han sido el fracaso más absoluto y rotundo. Las jerarquías del Gobierno anunciaban uno o dos tibios y tímidos proyectos que inyectarían miles de millones de dólares, fundamentalmente, al trabajo, a las posibilidades laborales que a partir de la aplicación de estas políticas se iban a generar.

Seguimos pagando y viendo diariamente en los resultados fiscales los impactos en la economía, producto del despilfarro en Ancap, en Pluna, en ALUR, en el Fondes. Por algo, a pesar del ingreso de divisas al Uruguay tenemos este déficit fiscal. Seguimos pagando todos los resultados negativos y las pésimas gestiones de esas políticas a través de la continua alza de las tarifas públicas y del aumento de los impuestos. Eso ha sido una constante. Si algo ha caracterizado al Gobierno del Frente Amplio ha sido la creación de nuevos impuestos desde que asumió y su aumento paulatino. El más fiel reflejo es el IRPF -el impuesto al trabajo- y un ajuste fiscal encubierto, sostenido y paulatino a través del aumento significativo de las tarifas públicas, por encima de lo que han sido los costos promedio del Estado en los diferentes ciclos de la economía.

Estos ajustes al alza han afectado notoriamente el clima de inversiones, y ello prueba lo que aquí se ha querido desconocer. Me parece que faltan respuestas de los actores de Gobierno a determinadas situaciones que intentan disimular una y otra vez, haciendo un relato que está muy lejos de la realidad.

Ha habido una pérdida del orden de cincuenta mil puestos de trabajo en los últimos dos años y medio, fundamentalmente, radicados en el interior del país. No hay respuestas en los informes y en las exposiciones de los representantes del partido de gobierno a estos miles de uruguayos que hoy la están pasando muy mal, ya que se les ha complicado el panorama de manera angustiante. El Gobierno insiste, una y otra vez, en sostener un relato que lo hace indiferente o no lo deja ver la realidad. No se da respuestas y, ni siquiera se quiere identificar los problemas y, mucho menos, proponer soluciones para salir de esa situación.

La exportación de bienes y servicios, incluido el turismo, ha pasado de 27,7 % en el período 2005-2013, a 21,4 % en 2016, y 21,6 % en 2017. Esto habla a las claras de que estamos frente a una caída del resultado de las políticas económicas, lo que explica la pérdida de inversión y de fuentes de trabajo.

La formación bruta de capital e inversión cae en términos reales en los últimos tres años; este es un dato innegable. En el año 2007 la caída se acelera en un 13,8 % y esto pasa cuando un país ha dejado de ser competitivo, cuando cae la inversión, cuando cae el empleo porque las condiciones de la economía no están dadas, están condicionadas, fundamentalmente, por costos de producción y por dos factores que destaco. Uno de ellos es el combustible. El Frente Amplio ostenta el récord de ser el campeón de toda América en materia de carestía de combustibles; Uruguay sigue liderando ese *ranking*. Si analizamos los precios de los combustibles en la región, el litro de la nafta en el Uruguay cuesta US$ 1,75; en Chile US$ 1,25; en Brasil US$ 1,30, y en Argentina US$ 1,33. Por lejos, nuestro gasoil también es el más caro, porque prácticamente vale el doble que en Chile y en Brasil: en Chile cuesta US$ 0,85 el litro y en Brasil US$ 1.

Los gobiernos del Frente Amplio han generado un enorme sobreprecio con respecto a la paridad de importación; han cobrado un enorme sobreprecio para tapar y financiar el déficit de la pésima gestión de Ancap. Solo hay que recordar que en el año 2016 los uruguayos pagamos US$ 442.000.000 por encima de la paramétrica en materia de combustibles y que en 2017 pagamos del orden de US$ 400.000.000 más de lo que correspondía, lo que podría haber representado un ahorro sustancial que hubiera sido un factor de enorme motivación para la reactivación, para bajar los costos, para crear mejores condiciones que se tradujeran en la generación de fuentes de trabajo o, por lo menos, para haber detenido la abrupta pérdida de cincuenta mil de fuentes de trabajo durante los últimos años.

Un sobreprecio tan alto de un insumo de uso generalizado en toda la cadena productiva compromete la competitividad de la producción nacional y lógicamente -más allá de que se tenga o no vehículo-, encarece la canasta familiar básica de todos los uruguayos.

Una parte muy importante de estos sobreprecios la están pagando todos los uruguayos; estamos hablando de US$ 100.000.000 derivados del sobrecosto generado por la mezcla de biocombustibles en ALUR. También es un dato relevante, que no puede estar ajeno al análisis serio y responsable de los números, motivo por el cual llegamos a este sideral déficit fiscal que nos está presentando el Gobierno en esta sesión.

Entre 2005 y 2014, la División Pórtland de Ancap genera pérdidas por US$ 164.000.000. En los ejercicios 2015 y 2016 la situación empeoró más aún, llegando a la pérdida de US$ 232.000.000 en 2015 y de US$ 149.000.000 en 2016. Una vez más, la promesa de invertir para mejorar los resultados termina siendo una utopía carísima y caprichosa que pagan sideralmente todas las familias del Uruguay.

Si analizamos los costos de la energía, también el Frente Amplio se lleva un nuevo récord *guinness*. Somos los campeones de América en cuanto a costos de energía, tanto en lo referente a la energía industrial, que es el principal insumo a la hora de producir fuentes de trabajo, como a la energía doméstica, que paga cada uruguayo y cada uruguaya a lo largo y ancho del territorio nacional.

Analicemos el incumplimiento de otra promesa electoral. Ya se ha mencionado en esta sesión que luego de catorce años de gestión del Frente Amplio a la cabeza del gobierno, no se ha cumplido con el compromiso otorgar un 6 % del presupuesto nacional a la educación, anunciado una y mil veces a toda voz. Tampoco podemos olvidar la promesa realizada por el ministro de Industria, Energía y Minería de la época durante la campaña electoral: habría un abaratamiento de las tarifas de energía del orden del 25 % para el próximo período de gobierno, que está finalizando con esta rendición de cuentas. Lejos de eso, las tarifas de UTE y de Ancap siempre han aumentado por encima de los costos, con el claro objetivo de hacer caja, de ir corrigiendo no los errores, sino -a esta altura- los horrores en materia de gestión y los pésimos resultados fiscales de las empresas públicas.

Si analizamos la energía, el costo del megawatt/hora de la industria de media tensión en Uruguay es de US$ 139; en Brasil, de US$ 128; en Chile, de US$ 138, y en la Argentina de US$ 108. Reitero, US$ 139 en Uruguay, US$ 108 en Argentina. Si analizamos el sobreprecio que soportan las familias uruguayas también estamos ante un récord: pagan US$ 299 -prácticamente US$ 300- y en la Argentina pagan US$ 134. O sea que cuando una y otra vez escuchamos los discursos, las comparaciones, las afinidades ideológicas, inclusive, los comentarios manifestando horror por la política del actual Gobierno argentino -que consistió en dejar de lado los subsidios e ir ajustando las tarifas públicas-, pasa inadvertido que a pesar de todos los aumentos que hubo en Argentina en materia energética, todos los uruguayos pagamos por la factura de la luz el doble de lo que pagan los argentinos. Ese es otro logro del gobierno del Frente Amplio; ese es otro logro de la gestión del Frente Amplio en lo que hace a la proyección, la rentabilidad y la dirección de las empresas públicas.

Más temprano durante esta sesión, algún integrante de la bancada del partido de gobierno hacía un análisis de los números, de la producción, acerca de cómo unos recibieron el Gobierno y de cómo lo recibieron otros. No puede pasar inadvertido cuál es el motor de la economía del país, o sea, la actividad agropecuaria ganadera, ni que el endeudamiento del sector agropecuario en el Uruguay de 2018 es sideral. Ya que a muchos les gusta comparar gestiones, cifras e informes de organismos internacionales, podemos advertir que en nuestro país el endeudamiento del sector agropecuario pasó de US$ 322.000.000, a la salida de la crisis en diciembre del año 2005, a US$ 2.242.000.000 en diciembre de 2017. Hubo un aumento del

endeudamiento del 600%. ¿Alguien puede hablar de que un sector tiene resultados exitosos cuando se ha endeudado seis veces más en los últimos tres períodos de Gobierno del mismo partido? ¿Alguien puede pensar que vamos en la dirección acertada, adecuada y justa cuando estamos hablando de la principal actividad económica del país? Creo que no, señor presidente; creo que vamos mal, que vamos muy mal. Han cerrado miles de pequeñas empresas en el interior del país, producto de la durísima y ruinosa situación a la que llegó la producción nacional.

Esta Rendición de Cuentas es muy amplia y abarca diferentes aspectos; cuando lleguemos a la discusión particular los desarrollaremos. Algunos compañeros -como la señora diputada Susana Montaner- nos han solicitado intervenir; ella, en particular, desea referirse a la educación.

Quiero terminar mi intervención refiriéndome a la seguridad pública, porque creo que estamos frente a un escenario con la mayor complejidad que registra Uruguay en su historia. No cabe la mínima duda y no lo puede discutir ni el más optimista de los integrantes de la bancada del partido de gobierno.

Hay tres anuncios que hizo en diferentes momentos a los medios de prensa el señor presidente Vázquez, que definen la inseguridad reinante. Primero, el señor presidente de la República dijo: "No voy a cambiar la política de seguridad". Esto lo afirmó luego de diez años de malos resultados. Después manifestó: "Creo que Bonomi está haciendo una muy buena tarea". Repito: dijo que Bonomi estaba haciendo una muy buena tarea. Por último, expresó: "Hay un incremento de los homicidios, pero que no es estadísticamente significativo porque sigue habiendo países que están mucho peor que nosotros". ¡Cuánta distancia de la realidad! ¡Y la sufren los hombres y mujeres de este país a lo largo y ancho del territorio nacional! ¡Cuánta insensibilidad al hablar de cifras frías y desconocer la cruel realidad que nos golpea! ¡Cuánta falta de empatía con las víctimas inocentes! ¡Cuánta frialdad para decir estas cosas! ¡Cuánta indiferencia frente a la inseguridad que mata, que hiere, que lesiona, que viola los derechos humanos de los honestos todos los días, una y otra vez, que retrae -una y otra vez- los derechos de los trabajadores, de los honestos, que son quienes salen a pelearla con dignidad y con ganas y representan la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país! ¿Cómo es posible sostener como justificación en defensa de una pésima gestión, que hay países que están mucho peor y no reconocer que estamos frente a una cifra récord de homicidios en la historia de este país? ¿Cómo se puede decir que no es estadísticamente significativo cuando, si se mantiene la tendencia creciente en las estadísticas, este año superaremos los cuatrocientos homicidios, cuando el señor presidente de la República prometió en la campaña electoral que las rapiñas bajarían un 30 %; cuando se prometió que los hurtos, a partir de la aplicación de diferentes planes estratégicos desde el Ministerio del Interior, disminuirían significativamente? Nada de eso ha pasado, señor presidente.

Estamos hablando de personas, de muertos, de heridos. No estamos hablando de estadísticas. ¡Por favor! ¡Reaccionemos!, porque cuando recurrimos a esa justificación anestésica de no querer mirar, de no ver y de no leer la realidad, vamos por un camino muy peligroso. Lo que dijo el director de la Policía Nacional, comisario Layera -habló una vez y no se lo vio más-, creo que se ajusta a la medida a lo que nos está pasando como sociedad. Que nadie

crea que la oposición quiere que se impacte directamente contra esa dura realidad. Al contrario, estamos llamando al Gobierno a reaccionar, a que se sensibilice, a que atienda las cosas como hay que hacerlo, porque todos los uruguayos estamos sufriendo el problema de la inseguridad.

Mi Partido y quien habla tenemos una convicción: la inseguridad no solo no ha mejorado con los gobiernos del Frente Amplio, sino que ha empeorado exponencialmente, y eso hay que tenerlo muy claro.

Uno de los más grandes errores es juzgar las políticas y los programas por sus intenciones y no por sus resultados; eso es lo que vemos diariamente, una y otra vez. Me refiero a que se habla de intenciones, una y otra vez, pero no se quiere ver lo que está pasando. Pero los resultados están más que a la vista. Lamentablemente, los únicos en este país que demuestran ser más eficientes son los delincuentes: cada vez hay más delitos, cada vez hay más robos, más arrebatos, más rapiñas. Rapiñan redes de pago todos los días; hacen explotar y roban cajeros automáticos todos los días; roban comercios, *shoppings* y estaciones de servicio diariamente. Frente a la ineficiencia y a la falta de presencia del Estado para dar respuestas, se multiplican los arrestos ciudadanos, con las consecuencias dramáticas y peligrosas que ello puede traer.

Todos los uruguayos hemos sido testigos de situaciones que rayan con eventos surrealistas. Hemos conocido episodios lamentables, como cuando, en la Ciudad de la Costa, la policía tuvo que ir en taxi a detener a un delincuente, porque no había patrulleros.

Si nos comparamos con la estadística fría, insensible y distante de la que habla el señor presidente, también nos va muy mal. Le reclamamos que está mal hacerlo, que no podemos recurrir a las estadísticas y justificarnos con ellas, pero si de todos modos lo hace, debemos decir que también en ese sentido estamos muy mal. Si comparamos a Uruguay con otros países, si nos comparamos con otras ciudades del mundo, como Nueva York -nunca fue tan segura como hoy, si tomamos la referencia de 1951-, podemos advertir que allí, en 2017, ocurrieron 290 homicidios. La tasa es del 3,4 % cada 100.000 habitantes. Nueva York tiene una población de 8.500.000 habitantes.

Si analizamos el caso de Alemania, que tiene una población de 82.000.000 de habitantes, podemos decir que en 2017 hubo 405 homicidios; la tasa es de 0,5 % cada 100.000 personas.

Si consideramos lo que sucede en España -tiene una mayor incidencia cultural en nuestro país, junto con Italia-, que cuenta con una población de 46.000.000 de habitantes, en 2017, hubo una tasa de homicidios del 0,5 % cada 100.000 personas. El mismo año que Madrid registró 308 homicidios, en el Uruguay, con 3.000.000 de habitantes, se alcanzaron cifras siderales; tenemos veinticinco veces menos habitantes que Alemania y quince veces menos que España, pero se produjeron 283 asesinatos en un año.

Ya que nos hablan de cifras, aunque no quiero aburrir, debo agregar que otro indicador que no puede estar ajeno a esta discusión es la cantidad de policías con que cuenta Uruguay, lo que habla a las claras del fracaso de la gestión, y no estamos hablando de un problema de recursos. Es más: la oposición en su conjunto votó a los diferentes poderes ejecutivos un aumento significativo, presupuesto tras presupuesto y rendición de cuentas tras rendición

de cuentas, de los recursos para el Ministerio del Interior; siempre lo votamos. Siempre apostamos a que a partir de la anunciada inversión hubiese una mejora en la eficiencia y en los resultados, pero eso no pasó.

Queremos proteger la vida de la gente, a los uruguayos. Nuestro país tiene 421 policías cada 100.000 habitantes y Argentina, 222. Quiere decir que tenemos 200 policías más cada 100.000 habitantes, casi el doble que nuestros vecinos.

Otra materia que tampoco puede estar ajena a esta discusión es el con pésimo resultado de las políticas carcelarias. Según el informe anual del comisionado parlamentario, de 6.000 liberados, 4.000 son reincidentes. En 2017, en las cárceles, o sea, bajo la supuesta custodia y el cuidado del Estado, ocurrieron 47 muertes; 28 fueron violentas.

El 66 % de los presos son reincidentes; el 62 % no trabaja; el 44 % está recluido en malas condiciones y el 30 % recibe tratos crueles. Como si fuera poco, 4 presos se fugan cada mes de las cárceles uruguayas. Creo que queda bastante claro que lo que falla no es la rehabilitación, porque esta brilla por su ausencia.

Cuando la gente pensaba que nada malo podía sorprenderla luego de saber que rapiñan a policías o que vuelan cajeros a metros de las seccionales, la realidad vuelve a asombrar. Ahora los delincuentes tirotean y rapiñan ambulancias que asisten a emergencias, asaltan a jóvenes voluntarios que reparten comida a personas carenciadas y roban escuelas. Además, los carteros no entregan correspondencia en diez puntos de la ciudad de Montevideo porque los tienen registrados como zonas rojas. Las aseguradoras han visto aumentar un 45 % las denuncias de robo de vehículos. Creo que la perla de todo este relato negativo, que no nos gustaría hacer, es que un ciudadano filmó en la Seccional 6a. de Montevideo, un video de dos o tres minutos que se viralizó en las redes sociales y que muestra que allí no había absolutamente nadie.

Creo que estamos frente a un gran fracaso: un gobierno que agota su ciclo y una última rendición de cuentas sin que se corrijan errores y sin que estos se reconozcan para que haya mejores resultados en la gestión. Lo que más entristece es que se niegue la realidad, porque eso implica, inexorablemente, el derrumbe de la calidad de vida de todos los uruguayos.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Desde la Presidencia, queremos saludar la presencia de las maestras, niños y niñas de la Escuela Nº 103 de La Teja. ¡Bienvenidos!

16.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Alfredo Asti.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: como no podía ser de otra manera, quiero hacer un primer reconocimiento al trabajo de los funcionarios de la Cámara, en particular, al de los secretarios y secretarias de la Comisión y

también a todos los demás que, a la vista o encerrados en sus oficinas, aportaron para que hoy pudiéramos llegar con todo este material y discutir esta Rendición de Cuentas.

También saludo especialmente a nuestra compañera Lilián Galán, a quien le tocó presidir esta última instancia de rendición de cuentas con modificaciones presupuestales, con todo lo que ello implica. Lilián logró llevar adelante una muy buena conducción, con cumplimiento estricto del cronograma y, fundamentalmente -quizás sea lo más valorable-, con un muy buen clima de trabajo entre legisladores del oficialismo y la oposición, lo que ayudó a concretar nuestra labor. Con esta última mención expreso mi reconocimiento a todos los legisladores que participaron en esta tarea.

No puedo olvidar a las secretarias de bancada y a dos despachos que colaboraron a los efectos de obtener este resultado.

Este proyecto de ley de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo, fue objeto de algunos cambios en el transcurso del debate. Hay que destacar que se contó con un extenso y detallado material de rendición de cuentas presentado por el Poder Ejecutivo y los distintos organismos del Gobierno. En este punto, reconozco lo que decía el diputado Posada en cuanto a que, lamentablemente, no nos dará el tiempo para profundizar en cada uno de los varios tomos de información que recibimos, como nunca en gobiernos anteriores. Se trata de información que nos permite tener una idea clara de cómo está el país y hacia dónde avanza.

Como se decía al principio, no somos ni nos creemos Alicia en el país de las maravillas, pero tampoco somos el reino del terror, como se quiere hacer creer, a través de una secuencia de imágenes fotográficas, sacadas de una vieja revista policial llamada *Al rojo vivo*, de crónica roja.

No voy a entrar en el tema de la seguridad; otros compañeros podrán hacerlo con mucho más conocimiento que yo. Dado que se mencionaban datos de muertes en algunas ciudades, podemos poner el ejemplo de otras de Estados Unidos que superan con creces lo que pasa en Uruguay, que nos afecta, nos duele, nos preocupa y nos ocupa. Pero traigamos datos de toda la realidad. Tanto México como Brasil, países latinoamericanos como el nuestro, en estos días tienen aterradoras cifras de violencia.

Tenía que hacer estas precisiones, pero no quiero perder el hilo de mi intervención en cuanto a este proyecto de ley de rendición de cuentas que podría identificarse como: "Rendición de equilibrio", porque busca el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la necesidad de seguir atendiendo las prioridades que la ciudadanía fijó a este y a los anteriores gobiernos con respecto a educación, salud, seguridad, protección social y vivienda.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo plantea que estamos en una situación compleja, con enormes incertidumbres y contradicciones. Basta con recordar lo que está pasando con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que cada uno sostiene posiciones contrarias a las que la historia hubiera indicado: Estados Unidos, incitando al proteccionismo y, China, al libre mercado. Parece una paradoja, pero hoy sucede eso, y no solo tiene consecuencias en China y Estados Unidos, sino en el resto del mundo, inclusive, en Uruguay. A partir de eso se abre una incógnita respecto a si son fortalezas o

debilidades, oportunidades o amenazas. De todas formas, es una incertidumbre.

——Un poco más atrás en el tiempo conocimos los resultados electorales en Europa, donde triunfaron partidos antisistemas, de ultraderecha o que están en contra de la Unión Europea y, antes de eso, el *brexit*, que dejó al Reino Unido fuera de la Unión Europea. Es decir, estamos en un mundo cambiante.

También fue cambiante la situación que encontramos en 2015, con un viraje brusco e inesperado del ciclo económico en el que transcurría el mundo, en particular, nuestra región.

Mucho se habló y se sigue hablando de los vientos a favor y en contra, de esos quince años de crecimiento continuo, trece de ellos con mayor equidad. Se decía que todo fue producto de los vientos a favor, y eso es algo extraño, porque si tomamos el Informe Económico Financiero -un excelente informe que debería ser incluido en la versión taquigráfica de esta sesión, a fin de disponer de todos los elementos que el Poder Ejecutivo nos proporcionó para conocer la situación del país y sus proyecciones- y analizamos el período comprendido entre 2011 y fines de 2018, advertiremos que Uruguay crecerá más del 20 %; Argentina, 3 %, y Brasil, 0,7 %.

¿Por qué esto tiene importancia? Porque los mismos vientos a favor o en contra que tuvo Uruguay para crecer el 20 % también lo tuvieron sus vecinos, que crecieron en los porcentajes mencionados. Inclusive, se puede decir que, en general, ellos tienen más viento a favor, pues cuentan con recursos que nosotros no tenemos.

No hay dudas de que Uruguay tiene sus fortalezas y debilidades y de que la relación con nuestros vecinos tiene que ver con esto.

El compañero diputado Groba dijo lo que pensábamos manifestar con relación a qué pasaba antes, cuando uno de los dos países estaba en problemas, y cómo sufría Uruguay. Hoy esos dos países están en problemas y los que sufren son ellos. Nosotros también tenemos problemas, pero de otro tipo.

Como hemos dicho, no somos Alicia en el país de las maravillas ni el reino del terror. Esto no solo lo decimos nosotros, sino muchas organizaciones e instituciones internacionales; si dispongo de tiempo, en otro momento intervendré nuevamente y leeré algunas de esas apreciaciones.

Este proyecto de ley intenta disminuir el riesgo fiscal. Hemos tenido problemas por el alto déficit fiscal -alto para nuestra pretensión-, que se ha sostenido en estas circunstancias por las fortalezas del país. Es nuestra preocupación y ocupación intentar disminuir ese déficit fiscal, para evitar que estas fortalezas disminuyan y en algún momento se transformen en debilidades. Y debemos mirarnos en el espejo de lo que está sucediendo en Argentina y Brasil, que tuvieron fuertes desequilibrios fiscales.

El anterior proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo planteaba para este año un crecimiento de 2,5 %, porcentaje que se mantiene en esta rendición de cuentas. Es cierto que, a principios de año, el Poder Ejecutivo, los analistas económicos privados y los organismos internacionales preveían que Uruguay crecería más del 2,5 %, pero tuvimos el efecto natural de la sequía,

que nos golpeó fuertemente y que determinó la caída de una parte de nuestras exportaciones, sobre todo, la de soja, por la mala cosecha.

Como de vez en cuando viene bien matizar una mala noticia con dos buenas, debo decir que ayer nos enteramos de que en los primeros siete meses del año el sector lácteo -que está pasando por graves problemas- incrementó sus exportaciones en 11 % y el sector cárnico, en 7 %.

No todo es el reino del terror.

El mensaje enviado por el Poder Ejecutivo plantea seguir luchando por lograr una disminución del déficit fiscal. Para el 2019 estaba previsto llegar al 2,5 % del déficit fiscal, pero esta meta se ha trasladado para el 2020 y se ha explicado el porqué de esas diferencias en los años 2018 y 2019.

Las previsiones para el 2018 tenían en cuenta ingresos que no se obtuvieron, por ejemplo, US$ 50.000.000 anuales que se iban a recaudar a través del tributo a las altas pasividades militares, que esta Cámara -por razones a las que por el momento no ingresaremos- no aprobó. Esa iniciativa sí fue aprobada por el Senado, pero -repito- no por la Cámara de Representantes. Eso implicó una disminución importante de los recursos disponibles.

Debido a compromisos asumidos, este año se debió destinar $ 900.000.000 a impulsar la construcción de una mayor cantidad de viviendas a través de cooperativas, debido al desarrollo que tuvieron.

También es cierto que durante 2017 y 2018 -tal como se afirma en el mensaje del Poder Ejecutivo- el Banco Central tuvo que intervenir fuertemente para sostener una cotización razonable del dólar, pues de lo contrario hubiera caído mucho más de lo que cayó y se hubiese afectado mucho más al sector exportador. Obviamente, esas intervenciones del Banco Central tuvieron un costo que hoy estamos pagando.

De todas formas, para el 2019 el equipo económico y el Poder Ejecutivo prevén el mismo nivel de actividad que estimaron en la pasada Rendición de Cuentas. Es decir que luego de recuperada la pérdida que tuvimos este año, el nivel se ubicará en 3,3 % sobre la de este año, que está 0,5 % por debajo; si se hubiese mantenido, el crecimiento sería de 3 %. Esto también se proyectó para el 2020, y es perfectamente alcanzable, dados los fundamentos de nuestra economía y las posibilidades de cumplir con esas metas.

Una política fiscal sostenible es un requisito ineludible para implementar nuestro plan de gobierno -y cualquier otro plan de gobierno-, así como la preservación de un entorno macroeconómico adecuado para asegurar el financiamiento de las políticas sociales, otras transformaciones en el mediano y largo plazo y la posibilidad de facilitar a los agentes privados un clima propicio para tomar las decisiones de hacer inversiones productivas.

De esta forma, se cumplen dos de las premisas que tenía esta Rendición de Cuentas: no aumentar el déficit fiscal y evitar medidas que puedan afectar la capacidad de inversión y de generación de empleo. Por eso, desde el primer momento se dijo que esta instancia presupuestal no supondría incremento de impuestos para el sector privado, buscando mejorar el mercado de trabajo, que también se ha visto afectado y lo reconocemos: la situación nos preocupa y nos ocupa. Todo esto está acompañado por otras medidas: algunas ya fueron

implementadas por ley y otras se concretan por decreto o están en trámite, como anunciamos en algún otro momento.

Con respecto al mercado laboral, perdimos casi cincuenta mil puestos de trabajo con un país en crecimiento, pero en sectores que no tienen un uso intensivo de mano de obra.

La otra premisa, además de no aumentar el déficit fiscal y no incrementar los impuestos para incentivar la inversión productiva privada, es que la mínima distribución de recursos en esta Rendición de Cuentas vaya a las prioridades. Es una de las rendiciones de cuentas más austeras desde la reinstalación democrática, y no es la más austera porque en el medio estuvo la de 2003, momento en el que el país se encontraba en medio de una crisis de la cual ya se ha hablado; aunque diferimos en los orígenes, coincidimos en que afectó enorme y trágicamente a este país. De allí la definición de que el gasto discrecional fuera dirigido a las prioridades que nos ha marcado la ciudadanía al elegir mayoritariamente un programa de gobierno.

Pero nos encontramos con una circunstancia que se viene reiterando: el aumento, período a período, del gasto endógeno en cada una de nuestras instancias presupuestales. En el período 2005-2009, el incremento que podía realizarse en el marco presupuestal era de $ 100.000.000.000. Pero el gasto endógeno era menos de $ 10.000.000.000 constantes a valores de 2017. En el período 2010-2014 los incrementos posibles eran $ 80.000.000.000, y lo endógeno ya eran más de $ 20.000.000.000 constantes y en este período, 2015-2019 lo disponible era menos de $ 60.000.000.000 y de casi $ 40.000.000.000 constantes a valores de 2017, lo que va restando las posibilidades de incremento discrecional.

Esta explicación del porqué del aumento del gasto endógeno no es una película de terror: se justifica, fundamentalmente, por el incremento de las transferencias a la seguridad social. Ello sucede porque tenemos mayor cobertura de salud con el Fonasa; mayor cobertura en los temas de seguridad social, con más pasividades después de haber flexibilizado el acceso a estas prestaciones -de no haber sido así, hoy estaríamos en una situación bastante dramática-, y un aumento real de dichas pasividades, inclusive, por encima del incremento de los salarios.

Adviértase que las pasividades se ajustan por el índice medio de salarios -nominal y no líquido-; por lo tanto, han crecido más que el resto de las remuneraciones de la economía y, por supuesto, más que los ingresos del Estado, porque salarios y pasividades se han incrementado mucho más que el índice de precios al consumo.

Ahora bien, el déficit del Banco de Previsión Social está casi en igualdad de volumen que el del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Los dos ascienden a una cifra aproximada a los US$ 600.000.000 por año, con la única diferencia de que en el Banco de Previsión Social se pagan 700.000 u 800.000 prestaciones y en el Servicio de Retiros y Pensiones, solo 50.000. Entonces, como ya han dicho otros compañeros diputados, son muy pocas las opciones que teníamos de direccionar discrecionalmente dineros, y por eso, en más del 80 %, se dedicaron, sobre todo, a la educación.

Por otro lado, en esta Rendición de Cuentas tampoco están resueltas algunas asignaciones; ya venían planteadas por disposiciones que votamos últimamente, como la ley de nocturnidad, la de violencia por razones de género y la de salud mental, a las que también hubo que cubrir.

Por supuesto -lo menciono antes de que digan que lo omitimos-, también está el acuerdo salarial al que llegamos con los funcionarios judiciales por el conflicto que manteníamos desde 2011, que tengo tiempo de discutir ahora.

En algún otro momento se habló en sala de los vínculos laborales, algo reiterado en cada una de las rendiciones de cuentas. Eso es curioso cuando tenemos toda la información con respecto a los vínculos laborales; cuando tenemos muy clara la definición de que no es lo mismo hablar de vínculos laborales que de personas o de funcionarios públicos; cuando la historia que demuestra que mucho de ese crecimiento proviene de que ahora están registrados absolutamente todos los vínculos laborales, aunque sean temporales, aunque sean por única vez en un año. Yo ponía el ejemplo del vínculo laboral de una persona que hoy es contratada para actuar en un concurso. Efectivamente, ese es un vínculo laboral: a veces, se le paga por las dos o tres oportunidades en que se reúne para dictaminar en ese concurso. Del mismo modo, todos los docentes suplentes de la educación hoy tienen vínculos laborales, aunque no ostenten cargos titulares, aunque no cobren el sueldo todos los meses. Alcanza con que ingresen una vez a hacer una suplencia para que sea considerado un vínculo laboral. Antes no se registraba de esa manera y por eso hay una enorme diferencia. Pero vamos a dejar eso de lado.

Continuando con los vínculos laborales, voy a tomar nada más que tres años: 2004, 2007 y 2017. ¿Por qué? 2004 fue el último año de gobierno de los partidos tradicionales; en 2007, ya era gobierno el Frente Amplio, pero previo a que se separara ASSE del Ministerio de Salud Pública, lo que afecta, entonces, la relación que voy a comentar. En el año 2004, había 241.725 vínculos laborales; en 2007, 254.612 y en 2017, 310.126, pero si analizamos los grupos de incisos, en el Poder Legislativo hubo una reducción y en el Poder Ejecutivo, un mínimo aumento, exclusivamente en el Ministerio del Interior, porque hubo reducción en muchas otras Carteras.

El gran salto en cuanto a vínculos laborales se dio en los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, sobre todo, en los entes autónomos de la educación y de la salud, que con respecto a 2007 aumentan casi un 50 %. Los de las empresas públicas crecen mínimamente, al igual que los de los gobiernos departamentales, pero desde el punto de vista porcentual, el incremento es mayor que el del Poder Ejecutivo. O sea que, cuando hablamos del aumento de los vínculos laborales, tenemos que decir que gran cantidad de ellos se produjeron en entes autónomos de la salud y la educación y corresponden a docentes y médicos; esos son los que aumentaron. No obstante, se habla de la necesidad de reducir los vínculos. La oposición, muy hábilmente, une el tema del aumento de los vínculos -sin decir dónde crecen- a los cargos de confianza, que en esta Rendición de Cuentas se pueden contar con los dedos de una mano. Es muy hábil al decir que aumentaron los vínculos laborales en tantos miles, sin aclarar que no todos representan más funcionarios, y después relacionarlo, en el mismo discurso, con los cargos de confianza.

Desde 1995 a la fecha, el nivel de actividad del país creció un poco más del 60 % y los vínculos laborales con el Estado, menos de un 20 %. O sea que ese crecimiento con respecto al nivel de actividad se da en un Estado que es distinto al de 2005 y muy distinto al de los noventa ya que, por suerte, tiene otras áreas de actividad.

Pero no tenemos que quedarnos solo con los vínculos laborales. En educación podemos hablar de los resultados, de lo que se ha destinado a salarios docentes, a infraestructura, a los aumentos del gasto por estudiante, a la disminución de los estudiantes por grupo. Por supuesto, nos van a preguntar dónde están los resultados en la mejora de la educación. El presupuesto de la educación es una condición necesaria, no suficiente, pero es imposible pensar en mejorar la educación sin más presupuesto y, por eso, todos los años se ha aumentado de manera importante.

Hoy, 14 de agosto, se conmemoran cincuenta años de los mártires estudiantiles, de la muerte de Líber Arce, cuando los estudiantes salían a luchar por libertad, por autonomía y también por mayor presupuesto, porque los fondos eran recortados y no aumentados, como en esta oportunidad. Eran presupuestos que ahorcaban a la Universidad o a la ANEP. Hoy tenemos crecimientos importantísimos, que superan en términos reales el 150 %. No me va a dar el tiempo para detallar todos esos aumentos, pero los hubo en estos organismos: en la ANEP -en educación inicial y primaria-, en UTU, en la Udelar y en la nueva UTEC, que ha descentralizado la educación terciaria además de la Udelar en prácticamente todo el país. Hoy hay jóvenes de Montevideo que van a estudiar al interior porque allí hay carreras que en la capital no se imparten. La descentralización de las carreras terciarias es una apuesta. La Universidad y los organismos de la educación piden más presupuesto, pero presupuesto tras presupuesto, rendición de cuentas tras rendición de cuentas, siempre se les ha dado menos de lo que pedían e igual han obtenido extraordinarios resultados en inclusión y en descentralización en las distintas áreas que les competen.

Tenemos otro desafío que no es materia de esta Rendición de Cuentas: la Universidad de la Educación. Veremos si en el Parlamento están los votos para dar el complemento necesario para su creación.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: empiezo por expresar que hago mías las palabras de mis compañeros de bancada; en particular, nos representa el informe categórico y contundente que en nombre del Partido Nacional presentó al inicio de esta sesión el señor diputado Lafluf. Por cierto, también las palabras y los conceptos del diputado Penadés representan a todo el Partido Nacional. Los planteos que formularan estos dos señores legisladores demuestran la actitud responsable y seria con la que el Partido Nacional actuó en el ámbito de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda durante todo el proceso de tratamiento de la Rendición de Cuentas que estamos analizando.

Dicho esto, adelanto que solo voy a esbozar algunos apuntes con relación al tema que está en debate, que es de una vastedad y amplitud absolutamente

incuestionables. En tal sentido, empiezo utilizando las referencias o símiles que ensayaron en distintas exposiciones algunos legisladores, tanto del partido de Gobierno como de la oposición. Yo no creo que estemos en el país de Alicia, cuando Alicia estaba en el país de las maravillas, pero tampoco creo que estemos en el reino del terror, porque no es terror lo que nosotros venimos a sembrar. Simplemente, teniendo los pies en la tierra, digo que estamos en un país que tiene dificultades reales, en absoluto incuestionables, que surgen con nitidez de la realidad en la que estamos inmersos.

En ese contexto -es lo que más nos preocupa-, advierto que el Gobierno vive en un mundo virtual -si no vive, por lo pronto, intenta arrastrarnos a todos-, alejado de la realidad que está llamado a administrar y a gobernar. La situación económica del país es compleja. Alcanza con leer el Informe Económico Financiero del Poder Ejecutivo. No lo es porque vengamos a decirlo nosotros, porque lo hayamos descubierto. Alcanza con analizar los indicadores que el Gobierno remitió al Parlamento, como corresponde, en esta instancia presupuestal.

Son complejos la realidad económica y los resultados en el plano social y de las políticas públicas que tienen directamente que ver con el desarrollo social y humano y con el bienestar de la población.

Pero vayamos a ver algunos indicadores del resultado económico, por un lado -lo que vale es utilizar los datos crudos y duros-, y de la realidad social por otro para comprobar lo que estamos diciendo, sin perjuicio del enfoque que también puede dársele a todo esto -que me propongo dar a mi exposición más adelante- de los planteos que el Gobierno ha hecho o ha dejado de hacer en cuanto a los efectos o coletazos en la realidad institucional del país.

Desde el punto de vista económico, es notorio que tenemos un problema en cuanto a las cuentas fiscales. La Rendición de Cuentas ingresó al Parlamento con un déficit de 3,5 % del producto, como ya se ha dicho hasta el cansancio. Un mes después de ese ingreso formal, el déficit ya trepó al 4 %. El ministro de Economía y Finanzas ha dicho que esto se debe a factores coyunturales, que en realidad, el déficit estructural es menor y que si ahora está marcando un 4 % es meramente por razones circunstanciales, entre ellas, el incremento de las reservas de Ancap.

Ese argumento no es válido para siempre. El ministro ensayó esa respuesta cuando vino hace más de un mes a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. La última medición conocida esta semana acerca del déficit fiscal basada en cifras proporcionadas por el Banco Central, indica que nuestras cuentas públicas siguen en rojo, en el eje del 4% del producto; eso claramente va insinuando que ya no estamos frente a factores coyunturales, sino que el déficit estructural crece.

Las existencias de Ancap, para un país como el nuestro, que consume cerca de 1.500.000 barriles por mes de petróleo refinado, indican que lo que hay en esos depósitos da para abastecer durante tres meses nuestro mercado interno. De manera tal que no puedo creer que Ancap haya seguido comprando petróleo en condiciones absolutamente excepcionales, a tal punto que un incremento circunstancial de las reservas, como el que pudo haber habido el mes pasado, según dijo el Gobierno, en la actualidad se mantenga en los

mismos términos y esté pesando de igual manera en la realidad de las cuentas fiscales del Uruguay.

Esta situación es compleja y creo que tiende a hacerse todavía más compleja que hace un mes, cuando el ministro compareció en el Parlamento. Lo digo porque en estos últimos días se conocieron los resultados del segundo trimestre, que publica con regularidad el Banco Central del Uruguay. Esos resultados hablan a las claras de que los signos de desaceleración de la economía avanzan y de que la situación está todavía un poco más complicada. Para los índices vinculados al consumo, a la confianza del consumidor, a la importación de bienes de consumo, a las exportaciones en general, en el ejercicio 2018 que está en marcha, la tendencia es a la baja, es decir, al descenso, a una situación de deterioro de los indicadores y de la realidad económica del país, medida a partir de estos factores principales.

Mientras el déficit aumenta -sigue aumentando-, las proyecciones del Gobierno siguen fallando en relación directa. Para 2018, el Gobierno nacional había previsto un déficit del entorno de 2,7 % del PBI. Sin embargo, ya tuvo que corregir esta meta y habló de que este año tendríamos un 3,3 %, porque las cosas fueron peor de lo que anticipó. No creo que vayamos camino a eso porque estamos a mitad de año -repito- y no solo no nos acercamos en términos de reducir el déficit para cumplir con esa meta, sino que nos vamos alejando en forma sostenida y cada vez mayor. También parece difícil -desde ya lo digo- que se pueda cumplir con el objetivo del Gobierno de que el año que viene haya 2,5 % de déficit. Teóricamente, ese porcentaje sería para el 2019, pero el Gobierno ya pronostica que no será para el año próximo sino para 2020.

Esta circunstancia, que por sí misma no es generadora de ninguna catástrofe social, es indicativa de las posibilidades y las finanzas públicas reales del país que, sin duda, puede llegar a comprometer, en el mediano y en el largo plazo -más en el mediano que en el largo-, el sostenimiento de determinadas políticas públicas, aun de las que a todos nos conmueven y nos convocan con un grado de compromiso mayor, porque tienen que ver directamente con el bienestar de la población. ¿Por qué razón? Porque el déficit hay que financiarlo. Si no lo financiamos, después habrá consecuencias para el país, que perderá credibilidad, habrá un encarecimiento del crédito y, por lo tanto, del futuro sostenimiento económico y financiero de las decisiones que adoptamos los poderes del gobierno con relación a las políticas públicas a las que me refería.

Está claro que el ajuste del año 2016 no fue suficiente. Como todos sabemos, hubo un severo aumento de impuestos para los sectores de ingresos fijos, trabajadores y pasivos -ya lo debatimos-, y está claro que no alcanzó ni para empezar.

El incremento de las tarifas de los servicios públicos —fundamentalmente, las de UTE— también se ha utilizado como una variable impositiva. Es claro que esos aumentos han actuado como impuestos encubiertos para la población. Eso tampoco ha sido suficiente. Me remito al antecedente del 1º de enero de este año, cuando aumentaron las tarifas públicas. UTE había trasmitido al Poder Ejecutivo que debido al financiamiento del costo de abastecimiento de la demanda, la empresa gozaba de buena salud y estaba en condiciones de decretar una rebaja del costo de las tarifas públicas. Sin embargo, el Gobierno

no solo dijo que no iba a rebajar sino que, además, dispuso un incremento de las tarifas eléctricas que, como se dijo en sala hace unos momentos, sin duda, son las más caras de la región. Eso tampoco alcanzó.

Por lo tanto, como se dijo antes, el país está deslizándose, inexorablemente, por la trayectoria del endeudamiento, del incremento de la deuda pública. Tal como reconoció el ministro en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, la deuda bruta ha aumentado a 67 % del producto y la deuda neta ya supera el 40 % con relación al producto bruto interno. Por más que, como dijo el señor ministro, en todo caso, esto es un nivel de endeudamiento manejable, lo que hoy es manejable en algún momento puede dejar de serlo, sobre todo, cuando las perspectivas son que las cosas, en lugar de mejorar, empeoren y que el déficit, en lugar de achicarse, crezca y se agrande. Por lo tanto, como la realidad y los antecedentes más inmediatos lo indican, tendremos que seguir endeudándonos. Algún día, cuando nos endeudemos a niveles tales que esté comprometida casi íntegramente la capacidad de producción del país, estaremos en problemas muy severos, que repercutirán en los resultados de la vida nacional en temas que son de importancia intransferible.

Llevamos cuatro años de caída ininterrumpida del empleo y de la inversión. Eso figura en la página 6 del Informe Económico Financiero del Gobierno. El desempleo ha aumentado; en lo que va del año 2018, está en 8 %. Desde el punto de vista de la desocupación, es un nivel estructural importante.

Además, la tasa de empleo sigue cayendo. Cuando el ministro vino al Parlamento, hace un mes, sostuvo que la tasa de empleo estaba en el 57,9 %, y así figura en el proyecto de rendición de cuentas. El ministro reconoció que se perdieron 46.800 puestos de trabajo en los últimos cuatro años. Las cifras del Banco Central del Uruguay de esta misma semana indican que la tasa de empleo está ya en 57,1 %. La que señalaba el ministro era de 57,9 %. Quiere decir que se perdieron 10.000 puestos de trabajo en el último año. Es decir, también hay un agravamiento de la situación del mercado de trabajo en el último mes y, por lo tanto, con relación a los últimos indicadores que miden aspectos que hacen, directamente, a la calidad de vida y al bienestar de la población, porque no hay aspecto más importante que el acceso al trabajo para el sustento económico de las familias y la dignificación de las personas.

¿Qué se ha hecho con relación a esta realidad, que al ministro le preocupa mucho, según nos viene diciendo? Ya lo había manifestado en la rendición de cuentas del año pasado y lo había insinuado en la anterior porque, por supuesto, esto no empezó de golpe. Esta es la consecuencia de un deterioro sostenido y acumulativo. Ahí es donde yo concluyo lo que decía con respecto al mundo virtual, porque la población ha asistido, los legisladores hemos asistido -en el Parlamento es donde se ha realizado esa representación, particularmente, en las instancias de presupuesto y de rendiciones de cuentas- a una especie de proceso de simulación o de disimulación de la realidad que el país enfrenta. Y diría que el ministro de Economía y Finanzas ha sido uno de los actores principales, por no decir que ha encabezado esa simulación durante todo este tiempo.

El ministro no se cansa de decirnos que vamos bien. Sigue haciendo el mismo discurso, sigue trasmitiendo la misma sensación que en los años de crecimiento sostenido, cuando el déficit era manejable de verdad, la deuda estaba más baja, se generaba trabajo en lugar de perderse, como sucede ahora. Entonces, hay algo que está mal. O el ministro tiene un exceso de optimismo que lo está llevando a colocarse fuera de la realidad o el ministro es consciente de la realidad que comenta e interpreta y lo que trasmite a la población está lejos de la realidad material de las cosas. De lo contrario, no se entiende que el ministro nos diga que los indicadores son reales, que cae el empleo y la inversión, que aumenta el déficit fiscal, reconozca que estamos en un contexto regional e internacional complejo, de confusiones, de incertidumbre, de volatilidad, que afecta mucho más a los países emergentes como el nuestro que a otros y nos diga que todo se va a arreglar y que el año que viene Uruguay va a retomar la senda de crecimiento, que va a bajar el déficit e, inclusive, que se va a recuperar el empleo y el trabajo para los uruguayos. No es creíble. Ese optimismo debe sustentarse en cosas concretas. Yo busqué esas cosas concretas en la propuesta del Gobierno y en el Informe Económico Financiero, que se supone es, con relación a la rendición de cuentas, su exposición de motivos. Y preguntamos al ministro a ese respecto cuando compareció en la Comisión.

Y el Gobierno nos dice que confía en que esto se va a revertir el año que viene porque se van a normalizar los cultivos de soja; el año que viene, la producción de los cultivos de verano traerá buenas noticias al país. Con eso, más la modificación de la ley de empleo juvenil que está promoviendo el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, más un subsidio transitorio -del que habló el señor ministro-, que destinará una parte de los recursos del Inefop a financiar la creación de determinados puestos de trabajo por la vía de la disminución de los aportes patronales, con eso y poca cosa más, aparentemente vamos a restañar esta situación, a recomponerla; dejaremos de achicar el mercado de trabajo y estaremos en condiciones de dar soluciones laborales a los uruguayos. Yo, con total franqueza, no lo creo. No puedo creer afirmaciones de esas características.

A este respecto, en la Comisión se hicieron afirmaciones -la vida continúa después de que el señor ministro comparece a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda- que los hechos se encargaron de desmentir. Cuando preguntamos sobre estas cosas, recuerdo que el contador Ferreri nos dijo: "Tenemos muchas expectativas en cuanto a que la reformulación de los incentivos de la ley de inversiones permita fomentar la radicación de nuevas inversiones en el Uruguay en el corto plazo y la generación de puestos de trabajo". Nos habló de sesenta proyectos nuevos que representarían una inversión aproximada de US$ 1.900.000.000.

Indagué al respecto, estuve atento a la novedades que fueron surgiendo, y advertí que la información del Banco Central del Uruguay -órgano de gobierno que, además, se vincula con el mismo ministerio del Poder Ejecutivo, cuyo subsecretario es el contador Ferreri- con relación a los proyectos de inversión dice exactamente lo contrario. Con relación al año pasado, en los primeros cinco meses de este año habido un deterioro, una reducción, una disminución, tanto de los proyectos recomendados -el gobierno cae en la trampa de

confundir proyectos presentados con proyectos recomendados- como de los aprobados. De acuerdo con los mecanismos previstos por la ley de inversiones, los proyectos recomendados y aprobados son un 13 % menos que el año anterior. La cifra que más importa es que el monto de las propuestas fue de apenas US$ 220.000.000, un 40 % menos que el año 2017. Y el gobierno nos habla de nuevos proyectos por US$ 1.900.000.000. Yo no le creo, pero por respeto a mí mismo. Aquí están las pruebas de que lo que se nos dijo, no voy a decir que es una mentira -ese término es muy fuerte-, pero por lo menos es un exceso de optimismo o representa el afán del Gobierno de trasmitir buenas noticias, de trasmitir a la población una realidad absolutamente edulcorada que no se corresponde en lo más mínimo con la que los uruguayos enfrentamos todos los días.

Es importante analizar ahora, como en todas las instancias presupuestales -es recurrente que se haga, como en años anteriores-, cuáles fueron los polvos que trajeron estos lodos. ¿Por qué hemos llegado a la situación en la que nos encontramos en la actualidad, por lo menos desde la perspectiva del Partido Nacional y a partir de los datos que el Gobierno proporciona?

La respuesta más general es la que sostenemos desde 2005. Hubo un diseño presupuestal equivocado, que lleva los límites del gasto hasta los límites mismos del crecimiento del país y de la recaudación. Por lo tanto, desde ese punto de vista actúa con imprudencia y ha ido definiendo una serie de gastos inelásticos; cuando cambian los ciclos económicos y cae el valor de nuestras exportaciones, se genera un descenso en la recaudación y un incremento del déficit.

Sin duda, hay un componente vinculado con el gasto superfluo, el gasto improductivo, los cargos de confianza, el aumento de la burocracia. Esto solo no explica todo. El conjunto de nuestras críticas no se centra en este aspecto particular, que censuramos mucho, sino en cuanto a la probidad y la diligencia del buen padre de familia con la que debe administrar el Estado y la Administración pública. Pero han aumentado los gastos no personales. No solo ha aumentado el gasto del financiamiento de cargos y contratos; los gastos de funcionamiento -lo dice el planillado de esta Rendición de Cuentas-, con relación al año anterior, se incrementaron en varios millones de pesos; los gastos de suministros, los gastos de funcionamiento de carácter general. Esa es una realidad.

Estamos hablando de un segmento del gasto público que el Gobierno maneja que siempre nos dice: "Achicar el gasto es muy difícil porque la mayor parte del presupuesto son pasividades, salarios e intereses de la deuda". Está bien; probablemente tenga razón. Pero en este aspecto, que está por fuera de eso, que se supone es indisponible y que hay que pagar todos los meses, ¿por qué no se hizo un esfuerzo por racionalizar el gasto? No solo no se efectuó, sino que se produjo un incremento -obra en mi poder fotocopia de las planillas- de los gastos no personales con relación al ejercicio anterior.

En este aspecto también tienen que ver las facturas que estamos pagando por los errores que el Gobierno ha cometido; el financiamiento del costo que deviene de las malas acciones de gobierno que se arrastran de los períodos anteriores. Esta Rendición de Cuentas presenta un incremento presupuestal de

US$ 150.000.000. Buena parte está referida a financiar el acuerdo con los funcionarios judiciales, que es indispensable porque hubo un conflicto con ellos. ¡Un conflicto que pudo evitarse, que no debió haber existido! Un conflicto que provocó el Gobierno del expresidente Mujica a partir de un gravísimo error -por decirlo con un eufemismo- en el presupuesto del año 2010, cuando pretendió equiparar los salarios de los ministros de Estado con los salarios de los senadores. A partir de ahí se desencadenaron muchas cosas porque se actuó con una enorme torpeza. Hoy, nos enfrentamos a la necesidad de pagar eso. La sociedad tendrá que hacer este esfuerzo. Si esos errores no se hubieran cometido, hoy estos recursos podrían destinarse a un fin bien diferente o a financiar gastos e inversiones del Poder Judicial que quedaron absolutamente por fuera de las prioridades presupuestales.

Sin duda, el costo de la seguridad social incide mucho; siempre incidió. Por supuesto que el costo de la seguridad social es a pérdida. Hay que financiar las prestaciones contributivas y las no contributivas. El déficit del Banco de Previsión Social siempre existió; eso es verdad. Pero también es verdad que en los últimos años las cosas se agravaron mucho.

Hoy se invocó la ley de flexibilización del año 2008, creo que con trampa. Se dice que generó más beneficios, más derechos y que hoy hay más gente jubilada. Claro: hay más jubilados, pero ganando menos. ¡Se han empobrecido las pasividades! Vamos a decir las cosas como son. Además, esto se ha prestado a que se apuntalaran determinadas inequidades dentro del sistema de seguridad social. Por una razón que nadie ha logrado demostrar todavía -el directorio del Banco de Previsión Social no sabe dar respuesta-, las jubilaciones por incapacidad y las pensiones por invalidez se han multiplicado por cuatro en los últimos años en forma absolutamente injustificable. Ha habido problemas de gestión.

La administración del Directorio del BPS ha sido insatisfactoria. Ha habido dificultades en cuanto a reconocer servicios, a probar los servicios, a pagar los beneficios de la construcción en que la institución actúa como agente de retención y, naturalmente, todo eso genera esta situación. ¿Cuál es? Más de US$ 2.000.000.000 de asistencia financiera directa establecida por ley -los siete puntos de IVA, la recaudación del IASS, la partida equivalente al antiguo Cofis y las demás fuentes de recursos directos del Banco de Previsión Social- y, además, el déficit del organismo de todos los años, que crece en progresión geométrica; el año pasado fue de US$ 582.000.000 y se anuncia que será de más de US$ 700.000.000.

Como ya se dijo, alguien podría sostener que estos números tienen como consecuencia un desarrollo social importante, que los pasivos en Uruguay realmente tuvieron la oportunidad de mejorar su calidad de vida; yo no lo sostengo, y me remito a las cifras. Y me remito a lo que dijeron los representantes de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, cuyos integrantes estuvieron presentes, al igual que quien habla.

Se quejaron de que 160.000 pasivos cobran la jubilación mínima de $ 11.000. Aunque no lo dijeron, las cifras están a la vista: casi dos tercios de los pasivos del Banco de Previsión Social perciben prestaciones por debajo de

las 6 bases de prestaciones y contribuciones, que son unos $ 23.000 por mes. Este es un dato, en un país en el cual el costo de vida es significativamente diferente, sin perjuicio de los demás aspectos que hacen a la calidad y a la forma de vida de los pasivos, que fueron desgranados por la Onajpu y que constan en la versión taquigráfica; si fuera necesario, todos podemos recurrir a ella a efectos de profundizar en esta cuestión.

Esto es lo que está pasando y es lo que, diría, está pesando desde el punto de vista presupuestal, económico financiero y, naturalmente, en las consecuencias que apareja a la realidad social.

Ahora, hay cosas que no pesan y deberían pesar y hay cosas que no pasan y no están y, a mi juicio, deberían pasar y estar. Por supuesto, nadie postula recortar el gasto social. Todos estamos de acuerdo con el dinero que se destina al Ministerio de Desarrollo Social y al financiamiento de las políticas sociales. La discusión no es cuánto destinamos, sino cómo lo gastamos, en qué sentido, con qué dirección y a qué efectos. Yo reconozco que los indicadores estadísticos de la pobreza y la indigencia han disminuido, pero no ha mejorado la realidad social en cuanto a desarrollo humano y a niveles de inclusión. Está claro que en el Uruguay estudiamos la realidad de la sociedad, de la pobreza y de la indigencia desde el punto de vista monetario, desde el ángulo unidimensional de una cantidad de dinero, que es la que ingresa a los hogares.

No me va a alcanzar el tiempo de que dispongo para mencionarlos, pero hay informes del Ministerio de Desarrollo Social, de la academia, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que indican que es absolutamente incuestionable que muchísima gente que desde el punto de vista estadístico no es pobre, tiene varias necesidades básicas insatisfechas y vive una realidad de exclusión, o cercana a la exclusión social, por lo menos en lo que debe entenderse por tal en el tiempo y en la realidad que estamos viviendo.

Más temprano, hablé del aspecto institucional. Es imperdonable que, una vez más, las decisiones presupuestales del Gobierno excluyan a los órganos jurisdiccionales y de contralor. Una vez más, afectamos, disminuimos y rebajamos la calidad democrática, la institucionalidad republicana porque no le damos plata al Poder Judicial, porque no le damos plata al Tribunal de Cuentas, porque no le damos plata a la Jutep. En cuanto al Poder Judicial -no lo decimos nosotros, sino las autoridades del Poder Judicial cuando concurrieron en el año 2015-, los recursos del Estado que se le adjudicaron en el presupuesto son inferiores a la que tuvo en tiempos de la dictadura, que era del entorno del 1,17 % de los recursos públicos del presupuesto nacional. ¡Cero peso de incremento viene en esta oportunidad para el Poder Judicial! Lo que pasa con el Tribunal de Cuentas ya ha sido dicho y lo que pasa con la Jutep, también.

A mí me ha provocado un poco de gracia y, diría, que hasta me ha dado un poco de rabia también, leer en los últimos días un informe de una comisión de trabajo del Frente Amplio, que se supone será elevado al congreso de esa fuerza política. En su legítimo derecho está esa fuerza política de escribir lo que le venga en gracia, pero como es la fuerza política que está en el gobierno, es inadmisible que se nos diga que, con relación a los aspectos institucionales, la unidad temática del sistema democrático y fortalecimiento institucional propone

al partido Frente Amplio, para el próximo gobierno, fortalecer y consolidar un sistema de control de la gestión de gobierno, fortalecer al Tribunal de Cuentas y ampliar las competencias de la Junta de Transparencia y Ética Pública. ¡Esto es mentir, señor presidente! ¡Esto está en los medios de comunicación! Si esto piensan, si con esto están comprometidos, debió verse reflejado en esta Rendición de Cuentas y en las anteriores, y en la Ley de Presupuesto del año 2015, pero no ocurrió.

——Como quedó de manifiesto cuando concurrió su directiva a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, la Jutep está alquilando inmuebles para ver si consigue algo de plata, a fin de financiar el cumplimiento de sus obligaciones. Pidió la creación de cinco cargos técnicos, porque tiene veinte funcionarios con los cuales no da abasto para cumplir su función. Sin embargo, no hay un solo artículo, en el proyecto aprobado por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, que haga referencia a estos aspectos o que dé una respuesta mínima a esta realidad.

Se me ha terminado el tiempo, señor presidente. No he hablado de otros puntos vinculados, por ejemplo, con la ciencia y la tecnología o con la violencia de género. Como tenemos por delante más de una sesión extensa con relación a estos temas, tendremos oportunidad de pronunciarnos al respecto.

Por todas estas razones, como ya se ha adelantado, tampoco votaremos esta mala Rendición de Cuentas y este peor proyecto de ajuste presupuestal.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Alfredo Asti.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: sobre los organismos de contralor, en particular la Jutep, es necesario hacer una aclaración.

Se ha dicho reiteradamente que en esta Rendición de Cuentas se niegan recursos a los organismos de contralor por su carácter de tales. ¡No! Se han negado recursos a todo aquello que no es prioridad definida, como las que mencionamos: educación, salud, protección social y seguridad. Se han restado recursos a la Presidencia de la República y a los ministerios. Figura en algunos de los artículos y en el Informe Económico Financiero que al Poder Ejecutivo no solo no se le dan más recursos, sino que se le restan de los asignados, de gastos de funcionamiento o, en algún caso, del Rubro 0.

Con respecto a la Jutep, cuando compareció su Directorio le hicimos alguna pregunta y aclaramos que, desde hace prácticamente un año, en la Comisión Especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado se está analizando un proyecto de ley, presentado por la bancada del Frente Amplio, que modifica las competencias de la Junta de Transparencia y Ética Pública en lo referente al control de las declaraciones juradas previstas en la Ley Nº 17.060 y, consecuentemente, se le dan oportunidades de potenciar su trabajo. En medio de la conversación en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda preguntamos al presidente de la Jutep si quería que adelantáramos algo de ese compromiso

que teníamos en la Comisión Especial, y nos dijo que no, que no nos iba a relevar del compromiso de aprobar esas normas.

Cuando estas competencias estén aprobadas -estamos a la espera del pronunciamiento de otros partidos acerca del proyecto de ley del Frente Amplio-, tendremos la oportunidad de revisar la asignación de cargos para la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- ¿Me permite, señor presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: en realidad, no es para contestar una alusión, porque no me he sentido aludido. Es solo para hacer una aclaración, porque lo que ha dicho el señor diputado preopinante es muy interesante, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que mencioné antes.

Lo que sostuve con carácter general es que en esta iniciativa no figura la más mínima mejora presupuestal para los organismos de contralor, y ese es un dato fácilmente constatable y objetivo. Con relación a la Jutep, solo trasmití lo que dijo el presidente de su junta directiva en la Comisión: que están funcionando con lo mínimo indispensable -les resulta absolutamente insuficiente- y que están arrendando bienes inmuebles para ver si pueden conseguir algún recurso. Nos plantearon, inclusive, la alternativa de impulsar alguna norma sin costo presupuestal, como incorporar a los funcionarios que tienen en comisión en el organismo o la posibilidad de generar algún recurso por la vía de vender servicios. ¡A ese extremo ha llegado la capacidad de imaginación de la Jutep!

Donde no ha habido capacidad de imaginación es en el Gobierno, ya que ni siquiera hubo disposición de incorporar alguna de estas normas en ocasión de la votación particular del proyecto. ¡Estamos a tiempo! ¡Ojalá algo acontezca en lo que resta del tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en esta Cámara o, eventualmente, en el Senado! No habría sido tan difícil -si hubiera existido voluntad- impulsar alguna mejora de estas características. Desde luego, las mejoras sustanciales son las que tienen que ver con la contratación de cinco profesionales técnicos -abogados, escribanos, contadores-, que el contador Gil nos pidió y, además, fundamentó muy adecuadamente. Sin embargo, si a esta altura no hubo voluntad para acordar lo mínimo, muchas menos probabilidades tendremos de concretar aquello que implica un esfuerzo económico mayor.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Gracias, señor presidente.

Quienes integramos la Comisión y estuvimos presentes en esa reunión sabemos que lo que planteó la Jutep es mucho más grave: pensaban alquilar

los garajes del edificio para obtener algún recurso para funcionar; así figura en la versión taquigráfica.

Por otra parte, es claro que cada uno define las prioridades como lo entiende conveniente. Según lo que dijo el diputado Asti, para este Gobierno no son prioritarios los organismos de control. En consecuencia, al Tribunal de Cuentas no se le dio nada; recordemos que pidió $ 67.000.000.

Además, la bancada oficialista tampoco votó un artículo que no tenía costo y que habilitaba al Tribunal de Cuentas el crédito para que pudiera usar un recurso que ya tiene.

Gracias.

18.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la señora diputada Bettiana Díaz Rey.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Señor presidente: continuando con lo que han expresado legisladores y legisladoras que me antecedieron en el uso de la palabra, en esta oportunidad voy a volcar a la discusión del plenario de la Cámara algunas consideraciones de corte general con relación al proceso que nos trajo a esta sesión.

Antes de continuar, expresaré mi profundo agradecimiento a todas y a todos los que han hecho posible que hoy estemos tratando este proyecto: a las legisladoras y a los legisladores de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y a cada uno de los funcionarios y las funcionarias de la Cámara de Representantes, que han sido una pieza fundamental para el normal funcionamiento de la Comisión en todas sus etapas. Hemos podido cumplir con los plazos establecidos y, también, recibir a las diferentes delegaciones, atendiendo a algo que consideramos un gran valor de la democracia uruguaya: la participación ciudadana en el diseño presupuestal en la instancia de discusión del proyecto de Rendición de Cuentas. Por tanto, resaltamos especialmente este punto.

También quiero hacer un especial reconocimiento a la diputada Lilián Galán -mi compañera de bancada y, también, de sector-, quien se desempeñó en la presidencia de la Comisión haciendo una gran tarea. De esta manera, hemos reafirmado -parecería que este aspecto no tiene mucho que ver, pero creo importante mencionarlo- que las mujeres podemos ocupar espacios de conducción: no solo nos tenemos que dedicar a conducir aquellas materias que tienen que ver con los cuidados, sino que también estamos capacitadas para llevar adelante este tipo de discusiones, en las que se realiza la evaluación del uso de los recursos públicos y su asignación. La presidencia de Lilián confirma con hechos un compromiso que se ha trazado el Frente Amplio, que consiste en reafirmar y visibilizar todo lo que dije anteriormente; quizá con un poco de atraso -como dijo ella-, pero estamos llegando.

Por otra parte, teniendo en cuenta esto de que las agendas y las reivindicaciones también se tienen que plasmar en los hechos, quiero

mencionar un dato que no es menor: las únicas diputadas integrantes de la Comisión éramos de la bancada del Frente Amplio.

A continuación, haré algunas consideraciones generales.

Es muy importante el contexto en el que se está desarrollando la discusión de este proyecto de Rendición de Cuentas que, como todas estas instancias, tiene sus particularidades, tal como manifestaron algunos diputados y algunas diputadas preopinantes. En especial, me referiré al contexto económico y político de la región.

No hace falta irse muy lejos para ver dónde y cómo se agotan algunos de los discursos apocalípticos que nos hablan del despilfarro en el gasto público y del achique del Estado. Estamos empezando a tratar un proyecto de Rendición de Cuentas en el marco de las posibilidades del Uruguay, que guarda equilibrio en las cuentas y que nos permite seguir financiando de forma responsable una serie de derechos con perspectiva de futuro. Esto es algo que nuestros países vecinos hoy no pueden hacer ni asegurar; por eso poníamos arriba de la mesa el contexto regional. Parece descabellado venir a plantearlo en sala, pero no es casual que estemos haciendo frente a una gran serie de demandas, cuando hoy en varias economías de la región no se tiene certeza de si los ciudadanos y las ciudadanas podrán ejercer sus derechos fundamentales.

En esta instancia, Uruguay no solo da continuidad al desarrollo de la agenda de derechos que viene ampliando desde 2005 sino que, además, logra comprometerse y comenzar a cumplir con nuevas demandas. Esto es algo que los legisladores y las legisladoras del oficialismo valoramos y defendemos, porque en materia de derechos en este país no hay marcha atrás. Tanto es así que hoy escuchamos reclamos para el cumplimiento de normas y de leyes que muchos miembros de esta Cámara no votaron; esta es la prueba más clara de que no hay marcha atrás.

Voy a poner un ejemplo sencillo en este sentido: la ley integral de violencia de género. Durante el transcurso de esta discusión presupuestal, hemos visto en los medios de comunicación a muchos legisladores y a muchas legisladoras reclamarnos recursos para una ley que no votaron. Por eso hoy también decía que la ley integral de violencia de género fue aprobada en esta Cámara por sesenta y tres votos en ochenta y cuatro presentes. De eso estamos hablando cuando decimos que no hay marcha atrás en el financiamiento de las políticas públicas para sostener la ampliación de los derechos.

Es de público conocimiento que la bancada del Frente Amplio se ha fijado algunas prioridades. En consecuencia, la mayor parte de los recursos y del incremento del gasto -esta es una rendición de cuentas en la que hay incremento del gasto- están destinados a la ANEP, al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, a ASSE y a carteras que son muy sensibles.

Coincidimos con algunos legisladores y algunas legisladoras preopinantes con que hay que hablar claro a la población, pero tenemos que hablar de todo. Y hablar de todo implica decir que cuando nos referimos al aumento del gasto, también estamos hablando de dar sostenibilidad a la ampliación de la cobertura de las nuevas demandas y de algunas otras que no son tan nuevas, por ejemplo, las que tienen que ver con la educación, la salud o los cuidados.

Precisamente, eso es lo que plantea la distribución de recursos que presentamos en conjunto con el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se ha dicho que en el diseño de esta instancia presupuestal y en la asignación no se refleja la austeridad. Lo que seguramente no está reflejado en este proyecto son los discursos apocalípticos de fin de ciclo económico y el eslogan del agotamiento del modelo del Frente Amplio, del modelo progresista. Esto también lo ponemos en clave regional, porque es el eslogan que están usando en otros países para justificar una agenda de achique del Estado -sabemos las consecuencias que eso tiene-, bajo una de las consignas que hoy se usó en esta sala, en la discusión de esta Rendición de Cuentas, que fue la de cortar con la fiesta del gasto. Y se habla de la austeridad, que es tan nombrada. Ya que no solo las legisladoras y los legisladores del oficialismo hemos hecho comparaciones con algunos indicadores de la región, podemos decir, por ejemplo, que cortar con el despilfarro en Argentina trajo aparejado en el primer semestre del año 2017 un 28,6 % de pobreza, mientras que la indigencia aumentó al 6,2 %, cuando Uruguay, al cierre del año 2017, tiene un 7,9 % de pobreza y un 0,1 % de indigencia. Y lo que viene después del discurso del achique del Estado: siempre lo pagan los que tienen menos. Por eso, en esta instancia presupuestal estamos buscando, responsablemente, la forma de dar continuidad al financiamiento de derechos.

Gracias a las políticas que se han implementado, nos encontramos consolidando una trayectoria de crecimiento económico y de orden fiscal que nos permite sortear las dificultades -antes mencionadas- que atraviesan la región. Uruguay lleva -casi como si fuera una isla- trece años ininterrumpidos de crecimiento económico. Eso no es una coincidencia; es un crecimiento que se ha acompañado de distribución. Por eso, el gasto público, por una decisión política, por una decisión de este Gobierno del Frente Amplio, ha crecido un 137 %.

Desde hace trece años, los salarios en el Uruguay crecen más que la inflación, mejorando el poder de compra de las familias. El salario mínimo nacional está en el nivel más alto desde 1985; creció más que el salario medio. Algo que también nos gustaría resaltar es que no se incrementó la informalidad.

Algunas señoras legisladoras y algunos señores legisladores han traído a colación el tema del empleo. Queremos recordar que en la ampliación de derechos que ha venido sosteniendo el Gobierno del Frente Amplio, los derechos de los trabajadores han sido los primeros en la agenda.

También se mencionó el cierre de empresas durante este período e, inclusive, se habló del pedido de concordato de más de cien empresas. Por eso, quiero traer a esta discusión un dato que no es menor. En el año 2006, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había registradas 221.895 empresas de distinto tamaño en todo el país y, al cierre de 2017, se contabilizaron 280.622 empresas. Esto no solo tiene que ver con un crecimiento de la actividad económica, sino de la formalidad, que ha sido un sello distintivo de los gobiernos del Frente Amplio.

Por otro lado, queremos destacar que un aspecto bastante central en la discusión ha sido el aumento de los vínculos laborales en el Estado. Muy bien lo

mencionaba hoy el integrante de la Comisión, diputado Alfredo Asti, cuando decía que hay algunos vicios en el discurso que se ha utilizado para hablar del aumento de los vínculos laborales en el Estado.

Según los informes que nos presentó la Oficina Nacional del Servicio Civil, desde diciembre del año 2016 hasta el cierre de 2017, la cantidad de vínculos con el Estado había aumentado en 3.707. Este aumento se explica, básicamente, por el crecimiento de vínculos con la Administración Nacional de Educación Pública, a la que ingresaron 2.188 personas; en segundo lugar, se encuentra la Administración de Servicios de Salud del Estado, donde se registraron 488 funcionarios más; le siguen la Universidad de la República, con 305 ingresos y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, con 225. Queríamos dejar sentado que se han aumentado los vínculos laborales con el Estado en carteras en las que, como sistema político, tenemos un acuerdo para seguir atendiendo demandas: educación, salud, INAU, Udelar.

Algunos miembros de la Comisión y también integrantes de esta Cámara han planteado que esta Rendición de Cuentas viene sin la austeridad necesaria. Las frenteamplistas y los frenteamplistas creemos que tiene austeridad en la medida de lo justo y de lo posible.

Se ha mencionado significativamente el tema de cuidar el déficit fiscal. Hace muy poquito tuvimos una instancia en la cual se podía hacer algo al respecto: si había tanta preocupación por disminuir el déficit fiscal, podríamos haber aprobado el proyecto que gravaba las altas jubilaciones militares. Esa hubiera sido una gran contribución para contener el déficit fiscal en esta Rendición de Cuentas. Queríamos decirlo.

Por otro lado, queremos señalar -si uno escucha lo que se está diciendo en esta Cámara, piensa en una película de terror, como se mencionaba anteriormente- que Uruguay no tiene un problema fiscal grave. Siempre debemos preocuparnos por mantener los equilibrios fiscales, pero hoy no tenemos un problema fiscal grave, porque el resto de las variables macroeconómicas se encuentran estables. Es infundado comparar los niveles de déficit fiscal con años previos a la crisis del 2002, porque Uruguay transita el mayor período de crecimiento económico de su historia y la inflación se encuentra a valores estables. Eso ha quedado demostrado -por ese motivo también tenemos que mirar a los vecinos-; debemos reconocer que la política económica del Frente Amplio nos ha legado una independencia muy sana con respecto al resto de los países de la región y sus trayectorias.

Es verdad que el déficit siempre nos ocupa y que tenemos como meta reducirlo -es de público conocimiento; fue parte de lo que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas-, para ubicarnos en niveles de endeudamiento que sean más compatibles con nuestro acceso privilegiado al mercado de capitales, pero no nos encontramos en una situación catastrófica, como se pretende trasmitir. Eso también lo queríamos dejar en claro.

Como mencionaron otros integrantes de la Comisión, he podido participar de la discusión en ese ámbito y también he seguido la elaboración de este articulado. Me reservaré algunas consideraciones particulares porque me he sentido muy representada por la intervención de la miembro informante en

mayoría y de los demás miembros de la Comisión de la bancada del Frente Amplio que han participado, hasta ahora, en el debate.

Por último, quiero reafirmar, una vez más, que en el adverso contexto de América Latina y, sobre todo, de nuestra región, entendemos que esta Rendición de Cuentas es responsable y atiende las urgencias y las prioridades que nos ha trasladado nuestra población.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: me perdí un poco después de todas estas consideraciones generales, pero quiero decir que cuando comenzó a hacer uso de la palabra la señora diputada preopinante hizo una alusión personal y una alusión política que quiero contestar.

Yo soy una de las legisladoras que votó en contra del proyecto de ley integral de violencia basada en género, y se hizo alusión directa a todos quienes votamos en contra y ahora reclamamos dinero para el Poder Judicial.

Voté en contra del proyecto de ley de violencia basada en género porque es un mamarracho jurídico. En su momento dije que era un saludo a la bandera y un ataque a las bases del derecho penal democrático. No voy a repetir lo que ya dije en aquella instancia. Además, se crean dieciocho figuras penales mal definidas. De una manera no del todo técnica pero sí ilustrativa, lo resumí y dije que todos los hombres están en libertad condicional. Reitero que entendí que era un mamarracho y, por lo tanto, voté en contra.

También dije que no fue redactada por un abogado. Si quieren resolver el problema de la violencia, existen políticas sociales; en lo que respecta a leyes, el Uruguay está bien.

Entiendo que se hizo una alusión directa: yo no voté el proyecto, pero sí reclamo recursos para el Poder Judicial. En aquel momento, también pregunté: ¿cómo vamos a sobrecargar al Poder Judicial, cuando no le damos recursos? Eso fue expresado por la Asociación de Magistrados del Uruguay y, más claramente, por el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Udelar, creo que en el Senado.

Esta ley es inaplicable. También lo escuchamos en la Comisión de Presupuestos, de parte de la señora presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Entonces, ¡no nos culpen a nosotros! No podemos crear un solo juzgado; no tenemos personal técnico. Dijimos todo esto desde el principio; por lo tanto, no nos pongan a todos en la misma bolsa. Cada uno debe hacerse cargo de lo que vota.

Ahora me voy a referir a la alusión política. Ninguno de los miembros del Partido Nacional -podría hablar del resto de la oposición, pero solo hablaré de mi Partido- habló de achique del Estado. Esa es una clara alusión política que no voy a permitir. Ponen de ejemplo a la Argentina. En ese país no hay un

achique del Estado, sino que cayó la mafia kirchnerista. ¡Se llevaron puesto al Estado! Quedó claro que eran ciertas las denuncias que se venían haciendo desde 2003. ¡Y la situación era peor, porque no se trataba de US$ 10.000.000.000 -como pensaba la diputada Elisa Carrió, cuando la trataban de loca-, sino que ya andan por US$ 200.000.000.000! ¿O no ven los bolsos y las cosas que están pasando? ¡Termínenla! Yo no me voy a meter a hablar de Argentina ni de Brasil porque vivo en el Uruguay, pero ¡por favor, no se trata del achique del Estado! Se robaron el Estado y, obviamente, ahora tienen dificultades.

Vamos a dejarlo por ahí; en el Uruguay se están cayendo algunos velos.

Se debe tener cuidado, porque esas alusiones además de ser ofensivas, son incorrectas. Cuando uno habla durante la consideración de un proyecto nada menos que de rendición de cuentas tiene que ser lo más técnico posible. Por eso, en general, preferimos callarnos la boca, porque sabemos poco de economía. No queremos payar sobre déficit fiscal. Es mejor dejar hablar a los miembros de la Comisión que nos han representado, que son los que saben; inclusive, los del oficialismo.

¡Cuidado con estas alusiones! Yo no las voy a aceptar a nivel personal ni partidario.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- No puede pedir la palabra para una aclaración porque no habló.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Rodrigo Goñi Reyes.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presidente: me sentí aludido porque yo también voté en contra de buena parte del proyecto de violencia de género debido a motivos respecto a los cuales, lamentablemente, los hechos nos dieron la razón.

En su momento, advertimos que se estaba aprobando una ley que quedaría como un saludo a la bandera y hablamos de *marketing* legislativo. También dijimos que era necesario planificar los medios para concretar la iniciativa. Como decía la diputada Bianchi, días atrás, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, representantes de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación dijeron expresamente que no podían aplicar buena parte de la ley debido a que no contaban con los recursos. Reitero que, lamentablemente, los hechos nos han dado la razón respecto a los motivos nos llevaron a no votar el proyecto.

Además, quiero decir que el déficit fiscal se reduce de dos formas. Como se decía anteriormente, una de ellas es a través de más impuestos. Nosotros creemos que con el presupuesto que tiene Uruguay, de más de US$ 17.000.000.000 -muchísimo dinero-, la mejor forma de bajar el déficit fiscal es gastando y administrando bien. El aumento de impuestos no es la única manera de disminuirlo.

Gracias, presidente.

20.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Civila López.

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Señor presidente: voy a comenzar mi intervención de la misma forma en que lo han hecho mis compañeros, mis compañeras y también legisladores de otros partidos políticos: reconociendo el enorme trabajo que durante las semanas en las que se ha discutido el proyecto en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda han realizado muchas personas, entre ellas, los funcionarios del Poder Legislativo, que en todo momento asistieron la tarea que se desarrollaba.

Asimismo, como han hecho varios legisladores, quiero reconocer especialmente el trabajo realizado por la presidenta de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, compañera Lilián Galán. Ella llevó adelante una gran tarea, con orden y método, lo que facilitó mucho todo el proceso. Además, nos representó muy bien al hacer el informe en mayoría al comenzar esta sesión.

Quiero detenerme un minuto y retomar algunas cosas que Lilián planteaba en el informe, que tienen que ver con algo que mencionaba la compañera legisladora Bettiana Díaz: por primera vez en esta Cámara, la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda es presidida por una mujer. Realmente, no es casual ni debe pasar inadvertido. Por eso me parece importante que lo destaquemos, tanto las mujeres como los varones, porque en estas cosas nos va la vida a todos. Necesitamos que más del 50 % de la población de este país, que ha estado históricamente subrepresentado en los ámbitos de dirección, de conducción política y en muchos ámbitos sociales, sea efectivamente reconocido en su real capacidad y militancia; lo que sucede es que muchas, muchísimas mujeres militan todos los días en organizaciones sociales y políticas y pocas son las que acceden a sitiales de representación, dirección y conducción. Por efecto de la lucha social esto ha cambiado y seguirá cambiando.

Cuando exista una efectiva igualdad de posibilidades, es probable que muchos de los puntos que sobre este tema hoy discutimos hayan pasado de moda o no sea necesario mencionarlos, pero hoy es menester hacerlo e insistir -como hacía Lilián en su intervención- en que dichas posibilidades no se dan mágicamente ni por efecto de méritos personales de cada uno de nosotros o de cada una de las mujeres, en este caso, sino como producto de un acumulado de luchas históricas que dan lugar a este tipo de transformaciones.

La Presidencia de la Comisión es un símbolo, nadie está diciendo que cambie sustantivamente la realidad de las mujeres que sufren todos los días situaciones de vulneración de sus derechos, de discriminación, de ataques a su dignidad, pero sin duda también para nosotros, en este ámbito, es un avance y una señal, y en esa línea tenemos que seguir profundizando.

Dicho esto, quiero señalar que los compañeros diputados y las compañeras legisladoras del Frente Amplio que han hecho uso de la palabra han dicho casi

todo lo que había que expresar sobre el proyecto de Rendición de Cuentas en sí, de modo que trataré de ser conciso. Reiteraré algunas cosas, me remitiré a aspectos que ya fueron mencionados por otros y haré algunas valoraciones políticas que tienen que ver con el análisis que el Partido Socialista hizo de esta Rendición de Cuentas y, en particular, con el que hemos venido haciendo quienes en la Comisión representamos a nuestro Partido.

Sin lugar a dudas, el proyecto de Rendición de Cuentas es muy importante para la vida del país. Cada rendición de cuentas nos da la oportunidad de analizar, de forma minuciosa y detallada, la ejecución del gasto público del que tanto se habla y que es muy importante sea parte del debate político, y también nos permite proyectar la ejecución del gasto público a futuro. Además, en este caso, estamos hablando de una rendición de cuentas especialmente importante, porque es la última con aumento del gasto en esta Legislatura.

Quiero señalar, como un aspecto sustantivo, importante, que una vez más la rendición de cuentas nos ofrece, a través del Informe Económico Financiero que precede al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, un análisis riguroso de la ejecución presupuestal del año anterior y de la evolución del Presupuesto del Estado en los últimos años. En esta Rendición de Cuentas y, más específicamente, en su Informe Económico Financiero, no vemos solo una foto, sino una película, una trayectoria, una evolución del gasto público y un análisis de cómo ha impactado en las condiciones de vida de las personas reales y concretas que viven en este país, cosa que me parece muy importante no perder de vista.

El análisis del Informe Económico Financiero -en el que hemos profundizado en estos días- muestra una serie de tendencias innegables que cada año reafirmamos. No lo vamos a reiterar. La más significativa es el crecimiento del gasto público social -me gusta hablar de inversión social- en relación con el producto del país y el presupuesto nacional.

Esta tendencia se ha verificado cada período de gobierno desde que el Frente Amplio está a cargo del Gobierno nacional; en estos años, en una coyuntura distinta -como bien señalaban otros compañeros-, también se ha verificado.

Como también se ha mencionado en el debate y como ha quedado demostrado por sendos estudios -inclusive, académicos y de distintas procedencias-, esta tendencia, este cambio en la composición del gasto público, este incremento del gasto público social en relación con el producto y el presupuesto nacional, ha sido una herramienta fundamental -la más importante desde el punto de vista cuantitativo- para la redistribución del ingreso en el país y para la mejora de las condiciones de vida de las mayorías. Esto es algo que tampoco podemos dejar pasar, que tampoco podemos dejar de decir por más que ya se ha reiterado porque, una y otra vez, cuando se discute el presupuesto, vuelven los planteos sobre una suerte de hipertrofia del gasto público: "Bueno, gastamos demasiado. El gasto público es demasiado elevado". No se sabe muy bien a qué componentes del gasto público se refieren algunos señores legisladores y algunas señoras legisladoras, pero insisten en esto. La realidad es que en otros países, cuando llegan al gobierno fuerzas políticas que sostienen ese discurso, se produce un recorte del gasto público que, en

general, afecta el gasto público social. Esta no es una máxima irrevocable; no podemos pensar que, como sucede en otros lugares, tiene que pasar en todos lados, pero es algo reiterado. Entonces, uno piensa que ese peligro está presente. Queremos prevenirlo y por eso lo reiteramos. Por eso, varios compañeros y compañeras mencionamos este aspecto que, además, se desprende de las palabras de algunos integrantes de la Cámara y de los planteos de algunos partidos políticos del país.

La realidad es que en países vecinos -lo vuelvo a mencionar porque creo que corresponde hacerlo, pues no vivimos en una isla- el gasto público social se está afectando grandemente. Y no solo se está afectando el gasto público social, sino los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, y se han hecho salvajes ajustes por distintas vías. Tenemos un desorden macroeconómico brutal, administrado de esta manera por fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo que venían a ordenar lo que otros habían desordenado. La realidad que se plantea en la región, en particular, en los países vecinos, es gravísima desde el punto de vista social y está determinada directamente por la afectación del gasto público, por el ajuste de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras y por una situación macroeconómica que se está deteriorando de manera acelerada; basta analizar la evolución de la deuda pública y del déficit fiscal, variables que una y otra vez se mencionaban como preocupantes cuando se aludía a gobiernos anteriores. Y eso está pasando ahora. En cualquiera de estos países, el discurso de la pesada herencia se está agotando, porque los hechos demuestran que cuanto más avanzan las políticas que estas fuerzas quieren implementar, más se deteriora la situación en lugar de corregirse.

¿Qué ha pasado en nuestro país, señor presidente? Lo que ha pasado es que las tendencias de las que hablábamos se siguen verificando, aunque se han enlentecido en los últimos años. Y esto también lo quiero decir porque me parece que tenemos que hacer referencia a toda la realidad y no solo a una parte de ella. En estos años se han verificado algunas de esas tendencias de las que venimos hablando, se siguen registrando, pero se han enlentecido. Podemos observar una moderación en las tasas de crecimiento del país y un deterioro -lento, pero deterioro al fin- de algunos factores que tienen que ver con la situación fiscal. Entonces, atendiendo esta situación, el planteo que el Poder Ejecutivo nos hace llegar en la Rendición de Cuentas sostiene una trayectoria de crecimiento del gasto público social, pero modera esa tendencia con relación a lo que vivimos en períodos anteriores.

Sin duda, este dato lo tenemos explicitar y poner sobre de la mesa para discutir qué hacer con él. Claramente, esta situación no se corrige con un discurso o un planteo maximalista que pide atender todas las demandas y, a la vez, disminuir el gasto público. Ese discurso es autocontradictorio, no puede sostenerse, es falaz. Quien lo sostiene no sabe o miente, porque no se pueden atender todas las demandas y, a la vez, mejorar la situación fiscal y los indicadores macroeconómicos que tienen que ver con la relación entre ingresos y gastos. Esto se podría hacer si hubiera una modificación sustantiva de los ingresos del país. Sin duda, esas modificaciones, políticamente, se pueden llevar adelante, pero en forma sistemática han contado con la oposición virulenta de algunos sectores que luego hablan de la necesidad de atender

todas las demandas y, a la vez, de mejorar la ecuación fiscal; ahí hay un problema.

Por lo tanto, debemos salir de esa contradicción, de esa encrucijada. Para ello necesitamos pensar -ojalá todos estuviéramos de acuerdo en esto; yo creo que no es así- cómo hacer para que el país siga incrementando su gasto público social -y mejorando su eficiencia-, a fin de transformar las condiciones de vida de las mayorías, de mejorar la situación de los que están peor y, a la vez, sostener ese incremento con una ecuación fiscal razonable.

¿Cómo lo podemos hacer? Ese es un debate que debemos dar, y que implica discutir la política de ingresos -como planteamos cada año- y la calidad del crecimiento del país. Es decir que no solo debemos discutir cuánto crece el país, sino cómo lo hace y en qué sectores, qué empleos genera y de qué calidad. En realidad, implica discutir la base productiva, la base material y cómo se organiza la producción en Uruguay. Esa discusión es de fondo y requiere de mucho coraje y valentía, ya que se deben enfrentar intereses poderosos. Ojalá en el futuro podamos reunir un amplio arco de voluntades que estén dispuestas a sostener este debate político y la confrontación que haya que dar para resolver esa contradicción.

Yo soy de los que creen que si no discutimos la calidad del crecimiento del país, si no transformamos la base productiva -sabemos que vivimos en un mundo dificilísimo, en el que es muy fácil proclamar estas cosas, pero complicado llevarlas a cabo-, será muy difícil sostener esa trayectoria. De todos modos, también soy de los que creen que solo de la mano de una fuerza política con vocación de transformación social y que se identifique con los intereses de las grandes mayorías nacionales ese cambio podrá seguir adelante.

No soy de los que piensan -sería muy iluso; alguien habló de Alicia en el país de las maravillas, y sería algo así- que las fuerzas políticas que representan a sectores que sistemáticamente han defendido una forma de organizar la base productiva del Uruguay que ha generado desigualdad y ha regado de pobreza el país son las que llevarán adelante ese cambio o sostendrán y profundizarán estas trayectorias que para nosotros son tan importantes. Por lo tanto, creo que tenemos que dar ese debate. Alguien habló del debate en el seno de la Comisión Programática del Frente Amplio, y allí se está dando esta discusión, señor presidente. Invitamos a todos los que quieran discutirlo a que lo hagan abiertamente, sin miedo, sin temor, diciendo dónde está parado cada uno. Sabemos que hay legisladores que integran bancadas de la oposición que, de pronto, están de acuerdo con algunos de estos puntos de vista; entonces, discutámoslos, pero no nos hagamos trampas al solitario con discursos que se caen solos porque no son consistentes, ya que critican por una cosa y también por la contraria. Debemos resolver esa contradicción profundizando lo que hemos logrado hasta ahora. En realidad, tenemos un piso que se elevó y que ahora nos demanda, nos exige y nos desafía más; requiere un análisis más cualitativo y más profundo. Además, requiere que se construya una correlación de fuerzas sociales y una visión predominante en la sociedad que nos permita ir más a fondo y no quedarnos en la superficie.

Nosotros creemos que ese debate es clave para el futuro del Uruguay y estamos dispuestos a darlo en la interna de nuestra fuerza política hacia fuera y

con las fuerzas sociales que son parte del bloque popular que consideramos puede sostener este cambio.

Asimismo, creemos que ese cambio no debe ser solo distributivo, sino de relaciones de poder, ya que esas relaciones, en el país, han cambiado a favor de las mayorías. De todos modos, consideramos que tienen que cambiar más a favor de esas mayorías, democratizarse y socializarse más.

Cuando se dice esto algunos miran como diciendo: "Ese es un discurso viejo, porque ahora de poder no se puede hablar; si hablamos de poder parece que estamos hablando de estatismo, del muro o de no sé qué historia". No; hablar del poder es hablar de la política en serio, no solo de la política electoral, no de *marketing* electoral, de cuál es la mejor cara, el mejor candidato, la mejor candidata o cómo competimos en una especie de feria de vanidades para ver quién es más lindo y quién califica mejor para estar en un lugar determinado. No; tenemos que discutir sobre las relaciones de poder que hay en la base misma de la sociedad, sobre cómo organizamos las relaciones sociales y las cuestiones de género, que también están presentes en estos debates. Eso es discutir las relaciones de poder en profundidad, y a esa discusión nosotros no le rehuimos; por el contrario, queremos darla.

Esto también tiene que ver con la rendición de cuentas; no estamos hablando de cualquier cosa, señor presidente. Cualquier debate que demos sobre el presupuesto del Estado, sobre los programas que este lleva adelante, en última instancia, tiene que ver con esta discusión y con la vocación que cada una de las fuerzas políticas y sociales tiene con relación a estos debates.

Por otra parte, quiero decir que votamos esta Rendición de Cuentas -hoy lo haremos en general; luego, en particular, y también acompañaremos lo que votamos en la Comisión- con convicción, pero sin triunfalismo. Nosotros no venimos a votar esta Rendición de Cuentas diciendo que es una de las siete maravillas del mundo y que no se puede hacer nada mejor. No; no venimos a decir eso. Venimos a decir lo que pensamos: que se trata de una buena Rendición de Cuentas para la situación que atraviesa el país y para la situación política y social existente, pero que es moderada en el incremento del gasto público. Por lo tanto, es una Rendición de Cuentas que abre una brecha en cuanto a algunas necesidades, demandas y compromisos que nos habíamos planteado. Me parece que lo primero que hay que hacer es reconocer esa situación.

Sin duda, algunas de las cosas que queremos hacer -estamos convencidos de ello- no están previstas en esta Rendición de Cuentas. Es cierto que no hemos podido con todo y hay que decirlo. También hay que decir que esta Rendición de Cuentas ratifica las prioridades del programa de gobierno del Frente Amplio, y que, una vez más, asigna los recursos incrementales a la educación, al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, a la salud, a la vivienda y a áreas programáticas que para nosotros son fundamentales y que no fueron priorizadas en otros períodos de gobierno, inclusive, con escenarios de crecimiento similares a los que Uruguay tiene en la actualidad o mejores; sin embargo, hoy se priorizan.

En ese sentido, varios compañeros legisladores hicieron referencia a los montos, a los porcentajes y a las asignaciones previstas. ¿Que están por debajo

de lo que quisiéramos? Sí, están por debajo de lo que quisiéramos, y por eso durante este período de debate parlamentario trabajamos para mejorar la Rendición de Cuentas.

Por otra parte, me quiero referir a lo que nuestra fuerza política ha hecho en la Cámara para tratar de mejorar este proyecto de ley, sin por ello desconocer los esfuerzos o el trabajo que puedan haber hecho otros. En el gasto previsto en la Rendición de Cuentas hemos logrado un esquema de reasignaciones que refuerza las prioridades que mencionaba hace un momento, como por ejemplo la educación, con asignaciones para la ANEP que no estaban previstas, para cubrir nuevo personal y nuevos cargos en infraestructura que se inaugurará, porque en el Uruguay se invirtió en nueva infraestructura y porque aumenta la cobertura en la educación pública.

Como decía la compañera Lilián Galán en su informe, en metas que tienen que ver con la cobertura, en algunos tramos etarios, estamos por encima de lo que habíamos previsto. Aumentó la cobertura incluso más de lo que nos habíamos fijado como objetivo. ¿Cómo vamos a cubrirlo sin deteriorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, la relación estudiante-docente, el tamaño de los grupos, sin asignar recursos a cargos en la nueva infraestructura? Esta era una carencia, una debilidad de la Rendición de Cuentas, y la corregimos. Hicimos un esfuerzo con los compañeros del Poder Ejecutivo y logramos corregirla.

También logramos dar una señal en materia de reducción de inequidades históricas en la Administración Nacional de Educación Pública. No fuimos nosotros quienes generamos esas inequidades, porque no son nuevas; algunas, por cómo se han ido dando los aumentos salariales, han aumentado y nosotros damos una señal. Decimos que el 3,5 % también se dé sobre la unidad compensada a los maestros de tiempo completo, a los cargos básicos en escuelas agrarias de UTU. Decimos que tenemos que empezar a resolver el problema de la inequidad que se presenta con los adscriptos, con los ayudantes preparadores, con los profesores orientadores pedagógicos. Se trata de demandas históricas, y nosotros avanzamos en esa dirección; no todo lo que hubiéramos querido, pero avanzamos en esa dirección.

Discutimos fuertemente una serie de artículos que enviaban a la ANEP unos programas de Presidencia de la República que tenían que ver con la salud escolar. Independientemente de la evaluación que se pueda hacer de estos programas, dijimos que no queremos que la ANEP, una vez más, como en otras épocas -hecho que criticamos fuertemente-, se llene de programas que no tienen que ver con contenidos educativos ni con sus fines. Discutimos eso, logramos que se modificara, y estos programas van a ir a la Administración de Servicios de Salud del Estado, donde tienen que estar, porque el Estado dispone de organismos especializados para hacer las tareas que tienen que ver con la salud y corresponde que la salud de los uruguayos, sin importar si son pobres o no, la atiendan los organismos que tienen que ocuparse de la salud, que están especializados y cuentan con el equipamiento y el personal para eso. Entonces, estos programas van a ir a ASSE y no a otro ámbito. Eso lo logramos discutiendo en un marco de autonomía, con un concepto de lo que tiene que hacer la bancada de gobierno: no solo votar lo que el Poder Ejecutivo manda, sino discutirlo, mejorarlo y trabajar en una dirección que nos permita decir que

lo que sale de este Parlamento es mejor que lo que vino. Creemos en ese rol y lo hemos reivindicado año a año en la discusión de la rendición de cuentas; una vez más entendemos que ha dado sus frutos en algunas discusiones que como bancada hemos asumido y que nos parece mejoran la propuesta.

Hemos incluido una cláusula programática que faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los salarios de los trabajadores de la ANEP en el año 2020, en el caso de que se den una serie de circunstancias que están asociadas al crecimiento del país y a la mejora de la situación fiscal. Hubiéramos querido financiar ese aumento con dinero concreto y trabajamos para eso, pero no lo logramos. En cambio, conseguimos esta cláusula. Es una señal política, una ventana que se abre para que esto pueda efectivamente concretarse, y nos esforzaremos para que suceda.

Trabajando con los compañeros de ASSE y del Poder Ejecutivo logramos, además de lo que venía en la Rendición de Cuentas, reasignar una serie de recursos en ASSE para empezar a implementar la ley de salud mental, una norma muy importante que votamos en esta Cámara y que queremos se transforme en hechos y no sea solo un avance manuscrito.

También conseguimos, trabajando con los compañeros del Poder Ejecutivo, dirigir los recursos para becarios dispuestos en el Inciso del Ministerio del Interior, a fin de atender casos de violencia de género. Esto refuerza los recursos que tendremos para implementar la ley que nosotros votamos y que, porque la votamos, nos parece fundamental financiar. No voy a entrar en la discusión de lo que hacen los que no votaron la ley, que pueden plantear lo que les parezca conveniente. Es cierto que las leyes se votan para llevarlas adelante y que necesitan recursos. La peor inconsistencia sería que nosotros, que la votamos, no la financiáramos. Estamos haciéndolo; tenemos que profundizar en esto, pero hemos logrado un avance en esta materia.

Hemos conseguido algunos recursos adicionales para la Fiscalía, para la implementación del Código del Proceso Penal, para la apertura de nuevas fiscalías en el interior del país con relación a delicadas situaciones que se están dando, y esto también tiene que ver con nuestras prioridades. Hemos incluido un artículo, en el régimen de donaciones especiales, que topea el porcentaje de recursos destinados a las donaciones especiales que se puede llevar cada institución que figura en la lista. Lo hicimos porque, si existe un mecanismo de este tipo -ahora no vamos a entrar en la discusión de fondo—, no nos parece justo que algunas instituciones se lleven el 30 % o el 40 % de los recursos, que se reparta entre dos o tres. Creemos que los recursos tienen que distribuirse mejor, y por eso establecimos un tope sin afectar los que tienen las instituciones que están en la lista. Hemos trabajado en esto, y nos parece un avance, una mejora.

También hemos trabajado en incluir algunos tipos de licencia que no estaban contempladas en el Estatuto del Funcionario Público, como la licencia por tratamiento de reproducción humana asistida o por violencia de género, para ponerlo a tono con la legislación que hemos votado, que tiene que ver con los nuevos derechos que han ganado los uruguayos y las uruguayas durante estos años, también en esas materias.

¿Cómo lo financiamos? Con ajustes de gasto en la Administración central, no de cualquier manera, sino de forma selectiva, con recortes que no afectan el funcionamiento sustantivo de los incisos y con recursos del Fondo de Estabilización Energética que, como usted sabe, señor presidente, están afectados en gran medida al proyecto del ferrocarril central, debate que podremos dar en ocasión de la discusión particular de esta Rendición de Cuentas.

En esta instancia venimos a reafirmar nuestra vocación y nuestro compromiso con la lucha por el trabajo de calidad para los uruguayos. Sabemos que hay problemas de empleo en el país; lo reconocemos; está planteado en la Rendición de Cuentas y seguiremos trabajando para mejorar esta situación.

Venimos a reafirmar nuestro compromiso con los uruguayos y las uruguayas que sufren situaciones de abandono, de desprotección social, y por eso también damos prioridad a los programas sociales.

Venimos a reafirmar nuestro compromiso con los uruguayos y las uruguayas que sufren violencia; con el incremento del salario de los trabajadores; con los más vulnerados; con los trabajadores uruguayos; con los afectados en su dignidad y en sus derechos; con los niños, con las niñas y con los adolescentes; con todos los que siempre han sido parte de nuestro compromiso fundamental.

Por estar hoy discutiendo este proyecto de Rendición de Cuentas, no podré participar, como no lo podrán hacer muchos compañeros, de la marcha que año a año se realiza conmemorando a nuestros mártires estudiantiles. Pero hoy, 14 de agosto, queremos decir una vez más que estamos ahí, comprometidos con esas luchas, con esa memoria, con esa verdad, con esa justicia y, además, con el legado y con el compromiso que nos dejaron aquellos que murieron asesinados en situaciones muy distintas del Uruguay y por los cuales nuestra lucha también tiene sentido.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: pedí la palabra para aclarar algo, porque si no se cambia la discusión.

En nuestro informe, en nombre del Partido Nacional, jamás se habló de bajar el gasto público social. Simplemente hablamos de racionalizar y de tener una mejor calidad del gasto, y por eso mencionamos muchos errores de gestión que terminaron en problemas, por ejemplo, Ancap, Pluna, Fondes, etcétera. También hablamos de ASSE, porque se destaca que hay más dinero para dicha Administración, pero también tuvimos problemas graves, por ejemplo, con las ambulancias.

Ese gasto lo queremos bajar, y no el gasto social, y usarlo mejor. Lo mismo dijo el ministro Astori cuando afirmó que más que el gasto le preocupaba la calidad del gasto.

Para hablar de un ejemplo más reciente, la señora ministra Arismendi, al referirse al problema alimentario, dijo que el Ministerio de Desarrollo Social se hizo cargo del INDA y que comenzó un proceso de "racionalizar recursos e identificar" -dice- "solapamientos" -nosotros llamamos superposición- "entre programas, lo que permitió una enorme mejora de la gestión y de la calidad del gasto". Esta es la cuestión; a esto nos referimos.

También se hizo referencia a otros artículos; tenemos otra posición y lo consideraremos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- La Mesa quiere destacar y saludar la presencia en la segunda barra de estudiantes de quinto y sexto año del Liceo Nº 1 de la ciudad de Progreso.

Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Zavala.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Señor presidente: al igual que el señor diputado Civila López quiero saludar a las estudiantes y a los estudiantes, a los gremios y a las asociaciones estudiantiles, donde aprendimos a organizarnos, a discutir y a construir propuestas, en definitiva, a intentar cambiar esta sociedad, luchando por una más justa.

Nos parece razonable pensar que lo siguen haciendo, porque ahí radica un pulmón de la sociedad, donde pueden surgir, además de ideas, militantes y colaboradores, porque ahí hay una reserva. Se habla de reserva moral, de instituciones centenarias: si hay una reserva moral, son nuestros jóvenes, nuestros estudiantes.

Es difícil intervenir en esta discusión, en esta última Rendición de Cuentas, como manifestaron algunas diputadas y algunos diputados preopinantes, con expansión de gasto sin mirar la trayectoria, el recorrido. Esta es una etapa más, un paso más en trece años de gobierno frenteamplista, un mojón, y quizás también es el momento de hacer algún análisis de hasta dónde hemos llegado, de las cosas que hemos hecho, y de hacer autocrítica de lo que ha quedado por el camino y de lo que no hemos podido cumplir, de lo que nos hubiese gustado profundizar y no logramos.

También queremos decir que el Frente Amplio encontró un país complicado cuando accedió al Gobierno en 2005, con un estado de bienestar que había sido desmantelado por la dictadura y también por los gobiernos posdictadura de los partidos tradicionales, gobiernos de coparticipación, de colaboración, de gobernabilidad, como se decía entonces, que fueron aplicando -no me gustaría decir una receta- un modelo que implicaba librar más cosas al mercado y restringir el papel del Estado a sus funciones esenciales, primigenias, dejando a mucha gente -que no tenía capacidad de defenderse ante los avatares del mercado- librada a la indefensión, a una situación de vulnerabilidad que tuvimos que revertir. Y quizás allí gastamos nuestras primeras y mayores energías.

Hoy se hizo referencia al Plan de Emergencia, a las primeras políticas sociales que establecimos, pero no debemos olvidar la reforma tributaria, que no solo es un instrumento, sino un fin porque parte de la política pública de un gobierno de izquierda implicaba -e implica- redistribuir el peso del estado de bienestar que queremos construir. Se ha discutido mucho si aumentamos o no

los impuestos, si en la última campaña electoral dijimos que no íbamos a poner más impuestos; no hay forma de construir un estado de bienestar sin impuestos: el Estado no lo hace. Precisamente, la distribución de los impuestos y su carga es lo que importa: si se hace de una manera justa, donde pagan más los que tienen más y los que ganan más, o pagamos todos por igual, sin importar la condición en la que nos encontremos, para financiar un pequeño Estado del que se beneficiarán unos pocos.

Creo que ese ha sido el centro de la política del Frente Amplio: la reconstrucción de un estado de bienestar, con políticas públicas, y su expansión. Lo expandimos cuando creamos el Seguro Nacional de Salud y cuando estamos desarrollando e implementando el sistema de cuidados, que parece un capricho de la izquierda, un gusto; no es así. El sistema de cuidados es una política fundamental para expandir el estado de bienestar, y también como herramienta de igualdad de género. Con este sistema estamos atacando la desigualdad de los hogares, porque son las mujeres quienes se encargan del cuidado de los niños, de las niñas, de los viejos y las viejas, de los enfermos. Hemos sacado a relucir este fenómeno, invisible y natural para la sociedad, que ponemos en debate con la política social de cuidados.

Cuando los recursos escasean -como ahora-, cuando no crecemos a la tasa de años anteriores, se dificulta establecer las prioridades, y esa es la discusión que hemos tenido en las últimas rendiciones de cuentas y también en la ley de presupuesto. Con tasas de crecimiento menores, obviamente, debemos discutir mucho las prioridades y reasignar gastos, y quizás ahí radique una de las críticas más importantes que como sector hemos hecho a nuestro Gobierno. En efecto, hemos discutido las preasignaciones, que vienen establecidas, que son inerciales, y a veces cuesta mucho discutir. Cuesta mucho discutir cuando los recursos abundan, porque es más fácil repartir el incremento, y también cuando los recursos disminuyen, ya que se empiezan a tocar otros intereses que estaban consolidados o que vienen con un soporte político y social de mucho tiempo.

Se han dicho muchas cosas de estos trece años de gobierno del Frente Amplio. Se nos ha dicho que tuvimos viento de cola, lo que es cierto. Es indiscutible que el aumento de las materias primas a nivel internacional, el crecimiento chino y la expansión del comercio internacional han sido muy beneficiosos para lo que producimos en Uruguay. No menos cierto es que eso ha cambiado un poco. El ciclo económico no es el mismo y, obviamente, los países en desarrollo, las economías emergentes, no tienen la misma capacidad de insertar sus productos en las economías desarrolladas. Me parece que en eso hay consenso, al menos en el sistema político, señor presidente.

La discusión es qué hacemos cuando pasa esto. Creo que, más allá de la realidad regional, Brasil y Argentina en particular son países muy distintos al Uruguay en cuanto a su sistema político, su sistema de protección social, su sistema de funcionamiento de las instituciones. Las diferencias son importantes. En eso creo que también todos podemos estar de acuerdo. Es claro que no soportaron el cambio de ciclo. Uno podrá decir: bueno, se equivocaron; sí, se equivocaron los que estaban antes, pero se están equivocando también los que vinieron después, porque no es la receta ni el modelo de Macri o de Temer lo

que está sacando a las sociedades brasileña y argentina de la situación en la que han caído.

En cambio, nuestro país, pequeño e insignificante está sorteando el temporal sin viento a favor, sin viento de cola, y ahora con viento en contra y turbulencias. Es por eso que ahora destacamos la prudencia. Obviamente, como decían compañeros legisladores de la bancada del Frente Amplio, aspiramos a más, nos gustaría hacer más cosas. Nos gustaría cumplir con el 6 % para la educación, con el 1 % para la investigación; por supuesto. Dijimos que queríamos hacerlo y seguimos queriendo hacerlo, pero la prudencia es importante para que el avión no se caiga, porque el viento y las turbulencias pueden detenerlo. Todos sabemos que un avión que se detiene es un avión que cae por la fuerza de gravedad; y todos sabemos que la fuerza de gravedad nos lleva a resultados que no queremos, porque las crisis las pagan los más pobres.

Esta prudencia que algunos nos critican, y de la que estamos convencidos, es la que creemos que nos va a permitir mantener lo que hemos conseguido y seguir avanzando, quizás no al mismo ritmo, en nuestras prioridades, que siguen siendo, claramente, la salud del pueblo, la educación del pueblo, las jubilaciones, la vivienda. Son objetivos grandes, pero nítidos y una vez más los estamos priorizando. Los priorizó el Poder Ejecutivo en el mensaje que envió y también lo priorizamos ahora cuando discutimos una reasignación humilde, modesta. Tiene razón el señor diputado Penadés en cuanto a que redistribuimos mucho menos que en otras rendiciones de cuentas, pero fue un esfuerzo que hicimos y que vale la pena destacar, porque también fue una redistribución hecha en acuerdo dentro de la bancada del Frente Amplio, con los matices y las diferencias que tenemos, pero compartiendo el rumbo general y las prioridades.

Quisiera hacer referencia a unas pequeñas cifras, a unos pequeños números, que están en el Informe Económico Financiero y que todas las diputadas y todos los diputados habrán leído, y dan cuenta de lo que mencionaba el señor diputado Civila López en cuanto a nuestro rumbo, al destino.

——Para sostener que tuvimos que revitalizar el estado de bienestar que había sido desmantelado y expandirlo, quiero decir que entre 2005 y 2017 el gasto público social se incrementó en un 137 % en términos reales. En ese mismo período, el gasto en educación pasó del 3,1 % al 5 % del producto bruto interno. En salud, pasamos del 4 % al 6,4 % del producto bruto interno; y en seguridad y asistencia social, del 11,4 % al 13,4 %. Esto, acompañado de un aumento importante de las pasividades, de los montos de las pasividades, del monto de la pasividad mínima, de los montos generales, y también de las pasividades, contadas una a una.

Tenemos un 25 % más de pasividades, porque el Frente Amplio impulsó una ley para flexibilizar el acceso a todos aquellos que no tenían los años suficientes, que habían trabajado en negro y a quienes el patrón no había hecho los aportes. Eso terminó redundando en un aumento del gasto en seguridad social, y del 25 % más de personas jubiladas. Eso tuvo una consecuencia muy importante y es que, en la actualidad, con las otras políticas públicas bajaron los niveles de pobreza de las personas mayores de sesenta y

cinco años, de un 14 % a 1,3 %. ¡Vaya caída! Casi diez veces en doce años de gobierno. Eso denota las políticas activas, públicas del Estado de gobierno, y va acompañado de la otra política redistributiva más importante que ha tenido el Frente Amplio, que es la política del incremento salarial, que no se ha hecho a dedo ni por decreto. Lo hemos hecho acompañando la movilización social, la sindicalización, la agremiación. Reinstalamos los Consejos de Salarios para que empresarios y trabajadores discutieran acerca de la apropiación de la renta.

Más temprano se hablaba, señor presidente, de que los impuestos son pagados por la gente. Sí, el IRPF lo paga la gente, pero el IRAE también lo paga la gente, porque toda la riqueza se produce con trabajo. El primer impuesto que pagan los trabajadores es la plusvalía, el plusvalor que los empresarios ganan, y de esa ganancia pagan a través del IRAE. Los trabajadores pagan todo.

Esa política de negociación colectiva, de estímulo a la agremiación, de facilitación de la negociación llevó un incremento del salario real de más de 55 %. Seguramente, esa es la política redistributiva más importante que ha impulsado el Frente Amplio desde su gobierno. ¡Y vaya si ha tenido repercusión en el consumo, en las condiciones de vida, en la autopercepción de las ciudadanas uruguayas y de los ciudadanos uruguayos, que sienten que son un poco más parte de la sociedad y un poco más parte de la redistribución de los recursos que generan!

Llegamos, entonces, a esta Rendición de Cuentas en una situación de disminución de crecimiento, con un gasto endógeno comprometido muy importante, porque el aumento de las pasividades se lleva la parte importante del crecimiento; porque las políticas públicas, como el Fonasa, que definimos y hemos implementado, también se lo llevan; porque, obviamente, tenemos inercias relacionadas con los salarios públicos que ahora se ajustan, indefectiblemente, al menos por inflación. Recordemos que antes, en cada rendición de cuentas, los funcionarios públicos tenían que pelear por recuperar lo que había perdido por inflación. Ahora eso no está en discusión. En todo caso, la discusión es por cuánto crece su salario por arriba de eso, pero el IPC, la inflación, lo tienen asegurado por ley. Ya no es discrecional, ni del Poder Ejecutivo, ni de cómo le vaya a la negociación. Es algo que hemos establecido por ley, con los votos de los legisladores frenteamplistas.

En todos estos años ha habido un montón de logros y también hemos cometido errores que, como usted bien sabe, algunos de nosotros hemos manifestado públicamente.

Tenemos una discrepancia importante con el gasto militar, en lo que se destina al Ministerio de Defensa Nacional y en lo que nos cuesta la mal llamada caja militar. En ese sentido, en algunos casos, hemos estado omisos porque no hemos reformado la caja militar, teniendo los votos para hacerlo, y en el caso del Ministerio de Defensa Nacional no hemos disminuido el presupuesto como entendemos que deberíamos haberlo hecho. Entre la caja militar y el Ministerio de Defensa Nacional, estamos hablando de más de dos puntos del producto.

En este país hay más militares que maestros; tenemos un número de militares per cápita como si fuésemos un país en guerra. Esa, obviamente, es una herencia de los once años de dictadura cívico-militar, que -justo es decir-

hemos ido disminuyendo en todos los gobiernos democráticos posdictadura. Quizás la discusión y la diferencia que tenemos sea con la tasa de disminución, su énfasis y su ritmo. Y en este momento, cuando los recursos son menores y cuando lo que podemos obtener por el crecimiento es menos, es cuando más insistimos en que tenemos que disminuir el gasto en defensa.

Advierta, señor presidente, que si de esos casi dos puntos y medio del producto que destinamos a defensa pudiésemos reducir un punto, hoy estaríamos cumpliendo con el prometido 6 % para la educación. Sé que no es fácil, y que el poder no está solo en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial. El poder está en muchos ámbitos de la sociedad y está bien disputar el poder en todos lados porque la hegemonía tampoco se construye solo acá. A nuestro juicio, aquí se construye una parte pequeña de la hegemonía. Se construye hegemonía cuando se votan leyes, también se construye hegemonía cuando se discute acerca de ellas, cuando se defiende su implementación y cuando se demandan recursos para ello, tal como nos está demandando la sociedad ahora para implementar la ley de violencia de género o la de salud mental, para la que por suerte en esta discusión acerca de redistribución de recursos hemos conseguido algunos para iniciar su implementación.

Esos son avances legales, como los que también hemos tenido en períodos anteriores con la ley de salud sexual y reproductiva, con la legalización de la marihuana o con el matrimonio igualitario, y podría seguir enumerando leyes que representan avances en derechos y, especialmente, en hegemonía, porque así como cuando votamos la ley de salud sexual y reproductiva la mayoría de la población discrepaba con ella, hoy la mayoría de la población está de acuerdo. Y ese fue un avance legal, y también un avance en cuanto a hegemonía de la sociedad. La sociedad piensa distinto y así es que avanzamos de verdad: cuando logramos convencer a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas de que lo que queremos hacer e impulsamos es lo mejor para la sociedad. Con toda seguridad, esa ganancia en hegemonía sea también el freno para evitar revertir los procesos políticos y sociales que hemos impulsado el día que no estemos más en el gobierno; el día en que definitivamente la sociedad no nos dé esa responsabilidad tendremos que defender los derechos conquistados y lo que hemos construido en las calles, con la gente organizada.

Quisiera terminar, señor presidente, destacando lo que han dicho otros compañeros y otras compañeras acerca de esta Rendición de Cuentas, y es que reafirma el rumbo, mantiene las prioridades y las enfatiza, aunque queda con algunos debe. Creo que en la bancada de gobierno somos todos conscientes de los debe; no hay ningún compañero o ninguna compañera autocomplaciente; algunos hacen más énfasis en algún tema, mientras que otros y otras lo hacen en otros, pero me parece que es claro que, a pesar de que estamos contentos, nos quedamos con sabor amargo en el sentido de que nos faltan cosas por hacer y que vamos a finalizar este período de gobierno con compromisos incumplidos. Eso no hace más que reafirmar nuestra vocación de seguir trabajando para cumplirlos, para expandir derechos y políticas públicas y para continuar haciendo lo que creo ha sido la política pública general más importante que es la construcción, el restablecimiento y la expansión de un estado de bienestar que tuvo sus orígenes en los gobiernos batllistas de

principios del siglo XX y que el Frente Amplio ha venido a rescatar de las cenizas en las que lo dejaron, expandiéndolo y reconstruyéndolo desde una mirada solidaria y constructiva que apunta a integrar a los desintegrados y que pretende ser el sostén de los más débiles.

Señor presidente: hasta aquí, mi intervención.

22.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Sebastián Andújar.

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Señor presidente: creo que es de orden saludar, felicitar y agradecer a los funcionarios que trabajaron en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, y también a su presidenta, no solo por una cuestión de género, que no se debería tener por qué resaltar, sino por el trabajo que ha realizado. También me gustaría agregar algo que nadie ha comentado, y es que tuvo que enfrentar quizás la mitad de ese trabajo con una gripe muy fuerte y con un malestar de salud importante.

Sin dudas -tal como se ha mencionado-, la rendición de cuentas es un proyecto de ley muy importante, pero no alcanza con que lo sea, sino que debe ser bueno, y esta en particular es mala. Entendemos que no es más que un reflejo, que se representa de esta forma, de la depresión política que está sufriendo el Gobierno. Faltan diecinueve meses de gobierno, casi un tercio del total, pero hay algo que se viene percibiendo cada vez más: al Gobierno se le han agotado las ideas; al Gobierno se le han agotado las propuestas y también se le han agotado los valores, y quien conduce este Gobierno, el presidente de la República, ha perdido la autoridad, y eso está demostrado por su ausentismo en los temas importantes del país. Cuando se agotan las ideas y las propuestas y también se pierde la autoridad, un país no puede enfrentar los desafíos y, en definitiva, no puede avanzar. Eso es lo que está sucediendo y lo que refleja la Rendición de Cuentas.

Decíamos que falta un tercio del período para realizar cambios políticos que va a haber en forma inevitable, pero es momento de preocuparse por el ahora, por el presente; no hay que estar siempre pensando en lo que vendrá, que todavía puede ser lejano: hay que estar preocupado por lo cercano, por todos los uruguayos y, sobre todo, por los más necesitados.

Obviamente, para aquellos que pronosticaron y le erraron no debe ser fácil enfrentar el hecho de que las perspectivas no se han cumplido, las metas, los objetivos no se han alcanzado. Hay que asumir todo lo que no queremos que suceda, pero está ocurriendo. Hay que asumir que aumentan la deuda externa, el déficit fiscal, la pérdida de empleos, y que se profundiza la falta de inversión. Son golpes duros para un gobierno que no quiere asumir que hay que cambiar el rumbo y las políticas, que han fracasado, fracasan y fracasarán si siguen por este camino e implementando las mismas políticas.

Este Gobierno ha demostrado carecer de autocrítica. No es cierto lo que han dicho algunos diputados oficialistas en el sentido de que se tiene autocrítica. No es así; no se demuestra autocrítica. No han entendido que en una fuerza política, en un partido político la autocomplacencia interna no es

más importante que las necesidades de la gente; a veces, es más fácil o fundamental solucionar el lío interno que pensar en lo de afuera.

La única respuesta que da el Gobierno, ahora, en esta Rendición de Cuentas, que es como un golpe en una situación casi de *knock out* técnico, es aumentar el gasto. Y cuando un gobierno eleva el techo del gasto, señor presidente, sin tener en cuenta los índices macroeconómicos internos y externos, quiere decir que el país se está metiendo en problemas. No lo decimos nosotros, sino las consultoras, los bancos, quienes manejan la economía. Últimamente, han ajustado a la baja las proyecciones de crecimiento de la economía uruguaya para este año, al tiempo que elevaron las estimaciones de inflación y déficit fiscal. Es el peor escenario en comparación con lo que sucedió el año pasado. Seguir incrementando el gasto en áreas en las que aún no se han logrado metas no significa ratificar ni reforzar las prioridades -es una muy mala interpretación-; simplemente, puede ser corregir o tratar de corregir lo que se ha hecho mal.

¿Por qué creemos que se está aumentando el gasto? Se aumentan US$ 170.000.000 en un presupuesto de más de US$ 16.000.000.000. Se aumenta porque, más allá de no querer asumir que se gasta mal, no se prioriza la calidad, y lo único que se prioriza o por lo que van es por la cantidad. Hay una multicausalidad que explica que las cosas se hagan mal, pero hay una razón que, a nuestro entender, es la madre de todas: la concepción ideológica, los caprichos políticos, las promesas de campaña sustentadas en fantasías que no se pueden hacer realidad.

Se destaca el no cumplimiento de las metas y el hecho de no poder hacerlo disponiendo de recursos tiene una génesis, que es la ineficiencia con la cual se emprenden las acciones, la ineficiencia de la gestión. La ejecución presupuestal es casi del cien por ciento. Nadie ha dejado de gastar. Todos han gastado; en algunos casos, poco han podido hacer.

Queremos destacar dos incisos que pondremos de ejemplo; en ellos no se logran metas ni se ven resultados, aunque se gaste el cien por ciento del presupuesto.

Quien se lleva el podio como inciso, por no lograr sus metas, es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ya mucho se ha hablado, se han dicho varias cosas sobre este Ministerio. Sabemos que la vivienda, hoy, es uno de los grandes problemas de la familia uruguaya. El desempeño del Inciso y, sobre todo, de la unidad ejecutora de vivienda, se corresponde con el cumplimiento de solo 38,5 %; o sea, tiene un incumplimiento de más del 60 %. No es serio que el cumplimiento sea solo del 38,5 %.

Cuando uno analiza los números del Plan Quinquenal de Vivienda y las promesas sobre soluciones habitacionales, entiende la contundencia con la cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha calificado al Ministerio. Uno entiende por qué se habla de un 38,5 % de incumplimiento. Se han prometido 23.500 soluciones habitacionales y en dos tercios del período de gobierno solo se han podido realizar 10.100. En el tercio restante se piensa hacer el 60 % restante. No es creíble. No hablamos de un incumplimiento del 10 % o del 20 %.

Por otra parte, este Gobierno y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han culpado a las cooperativas de vivienda por el incumplimiento en materia de construcción de soluciones habitacionales. Se justifican en que las cooperativas de vivienda no evolucionan, no avanzan. Se prometieron 10.000 soluciones habitacionales en cooperativas de vivienda. A la fecha, transcurridos dos tercios del período de gobierno, solo se han podido lograr 4.100, y la ministra nos dice que no se van a quedar en la promesa de 10.000, sino que tratarán de elevarla a 14.000, cuando apenas quedan diecinueve meses para cumplir con ese objetivo.

No se puede pasar por alto la política de asentamientos, que también nos ha llamado la atención en el tratamiento de la Rendición de Cuentas. Estamos llevando adelante políticas para atender una problemática social con datos de 2011, cuya última actualización fue en 2011. Un gobierno medianamente organizado, serio, no se permitiría trabajar en esas condiciones, con valores tan desactualizados, cuando se trata de problemas tan delicados, tan sensibles. Quizás no se quiera conocer los números que duelen.

El panorama es durísimo, desolador. Si consideramos las cifras de 2011, había 589 asentamientos. La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente nos dijo que desde esa fecha hasta ahora se han podido regularizar solamente 3; o sea, desde 2011 a la fecha, solo el 0,5 %. Uno de cada tres niños en Montevideo vive en asentamientos irregulares. Uno de cada cinco niños en el país vive en asentamientos irregulares. En 2011, más de 170.000 uruguayos vivían en asentamientos irregulares. Todos sabemos que los valores de 2017 y 2018 son altamente superiores. Quizás -más bien, ojalá- lo que se va a votar en el artículo 149, esa inyección de dinero, ese aumento del gasto que se aplicará a esta Cartera cambie un poco esta realidad. Pero el antecedente de incumplimiento de las metas no es alentador y no nos induce a pensar que los $ 1.200.000.000 que se volcarán a la vivienda puedan cambiar el rumbo de lo que se ha hecho hasta el momento.

Otro ejemplo de ministerios que han fracasado –o quizás no han tenido los resultados que la gente espera-, aunque también tiene aumento del gasto, es el Ministerio del Interior. Nadie desconoce que la seguridad interna es una de las principales preocupaciones de los uruguayos. Esto también queda reflejado en esta Rendición de Cuentas.

El incremento de los recursos de 2005 a la fecha se ha multiplicado por cuatro: se pasó de US$ 200.000.000 a US$ 800.000.000; este es el presupuesto actual del Ministerio del Interior. Se incrementaron los salarios; se aprobó la Ley Orgánica Policial; se redujo la jornada laboral; se aumentó el número de funcionarios; se creó el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO); se mejoró la tecnología; se mejoró el armamento; se mejoró la infraestructura. En definitiva, parece haberse modernizado la institución, pero se aplica la frase: "Jugamos como nunca y perdimos como siempre".

Hace pocos días -esto sí amerita que los números estén bien actualizados-, se supo que la cantidad de rapiñas creció un 55,8 % y la de homicidios, un 66,4%. ¡Ni hablar de que estamos lejos de la famosa promesa de reducir las rapiñas un 30 %!

Les caben las generales de la ley al decir que ese incremento es a nivel país. Podemos decir, por ejemplo, que en el departamento de Canelones, los dos índices crecieron el 100 %. Y como anécdota casi tragicómica mencionaré que, cuando hablamos de la calidad del gasto, podemos contar cosas que suceden en nuestro departamento de Canelones que son un fiel reflejo de una ejecución presupuestal de calidad o no.

Las primeras cámaras de videovigilancia que se instalaron hace unos cuantos años en las ciudades de Las Piedras y Pando y que se monitorean desde la Seccional 6ª de Las Piedras, no funcionan. Cuando se enciende el sistema, salta la llave de la luz. Es tragicómico, pero real. Es parte de la ejecución de un presupuesto y de la calidad del gasto. Es una anécdota real, y hace dos años que las cámaras no funcionan; no es que no funcionan desde hace quince días.

También está la dualidad de criterios acerca de cómo se ven o cómo se pueden analizar las cosas. Hace pocos días, el senador Paternain decía que el Ministerio del Interior está fracasando porque hay agotamiento y contradicción en cuanto a las políticas de control del delito. Eso es una autocrítica. Además, dijo que no se puede olvidar del noviembre negro o del efecto noviembre -algo por el estilo-, refiriéndose a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que también tiene culpa de esta situación.

Hasta el momento, parece que saber si la culpa de lo que pasa la tienen las políticas de seguridad que se implementan o el nuevo Código del Proceso Penal es una novela. Se tienen que poner de acuerdo. Si fuese la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, se le podría haber hecho un poquito más de caso a los pedidos de la Fiscalía General de la Nación. En esta Rendición de Cuentas es muy poco lo que se les ha dado. El oficialismo no se puede jactar de haberle dado algo, sabiendo que la resolución de la mayor cantidad de problemas de inseguridad que sufre nuestra población depende de la aplicación de ese Código.

Voy a poner un ejemplo. La Fiscalía General de la Nación solicitó la creación de 195 cargos. En esta Rendición de Cuentas se crean solo 41. La justificación de que se soliciten los 195 cargos es muy importante e incluye los efectos negativos de que no se apruebe la propuesta. El fiscal de Corte se refirió a las consecuencias de que no se crearan los 195 cargos. Nos dijo: "De mantenerse las cargas de trabajo actuales y no aumentar los recursos humanos disponibles para enfrentarlas, se corre el riesgo de que la proporción de casos investigados y sanciones penales aplicadas no supere los niveles actuales, que se encuentran ligeramente por debajo de los que alcanzaba el CPP anterior". Y a continuación lo más importante: "Esto tiene como consecuencia menor capacidad de persecución penal y eventualmente, mayor impunidad para quienes delinquen".

Si el fiscal de Corte envía un mensaje, lo justifica y explica lo negativo de no atenderlo pero, finalmente, su pedido no es contemplado, no podemos esperar que los problemas de inseguridad de nuestro país se puedan solucionar. Deberían ponerse de acuerdo.

De todos modos, para nosotros, la causa principal sigue siendo otra; lo reiteramos: es la concepción ideológica. Esa es la madre de las causas de que las cosas se hagan mal en este gobierno.

No solo nos preocupan los incisos que no han cumplido con sus metas, que han gastado sus recursos; en particular, ahora nos preocupa cómo se quiere sustentar el gasto. Y, aunque no es un detalle menor, pido disculpas si el tema ya ha sido analizado o si algún legislador ya lo mencionó. Tenemos un gasto de $ 4.400.000.000, que se incrementará en 2018. De ese monto, hipotéticamente, $ 1.750.000.000 se sustentan con el crecimiento del país. Reitero: hipotéticamente. Pero $ 2.700.000.000 se van a sustentar con las rentas del Banco de la República, con el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, por sus siglas en inglés.

Este Parlamento sabe muy bien qué unidad de negocios le genera más dinero al Banco de la República: los créditos sociales. Dicha institución tiene más de 500.000 créditos sociales. Genera una ganancia de más de $ 2.000.000.000. ¿Quién va a pedir un crédito social al Banco de la República? ¿El que está salvado? ¿El que se puede hacer cargo de un gasto, de aumentar el déficit? ¿O va a pedir un crédito social el que lo necesita, el más vulnerable? Por lo menos 100.000 de esos créditos sociales corresponden a jubilados. O sea que podemos decir que esta Rendición de Cuentas se sustenta en las necesidades de la gente, de los más débiles, de los más necesitados, de los que pagan intereses altos. Se ha perdido el rumbo; se ha perdido la batalla, pero no hay que tirar la toalla porque, para lograr los cambios políticos que se necesitan en este país, todavía quedan diecinueve meses de gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR ROSELLI (Edmundo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR ROSELLI (Edmundo).- Señor presidente: en esta sesión ya se ha hablado mucho; yo no mencionaré demasiados números.

Felicito al miembro informante de nuestro Partido y a todos los que lo acompañaron. La verdad es que el trabajo del diputado Lafluf fue excelente; lo escuchamos dar esos números tan claros. También fue muy buena la labor del diputado Abdala.

Cuando se habló del gasto social, quedó una duda en el aire; menos mal que el diputado Lafluf hizo las correcciones del caso.

Yo creía que esta sesión iba a ser más corta, que sería un mero trámite, porque pensaba que los representantes del Frente Amplio no iban a hacer uso de la palabra. ¿Cómo van a hablar si un diputado preopinante dice que están en turbulencia? Sí, están en turbulencia, se está cayendo el avión; ustedes lo dicen. Creo que tienen que hablar menos, porque el barco se hunde, y se hunde por culpa de ustedes. La gente esperaba otra cosa del Frente Amplio; el votante esperaba otra cosa. En la Cámara sí tienen los cincuenta votos, pero ¡miren que ahí afuera no están más! Pueden estar seguros de que no están más, porque el Frente Amplio no cumplió con su programa de gobierno.

No hay política social adecuada si no tenemos un Uruguay productivo. Podemos hablar de miles de políticas sociales, pero si no tenemos un Uruguay productivo, no existen.

No voy a hablar mucho de números, porque no me queda demasiado tiempo, pero se hizo referencia a la UTU. Señor presidente, ¿sabe cuántas hectáreas tiene la UTU? 7.000 hectáreas. ¿Sabe cómo están? Llenas de chircas, abandonadas. ¡7.000 hectáreas!

El Frente Amplio mintió, que quede bien claro, y la sociedad lo sabe. Ya no van a tener la mayoría parlamentaria, como hasta ahora, pónganle la firma. En 2015 yo ya estaba avisando lo que se venía. Esta crisis es más profunda que la de 2001-2002: ¡el tendal de gente que está quedando! Mucha gente va a quedar por el camino. No sé qué pasará con Conaprole. Sí sabemos lo que ocurrió con Pluna, Ancap, Alas U, la regasificadora, ALUR… ¡Es terrible!

No queda mucho tiempo; como dijo el diputado Andújar, solo diecinueve meses. Nuestro partido, el Partido Nacional, y toda la oposición están para darle una mano al señor presidente de la República, a ver si se puede reflotar este barco. No sirve que el señor presidente de la República esté encerrado en su casa. El señor presidente ahora, en los momentos más difíciles, es cuando tiene que salir a sacar el agua del barco, porque se está hundiendo. La mentira del Frente Amplio en cuanto al cumplimiento del programa de gobierno se va a ver reflejada en las urnas dentro de diecinueve meses.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Puede continuar el señor diputado Sebastián Andújar.

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- He finalizado, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).- Señor presidente: si una rendición de cuentas, como un presupuesto, de alguna forma, es una radiografía del país, esta Rendición de Cuentas es la culminación de un proceso, la radiografía de un fracaso, la permanente -a esta altura tendiendo a perpetua- caída, pero en cámara lenta, inexorable. El país va acelerando su caída por la inercia y la velocidad nos va atrapando: son sus citrus, es Pili, es Calprose, y sin duda que en los próximos días habrá más novedades de las malas. Al mismo tiempo que todo esto sucede, el Poder Ejecutivo continúa en su lógica: sabe perfectamente que todo va mal, pero hace como que va bien. Vamos en un camión sin frenos rumbo a un precipicio; sabemos que vamos hacia allí y no hacemos ninguna maniobra para cambiar el rumbo.

——La radiografía del último año nos muestra más recaudación y más déficit, aunque parezca increíble. Supuestamente, en épocas de vacas flacas, deberíamos tender al ahorro. Es más: el PBI iba a crecer 1,5 %, según la proyección presupuestal del Gobierno del año anterior, y creció 2,7 %, o sea, más de lo previsto. Este crecimiento representó US$ 1.800.000.000 más en la economía, y de acuerdo con la presión fiscal del país, un 30 %, US$ 600.000.000 de ese crecimiento que representó un aumento del PBI, fueron a parar a las arcas de la Dirección General Impositiva. Pero ¿qué pasó mientras tanto? Si el Estado aumentó la recaudación en US$ 600.000.000, debería haber bajado el

déficit de manera equivalente, pero no, no bajó el déficit: aumentó del 3,6% al 4% del PBI. O sea, estamos en US$ 2.400.000.000 de agujero, de déficit anual, aquel viejo espacio fiscal del cual solía hablar Astori. Es decir, lo incrementamos del 3,6% al 4 %, US$ 240.000.000 de déficit más, a pesar de que recaudamos US$ 600.000.000 más. O sea, el gasto que se le escapó al Gobierno -no una tortuga, precisamente- fue de US$ 840.000.000 el año pasado.

Paralelamente a este fenómeno, tenemos más PBI, pero menos trabajo. ¿Cómo se explica esto? Porque el crecimiento está dado en sectores no dinámicos de la economía, básicamente en materia de telecomunicaciones, que explican más del 1 % del crecimiento del producto. Además, hay un fenómeno estacional, como el turismo, que obviamente tiene un impacto acotado, fundamentalmente, a la franja costera. Pero hemos visto que aun con ese PBI creciente, se han perdido 9.000 puestos de trabajo en el correr del año, que se suman a 50.000 puestos en los últimos dos años. No es poca cosa. Pero en esa lógica perversa del Gobierno, hablamos de la pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo y, paralelamente, aunque parezca increíble -esta es otra de las cosas increíbles-, el empleo público crece. En el último año se generaron más de 5.000 vínculos laborales -decimos "vínculo" porque eventualmente una persona puede tener más de un vínculo laboral con el Estado-, y eso va a contrapelo de la realidad: no puede caer el empleo privado en más de 50.000 puestos de trabajo y aumentar la cantidad de los empleados públicos. En los últimos trece años la cantidad de vínculos contractuales con el Estado ha subido de 220.000 a 300.000, en una carrera alocada de engorde de *feedlot* del Estado.

También hubo menos dinero en la economía, porque a pesar del crecimiento que hubo en sectores muy acotados -como Claro, Movistar, Antel y poca cosa más- cayó el PBI agropecuario en US$ 600.000.000; cayó la industria en US$ 550.000.000; cayó la construcción en US$ 120.000.000: o sea, más de US$ 1.300.000.000, más de dos puntos del producto bruto interno que, en forma de salarios, de rentas o de consumo, dejaron de existir en la economía cotidiana de la gente. Y esa es la recesión que se siente, ese es el aumento sostenido de concursos de empresas de todo tipo, que han superado el centenar en el año y que demuestran la gravedad del fenómeno.

Esto también impacta en otras áreas, y algunas que vamos a empezar a ver con más gravedad. Una es la caída de cotizantes en el Banco de Previsión Social, lo que implica que hay un crecimiento del déficit y del aporte de las transferencias de más de cinco puntos del producto al Banco de Previsión Social. Pero la caída de cotizantes también representa que ya no hay protección del sistema de salud del Fonasa, no solamente para el empleado, sino muchas veces para su familia. Por lo tanto, es un impacto que empezaremos a ver paulatinamente, en forma creciente, porque el Fonasa es un sistema con pies de barro: además de todos sus problemas centralistas, está asentado sobre la variable empleo, y si la variable desempleo aumenta, van a aumentar los problemas de cobertura de salud.

Y en este alegre jolgorio el Poder Ejecutivo se dio el lujo de aumentar la presión tributaria. Porque podrían haber dicho: "Bueno, con todos estos números, ¿qué hacemos?" Pero no; aumentaron la presión tributaria; el último ajuste fiscal representó más de US$ 480:000.000, que fueron sacados de los bolsillos de los trabajadores por la vía de la rebaja de la franja de aportación al

IRPF. Ese aumento de recaudación se llevó, por lo tanto, 1,2 % del producto bruto interno. Y el ingenio del Gobierno parece nunca tener fin, porque ahora se dieron maña para crear un nuevo impuesto, que es el impuesto al liberado: artículo 77 de la rendición de cuentas. De ahora en adelante, todo aquel que sea liberado de la prisión y que pase por la Dinali, deberá abonar el 10 % de su salario para los programas de rehabilitación, además de los aportes y deducciones sociales. ¡Buena política para reinsertar a una persona que sale de delinquir y busca trabajar!

Otra de las patas negativas del fenómeno que estamos viviendo, de esta caída en cámara lenta, es la caída de la inversión. En 2013 la inversión era de US$ 3.000.000.000 anuales. Los datos del Informe Económico Financiero del Poder Ejecutivo indican que el índice fue negativo en US$ 233.000.000, o sea que no hubo inversión, sino fuga de capitales. La gente se está empezando a ir del país; con los pies en el avión y también, con la billetera. La única inversión rentable en este país es la no genuina; es la que reciben aquellos beneficiarios de la ley de inversiones, básicamente empresas extranjeras que reciben el oro y el moro, mientras el capital nacional está bajo el peso de la corporación estatal. De esa manera, hemos conformado un ámbito hostil a las inversiones y se suman, día a día, empresas que cierran. El Gobierno no tiene más proyecto que hacer la plancha; totalmente jugado a UPM, sin entender que estos mecanismos, como ha pasado con otros fenómenos a nivel del país, lo único que hacen es concentrar la riqueza. No es lo mismo una UPM que mil pequeñas empresas en el país; el impacto social es totalmente diferente. ¡Pero claro, para abrir y poner a funcionar una pequeña empresa nacional se necesita poner un fangote de plata arriba de la mesa, que no se posee! Además, no cuenta a su favor con zonas francas ni vías férreas regaladas. Y por supuesto, ni hablemos de eventuales estudios de impacto ambiental, que habrá que ver para el caso concreto de UPM.

Hasta ahora habíamos vivido de prestado; vivimos con el viento de cola, con el efecto K, que nos trajo las inversiones argentinas que nunca habíamos pensado que pudieran llegar a estos lares, y que, como es obvio, ya comenzaron a retirarse del país. Hace un año, aproximadamente, que están volviendo a su país de origen, más allá de las dificultades que atraviesa el Gobierno de Macri. Y el viento de cola ha desaparecido. Nos queda solo la pata del endeudamiento, porque lugar para tarifas queda poco, lugar para mayor creación de impuestos es prácticamente nulo. Entonces, lo único que queda alegremente, es seguir endeudándonos. Y esa es la vía de escape del Gobierno: continuar endeudándonos. ¿Hasta cuándo? Y bueno, se verá cuánto resisten las cuentas estatales y hasta dónde pueda llegarse con el grado inversor. En este último año emitimos US$ 4.500.000.000 de deuda externa. ¡US$ 4.500.000.000 de deuda externa! Este año vamos a pagar US$ 3.214.000.000 por concepto de intereses y de capital. Estamos haciendo una calesita: tomamos y pagamos. Tenemos un endeudamiento del PBI bruto del 66 %. Pasamos la barrera del 40 % del PBI neto, tomada como barrera peligrosa. Lo más increíble es que el Gobierno festeja, porque va a suscribir US$ 1.500.000.000 y dice: "Los vendimos todos y quedaron sin colocar peticiones por US$ 1.000.000 más". ¿Pero acaso no se da cuenta de que están acá por las turbulencias europeas, por las turbulencias norteamericanas y porque todavía rendimos mejor interés

que los países centrales y que cuando eso cambie no vamos a tener oferentes? ¿Da para festejar que alegremente nos endeudemos de esta manera?

El problema radica en el Gobierno, que sigue ciego; el Gobierno sabe adónde va, pero no quiere cambiar su rumbo. Sabe que va hacia el fracaso completo y está apostando a que vuelva el viento de cola, esperando timonear hasta la elección en base a préstamos internacionales para sostener políticas internas. Y después el que venga que se arregle; y si somos nosotros veremos cómo hacemos.

¿Hay cosas para hacer? Obvio que hay cosas para hacer, y no con la motosierra del gasto social, porque esta motosierra no tiene que esperar a que venga ningún nuevo gobierno de cualquier signo; ¡ya empezó! ¡Empezó con el Mides! ¡Empezó hace pocos días con el recorte de prestaciones alimenticias a los sectores más vulnerables de la población! ¡Prefirieron sacarle de comer a la gente más débil de la sociedad antes que liquidar los autos oficiales! ¡Antes que liquidar sus prebendas! ¡Antes que eliminar cargos de confianza! ¡Antes que reducir horas extras o eliminar contratos con una ONG compañera! ¡Prefirieron pegar a los pobres! Esa es la realidad, señor presidente.

Y hay soluciones. ¡Por supuesto que hay soluciones! Una de ellas la dijo el propio ministro Astori, ¡lo que pasa es que nunca la ejecutó! ¡El famoso dos por tres: entran dos y se van tres! Si eso sucediera bajaríamos en el orden de seis mil funcionarios públicos al año. En el Estado se jubilan, mueren o se van a la actividad privada -los menos, obviamente- entre dieciocho mil y veinte mil personas por año. Seis mil que no repusiéramos, de acuerdo con la idea de Astori, a un salario promedio por funcionario de US$ 1.000 mensuales -me estoy quedando corto-, representaría US$ 72.000.000 de ahorro al año: US$ 350.000.000 en un quinquenio. ¡Vaya que es plata! Lo que pasa es que hay que tener voluntad política! El Frente Amplio ha logrado el milagro del desempleo casi cero entre sus adherentes, pero lo pagamos todos; ¡lo pagamos todos los uruguayos! Ojalá no hubiera habido "Plunas", Ancap, "regasificadoras", "puertos de aguas profundas", porque ahí -no en el gasto social- está el verdadero dispendio del Estado.

Es hora de empezar a cambiar el rumbo. El Gobierno no lo va a cambiar, obviamente, ni esperamos eso. Son los famosos diecinueve meses, de los que han hablado algunos compañeros, para esperar que el cambio venga, porque esto está en punto muerto y en bajada.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Óscar De los Santos.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Gracias, señor presidente.

Estamos aprobando esta Rendición de Cuentas y su adecuación, con mucha responsabilidad, para los próximos dos años. Tenemos la firme convicción de que esta responsabilidad se pone de manifiesto con la presentación que el Gobierno ha hecho en las distintas áreas y en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Destacamos el rol de la compañera presidente y de los demás integrantes que han trabajado a marcha camión, al igual que los funcionarios.

No es entendible que a esta altura del debate -como pasa en todas las rendiciones de cuentas- se diga que el país se está cayendo, que la oposición plantee que la alternativa es ser más cauto, que se diga que nos movemos hacia un precipicio, que la preocupación principal es mentir a la gente nuevamente, porque vamos por una campaña electoral, que el presupuesto es deficitario, que se incrementa el déficit y la deuda externa, que es así y que el Gobierno así lo ha planteado.

Y ante esa información, la principal preocupación de la oposición es cerrar dos líneas de razonamiento a las que no veo su lógica. Una es: este camino no se puede sostener en el tiempo, porque están gastando de forma extraordinaria; la otra: no coincidimos con ello, pero no queremos tocar el gasto social. Con la composición de este presupuesto casi es hacer magia.

De los informes se desprende lo que representa la seguridad social. La oposición habla de la distribución del empleo, de que las jubilaciones son magras, de que es abuso de poder la cantidad de funcionarios que ha ingresado y el clientelismo del Estado. Cuando analizamos los números de la Rendición de Cuentas nos encontramos con que el ingreso a la función pública se centra en tres áreas -es lo que se ha sostenido en los últimos doce años- que son: la policía, los docentes y los trabajadores de la salud.

Entonces, mi pregunta es: ¿cómo se mantienen estas políticas sin esos ingresos, de los cuales muchos casos son regularización de funciones que antes se llevaban sobre los hombros de comisiones de apoyo? ¿Cuál es la magia que permite plantear a un partido de la oposición que espera a ganar las elecciones, como hace un momento decía el señor diputado Umpiérrez, la modificación de esta política sobre la base de que van a mantener todo, pero cambiando los resultados económicos, lo que significa tener maestros mejor pagados? Porque ¿están mejor pagados, no? No vamos a llegar al 6 % del presupuesto para la educación, pero lo que hoy gana un maestro, en valores constantes, comparado con lo que ganaba hace doce años, es significativamente más.

Es cierto que hay jubilaciones muy bajas y trabajadores que ganan menos de $ 20.000, pero creo que con honestidad intelectual cualquiera de nosotros puede comparar la jubilación mínima de hoy con la de hace doce años. ¿Cómo se hace, señor presidente, para mantener ese nivel de poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y salarios, algunos -aún muchos- insuficientes, si no es sobre la base de la transferencia desde Rentas Generales que de forma sostenida hace el Estado a la seguridad social?

Quisiera saber si desde la oposición hay algún planteo que contribuya a modificar este rumbo, analizando, por lo menos, el componente de la seguridad social. Señor Presidente: si tomamos en cuenta los beneficiarios totales, las 866.500 pasividades, el 90 % son prestadas por el BPS, el 6 % por las Fuerzas Armadas y el 4 % por la Caja Policial.

Entre 2006 y 2017, con relación a la prestación promedio, las pasividades de las Fuerzas Armadas y policiales se destacan tanto por su nivel como por el crecimiento demostrado en los últimos años. El gasto promedio de las pasividades creció al 97 % en términos reales para los policiales, 67 % para las Fuerzas Armadas y 51 % para el BPS.

Estoy hablando de redistribución de ingresos, porque supongo que cualquier partido que aspire a cambiar esto -por cierto están los votos del

Frente Amplio- tendrá que sumergirse en esa realidad y decir cómo va a redireccionar los recursos. Lo hemos tratado, pero no hay acuerdo en el Parlamento en cuanto a que este tema sea analizado. Sí hay aspectos de injusticia, está claro. Hay jubilaciones de más de $ 100.000; hay otras de menos de $ 20.000. Cuando se analizan esas transferencias, dicen: "pero, por favor, cómo van a seguir pagando para cubrir un sistema de jubilaciones que cada año crece, porque les dieron derecho a jubilaciones y a pensiones a gente que no había acumulado los años". En los años 2005, 2008, mucha gente llegó a este país con edad para jubilarse y sin años de trabajo, sin tener una cobertura mínima de seguridad social y el gobierno del Frente Amplio impulsó mecanismos legales para hacerlo. Lo hicimos y lo vamos a sostener. ¿Es legítimo que analicemos si la continuidad y la sostenibilidad en el tiempo de este proyecto se pueden alcanzar si el país no crece y no logra insertarse en los mercados internacionales, colocar su producción, su valor agregado con mayores niveles de competitividad? Sí, es parte de la estrategia. Tanto es así que cuando se analizan algunos resultados de la educación, se buscan los peores -lo que es fácil, si el ánimo es construir el desastre desde el punto de vista de la seña de identidad, de hacia dónde va el país-, pero cuando voy a los números de la Rendición de Cuentas me dicen que la evolución de egresados de la Udelar -parecen cifras menores- fue la siguiente: pasamos de 3.999 egresados en el año 2004 a 6.307 en el año 2015. Por las dudas, agrego que estamos tan mal en educación que en el interior del país hay Universidad de la República y regionales, donde nunca hubo; está la UTEC y hay gurises que ingresan a secundaria, a lo que antes no tenían derecho y generaban dificultades y problemas al sistema, cuando se nos mide con guarismos internacionales. Necesitamos insertarnos y ser competitivos, aunque, reitero, no vamos a llegar a ese porcentaje. Readjudicamos y reasignamos recursos que pueden ser insuficientes. Inclusive, parte de la discusión estratégica es determinar si la prioridad en la educación debe centrarse solamente en la cantidad de docentes y en su carga horaria, y no tiene que haber otros aspectos vinculados a la inclusión de sectores sociales muy vulnerables. Eso es real y aún nacen niños en niveles de pobreza en el territorio nacional. Es parte de esa realidad que no hemos logrado modificar, porque no alcanza con plata.

Lo que no se puede aceptar, en forma cuasi demagógica, es que en lugar de cambiar un auto cero kilómetro, dejen sin comer a los niños, porque la leche en polvo mejorada, que se daba, muchas veces, no llegaba -en ocasiones se distribuía a través de las intendencias- y se terminaba eliminando, por lo cual se están buscando formas de sustitución.

¿Saben que hay gente que no sabe que tiene derechos, aunque ustedes crean que los pobres abusan de los derechos que el Estado les ha dado en estos tiempos? ¿Saben que a veces no conocer derechos es no saber qué importancia tiene esa leche con hierro o con vitaminas, y la madre que tiene al niño de forma precoz no sabe cómo criarlo? ¿Saben que la trama social que se rompió en los asentamientos, que aún no hemos podido resolver en toda su dimensión, no es solo un problema de la regularización de la trama urbana o de la vivienda, que presenta un componente cultural, que se manifiesta, entre otras cosas, en los niveles de violencia? Pero, claro, con cuatro consignas, cuatro gritos y despreciando políticas públicas que se han construido, se intenta tirar al piso un proceso que es más largo, que vamos a recorrer y por el que nos paramos en este Parlamento, defendiéndolo en este presupuesto,

manejando un déficit de forma razonable, incrementando la inversión y manteniendo las prioridades que ha definido el Gobierno y el partido de gobierno. Estas prioridades no siempre son las mismas, porque cuando el tema era, y sigue siendo, el problema de la seguridad, hubo un momento en que los policías ganaban más que los maestros y legítimamente se dijo que había que incorporar más recursos para los docentes, porque la educación es parte de ese proceso.

En esta Rendición de Cuentas, igual que en la del año 2015, se vuelve a incorporar recursos para el salario docente y la inversión pública, para que haya más docentes, pero también mobiliario e infraestructura, que a través de la inversión pública directa y de las PPP, de acciones públicas privadas, se está culminando el proyecto y se sigue llenando de gurises cada vez más chicos; ahora de dos y tres años.

Ese es el camino. Algunos quieren que vayamos más rápido al precipicio, pero no. Este es el camino.

¿Podríamos llegar al porcentaje del 6% para la educación? Hablamos de US$ 420.000.000. Eso sería demagogia; no vamos a lograrlo. Podemos llegar hasta acá.

Se habla con mucha holgura de la administración de los recursos humanos; sería bueno ver las planillas de la Rendición de Cuentas para ver la evolución.

Salvo en los ministerios del Interior, Desarrollo Social y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en que ha disminuido la cantidad de recursos humanos, en la educación y en la salud ha subido. Sin embargo, los gobiernos departamentales aumentaron en 1.573 funcionarios; la Intendencia de Montevideo es la que menos funcionarios tiene con relación a la cantidad de habitantes. Digo esto porque muchos somos del interior y nos gusta, de forma desbocada, hablar de centralismo montevideano, pero deberíamos comparar.

Conviene que se revisen los interiores de algunas casas; por lo menos de donde yo vengo, los cargos de confianza nos cuestan unos US$ 3.000.000 más por año. Es así; y si existe alguna duda al respecto, durante estos tres días de debate se puede pedir información a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se habla mucho de cargos de confianza y de incremento de pago de gastos, pero hay datos reales, que no figuran en esta iniciativa, pero que se pueden auscultar. Es más: en esta Rendición de Cuentas la transferencia a los gobiernos departamentales alcanza a $ 16.220.000.000, es decir que hubo un incremento de 126 % desde 2005 a la fecha. Repito: los gastos de transferencia a los gobiernos departamentales se incrementaron 126 %. Sin embargo, los ingresos del gobierno nacional -en valores constantes- se incrementaron 81 %. O sea que la transferencia a los gobiernos departamentales es mayor que la recaudación del gobierno nacional.

¿Hay aquí algún legislador que, en nombre de su intendencia, pida recortes para bajar el déficit que tanto les preocupa? Hablamos de una diferencia del orden de US$ 300.000.000, o sea, 0,5 % del PIB. Se bajaría de 4 % a 3,5 %, porque la política tiene eso. No solo hablamos de los ministerios, sino de la distribución territorial, la inclusión, la descentralización.

De los $ 7.000.000.000 a los $ 16.000.000.000 -en valores constantes, tomando valores de 2017- hay intendencias como, por ejemplo, las de Treinta y Tres y Cerro Largo, que se llevan aproximadamente el 60 % de los recursos

nacionales. En un Estado que es unitario, que demuestra, esencialmente, dos niveles, cuando tenemos responsabilidades políticas hay que cotejar los datos.

Aprovecho para decir que antes no existía incentivo a la gestión de los municipios, ni siquiera se formaban las juntas locales; el estado democrático era así. En 2010 se comenzó con $ 50.000.000 de transferencia a los municipios; en 2019 llegaremos a $ 1.000.000.000, puesto en el territorio. Esto también representa un incremento, pero se puede recortar. ¿Alguien plantea que se recorte porque es parte de la burocracia? Eso que va al lugar del territorio donde se necesita no es gasto social, pero eso no hay que tocarlo; hay que tocar lo superfluo. ¿Qué es lo superfluo? Si en un presupuesto de US$ 16.000.000.000 mencionan que un jerarca anda en auto, está bien; pero ¡hablemos en serio!

En este país el alumbrado público era un drama. Había intendencias -no quiero dar nombres- que no lo pagaban. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y en el de José Mujica se fue incrementando el subsidio; hoy llega casi al 40 %. También se ha estimulado la eficiencia energética y se ha tratado de cambiar tecnologías. Eso representa alrededor de $ 500.000.000 anuales de transferencia. ¿Recortamos ahí? ¿Eso no es gasto social? ¿El gasto social es el Mides? ¿Son los pobres que no tienen para comer? ¿Es la leche en polvo? ¿Es la tarjeta social? Es la mala utilización y gestión de los recursos.

Hasta no hace mucho tiempo éramos noticia debido a la guerra de patentes. Nos peleábamos para ver quién ofrecía el mejor precio; parecíamos una casa de remates. Durante el gobierno anterior, presidido por el señor José Mujica, el Congreso de Intendentes acordó un mecanismo -el Sucive- que permite que hoy exista el plan de refinanciación más avanzado y con mayor adhesión de deudores de patente de rodados. Eso se logró porque el Gobierno nacional transfirió al Sucive $ 579.000.000 para poder unificar las patentes. Esa regularización es parte del avance institucional del Estado y de las garantías de un Estado más moderno. Son datos de la realidad.

Yo no voy a decir -como he escuchado en algunas reuniones- que existe una apocalíptica situación en la caminería rural, que se cae a pedazos. No hay lugar del país que haya recorrido -norte, sur, este u oeste-, en el que no haya visto rutas nuevas y puentes. La preparación del país en infraestructura y logística para avanzar en el desarrollo representa costos.

Es cierto que ha bajado la inversión extranjera directa; este es un problema del país. Como bien decía el señor miembro informante del Partido Independiente, los países centrales van a terminar tratando de chupar la renta del mundo porque es más atractivo. Existe un enorme desafío: mantener las inversiones, estimular y generar condiciones. Necesitamos crecer para que el producto bruto interno nos aporte más recursos. Parte del desafío es mantener el grado inversor que hoy tenemos, que algunos quieren que se caiga a pedazos, pero que tenemos. Somos confiables, contamos con reservas en el país. Resolver el problema de los cuarenta mil que se quedaron sin trabajo y mantener la estabilidad financiera, depende de ese país más competitivo.

Por otra parte, quiero decir que necesitamos a las transnacionales como UPM, cosa que no me gusta nada. Habrá tren con o sin UPM, y no solo se utilizará para la celulosa, sino para reducir los costos de nuestras cargas de soja, carne, cereales y leche. Así se podrán seguir agregando condiciones a este país para que pueda competir y generar niveles de distribución del ingreso

como no he conocido en mis cincuenta y seis años. Se puede hablar en términos muy prácticos, pero al margen de algunos sectores que aún no lo han logrado, y que laburan todos los días, cientos de miles de compatriotas han tenido posibilidades de prosperar. El enorme desafío es que no pierdan las conquistas alcanzadas. Esta Rendición de Cuentas es un hito más para preservar ese avance histórico que ha logrado la izquierda, les guste o no les guste. Acá está la bancada para respaldar, con mucha serenidad, pero con mucha firmeza, que este ha sido el único camino que ha demostrado que cuando hay déficit fiscal los que no pagan los costos son los más pobres, como ha pasado históricamente en el país.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Señor presidente: si lo que recién escuché no hubiera salido de boca de un exintendente, me hubiera quedado callado porque pensaría que no conoce la realidad de los gobiernos departamentales.

Yo llevo aquí el mismo tiempo que quien me precedió en el uso de la palabra. Hoy estamos discutiendo la Rendición de Cuentas del Gobierno nacional, no la de los gobiernos departamentales. Cada uno de los actores del interior tendremos oportunidad de pedir cuentas a nuestros gobernadores departamentales.

No puedo permitir que se trate de justificar determinadas ineficiencias y recortes del Estado, con el argumento de que se transfiere dinero a los gobiernos departamentales. El Gobierno no les transfiere un peso más que lo que les corresponde por la Constitución o por acuerdos que los gobiernos departamentales hacen al comenzar los períodos. ¡Que no se confunda! Pero lo que no se dice es todo lo que hacen los gobiernos departamentales porque las políticas del Estado no llegan al interior. No estamos discutiendo la retribución que los gobiernos departamentales dan para que las políticas del Estado, de todos los ministerios -algunos más y otros menos- se lleven a cabo porque el Gobierno nacional no lo hace. ¿O alguien piensa que instalar la UTEC en el interior del país fue un capricho de los intendentes? Habría que estudiar y ponernos a discutir para ver dónde están realmente los problemas para que las políticas nacionales no lleguen a los verdaderos destinatarios.

Pero vuelvo a lo del principio: hoy no estamos discutiendo la rendición de cuentas de los gobiernos departamentales. Dentro de poco habrá oportunidad de tratar algo relacionado con los gobiernos departamentales. No es novedad que la mayoría de los gobiernos departamentales, después de quince años de gobierno del Frente Amplio, no estén en manos del Frente Amplio ni es novedad que la OPP esté tratando de presentar un proyecto aberrante para cambiar las reglas de juego en el interior del país. Por eso, capaz que lo dejamos para un futuro no muy lejano en que el habrá oportunidad de discutir esto y la verdadera relación económica de los gobiernos departamentales.

Vuelvo a lo del principio: si esto no lo hubiera dicho alguien que ocupó un cargo departamental, yo no hubiera abierto la boca porque, al igual que ustedes, ya conocemos los resultados; quiero votar y terminar el tema.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: lo que yo planteé fueron números de esta Rendición de Cuentas; no de las intendencias; de este Parlamento.

El Gobierno incrementó su recaudación en un 81 %. El señor exintendente -igual que yo- sabe que los aportes vinculados al Presupuesto, que son fruto de un acuerdo histórico del Congreso de Intendentes, es del 3,33 % de la recaudación. Entonces, el 3,33 % del 81 % que se incrementó, no me da que el incremento de las intendencias se haya multiplicado por 126; me da un 50 % más.

Es un problema de voluntad política que yo suponía que en este Parlamento se iba a poner de manifiesto cuando algunos señores legisladores en su condición, quizás de exintendentes o de representantes de algún departamento, lo tomaran en consideración en la distribución del gasto público; no sucedió. Se mira con diferente óptica una realidad, que es la de la rendición de cuentas; no la de las intendencias. No hablo de cómo se gasta en las intendencias; estoy hablando de la distribución de los recursos nacionales.

Era eso, señor presidente.

24.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2017. (Aprobación)

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: antes de comenzar mi intervención sobre el tema -no va a ser muy extensa porque estamos terminando el debate y no es mi intención alargar la sesión-, permítame hacer los agradecimientos necesarios a los funcionarios que trabajaron en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, a la Secretaría, que siempre es un aporte y, diría yo, un respaldo fundamental para el trabajo de los legisladores y las legisladoras, y también al conjunto de funcionarios involucrados en esta Comisión integrada, que es un número más amplio que el que asiste al funcionamiento de esta Comisión que, como todos sabemos, insume muchas horas de trabajo de la Cámara. Por lo tanto, queremos agradecer su esfuerzo, su compromiso, su vocación y hacerles saber que, por supuesto, su labor y responsabilidad ayudan enormemente al trabajo de los legisladores.

Quiero extender este agradecimiento a las compañeras y a los compañeros del Frente Amplio en su conjunto, así como al resto de las bancadas de la oposición que participan en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, porque las rendiciones de cuentas siempre son complejas, generan mucha discusión y, más allá de que la presidenta que tuvimos fue excelente

dirigiendo el debate, ya que dio garantías a todos, creo que también hubo un llamado a responsabilidad de todos los actores que estábamos allí para tratar de que esto funcionara, que saliera adelante esta discusión política, que siempre es muy fuerte, muy tensionada e involucra al Parlamento nacional.

También quiero agradecer el trabajo de las compañeras y los compañeros de la coordinación de la bancada del Frente Amplio, como Maisa, Daniela, Patricia, Ana, Adriana, Mirta, quienes cumplieron muchas horas de trabajo a nuestro lado, tratando de asistirnos y de colaborar con nosotros. Sin ellas, sería muy difícil este trabajo; usted lo sabe muy bien, señor presidente; es engorroso. No me quiero olvidar de Irene Caballero quien, más allá de su filiación, de legisladora del Partido Nacional, para todos los partidos siempre es una colaboradora de la Comisión en su conjunto en las instancias de rendición de cuentas.

Asimismo, agradezco al señor presidente, que dispuso lo necesario para este trabajo y reconozco que lo hemos extrañado en el debate; probablemente el año que viene lo tengamos de vuelta. Lo cierto es que se ha extrañado su presencia en la Comisión. No sé si eso nos ha hecho ganar tiempo o no, pero su presencia en la Comisión fue esporádica porque tiene que realizar tareas de la Presidencia y se sintió su ausencia, como se siente en la Cámara.

——Señor presidente: se han dicho muchas cosas de la Rendición de Cuentas. Yo no pienso abrir el debate porque estamos finalizando la sesión.

Creo que el Frente Amplio trae una rendición de cuentas que nos permite mirar a la cara a nuestro pueblo y decir qué es lo que hemos hecho, qué restricciones económicas existen en la región y que afectan la política económica de nuestro país y cuáles son los esfuerzos en términos de prioridades y para sostener un rumbo que lleva trece años. Indudablemente, esta Rendición de Cuentas es particular, porque es el anticipo de una campaña electoral. He escuchado muchos discursos. Hay un viejo dicho que dice: No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Nos han dicho que ya no tenemos votos en la sociedad; nos han dicho que esto ya se termina. Nos han dicho eso muchas veces. Eso se resolverá seguramente dentro de algunos meses; hay que esperar, pero me parece que no es buena práctica anticipar algo.

De todas maneras, nos dicen que este es el fin de un ciclo. Y ahora hay que discutir bastante sobre si este es el fin de un ciclo o es la coronación de un proceso que ha demostrado sistemáticamente, durante trece años, que el Uruguay se desacopló de la región y a algo de eso nos vamos a referir en parte de nuestra intervención, porque me parece que es importante dejar claro algunos aspectos.

Creo que este debate de rendición de cuentas se inscribe en una disputa simbólica, en una disputa sobre el espíritu, el talante, las opiniones, las emociones y las expectativas de nuestra sociedad, y el esfuerzo de varios legisladores de la oposición -algunos avezados legisladores- ha intentado encauzarse en ese sentido, en construir un relato apocalíptico. Se habló del apocalipsis en Uruguay; se dijo que estamos viviendo un momento apocalíptico, que estamos viviendo un momento en el que hay una carestía enorme en el país. Al parecer, se cae todo abajo, se cae la estantería; Uruguay no resiste más, el Gobierno está cansado, se quedó sin ideas y la gente está pidiendo que lo saquen. En realidad, algunos piden que lo saque una dictadura; por suerte,

no sucede en esta sala, pero otros piden y gritan que venga una dictadura militar.

Independientemente de eso, señor presidente, se dio la disputa simbólica previa a un acto eleccionario, en el que se definen muchas cosas. Por tanto, esto está dentro de las reglas de juego. Además, está muy bien que la oposición se concentre en intentar convencer a los uruguayos y a las uruguayas de que esto se termina, de que todo se acaba.

Nos han dicho que esta es la peor rendición de cuentas desde 2002. Yo llevo nueve rendiciones de cuentas -y presupuestos nacionales- en esta Cámara, señor presidente, pero tengo muchas más de militante social, y siento que el discurso que señala que esta es la peor rendición de cuentas es una especie de discurso con pólvora mojada, porque en 2002 yo no era integrante de la Cámara, sino que estaba afuera, rodeando el Palacio Legislativo, exigiendo al Gobierno un cambio, reclamándole a mis legisladores que aprobaran un presupuesto justo para la educación, y manifestándome en la calle porque había una gran carestía. En ese entonces el 40 % de las personas vivía por debajo de la línea de pobreza y el país estaba convulsionado. Por tanto, los discursos apocalípticos hoy se hacen cuando la barra está vacía, cual retórica de autoconvencimiento y para intentar convencer -como lo han hecho durante nueve años- de que esto se va a acabar.

Yo creo, señor presidente, que Uruguay viene transitando por otro camino. Por las calles por las que transito me cuentan otras cosas; la gente es muy crítica -por suerte el pueblo uruguayo es muy crítico-, y critica mucho al Gobierno del Frente Amplio, y tiene razones para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere de un gobierno es que resuelva los problemas inmediatos de la sociedad, las limitaciones y las dificultades, algunas objetivas y otras subjetivas, ya que lo que nos interesa es lo que va a pasar con nosotros, con nuestra familia y nuestros hijos en el futuro. En realidad, cuando uno sufraga lo hace pensando en eso; cuando uno pone una lista en el sobre de votación también pone esperanza, ilusiones y demás. Por eso hay una disputa simbólica muy grande en cuanto a ver en qué Uruguay vivimos, ya que eso condiciona la opinión de la gente.

Señor presidente, con toda franqueza, en Uruguay no vivimos en el primer mundo; ¡chocolate por la noticia! Nuestro país, desde que se fundó, está en el continente más desigual del mundo, que es el tercer mundo. Sin duda, tenemos muchas limitaciones, pero también logramos algunas innovaciones importantes, producto del esfuerzo progresista y del impulso de los partidos tradicionales, que durante el siglo pasado llevaron adelante agendas progresistas que ampliaron enormemente los derechos. Mucho de eso luego se borró con el codo, pero no viene a cuento.

Entonces, señor presidente, la gente siente que está mejor que antes, pero que todavía no está como quiere estar, porque uno no analiza su situación en función de lo que posee, sino de lo que desea tener. Eso está muy bien, porque es un impulso que lleva a los seres humanos a correr un poco más la frontera de lo posible para mejorar sustantivamente sus derechos y condiciones. Y esto se da en el marco de un contexto internacional que nosotros no tenemos capacidad de cambiar.

Como dije, está muy bien que la gente critique al Gobierno del Frente Amplio por esas cosas, porque hay que ir a más. Sin embargo, la gente vive un

problema -algunas de las discusiones tienen la pata corta-, porque alguien debe ofrecer un modelo de país, o un modelo de estrategia nacional de desarrollo que brinde esas posibilidades, porque los modelos que pregonan algunos, diciendo que el Frente Amplio no cumple con todas las necesidades, son los que han fracasado en el continente latinoamericano con recetas ya aplicadas, también en estos momentos. Eso, en definitiva, será lo que deberán resolver los uruguayos: entre la continuidad y el cambio, entre el desarrollo de nuevas políticas y la profundización de las que se han llevado adelante, o entre el "cambiemos fácil", diciendo que vamos a dejar todo lo que está bien y vamos a cambiar todo lo que está mal. Así convencieron al pueblo argentino, y ahora alguno debe estar pensando que la macaneó, porque se acabaron los globos de colores y lo que vino fue el clásico y oportuno ajuste estructural de las cuentas, que es lo que afecta a los más pobres, a los trabajadores.

Sin duda, señor presidente, nadie pensó que este contexto internacional iba a llevarnos a vivir en un mundo complejo. ¿Quién discutió en la campaña de 2014 que Trump iba a ganar en Estados Unidos, que nos íbamos a encontrar con un mundo en el que el presidente de ese país iba a ser el abanderado del proteccionismo, y el secretario general del Partido Comunista de China el abanderado del libre comercio? Tampoco se podía pensar que el principal productor de alimentos del mundo, que es Estados Unidos, estaría en un conflicto o en una guerra comercial con el principal consumidor de alimentos, que es China. Y ese conflicto que todos relatan nos afecta a nosotros, que somos productores de alimentos -de alimentos de calidad- y le vendemos a más de ciento ochenta países del mundo. Sin duda, eso tuvo un efecto importante en la disminución del precio de los *commodities,* y llevó a que se redujeran los márgenes de muchas de las áreas de nuestra producción nacional. Y cuando eso sucede, señor presidente, se enlentece el crecimiento económico; por tanto, ya no crecemos a tasas del 5 %, en promedio, o del 7 %, como ocurrió en algún momento de la era frenteamplista, sino que lo hacemos al 2 %. De todos modos, señor presidente, desde 2011 hasta ahora Uruguay ha crecido, en términos acumulados, un 20 %, mientras que Argentina creció un 3 %, en términos acumulados, y Brasil un 1 %.

Cuando esto pasaba en otras épocas, Uruguay se hundía, pero hoy no es así; el Parlamento no está rodeado, la gente no vive desesperada por esta situación, sino que vive en otro momento político.

Es cierto que el Frente Amplio trae una rendición de cuentas con restricciones económicas, pero como cualquier padre de familia o jefa de hogar, sabe que cuando no hay tantos recursos económicos tiene que priorizar. Debe pensar si le compra los championes, el vaquero y la campera a los gurises, o si le compra la campera y los championes, para que tengan los pies secos y no pasen tanto frío y remienda los vaqueros. Y lo que estamos haciendo acá es eso, señor presidente: no estamos cumpliendo todos los objetivos proyectados, pero sí avanzando en un camino de incremento de los recursos y los derechos en Uruguay; eso es lo que estamos haciendo.

¡Claro que el país en el que vivo tiene problemas! ¿Pero sabe, señor presidente, que una empleada doméstica gana $ 82 la hora? Seguramente, ganar $ 82 por hora por trabajar en el servicio doméstico no le debe permitir alcanzar un ingreso como para tirar manteca al techo pero, ¿sabe qué hubiese pasado si el Frente Amplio no hubiera convocado nuevamente los Consejos de Salarios, si no hubiera habido un incremento real del salario de los empleados

domésticos del 229%? Si eso no hubiera sucedido en la actualidad no ganarían $ 82 la hora, sino $ 24. Además, ¿sabe qué hubiera pasado con los limpiadores de este país? En lugar de ganar $ 98 la hora, ganarían $ 34, y no estoy hablando en términos nominales, sino reales. Si esa cifra fuera nominal, en lugar de $ 34, ganaría $ 12, porque ese era el salario de estos trabajadores antes de la llegada del Frente Amplio.

Asimismo, ¿qué hubiera pasado con los policías? Ganarían $ 13.000, pero hoy ganan $ 30.000. ¿Y qué hubiera pasado con la gente que trabaja en seguridad? Antes ganaban $ 6.960, y hoy ganan $ 22.670. ¿Y qué hubiera pasado con los maestros, señor presidente? Un maestro Grado 1, por veinte horas de trabajo, ganaría $ 17.662, pero hoy gana $ 32.886, y por cuarenta horas, gana $ 57.533, pero si no hubiera estado el Frente Amplio, seguramente, ganarían menos de la mitad.

Esto lo digo para los que piensan que la gente se ha empobrecido. Cuando la gente mira su recibo y compara con el del año 2005, se da cuenta de que eso no sucedió; eso tiene patas cortas. Una cajera de supermercado, que gana $ 22.000 y ganaría $ 8.000 si no hubiese estado el Frente Amplio incrementando los salarios reales, ¿puede vivir tirando manteca al techo? No. Eso quiere decir que no hay que desmontar las políticas que ha implementado el Gobierno, sino que hay que profundizarlas. ¡Hay que profundizarlas!

——Dije que iba a ser breve, pero a veces no cumplo las promesas.

——Redondeo diciendo que hay que profundizar las políticas que permitieron que en este país se incrementaran, en términos reales, el presupuesto y los derechos de los uruguayos. Eso no significa en absoluto que haya que desandar el camino recorrido. Lo que se debe hacer es enfrentar con compromiso los desafíos del futuro sabiendo que la única opción es que el camino que inició el Uruguay en el 2005 se debe profundizar y abarcar cada vez más sectores. Por eso, esta Rendición de Cuentas, en este contexto, no es una rendición de cuentas en retirada, sino el llamado a redoblar nuevamente la esperanza y las energías; porque en el Uruguay todavía hay espacios para construir lo necesario, y eso se llama Frente Amplio.

SEÑOR OSTA (Gustavo).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Osta.

SEÑOR OSTA (Gustavo).- Señor presidente: por las calles que yo camino hay gente que duerme tirada en las esquinas. Por las calles que yo camino hay gente sin techo que pide limosna en los semáforos. Seguramente, no son las mismas calles por las que caminan el señor diputado Sánchez o los integrantes del Gobierno.

No estamos hablando de percepciones ni de ilusiones; estamos hablando de realidades. Me da la sensación de que quien quiere generar una percepción diferente a la realidad, porque por ahí caminan los ejes de la comunicación, es el Gobierno, que intenta mostrar que el país transita por un camino de bonanza, que es falso. Nosotros no estamos hablando de espejismos, sino de un fracaso; y fracaso en las políticas sociales, porque la política social más importante de un país es la educación. Ese es el camino y la herramienta de

superación de un país. Lo ha sido siempre, lo es hoy y lo será en el futuro porque estamos inmersos en la sociedad del conocimiento.

Como colorados y batllistas miramos nuestro pasado con orgullo porque en su momento logramos construir una sociedad justa, moderna y que miraba hacia arriba. No nos gusta -por eso hacemos hincapié en las diferencias- que la sociedad, luego de años de bonanza, liderada por un gobierno que generó y tuvo a su alcance el dinero con el que otros no contaron -no por mérito propio, sino como consecuencia del frente externo-, trece años después, muestre estos resultados. No pongo en tela de juicio las intenciones, pero analizo con rigor los resultados.

Se ha fracasado, y si esto es lo que tiene el Frente Amplio para mostrar luego de trece años, a mi juicio, no logra cubrir las expectativas, no solamente de quienes no lo votaron, sino de quienes sí lo hicieron. Por eso hoy las encuestas, de las que al Gobierno tanto le gustó alardear durante todos estos años, muestran una caída de su popularidad.

Nosotros decimos que han fracasado las políticas sociales, pero también lo dice, por ejemplo, el expresidente Mujica. Escuchamos algunos discursos autocomplacientes, autistas y en algún momento soberbios de integrantes de la bancada de Gobierno; y también contradictorios, porque mientras algunos se baten el parche, otros dicen que quieren seguir adelante con una serie de reformas que no sabemos cuáles son. Nosotros, desde el Partido Colorado y desde el batllismo, decimos que se agotó este Gobierno porque no tiene más pólvora para seguir adelante. Metieron primera y no llegan a segunda, esa es la verdad. Son una mala copia de lo que pretenden imitar.

Se hace alusión a las políticas progresistas de los gobiernos tradicionales: ¡por supuesto que el del batllismo fue un gobierno progresista! Y logró desarrollo con equidad social. Logró mirar hacia arriba y generar un país modelo, no lo que nos están presentando hoy. ¡Son una mala copia del batllismo! ¡Apréndanlo!

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Señor diputado: debo llamarle la atención. Debe dirigirse a la Mesa. Puede decir lo mismo, pero dirigiéndose a la Mesa.

SEÑOR OSTA (Gustavo).- Señor presidente: en esta instancia de debate se analizan cuentas, se dan elementos técnicos, hay conceptos políticos, se realiza un análisis político-histórico y demás, pero las cosas deben ser claras.

Se habla de los Consejos de Salarios: son obra del batllismo durante el gobierno de Amézaga y surgen con la oposición de una parte importante del movimiento sindical. Es importante decirlo aquí, porque muchos que hoy se baten el parche desconocen la historia; los remito a que estudien un poco más antes de alardear frente a nosotros, al Partido Colorado y al batllismo, de la implementación de políticas sociales en el país.

Cerramos esta intervención con la tranquilidad de haber tenido en la Comisión representantes que expusieron con claridad nuestra posición, y dejaron el mensaje político, claro y contundente de que, a nuestro juicio, este modelo se terminó, no por un acto nuestro de voluntad, sino por las cifras que están mostrando. ¡Es necesario un cambio en el país!

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli.

SEÑOR BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: no puede quedar sin aclarar un dato objetivo que figura en la Rendición de Cuentas y mencionó el presidente del Codicén. Probablemente haya habido un error por la ofuscación y el discurso muy encendido del señor diputado Sánchez -cuyo valor reconozco-, porque un maestro Grado 1 no empieza ganando $ 50.000.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Vamos a dar la palabra al señor diputado Alejandro Sánchez para que conteste una alusión hecha durante una aclaración que la Mesa autorizó por error. La señora diputada Graciela Bianchi no había hecho uso de la palabra y no correspondía que hiciera la aclaración, pero lo hecho, hecho está.

Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: voy a hacer una aclaración con respecto a lo que manifestó la señora diputada Graciela Bianchi; no me he sentido aludido en absoluto.

Yo dije -quizás no se escuchó bien- que un maestro Grado 1, con 40 horas, en una escuela de tiempo completo, percibe un salario de $ 57.533. Eso figura en la planilla de la ANEP. También hice referencia a lo que ganaba en 2005 un docente Grado 1, 20 horas y lo que habría ocurrido si el Frente Amplio no hubiera llegado al Gobierno y el salario de ese docente se hubiera mantenido, en términos reales al día de hoy: $ 17.662. Hoy, ese docente gana $ 32.886 nominales. Esa es la referencia que hice a los docentes Grado 1; la otra es la referencia a los docentes Grado 1, por 40 horas.

El Grado 7, por 40 horas, cobra $ 81.195. Es fácil: se puede entrar a la página web de la ANEP -inclusive, figura en el material que envió la Administración Nacional de la Educación Pública- y consultar las planillas de sueldos donde figuran los salarios de los docentes del Uruguay y de todos los cargos que tiene la Administración: consejeros, inspectores, docentes de Secundaria y de Primaria. Yo, simplemente, hice referencia al dato que figura en esas planillas.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: está aclarado que para tiempo completo es así, pero son dos cargos, es la jornada completa. Entonces, lo vamos a discutir.

Creo que hay que tener otro tipo de actitud para relacionarse con los legisladores y no ser irónico.

Todos conocemos la planilla y los salarios; ¡llévenlos puestos nomás!, pero los cuarenta y dos años en la ANEP los tuve yo, ninguno de ustedes.

SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 15/08/2018

6.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Se entra al orden del día con la consideración de su único asunto: "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)".

En discusión particular.

Se pasa a considerar la Sección I "Disposiciones Generales", que comprende los artículos 1º y 2º.

——La Mesa desea consultar al Cuerpo si hay alguna moción respecto a la lectura de los artículos.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar si se suprime la lectura del articulado.

——Sesenta y cinco en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cuarenta y uno en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar la Sección II "Funcionarios", que comprende los artículos 3º a 11, inclusive.

——En discusión el artículo 3º.

SEÑOR SATDJIAN (José).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SATDJIAN (José).- Señor presidente: con el artículo 3º ingresamos a la Sección II, "Funcionarios", y por eso nos referiremos a un tema que compete a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

La cuestión que queremos plantear aplica a este artículo por referir a funcionarios, y a cualquier otro Inciso de los que se van a considerar en esta y en la próxima sesión que se ocupe de la Rendición de Cuentas. En todo el Estado se incumple la Ley N° 18.651, que obliga a que el 4 % de las vacantes que se provean correspondan a personas con discapacidad.

Decíamos que esto aplicaba a cualquier Inciso porque diversos ministerios están en falta —por ejemplo, los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente—, así como personas jurídicas de derecho público no estatal y otros organismos que también están obligados por esta norma; es el caso de ASSE. En los ministerios y el organismo mencionados nunca se cumplió con la ley a la que hacíamos referencia.

Recordamos que esta ley, que establece cuotas para las personas con discapacidad, fue votada en 2010. Ya que estamos en la instancia de rendición de cuentas, es bueno hacer un repaso de algunos datos.

En 2010 -año en que se votó la ley, repito-, el cumplimiento fue de 0,4 %; en 2011 aumentó a 0,65 %, no fue muy significativo, pero al menos hubo un incremento; en 2012 bajó nuevamente a 0,4 %; en 2013 aumentó a 1,26 %. En este punto, uno empezaba a ilusionarse con que, efectivamente, el Frente Amplio cumpliría con dicha ley, pero en 2014 el porcentaje baja al 1,4 %. En 2015, primer año de este período de gobierno el cumplimiento fue de 0,33 %, el peor desde que está vigente la ley. Este porcentaje es mínimo con respecto al 4 %, o sea que casi no hubo acceso de personas con discapacidad a cargos vacantes del Estado.

En 2016, se llegó al 0,66 %, es decir que la cantidad se duplicó, pero igual está lejos del porcentaje indicado. Finalmente, el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil del año pasado establece que el 1,3 % de las vacantes se llenaron con personas con discapacidad.

En la Comisión que trató este tema -a la que acudimos cuando pudimos, cuando no nos fue posible; mientras, el señor diputado Benjamín Irazábal, amablemente, trasladó nuestras consultas-, las respuestas siempre fueron más o menos las mismas: que el tema estaba en agenda, que se estaba trabajando en él, que se estaba tratando de cumplir. Y la verdad, nos parece que no alcanza. Que se nos diga que se está trabajando, después de ocho años de votada la ley -que hace a un tema muy sensible, que despierta cierta empatía, que genera expectativas en las personas con discapacidad- no es un algo que compartamos. Creo que falta un sinceramiento y analizar responsabilidades. Después de ocho años no se nos puede decir que ahora se está trabajando o que se "tiende a".

El porcentaje general es del 1,3 %, pero cuando empezamos a analizar los números, advertimos que el cumplimiento del Frente Amplio, que está a la cabeza del Gobierno nacional, el año pasado fue del 0,8 %; al 1,3 % se llega por obra de los gobiernos departamentales.

Creo que estos datos dan cuenta de la realidad. Lo decimos con total responsabilidad y humildemente: esto desenmascara un discurso que hicieron durante muchos años los abanderados de la sensibilidad social, el discurso de que ciertos temas son propios de un partido político y los maneja este. En esta instancia, con datos claros, objetivos y reales, constatamos que no es así. Ese discurso es una mentira porque a la hora de dar cumplimiento a esta ley estamos lejísimos, no hay interés.

Hagamos un poco de memoria: en 2016, en el Poder Ejecutivo, que corresponde precisamente al Frente Amplio, el cumplimiento de la ley fue del 0,12 %. Es un porcentaje mínimo; casi no hubo ingreso al Estado de personas con discapacidad. En 2015, el primer año de este período del presidente Tabaré Vázquez, fue de 0 %. A los ministerios no entró ni una sola persona con discapacidad.

Estos datos son de una claridad extrema, contundentes; no hay dos lecturas, no hay dos bibliotecas. Se podrá querer explicar que hay alguna dificultad, pero luego de ocho años durante los que se ha tenido todo el poder, todo el control y recursos para implementar las leyes, estas no se cumplen. Como decíamos, esto desenmascara la realidad y el discurso del Frente Amplio.

Haré referencia a algo que sucedió en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Cuando preguntábamos al respecto a los distintos ministerios, a las diferentes delegaciones, se nos respondía básicamente lo mismo: se reconocía que la ley no se cumplía y que estaba en trámite. El señor diputado Jorge Pozzi -que, lamentablemente, no se encuentra en sala-, con quien tenemos una muy buena relación y a quien le reconocemos sinceridad en cuanto a su trabajo, decía sobre la ley de discapacidad: "[…] creo que eso ha sido reiteradamente planteado por el colega diputado que hoy está aquí presente a varias instituciones que comparecieron. Y se le ha dicho que la ley de discapacidad está en un 1 % o en un 2 % de su cumplimiento en el Estado". Más adelante, agrega: "[…] todavía no se ha podido llevar adelante en todo lo que requiere. El Gobierno ya lo ha dicho; esa es su posición. Si se quiere seguir preguntando organismo por organismo, la posición del gobierno seguirá siendo que la ley de discapacidad todavía no ha sido cumplida como se debe y no tiene previstas sanciones para aplicar a nadie […]".

Esto es muy grave, muy serio -lo queremos manifestar en el plenario-, porque se reconoce que no se cumple, que no se va a sancionar y que va a seguir

todo igual, o sea que para los años que siguen ya sabemos que no se cumplirá con el 4 %.

Nos parece una injusticia, porque la ley generó ciertas expectativas en estas personas. En los hechos, reitero, el Frente Amplio no ha cumplido con esta y está diciendo que no lo hará.

¿Es un debe? Sí. Para la bancada del partido de gobierno es un debe en el que está trabajando, pero la respuesta resulta muy pobre, es patear el tema para adelante, es como decir: "No lo estamos haciendo. No vamos a aplicar sanciones por ello. Veremos qué pasa".

Yo sé que lo que decimos les choca a muchos, que les resulta muy duro, pero estamos tranquilos porque está basado en los datos de la realidad, en los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Es lo que está pasando: no cumplieron, no cumplen y no van a cumplir.

El Frente Amplio se quedó en el discurso de la sensibilidad social, pero a la hora de los hechos no cumple; a la hora de los hechos no nos pueden decir: "Estamos en trámite". La cuestión es que no pueden esbozar ningún argumento lógico por el cual no se cumple. No.

Lo que pasa es que no hay voluntad. Después de ocho años, ni siquiera nos acercamos al 4 %; ni siquiera nos acercamos al 2 %. Es lamentable; es muy duro; es muy triste que se hagan discursos bonitos para la tribuna y que, en los hechos, después no se cumplan.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: los números que manejaba el señor diputado preopinante son ciertos, fueron proporcionados a través de un muy detallado informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil; tal como él decía, en ese informe se ve un crecimiento en la cantidad de personas con discapacidad que ingresan al Estado, pero todavía estamos lejos del 4 %.

No se trata de que falte sensibilidad, sino de que muchas veces no se dispone de la infraestructura necesaria para adecuar todos los lugares de trabajo, y en eso estamos trabajando.

En la Comisión, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil señaló expresamente que, para poder hacer este tipo de llamados, el local donde se desarrollará la función debe estar preparado, de forma de no discriminar luego a quien ingresa.

Todos somos conscientes de que, en general, los edificios públicos no tienen la accesibilidad necesaria para personas con determinado tipo de discapacidad, fundamentalmente, física, lo que no permite que su concurrencia a esos lugares se haga en las condiciones adecuadas. También hay que trabajar en la modificación de las estructuras para adaptar los sitios y para que las personas se sientan en su trabajo realmente integradas al resto de los funcionarios.

Lo que expresó el director del Servicio Civil tiene que ver con cuidar las condiciones en las que se llenan las vacantes, porque no puede ocurrir que no estén las condiciones necesarias, por razones estructurales, para que la persona desarrolle su función y se sienta útil para el organismo y, en definitiva, para la sociedad.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Conrado Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: como tenemos a consideración el artículo 3º, brevemente quiero hacer una fundamentación, aunque también podría realizarla luego de votar.

Estamos de acuerdo con este artículo, habida cuenta de que en la Rendición de

Cuentas del año pasado impulsamos una disposición muy parecida a la que ahora se está derogando: el artículo 10 de la Ley Nº 19.535. Esa norma establecía que para el cómputo de la licencia por antigüedad se tomaba en consideración todo el vínculo que el funcionario tenía con la Administración. En tal sentido, advertimos que, como hay funcionarios que inician su vínculo con la Administración con pasantías o con un régimen de becarios, por ejemplo, no se les computaban los años a la licencia porque no se sumaban los días correspondientes por antigüedad. Entonces, recogiendo el mismo espíritu y el interés que la Oficina Nacional del Servicio Civil mencionó en la Comisión de que con esta redacción se pretendía evitar interpretaciones diferentes que limitaran los derechos de los funcionarios, votaremos el artículo 3º.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: quiero recordar a la Cámara que votaremos el artículo 3º.

Cabe señalar que este artículo es el resultado de una propuesta formulada por COFE en la mesa de negociación colectiva por ramas de actividad del sector público, de muy joven creación. Teniendo en consideración que es una propuesta formulada por COFE, en el marco de la negociación colectiva que todos promovimos, y que cuenta con el acuerdo del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la OPP, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -además de compartir aspectos conceptuales mencionados por el señor diputado preopinante-, reiteramos que votaremos el artículo 3º.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el artículo 5º.

Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 1, presentado por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——En discusión.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: mociono para que se suprima la lectura de todos los aditivos y sustitutivos presentados, ya que están en nuestras bancas. En caso de que algún señor legislador desee que alguno sea leído, puede solicitarlo a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor diputado Gustavo Penadés. La Mesa quiere agregar que, si se aprueba, deben incorporarse los aditivos y sustitutivos a la versión taquigráfica.

——Ochenta y cuatro en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

La Mesa informa que, para facilitar el debate, si algún señor legislador pide que se lea algún aditivo o sustitutivo, así se procederá.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: estamos de acuerdo con el espíritu de este artículo y lo que tiene que ver con las destituciones de los funcionarios. La idea es darles una última vista para que, antes de que el expediente vaya a la Oficina Nacional del Servicio Civil, el funcionario cuente con una debida defensa.

De todos modos, entendemos que debería agregarse -lo dice el sustitutivo- que en el caso de que el jerarca se aparte del dictamen del instructor sumariante y del de la asesoría letrada del organismo, su resolución debe tener motivación suficiente. Nos parece de vital importancia que el artículo recoja que el jerarca deba fundar la resolución por la cual aconseja la destitución del funcionario.

También creemos que debería incorporarse el mismo plazo que establece el Decreto Nº 500, de 1991, que recoge todo el procedimiento administrativo. Esa norma claramente establece la posibilidad de prorrogar el último plazo. Además, queremos incorporar el régimen establecido por el Decreto Nº 500, de 1991, de modo de otorgar al funcionario cinco días hábiles más.

Por último, si los informes del instructor sumariante y de la asesoría letrada del organismo no aconsejaran ningún tipo de sanción, el jerarca no podría determinar la destitución a través de una resolución. Nos parece que eso cierra el camino a una posible arbitrariedad o discrecionalidad del jerarca y que evita que se aparte de los fundamentos jurídicos del instructor sumariante o de la asesoría letrada, en caso de destitución. Esa posibilidad nos parece bastante grave y es la razón por la que queremos incorporar estas modificaciones a través del sustitutivo recogido en la Hoja Nº 1.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º tal como viene de la Comisión.

——Setenta y tres en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: el Partido Nacional votó afirmativamente este artículo, sin perjuicio de dejar constancia de que nos parecía mucho más garantista el sustitutivo del artículo 5º presentado por los diputados Rodríguez y Cardoso, que hubiésemos acompañado. Queremos dejar esta constancia porque entendemos que el artículo propuesto por los diputados del Partido Colorado tiene una mejor redacción que el que resultó aprobado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cuatro en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y cinco en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: el Partido Nacional votó afirmativamente este artículo, producto de que, consultada la Oficina Nacional del Servicio Civil, se nos informó que se trataba solo de diecisiete funcionarios que

hacía años estaban en esa situación y cuya contratación era necesaria para terminar de regularizar la reestructura de las unidades en las que estaban trabajando.

Por ese motivo, hemos votado afirmativamente este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y uno en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y siete en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 2, presentado por el señor diputado Rubio.

——En discusión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: no leer los aditivos tal vez complique un poco la comprensión.

A través de este artículo, que fue propuesto por el sindicato de trabajadores de Aduanas, se trata de subsanar las injusticias salariales que se producen entre los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y los que son incorporados a ella mediante regímenes de redistribución. La adecuación presupuestal de estos funcionarios se calcula comparando la retribución que perciben en la oficina de origen con la que corresponde reciban en la de destino. En virtud de esto, se generan distintos salarios, según el origen de los funcionarios.

Con este artículo se pretende que los funcionarios incorporados no cobren menos de lo que perciben en su oficina de origen, pero tampoco reciban cifras muy superiores a las de cualquier funcionario de Aduanas de su mismo grado. De esta manera, se evitan las inequidades anteriormente explicadas.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 2, presentado por el señor diputado Rubio.

——Treinta y seis en ochenta y siete: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 3, presentada por el señor diputado Eduardo Rubio.

——En discusión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: en este artículo también recogemos una iniciativa del sindicato de trabajadores de Aduanas, que propone que la Dirección Nacional de Aduanas contrate en el régimen del artículo 90 de la Ley Nº 19.121, con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, a quienes a la fecha de la promulgación de la presente ley se encuentren contratados mediante la modalidad de contrato de trabajo.

Estos contratos, que se hacen para cubrir tareas coyunturales o cuando los trabajadores con contrato permanente están desbordados, en realidad se utilizan para cubrir tareas permanentes, con la inseguridad que da a los trabajadores tener que ser recontratados una y otra vez. Estamos hablando de una necesidad para el cumplimiento de una tarea tan

importante como la que cumple esta Dirección. Queremos que haya funcionarios con contratos estables para hacer las tareas que cumplen los presupuestados que, en su mayoría, son esenciales y permanentes para el funcionamiento de la Aduana. Se trata de la regularización de funcionarios que, en los hechos, están trabajando de manera permanente, pero con contrato precario.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: la bancada del Frente Amplio va a acompañar el aditivo que figura en la Hoja Nº 3, pero se debe introducir una modificación, ya que hay un error de texto en el primer inciso.

Explicaremos por qué vamos a acompañar este aditivo.

En realidad, por esta disposición se está facultando a la Dirección Nacional de Aduanas a contratar funcionarios bajo el régimen del artículo 90 de la Ley Nº 19.121 -que establece el provisoriato-, con informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación. Se trata de quienes, a la fecha, se encuentran contratados mediante la modalidad de contrato de trabajo, según el artículo 92 de la mencionada ley. Ahí debería terminar el inciso. Sin embargo, luego dice: "[…], en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional". Eso podría implicar que la Aduana pudiera contratar a todos los que están en la modalidad de contrato de trabajo en cualquier inciso, y esa no es la intención.

Insisto: el objetivo es regularizar la situación de dieciocho funcionarios de la Aduana que desempeñan tareas en diferentes áreas relacionadas con la policía aduanera. En diciembre de 2013 ingresaron por concurso de oposición y méritos, realizado por la Oficina Nacional del Servicio Civil, por la ventanilla única, y firmaron contrato en febrero de 2014.

Dicho sea de paso, la Dirección Nacional de Aduanas tiene habilitados los cargos de estos funcionarios; están vacantes porque, en su momento -setiembre de 2013-, realizó un llamado y solo pasaron el concurso tres funcionarios. Eso motivó que la Aduana realizara nuevo llamado a concurso en diciembre, para contratar funcionarios en este régimen -como todos saben, en año electoral no se puede hacer contrataciones-; el primer concurso había quedado desierto porque la gente que se presentó tuvo dificultades para pasarlo. La Aduana necesitaba cubrir estas funciones; estamos hablando de la policía aduanera, o sea, del control en las aduanas.

Por eso, creemos que sería bueno votar este artículo, eliminando lo que acabamos de mencionar. Es cierto que esto ha sido promovido por el sindicato de trabajadores de Aduanas y que las autoridades de la Aduana y del Poder Ejecutivo están de acuerdo con que es necesario regularizar esta situación, pues esos funcionarios realizan tareas en forma permanente y porque, efectivamente, la Dirección Nacional de Aduanas tiene estos cargos vacantes. En realidad, son treinta y seis cargos vacantes, no solo esos dieciocho, porque originalmente se previó que fueran treinta y seis funcionarios; entonces, los cargos presupuestados son treinta y seis. En esta oportunidad, regularizamos la situación de dieciocho funcionarios, que son los que están en esta modalidad. Probablemente, en el futuro -no el año próximo, porque es electoral-, en la Aduana haya posibilidades de llamar a un nuevo concurso para completar las vacantes de este escalafón.

Por estas razones, acompañaremos el artículo que figura en la Hoja Nº 3.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: por supuesto que nosotros vamos a votar a favor. Y digo por supuesto porque presentamos una solución prácticamente idéntica a la del señor diputado Rubio, que al igual que nosotros tomó como base la fórmula que la Asociación de Funcionarios Aduaneros aportó a la Comisión. De acuerdo con nuestros números, serían diecinueve los trabajadores, aunque hace un momento el señor diputado Sánchez mencionó que serían dieciocho funcionarios; de todas formas, creo que no cambia la calificación de la situación.

Se trata de un puñado de funcionarios de la Aduana de distintas oficinas ubicadas en diferentes departamentos del país afectados a las tareas de vigilancia y que ingresaron a través de un contrato laboral. Por lo tanto, parecería razonable proceder a su regularización en términos que no tendrían impacto o costos desde el punto de vista presupuestal.

Nuestra propuesta está contenida en la Hoja N° 10, porque el propósito del Partido Nacional era ingresar esta solución en el capítulo correspondiente al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas". Entiendo que sería más apropiado introducir un aditivo en dicho Inciso; estamos considerando en la Sección II "Funcionarios", en la que se establecen normas generales para los funcionarios públicos.

No pierde valor ni fuerza de ley que se incluya en una sección o en la otra, pero entiendo que sería más sensato -en la medida en que se refiere a los funcionarios de una determinada unidad ejecutora- que se incluya en el Inciso 05, en el que también está incluido el aditivo que el Partido Nacional ha presentado, que tiene una ligera diferencia con el texto presentado por el señor diputado Rubio, en particular en el tercer inciso. Tal vez en dicho inciso haya alguna dificultad en la redacción, pues hay una referencia al plazo de seis meses, que creo puede querer decir una cosa distinta a lo que en realidad, a mi juicio, este artículo proyectado está diciendo. Si los contratos tendrán un plazo de seis meses, no sé de qué contratos estamos hablando: ¿de los que se hagan de aquí en adelante o de los que se hicieron en el pasado? Creo que la redacción debería ajustarse.

Razonando en voz alta me pregunto si sería adecuado desglosar este aditivo, dejar pendiente su consideración hasta el momento en que abordemos el Inciso 05, pulir la redacción, ya que hay voluntad política -es importante- de todos los partidos que hasta ahora se han pronunciado, y encontrar una solución a este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- De acuerdo con la propuesta del señor diputado, debemos considerar el desglose de este aditivo a efectos de afinar su contenido y decidir su ubicación.

SEÑOR VERRI (Walter).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR VERRI (Walter).- Señor presidente: en representación del Partido Colorado, quiero dejar constancia de que vamos a acompañar la propuesta del señor diputado Rubio, que es muy coincidente con la del señor diputado Abdala, a quien le asiste razón cuando afirma que debe incluirse en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" por tratarse de una dirección correspondiente a dicha Secretaría de Estado.

Asimismo, compartimos la argumentación del señor diputado Sánchez. Nosotros también recibimos a la Asociación de Funcionarios Aduaneros y a los funcionarios involucrados, que vienen arrastrando una situación, cuya solución debería haberse previsto en el mensaje de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. Como no sucedió, es de recibo acompañar este aditivo y regularizar la situación de estos funcionarios, que ingresaron en condiciones adecuadas a través de un concurso organizado por la Oficina Nacional del Servicio Civil y por

ventanilla única, tal como se ha dicho. No es justo que esos funcionarios sigan en esa situación.

Por lo tanto, vamos a acompañar la propuesta del señor diputado Rubio, con los cambios que pretende introducir el señor diputado Abdala.

Gracias, presidente.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente va a acompañar esta iniciativa, pues es firmante de la Hoja N° 10, referida por el señor diputado Abdala.

Compartimos que este tema debería estar incluido en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", porque en esta sección relativa a los funcionarios se incluyen las normas de carácter general, es decir, abarca a todos los incisos. Este es un caso particular referido a la Dirección Nacional de Aduanas y, reitero, debería incluirse en el Inciso 05.

Por lo tanto, adherimos a la propuesta de desglose para considerarlo en el momento en que abordemos los artículos correspondientes al Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el desglose de la Hoja N° 3 y de la Hoja N° 10 para ser consideradas en el momento oportuno.

——Ochenta y cuatro en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 4, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

——En discusión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: de acuerdo con lo que se ha dicho, este artículo también debería ser incluido en el Inciso 05; tal vez por impericia, por inexperiencia no se procedió en ese sentido. No tendríamos problema en desglosarlo, si es que existe voluntad de acompañarlo.

Esto también tiene que ver con una situación planteada por los trabajadores de Aduanas en cuanto a otorgar una compensación mensual nominal a quienes desempeñan tareas de vigilancia los días feriados o los fines de semana.

La Dirección de Vigilancia trabaja los 365 días del año y sus funcionarios no reciben una compensación especial por los días feriados o los fines de semana, y cada vez hay menos personas dispuestas a realizar un trabajo especial que contemple las veinticuatro horas, los 365 días del año.

Este tipo de compensación especial ya existe en otras reparticiones del Estado como, por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para quienes trabajan en tareas de barrera sanitaria durante esos días especiales.

Por lo tanto, proponemos esta compensación para garantizar y asegurar que se cumpla con una función esencial para el Estado, como el control de las fronteras.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Uno en ochenta y siete: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 5, presentado por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——En discusión.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: esta es una propuesta que el

Partido Colorado ha presentado en las últimas rendiciones de cuentas, referida a la situación fiscal que vive el país. Es una propuesta para lograr el tan mentado espacio fiscal.

En los últimos ejercicios del presupuesto se ha incrementado la cantidad de vínculos laborales con el Estado de forma bastante acelerada.

Con esta iniciativa se prevé la no provisión de vacantes en la Administración central y en las empresas públicas solamente por dos años -o un poco más de ese tiempo-, a efectos de que el Estado logre hacer un ahorro considerable.

Nuestros asesores nos indican que se ahorrarían aproximadamente US$ 40.000.000, entre la Administración central, la Presidencia de la República y alguno de los organismos de control. Si eso lo sumamos a US$ 20.000.000 que se podrían ahorrar por la no provisión de vacantes en las empresas públicas, tendríamos un total de US$ 60.000.000 de forma acumulativa en los dos años de vigencia de esta propuesta.

Como decía, esta es una idea en la que el Partido Colorado ha insistido, y entendemos que es necesario que se concrete, por las razones que acabo de dar.

Por otra parte, proponemos destinar una parte ínfima, de los US$ 120.000.000 que el Estado puede ahorrar, para algunos organismos sensibles que han solicitado refuerzo de rubros, como la UTEC, ASSE -para la creación de un centro oncológico en San Carlos-, la Jutep, el Tribunal de Cuentas.

A estas propuestas se añade la de derogar el adicional del Fondo de Solidaridad y traspasar a la Universidad de la República los fondos que perdería por esta derogación. La idea es que no pierda esta partida que, según se nos ha dicho, es cercana a los US$ 9.000.000.

Entendemos que se trata de una norma necesaria, por lo que el Partido Colorado la ha impulsado en las últimas rendiciones de cuentas.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Treinta y cinco en ochenta y siete: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 6, presentado por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——En discusión.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: brevemente, voy a decir que lo que proponemos con la sustitución del artículo 15 de la Ley Nº 19.121, relativa al Estatuto del Funcionario Público, es la posibilidad de incrementar el término de la licencia por paternidad de los funcionarios públicos de diez días hábiles a doce días hábiles. Lo que se pretende es emparejar, de alguna manera, el régimen de la actividad pública con el de la privada, donde los trabajadores tienen tres días hábiles más diez días corridos. Entonces, nos pareció de orden aumentar la licencia por paternidad para funcionarios públicos.

Aclaro, señor presidente, que esta propuesta no tiene un costo presupuestal porque, en definitiva, se va a pagar al funcionario la misma remuneración que si estuviera trabajando.

Nos parece que esto implica un avance en los derechos de los funcionarios públicos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Hoja N° 6.

——Ocho en ochenta y siete: NEGATIVA.

10.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Solicito que se rectifique la votación del artículo 28.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar.

——Cuarenta y nueve en ochenta y seis: NEGATIVA.

VARIOS SEÑORES LEGISLADORES.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a rectificar nuevamente la votación.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señor presidente: pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En primer lugar, se va a votar la rectificación de la votación e, inmediatamente, pasaremos a considerar la cuestión de orden. Esta es la opinión de la Mesa con relación a lo que establece el Reglamento, que es muy claro.

——Señor diputado: estamos en el medio de una votación.

——Se va a votar nuevamente la rectificación del artículo 28.

——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor diputado Meroni.

SEÑOR MERONI (Jorge).- Gracias, señor presiden-te, pero ya no es necesario plantear la cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Antes de continuar con la discusión, damos la bienvenida y saludamos a los alumnos de tercer y quinto año de liceo del instituto Pocitos Day School, que nos acompañan en la segunda barra.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: quiero agradecer la gentileza parlamentaria de alguna de las bancadas que permitieron que legisladores del Frente Amplio, que estaban haciendo uso del *toilette,* entraran a sala para votar. Vamos a tener en cuenta este procedimiento en el futuro.

Hemos aprobado un artículo que no tiene costo presupuestal en la segunda rectificación, procedimiento que figura en el Reglamento. Seguramente, eso influirá en la manera en que procederemos durante el resto de la Rendición de Cuentas. Así que, en función de esas situaciones, veremos cómo vamos a planificar el trabajo desde ahora en adelante.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: en cuanto a este artículo, que ha tenido diversas interpretaciones, simplemente quería agregar que lo votamos convencidos, y, además, porque está previsto -como dice el texto- en el artículo 35 de la Ley N° 19.355 que, entre otras cosas, suprime ocho cargos de particular confianza que existían al momento de aprobarse el Presupuesto del año 2015: seis cargos de coordinador regional, un cargo de relaciones públicas y un cargo de secretario particular.

Gracias, señor presidente.

12.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continúa la consideración del Inciso "Presidencia de la República".

En discusión el artículo 29.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y dos en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

La señora diputada Lilián Galán había propuesto un bloque a partir del artículo 30. Le vamos a pedir que lo reitere para ponerlo a consideración.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: había solicitado votar en bloque los artículos 30, 31 y 33 a 35 inclusive.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: solicitamos que se siga considerando artículo por artículo, porque el bloque que plantea la diputada Galán incluye disposiciones que no vamos a acompañar. Por lo tanto, creo que avanzaremos más rápidamente votando artículo por artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 30.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 31.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 32.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 33.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 34.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y tres en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 35.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 36.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presiden-te: vamos a pedir el desglose y el pase a la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de los artículos 36 a 40 inclusive.

Ya expresamos en la Comisión que refieren a una temática muy compleja y de mucha relevancia, como la protección de datos personales que, por supuesto, no tiene nada que ver con una rendición de cuentas. Además, hay un conjunto de razones muy importantes para que este articulado no se considere -y, mucho menos, se apruebe- en esta instancia.

En Comisión advertimos que el Parlamento ha designado un representante en el Consejo Consultivo del organismo competente en la protección de datos personales -un derecho humano fundamental, consagrado en nuestra Constitución-, que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Me refiero al doctor Felipe Michelini, quien cumplió a cabalidad y de muy buena forma con su rol y su obligación de representar al Parlamento en una tarea que preceptivamente la ley le encomienda, que es opinar sobre cualquier tipo de reglamentación o regulación referida a la protección de datos personales.

El 9 de julio de 2018, se dirigió a la presidenta de la Asamblea General, a efectos de informar en representación de ese Cuerpo, en su calidad de integrante del Consejo Consultivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Hizo una serie de apreciaciones sobre esta propuesta, que abarca los artículos 36 a 40 del proyecto de Rendición de Cuentas de la Comisión -los artículos 35 a 39 del proyecto del Poder Ejecutivo-, solicitando, con fundadas razones, que estas modificaciones no se consideraran en esta instancia, y planteó su deseo de que la revisión de la normativa de protección de datos personales se analizara en el ámbito correspondiente, en este caso, la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

El doctor Felipe Michelini, además, hizo una serie de consideraciones particulares, observando cada artículo; algunas son muy importantes. Nosotros agregamos otras en la sesión de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda en la cual se trató este tema. Los señores legisladores que participaron de esa instancia recordarán que la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales también prefería -se pronunció en tal sentido- una revisión general e integral de la Ley N° 18.331, que es la de protección de datos personales, norma que fue pionera en América Latina y permitió al Uruguay adecuarse a la normativa europea.

Si aprobáramos los artículos propuestos, no solo no nos habríamos adecuado a la normativa europea, sino que daríamos un paso atrás. Decimos esto no solo por el contenido y la solución que se da en estos artículos sino, fundamentalmente, porque este apresuramiento -que es muy difícil de entender por todas las partes que se verán afectadas- podría generar un desbalance, al no tener en cuenta las particularidades de nuestro país.

Por eso mocionamos para que los artículos 36 al 40 inclusive pasen a la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología. Reitero que, entre otras cosas, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales que compareció ante el Parlamento dijo que tenía un proyecto mucho más completo e integral, que es más conveniente para mantener este estatus privilegiado de país adecuado a la normativa europea en la protección de datos personales.

No vemos ninguna razón para este apresuramiento, pero sí muchísimas para enviar estos artículos a Comisión y empezar a considerar el proyecto integral que el Poder Ejecutivo ya tiene y que ofreció el prosecretario de la Presidencia, doctor Roballo. Reiteramos: no entendemos que exista ninguna razón para tratar este asunto en esta instancia, como ha expresado el representante del Poder Legislativo en el Consejo Consultivo. No habría ningún obstáculo para que en breve se hiciera esa revisión completa en un ámbito que nos permitiera, entre otras cosas, lo que el manual propone, que es consultar a las empresas que serán afectadas por esta nueva normativa.

Sin perjuicio de ello, como hemos adelantado, estos cinco artículos tienen la desventaja de no considerar la gran falla que hoy presenta nuestro sistema de protección de datos personales. Nos referimos a que las bases de datos del Estado son realmente un tembladeral, para ser gráficos. Esto no lo digo yo, sino los organismos correspondientes que han sido convocados al Parlamento, que nos han confesado que la mayoría de las bases de datos del Estado, de nuestro país, no están registradas. Esto nos permite concluir que, mucho menos, son controladas.

En momentos en que en el mundo entero el uso indebido o el mal uso de datos personales -sobre todo, en bases importantes como las de un país- ha llevado a que muchos procesos electorales se hayan visto distorsionados, en nuestro país, donde las principales bases de datos son del Estado, se propone este articulado, que no aborda esa problemática, esa falla que hoy tenemos. De alguna forma, esto facilita, habilita y -¿por qué no?- incentiva

a que en las próximas elecciones nos encontremos con episodios que han sucedido en otro país, que realmente harían mucho mal al sistema democrático por la pérdida de credibilidad y por no saber a ciencia cierta hasta dónde el uso indebido de las bases de datos del Estado tiene fines electorales.

Reiteramos: mocionamos para que estos artículos se desglosen y pasen a Comisión. No queremos que este articulado quede bajo sospecha ni que se dé un paso atrás en el estatus privilegiado que hoy tenemos. Queremos que en un tiempo prudencial, breve, podamos hacer las cosas bien, que se proceda a una adecuación correcta, atendiendo a nuestras especiales circunstancias de país, consultando a las partes interesadas e involucrando, como corresponde, al Parlamento.

Estos temas, que son de derechos humanos, no pueden ser aprobados y considerados por fuera de los ámbitos parlamentarios; esto les hace muy mal y quedan bajo sospecha.

Estamos ante una cuestión cada vez más importante. Los datos son cada vez más relevantes en una cantidad de fenómenos; además, cada vez más los ciudadanos tenemos la obligación de aportar datos al Estado, porque sin ellos no podemos hacer algunos trámites esenciales. Por lo tanto, debemos dar la protección que el mundo entero está promoviendo; sin embargo, con estos artículos, estamos dando un paso atrás.

Como dijimos, mocionamos para que se des-glosen los artículos 36 al 40, inclusive.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: creo que es de recibo el planteo que hace el señor diputado Rodrigo Goñi Reyes.

Los artículos 36 a 40 son de carácter permanente, y este tema requiere un tratamiento particular. En realidad, esto había sido planteado en la Comisión, pero no lo tuvimos en cuenta en el momento de la votación. Es capital que el informe al que se hace referencia, realizado por el doctor Felipe Michelini, sea considerado al analizar estos artículos. Él plantea algún tipo de observación en un ámbito especializado, y me parece que la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología es la más adecuada -hasta por su propia conformación- para analizar detenidamente estos temas, que es imposible que aborde la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, dado que no tiene especialización al respecto.

Por eso vamos a acompañar este planteo, que nos parece es de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar la moción del señor diputado Goñi de desglosar los artículos 36 al 40 para enviarlos a la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La Mesa recuerda que el artículo 40 tiene un sustitutivo, que no se podrá considerar si esta moción resulta aprobada.

——Cuarenta y dos en noventa y dos: NEGATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 36.

——Cincuenta y uno en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 37.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presidente: haremos lo que esta Cámara, por mayoría, no ha querido, que es respetar la opinión y el trabajo que hizo el doctor Felipe Michelini, quien envió una serie de observaciones sobre cada artículo. Me parece que es una señal de mínimo respeto

por lo menos leerlas, ya que no serán tenidas en cuenta sus consideraciones generales y, mucho menos, las particulares. Probablemente, el doctor Michelini nunca más vaya a cumplir con su obligación porque, aun haciéndolo correctamente, su opinión no es considerada por el órgano que lo designó para una tarea concreta.

Nosotros daremos lectura al informe.

Con relación a los artículos que se están votando, el doctor Michelini dice que sería más adecuado incorporar el texto del artículo propuesto a la Ley N° 18.331, entendiendo que es mucho más armónico: "Desde el punto de vista técnico sería más correcto sustituir el actual artículo tercero" -de la Ley Nº 18.331- "agregándole el texto proyectado". Más adelante, agrega: "[…] la norma proyectada en el literal B) 'normas de derecho internacional público o un contrato' genera muchas dudas. No queda claro cómo se valorarían por ejemplo, las normas de derecho internacional privado; o podría preguntarse si un contrato puede modificar normas que en principio son de orden público al incluirse en el régimen; o eventualmente cuestionarse que si fuese un contrato del Estado o de los particulares, el texto pueda ser interpretado de diferente manera". Luego, expresa: "Tiene un fin complementario al actual artículo décimo de la ley".

También hace observaciones: "Desde el punto de vista técnico al igual que en el caso anterior, sería más adecuado sustituir el actual artículo agregándole el texto del proyecto propuesto. Por otra parte, debería comprenderse también el usuario y los terceros […] y no solo los responsables o encargados de la base de datos. Nótese además que el giro empleado 'tome conocimiento' es impreciso. A mi entender debería ampliarse la hipótesis del deber de informar a la Unidad Reguladora en cuanto haya 'indicios' o 'sospechas' de una vulneración de seguridad de los datos que administre".

Hasta aquí las observaciones hechas por el doctor Felipe Michelini sobre este artículo; como habrán notado los señores legisladores, son de mucha relevancia.

De alguna manera -no sabemos si queriendo o sin querer-, el texto propuesto deja muchos espacios, muchas ventanas abiertas y no se podrán proteger realmente los datos personales.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 37.

——Sesenta y dos en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 38.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presiden-te: las observaciones que realiza el doctor Michelini establecen lo siguiente: "[…] debería incluirse al usuario y a los terceros, mejorar el artículo original de la responsabilidad que se mantiene y en cuanto a la redacción, deberían evitarse las reiteraciones por ejemplo el de 'responsabilidad proactiva'; agregar 'todas' al giro de las medidas y eliminarse los dos puntos en el texto".

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 38.

——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 39.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y uno en noventa: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo 40.

Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 8, presentado por los señores diputados Rodrigo Goñi Romero, Wilson

Aparicio Ezquerra Alonso, Héctor Gabriel Gianoli Travieso y Walker Foch Ichazo.

——En discusión el artículo 40.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presiden-te: este es el artículo que, para nosotros, producirá más efectos negativos, por acción u omisión.

Como dijimos hace un momento, las bases de datos del Estado son las más grandes del país, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones, donde hay empresas privadas que tienen bases de datos más importantes. Por ejemplo, en Uruguay está la base de datos del Mides. Recordarán los legisladores todos los problemas que se generaron en el Gobierno por el uso y manejo de la información de esa base de datos. El presidente de la República *manu militari*, terminó concentrando en la órbita de la Presidencia todas esas bases de datos, lo que va a contrapelo de todas las tendencias del mundo sobre la protección de datos, que exigen la existencia de órganos reguladores independientes. En nuestro país, recientemente, se hizo al revés: el presidente de la República llevó a su organismo, a su control absoluto y sin fiscalizaciones independientes, todas las bases de datos del Estado.

Obviamente, eso deja abierta la posibilidad de que los datos de todos los uruguayos sean usados con fines que no son aquellos para los cuales fueron entregados -lo que, en muchos casos, podrá ser un incentivo-, con lo que no se cumpliría con la finalidad.

Ya hemos tenido que lamentar hechos muy graves de la Presidencia de la República con relación al uso indebido de datos -recordarán el caso del colono, por citar el más conocido-; se utilizaron datos personales con fines que no son los que la ley establece.

Ahora bien, con todas las bases de datos del Estado bajo la órbita de la Presidencia, con el maquillaje que se hace en esta propuesta normativa de establecer nuevos delegados de protección de datos, nuevos controles, pero sin poner los medios para que eso se haga efectivo, estamos a las puertas de tener que lamentar episodios como los que han sucedido en otros países, donde el Estado o los partidos políticos que están en el poder hacen un uso electoral de los datos personales.

Por eso, planteamos una propuesta sustitutiva, en la que se establecen los medios para que el control de datos pueda ser efectivo, sobre todo en las bases de datos estatales, que son las que tienen que dar el ejemplo, pero que hasta ahora lo han dado por la negativa, pues son las que más incumplen con la reglamentación para todas las bases de datos. Lo que propusimos fue separar las bases de datos del Estado de las privadas: ponemos más exigencias para las bases de datos del Estado y establecemos sanciones acordes con el bien que queremos proteger, algo que no incluye esta norma.

¡Vaya si deberemos establecer sanciones para el caso de que un jerarca del Estado utilice ciertos datos -los del Mides, por ejemplo- para hacer campaña electoral, para trasmitir a los inscritos en el Mides mensajes relacionados con lo que puede estar necesitando o para hacerles creer que se les responderá en función de esa base de datos! La tentación es realmente muy grande. Por eso, proponemos una norma que establezca controles.

Por supuesto que no es el control que aspiramos Uruguay tenga pronto, que es el de una unidad reguladora independiente. Por eso queríamos considerar el tema en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología y hacer lo que todo país serio realiza, o sea, contar con una unidad reguladora independiente para controlar efectivamente las bases de datos del Estado y las privadas.

En este caso, no se establecen controles, y por eso se seguirá dando el uso indebido de datos con consecuencias muy graves no solo para los ciudadanos, sino también para la transparencia. del proceso electoral. Esta es la razón por la cual propusimos esta norma sustitutiva: establecer controles efectivos. Además, quienes controlen los datos tendrán las condiciones y los requisitos que el mundo y este nuevo reglamento imponen. La idea es que esa persona no pueda ser un mero hombre de paja, sino un efectivo *controller* de los datos personales.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 40, tal como viene de Comisión.

——Cuarenta y nueve en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: hemos acompañado todos estos artículos porque respaldamos el trabajo de los compañeros que estuvieron a cargo del análisis de la Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

De todos modos, vamos a releer este trabajo en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde venimos trabajando el tema de las bases de datos. Incorporaremos las mejoras que sean necesarias para proteger una cuestión tan delicada como las bases de datos personales privadas y públicas que se manejan en nuestro país. Sabemos que las privadas también generan situaciones complejas porque hay individuos a los que, en función de su manejo, se les aplica lo que se denomina la "muerte civil": no pueden operar ni siquiera a nivel crediticio.

Lamentablemente, yo no recibí el informe del doctor Felipe Michelini; de lo contrario, podría haberlo analizado en tiempo y forma. En la Comisión nos daremos los tiempos para seguir estudiando esta cuestión.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: voy a fundar mi voto al artículo 40, pero hay un conjunto de disposiciones planteadas en esta Rendición de Cuentas que hablan de las bases de datos y que en el trabajo en la Comisión entendimos que era necesario habilitar, con algunos cambios importantes.

Por ejemplo, en algún artículo incluimos que el Estado nunca compartirá sus bases de datos con los privados. Además, la protección de los datos personales en este país está consagrada por una ley muy importante, la de *habeas data* -refiere a la preservación de los datos personales-, y por un conjunto de reglamentaciones y de decretos que establecen los procedimientos a seguir a la hora de tratar determinados datos sensibles. No es que el Uruguay esté desprotegido frente a eso, y por ello votamos con total confianza este articulado.

Más allá de que alguien pueda comprender -yo lo comprendo, aunque en esta oportunidad, no votamos en conjunto con la oposición- que en las rendiciones de cuentas siempre hay un conjunto de artículos que no son estrictamente presupuestales, es legítimo que varias bancadas o varios señores legisladores o señoras legisladoras soliciten que sean tratados en las comisiones específicas. Muchas veces sucede la razón del artillero: aprobar algunos artículos en la rendición de cuentas garantiza que comiencen a tener vigencia mucho más rápidamente. Eso es algo que conocen muy bien los partidos que han sido gobierno. De hecho, la historia de las rendiciones de cuentas y

de los presupuestos tiene que ver con este debate.

Amén de esta situación, sin duda se trata de un tema muy complejo, que el país viene regulando de manera importante. Creo que en Uruguay hay una buena preservación de los datos personales. Entiendo que las hipótesis que se plantearon -estoy en el fundamento de voto y no puedo aludir- acerca de que ciertos funcionarios públicos puedan utilizar las bases de datos del Estado para hacer campaña electoral no se han dado en el Uruguay. Es importante decirlo porque habla de la seguridad de los ciudadanos cuando entregan datos al Estado, que no son utilizados por los partidos políticos; además, eso está penalizado y regulado por varios decretos para que no suceda.

No obstante esa situación y una discusión general mucho más amplia, no creo que el Estado deba tener más obligaciones que los privados en el mundo en que vivimos actualmente. No creo en la idea de que a los privados se los regule de una manera y al Estado de otra cuando hablamos de datos. Yo quiero regular de forma severa y por igual al privado y al Estado cuando maneja datos personales, y más en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la hiperconectividad.

¡Por supuesto que hay que avanzar! Pero discrepo con los que piensan que hay que ser más blandos con los privados y más duros con el Estado. ¡Seamos duros con todos!

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Apoyados!

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: es cierto que la rendición de cuentas es utilizada muchas veces para incluir artículos que no tienen nada que ver con ella; lo vivimos durante muchísimo tiempo y excede a la actual administración del Frente Amplio. Es cierto lo que se acaba de decir.

El problema particular de este tema no es ese, sino que hay un informe del representante del Poder Legislativo en esa comisión desaconsejando la aprobación de estos artículos. Lo grave no es que esté incluido en la Rendición de Cuentas. De por sí es grave que el manejo de datos personales figure en un proyecto y sea analizado en una comisión que no tiene nada que ver con el asunto. Lo grave de esto es otra cosa y fue lo que nos llevó a no acompañar estos artículos; lo grave es que el representante del Poder Legislativo en la comisión respectiva desaconseja la aprobación de estos artículos.

Yo entiendo que las necesidades del Poder Ejecutivo lleven a que ingresen algunas cosas en las rendiciones de cuentas. En esta se incluyen aspectos que no tienen nada que ver, por ejemplo, la modificación de un código de 1870. En realidad, se van al extremo del uso de la rendición de cuentas en lo que se conoce como "ley ómnibus", como tradicionalmente se le ha dicho.

En este caso en particular, es la primera vez que yo recuerde que el representante del Poder Legislativo en una comisión desaconseja por escrito la aprobación de los artículos que la Cámara acaba de votar. Entonces, lo mejor que debería hacer ese representante es presentar renuncia a su cargo porque, en realidad, la Cámara, a la hora de haber escuchado lo que recomendaba nuestro representante en esa comisión, hizo caso omiso y votó los artículos en cuestión que, además, tienen la delicadeza de tratar asuntos vinculados con el manejo de los datos personales.

Y será digno de otro debate, más que interesante, si el Estado debe tener mayor o menor regulación que los privados en el manejo de dicho dato. Da como para diez días seguidos de debate. Ahora bien: en este caso, queremos dejar constancia y reafirmar que en esa Comisión el representante del Poder Legislativo dijo que no había que votar estos artículos,

cuestión que, lamentablemente, acaba de ser desoída por la bancada mayoritaria del Gobierno.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se pasa a considerar el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", que comprende los artículos 41 al 69, inclusive.

La Mesa entiende que hay una propuesta de procedimiento para este Inciso.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: nosotros proponemos el desglose de los artículos 42, 43, 45, 48, 50, 55 y 61, y votar el resto en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el Inciso 03, que comprende los artículos 41 a 69, con excepción de los artículos cuyo desglose ha sido solicitado.

——Ochenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Pido la palabra para fundar el voto sobre el artículo 41.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ZAVALA (Alejandro).- Señor presidente: en el artículo 41 se propone un segundo aumento salarial, por arriba del IPC, para algunos escalafones de las Fuerzas Armadas, personal militar, escalafón K. Como se recordará, en la Ley Nº 19.355, de Presupuestos, se votó un aumento salarial por arriba del IPC, de la inflación, con las partidas detalladas en el artículo 149. Ahora se propone un nuevo aumento salarial para casi los mismos escalafones del personal militar, subalterno. Se trata de un aumento diferente, con una estructura distinta a la que estaba planteada en aquel momento, pero es un segundo aumento salarial por encima de la inflación.

En el artículo 41 hay un último inciso que explícitamente condona una deuda pendiente del Ministerio de Defensa Nacional que implicaba devolver a Rentas Generales parte del dinero adelantado para poder otorgar el aumento en el 2010 desde el inicio del período y no tener que esperar que existieran los ahorros suficientes en dicha Cartera para poder financiarlo. En concreto, lo que se está condonando es una reducción de vacantes que en el artículo 149 de la Ley de Presupuestos se demandaba hacer al Ministerio de Defensa Nacional, y se estableció lo siguiente: "El Ministerio de Defensa Nacional deberá suprimir vacantes…".

Hace un ratito, la bancada de uno de los partidos de la oposición, proponía suprimir vacantes en toda la Administración central, excluía, por ejemplo, a los docentes, al personal técnico de la UTU, etcétera. También, sin nombrarlo, excluía -hablaba solo de los funcionarios civiles- al personal militar del escalafón K. Me pregunto por qué se excluía porque, en realidad, se generan vacantes permanentemente; no hay que echar a nadie en el Ministerio de Defensa Nacional para que se generen vacantes, ya que se jubilan alrededor de mil militares por año, además de que existe una importante rotación a nivel de los escalafones más bajos en los cuarteles. Sin embargo, la oposición no considera que se pueda ahorrar en dicha Secretaría de Estado. Considera que se puede ahorrar con vacantes en la Administración central, pero no en el mencionado Ministerio.

Cuando se votó este artículo, la mayoría de la Cámara consideró que se podía hacer ese ahorro y así financiar el aumento salarial incluido en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

——Termino, señor presidente.

Nosotros discrepamos con el penúltimo inciso. Nos preguntamos qué pasaría si fuese el Mides el que pidiera que le perdonáramos la reducción de vacantes a la que se había comprometido. Nos

hacemos la autocrítica -como sector del Gobierno, porque estamos acompañando este artículo ya que así lo resolvió nuestra bancada- de si, en realidad, no nos estamos equivocando al condonar una supresión de vacantes que el Ministerio de Defensa Nacional no hizo. No solo no suprimió las vacantes, sino que desde el año pasado hasta este aumentó en quinientos los vínculos laborales.

Quería manifestar nuestra discrepancia.

Muchas gracias.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: estamos de acuerdo con el artículo 41, en el sentido de que se propone un aumento de salario a los escalafones inferiores de la suboficialidad.

Ahora bien: en cuanto a la idea de suprimir la provisión de vacantes que se mencionó, nos parece importante establecer que una cosa es la obligatoriedad establecida en una ley para determinados organismos y, otra muy diferente, es lo que pueden hacer estos. En este caso, el Ministerio de Defensa Nacional perfectamente puede suprimir vacantes aun no teniendo norma legal que lo obligue; lo puede hacer. De hecho en cada una de las rendiciones de cuentas y de los mensajes presupuestales se establecen supresión de vacantes. Estará en el organismo conocer sus requerimientos y mandar la norma que, en definitiva, suprime las vacantes. Es una potestad del organismo.

También creo que el mensaje es un poco contradictorio porque, por un lado, se dice que la caja militar tiene un déficit bastante abultado y, por otro, se habla de la supresión de vacantes en el Ministerio de Defensa Nacional. Claramente, lo que se logra con esa medida es seguir desfinanciando la caja militar. Noto cierta contradicción también en el mensaje.

Pienso que el organismo está en condiciones de saber qué personal precisa y cuál se puede suprimir para hacer los ahorros correspondientes en el Inciso y en toda la Administración.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: este es un tema de una discusión absolutamente colateral; si entramos en esa discusión, nosotros también podríamos decir que condonamos a Ancap una deuda de US$ 622.000.000. Y nadie dijo nada. Además, en este artículo es necesario tener presente que, por lo menos, los datos de que disponíamos señalan que había treinta y un mil funcionarios y que hoy hay unos veintidós mil o veintitrés mil. Me parece que esta no es una discusión para dar en esta sesión porque, de lo contrario, algún diputado puede salir hablando de algunas de las condonaciones que se han hecho, y tampoco tiene sentido.

14.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2017. (Aprobación)

Continúa la consideración del asunto en debate.

En discusión el artículo 42.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 43.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 45.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 48.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y dos en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 50.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 55.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 61.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y uno en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 04 "Ministerio del Interior", que comprende los artículos 70 a 99, inclusive.

Tiene la palabra la señora diputada Lilián Galán.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: solicitamos que se voten en bloque los artículos 70 al 99, inclusive, excepto los artículos 71, 73, 76, 79, 82 al 84, 86, 91 al 95, 98 y 99, cuyo desglose pedimos.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: no escuché bien, pero solicito que se desglosen los artículos 83, 89, 91, 93 y 94.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Agregamos el artículo 89 puesto que ya se había solicitado el desglose de los demás artículos.

Por lo tanto, se van a votar en bloque los artículos 70 al 99, excepto los artículos 71, 73, 76, 79, 82, 83, 84, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98 y 99, cuyo desglose se ha solicitado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: es bastante complicado.

En principio no podemos aceptar el bloque, porque hay algunos artículos que no vamos a votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- ¡Bien! Entonces, vamos a votar los artículos uno por uno.

En discusión el artículo 70.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y uno en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 71.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 72.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 73.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 74.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Solicito la reconsideración del artículo 73.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez para fundar el planteo de reconsideración del artículo 73.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: solicito la reconsideración del artículo 73, pues necesitamos hacer una modificación verbal en una referencia que está equivocada.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar si se reconsidera el artículo 73.

——Ochenta en noventa y uno: AFIRMATIVA.

Se reabre la discusión del artículo 73.

Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- En el último inciso del artículo 73 se establece: "Increméntase la partida prevista en el Objeto del Gasto 554 'Auxiliar 035' en el Programa 461 de la Unidad Ejecutora 001 'Secretaría del Ministerio del Interior' […]".

En realidad, esa referencia es incorrecta, porque no debe decir: "Auxiliar 035". La redacción correcta sería: "Increméntase la partida prevista en el Objeto del Gasto 554.035" -ahí quedarían comprendidos los auxiliares-, y lo que debe ir entrecomillado es "Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados". Luego, el artículo continúa tal cual figura en el proyecto.

Por tanto, hay una referencia equivocada: se ve que el entrecomillado no quedó correctamente en el artículo.

¿Se entiende lo que proponemos modificar?

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- La Mesa solicita al señor diputado que dé lectura a la redacción propuesta en su totalidad.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- La propuesta sería: "Increméntase la partida prevista en el Objeto del Gasto 554.035, 'Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados', en el Programa 461 de la Unidad Ejecutora 001 'Secretaría del Ministerio del Interior' del Inciso 04 'Ministerio del Interior', en la suma de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) con cargo a la Financiación 1.1 'Rentas Generales".

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se entendió perfecto.

En discusión el artículo 73, con la modificación propuesta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 75.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 76.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 77.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 78.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 79.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 80.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 81.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 82.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: la bancada de diputados del Partido Nacional solicita que los artículos 82 y 83 pasen a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, en el entendido de que esas normas deberían ser analizadas con otra profundidad y en otro contexto que no es el de la rendición de cuentas.

Nada más. Gracias.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: nos expresamos en el mismo sentido que el señor legislador Penadés.

Se puede entender perfectamente la propuesta que ha formulado el Ministerio del Interior en la medida en que aspectos vinculados, sobre todo, a la custodia personal referidos en el artículo 83, han demandado la utilización de aproximadamente seiscientos efectivos policiales. Es entendible la preocupación del Ministerio ante una costumbre que no es conveniente. Estos temas deben ser discutidos en un ámbito especializado, como el de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, por su vínculo con decisiones tomadas por la Justicia. Por tanto, estos asuntos deberían analizarse en ese ámbito, escuchando a todas las partes a los efectos de tomar una decisión adecuada.

Reitero que es razonable el fundamento que plantea el Ministerio del Interior, tanto para los artículos 82 y 83, pero su estudio debe realizarse en un ámbito especializado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: este fue un tema debatido, yo diría que con cierto ardor, en determinado momento, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda cuando compareció el ministro y, realmente, no nos entendimos mucho. Yo diría que más bien no logramos entendernos en lo más mínimo con él.

Con relación a estas disposiciones, el señor ministro insistía en lo que establece el artículo 82 en cuanto a que estas medidas tienden a su mayor efectividad y viabilidad. Y yo puedo llegar a entender, aun partiendo del concepto de la buena fe, que lo que le preocupa al ministro es la eficiencia en la utilización de los recursos -está bien- y, al mismo tiempo, que la protección a las víctimas y a los testigos sea eficaz. Aun partiendo de ese supuesto, creo que con esta redacción el señor ministro y el Poder Ejecutivo se equivocan.

Por tanto, tal como expresaban los diputados Penadés y Posada, considero necesario hacer un análisis bastante más reflexivo y sereno de estas disposiciones, porque aun partiendo de la buena fe de que eso es lo que se procura, pienso que se ponen en riesgo otros valores muy importantes. En ciertas circunstancias pueden verse afectadas las garantías personales de determinados habitantes de la República que eventualmente se vean envueltos en las situaciones que en estas disposiciones se regulan y, al mismo

tiempo, la independencia de los magistrados y del Poder Judicial.

Si el propósito es establecer como preceptivo un informe técnico previo, en el caso de la utilización de dispositivos electrónicos, pero muy particularmente en el de las custodias personales, reitero que esto puede llegar a conducirnos a que los jueces actuantes pierdan poder de decisión y este se traslade, desde donde hoy está -naturalmente, el Poder Judicial y el juez de la causa, hablando concretamente de cada situación en particular- al Ministerio del Interior. Y esto no corresponde, aunque en el caso de las tobilleras el propósito del Ministerio sea que funcionen en forma adecuada y que su uso contemple todos los aspectos técnicos vinculados con las situaciones que puedan darse, que nos fueron descritas en la Comisión y que, reitero, yo asumo como un problema real.

En el caso de las custodias personales, por supuesto que también es atendible la circunstancia de que a esta altura en el área metropolitana haya seiscientos policías afectados a estas funciones, al cumplimiento de este tipo de vigilancia o custodia. Está bien: por supuesto que eso resiente la gestión policial. Por supuesto que eso afecta la planificación de las funciones que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional deben cumplir en cuanto a la protección, no solo de las víctimas que se encuentran en esta situación, sino de la población en general. Pero tenemos que hacerlo bien; debemos hacerlo racional, razonablemente.

El artículo 82, señor presidente, ni siquiera hace referencia a la intervención del juez. Simplemente dice que cualquier medida de utilización de un dispositivo requerirá de un informe técnico previo. Ahora, ¿quién hace el informe técnico previo? Inferimos, presumimos, deducimos que es el Ministerio del Interior porque, además, después establece que el Poder Ejecutivo va a reglamentar la disposición. Entonces, no figura en ninguna parte que el juez es quien en todo caso debe resolver.

Con relación a las custodias personales, creo que es muy enfática la resolución o, si se quiere, más drástica. Se establece que exclusivamente podrá decretarse una medida de protección de custodia personal, si se dan las condiciones establecidas en el texto, soslayando o salteando en el cumplimiento de dichas condiciones y en la elaboración de ese informe técnico, la participación del juez de la causa: habrá que estar en el programa de víctimas protegidas, como dice aquí, y seguir todas las condiciones que se establecen.

¿No deberíamos escuchar al Poder Judicial antes de resolver algo así? Me refiero a antes de resolver -aun con la mejor intención- una cuestión que puede justificarse desde la realidad de las cosas, pero que con relación a los instrumentos que estamos escogiendo podría generar una lesión en aspectos que debemos cuidar mucho, como la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, o las garantías individuales. A este respecto, el ministro Bonomi, o quien lo suceda en el cargo -todo indica que, lamentablemente, para mala suerte de los uruguayos, eso no va a acontecer antes del 1º de marzo de 2020-, podrá utilizar estos instrumentos de una manera bastante más abusiva de la que el ministro nos dijo cuando compareció en la Comisión. Podrá aprovechar la vigencia de estas dos disposiciones para adueñarse completamente de la administración, tanto de las tobilleras como de la custodia personal, no solo de las víctimas de violencia de género o de los testigos protegidos, sino de toda custodia personal que cualquier juez, en cualquier circunstancia, en el ejercicio legítimo de sus atribuciones entienda que debe decretar; ya no podrá hacerlo sin pedir permiso al Ministerio del Interior. Esto está muy mal resuelto, señor presidente.

Prefiero trasmitirlo con tono sereno. En la Comisión el debate fue bastante más acalorado por momentos; creo que no es necesario que le demos ese dramatismo a este intercambio en sala. Me parece más prudente, razonable, sensato y un obrar

bastante más responsable, si frente a este problema nos comprometemos a dar una respuesta al ministro a breve plazo, aun antes de que entre en vigencia.

Advierto que se ha establecido que el ministro lo quiere vigente desde la promulgación de la ley. Pero para eso todavía faltan un par de meses; estamos terminando la consideración de la Rendición de Cuentas en esta Cámara y se abre un período de cuarenta y cinco días, por lo menos, para su consideración en el Senado. Creo que tenemos tiempo más que razonable, si hay voluntad política, para convocar a todos los actores, escuchar a la Fiscalía General de la Nación, al Poder Judicial, y no generar anticipadamente, en forma absurda una contienda de competencias, que afecta cuestiones muy delicadas y sensibles. Debemos ser muy cuidadosos porque el fin no justifica los medios. Aunque el ministro tenga razones poderosas para promover cuestiones de este tipo, no vale la pena hacerlo de cualquier manera y pasar por encima, nada menos, que de la competencia del Poder Judicial.

17.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

——Antes de pasar a intermedio, la Cámara estaba considerando el artículo 82. El diputado Gustavo Penadés había propuesto desglosarlo y enviarlo a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, así como al artículo 83, que si bien no empezamos a considerar, por abordar la misma materia, podría tener el mismo destino.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: en el mismo sentido que los diputados preopinantes, queremos hacer algunas consideraciones sobre estos dos artículos.

Entendemos la situación que explicó el Ministerio del Interior, entendemos el espíritu de la medida, entendemos que se está destinando una cantidad muy importante de efectivos policiales a custodia personal en los casos de violencia de género, de violencia doméstica, pero creemos que la formulación de estos artículos es totalmente inconveniente. Lo decimos pues se está supeditando una medida establecida por la Justicia a una resolución de otro Poder del Estado, el Poder Ejecutivo, en este caso, el Ministerio del Interior. Creemos que es totalmente inconveniente que la medida dispuesta por la Justicia dependa de lo que establezca el Ministerio del Interior. Esto podría llegar a afectar algunas competencias constitucionales del Poder Judicial, por lo cual resulta totalmente negativa la aprobación de estos artículos tal como están redactados.

Por eso, estamos de acuerdo con el desglose solicitado por el Partido Nacional. Creemos que sería muy oportuno seguir discutiendo estos artículos en la órbita de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y, en definitiva, elaborar una mejor redacción que no afecte una resolución de la Justicia.

Gracias.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: el Partido Colorado y el Partido Independiente han entendido el argumento del ministro del Interior y su equipo, que con total claridad han explicado, en más de una oportunidad, ante preguntas y repreguntas, la necesidad de contar con estos dos artículos.

Todos recordamos las argumentaciones. No las vamos a repetir. Como dije, el Partido Colorado y el Partido Independiente las interpretaron claramente, y entienden que estos artículos deben enviarse a la Comisión de

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

La bancada del Frente Amplio, comprende el planteo del Partido Colorado y del Partido Independiente, pero también entiende que estos dos artículos son muy importantes para el Ministerio del Interior y para tener en cuenta la voluntad de las víctimas, es decir, para que los usuarios de esas medidas puedan consentirlas y, además, presten su colaboración y asuman cumplir determinadas obligaciones. A nuestro juicio, se debería tener en cuenta la voluntad de las víctimas, es decir, si las víctimas quieren usar estos mecanismos.

Estos dos artículos son valiosos para el Ministerio del Interior, tal como quedó claro en el debate, si bien siempre existe la posibilidad de que alguien no entienda las explicaciones del ministro, sea este o cualquier otro. Como dijimos, las explicaciones han sido comprendidas. La única diferencia es que unos interpretan que estos artículos deben ir a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y el Frente Amplio entiende que debe acompañarlos por las razones que en su momento expusieron el ministro y su equipo en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

Gracias.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: esto ya fue dicho; simplemente, quiero dejarlo como constancia y agregar una cuestión más.

Nadie discute la intención del actual ministro del Interior, pero las leyes no se hacen con intención ni sobre la base de expresiones de deseo; las leyes son normas con efectos generales. En este caso, se están dando potestades a miembros del Poder Ejecutivo, nada menos que al Ministerio del Interior que, esté en manos de quien esté y sea del partido que sea, es un ministerio muy poderoso por su mando sobre las fuerzas. Está bien; debe ser así: cuanto más mando y más espíritu de cuerpo, mejor funciona el Ministerio del Interior. Ahora bien, esto no puede justificarse aduciendo la defensa de las víctimas, porque cuando uno altera el Estado de derecho y deja esto en manos de las personas individualmente consideradas o de Poderes del Estado, que no son independientes del Poder Ejecutivo, nos ponen a todos en situación de víctimas. Eso es lo grave. Entonces, siempre terminamos argumentado que se trata de sectores vulnerables, de situaciones de inequidad o de minorías discriminadas, pero alterar la consideración del orden institucional y del Estado de derecho es lo que nos está llevando a situaciones complicadas. Y puede llevarnos a situaciones aún más complicadas. Precisamente, porque todos somos potenciales víctimas, necesitamos el respaldo del Estado de derecho. La autoridad administrativa, también la del Ministerio del Interior -reitero: esté en manos de quien esté y sea del partido que sea-, debe estar sometida a los poderes jurisdiccionales, al Poder Judicial.

Si le hubieran dado más dinero a la Suprema Corte de Justicia, si hubieran incrementado sus recursos en el presupuesto del año 2015 -no se le dio; ni siquiera recibieron al Inciso, para humillarlo un poco más-, las cosas se podrían haber resuelto con más celeridad. Hasta podría lograrse con una mejor gestión, porque no todo es dinero; miren que no. Nosotros vivimos etapas difíciles del país en las que con poco dinero se gestionaba muy bien. Pero no se puede ceder el poder jurisdiccional. Es en defensa de todos.

Gracias.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: se dijo dos veces que el

Partido Colorado y el Partido Independiente habían entendido el tema. El Partido Nacional también entendió muy bien el tema que discutimos en la Comisión. Y precisamente porque entendimos el tema es que pensamos que debería ir a estudio de la Comisión para obtener un mejor producto legislativo que haga que esto funcione bien.

Tampoco podemos ignorar las tremendas diferencias que ha habido en el accionar y en la gestión, durante todo este tiempo, entre el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Por tal motivo propusimos desglosar estos artículos para que pasen a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

Gracias.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Señor presidente: complementando lo que planteó el señor diputado Groba y por algunas consideraciones que se hicieron, debo decir que la bancada del Frente Amplio va a acompañar los artículos cuyo desglose fue solicitado, porque entiende que la discusión tiene que ver con la materia de asignación presupuestal.

Cuando compareció la delegación del Ministerio del Interior a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, manifestó que la intención es dar mayor efectividad a las medidas de protección de las víctimas que dicta la Justicia. Y se ponían algunos ejemplos en los que la efectividad de las medidas de custodia quedaba cuestionada. Se habló específicamente del caso de los dispositivos electrónicos que, precisamente, trata este artículo. Lo que se cuestionaba cuando se habló de la necesidad de tener un informe, era las condiciones en las que se aplica. Se ponían algunos ejemplos claros en cuanto al consentimiento de la víctima para que la medida resultara efectiva y a las condiciones materiales de la persona. Por ejemplo, se mencionaba el caso de las discapacidades auditivas en que puede no tener efectividad la aplicación de la medida de dispositivos electrónicos, o de la conectividad del área donde reside la persona que está siendo protegida.

Reafirmo que acompañaremos este artículo, que sí tiene que ver con la discusión presupuestal. También se planteó el alto costo de la aplicación de dispositivos electrónicos. Y esto se relaciona con la planificación de una tarea a la que debe responder el Ministerio del Interior.

Quería dejar esta constancia.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: agrego un antecedente que se registró en el curso del tratamiento de la Rendición de Cuentas, que me parece relevante porque refleja una duda legítima, que en este caso proviene de la sociedad civil. Creo que es una duda que todos tenemos derecho a reproducir, en la medida en que estamos legislando a la ligera y actuando sin la debida ponderación con referencia a temas que son muy delicados y que -como dije antes del intermedio- pueden llegar a afectar las garantías individuales, el derecho subjetivo y el interés legítimo, por ejemplo, de una mujer que es agredida y que sufre las consecuencias de la violencia de género, porque estamos modificando el sistema de asignación de la custodia personal a partir de trasladar el eje de decisión del Poder Judicial a la Administración.

El 20 de julio, la Intersocial Feminista compareció a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y dijo -leo textualmente-: "No sabemos si este inciso" -se refiere al artículo- "está diciendo que existen víctimas pasibles de ser protegidas y otras que no, y no sabemos quién va a

juzgar esto ni en qué parámetros se va a basar. Tampoco dice por qué algunas mujeres víctimas van a ser pasibles de protección y otras no; al parecer, hay víctimas buenas y malas; y depende de qué víctima sea una es que tiene derechos en este país".

No digo que este criterio laude definitivamente el debate, pero me parece que es reflejo de la sensación de indefinición, incertidumbre y riesgo que sin duda genera esta reforma legislativa, en la medida en que -repito- no se la ha procesado adecuadamente. Al respecto, no ha habido un análisis serio, meditado, ponderado; no hemos escuchado a todos los actores indispensables empezando, por supuesto, por los actores judiciales.

No estoy diciendo que la intención del ministro sea actuar con un criterio selectivo -lo dije en mi intervención anterior- y discriminar entre mujeres buenas y mujeres malas, o entre mujeres de primera y mujeres de segunda. No le hago ese agravio al ministro y tampoco sostengo esa tesis en el marco de este debate, porque estoy seguro de que eso desencadenaría una discusión política, a esta altura, absolutamente inútil. Sin embargo, tomemos nota de cómo interpreta la sociedad civil la modificación que se está impulsando. Creo que no es descabellada la interpretación que se hace de este artículo.

El Poder Judicial es el que da garantías de que se va a actuar con justicia, a los efectos de velar por las garantías personales de todos en las oportunidades que corresponda. Está para eso. ¿Por qué la Justicia es el último refugio? Porque es la garantía de que los ciudadanos podremos disfrutar, en la satisfacción y en el ejercicio de nuestros derechos individuales, del pleno goce de nuestros derechos humanos; y no habrá administrador de turno -ni gobierno, ni Poder Ejecutivo ni ministro del Interior- que pueda actuar sin límite de clase alguna a la hora, ni más ni menos, de velar por nuestra libertad, a la hora, ni más ni menos, de garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Para eso está la Justicia. El problema es que, en estas situaciones, en la medida en que esto se convierta en ley, este aspecto puede quedar relativizado de una manera muy riesgosa, muy peligrosa.

Partiendo de la buena fe, aun con la mejor intención y el mayor fundamento que puede darse asociado a la gestión policial, se están poniendo en severo riesgo aspectos que son muy delicados de la vida democrática- ni más ni menos-, con el Estado de derecho y, como dije en Comisión -aunque no se me interpretó bien-, con el régimen republicano de gobierno. ¿Qué quiere decir "república"? Entre otras cosas, que el Estado puede actuar dentro del marco reglado que la Constitución y la ley establecen, pero es tan persona jurídica como el resto de los ciudadanos, y no tiene derecho, por ser más grande y eventualmente más poderoso, a pasar por encima de las garantías de las personas.

Esa discusión, que puede ser más general, aparece claramente expresada en el trasfondo de la modificación que se está promoviendo en un tema tan delicado. ¿De qué vale promover una ley de violencia basada en género, como la que se aprobó en el mes de diciembre, más allá del tema presupuestal -de eso discutiremos seguramente después-, en la que encomendamos al Poder Judicial que tome medidas de protección y cautelares y que actúe en el plazo de setenta y dos horas -aunque no le damos los recursos para todo eso-, si a través de un articulito que figura en el Inciso 04 "Ministerio del Interior" dejamos a la Justicia sin la potestad de cuidar a las mujeres agredidas y de proteger a las víctimas de violencia de género cuando se encuentran en grave riesgo de ver lesionados sus derechos?

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción propuesta de desglosar los artículos 82 y 83 para enviarlos a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

——-Treinta y cuatro en ochenta y tres: NEGATIVA.

20.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

——Continúa la consideración del asunto en debate.

En discusión el artículo 82.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 83.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: aunque en nuestra intervención hicimos una breve referencia a los artículos 82 y 83, fundamentando su pase a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, quiero alertar a la Cámara sobre lo que representa el artículo 83.

Esta disposición establece que solo podrá decretarse custodia personal como medida de protección siempre que la persona se encuentre comprendida en el Programa de Víctimas y Testigos Protegidos de la Fiscalía General de la Nación. Así como está redactado, este artículo implica, entre otras cosas, dejar sin efecto algunos artículos contenidos en el llamado código de Procedimiento Policial.

Esta es una señal muy negativa para la población, para la ciudadanía, por cuanto en el Capítulo II del Título III del código de Procedimiento Policial se establece: "Artículo 32. (Derecho a recibir la adecuada protección).- Toda víctima, testigo o persona que brinde información calificada a la policía, tiene derecho a recibir la adecuada protección por parte de las instituciones competentes del Estado".

Con la redacción que se aprobará en la Cámara de Representantes y eventualmente luego en el Senado, convirtiéndose en ley, se deroga el artículo 32 del código de Procedimiento Policial. Esto es grave y demuestra que no se puede legislar en un ámbito que no es especializado. Las cosas deben ser analizadas en un contexto y en este caso en el contexto de la ley vigente, recabando la opinión de los especialistas.

Lamentablemente, desde tiempos inmemoriales, los poderes ejecutivos tienen la mala costumbre de incluir en las leyes de presupuesto normas de carácter permanente. Esto representa una violación constitucional, pero el Poder Ejecutivo cuenta con otros medios para que estos temas se traten en forma urgente, como el mecanismo de considerar un proyecto de ley como una urgencia. Si tiene urgencia de tratar estos temas, puede enviar una iniciativa fundada para modificar estas situaciones y lograr el resultado que busca en tiempos similares a los de la aprobación de una rendición de cuentas o de una ley de presupuesto.

Sin embargo, como práctica ya inveterada, desde 1985 a la fecha, se aprovechan las leyes de presupuesto y las rendiciones de cuentas para incluir todo tipo de artículos, sin medir las consecuencias. Lo lamentable es que la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda no tiene especialidad en estos temas ni tiempo de convocar a los especialistas. Lo lógico, para analizar los artículos 82 y 83, además de la convocatoria al Ministerio del Interior, que sí recibimos, hubiera sido convocar a la Fiscalía General de la Nación y a los representantes del Poder Judicial, y recabar asesoramiento de especialistas en la materia. Luego de proceder en tal sentido se estaría en condiciones de aprobar una norma. A pesar de ello, se va a actuar al barrer, lo que me parece profundamente negativo: repetir un error, un error grave que, además, es violatorio de la Constitución de la República.

Nada más.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).- Señor presidente: no comparto lo que se ha expresado en sala con respecto a la derogación, y quiero dejar sentada mi opinión.

Me parece que el artículo es claro. Plantea la forma en la que la custodia es determinada. En ningún caso niega la custodia personal; inclusive, en el artículo se aclara que es para las víctimas de violencia basada en género. Me parece que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua.

En ningún momento se deroga ningún artículo. Si fuera así, debería aparecer expresamente derogado. No es la voluntad de este Cuerpo derogar el artículo mencionado ni cambiar las reglas de juego, sino ordenar la situación que se genera.

En la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda se dijo que hay seiscientos efectivos destinados a las custodias. A mi entender, no son tantos, pero son parejas que cubren ocho horas. Entonces, son seis las personas que se dedican a una víctima. Estaríamos hablando de cien casos, porque se dice que hay seiscientos efectivos involucrados.

Por lo tanto, lo que está planteado es de recibo, ayuda a ordenar y en ningún momento vulnera los derechos de nadie.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 83.

——Cuarenta y nueve en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 84.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y dos en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a rectificar la votación.

——Setenta y nueve en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 85.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 86.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y nueve en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 87.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 88.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 89.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y tres en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 90.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y tres en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 91.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 92.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y uno en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¿Me permite, señor presidente? Solicito la reconsideración del artículo 90, y quiero hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar si se reconsidera el artículo 90.

——Ochenta y dos en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

Se reabre la discusión del artículo 90.

Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: el texto del artículo tiene un error: donde dice "créditos conseguidos por el Fondo de Tutela Social Policial" debe decir "créditos concedidos por el Fondo de Tutela Social Policial". En consecuencia, mocionamos para que se corrija el texto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 90, con la modificación propuesta por el señor diputado Sánchez.

——Ochenta y cuatro en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 93.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y tres en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 94.

La Mesa aclara que como este artículo crea un cargo de particular confianza requiere mayoría absoluta para su aprobación.

——Es correcto lo que dice el diputado con relación a que el artículo crea y elimina un cargo, pero la mayoría especial se requiere para la creación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y tres en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 95.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y nueve en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 96.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 97.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 98.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y ocho en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 99.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y uno en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

22.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con el asunto en debate, se pasa a considerar el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", que comprende los artículos 100 a 108, inclusive.

Los mismos serán ocupados exclusivamente por los funcionarios cuya situación da origen a las respectivas transformaciones. En ningún caso las transformaciones previstas en el presente artículo podrán significar lesión de derechos funcionales, costo presupuestal ni de caja.

——En discusión el artículo 100.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 101.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 102.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y uno en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 103.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 104.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 105.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 106.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y ocho en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 107.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 108.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Este Inciso tiene artículos aditivos que figuran en las Hojas Nos. 9, 11 y 12 y, según entiendo, los aditivos que figuran en las Hojas Nos. 3 y 10 se habían desglosado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: las Hojas Nos. 3 y 10 fueron desglosadas para ser incluidas en este Inciso. Pese a que no presentamos ninguna de las dos Hojas, las íbamos a acompañar, pero tenemos un texto que resume las dos propuestas. ¿Se lo acerco a la Mesa?

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Le agradecería que lo acercara; lo pondremos a consideración una vez terminado el trámite de los aditivos que fueron distribuidos.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 9, presentado por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——En discusión.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: este aditivo tiene que ver con un mandato a la Dirección General Impositiva para que eleve al Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor a dos años, una propuesta de carrera administrativa para los funcionarios de la unidad ejecutora que recoja su especificidad.

Este es un viejo reclamo que fue consagrado en la Ley N° 17.706, de 2003 y, luego reglamentado por el Decreto N° 166, de 2005. Precisamente, en el artículo 7° de este Decreto se estableció que la DGI, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, debía elevar al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta de reglamentación de la carrera administrativa de los funcionarios de la unidad ejecutora que recogiera su especificidad. Hasta ahora, esto no se ha cumplido.

Han pasado trece años y nos parece de orden mandatar -en este caso- a la Dirección General Impositiva a que cumpla con el artículo 7° del Decreto N° 166, de 2005.

Esa es la razón por la cual entendemos de justicia incorporar este artículo a la Rendición de Cuentas y que quede establecido en la ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Treinta y siete en ochenta y siete: NEGATIVA.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: el Partido Nacional ha votado afirmativamente la Hoja N° 9, pues recibimos a una delegación de funcionarios de la Dirección General Impositiva que nos planteó la situación a la que hacía referencia el señor diputado Conrado Rodríguez

Creemos absolutamente pertinente el requerimiento que hacen los funcionarios, porque después de varios años durante los que se han votado hasta rubros especiales para la reestructura de la Dirección General Impositiva, lamentablemente, hasta la fecha no se ha accedido a su reclamo.

Además, este artículo es absolutamente inocuo. Lo que hace es mandatar a la DGI a que en un plazo no mayor a dos años haga la reestructura que debería haber concretado tiempo atrás.

Francamente, nos llama mucho la atención que este artículo no haya sido votado, sobre todo por algunos señores parlamentarios que a veces piden la palabra para hacer alegatos a favor de la necesidad de respaldar y respetar la carrera funcional de los funcionarios y de las agremiaciones sindicales. En este caso, no contamos con su voto a la hora de acompañar un tema tan importante -y creo que, además, de justicia- para los funcionarios de la Dirección General Impositiva.

Nada más, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: dejamos constancia de que el Partido Independiente, con sus tres diputados presentes en sala, ha votado afirmativamente el artículo proyectado y presentado por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: la Unidad Popular también ha votado por la afirmativa esta propuesta.

Nosotros habíamos planteado un aditivo similar, pero como el que presentó el diputado Conrado Rodríguez es más completo, en la medida en que fija el plazo en dos años, retiramos nuestra propuesta en la Comisión y adherimos a esta.

En definitiva, dejo constancia de nuestro voto a favor de la propuesta.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 11, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

——En discusión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Rubio).- Señor presidente: retomamos la propuesta que nos acercaron los compañeros del sindicato de trabajadores de la Aduana, que plantea una cuestión mínima, pero muy importante, en un país en el que florecen las zonas francas como parte del modelo que tenemos.

Se trata de colocar una tasa del 1 ‰ a la mercadería que se encuentra en tránsito y no entra al país, aunque de alguna manera usa el territorio nacional. Cabe destacar que esa mercadería en tránsito consiste en artículos suntuarios

de consumo, como whisky, perfumes y cigarrillos. Es decir que no estamos hablando de artículos de primera necesidad.

Consideramos que el 1‰ no variaría la ecuación de ninguna empresa, pero, según datos actualizados, representaría una recaudación de US$ 8.000.000. La propuesta es que el 10 % de lo recaudado por esta tasa se destine a la recomposición de la carrera de todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y el 90 % restante se vuelque al Fondo Nacional de Recursos para la compra de los llamados medicamentos de alto costo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Uno en ochenta y seis: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 12, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

——En discusión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: tampoco es nueva esta propuesta, que recogimos hace tiempo de los trabajadores de Casinos del Estado. Se refiere a algo que hasta ahora no podemos entender cómo se sostiene, que es el subsidio a los premios de las carreras de caballos promovidas por una multinacional del juego, lo que se aprobó en la Ley de Presupuesto de 2010. En los hechos y no explícitamente, esa norma derogó leyes anteriores, de los años 1998 y 2006, que específicamente prohibían al Estado financiar de cualquier manera lo que tenía que ver con actividades del juego y, en particular, de la hípica.

Sin embargo, por una decisión de la Dirección General de Casinos avalada por el Ministerio de Economía y Finanzas, se generó el subsidio con el otorgamiento del 5 % de las utilidades brutas de varias salas de casinos, que, además, gestiona la misma empresa, por lo que no estamos hablando de una firma que necesite demasiados subsidios. Esto cuesta al Estado US$ 13.00.000 por año.

Nuestra propuesta es que en la renovación de cada contrato se vaya eliminando el subsidio y se destine ese monto -insisto en que son US$ 13.000.000 al año- a obras en la Administración de los Servicios de Salud del Estado que, sin duda, precisa recursos para realizar mejoras en hospitales y policlínicas, y remodelar viejas estructuras.

Esperamos que este año podamos tener un eco mayor que el de años anteriores, porque se trata de una propuesta que parece muy comprensible.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

——Cinco en ochenta y cinco: NEGATIVA.

Ha llegado a la Mesa un nuevo texto que sustituye las Hojas N° 3 y N° 10, que fueron retiradas; la nueva redacción figura en la Hoja Nº 37.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 37, presentado por los señores diputados Eduardo Rubio, Gustavo Penadés, Sebastián Andújar, Wilson Aparicio Ezquerra Alonso, Benjamín Irazábal, Omar Lafluf Hebeich, Iván Posada y Pablo Abdala.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", que comprende los artículos 109 a 114, inclusive.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: propongo votar en bloque los artículos 109 a 113, inclusive y desglosar el artículo 114.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión los artículos 109, 110, 111, 112 y 113.

La Mesa recuerda a los señores legisladores que el artículo 109 requiere mayoría absoluta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 114.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que en esta oportunidad no vamos a votar el artículo 114, como lo hicimos con otros artículos de este Ministerio, en el entendido de que en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado está a consideración el estatuto del funcionario del servicio exterior, que contiene estas disposiciones. Pensamos que va a tener una pronta aprobación en esa Cámara y probablemente tendremos la oportunidad de votarlo en este Cuerpo, con la voluntad expresa de la bancada del Frente Amplio -sabemos que el resto de las bancadas también han comprometido su esfuerzo- de aprobar el estatuto este año, a efectos de que se pueda empezar a aplicar en el futuro, porque contiene varias disposiciones que son muy importantes para mejorar el funcionamiento de nuestra Cancillería y, particularmente, del servicio exterior.

Por lo tanto, vamos a esperar que el Senado vote el proyecto de ley y luego lo trataremos en las comisiones correspondientes de esta Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 114.

——Cero en ochenta y ocho: NEGATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el Inciso 07, "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" que comprende los artículos 115 a 134.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada Lilián Galán.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: vamos a proponer que se voten en bloque los artículos 115 a 134, desglosando los artículos 117 a 120, 126, 129, y 131 a 134.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar si se votan en bloque los artículos 115 a 134, desglosando los artículos 117 a 120, 126, 129, y 131 a 134.

(Se vota)

——Ochenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128 y 130.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

——Ochenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 117.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

——Cincuenta y nueve en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: el Partido Nacional no ha acompañado este artículo porque es uno de los tantos de esta Rendición de Cuentas -y en otras tantas- en que el Poder Ejecutivo propone la huída hacia el derecho privado de aspectos y temas que tienen que estar regulados por el derecho público.

Por supuesto que no nos oponemos a la venta o enajenación de padrones o de inmuebles que no sean utilizados, en este caso, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero no entendemos que se deba hacer a través de la constitución de un fideicomiso para luego ver qué se hace con ese dinero, porque eso pierde absolutamente el control del Estado, tanto del Tribunal de Cuentas de la República como, posteriormente, del Poder Legislativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión el artículo 118.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y ocho en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 119.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y dos en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 120.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y uno en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: nos llamó poderosamente la atención esto de crear un organismo para que cree, a su vez, conciencia agropecuaria en el país.

Este es un tema, precisamente, de conciencia. Por lo tanto, la conciencia agropecuaria no se adquiere a través de una organización que, por decreto, diga cómo se tiene que comportar la gente, la población.

La conciencia se muestra trabajando, viendo cómo hacen los países, cómo hace Nueva Zelanda. Hace un tiempo largo dije que capaz que el Gobierno no se anima a decir que somos orgullosamente agropecuarios; eso es conciencia. Conciencia agropecuaria es decir que sentimos orgullo de lo que hacemos y de lo que somos; por lo tanto, como no entendimos qué objetivo tiene esta disposición, hemos votado en contra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 126.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cuatro en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 129.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 131.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: no vamos a acompañar este artículo que aparenta beneficiar a los trabajadores y la tarea inspectiva del Ministerio pero, en realidad, busca normalizar una situación que es irregular no solo porque se contrapone al reglamento, sino por la falta de trabajadores para realizar las tareas que se pretenden cubrir, es decir que en lugar de ocupar las vacantes existentes y necesarias, estas son suprimidas, tal como se establece luego en el artículo 311 de este proyecto, lo que representa para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca un recorte permanente de $ 7.000.000.

Cabe destacar que no hace muchos años el Ministerio contaba con una plantilla de cuatro mil funcionarios; hoy son apenas dos mil, de los cuales trescientos son funcionarios contratados bajo el régimen de arrendamiento de obra en el marco de un contrato de préstamo con el BID.

No vamos a acompañar este artículo por estas razones.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y nueve en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: creemos que tal vez la redacción de este artículo no sea del todo feliz. Se establece que el pago de los traslados y de los viáticos a los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedará a cargo de las empresas que son controladas. Eso es lo que se desprende del inciso segundo de este artículo.

Para nosotros no es conveniente que el pago lo realice el controlado a quien tiene que controlar. Creemos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca debería pagar a los funcionarios y que, en todo caso, se debería crear una cuenta corriente con las empresas controladas; luego, el Ministerio podría cobrar a la empresa. Tal como está redactado este artículo, parece que los que abonan los viáticos a los funcionarios son las empresas controladas. Esto no nos parece conveniente.

Esta es la justificación de nuestro voto negativo.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 132.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 133.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y uno en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 134.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en noventa: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", que comprende los artículos 135 a 147, inclusive.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: proponemos votar en bloque los artículos 136 a 141.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se votan en bloque los artículos 136 a 141.

(Se vota)

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 136 a 141.

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 135.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 142.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y siete en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 143.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 144.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: el Partido Nacional votará negativamente los artículos 144, 145, 146 y 147, referidos al Consejo de Comunicación Audiovisual, en función de que considera que no es pertinente que los cargos que se crean sean de particular confianza. Nos parece un exceso, más allá de la crítica y de la posición discrepante que el Partido Nacional ha mantenido en todo el proceso vinculado con la llamada ley de medios y con la estructura que a partir de esa norma se genera.

Nos da cierta tranquilidad que se haya reparado una imperfección -por decirlo con un eufemismo- de la versión original del artículo 144, por el que se proponía que el Consejo de Comunicación Audiovisual actuara en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Más allá de que desde el punto de vista jurídico siempre entendimos que esa era una expresión por lo menos imperfecta, también daba la sensación de que generaríamos una suerte de dependencia o de vinculación más allá de lo institucional de este organismo autónomo con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, lo que podría resultar francamente peligroso.

La señora ministra nos dijo que esa no era la intención y yo, en principio, acepto que la modificación que establece que en lugar de actuar "en la órbita", se "vinculará con" el Ministerio de Industria, Energía y Minería podría ser tranquilizadora a ese respecto. Pero lo es relativamente, entre otras cosas, porque en el mismo artículo se reitera algo que desde el punto de vista del derecho administrativo es verdad, pero el hecho de que el Poder Ejecutivo lo repita cada vez que lo entiende necesario -me refiero a decir que es titular de la facultad de avocación de las competencias del Consejo de Comunicación Audiovisual- a mí me rechina un poco; lo digo francamente.

Si se supone que el Consejo de Comunicación Audiovisual está llamado a ser un ámbito plural y, sobre todo, independiente en el cumplimiento de sus funciones y a la hora -ni más ni menos- de juzgar la actividad de los medios de comunicación, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de avocación, es preocupante. Por eso cuestionamos su ubicación institucional. Además, que el Poder Ejecutivo haga alarde de eso en cada oportunidad que tiene -en esta, inclusive, era absolutamente innecesario- ya nos genera una preocupación adicional.

De manera que por la razón que dije al principio, fundamentalmente, no era necesario crear cinco cargos de confianza ni darles la dotación presupuestal que en este caso se les otorga. De acuerdo con el artículo 146, percibirán retribuciones equivalentes a las de los directores generales de secretaría de todos los ministerios o, en su caso, a la de director general de la Presidencia de la República. Por esas razones, votamos negativamente. Y no lo hacemos por una actitud -si se quiere- de despecho con relación a una muy mala ley -no es el momento de reeditar su discusión-, que puede llegar a poner en riesgo la libertad de comunicación y de expresión en su máxima extensión, como ya ocurrió, porque la ley está vigente y seguirá estando, por lo menos por el momento. Nos parece que desde el punto de vista estrictamente presupuestal y del funcionamiento y la administración de este organismo, las disposiciones que se establecen en esta iniciativa están mal, generan un costo innecesario y refuerzan algunas aristas muy complejas de este organismo, cuyo funcionamiento por lo menos nosotros miramos con mucha atención, sobre todo, en momentos en que se están echando a andar algunos mecanismos en función de la vigencia de la ley de medios.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente no acompañará los artículos 144, 145, 146 y 147 -todos referidos al Consejo de Comunicación Audiovisual-, porque se oponen a la llamada ley de medios que, a nuestro juicio, en muchos aspectos es una norma inconstitucional que, claramente, recortó la libertad de expresión y sobre la cual manifestamos que, en su debido momento, cuando existan las mayorías correspondientes, estamos dispuestos a derogar, salvo aquellos artículos relativos a regular la concesión de ondas que, por cierto, nos parecía lo más destacable de esa ley.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: no entraré al fondo del asunto, que tiene que ver con la ley de servicios de comunicación audiovisual, norma que en el mundo se ha puesto de ejemplo por su equilibrio y por sus mecanismos transparentes.

Simplemente, quiero dejar constancia de que los cargos del Consejo de Comunicación Audiovisual serán designados por la Asamblea General y su presidente, por el Poder Ejecutivo. No hay duda de que son cargos de confianza -están en el Escalafón Q-, porque son designados por la Asamblea General. No se designan por un concurso de oposición y méritos ni están en el escalafón administrativo para hacer carrera administrativa, sino que son cargos de confianza.

Pero no son cargos de confianza del gobierno. Son cargos de confianza por la designación que les corresponde en el ordenamiento administrativo. En este

caso, son designados por la Asamblea General, mediante un procedimiento determinado.

En cuanto al último inciso -me imagino que el señor diputado Asti se explayará sobre el tema-, queremos hacer una precisión.

——El último inciso dice lo siguiente: "A los efectos de su funcionamiento, el CCA" (Consejo de Comunicación Audiovisual) "se vinculará con el Inciso 08 'Ministerio de Industria, Energía y Minería'". Para que fuera más preciso, debería decir: "A los efectos de su funcionamiento, el Consejo de Comunicación Audiovisual se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Inciso 08 'Ministerio de Industria, Energía y Minería'".

Está claro que este es un organismo que tiene independencia técnica, que es desconcentrado y que, por supuesto, depende del Poder Ejecutivo, porque lo ubicamos en su órbita a fin de darle soporte administrativo, no para la toma de decisiones, que está reglamentada.

Además, debe tener un punto de contacto con el Poder Ejecutivo, que será el Ministerio de Industria, Energía y Minería; pero la comunicación es con el Poder Ejecutivo, en definitiva, con el presidente de la República y su Consejo de Ministros.

Esa es la modificación que proponemos para el segundo inciso, que creo aleja cualquier sospecha de que el Poder Ejecutivo de turno -independientemente de quien esté en el gobierno- pueda inmiscuirse en las resoluciones que deberá tomar libremente este Consejo, que estará integrado por ciudadanos de reconocida trayectoria que, tal como está establecido en la ley de creación, contarán con el voto conforme de la Asamblea General, y cuyo presidente será designado por el presidente de la República.

Simplemente, quería hacer esta aclaración.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: estoy al tanto y tengo bien presente que el Consejo de Comunicación Audiovisual -lo dije en mi intervención inicial- tiene independencia establecida por la ley vigente, que es la llamada ley de medios. Y también sé -es lo que anoté como preocupación- que, desde el punto de vista del derecho público, la facultad de avocación que el Poder Ejecutivo se reserva implica la posibilidad de asumir la competencia de determinado organismo.

Entonces, creo que por lo menos en el diseño institucional ha habido un error, que yo no sé si fue intencional; no puedo decir que haya sido intencional porque no puedo atribuir intenciones. Pero cuando hay facultad de avocación, la independencia queda por lo menos relativizada, o puede llegar a quedarlo, porque avocar implica, precisamente, apropiarse, adueñarse de la competencia que le corresponde a un organismo de inferior jerarquía, a un subordinado. Se supone que el Consejo de Comunicación Audiovisual, en principio, no lo es por las razones que se acaban de invocar, y es verdad. Pero, evidentemente, en la

norma hay un problema. Creo que esta es parte de la polémica que hemos tenido.

Tampoco quiero reeditar la discusión acerca de la ley de medios, pero ¡vaya si ha merecido diversos reproches de inconstitucionalidad, así como varias sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia!

En cuanto al carácter de confianza de los cinco cargos que se crean, es una solución para quienes promueven la iniciativa; podría haber habido otras, aun creyendo en la necesidad de crear un consejo con estas características y con estas competencias. Podrían designarse cargos de confianza, pero el Consejo de Comunicación Audiovisual también podría haber tenido una integración diferente: que distintos organismos públicos y privados, y el propio Poder Legislativo a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por ejemplo, hubieran designado delegados ante este Consejo. No tendrían por qué tener un cargo de confianza o ser titulares de un cargo de confianza y ganar el sueldo del director general de secretaría de un ministerio.

Sin embargo, se optó por esto. Es una decisión política, legítima desde el punto de vista formal, que se puede compartir o no. Nosotros no la compartimos por todas las razones que expresé y por todas las dudas que, sin duda, este tema nos genera desde su inicio.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: nosotros votaremos todos los artículos vinculados con el Consejo de Comunicación Audiovisual recordando, en primer lugar, que la Constitución de la República otorga a la Suprema Corte de Justicia la exclusividad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

Los centenares o miles de incisos, literales y numerales de esta ley, de una forma u otra, han estado sujetos al examen o test de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, y de esos cientos o miles de incisos, literales y numerales solo se resolvió la inconstitucionalidad de siete, pero de ningún artículo completo. Y ninguno de esos siete incisos, literales o numerales estaban vinculados con la libertad de expresión o la libertad de prensa; no referían al fondo de lo que estamos discutiendo.

El tronco de la ley, su forma de administración y, en particular, el Consejo de Comunicación Audiovisual fueron declarados constitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

Como se adelantan versiones sobre ese tema, simplemente, queríamos dejar esta constancia en cuanto a que votamos muy tranquilos estos artículos, basados en el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del Consejo de Comunicación Audiovisual.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: quiero señalar dos o tres cosas.

Yo tampoco pretendo entrar al fondo de la ley de medios, y también coincido con que, cuando las mayorías sean otras -lo dije hace poco, en otra oportunidad-, nos sacudiremos esta ley, que realmente es muy peligrosa para el sistema democrático.

Cuando uno administra o, como en este caso, cuando uno legisla, lo correcto no es decir: "No importa. Las hacemos y, después, que interpongan un recurso". Muchas veces hubo jerarcas que me dijeron: "No se preocupe, doctora; si algo está mal, que interpongan un recurso". Siento que lo mismo pasa muchas veces en el Poder Legislativo.

Yo puedo ser consciente de que algo no es constitucional y tener el convencimiento técnico; si después se interpone o no un recurso de inconstitucionalidad es otro tema. Para interponer un recurso de inconstitucionalidad, se necesitan determinados elementos: algunos técnicos y otros materiales, por ejemplo, poder bancar a un profesional que lo haga. Además, tiene que existir la violación o vulneración de un derecho personal directo, legítimo; hay una serie de requisitos. Que algo no sea declarado inconstitucional no quiere decir que el resto sea declarado constitucional. Eso no se infiere de ninguna teoría del derecho constitucional.

Por otra parte, quiero aclarar que no me rechina, sino que rechazo profundamente que en el mismo momento en que se establece que el Consejo actuará con autonomía técnica -aquí debería haber un punto- se agregue: "[…] sin perjuicio de la facultad de avocación de este". Esta no es una norma legislativa habitual. Cuando aprobamos una norma, nunca decimos que estará sujeta a los recursos administrativos tales y cuales. Sin embargo, pegado a la autonomía técnica -no atribuyo intenciones; me limito a leer el artículo desde el punto de vista técnico-, suena una advertencia: tiene autonomía técnica, pero ello es sin perjuicio de la facultad de avocación del Poder Ejecutivo.

Creo que esto refuerza una tendencia que se viene dando desde hace algunos años, que es la de vulnerar la autonomía técnica. En otros momentos ni siquiera era necesario decir que había autonomía técnica porque se era leal a los cargos. No se es leal a las personas que nos designan, ni siquiera en los cargos del Escalafón Q, porque -reitero- se es leal al cargo. Eso lo aprendí del doctor José Claudio Williman, cuando era vicepresidente del Codicén, en otras administraciones; tenía un cuadro colgado en su despacho con esta frase: "Se es leal a los cargos y no se es leal a las personas".

En consecuencia, coincido con el señor diputado Sánchez -me parece muy importante lo que dijo-, que hizo la distinción sobre el Escalafón Q. El Escalafón Q es un cargo de confianza técnica, en este caso, reforzado por la necesidad de contar con la designación de la Asamblea General -o venia del Senado, en su caso-, y se distingue del Escalafón P, que es puramente político. Por eso, si establezco un Escalafón Q y al lado le pongo "sin perjuicio de la facultad de avocación de este", suena raro.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 144 tal como viene de la Comisión.

——Cuarenta y nueve en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

La Mesa consulta al señor diputado Sánchez si había propuesto un cambio en el artículo que acabamos de votar porque, en caso afirmativo, deberíamos reconsiderarlo.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¿Me permite, señor presidente?

En mi intervención anterior sugerí modificar el texto del artículo 144, que en su segundo inciso establece: "A los efectos de su funcionamiento, el CCA se vinculará con el Inciso 08 'Ministerio de Industria, Energía y Minería'".

Mi propuesta de redacción para el segundo inciso de este artículo es la siguiente: "A los efectos de su funcionamiento, el CCA se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Inciso 08 'Ministerio de Industria, Energía y Minería'".

Por lo tanto, solicito su reconsideración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar si se reconsidera el artículo 144.

——Noventa y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se reabre la discusión del artículo 144.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 144 con los cambios propuestos por el señor diputado Sánchez. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del Reglamento, para que el artículo 144 ya votado sea modificado se requiere mayor número de votos que el obtenido primitivamente.

——Cincuenta y uno en noventa y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 145. La Mesa recuerda que este artículo requiere mayoría absoluta, pues crea cargos de particular confianza.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta en noventa y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 146.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta en noventa y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 147.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en noventa y tres: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 09 "Ministerio de Turismo", que comprende el artículo 148.

——En discusión el artículo 148.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y cuatro en noventa y tres: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 10, "Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que comprende los artículos 149 a 157, inclusive.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- ¿Me permite, señor presidente?

Mocionamos para que se voten en bloque los artículos 150 a 153, inclusive.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- ¿Me permite, señor presidente?

Solicito que se excluya del bloque mencionado por la señora diputada los artículos 150, 154 y 157.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Vamos a votar los artículos de a uno.

En discusión el artículo 149.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: este artículo motivó una importante discusión en la Comisión y, producto de ese debate, se le hicieron algunas modificaciones para que quedara claro.

Al final del primer inciso se establece: "Dicho acuerdo deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 74 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) y estará sujeto a la intervención previa del Tribunal de Cuentas". ¿Qué queremos decir con esto? Que el artículo 74 del Texto Ordenado establece que las obras públicas se podrán ampliar un 100 %.

Este artículo determina que las obras accesorias deben incorporarse en esa extensión de monto. Pero si dejamos la redacción tal como está, alguien podría interpretar que dicho acuerdo solo deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 74 y no con el resto de lo que figura en el Tocaf.

Por lo tanto, proponemos que se establezca: "Dicho acuerdo deberá cumplir lo dispuesto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf)" porque, reitero, no solo debe cumplir con el artículo 74, sino con todo el procedimiento establecido en el Tocaf.

Esa es la idea y, por lo tanto, planteamos suprimir la referencia al artículo 74, dejando el resto tal como está.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: no vamos a votar este artículo que, más allá de las modificaciones, propone habilitar el incremento de nuevas obras conexas no contenidas en los contratos originales de vialidad. Estas obras van a ser realizadas con financiamiento total o parcial del Estado, evitando un nuevo llamado a licitación para lo que realmente es obra nueva.

Por lo tanto, reitero que no vamos a votar este artículo.

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Como bien decía el diputado Sánchez, este artículo ha sido motivo de debate en la Comisión. Nosotros nos opusimos a su redacción original, en el entendido de que las obras públicas y las concesiones en materia vial que se han venido manejando en los últimos años -la Corporación Vial del Uruguay concentra más del 80 % de las obras de estas características- deben ser controladas de acuerdo con la normativa vigente del Tocaf.

Hemos hecho consultas a distinguidos especialistas de derecho administrativo, entendiendo que el artículo 149 -en su numeración actual; artículo 151 del proyecto original del Poder Ejecutivo- no debe realizar cambios a lo dispuesto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, en lo concerniente a la contratación de obras. Me refiero a lo dispuesto en los artículos 33 y 74 del Tocaf.

Entendemos que el artículo en consideración no tiene una redacción prolija; es un artículo complejo que, en lo personal, nos generó muchas dudas. Además, ha sido objeto de cambios; tanto es así, que hoy seguimos discutiendo modificaciones.

Como decía, hicimos consultas jurídicas a distinguidos especialistas en derecho administrativo, quienes nos dieron su opinión en el sentido de que el texto que estaríamos votando en el día de hoy ata la contratación de obras públicas, en el marco de las concesiones, a lo dispuesto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. Reitero que esta redacción es sumamente complicada; no es la más feliz: ha sido objeto de consultas, negociaciones y distintas posturas de las bancadas.

Por tanto, nosotros acompañaríamos este artículo en la redacción que se acaba de proponer -acorde con la opinión de especialistas en materia administrativa-, por la que se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. Solo en ese caso podríamos acompañar un artículo de esta naturaleza, porque creemos que de ninguna forma se puede dejar de lado lo dispuesto en el Tocaf para la contratación de obras viales.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: vamos a acompañar este artículo. Fuimos nosotros quienes sugerimos la referencia al artículo 74; ahora bien: el cumplimiento tiene que ver con todo el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. Lo que refiere al artículo 74 es la ampliación de hasta el 100 % de las obras.

Entonces, nos parece que es correcta la redacción propuesta en la Comisión, haciendo alusión al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la modificación que plantea el señor diputado Alejando Sánchez.

Decimos también que este artículo permite una mayor eficiencia del Estado, porque muchas veces se está desarrollando determinada obra y luego se decide, por ejemplo, construir un trébol -como le llamábamos en la vieja jerga-, pero no estaba previsto en la licitación original. En consecuencia, se genera un problema porque, de acuerdo con el contrato vigente, esa obra no está prevista.

Entonces, contando con los recursos y teniendo en cuenta que esto coadyuva al mejor uso de los recursos públicos, nos parece que es adecuada la propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que, con la referencia

expresa al cumplimiento del Tocaf, quedó una mejor redacción que despeja cualquier duda sobre otro tipo de situaciones que se podría generar.

Por tanto, vamos a acompañar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, y habiendo acuerdo, se va a votar el artículo 149 con la modificación propuesta por el señor diputado Sánchez.

——Setenta y nueve en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

24.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

——Continúa la consideración del asunto en debate.

En discusión el artículo 150.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: no vamos a votar este artículo, que autoriza "la trasposición de los créditos pertenecientes a retribuciones personales de los proyectos de mantenimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se encuentren sin ejecutar dentro del ejercicio".

¿Adónde los destina? Acá vienen los artículos relativos a UPM. O sea: el Ministerio deja de realizar obras - seguramente estaban definidas y tenían que ver con el mantenimiento de lugares públicos- y se siguen generando privilegios para UPM. Esto se vincula con la expropiación de terrenos, las construcciones portuarias; lamentablemente, se propone el resto del Fondo de Estabilización Energética para el tren.

Por estas razones, no vamos a votar el artículo 150.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

La Mesa entiende que se podrían votar en bloque los artículos 151, 152 y 153.

——Se va a votar si se votan en bloque los artículos mencionados.

——Ochenta y siete en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 151, 152 y 153.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 154.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 155.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cuatro en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 156.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y tres en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 157.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

La Mesa quiere dar cuenta de que nos visita la ONG Los Tréboles, de Flor de Maroñas, a la que saludamos y damos la bienvenida.

26.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

——Continuando con la consideración del asunto en debate, se pasa al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", que comprende los artículos 158 a 185, inclusive.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente, queremos proponer dos bloques: del artículo 158 al 160, y del 181 al final.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: estamos de acuerdo, pero solicitamos el desglose del artículo 184.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: solicitamos el desglose del artículo 159.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Entonces, vamos a votar los artículos uno por uno.

En discusión el artículo 158.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 159.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 160.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 161.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y dos en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 162.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 163.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y uno en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 164.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: por segundo año consecutivo, nosotros no vamos a votar el artículo que crea la Unidad Ejecutora 005 "Dirección Centros MEC", con un cargo de confianza. Hemos tenido conversaciones con la señora ministro acerca de este tema, pero entendemos que no debe ser un cargo de confianza. Si quieren que sea de confianza que sea del Escalafón P, pero no del Escalafón Q. Además, de esta manera se está convalidando una situación de hecho irregular que se dio cuando se designó en forma sui géneris al actual titular, porque se le está pagando como adscripto a la señora ministro, y como si se le nombraba como tal le faltaba un cargo, un abogado pasó a Canal 5 con un cargo de productor televisivo y un sueldo asignado. Dicho claramente: esto trata de homologar una irregularidad previa.

Además, hemos planteado en la Comisión -no es este el momento de hacerlo de nuevo- la absoluta discrecionalidad con la que se están manejando los fondos de los centros MEC. En consecuencia, por razones de principio no acompañamos cargos de confianza y menos en este caso.

Quería dejar clara esta situación. La señora ministro estuvo más de cinco horas en la Comisión, precisamente por esta discrecionalidad de los gastos, y si creamos este cargo en el Escalafón Q consolidamos la discrecionalidad.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR EZQUERRA ALONSO (Wilson Aparicio).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR EZQUERRA ALONSO (Wilson Aparicio).- Señor presidente: siguiendo la línea argumental de la señora diputada Bianchi, quiero expresar que, además, esta unidad ejecutora es uno de los planes que no ha funcionado correctamente. Es decir que no solo se trata del cargo sino del plan.

En los números que planteamos a la señora ministra -lamentablemente en la respuesta no vino el dato correspondiente a Montevideo, que tal vez podría ser una justificación-, en el caso puntual de los departamentos del interior

advertimos que con los encargados de los centros se gastaría más en sueldos y aportes que lo que en realidad llegaría a la población. Si uno toma los montos que manejó la señora ministra y lo que realiza el plan, lo divide mensualmente y calcula los gastos que representan dos encargados en Tacuarembó, por ejemplo, comprueba que habría un costo más alto en salarios que en lo que llegaría a la población. Por eso creemos que esa es una falla del plan y tal vez sea algo a rever, a corregir y a mejorar.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 164, que requiere mayoría absoluta para su aprobación.

——Cincuenta en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 165.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y cuatro en noventa: AFIRMATIVA.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: lo que hace este artículo es consolidar lo que dijimos con respecto al anterior.

Permitimos nada menos que los centros MEC, que -reitero- manejan dinero en forma discrecional, realicen "[…] contratos artísticos cuyo monto anual individual no supere el equivalente a la compra directa".

Cualquiera que entre a la página del ministerio puede ver las resoluciones que están colgadas; algunas figuran en la página y otras no, según nos dijo la señora ministro. A través de esta disposición estaríamos convalidando las compras directas sin siquiera necesidad de informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y lo que es peor es que estos contratos se están pagando con horas docentes y con un manejo discrecional de los grados, porque cuando la hora docente se utiliza para este tipo de pagos tiene que ser a grado 1, y hay contratos firmados a grado 4. Además, en realidad no se trata de contratos firmados, sino de resoluciones otorgadas con nombre y apellido a grado 4, grado 6 y hasta grado 7; por ejemplo, cuarenta y ocho horas serían el equivalente a lo que gana un director de un bachillerato del país.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 166.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 167.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 168.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 169.

Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 13, presentado por la señora diputada Lilián Galán.

——En discusión.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: el Frente Amplio ha presentado la Hoja N° 13, que recoge el artículo original que había enviado el Poder Ejecutivo.

En la Comisión decidimos modificar ese artículo -es el que está en consideración- por una razón que voy a explicar. Hay algunos funcionarios que están cumpliendo las funciones de los cargos que vamos a crear en el Instituto Clemente Estable, pero no sucede así con todos, sino que hay diferentes situaciones. En Comisión modificamos el artículo para decir que se iba a contratar a los funcionaros que estaban cumpliendo estas funciones, que no son específicamente las funciones que están cumpliendo hoy.

Más allá de que la modificación fue acompañada por varios legisladores de la Comisión, autoridades del ministerio correspondiente y del Instituto Clemente Estable nos decían que era necesaria la redacción original del Poder Ejecutivo, que crea los cargos. Lo que indujo a error fue un inciso que decía: "El personal que a la fecha en que deban efectuarse las reasignaciones dispuestas, se encuentre prestando funciones financiadas con los créditos a reasignar, cesará en las referidas funciones". Eso es lo que había generado un poco de duda en cuanto a que algunos funcionarios pudieran cesar, pero aquí estamos hablando de que se van a crear los cargos, los funcionarios luego van a ocuparlos y es necesario cesar esas funciones después porque, de lo contrario, quedarían habilitados los dos créditos.

De todos modos, en la Hoja N° 13 modificamos la planilla original del Poder Ejecutivo, cuando hace referencia a la cantidad de Especialistas VIII, que deben ser siete y no cinco como estaba en el proyecto original del Poder Ejecutivo.

Aparte de eso, mantenemos la redacción original del Poder Ejecutivo por las razones que explicábamos hace un momento, en base a conversaciones con las autoridades del Instituto Clemente Estable y del Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: habíamos planteado lo que en definitiva fue aprobado en la Comisión como el artículo 169, teniendo en cuenta, en primer lugar, que los técnicos VII eran siete, lo que era un aspecto que los funcionarios del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable no nos habían hecho saber y, además, porque, tal como está redactado

el artículo, se genera la duda de cómo se llenan esos cargos a partir de su creación.

Las personas que hoy están siendo remuneradas con horas docentes entraron al organismo por concurso. En su momento, concursaron, y están cumpliendo funciones en el organismo. Si se están creando cargos para ser llenados por los actuales funcionarios, el artículo debería decirlo en forma expresa. Así como está redactado, además, con la referencia del artículo original del Poder Ejecutivo: "El personal que a la fecha en que deban efectuarse las reasignaciones dispuestas […] cesará en las referidas funciones", genera enormes dudas entre los funcionarios y, por eso se buscó una redacción alternativa, que era la contratación de los siguientes cargos bajo el régimen de provisoriato. Por lo que tenemos entendido, el asesoramiento fue realizado por los propios abogados de COFE, quienes aconsejaron que el artículo originalmente 171 -ahora 169- tuviera la redacción que viene de la Comisión.

Por lo tanto, en la duda, vamos a votar la redacción que viene de la Comisión, que nos parece elimina todo margen de duda respecto a cómo se procede al llenado de estos cargos, porque en definitiva se trata de eso: de reconocer una situación irregular, ya que estos funcionarios están cumpliendo tareas permanentes pero son financiados con horas docente. Es decir, se les está pagando con horas docentes porque el Instituto no tenía la posibilidad de contratarlos bajo otra modalidad; no tenía una autorización legal a este respecto. El artículo 169 le da esa autorización legal. Se contratarían bajo el régimen de provisoriato y, en todo caso, la ley de presupuesto puede solucionar el tema ante las eventuales dudas.

Me parece que la redacción del artículo 169 tal como viene de la Comisión despeja dudas respecto a cómo se procede al llenado de esos cargos.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 169 tal como figura en el proyecto.

——Diecisiete en ochenta y ocho: NEGATIVA.

Se va a votar el sustitutivo de la Hoja Nº 13.

——Ochenta y cinco en ochenta y nueve: AFIRMATIVA

En discusión el artículo 170.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 171.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 172.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 173.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y ocho en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 174.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: el diputado Posada, que siempre está atento, me hace notar que cuando votamos el artículo sustitutivo que figura en la Hoja N° 13 no se recogió el cambio verbal propuesto acerca de los técnicos VII. En la planilla que figura en la Hoja N° 13 dice que la cantidad es cinco y debe decir siete.

Por lo tanto, solicito la reconsideración del artículo sustitutivo que figura en la Hoja N° 13.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar si se reconsidera el artículo sustitutivo que figura en la Hoja N° 13.

——Noventa por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se reabre la discusión del artículo sustitutivo que figura en la Hoja N° 13, con la modificación verbal propuesta por el señor diputado Sánchez.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en noventa: AFIRMATIVA.

——En discusión el artículo 175.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 176.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y dos en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 177.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: los artículos 177 y 178 suponen cambios a la Ley de Registro de Estado Civil. Se trata de una norma del año 1879, fundamental en nuestra legislación, porque de alguna manera el Estado empezó a asumir todo lo que tenía que ver con el registro del estado civil, sustituyendo a la Iglesia Católica, que era la que hasta entonces realizaba esta actividad.

En este caso, se pretende realizar algunos cambios que nos parece deberían ser estudiados debidamente en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, recabando el asesoramiento correspondiente y mirando al detalle las modificaciones que se plantean que, a nuestro juicio, en algún caso, no son menores.

Por lo expuesto, vamos a pedir que los artículos 177 y 178 se desglosen y pasen para su consideración a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: estamos de acuerdo con lo propuesto. A nosotros nos preocuparon estos artículos desde el momento en que los mencionaron los representantes del Ministerio de Educación y Cultura, en particular, la persona responsable de los registros en general, y planteamos algunas dudas.

Además, el lunes pasado nos visitó parte del sindicato de trabajadores del registro civil, preocupados por lo mismo. Las razones por las cuales pidieron ser recibidos en la Comisión no las sé, pero como legisladora trasmito la misma preocupación que los trabajadores e insisto, además, en una cosa de la que quisiera que quedara constancia en la versión taquigráfica.

He hablado con diputados del oficialismo, concretamente, con compañeros de la Comisión de Educación y Cultura, como el diputado Sabini, acerca de que la Dirección de Registro de Estado Civil ha adoptado resoluciones administrativas que parecen ser incorrectas. Digo esto porque creo, al igual que los trabajadores, que necesitan rango legal.

Voy a poner un ejemplo puntual que discutí en presencia de representantes del Ministerio: la eliminación de la causal de muerte en las partidas de defunción, que ya se está llevando a cabo -creo que la resolución es del año 2012-, con algunos errores, pero se está llevando a cabo. Ustedes se preguntarán qué tendrá que ver esto, pero una de las cosas que nos hicieron ver los trabajadores -a mí me rechinaban algunas cuestiones, como dice el señor diputado Abdala, pero esto va más allá de un rechine-, es que para las personas que tienen seguro de vida, el hecho de que en la partida no conste la causal de muerte implica la realización de un trámite realmente complejo, y todos sabemos el poder que tienen las aseguradoras. Podría citar otras cuestiones que nos plantearon, pero lo haré después en la Comisión de Educación y Cultura, si estos artículos son desglosados y enviados a esa asesora.

Para terminar, agrego que, inclusive, existen problemas de digitalización, tal como manifestaron los trabajadores.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con desglosar estos artículos por varias razones. No quiero aburrir a la Cámara pero, si se desglosan, plantearemos que se hagan algunas convocatorias a la Comisión. Hay cosas muy delicadas y, aunque se han manejado con el objetivo loable de digitalizar, los trabajadores entienden que, en la medida en que el *software* no solo lo hizo una empresa privada, sino que lo administra una empresa privada, todo lo que refiere a la identidad de las personas está fuera de las manos del Estado. Agrego esto para reforzar, desde nuestra bancada, que creemos que es mucho mejor la propuesta del señor diputado Posada.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señor presidente: nosotros somos cuidadores del proceso de secularización, así que vamos a acompañar el desglose de estos dos artículos.

Asimismo, hemos solicitado al Ministerio de Educación y Cultura un informe relativo a estos artículos. Dado que está presente el presidente de la Comisión de Educación y Cultura y anunció que es intención de nuestra bancada que estos aspectos sean aprobados este año, estamos dispuestos a dar un espacio de análisis a estos dos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el procedimiento solicitado por el diputado Posada, en el sentido de desglosar los artículos 177 y 178 y pasarlos a la Comisión de Educación y Cultura.

——Ochenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

Quedan desglosados los artículos 177 y 178 y pasan a la Comisión de Educación y Cultura.

En discusión el artículo179.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: ya que tomamos la decisión de desglosar los dos artículos anteriores, pregunto a los colegas parlamentarios si estarían dispuestos a votar el desglose del artículo 179, por la última razón que manifesté. En este artículo se hace referencia a los hechos y actos inscribibles de acuerdo con la legislación vigente; es el proceso de digitalización que los funcionarios entienden que puede tener algún defecto.

Entonces, ya que vamos a trabajar y nos comprometemos a resolver esto antes de fin de año, de este modo le daríamos más seguridad a una cuestión que involucra la identidad de las personas, que es lo que está en juego y es algo a lo que, de pronto, no le damos la trascendencia que tiene.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el desglose del artículo 179, propuesto por la señora diputada Bianchi Poli, y su pase a la Comisión de Educación y Cultura, como los dos artículos anteriores.

——Cuarenta y uno en noventa y uno: NEGATIVA.

En discusión el artículo 179.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y tres en noventa y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 180.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta en noventa y dos: AFIRMATIVA.

La Mesa entiende que los artículos 181, 182 y 183 se podrían votar en bloque.

Se va a votar el procedimiento.

——Ochenta y nueve en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 181, 182 y 183.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 184.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y nueve en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 185.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve en noventa y uno: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", que comprende los artículos 186 a 191.

——En discusión el artículo 186.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa en noventa y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 187.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y cuatro en noventa y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 188.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y nueve en noventa y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 189.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta en noventa y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 190.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa y uno en noventa y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 191.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presidente: pediremos que no se vote este artículo, porque perfora el sistema de protección de datos personales, y lo perfora gravemente, al punto de que se ha hecho referencia a que legitima

un gran hermano de la salud. Y esta calificación tiene fundamento, porque se legitima el acceso a una plataforma, se legitima la transferencia de datos personales sensibles de todos los usuarios, de todos los ciudadanos uruguayos, nada más y nada menos que datos de la salud, que son los que más deben ser protegidos, y por eso se los califica de sensibles. Son esos datos respecto a los cuales los principios generales deben aplicarse especialmente, sobre todo el que figura en la Ley N° 18.331, de cuyos principios tanto nos hemos enorgullecido; me refiero al consentimiento previo e informado. Esto es, que las personas deben dar su consentimiento previo antes de que sus datos sean utilizados y objeto de tratamiento, lo que debe aplicarse mucho más aún en el tema de la salud.

Si una mujer se hizo un aborto y no quiere que se sepa, ¡vaya si ese es un derecho que tiene la mujer que se hace un aborto! ¡Vaya si tiene derecho una persona que tuvo un evento psiquiátrico a que no se enteren aquellos que no quiere que lo sepan!

——Por ejemplo, un hombre, ¡por supuesto! Yo no hago diferencia en estos temas. Y así podríamos referir a otra cantidad de eventos que tienen que ver con la salud; por ejemplo, con la sexualidad, que ¡vaya si es un tema de intimidad y privacidad que los usuarios de la salud tenemos derecho a proteger!

Sin embargo, con este mecanismo, todos los eventos de salud que haya tenido en una institución prestadora de salud, cualquiera sea, serán transferidos, sin mi previo consentimiento ni el de nadie, a una plataforma general que ni siquiera tiene una regulación legal explícita que dé garantías a los ciudadanos de que toda esa base de datos con información tan delicada, tan sensible, tan importante, será custodiada debidamente.

Por eso, a la referencia que se ha hecho de gran hermano de la salud agregamos que no solo se legitima una práctica que hoy se está desarrollando en forma ilegítima -eso es lo grave-, sino que quizás sea el motivo por el cual hoy se introduce en la Rendición de Cuentas. En la oscuridad de la Rendición de Cuentas, entre gallos y medianoche, se quiere legitimar una acción que ha sido ilegítima, ¡gravemente ilegítima!, porque perfora el sistema de protección de datos personales sensibles de los uruguayos. Quizás por esa razón esté metida en el artículo 191, escondidita, para ver si pasa.

Nosotros cumplimos con nuestro deber de advertir que, si se votara este mecanismo, se estaría aprobando una vulneración gravísima de un derecho humano constitucional de proteger nuestros datos personales sensibles, íntimos, que tienen que ver con la salud.

Por eso apelamos a que esta Cámara vote negativamente este artículo que, además, se contradice con todo lo que Uruguay hace bien en cuanto a protección de datos personales: ese Uruguay digital con el que tanto nos llenamos la boca -y al que hemos reconocido explícitamente en el Parlamento y en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda hace pocas semanas- cuando nos referimos a lo buenos que han sido para el país los avances institucionales y prácticos en la gestión, para tener el lugar privilegiado que tenemos en el mundo digital.

Pero el Uruguay digital se hace pedazos y retrocede si no se da confianza a los ciudadanos, si no se protegen, entre otras cosas, los datos personales. Por

eso se metieron estos cuatro o cinco artículos —el artículo 36 al 40—, lo que nosotros reprochamos. Es un retroceso; es meter artículos que van en contra de la línea y la tendencia mundial de generar una mayor protección.

Además, este artículo va en contra de los cinco que hace un rato se votaron, porque tienen como fin que Uruguay adapte su legislación al nuevo reglamento europeo de protección de datos. Cuando alguno de los que tiene que controlar si estamos adaptados vea este artículo, sin dudas, lo va a objetar, lo va a observar, porque es una perforación absolutamente inadmisible al sistema.

Pero más allá de lo que piense Europa, más allá de si estos artículos servirán para adecuarnos, a mí me importan los 3.500.000 de personas que se verán vulneradas en sus derechos fundamentales nada más y nada menos que en lo que refiere a la salud. ¿Cuál es la razón? No sé. Debe haber algunos motivos que no se quieren expresar claramente pero, más allá de eso, debemos advertir que se está vulnerando un derecho fundamental consagrado en el artículo 72 de la Constitución, que refiere a la protección de datos personales.

Cuando nosotros exigimos más control a las bases de datos estatales, un diputado nos dijo que no podíamos pedir eso. Lo que nosotros exigimos es que el Estado cumpla, porque es el principal incumplidor. Y yo me pregunto, si hasta ahora tenemos pésimos antecedentes en el cumplimiento de la protección de datos personales de las bases de datos estatales, ¿quién nos va a dar garantías -la ley tampoco lo hace- de que la plataforma que tendrá los datos personales médicos de todos los usuarios del Uruguay no va a ser usada indebidamente? Quizás se quiera favorecer a alguna aseguradora que pueda mirar en esa plataforma si algún ciudadano uruguayo, usuario del sistema, tiene algún problema médico. Quizás se busque favorecer a alguna de esas empresas o a los seleccionadores de personal, que podrán conocer si determinada persona tuvo algún incidente por el que la empresa no pueda dar el visto bueno.

Es gravísimo lo que el artículo 191 podría legitimar; ¡gravísimo! Por esas razones, porque están en juego la libertad y los derechos humanos fundamentales de toda persona, de todo uruguayo a ser protegido en sus datos sensibles, relacionados con la salud, pediremos al Cuerpo que vote negativamente este artículo.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Señor presidente: en el marco de la discusión del artículo 191 hay algunas consideraciones que queremos hacer, sobre todo relacionadas con esta última intervención, porque tiene que ver con las consultas que se nos trasladaron en oportunidad del tratamiento de esta disposición en la Comisión integrada; se trata de consultas vinculadas con las garantías que se ofrecían en el caso de la aplicación, lo que tiene que ver con la implementación del sistema de historia clínica electrónica nacional.

En ese sentido, esta normativa se adapta al Decreto Nº 242, de 31 de agosto de 2017, que establece el marco normativo de garantías para todo lo que se mencionaba anteriormente, relacionado con los riesgos que se pueden

asumir con respecto a los datos personales de los usuarios del sistema de salud. Existen derechos y obligaciones, y entre los derechos está el de la protección de vida del paciente, el de la privacidad y protección de los datos del paciente y del médico a acceder a la información clínica necesaria para la atención específica. Además, existen potestades de los reguladores del sistema de salud, que en este caso son las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

Parte de lo que está hoy en discusión es cómo se puede lograr un equilibrio entre todos los actores de este sistema, siguiendo la asesoría que hay a nivel internacional.

Es sabido que Uruguay está transitando un cambio transformador y bien profundo en cuanto al seguimiento de una agenda digital, a fin de *agiornar* algunas prácticas, inclusive, en el sistema de salud. Por eso queremos mencionar que el marco normativo de la historia clínica electrónica nacional establecido en el Decreto Nº 242, de 2017, refiere, en primer lugar, a la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, que es la que regula el Sistema Nacional Integrado de Salud.

También se hace mención a cumplir con las obligaciones que fija la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, que regula la protección de los datos personales.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Discúlpeme, señora diputada.

Sus colegas piden que solicite a la Cámara silencio para que usted pueda dirigirse al Cuerpo.

Puede continuar la señora diputada.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Muchas gracias, señor presidente.

Algunas afirmaciones que se han hecho señalan que se está perforando la privacidad de los uruguayos y las uruguayas y de los usuarios del sistema de salud. Lo que estaba diciendo cuando el señor presidente me amparó en el uso de la palabra era que el marco normativo de garantías que se le brinda al sistema nacional para la historia clínica electrónica refiere a la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, que regula la protección de datos personales, que es lo que están poniendo en cuestión algunos diputados que han participado en el debate.

Una de las cosas que se clasifica como altamente sensible en la ley de protección de datos personales se vincula con los datos de la salud. En ese marco normativo, otra cosa que se incluye es la referencia a la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008, que tiene que ver con los derechos y las obligaciones de los pacientes y usuarios del sistema de salud y que determina los criterios mínimos obligatorios que deben cumplir quienes implementen el uso de las historias clínicas electrónicas. Además, se acompaña con una referencia a la Ley Nº 18.600, de 21 de setiembre de 2009, que reconoce la validez y admisibilidad jurídica de los documentos y firmas electrónicas, estableciendo la equivalencia funcional de los documentos en soporte papel y firma ológrafa. En el conjunto de leyes en el que se ampara la historia clínica electrónica nacional, también se prevé una referencia a la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, que regula el intercambio de información y es muy interesante, porque contesta algunas inquietudes que se plantean en esta Cámara.

En definitiva, hay afirmaciones que son difíciles de sostener, porque el sistema de historia clínica electrónica nacional busca facilitar la atención adecuada de los usuarios del servicio de salud y, además, tiene un marco regulatorio que hace referencia a todas las normas en las que prevalecen la protección de los datos y la salud de los usuarios del servicio.

La historia clínica electrónica no modifica las prácticas actuales, sino que, simplemente, acompaña los pasos para *agiornarnos* como país a la agenda digital del Uruguay. En el caso de la historia clínica nacional no existe una base de datos centralizada, y eso es muy importante. Se construye una plataforma que conecta las distintas instituciones prestadoras de salud y tiene un índice para cada acto clínico que se desarrolle. Es decir que los datos de todos los usuarios no van a estar juntos; no hay una base única.

Además, el Ministerio de Salud Pública, en su rol de rector, obliga a las instituciones de salud pública a tener disponible la información clínica en un determinado formato, que es compatible con lo que establece este proyecto. Asimismo, es de público conocimiento que varios prestadores del servicio de salud están llevando adelante el proceso de digitalización de las historias clínicas electrónicas de sus pacientes, entre otras cosas, porque se busca dar mejores respuestas y optimizar las prácticas actuales.

El artículo 192, con todo este marco normativo, refuerza la privacidad de los datos y da a los usuarios de los servicios de salud la posibilidad de optar y no permitir el acceso a sus datos. Esto figura a texto expreso en el artículo 191.

Entendemos que las garantías que cuestionan algunos señores legisladores están claramente expresadas en el marco normativo que se ha dado a la historia clínica electrónica nacional. Por lo tanto, la bancada del Frente Amplio, con total seguridad, acompañará este artículo.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presiden-te: estamos objetando la plataforma, entre otras razones, porque no tiene las garantías legales para una buena protección de los datos. El objetivo de tener una plataforma es bueno, pero no cualquier camino es adecuado para dar garantías legales a los usuarios y a los ciudadanos. El principio es el previo consentimiento informado -quizás la diputada preopinante no leyó bien la Ley N° 18.331-, y en esta norma se lo perfora y se utiliza el *opt out*, que implica que primero se incorpora al usuario a la plataforma y, si la persona quiere, la sacan, pero si no se entera, sigue en la plataforma.

Nosotros planteamos dos aspectos.

Primero, que el previo consentimiento informado es el mecanismo adecuado y, hoy por hoy, se pide para cualquier cosa; por lo tanto, perfectamente se podría aplicar a una plataforma de esta naturaleza.

Segundo, que la plataforma que hoy se crea no da las garantías suficientes en cuanto a que se custodiarán bien los datos. Ese es el meollo del asunto, y por eso decimos que es una tentación para muchos actores privados que

pueden utilizar la información mediante filtraciones en un sistema que no está debidamente controlado; por eso hablamos de los antecedentes.

Nosotros pedimos que en esta plataforma, cuyo objetivo y finalidad son muy buenos, se utilicen los mecanismos necesarios para que se recabe el consentimiento previo de cada usuario y que se cuente con las garantías legales de buena custodia y protección que hoy no se dan, porque le digo a la señora diputada preopinante que un decreto contraría lo que la legislación establece en cuanto al previo consentimiento informado.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Señor presiden-te: no voy a hablar únicamente como legislador, sino que quiero aportar mi experiencia como médico. Hace veintiún años que trabajo en una emergencia móvil y la consolidación de la historia electrónica ha sido una lucha en la que se ha avanzado bastante.

Desde el punto de vista político, respaldaremos con nuestro voto lo que hicieron nuestros compañeros del Partido Nacional en la Comisión que estudió este asunto. No obstante, queremos hacer algunas referencias médicas, poniendo ejemplos que nos pueden ilustrar. Muchas veces tuve que asistir a un politraumatizado grave en alguna esquina de Maldonado que, al no haber camas de CTI en el departamento, debió terminar en uno de Montevideo, de Minas o en otro punto del país. En esos casos es vital que el centro receptor, sea público, privado, la institución a la cual la persona está afiliada o no, cuente con la información imprescindible y básica de salud de ese paciente.

Para mí como médico la vida es lo primero. Es válido que haya distintas visiones en cuanto a si hay que dar el consentimiento antes o si hay que firmar después. En ese sentido, voy a dar un ejemplo que generó muchas discusiones en otro período, cuando yo también era legislador. Me refiero a los transplantes. Había una legislación que decía que cuando alguien fallecía, si no había autorizado la donación, sus órganos no podían ser utilizados. En aquel momento, votamos una ley que establece que todos somos donantes, excepto que voluntariamente se manifieste la voluntad de no ser donante. Eso hizo que en el Uruguay hoy haya una mayor tasa de sobrevida porque la gente de por sí es donante, y si no hubiésemos hecho eso, seguramente gente que habría querido donar no se enteraba que por no haber manifestado una opción sus órganos no podían salvar otra vida.

Como profesional de la salud, este artículo me convence. Seguramente, podría ser mejor, pero no tengo la menor duda de que es un avance con respecto a lo que tenemos.

En cuanto a las garantías, con seguridad el diputado Olano, con quien compartimos la profesión, pueda ampliar más. Los riesgos que se mencionan los tenemos hoy. El operador de una computadora, el enfermero, el chofer de una ambulancia y el administrativo tienen acceso hoy a las plataformas electrónicas y por supuesto que pueden hacer un mal manejo de la

información, pero sobre el infractor va a caer todo el peso de la ley porque eso está previsto, no solo en la salud, sino en otras áreas.

Esta es mi visión y no quiero polemizar porque me ha tomado de sorpresa saber que había otra postura en el partido que no fuese la de respaldar a nuestros compañeros que integran la Comisión. Como no soy abogado, tal vez no entiendo muchas leyes, pero como médico sé que esto es fundamental. Lo que vemos en las películas, hoy existe. Me refiero al hecho de que se suba un paciente a una ambulancia y, mientras se efectúa el traslado, se va recibiendo por computadora toda la historia clínica, los electrocardiogramas, los exámenes de sangre, si es alérgico y qué patologías previas tiene, porque muchas veces encontramos al paciente solo en la calle y no hay familiares que nos puedan aportar datos, y de pronto le administramos alguna medicación que puede ser fatal para él.

Vuelvo a lo primero: pese al riesgo cierto de que la información pueda ser mal utilizada por un mal funcionario, entiendo que debe primar el derecho a la vida y su protección.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado Alejandro Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: comparto plenamente el desarrollo conceptual del diputado; esta modificación se está haciendo en vistas a ese objetivo.

Aprovecho la interrupción para decir que en el artículo 291 dice "a efectos del derecho", pero debería decir "a efectos de garantizar el derecho". Los secretarios de la Comisión me avisaron de esta diferencia y yo la planteo.

También quiero decir que, además de la legislación vigente, tenemos el decreto que hoy reglamenta la plataforma, al que la diputada Díaz hacía referencia, que en su artículo 8º dice: "Los datos personales relativos a la salud deberán tratarse con la más absoluta reserva por aquellas personas físicas o jurídicas que accedan a estos legítimamente, estando prohibida toda difusión a terceros. Esta obligación subsistirá aun finalizada la causa que habilitó el acceso".

Además, en las instituciones existe un conjunto de protocolos -creado por la Agesic- que establece claramente quién puede acceder a la información; es necesario tener una clave habilitada. Incluso, se identifica la persona que accede a esa información a través de registros digitales. En el caso de que una persona haga un mal uso de esta información, se puede identificar porque hay registros digitales de la situación.

Por lo tanto, además de la legislación vigente, existen estrictos protocolos de control, a efectos de evitar que alguien utilice mal la información. Como ya se ha dicho, con el acceso a los antecedentes médicos se pretende salvar la vida de las personas.

También puede darse el caso legítimo de que algún ciudadano diga que, aun corriendo riesgo a título personal, no quiere que se dé esa información. El

artículo prevé esa hipótesis, que está dentro de la libertad individual, y dispone que prime sobre el interés general o de la vida, que recién mencionaba el diputado Casaretto.

Reitero: solicito que en la redacción del artículo se agregue la palabra "garantizar", porque no está en el repartido de que disponemos los legisladores.

Agradezco al señor diputado Casaretto por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Federico Casaretto.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- He finalizado.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Gustavo Penadés.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: a esta altura del debate, queda claro que si hay un tema que está muy lejos de ser considerado de materia presupuestal es el que estamos discutiendo. Lo entiendo y se entiende; por eso votamos afirmativamente este artículo en la Comisión. Sin perjuicio de ello, digamos las cosas como son: las explicaciones que solicitamos en dicha asesora recién las acaba de dar en el pleno la señora diputada Díaz. O sea, en la Comisión, ninguna de estas explicaciones fueron dadas a la hora de las consultas que se hicieron. Sí nos alegra mucho que esto se haya hecho en el plenario.

Propongo -si es posible- que se postergue este artículo y que se vea la posibilidad de buscar una redacción que incluya en el mismo texto todas las normativas legales a las que se ha hecho referencia como materia garantista de lo que con preocupación se ha manifestado en el plenario y dar rango legal a lo que se ha dicho que figura en un decreto. Si en este artículo pudiéramos incluir, dándole rango legal, lo que establece el decreto que acaba de ser leído por el señor diputado Sánchez, nos daría más garantías a todos, y podría ser votado por unanimidad.

Entonces, amigablemente, solicito que se postergue este tema por un rato para ver si se puede llegar a una redacción que nos dé garantías jurídicas a todos y pueda ser aprobado por unanimidad. Sin dudas, lo que nos motivó a votar este artículo fue lo que explicó el señor diputado Casaretto, que supongo algún otro legislador también explicará en el transcurso de la sesión.

También creo que estaría muy bien que en este artículo se incluyeran todas las normas que garanticen lo que se pretende salvaguardar, en el momento en el que se crea el Sistema de Historia Clínica Electrónica Nacional, a través del artículo 191. No atenta contra el objetivo y da muchas más garantías. Es muy importante que en este tema tan delicado las garantías figuren a texto expreso.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado José Quintín Olano Llano.

SEÑOR OLANO LLANO (José Quintín).- Señor presidente: en Uruguay hay legislación vigente -que no será derogada por este artículo-, que establece

claramente las reglas que se debe seguir para salvaguardar o acceder a la información de las historias clínicas de los pacientes. Solo se puede acceder a esa información cuando sea para prestar un servicio de asistencia o para beneficio de la salud propia o de un tercero, con la condición de que cuando se necesita para fines legales, y no para un médico, se tramite a través de una orden judicial.

Este artículo no elimina ninguna de las disposiciones vigentes, que son muy antiguas en el Uruguay.

Independientemente de ello, no hay peor cosa que un médico legislador. Por lo tanto, me parece de recibo lo que acaba de solicitar el diputado Penadés en cuanto a que se revise esto con más tiempo para que haya las suficientes garantías.

Además, el tren llegó al lejano oeste; el progreso es indetenible; el mundo no va para ahí; el mundo está ahí hace rato.

En el Uruguay, en los subsistemas público y privado, prácticamente en todas las instituciones se están instalando distintos servicios de registros de historias electrónicas. Eso permite un acceso más ágil y eficiente a la información. Además, se pueden realizar interconsultas sobre acerca de la salud de un paciente en forma más rápida. Por ejemplo, uno puede estar en Treinta y Tres y ver al instante la radiografía que se le hizo a su paciente en el Hospital Maciel. También se puede acceder a información del paciente que sirva para protección del médico. Todos los que operamos nos enteramos, en más de una oportunidad, en la mitad del procedimiento o al final, de que el paciente era HIV positivo; no lo sabíamos antes. Por supuesto que nos cuidamos, pero no de la misma manera.

Reitero que esto es indetenible; si no llega hoy, lo hará mañana. Tiene muchas ventajas; por supuesto, también tiene riesgos; todo el riesgo que supone la información que está en los sistemas informáticos. Existe el riesgo de los *hackers* o de ser invadido por alguien. También está el riesgo de empresas de servicios médicos, millonarias, que pueden acceder a bases de datos de pacientes y con esa información manipular negocios que tienen que ver con la medicina. Por supuesto que todos estos riesgos existen, pero habrá que buscar los mecanismos que permitan controlar esta información de la mejor manera. Me parece que, con los recaudos que se pueda establecer -lo que planteaba el diputado Penadés-, este es un tema en el que indefectiblemente vamos a avanzar, porque el mundo tiene ese destino. De otra forma, seguiremos en la Edad de Piedra en lo relativo a la información de los pacientes.

También entiendo lo que dice el diputado Goñi en cuanto a que lo deseable sería que los pacientes firmaran antes para que después se pudieran hacer estas cosas. Eso me parece muy bueno, pero cuando pasó esto, como con los transplantes, como dijo Casaretto, nadie firmaría, porque los uruguayos -no todos, pero muchos, tal vez la mayoría- somos así. Hay madres -no pocas; ¡muchas madres!- que llevan a su hijo a controlar a la policlínica el día cuando les deben firmar el carné de control porque, de lo contrario, no les pagan la asignación. De las mujeres a las que se les pone el DIU gratis, ¿saben cuántas asisten al control de la semana? El 50 %; la mitad no va ni al primer control. Las madres amamantan en virtud de un sistema que existe en el Uruguay y que

funciona bien, pero hubo que implementarlo para que lo hicieran. ¡Hay que ir a visitarlas a la casa! ¿Quién puede creer que 3.000.000 de uruguayos van a ir a firmar un papel para que se pueda manejar esa información?

De manera que comparto que se afine y se discuta, pero me parece que no podemos dejar de transitar ese camino.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR OLANO LLANO (José Quintín).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Ingresan-do al debate médico, puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Señor presiden-te: concuerdo con que se desglose este artículo, ya que seguramente lo corrijamos.

No queremos entrar en el debate, pero sí quiero hablar no como legislador, sino como médico. Los avances que hoy tenemos en materia de la historia clínica electrónica eran impensados hace diez o quince años. Hoy existe desarrollo en tal sentido, aunque seguramente falta mucha legislación, tanto en nuestro país como en el mundo. Pero para que quede claro: hoy sería imposible desarrollar la medicina sin la historia clínica electrónica.

Concuerdo con que debemos mejorar un poco la redacción, y para eso se conformará un grupo en el que hablaremos al respecto; no queremos entrar en el debate en este momento.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado José Quintín Olano Llano.

SEÑOR OLANO LLANO (José Quintín).- He terminado, señor presidente.

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Silvio Ríos Ferreira.

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- Señor presiden-te: voy a ser muy breve.

Creo que la historia clínica electrónica ha sido un avance importantísimo en todo el sistema de salud. Seguramente, no hemos dimensionado los beneficios que ha traído para todo el sistema de salud. Y estoy hablando del sistema de salud del Uruguay. El Sistema Nacional Integrado de Salud ha tenido un desarrollo muy importante, y eso ha sido fundamental y seguirá siéndolo por otros aspectos.

Sin entrar ahora en el debate -en todo caso, lo haremos cuando lleguemos a consensuar un texto que exprese todo esto-, quiero agregar solo un concepto, y es que la historia clínica electrónica es un secreto profesional; integra el secreto profesional. Los que son médicos y los que no lo son saben que el secreto profesional es una cualidad que tiene esta profesión desde el fondo de la historia.

Mucho se ha hablado y legislado sobre el tema del secreto profesional. Ahora, simplemente, habrá que ver cómo resguardar la historia clínica que

integra el secreto profesional. Eso hay que hacerlo para que la gente tenga garantías.

Así que estoy de acuerdo en que esto…

SEÑORA LUSTEMBERG (Cristina).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- Sí, señora diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir la señora diputada.

SEÑORA LUSTEMBERG (Cristina).- Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra y a explicitar porque, de lo contrario, parece que no soy médica.

Creo que con lo expresado por la legisladora Bettiana Díaz, la observación del diputado Penadés y la corrección del diputado Sánchez podemos llegar a ser más específicos.

Los diputados Casaretto y Olano fueron muy gráficos en ejemplificar respecto de la precaución que hemos tenido. Tenemos algunas dificultades en cuanto a la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero cabe señalar que, a efectos de la implementación de la historia clínica electrónica, se está trabajando de forma conjunta. Quiero dejar sentado con claridad que eso se integra desde una plataforma. Hay una guía jurídica hecha entre 2014 y 2015.

Como saben, en el desarrollo de la historia clínica electrónica ha trabajado un equipo que se llama salud.uy, que depende de Agesic e integran los ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública y la Presidencia de la República. Ese grupo de trabajo ha convocado a prestadores de salud de la sociedad civil y en cada uno de sus desarrollos se ha basado -como bien decía el diputado Goñi- en la Ley N° 18.331, lo que ha llevado a la situación en la que estamos hoy.

Creo que mis colegas fueron gráficos al expresar que se ha dado un paso sustantivo en el avance de la medicina y establecido con claridad, en cada uno de los decretos y de las ordenanzas, que antes que nada está el secreto profesional y el derecho a la privacidad de los pacientes, salvaguardado en este país por la Constitución de la República.

Así que hoy es innegable el avance. Adviertan que en el Parlamento también se votó el derecho a la atención en una urgencia en cualquier lugar del país. ¡Si habrá avances en este sentido! Cada uno de los que hemos atendido a personas en extrema gravedad, sabemos la importancia de conocer los antecedentes y datos clínicos. Y están dadas las garantías jurídicas. Está bien; los que tienen mayor formación jurídica, quizás puedan redactar la disposición de manera más clara, para que dé mayores garantías, pero quiero hacer énfasis en que esta es una plataforma que intercambia datos.

Deseo hacer otra precisión. Todo lo que tiene que ver con la ordenanza y la implementación de la historia clínica electrónica a nivel nacional también tiene exigencias para los prestadores de salud en cuanto a la privacidad de los pacientes. Muchos de nosotros hemos visto en la prensa que se publica de forma fidedigna la historia clínica de un paciente, y eso no debería permitirse sin la previa autorización de la persona.

O sea que lo que se está haciendo respecto de la historia clínica electrónica es un salto cualitativo; hay un gran respeto a la Ley N° 18.331 y, repito, es un salto cualitativo que da nuestro país. Así que recojamos todas las inquietudes. En esto hemos tenido asesoría. Reitero que hay un equipo muy sólido; se ha buscado asesoría jurídica a nivel internacional. Así que explicitemos todo bien y demos un paso cualitativo para que cualquier ciudadano, esté donde esté, tenga garantizado el derecho a la atención de salud, manteniendo la privacidad de los datos, que creo es el derecho que se quiere conservar.

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ (Hermes).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado, aunque no es médico.

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ (Hermes).- Señor presidente: precisamente, pedí la palabra para romper con el corporativismo médico.

Quiero decir, con sinceridad, que me alegro y me reconforta escuchar esta discusión de alto nivel y con objetividad en un tema tan delicado y complejo.

Voy a mencionar al diputado José Quintín Olano -no tengo prurito en hacerlo-, de Treinta y Tres, con quien, en su momento y en este mismo lugar, tuvimos grandes discrepancias; recuerdo cuando con muchísima profundidad, trató un tema, precisamente, con el entonces diputado Gallo Imperiale -padre del diputado Gallo Cantera, presente en sala- que me impresionó gratamente.

Creo, antes que nada, en la ética; creo en el juramento que realizan los médicos.

Hace poco, un familiar muy cercano, afiliado a ASSE, pasó por una operación muy delicada en Montevideo, en el Hospital Maciel, y ese instrumento, esa herramienta que acaban de explicar claramente los legisladores que son médicos, fue usada con eficacia y eficiencia por la mutualista del Estado.

Por lo tanto, si este concepto se extiende y se usa con los criterios que han manejado en sala los diputados de profesión médica, sería importante acordar una redacción de consenso, porque seguramente la norma tendría mucha más fortaleza que si la votáramos solo los cincuenta diputados del Frente Amplio.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: en realidad, toda la legislación respecto al manejo de la base de datos está referida en la Ley Nº 18.331. Es más, la señora diputada Díaz y el señor diputado Sánchez se refirieron al Decreto N° 242/2017 que, en definitiva, al establecer los principios, repite los establecidos -entre estos, el de reserva, al que diera lectura el señor diputado Sánchez- que están establecidos en la Ley Nº 18.331.

Entonces, si lo que se procura es dar mayores garantías, se puede establecer en este artículo la referencia a la Ley Nº 18.331, y me parece que así quedaría zanjado el tema.

De todas maneras, para continuar con la discusión particular del proyecto, sería más oportuno deglosar el artículo, como planteó el señor diputado

Penadés, y agregarle alguna referencia expresa a la Ley Nº 18.331, porque han quedado claros los conceptos y cuál es, en definitiva, la legislación aplicable.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra por una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presiden-te: el problema es que uno de los principios clave de la Ley Nº 18.331 es el previo consentimiento informado, y esta norma está contrariando este principio.

Si se hiciera referencia a la ley, habría que definir si derogamos dicho principio en esta norma o queda vigente la anterior.

Uno de los puntos clave que objetamos es que contradice un principio de la ley de protección de datos personales, que es el previo consentimiento informado.

Precisamente, vamos a proponer una redacción que aborde el otro aspecto clave referido al responsable. Los abogados tenemos claro que pueden existir todas las normas del mundo, todas las obligaciones, deberes y principios del mundo, pero si no hay un control, si no hay un responsable que sea sancionado por incumplimiento, no sirve para nada. Por eso las bases del Estado son un tembladeral, porque se filtra información y no pasa nada.

Sería bueno -es lo que vamos a proponer al Cuerpo con esta nueva redacción- que, por ejemplo, Agesic, que ha estado planificando y trabajando, sea la responsable. ¿Por qué Agesic no es la responsable de todo lo que ocurra con esta base de datos, si es tan segura? Si Agesic se hiciera responsable del cuidado y custodia de datos tan importantes como estos, daría las garantías a todos los usuarios de la salud del Uruguay.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA DIAZ REY (Bettiana).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se vote!

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¡Que se vote la moción de desglosar!

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Compren-do su ansiedad, pero no puedo evitar dar la palabra a quien la pide.

SEÑORA DÍAZ REY.- Señor presidente: vamos a acompañar la propuesta del coordinador de bancada del Frente Amplio de desglosar este artículo, y cuando se discuta nuevamente haremos las aclaraciones pertinentes.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar la propuesta que originalmente hizo el señor diputado Penadés de desglosar este artículo para discutirlo al final.

——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

Al final de la sesión, médicos y abogados encontrarán el camino correcto; yo me pongo en mano de los médicos.

El Inciso tiene un aditivo que figura en la Hoja Nº 14, presentada por Unidad Popular.

——En discusión.

SEÑOR PÉREZ (Carlos).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PÉREZ (Carlos).- Vamos por otro intento, señor presidente.

Al igual que el año pasado, proponemos a la Cámara derogar el artículo 448 de la Ley Nº 19.355, de Presupuesto, de diciembre de 2015.

Este artículo exoneró al Estado y a los prestadores privados de salud de proporcionar todos los tratamientos y medicamentos que no estuvieran autorizados por el Ministerio de Salud Pública.

Nos parece importante citar las palabras del ministro Basso para que quede constancia en la versión taquigráfica. El señor ministro planteó la hoja de ruta del Ministerio -estamos en las antípodas- y reconoció que "La salud se ha convertido en un negocio redituable para las grandes farmacéuticas" -no solo para ellas; eso lo agrego yo- "que amparadas en el uso de patentes cobran precios exorbitantes". El ministro Basso decía textualmente en la Comisión que analizó esta rendición de cuentas que "los recursos para atender cometidos tan esenciales, como por ejemplo los vinculados al suministro de medicamentos son finitos. Entonces, ya no es válido decir que las prestaciones sanitarias son ilimitadas, porque llegaría el momento en que el Estado sacrificaría otros cometidos, tan vitales como el sanitario". El ministro pone como ejemplo la seguridad, el trabajo, la vivienda, la educación y la justicia.

Además, establece con meridiana claridad que la planificación y aplicación de las políticas públicas de salud deben ser reguladas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Más adelante expresa: "Con respecto a la extensión a la salud, el derecho a la salud no obliga al Estado a evitar la muerte, ni a lograr el completo bienestar, sino a brindar prestaciones de salud integrales, igualitarias y humanitarias. El Estado no tiene la obligación de curar ni la de lograr la salud, sino la de brindar prestaciones médicas. […] las prestaciones de salud constituyen un recurso escaso, de manera tal que no es actualmente posible que todos los individuos tengan acceso a todas las prestaciones que desean en lo atinente a la salud. Este presupuesto podría ser puesto en duda si la sociedad decidiera asignar todos sus recursos a la salud y, luego de lograda plena satisfacción, se decidieran otros temas. Sin embargo, esto no sucede, puesto que la sociedad debe utilizar recursos para satisfacer también otros bienes, igualmente escasos e importantes, como el trabajo, la vivienda, la educación, la justicia".

Por lo tanto, habría que reflexionar un rato sobre esta hoja de ruta.

En realidad, el derecho a la salud está vinculado a principios económicos, ya que las grandes farmacéuticas tienen mucho poder. Por supuesto, en algún caso habrá que recurrir a estas -no quedará otra alternativa-, pero creo que no debemos hacerlo sin contar con una política de investigación, desarrollo, producción farmacéutica nacional y producción de medicamentos genéricos. Creo que acogerse a los TLC y someterse mansamente -por decirlo de alguna

manera- a las grandes farmacéuticas no es el camino, ya que intentarán dar al Estado medicamentos que no elige el paciente, sino el médico, que en su calidad de técnico entiende que ese es el mejor tratamiento. Pero eso no es lo que el Estado, a través del artículo 448 de la ley a la que hice referencia, pretende brindar.

Por esto, y por lo que establecía el artículo 188 de esta Rendición de Cuentas, que por suerte fue eliminado, hacemos esta propuesta, ya que no queremos que ocurra lo que sucedió el año pasado, que unos días antes de presentar esta iniciativa nos enteramos de que el Fondo Nacional de Recursos había autorizado un medicamento después de que el paciente había fallecido.

Entonces, ¡vaya si esta hoja de ruta nos preocupa! Por eso proponemos que se derogue este artículo y que se busquen otros caminos de producción soberana de medicamentos. Creo que debemos enfrentarnos al poder de estas grandes farmacéuticas a fin de no someternos a estas tan livianamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Seis en ochenta: NEGATIVA.

28.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

——Se pasa a considerar el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", que comprende los artículos 192 a 198, inclusive.

Antes de comenzar con este Inciso, la Mesa quiere saber si hay alguna propuesta en cuanto al procedimiento a seguir.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- No, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Entonces, vamos a considerar artículo por artículo.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: el temperamento del Partido Nacional con relación a este Inciso es bastante concreto. Por lo tanto, creo que podríamos votarlo en bloque, exceptuando el artículo 198. Si esto no crea dificultades a las demás bancadas, podríamos proceder de esa manera a fin de acelerar la votación de este Inciso.

Como dije, si se desglosa el artículo 198 estamos en condiciones de votar el resto de los artículos en bloque.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: solicitamos que también se desglose el artículo 192, pero estamos en condiciones de votar en bloque desde el artículo 193 al 197.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Existe acuerdo para votar en bloque los artículos 193 a 197, desglosando los artículos 192 y 198.

Se va a votar el procedimiento.

——Sesenta y uno en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el bloque que comprende los artículos 193 a 197.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y uno en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 192.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y dos en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 198.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: quiero aprovechar la consideración de este artículo para dejar una breve constancia relacionada con un hecho que aconteció en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda cuando compareció el ministro Murro.

Este artículo, precisamente, establece mecanis-mos e instancias de información del Poder Ejecutivo al Parlamento, lo que nos parece saludable. Como dice, en el marco de las rendiciones de cuentas el Poder Ejecutivo deberá incluir información con relación al aspecto que se menciona.

——Sin embargo, señor presidente, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda tuvimos dificultades para acceder a la información que es de competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Inclusive, se generó una controversia con el señor ministro, que desembocó en un debate político ente los miembros de la Comisión sobre aspectos vinculados con la realidad del Inefop y al uso y destino de los recursos de dicho organismo.

Como dije, eso generó algunas dificultades que no terminaron de resolverse satisfactoriamente. Y digo que no se resolvieron satisfactoriamente porque el camino que encontramos en ese momento, señor presidente, fue el de comprometer al ministro -lo que hizo delante de nosotros- a remitir información por escrito sobre muchos de los aspectos que se plantearon.

En realidad, la cuestión del Inefop es muy preocupante, ya que hace pocos días se conoció un informe de la Auditoría Interna de la Nación que señala una serie de objeciones y de observaciones muy importantes. Somos conscientes de la importancia del Inefop, y absolutamente solidarios con la función que cumple y con su importancia en cuanto al desarrollo del mercado de trabajo y a la capacitación de los trabajadores. Tal vez, por esa misma razón, nos preocupamos cuando la Auditoría Interna de la Nación hace -como ocurrió- observaciones de estas características. Se señalan carencias con respecto al cumplimiento de los objetivos, al control en la asignación de los recursos, a la definición de las metas que el organismo debe alcanzar y a su medición.

Sin duda, se hace una serie de señalamientos en verdad preocupantes, y sin ánimo de generar alarma, creo que es objetivamente así.

Lo planteamos en esa oportunidad, así como otros aspectos vinculados con temas más polémicos relacionados con el Fondes y con determinados proyectos de inversión que se han llevado adelante.

Por lo tanto, quiero recordar esto y dejar constancia en la versión taquigráfica de que el señor ministro se comprometió a hacer llegar a la asesora información sobre todos los asuntos que estoy mencionando, lo que hasta ahora no ha ocurrido o, por lo menos, no llegó en tiempo y forma. En realidad, habría sido deseable que los legisladores hubiéramos podido disponer de esa información antes de que el trabajo de la Comisión concluyera.

Estamos concluyendo el análisis de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados. Bueno, tal vez no sea tarde, para recibir esa información, aunque más no sea para tenerla con efecto retrasado.

El hecho es que si estamos en una instancia de rendición de cuentas, cuentan los aspectos vinculados con las modificaciones presupuestales. Los artículos del Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" tienen que ver con modificaciones presupuestales, pero no podemos perder de vista que el tema central en esta instancia -lo dice la Constitución de la República muy claramente- es la rendición de cuentas.

Los Incisos del presupuesto deben venir al Parlamento a informar, a justificar la razón de sus actos, de sus omisiones, a decirnos en qué gastaron la plata y a intentar convencernos de que cumplieron sus objetivos y que, en definitiva, ejercieron su competencia a cabalidad.

Con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eso no pasó. La rendición de cuentas -en sentido estricto- del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y, por lo tanto, en la Cámara de Representantes, fue absolutamente insatisfactoria. Las preguntas que se hicieron quedaron sin contestar; en todo caso, se nos dijo que se iban a contestar por escrito, pero ni presencialmente ni por escrito hasta ahora hemos tenido respuesta a las cuestiones que hemos planteado con mucha honestidad intelectual y preocupación.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado Felipe Carballo.

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor presidente: desconozco la discusión que pudo haber en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda con relación al artículo 198. Entiendo las dificultades que puede tener el señor diputado Abdala con este artículo en particular. Por lo tanto, es necesario ampliar la información porque creo que en este caso concreto le haría muy bien a esta Cámara contar con el respaldo de todos los señores legisladores.

El espíritu inicial, cuando se discutió el artículo 198 en la Comisión -como es obvio, tenía otro número- era, precisamente, que el organismo encargado de dar la información en forma anual al Parlamento y a la Asamblea General fuera el Inefop. Estamos hablando de generar una matriz de riesgo y oportunidades de los puestos de trabajo que se van a perder y de los nuevos puestos que se van a crear. Es responsabilidad del Parlamento adelantarnos a la situación que viviremos en los próximos diez o quince años.

Hay estudios en Uruguay que demuestran claramente que en los próximos diez años podría desaparecer el 54 % de los puestos de trabajo que hoy conocemos. Es decir, todos aquellos empleos vinculados con movimientos repetitivos y con trabajos manuales, corren el riesgo de desaparecer. En esa dirección se van a crear nuevos puestos de trabajo; hay algunos que van a desaparecer y otros que se van a crear.

¿Qué es lo que estamos haciendo con este artículo? Adelantarnos a esa situación, tener una mentalidad proactiva que nos permita estar un paso adelante, obligando al Poder Ejecutivo a que, año a año, cada vez que presente la Rendición de Cuentas nos tenga que informar cuáles fueron las tareas, los trabajos, los estudios, las investigaciones en los diferentes rubros productivos -industrial, comercial, agro y servicios-, de forma de saber qué puestos de trabajo van a ir desapareciendo.

Lo estamos viviendo hoy en nuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sistema bancario? Hace un tiempo íbamos a los bancos y nos encontrábamos con un conjunto de funcionarios que hoy no están. ¿Por qué? Porque apareció la tecnología; se fue incorporando la robotización, la automatización. ¿Qué es lo que pasa en los supermercados? Nos encontramos con que uno se sirve el producto y paga en forma automática porque hay avance en la tecnología. ¡¿Qué va a pasar con esos puestos de trabajo?! ¡¿Qué va a pasar en este país con los trabajadores de las estaciones de servicio, con los pisteros dentro de diez años?! Todo el sistema armado en Uruguay va camino a eso.

Hemos experimentado avances fabulosos. Hemos enterrado miles de millones de pesos a lo largo y a lo ancho del país con la fibra óptica; tenemos el Plan Ceibal, las computadoras para los gurises en los liceos. Se trata de un tema que preocupa a nivel mundial.

Hoy, en esta Cámara y en esta Rendición de Cuentas, tenemos la oportunidad de incorporar un artículo de esta naturaleza que nos va a permitir estar un paso más adelante.

Por eso reitero lo que decía al comienzo: desconozco la profundidad de la discusión que se dio en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda; puedo entender que allí se le haya pedido informes al ministro y puedo entender la actitud de la oposición cuando no recibió la respuesta en tiempo y forma, pero quiero decir a señores legisladores, que no dejemos pasar la oportunidad de estar un paso adelante frente a esos desafíos, tanto por las generaciones que vienen como por los trabajadores de entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años que hoy están cumpliendo funciones.

Este tema está muy vinculado con la formación. Hoy tenemos algunos instrumentos disponibles y cada uno de ustedes sabe que cuando alguien queda desocupado, frente a la oferta laboral, recién dice: "Bueno, me puedo formar en algún otro trabajo, pero necesito el conocimiento". ¡¿Qué es lo que estamos diciendo con este artículo?! Estamos obligando al Poder Ejecutivo a que haga ese análisis y que año a año pueda decir a la ciudadanía, a los trabajadores: "Miren muchachos que los trabajos que están haciendo hoy, el año que viene van a desaparecer y los cursos de formación se tienen que hacer

ahora y no esperar a estar en el seguro de desempleo para ir a ver en qué se van a tener que formar".

Quiero culminar diciendo que es importante este artículo. Conozco al diputado Abdala y sé de la seriedad de su trabajo, pero entiendo que en este artículo no se menciona al Inefop. El responsable será el Poder Ejecutivo; son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Poder Ejecutivo quienes van a tener que rendir cuentas todos los años de cada uno de esos pasos.

Es lo que quería señalar, señor presidente.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: el señor diputado Carballo notoriamente reconoció que no estuvo en la Comisión cuando compareció el ministro, y tengo el temor de que no me haya entendido. Advierto que no entendió el sentido de mi fundamentación.

Lo primero que dije fue que votaríamos esta disposición. Creemos que este artículo es bueno y lo vamos a acompañar por las mismas razones que expresó el señor diputado Carballo. Lo que sucede es que -lo dijimos en nuestra intervención anterior- estribamos precisamente en este artículo que implica imponer la obligación adicional de suministrar información, muy bienvenida y muy oportuna, a un organismo -el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- que no ha cumplido a cabalidad con la obligación de informar que tiene por imperio de la Constitución de la República en las rendiciones de cuentas.

Desde luego que la automatización y robotización nos plantean todos los desafíos que mencionaba el señor diputado Carballo, y por supuesto que frente a eso, la capacitación en materia laboral resulta esencial. Pero como todo eso es así, a mí me preocupa mucho que el organismo, la persona pública no estatal -en este caso llamada Inefop-, abocada a esos aspectos, reciba cuestionamientos tan severos de la Auditoría Interna de la Nación, en el sentido de que tiene falencias en las rendiciones de cuentas, carencias en la ejecución de sus cometidos, que no hay criterios respecto a las definiciones del gasto y que hay falta de definición en los objetivos específicos. Yo no digo que el Inefop esté funcionando mal o rematadamente mal, sino que el organismo de la administración que depende del Ministerio de Economía y Finanzas y audita a la Administración central, dice que esto está pasando en el Inefop.

Solicitamos esa información al ministro y no nos la proporcionó. Es más, se importunó cuando planteamos esto, se sintió incómodo. Poco menos nos trasmitió que no estaba dispuesto a informarnos, y creo que eso no puede ser. Desde luego que vamos a votar esta disposición, está muy bien, pero empecemos por lo primero. Le estamos pidiendo al ministro que nos informe con relación a la perspectiva de futuro del mercado laboral, porque es de enorme importancia, como planteaba muy bien el señor diputado Carballo, pero hay que exigirle que cumpla con sus obligaciones constitucionales y nos informe acerca de lo que pasó el año pasado, no de lo que nos puede pasar de ahora en adelante. Queremos que nos diga qué ocurrió y por qué la Auditoría Interna de la Nación dice lo que dice con relación al Inefop. Fuimos tolerantes y

contemplativos en ese sentido. En ese momento, el ministro nos dijo -quizás lo tomamos por sorpresa- que quería mandarnos la información por escrito. Lo aceptamos y no dijimos ni media palabra, pero la información nunca llegó. Yo esperaba que llegara antes de esta sesión, pero ya no vendrá durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados. Veremos si llega después.

Este es un tema serio, porque es notorio que por la vía de los hechos el Inefop va ganando terreno y ocupándose de asuntos que escapan a su concepción original. Ya no es el organismo público privado, digámoslo así -se trata de una persona pública no estatal-, que se encarga de la capacitación laboral, sino que le hemos echado mano para financiar otras cosas -no voy a entrar en la discusión del Fondes- como, por ejemplo, el subsidio transitorio del que nos habló el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos a los efectos de enfrentar la situación de pérdida de puestos de trabajo.

No sé si eso está bien, mal o regular; yo puedo llegar a estar de acuerdo. Se está manejando la posibilidad de utilizar el Inefop a los efectos de financiar un proyecto que yo comparto, que tiene que ver con los créditos laborales insatisfechos de los empresarios y la constitución de un fondo de garantía. Al respecto, en la Comisión de Legislación del Trabajo hay un proyecto de ley, y comparto la idea, aunque tenemos diferencias -las hay dentro del propio Gobierno- con relación al financiamiento. El ministro está manejando echarle mano al Inefop, también para eso. El Inefop nos debe preocupar, nos debe interesar; debemos saber qué pasa en dicho organismo. Y eso es lo que preguntamos al ministro pero, repito, primero se enojó y después nos dijo que iba a mandar la información, pero esta no llegó.

Vamos a votar el artículo 198 por todo lo que ha dicho el señor diputado Carballo, aunque no era necesario que lo dijera, porque llegamos a esta sesión con la absoluta decisión de votarlo.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: primero vamos a dejar claro, como decía el señor diputado Abdala, que votaremos este artículo. Honestamente, me queda la duda de si esta disposición debe incluirse en la Rendición de Cuentas, porque es más o menos como pedir al señor ministro de Transporte y Obras Públicas que nos traiga los materiales que se van a usar dentro de diez años en la construcción de las rutas. Eso ya lo estarán pensando el señor ministro y los equipos técnicos. Igual lo vamos a votar.

El señor diputado Abdala se refería al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social con relación al Inefop y hay cosas importantes sobre las que no hemos tenido información como, por ejemplo, el nivel de inserción laboral de los miles de trabajadores que hacen cursos de capacitación a través del Inefop. Tendría que haber un seguimiento posterior a los cursos realizados para ver cuántos ingresaron al mercado laboral. Se debería saber, además, cómo se definen los cursos. Días pasados, en Minas de Corrales, donde se está cerrando una empresa de explotación de oro, los ministros resolvieron dictar cursos de

electricidad y neumática. Habría que saber cuánta gente que hizo el curso tuvo oportunidad de insertarse en el mercado de trabajo.

Estamos de acuerdo con que hay que analizar los puestos de trabajo que se van a perder en el futuro, pero tampoco hay que llevar las cosas al extremo. Hace unos días se dijo en sala que la gente ya no recorría los campos a caballo, sino que lo hacían drones. Eso es un disparate. Podrá haber algún caso excepcional, pero el trabajo se sigue haciendo igual.

Varios días atrás, contaba en esta misma Cámara que es una maravilla ver cómo está trabajando la UTEC de Fray Bentos en cuanto al diseño de drones. Eso tiene que ir de la mano con dar recursos, porque si tenemos miedo de perder muchos puestos de trabajo por el avance tecnológico, debemos preparar gente. Pero tampoco se puede, como nos sucedió en esta Rendición de Cuentas, andar mendigando algún peso para dar a la UTEC los $ 100.000.000 que necesita por año para terminar las carreras, precisamente preparando gente para los trabajos del futuro.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: a veces, en la versión taquigráfica, quedan cosas que es conveniente aclarar, y ese es el motivo de mi intervención.

Todos estamos de acuerdo con votar el artículo 198, y creo que es el momento de hacerlo. Independientemente de eso, me voy a referir a lo que planteó uno de los señores diputados preopinantes en cuanto a que el ministro no quiso responder determinadas cuestiones que hacen a la Rendición de Cuentas. En la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda se expone un articulado y se reciben insumos de cada uno de ellos a los efectos de resolverlos. Y eso fue lo que hizo el ministro.

Algunos diputados no se llevan bien con ningún ministro, o siempre tienen críticas para hacer a algunos ministros; es su estilo y a mí no me parece mal -defiendo que lo tengan-, pero el Poder Ejecutivo ha enviado una cantidad de información, como se ha hecho en estos años de gobierno del Frente Amplio. Todos quienes participamos de esa Comisión, que la integramos y permanecemos durante todas las horas de debate ante cualquier ministro, sabemos que algunos ministros en ese momento no tienen la información y ofrecen enviarla luego para que la Comisión la distribuya. Ese estilo de la Comisión lo hemos visto todos, y todos hemos reclamado alguna información. Por lo tanto, quiero dejar la constancia de que el ministro en ningún momento se negó a dar información y además dijo, como también dijeron otros secretarios de Estado, que lo que no pudiera aportar ese día lo enviaría, con mucho gusto, a la Comisión para que luego se distribuyera. Seguramente esta no llegó y puede ser que no haya llegado alguna otra de otro Ministerio. Pero están las Comisiones respectivas: la de Legislación del Trabajo y también la de Seguridad Social, que tratan estos temas. Nosotros hemos compartido esas Comisiones con algún legislador preopinante. Se sabe que es así.

Por lo tanto, la constancia que quiero dejar es, precisamente, que no hay negativa de ninguno de los Ministros que pasaron por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda a brindar información o, inclusive, a proporcionarla con poste-rioridad, como manifestó el ministro de Trabajo y Seguridad Social.

También hay Comisiones vinculadas con esos temas a las que se puede concurrir, siendo delegado de sector o como legislador o legisladora.

Por último, las nuevas tecnologías tienen que estar al servicio de mejorar las condiciones humanas y no al servicio de un puñado de gente que maneja la información para explotar mejor a los trabajadores. Y llegó el momento -en eso estamos trabajando-, de rebajar las ocho horas de trabajo en algunas industrias, producto de las nuevas tecnologías. Estas van a permitir la disminución de las horas de trabajo sin rebajar el salario y, además, se van a generar nuevos puestos de trabajo.

Aprovechamos a pasar este aviso en el que estamos trabajando, referido a que llegó la hora de disminuir las ocho horas de trabajo, sin pérdida de salario, en muchas áreas de la producción, donde las nuevas tecnologías vienen avanzando. Comparto la idea de las nuevas tecnologías que se ha manejado y que deben estar al servicio de la calidad humana y del mejoramiento de vida de los ciudadanos y de la gente en general. Por lo tanto, es necesario comenzar a hablar de reducir la jornada laboral de ocho horas en algunas industrias y, según las características y condiciones de cada una.

Reitero: ningún Ministro que pasó por esa Comisión se negó a dar información alguna. Si no la tiene, la va a brindar. Además, están las Comisiones competentes en las diversas temáticas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 198.

——Setenta y siete en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", que comprende los artículos 199 a 218, inclusive.

(Texto del Inciso 14:)

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presiden-te: nosotros estaríamos en condiciones de votar un bloque desde el artículo 199 hasta el 212, excluyendo el 203.

SEÑOR PÉREZ (Carlos).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PÉREZ (Carlos).- Señor presidente: proponemos desglosar los artículos 204, 208, 210 y el 212.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Vamos a hacer un primer bloque que comprende los artículos 199 al 202.

SEÑOR ROSELLI (Edmundo).- Solicitamos que se vote artículo por artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 199.

——Setenta y nueve en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 200.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: estoy buscando la norma referida, pero tengo entendido que tiene que ver con la contribución inmobiliaria. Es algo que me han planteado como duda y quiero, por lo menos, dejarlo sentado como preocupación porque el tema es defender al adquirente.

Se hace referencia a los certificados del Banco de Previsión Social a efectos de acreditar la situación regular de pagos. Si el señor presidente me permite, quiero decir que el problema es el siguiente, y es asimilable a la venta en remate judicial. Una ley exonera al juez del control del certificado del BPS, pero la deuda no desaparece. Entonces, son deudas personales que no gravan el padrón, aunque el que vende está en situación de deudor. Inclusive hay bienes que exigen certificado del BPS, que precisamente, refieren a los padrones.

Entiendo la buena voluntad de la norma, la comparto porque es para la adquisición de bienes inmuebles. Como dice el artículo, no hay dudas de que se trata de inmuebles destinados a vivienda pertenecientes al dominio público, privado o del Estado con los certificados previstos. Yo no estoy en contra del espíritu, pero advierto que la deuda no desaparece. El BPS puede ejecutar la deuda cuando quiere y va contra el padrón, porque son bienes inmuebles. Por ejemplo, si se trata de bienes inmuebles rurales ya son empresa por su carácter. En ese caso no hay ninguna duda de que grava al padrón. Y si es un padrón urbano, también lo grava porque va contra el bien sobre el que se generaron deudas ante el BPS. Entonces, con la mejor buena voluntad podemos estar perjudicando al adquirente.

Yo, por lo menos, no voy a votar este artículo porque no pondré en situación de riesgo ciertos casos. Y reitero: el Partido Nacional no lo va a votar por la misma razón, aún compartiendo el espíritu.

Creo que algo similar va a pasar después con la ANEP y por eso se debe asegurar la expedición de certificados rápidamente; el BPS está muy informatizado. Me parece que esta no es una buena solución. Reitero: el caso más claro es la compra en remate judicial porque el juez no tiene que exigir el certificado. Ahora, los escribanos que actúan en la compraventa tienen que ir al Banco y averiguar si hay deuda o no; de lo contrario, esa deuda va a seguir al padrón.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR RODRÍGUEZ ÁLVEZ (Edgardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ ÁLVEZ (Edgardo).- Señor presidente: creo que todos comprendemos muy bien el espíritu de esta iniciativa.

El planteo es que cuando existan transferencias de inmuebles que ya son del Estado, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente prescinda de la exigencia de los certificados. No se está hablando de la deuda sino de prescindir del requisito establecido por el que se deben presentar los certificados de pago de esas deudas. Es una forma de facilitar que esos bienes pasen a la cartera de inmuebles de tierra para vivienda de interés social.

La iniciativa es adecuada y bien sostenible.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: ¡Yo dije lo mismo! ¡Compartimos el espíritu, está bárbaro, pero la deuda permanece! Ese es el tema.

Deberíamos arbitrar una forma en que el Estado se entienda con el Estado y no exija el certificado del BPS, pero no en el sentido de que no exija el certificado sino de que no exista más la deuda, que la condone, no sé; no me voy a poner en este momento a buscar soluciones porque, por otra parte, no las tengo todas en la cabeza debido a que no soy jurista -siempre digo lo mismo-, sino una simple abogada, y en este caso actúo como escribana.

La deuda permanece. Entonces, la persona adquiere con deuda. ¿Qué gracia tiene? Es como hacerse trampa al solitario: no controlo el certificado, pero me viene la deuda en algún momento.

Obviamente, estamos dispuestos a legislar -a ver si nos entendemos- a los efectos de que el Estado arregle esto, porque este es un problema del Estado que está tratando de resolver una dificultad de la cartera de tierras. Pero en la normativa actual, por más que no se controle el certificado la deuda no se borra. Y en general -vamos a hablar clarito para que nos entendamos todos-, en los casos en que se compra este tipo de bienes que provienen de la cartera de tierras del Estado, la gente no está del todo informada, o de repente el escribano no le informa. ¿Qué se yo? Uno en la vida profesional ve de todo y los profesionales vivimos equivocándonos. Entonces, eso es lo que estoy diciendo.

¿Qué gracia tiene esto? Si me quiero hacer trampa al solitario no exijo el certificado; bárbaro, y los registros públicos lo van a inscribir sin problema -reitero-, como en el caso de los remates judiciales, en los que tampoco controlan los registros, pero uno es mínimamente diligente y le dice a la persona: "Mire que hay una deuda en el BPS". Lo que la ley hace es que no se controle el certificado porque es una escritura judicial y el juez no tiene obligación de controlar, pero que vaya al BPS a arreglar la deuda si le interesa el inmueble, o descuente ese monto del precio. Ese es el tema, precisamente.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 200.

——Cincuenta y uno en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 201.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: en este artículo hay varios problemas y por eso no lo votamos; no es que cuestionemos su espíritu, pero lo que pasa es que siempre decimos lo mismo: tenga-mos en cuenta que vivimos en un Estado de derecho.

¿Qué quiere decir "[…] el asesoramiento o asistencia arquitectónica o legal, brindado a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio económica, para el acceso a la vivienda, a través de instituciones públicas o privadas o asociaciones civiles"? Estamos aprobando un artículo que me parece muy bueno, pero tendría que ser redactado de otra manera; hay que acotarlo y decir qué son las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y de qué instituciones públicas o privadas se trata, porque se está autorizando a financiar asesoramiento profesional con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y está bien, yo no tengo problema; total: el Estado está para todo…, y sí... El tema es acotar un poco más.

Nosotros no votamos este artículo por esos motivos. Este es un artículo voluntarista, por decirlo de una manera académica; tendría ganas de decir populista, pero prefiero lo que expresé antes.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- En discusión el artículo 202.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 203.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: que me disculpen los colegas porque sé que estamos todos cansados, pero con esta disposición tenemos el mismo problema.

El artículo establece: "Exceptúase del cumplimiento del control notarial de pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria creado por el artículo 1º de la Ley Nº 9.328, de 24 de marzo de 1934 y del Impuesto de Enseñanza Primaria

[…]". Con total honestidad digo que quisiera encontrar a quien redacta estos artículos para preguntarle qué estaba pensando cuando lo hizo, y lo digo con el máximo respeto, porque sucede lo mismo que con el artículo anterior: el escribano no tiene que controlar. Pero las deudas de contribución inmobiliaria y de impuesto de primaria gravan al padrón; es así y no hay duda.

Con el Banco de Previsión Social uno puede enfrascarse tres o cuatro años en recursos administrativos y Tribunal de lo Contencioso Administrativo para ver si se está ante una deuda personal, excepto que se trate de bienes rurales porque en ese caso siempre se grava el padrón. Pero en este caso gravan el padrón, no importa a nombre de quién esté. Entonces, genial, el escribano no controla, pero la deuda, tanto de contribución inmobiliaria como de impuesto de primaria, sigue existiendo.

Por eso a veces me pregunto si en estos casos realmente estamos pensando en beneficiar; no sé: instrumentemos mecanismos de financiación, como ya hay. Además, ni qué hablar en cuanto a que estamos violando la autonomía municipal, pero total…, a esta altura eso lo dejo en segundo lugar, porque la contribución inmobiliaria es de las intendencias.

En este caso pasa exactamente lo mismo: la gente deberá ser advertida de que el escribano no tiene que controlar los certificados, pero la deuda grava al padrón.

Gracias, señor presidente.

30.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con la consideración del asunto en debate, estaba en discusión el artículo 203.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: esta misma discusión se dio en la Comisión porque, evidentemente, el artículo 203 involucra en forma directa a los gobiernos departamentales. Por lo tanto, habíamos pedido que pasara a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente y se hiciera una consulta o, por lo menos, se tuviera algún contacto con el Congreso de Intendentes, referido a este artículo.

SEÑOR RODRÍGUEZ ÁLVEZ (Edgardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ ÁLVEZ (Edgardo).- Señor presidente: el artículo 203 pretende resolver la situación de familias que ya tienen adjudicada una vivienda de la Agencia Nacional de Vivienda o del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y que por tener deudas de contribución inmobiliaria o del impuesto de primaria no pueden acceder al certificado respectivo y en consecuencia no pueden escriturar. Lo que se pretende es que

escrituren sin necesidad de presentar el certificado de libre de ambas deudas y puedan ponerse en situación regular.

En definitiva, las intendencias no están cobrando la contribución inmobiliaria y este es un mecanismo concreto para que a futuro las familias escrituren y empiecen a pagar regularmente su contribución inmobiliaria urbana. Esa es la intención del artículo 203.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: lo que acaba de decir el diputado preopinante agrava la situación y ahora creo mucho más que debe hacerse una consulta al Congreso de Intendentes. Por lo menos, hay que desglosar este artículo, pasarlo a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente y convocar al Congreso de Intendentes.

Yo conozco esa situación. En las intendencias hemos hecho acuerdos con la Agencia Nacional de Viviendas y la Junta Departamental, y se ha buscado una solución, pero involucramos directamente a los gobiernos departamentales en una deuda y quizás al otro día la están ejecutando contra la casa. Por lo tanto, planteo concretamente que se desglose el artículo, que pase a la Comisión de Vivienda Territorio y Medio Ambiente y que se trabaje un poco más el tema.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: no tengo mucho más que agregar. Yo también hubiera desglosado el artículo 200, que ya votamos.

Más allá de que, sin duda, se involucra a los gobiernos departamentales, eso está consagrado en la Constitución de la República. Yo sé que, en general, no importan mucho las normas, pero mientras viva en un Estado de derecho necesito defenderlas, para defender a la gente. El Estado de derecho está hecho para eso, no para entorpecer los derechos de la gente; eso lo invierten algunas corrientes que están de moda últimamente, o no tan últimamente.

¿Cuál es el problema? Ya hablamos de la contribución inmobiliaria. El impuesto de Primaria es nacional. En eso no está el tema de los gobiernos departamentales, pero grava los bienes, ahora también los rurales, además de los urbanos y los suburbanos. Está bien; todos estamos de acuerdo, pero no sé qué opinará la Asociación de Escribanos del Uruguay. Si ejerciera la profesión de escribano, no me harían escriturar con deuda de contribución ni de impuesto de Primaria, porque yo soy solidariamente responsable y una ley manifiestamente ilegal no me exonera de ello. Soy solidariamente responsable como escribana -o lo era, ya que, por suerte, me pude jubilar- de las deudas ante el BPS, de las deudas de contribución, de las deudas del impuesto de Primaria y, ahora, de las retenciones de IRPF por incremento patrimonial. Somos solidaria y subsidiariamente responsables. Quiero ver si la Asociación de Escribanos del Uruguay les lleva esto.

¿No es posible hacer el desglose, comprometerse a encontrar una solución jurídica rápido, en vez de seguir adelante con esto? Se ve que no. ¡Total, como tenemos los votos, le damos para delante y después vienen los juicios! Pero eso es lo que uno quiere evitar. Buscamos solucionar el problema a la gente con las normas que están bien pensadas y bien hechas, respetando, además, a los profesionales que intervienen, no solo porque estudiaron para ello, sino por la solidaridad y la subsidiariedad. Somos dos veces responsables.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Señor presidente: concuerdo con lo que dijo el diputado Rodríguez Álvez. El artículo 203 pretende agilizar la realización de escrituras de inmuebles que han sido adjudicados a beneficiarios de programas y el otorgamiento de reglamentos de copropiedad. Para ello, se solicita exceptuar el cumplimiento de los controles, en este caso, de la contribución y del impuesto de Primaria. No representa no reconocer la existencia de eventuales deudas, sino no controlarlas en el momento de hacer la documentación.

Esto tiene que ver con lo ya explicado y nosotros vamos a votar este artículo.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: si quieren que esto se lleve a la práctica, tienen que agregarle que el registro público de inmuebles se los inscriba, porque por esta disposición se exonera al escribano y nada más. El escribano no controla. Los registros públicos no inscriben si no hay control de contribución inmobiliaria y de impuesto de Primaria porque los funcionarios también son solidariamente responsables. Esto también pasaba con el artículo 200; me había olvidado de decirlo. Los funcionarios de los registros también son solidariamente responsables con los certificados de BPS, no solo el escribano.

Hay que agregarlo; lo digo de onda, porque no va a salir del registro. Va a entrar como inscripción provisoria. No recuerdo si a los dos o tres meses cae la inscripción si no se paga la deuda y el registro no le va a hacer la inscripción definitiva, porque los funcionarios tienen la misma carga que los escribanos: son solidariamente responsables.

En este país, las normas fueron muy bien pensadas y muchas son muy serias; otras no, pero muchas fueron muy bien pensadas. No se trata de pasar por encima de las normas. Si hay deudas, faciliten que la gente las pueda pagar, pero no pasen por encima de las normas, porque esto después genera un efecto búmeran y tenemos juicios nacionales e internacionales millonarios por creer -vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo- que el fin justifica los medios.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: comparto que la lógica de estos artículos intenta resolver a través de la ley lo que la señora diputada plantea, para que se puedan registrar los títulos de la regularización de un asentamiento, donde intervienen los programas respectivos y la propiedad es del Estado. Lo que sucede es que cuando se va a registrar la regularización de la propiedad de cada núcleo familiar, se encuentran desde construcciones hasta predios que no cumplen las normas mínimas y se tratan excepcionalmente en las juntas.

En este caso, no se viola ninguna autonomía municipal, porque este artículo no borra una eventual deuda de un predio con la intendencia; ese es un problema entre organismos. Lo que evita es que en medio de una intervención, de una fuerte inversión, la resolución de un complejo de viviendas o la regularización de un asentamiento no se puedan resolver porque estos aspectos lo impiden. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy analizando la lógica de lo que se plantea; no hago una afirmación. La propuesta avanza en la posibilidad de resolver, dejando atrás eventuales juicios entre la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y otros organismos del Estado con las intendencias por deudas de contribución inmobiliaria. De ese modo, se facilita el acceso a requerimientos burocráticos sin los cuales no pueden emitirse títulos de propiedad, y también ser permite regularizar un territorio que tiene sus núcleos familiares y sus núcleos de vivienda. Eso es lo que se intenta resolver.

La norma puede ser perfectible, pero es el camino que en esta Rendición de Cuentas plantea el Ministerio y -repito- no viola ninguna autonomía. Las deudas no prescriben y los gobiernos departa-mentales tienen todos los mecanismos legales para seguir acciones a fin de cobrarlas. Además, tiene la misma lógica porque no habla de tierras privadas; no da la facultad de que alguien escriture una propiedad privada a partir de una transacción comercial. Está dando a determinados organismos del Estado las facultades para que puedan registrar en esas condiciones. Repito que puede ser perfectible, pero creo que, en el marco de los programas que se llevan adelante, da respuesta a temas insolubles al día de hoy.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: quiero intervenir en mi viejo carácter de profesional contable, como se dice siempre en este ámbito.

Creo recordar que si los bienes son propiedad del Estado, en particular, de un ministerio, por la inmunidad impositiva que tienen los ministerios y las demás figuras estatales, están exonerados de los impuestos, no así de otros tributos. También, si no recuerdo mal, está detallado quiénes son sujetos pasivos de contribución inmobiliaria cuando son poseedores; y por el tipo de redacción del artículo, los que hoy tienen la posesión de algo que es propiedad

del Estado porque todavía no se ha hecho la transferencia, creo que no tienen la calidad de sujetos pasivos del impuesto de contribución inmobiliaria, que -como ya se mencionó- no se está cobrando ni se va a cobrar si esta solución persiste.

Por lo tanto, no debe haber deuda. Ese es el tema que trata de solucionar este artículo, que tendrá fuerza legal igual que cualquier otro que refiera a los controles que se realizan en estos casos. Por ello, creo que es oportuno aprobar este artículo tal como viene.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: lamento informarles que el Estado no está exonerado. Si fuera así, me encantaría, porque la ANEP tiene una inmobiliaria -yo siempre digo que es la inmobiliaria anep.com.uy-, debido a que las donaciones y las herencias yacentes van a ese organismo. Debemos empezar a hablar de los cuatro mil inmuebles que pertenecen a la ANEP. Cuando van a remate, se deducen todos los tributos, no solo la contribución. El impuesto de Primaria se compensa; no sé cómo se hará ahora, que lo recauda la Dirección General Impositiva, pero cuando lo hacía la oficina del impuesto de Primaria, las deudas se compensaban porque el acreedor era el propio organismo.

Las deudas de contribución inmobiliaria por los bienes propiedad de la ANEP son millonarias. Ese criterio no puede ser doctrinario, porque la doctrina y la costumbre no son fuente de derecho en el Uruguay; en otros derechos, como el anglosajón, es así, pero en el nuestro, no.

En consecuencia, ¿todos los millones de dólares que se han pagado y se siguen pagando -cuando hacemos el remate, se descuentan las deudas- no los tendríamos que haber pagado nunca, lo mismo que la luz y los gastos comunes? Supongamos que los gastos comunes son deudas privadas, por decirlo de alguna manera, ¡pero el Estado le cobra al Estado!

¿No discutimos el otro día, en la Comisión -figura en el proyecto de la ANEP-, el problema del certificado del BPS, que la ANEP está pidiendo que no se controle, porque no puede hacer obras debido al atraso en los aportes? ¿Y nos están pidiendo que aprobemos una norma para exonerar el control del certificado común que el BPS expide en dos días y del especial que, a lo sumo, expide en veinte? Entonces, ¿en qué quedamos? ¡Sí que el Estado le cobra al Estado! No digo que esté bien ni mal; digo que sí le cobra.

Olvidémonos de todo eso, porque no hay caso: cuando se viene con una decisión tomada, está bien, cada uno se hace responsable; pero insisto en que agreguen -por favor- el tema de la registración, porque los registros públicos no lo van a inscribir. Exoneran al escribano, pero no al registro público, y -reitero- el funcionario es solidariamente responsable. Insisto: agreguen los registros públicos.

Gracias.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: nosotros queremos proponer algo concreto.

Creo que no podemos seguir en esta discusión; por eso, proponemos que esto pase a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, para evitar mil problemas más adelante y darle una redacción que concuerde con todo. Me parece que así evitaríamos muchos problemas.

Por otro lado, no es cierto que el Estado esté exonerado del pago. La prueba es que la Intendencia de Salto acaba de ganar un juicio a AFE y le cobra la contribución de todos los terrenos que tiene en el departamento.

La propuesta es bien concreta: que se desglose este artículo y pase a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: a esta altura, me preocupa el desconocimiento de algunas normas.

El artículo 463 de la Ley Nº 16.226 establece claramente la inmunidad impositiva del Estado. Exceptúa, por supuesto, algunos entes que tienen otro tipo de actividades, pero el Estado como persona jurídica principal -incluidos los ministerios- tiene inmunidad impositiva. Reitero: tiene inmunidad impositiva, no tributaria, no de tarifas, no de otro tipo de servicios que presta el Estado. Hay inmunidad impositiva para todos los organismos del Estado excepto, como dice el propio artículo, para algunos entes autónomos.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- En discusión la propuesta del diputado Lafluf de desglosar el artículo 203 y enviarlo a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Treinta y uno en ochenta y uno: NEGATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 203, tal como viene de Comisión.

——Cincuenta en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

32.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continúa la consideración del asunto motivo de la convocatoria.

En discusión el artículo 204.

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado Carlos Hugo Pérez.

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señor presidente: no votaremos este artículo.

Tenemos ciertos reparos con respecto a este tema, pero estrictamente relacionados con las denuncias falsas, porque en este caso se garantizaba a la mujer la permanencia en la vivienda y el hombre volaba a la calle. Insisto en que ese era el reparo: las denuncias falsas.

Ahora bien, si efectivamente la mujer es víctima de violencia -es decir, si la denuncia es verdadera-, lo que estamos haciendo es una clara discriminación entre una mujer que, con su familia, en su momento, se incorporó a un plan público para la vivienda y recurrió a un préstamo social o público, y otra que, con su familia, en su momento, apeló al sistema privado, a un préstamo hipotecario privado. El Estado ahora le va a garantizar la permanencia a la mujer víctima de violencia siempre que esté en el sistema público, y la mujer víctima de violencia que llegó a la vivienda por el sistema privado va a quedar absolutamente desamparada.

Entendemos que el Estado tenía algunas dificultades con esto, porque además de garantizar la permanencia en la vivienda, también se buscaban mecanismos para ajustar la cuota a la nueva realidad económica de la mujer. Se reajusta la cuota, lo que se puede hacer cuando la persona está incorporada al sistema público; difícilmente el Estado pueda negociar ese ajuste con el banco privado que le otorgó el préstamo a la mujer víctima de violencia. Por ello, se me ocurre que este artículo debería venir con alguna medida sustitutiva de esta garantía, por ejemplo, un subsidio a la cuota. Si no se puede negociar, la cuota será la misma, pero el Estado podría subsidiar un porcentaje de la cuota del banco privado y garantizarle el derecho a la permanencia en la vivienda y a hacer efectivo el pago.

Si de buenas a primeras a la mujer que se acogió a un préstamo hipotecario privado se la desampara, la ley queda bastante renga.

Por esta causa, no acompañamos este artículo; queremos que se busquen alternativas para amparar también a las mujeres víctimas de violencia, aun cuando hayan accedido a esta a través del sistema privado.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 204, tal como viene de Comisión.

——Cincuenta y siete en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 205.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 206.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 207.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 208.

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señor presidente: por una cuestión de economía de tiempo no queremos pedir la palabra en la consideración de cada uno de los artículos, pero sí hacer algunas consideraciones generales sobre el Inciso.

Antes que nada: el 0,4 % del PBI para invertir en vivienda es un monto absolutamente irrisorio y la expresión más clara de que se deja la resolución del tema de la vivienda al mercado.

Por otra parte, si bien votamos el primer artículo de este Inciso -lo contrario implicaría dejar sin el incremento de $ 1.200.000.000 a las cooperativas-, estos US$ 40.000.000 para dos años, si la vivienda cooperativa cuesta unos US$ 60.000, representan un incremento para 666 viviendas en dos años. Digo esto como una muestra de lo paupérrimo que es el presupuesto para vivienda. Parafraseando al diputado Rubio, el tema de la vivienda es la cenicienta de la inversión pública.

Concretamente, solicitamos el desglose de los artículos 208 y 210, y su envío a la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En cuanto al artículo 208, hicimos algunas consultas porque incluye la palabra "suburbano". Aparentemente, está prohibido pasar de rural a suburbano; tendría que mediar un "potencialmente transformable", porque en ese pasaje se hacen efectivos todos los requisitos del artículo 38, entre otras cosas, que parte de esas tierras pasen al dominio público. Aparentemente, hubo algunas desprolijidades; hay tierras suburbanas que no han cumplido con el requisito, y eso se pretende mejorar. El tema es que se parte de una mala aplicación. Sin embargo, no es exclusivamente por esto que solicitamos el desglose, sino por la oración que dice: "No podrán autorizarse fraccionamientos en suelo urbano, suburbano o en suelo con el atributo de potencialmente transformable […]" -lo que sigue es lo que nos preocupa y nos parece que requiere un poco de estudio en la Comisión- "[…] siempre que generen superficies de uso público destinadas al tránsito […]". O sea, no podrán autorizarse los fraccionamientos en caso de que se abran calles. Gente práctica en el tema nos comentó que esto puede estimular lo contrario a lo que se pretende en las leyes de ordenamiento, en las directrices, porque se va a fraccionar sin abrir calles, o sea, al correr de las rutas y de las calles, lo que hará que las urbanizaciones terminen siendo extensas longitudinalmente. Esto es contrario a lo que se pretende, que es densificar las ciudades, porque después resulta mucho más caro hacer llegar los servicios y porque, una vez hecho el fraccionamiento al correr de la calle o de la ruta, en todo caso, se fraccionará lo de atrás, y eso hará que la cantidad de tierra sea menor y el pasaje de tierra al dominio público, ese 10 % al 20 %, disminuya.

Lo que nos preocupa es la parte que dice: "[…] siempre que generen superficies de uso público destinadas al tránsito […]", porque va a promover los

fraccionamientos sin abrir calles y esto favorecerá el fraccionamiento longitudinal.

Por supuesto que estamos dispuestos a acompañar la iniciativa, pero es necesario revisar este artículo, porque contradice el espíritu de las normas que hemos votado, inclusive, de las directrices nacionales de ordenamiento sobre urbanizaciones. Nos parece que en la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podemos tratarlo con mucha celeridad y votarlo en el correr de este mes.

En cuanto al artículo 210, el espíritu es que las manzanas sean de 100 metros de lado, porque es la distancia que se acostumbra caminar en las ciudades. Ahora se pueden extender a 2 hectáreas, a 20.000 metros cuadrados, porque en algunos casos puede haber una cañada o dificultades para lograr el amanzanamiento de 10.000 metros cuadrados; se nota cierta flexibilidad en la urbanización, y eso es correcto.

El mercado inmobiliario, con un recurso finito como la tierra, no se caracteriza por la asepsia. Hay mucha presión en muchas cosas y puede pasar que, frente a una cañada, el ancho de la manzana tenga 50 metros más la vereda, es decir, 67 metros, y llegue a los 20.000 metros. Eso quiere decir que en las ciudades podrá haber manzanas de 300 metros de largo, lo que contradice todas las directrices de urbanización aprobadas hasta el momento.

Nos preocupan algunos casos, como el que vimos en Maldonado -no sé si no se trata de regularizar este tipo de casos-, en que la Intendencia, con la Junta Departamental, en un acto complejo de gobierno, decidieron dar una calle al emprendimiento de un inversor que creo se llama Grosskopf. La pagó, está claro, pero se le dio. Ese emprendimiento está en más de una manzana.

Por supuesto que hay que tener flexibilidad, pero esto se podría estudiar un poco más en la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para verificar que estas manzanas de hasta 300 metros solo se den excepcionalmente y que no estemos legitimando emprendimientos de más de una manzana sin alguna precaución.

Reitero que nuestra propuesta es que se desglosen y pasen a Comisión los artículos 208 y 210.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- El desglose del artículo 210 se pondrá a consideración cuando lo tratemos.

Se va a votar si se desglosa el artículo 208 y se envía a la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

——Treinta y cuatro en ochenta y cuatro: NEGATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 208.

——Ochenta y dos en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 209.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cuatro en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 210.

Hay una propuesta del diputado Carlos Hugo Pérez de desglosar este artículo y enviarlo a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Treinta en ochenta y ocho: NEGATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 210.

——Ochenta y cinco en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 211.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cuatro en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 212.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y tres en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 213.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y cuatro en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 214.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 215.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y cuatro en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 216.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 217.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y seis en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 218.

——Setenta y cinco en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el aditivo que figura en la Hoja Nº 15, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

——En discusión.

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señor presidente: nuestra intención es avanzar en el tratamiento de la Rendición de Cuentas y dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución, que establece el derecho de todo habitante de la República a una vivienda decorosa. Teniendo en cuenta que algunas cooperativas pagan el 2 % y otras, el 5,11 % por concepto de préstamos; que hay otras que abonan el 5,11 % en unidades reajustables y terminan pagando más que en la banca privada, que cobra en unidades indexadas, y que cooperativas de viviendas por ayuda mutua, con unidades de tres dormitorios, tienen cuotas que superan los $ 11.000, proponemos a la Cámara reducir las tasas de interés de los préstamos para la vivienda social al 2 %. La intención es que no se use el mecanismo de tasa de interés para obtener ganancia en el sistema público, sino que sea para los costos operativos y de funcionamiento.

Esta propuesta no está pensada solo para el cooperativismo, sino para todo el sistema público de vivienda. Entre otras cosas, se propone que sea para núcleos familiares con ingresos menores a 30 bases de prestaciones mensuales.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Gracias señor presidente.

En cuanto a la Hoja Nº 15, que se acaba de fundamentar, ya fue oportunamente presentado en la Cámara un proyecto de ley que trata sobre el mismo asunto, que estuvo radicado en la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

La bancada del Frente Amplio cree que este es un tema bien interesante, pero considera que no corresponde tratarlo en oportunidad de la Rendición de Cuentas. Más allá de que esto es una hoja y no se puede enviar, según el Reglamento, a una comisión, hemos conversado en la comisión multipartidaria a efectos de sugerir al diputado Rubio o a quien esté ejerciendo la titularidad de la banca, que presente un proyecto de ley que contemple esta disposición, con la fundamentación correspondiente. Creemos que el ámbito para debatir este tema es la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, adonde se podrá convocar a las diferentes instituciones financieras públicas a efectos de tener toda la información necesaria para realizar una modificación de esta naturaleza.

No vamos a votar la Hoja Nº 15 por entender que hay que discutir en profundidad esta propuesta en el marco de la mencionada Comisión.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA PEREYRA (Susana).- Señor presidente: acabamos de votar los artículos correspondientes al Inciso "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente". Ahora estamos considerando refuerzos para las cooperativas: de $ 900.000.000 para el 2018 y de $ 300.000.000 para el 2019. Hasta el momento, en el programa de vivienda del Ministerio había disponibilidad de recursos para diez mil viviendas cooperativas. Hoy votaremos recursos para cuatro mil más. Repito: este refuerzo de rubros para el Ministerio

permitirá construir cuatro mil viviendas más, lo que nos parece importantísimo. En esta sala no solo se votó el refuerzo de rubros, sino que también nos preocupamos por la permanencia de la gente en la vivienda, que es mucho más importante que si firma por el 2 %, el 5 % o el 7 %. De tomas maneras, no me opongo a analizarlo, porque creo que habría que estudiarlo, al igual que el IVA a los materiales de construcción.

Nosotros, que sabemos que los fondos del Ministerio y del país son finitos, nos preocupamos por la permanencia, porque entendemos que a la vivienda cooperativa acceden las familias que no tienen capacidad de ahorro y que hacen el esfuerzo de construir por ayuda mutua.

Contemplamos muchísimo a las cooperativas porque sabemos que es una solución muy importante para los trabajadores del Uruguay. Cuando se habla de catorce mil viviendas cooperativas significa que alrededor de cincuenta mil uruguayos van a tener solucionado el problema de la vivienda, lo que no es poca cosa.

No se puede con todo a la vez, y con el proyecto de subsidio a la cuota preferimos priorizar el refuerzo de rubros y la permanencia. Nadie puede ser echado de una cooperativa si se queda sin trabajo o si desaparece alguna de las personas que hacen un aporte importante al ingreso de la familia. Todo eso está contemplado y se votó en esta Cámara.

Por lo tanto, en esta Rendición de Cuentas, que es seria -como dijeron los compañeros-, se hizo todo lo posible para reforzar los rubros del Ministerio y hacer un 40 % de viviendas cooperativas lo que, reitero, no es poco.

Además, comparto el planteo de mi compañero Sánchez en cuanto a tomar el asunto, porque lo tenemos a estudio en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Incluso, hemos recibido a delegaciones de Fucvam, porque estamos preocupados por los porcentajes que se cobra a las cooperativas. Conozco la historia y sé que algunas firman por el 7 %, el 5 % o el 2 %, pero cuando en la familia hay inconvenientes con los ingresos, los que firmaron por esos porcentajes podrían quedarse sin vivienda si no hubiéramos atendido la permanencia con la ley de subsidio a la cuota que votó nuestra fuerza política y que acompañaron algunos integrantes de otros partidos.

Entendemos el planteo de la federación de cooperativas y las necesidades que hay. Hoy es posible apostar a que haya cuatro mil viviendas cooperativas más -lo que no es poca cosa- y contemplar a cincuenta mil uruguayos y uruguayas que no tienen capacidad de ahorro y hoy pueden acceder a una vivienda digna.

Gracias, señor presidente. Es cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Sabini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 15, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

——Treinta y cuatro en ochenta y seis: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", que comprende los artículos 219 a 233, inclusive.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: propongo votar en bloque todos los artículos del Inciso 15, desglosando el artículo 221.

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Carlos Hugo Pérez.

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señor presidente: solicito que se desglose el artículo 225.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: propongo que se vote artículo por artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Entonces, votaremos artículo por artículo.

En discusión el artículo 219.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 220.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y tres en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 221.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 222.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis por la afirmativa. AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor presidente: quiero manifestar mi preocupación por el articulado del Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", porque se han omitido asuntos prioritarios que en su gran mayoría constituyen un verdadero drama para miles de compatriotas, que son los en estos momentos más necesitan el amparo del Estado. Me refiero a la ausencia de abordaje de los casos de personas en situación de calle.

Sabemos perfectamente que no contamos con datos oficiales, porque no hay un registro ni un estudio al respecto. Es sorprendente que no se aborde esta temática teniendo en cuenta que el director nacional de Policía, inspector Mario Layera, hizo referencia al problema; también se manifestó al respecto el

presidente del Frente Amplio, doctor Javier Miranda y, recientemente, el expresidente Mujica mostró su preocupación por esta situación. Sin embargo, no existen datos oficiales.

Nosotros hemos denunciado esta situación y hace muy pocos días la señora subsecretaria confirmó lo que lamentablemente vemos a diario. Es muy diferente la mirada que tienen las autoridades del Mides de la que tenemos los ciudadanos comunes. Ellos dicen que se trata de una cultura diferente. Evidentemente, lo que buscan es neutralizar ese drama tan terrible que viven tantos uruguayos.

Las personas que hoy están a la intemperie merecen todo el respeto. Las autoridades que tienen a cargo estas políticas, con esa mirada diferente, han manifestado públicamente que estas personas están en la calle porque se aburren de estar dentro de sus casas; dicen que se debe a que tienen una cultura diferente y no a que sean pobres. Si no son pobres y están en la calle, supuestamente, es porque están aburridos de estar en sus casas.

Nosotros votamos afirmativamente el artículo 222, pero debemos manifestar que encontramos tres problemas graves que atañen al Sistema Nacional Integrado de Cuidados que nos preocupan, tanto a nosotros como a nuestros colegas del oficialismo, y hemos tratado de buscarles pronta solución.

El primero de ellos refiere a la capacitación. Los usuarios han denunciado que los cuidadores no están capacitados para atender determinadas patologías; no hay que olvidar la diversidad de casos que deben enfrentar. Las autoridades nos han manifestado que en muchos lugares del interior no existen empresas para realizar capacitación ni para una real fiscalización del desempeño laboral de los cuidadores.

Ahora me referiré a la segunda problemática. Sabemos que algunos usuarios pueden solventar una parte de los costos que implica contratar a un cuidador, pero solicitamos que se considere que la mayoría de las personas a las que se brinda este servicio se encuentran en una situación económica muy complicada. En caso de despido, el usuario debe encargarse de la indemnización correspondiente al cuidador. ¿Qué sucede con las personas que no pueden enfrentar esa erogación? De cierta manera, se está desvirtuando el carácter social de este servicio y, a la vez, generando una delicada y compleja situación de dominio del trabajador sobre el usuario, ya que este último no puede prescindir de sus servicios por la imposibilidad de afrontar los gastos que implica la indemnización por despido. En este caso, domina el sano sobre el enfermo.

El tercer problema grave, que no podemos dejar de mencionar, es la situación de los hogares de adultos mayores, de ancianos o residenciales.

El secretario nacional de Cuidados, sociólogo Julio Bango, informó en la Comisión que existen 1.116 hogares, pero solo 20 están habilitados y 104 se encuentran en situación crítica y muy crítica. Estamos hablando de 1.154 personas que viven en condiciones deplorables; eso fue manifestado por las autoridades.

Esto es muy grave. No se pueden cumplir los controles, tampoco se está abordando la problemática y no vemos que se planteen soluciones. Lo más

triste de esta situación es que cuando se logre llegar a esos residenciales, lo más probable es que más del 50 % de esas personas ya haya fallecido. Son personas; no son números.

No podíamos aprobar este artículo sin hacer referencia a estas tres graves situaciones. Es necesario actuar con celeridad.

A veces parece que todo se trata de cifras. Los tiempos del Estado no son los tiempos de la gente, y no podemos olvidar que se trata de seres humanos, de vidas.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 223.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: entendíamos que nos estábamos refiriendo exclusivamente al artículo 222 y no a una evaluación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y, en general, a toda la tarea del Ministerio de Desarrollo Social.

Con respecto al artículo 223, proponemos una corrección: en lugar de "Sistema Nacional de Cuidaos" debe decir "Sistema Nacional de Cuidados".

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 223, con la corrección propuesta por el señor diputado Asti.

——Sesenta y tres en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

——En discusión el artículo 224.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y dos en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: hemos votado negativamente los artículos 223 y 224 porque entendemos que es demasiado lo que se crea; me refiero a secretarías, dependencias, departamentos y otro sinfín de cosas.

El artículo 223 refiere a articular, coordinar, consolidar, expandir y supervisar, y el artículo 224, a organizar, dirigir, supervisar y llevar. Nos parece que es demasiado lo que se dice sin decir absolutamente nada, y se sigue agregando cosas cuando lo que hay que hacer es cumplir lo que se tiene que cumplir.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 225.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y ocho en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 226.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 227.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor presidente: no voy a hablar sobre la gestión del Mides, pero sí de lo que estamos votando, porque quiero manifestar que, desde 2011, venimos instalando consejos consultivos y eso me preocupa enormemente, pues el desempeño no ha sido el esperado. Se instalan consejos consultivos con más organizaciones sociales, con más asesores. Ya contamos con secretarías para los temas afro y de diversidad sexual en la Presidencia de la República, en el Mides. Tenemos unidades afro en prácticamente toda la Administración central. En el Ministerio de Educación y Cultura tenemos la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.

Nosotros sí votamos este artículo, pero esperando que esos consejos consultivos cumplan con sus cometidos, porque los que tenemos instalados realmente no lo han hecho, y pido que me permita manifestarlo.

A pesar de tener comisiones y consejos consultivos, en el caso concreto del llamado a funcionarios para el Banco de Seguros del Estado se dio un acto de racismo institucionalizado que nos llena de vergüenza a todos. Y también está el caso más reciente del joven afrodescendiente con problemas de discapacidad que fue castigado por sus compañeros, ante lo cual, en las redes sociales se manifestó públicamente: "Así tratamos a los negros en Uruguay".

Estos hechos ocurrieron, pero las instituciones mencionadas trataron la cuestión con mucha liviandad. Vivimos esa situación tan dura cuando el Ministerio de Desarrollo Social estaba conmemorando, precisamente, el mes de los afrodescendientes.

En esta Rendición de Cuentas no encontramos incentivos o acciones favorables para el colectivo afro o la diversidad sexual, y lo digo como integrante de uno de ellos. Espero que los consejos consultivos que estamos votando terminen con lo que yo siempre menciono, que es la limosna tarifada que nos toca a los afrodescendientes y a los colectivos de la diversidad sexual, y no en cargos y asesores.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 228.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 229.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y tres en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

35.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continúa la consideración del asunto en debate.

En discusión el artículo 230.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta y tres en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 231.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y cinco en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 232.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 233.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor presidente: hemos votado afirmativamente, pero nuestro voto es crítico.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- La Mesa ruega hacer silencio para escuchar a la señora diputada.

Además, tenemos una moción muy importante para votar.

Puede continuar la señora diputada Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Gracias, señor presidente.

Decíamos que nuestro voto es crítico porque estamos preocupados por la falta de recursos para implementar la ley. El tema de la violencia contra las mujeres basada en género es de suma sensibilidad para todos, y no dudamos un segundo en apoyar esta iniciativa de la fuerza de gobierno, porque este problema va más allá de los colores políticos.

La Ley Nº 19.580 se votó en esta misma sala el 22 de diciembre de 2017, y fui miembro informante del proyecto. A casi ocho meses de ser promulgada, debemos decir con desazón que nos sentimos profundamente defraudados y preocupados.

Hubo quienes no votaron esta ley, que en su momento manifestaron que era un acto de demagogia y de incoherencia, pero nosotros sabemos perfectamente que no fue así. Por eso, apelo a la sensibilidad y a la reflexión de nuestros colegas oficialistas, que se han comprometido con dicha ley, para buscar la forma de implementarla.

Muchas gracias, señor presidente.

SESIÓN DEL DÍA JUEVES 16/08/2018

4.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017 (Aprobación)".

Continúa la discusión particular.

Corresponde iniciar el tratamiento de la Sección V "Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República".

Se pasa a considerar el Inciso 16 "Poder Judicial", que comprende los artículos 234 a 245, inclusive.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- ¿Me permite, señor presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: solicito que se voten en bloque los artículos 234 a 245, desglosando los artículos 241 y 243.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar.

——Setenta y seis en setenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 241.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 243.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: quiero señalar que el artículo 243 -que habilita a la Suprema Corte de Justicia a destruir expedientes judiciales en papel o a transferirlos al Archivo Histórico Nacional- que acabamos de desglosar fue modificado en la Comisión.

Como todos sabemos, esos archivos son añosos y ha aumentado su volumen, por lo que su mantenimiento implica un costo adicional. Por esa razón, planteamos la necesidad de que el Archivo General de la Nación interviniera en ese proceso y, en ese sentido, hicimos la modificación. Pero aún persisten algunas dudas sobre este artículo porque no se ha perfeccionado totalmente.

La bancada del Frente Amplio entiende que hay que trabajar más este tema por el volumen de los archivos, y por eso no cree que la redacción actual ni la enviada sean satisfactorias.

Por lo tanto, no vamos a votar este artículo, con la esperanza de que en el futuro se encuentre una mejor solución, porque estamos hablando de archivos muy valiosos para los investigadores y para el conjunto de la sociedad. Tenemos que buscar la forma de resolver esta situación, tanto en el proceso de digitalización como en otros aspectos.

Reiteramos que no vamos a votar este artículo por las razones expuestas, y no porque no creamos que no haya que trabajar en ello y buscarle una solución.

Nos parece que el intento de redacción que hicimos en la Comisión no resuelve el problema de fondo. Entonces, frente a la duda, preferimos retirarlo de la Rendición de Cuentas.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: no tenemos inconveniente en proceder en el sentido que sugiere el señor diputado Alejandro Sánchez. Pero con relación al tratamiento del Inciso Poder Judicial, el Partido Nacional solicita la reconsideración del bloque de artículos

votado, a los efectos de formular algunas consideraciones.

Pedimos disculpas a la Cámara, porque cuando se votó el bloque, interpretamos que estábamos votando el procedimiento, pero ya nos estábamos pronunciando sobre el fondo del asunto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- De acuerdo con lo propuesto, se va a votar si se reconsidera el bloque que comprende los artículos 234 a 245, exceptuando los artículos 241 y 243. El artículo 241 ya fue aprobado y el artículo 243 está pendiente de aprobación.

——Ochenta en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

Se reabre la discusión del bloque mencionado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: en virtud de lo que expresamos con anterioridad y de que ninguna de las bancadas presentó artículos aditivos, este es el momento de hacer algunas consi-deraciones generales sobre el articulado proveniente de la Comisión y sobre los que no aparecen en el Inciso 16·

Lo que votamos en la Comisión son modificaciones positivas, que no tienen costo presupuestal, salvo la referida al servicio odontológico, que figura en el último artículo del Inciso. En general, son disposiciones referidas al sistema de registro de las audiencias a través de audio y video, lo que nos parece muy bien. Ese tema se arrastra de instancias anteriores. Por lo tanto, es oportuno proceder en ese sentido.

Sin embargo, lo que subyace en el conjunto de artículos que estamos comentando es la circunstancia de que, una vez más, el Poder Judicial es claramente soslayado por el Gobierno nacional en cuanto a las contemplaciones presupuestales.

Hay aspectos sobre los cuales el Poder Judicial ha insistido con mucho énfasis en cada instancia presupuestal. Me refiero, por ejemplo, al desarrollo de los centros de mediación en todo el país, que ha sido una experiencia muy útil y provechosa para establecer mecanismos eficientes y eficaces a fin de superar conflictos y litigios.

Otro de esos aspectos es el relativo a la capacitación de los magistrados en las causas de derechos humanos. Todos los años el Poder Judicial insiste en solicitar recursos a los efectos de financiar esa actividad en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Por razones que nunca se aclaran definitiva ni concretamente, el oficialismo, la bancada del partido de gobierno, se resiste a otorgar esos recursos -que no son muchos-, a pesar de que esto implica cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, en particular, el caso Gelman. Resulta bastante inexplicable ese temperamento del Gobierno.

Además, diría que en esta oportunidad hay un aspecto, a mi juicio muy profundo, que estuvo en debate en la discusión general de la Rendición de Cuentas, cuando desde nuestra bancada -desde otras también- señalamos un desconocimiento de los órganos de control, de los órganos jurisdiccionales y, yo agregaría, en este caso, una actitud de parte del Gobierno de enorme irresponsabilidad en cuanto al incumplimiento de las leyes vigentes y a avanzar o persistir en un camino de presunto reconocimiento de derechos que después, por la vía de la escasez o de la inexistencia de recursos presupuestales, se terminan frustrando o postergando.

Por cierto, me estoy refiriendo a la Ley Nº 19.580, llamada ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Esto estuvo en debate en la discusión general. Cuando hablamos de este tema, es decir, el presupuesto del Poder Judicial, la bancada del partido de gobierno nos dijo -me quedó una espina que voy a tratar de sacarme ahora- que muchos de nosotros, que en

ocasión del tratamiento de esa ley, en el mes de diciembre, en la Cámara de Diputados no la votamos, en apariencia no estamos facultados para hablar del tema. Estamos proscriptos o deberíamos estarlo, en el sentido de que no tendríamos derecho a opinar sobre la circunstancia de que el Poder Ejecutivo no proyecte un incremento presupuestal de un solo peso a efectos de financiar el cumplimiento de esta ley.

Rechazo categóricamente esta afirmación. La rechazo porque quienes no votamos esta ley, cuando era proyecto, en el mes de diciembre, lo hicimos por la sencilla razón de que discrepábamos con algunos de sus contenidos, en particular, lo relativo a lo que podríamos llamar el derecho sustantivo. Lo que ahora estamos reclamando es que, en la medida en que la ley está vigente, se cumpla en todos sus aspectos. Uno de esos aspectos es de imposible cumplimiento: el que tiene que ver con la posibilidad de que la mujer que sea agredida o víctima de violencia tenga acceso a la Justicia, de que pueda recurrir a la Justicia y reciba la respuesta que la ley establece. El país no está en condiciones de que eso acontezca; el Poder Judicial no está en condiciones de que eso acontezca.

Entonces, me parece que hasta tiene un dejo autoritario postular que quienes por determinados motivos en otra instancia del debate parlamentario asumimos cierta actitud, ahora no podemos denunciar este hecho que, repito, rompe los ojos. ¿Qué es lo que se nos se nos está trasmitiendo? ¿Que hay cierta dosis de hipocresía de nuestra parte porque no votamos la ley en su debido momento y ahora reclamamos los recursos?

Yo diría que en esos términos están muy mal planteadas las cosas. Mucho más hipócrita es aquel que promueve con énfasis, con decisión, con compromiso y con fervor determinada solución –como la que promueve la bancada del partido de Gobierno-, y después no está en condiciones de proveer los recursos y dar el soporte material, a efectos de que el ejercicio de esos nuevos derechos y de esas nuevas protecciones sea real y efectivo. Eso es lo que está pasando.

Llamo a la bancada del partido de Gobierno, primero, a que tenga un poquito más de humildad; después, a que sea un poquito más realista y tenga una importante dosis de autocrítica.

Cuando razonamos públicamente que el Capítulo V de la ley de violencia de género era inaplicable, no hicimos más que anunciar algo que ratificaron después en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, tanto la presidenta de la Suprema Corte de Justicia como el fiscal de Corte. Esa es la realidad. Todos asistimos a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y fuimos testigos de lo que estoy afirmando.

El Poder Judicial dijo que necesitaba $ 943.000.000 -US$ 30.000.000- para crear treinta y tres juzgados; no le dimos un solo peso para esto. La Fiscalía General de la Nación -lo vamos a tratar más adelante- manifestó que necesitaba $ 306.000.000 -US$ 10.000.000- para crear, por lo menos, ochenta cargos de fiscales; tampoco le dimos un solo peso. Los dos cargos de fiscal que se crean no tienen nada que ver con la ley de violencia de género, sino con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal.

Es más: con este proyecto de ley de Rendición de Cuentas retrocedemos en cuanto a la violencia de género, y no solo porque constatamos que hay una ley que no se cumple. Como dijo la Intersocial Feminista, "es una cáscara vacía". No lo dijimos desde el Partido Nacional; lo dijeron desde la sociedad civil las organizaciones comprometidas con esta causa, y lo dijeron en el ámbito de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

También estamos retrocediendo porque en la desesperación por cumplir en algo lo que aquí se establece y al no tener plata para hacerlo, la Fiscalía General de la Nación –lo discutiremos cuando analicemos su

presupuesto-, propuso retirar a las fiscalías de los procesos de prevención, propuso transformar a las fiscalías de violencia doméstica en fiscalías penales, a los efectos de dar una dosis mayor de respuesta penal. Pero cuando se produzcan conflictos y se deba proteger a las mujeres agredidas, las fiscalías no van a intervenir más. Lo dijo el fiscal Díaz hace poco en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

Entonces, entre la realidad material y la realidad virtual, hay un abismo. Eso es lo que venimos a denunciar. No somos nosotros los que estamos proponiendo que se postergue el Capítulo V. Está quedando postergado por los hechos; lo postergan el Frente Amplio, el Gobierno, al no dar la plata. ¡Digamos las cosas como son! Estoy tratando de describir hechos, de ser absolutamente objetivo.

Aunque la ley fuera espantosa -no la califico y no quiero reabrir el debate-, ¡es la ley que el país se dio, y se tiene que cumplir! Y si la ley establece que hay medidas de protección y medidas cautelares que los jueces deben adoptar en un plazo de setenta y dos horas, ¡se deben adoptar en un plazo de setenta y dos horas!

La doctora Elena Martínez nos dijo: "Esto es lo mínimo; es la hipótesis de mínima. A no creer que es la solución ideal que después se puede rebajar. Nosotros ya rebajamos a la hora de hacer las proyecciones y los cálculos". Eso nos lo dijo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, asumamos la responsabilidad del tema que estamos abordando o, en todo caso, del que no abordamos, mirando hacia el costado, soslayándolo, haciendo de cuenta de que lo que pasa no pasa o de que esto en realidad no existe. ¡No! ¡Existe! ¡Es real! Lo tenemos allí y representa para el país una involución porque, además, vamos por un camino muy peligroso…

——…que es el de generar una mayor desigualdad, particularmente entre las mujeres que necesitan la asistencia del Estado. Esta situación nos va a conducir a que la Justicia pueda atender algunos casos y otros no. Como dijo el doctor Cavalli: "De las setenta u ochenta denuncias que se reciben a diario, podremos atender quince o veinte". De manera que -como se dijo en la Comisión- estaremos tratando en forma desigual a las mujeres, y habrá mujeres de primera y mujeres de segunda.

A esto nos ha conducido la política del Frente Amplio en materia de género con la aprobación de una ley inaplicable y con la omisión que ahora se comete en la instancia de la Rendición de Cuentas.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: gran parte de lo que iba a decir lo ha expresado mucho mejor que yo el señor diputado Abdala. A mí también me concierne porque, por razones técnicas, no voté la ley a la que se hacía referencia. No voy a reabrir ese debate, pero en gran parte de la intervención que hicimos en esa oportunidad insistimos en que si esa ley se aprobaba, sería absolutamente inaplicable. Así lo dijeron en la Comisión la Asociación de Magistrados del Uruguay y la cátedra, pero eso no importó: los invitamos y después no los escuchamos y seguimos para adelante.

Decimos con la mejor intención -nadie tiene mala intención; por lo menos yo no la tengo-: discrepo rotundamente -lo digo cuando puedo- con esta forma de enfocar los temas en la sociedad uruguaya. El concepto de amigo-enemigo; de que "Si vos pensás distinto a mí, te descalifico"; o de que "Dejás de ser mi adversario para ser mi enemigo", nos está haciendo mucho mal y nos ha llevado a la mayoría de los problemas que tiene el país. Los problemas no son solo económicos; en definitiva, la economía son números. Hay gente muy capaz en el área económica, algo que siempre he reconocido, pero estas cosas que hacen a la calidad humana necesitan plata.

¿Cuál es el problema? Para mí el problema es que hay una gran hipocresía. Sobre todo -lo digo con todo respeto-, me parece que muchas mujeres, incluso legisladoras, entran en contradicción o en una disociación al hacer grandes discursos y manifestaciones en los medios de comunicación. ¡Acusan a la Suprema Corte de Justicia de ser machista porque la mayoría son hombres! ¡No! ¡La mayoría de las juezas son mujeres! ¡La presidenta de la Suprema Corte de Justicia es mujer, y no es la primera! Entiendo, modestamente, que flaco favor le hacemos al estado social del derecho uruguayo si queremos entender lo que nos pasa por el género; por eso no estoy de acuerdo con esas políticas. La cosa es mucho más grave.

¡Era evidente que esto iba a pasar! Quiero dejar sentado en la versión taquigráfica, como he hecho sistemáticamente desde 2015: yo no atribuyo intenciones, porque eso no es correcto cuando uno es profesional; me limito a los hechos. Cuando debatimos acerca de la asignación de recursos en oportunidad de los presupuestos o de las rendiciones de cuentas, siempre surge la discusión de si la asignación es bianual, pero eso no importa. Esta es la primera vez en la historia del Uruguay -desde 2015 a la fecha- que no se incrementa el presupuesto al Poder del Estado que es el gran controlador de todas las actividades y conductas públicas y privadas.

Tampoco se le incrementó a los otros organismos de control: ni a la Corte Electoral, ni al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni al Tribunal de Cuentas. Hay algunas corrientes doctrinarias de constitucionalistas que consideran que, por sus facultades, estos organismos son algo muy parecido a un Poder del Estado.

¿Puedo llegar a la conclusión de que hay una decisión política de no querer controlar lo que se hace? ¡Sí, puedo! ¿Eso es atribuir intenciones? ¡No! Eso es limitarme a analizar lo que se hizo en el presupuesto.

Dicen: "En el presupuesto hay prioridades". ¡Claro que hay prioridades! ¡Obviamente que las hay! Ahora bien: si quiero un Estado transparente, si quiero cuidar el estado social del derecho, si quiero cuidar la república, si quiero cuidar, precisamente, que la plata no se gaste en forma incorrecta y que no haya controles con respecto a dineros públicos malversados o malgastados, debo tener fuertes sistemas de control.

En consecuencia, estamos poniendo las cosas en su lugar. Este Poder del Estado, el Poder Judicial, debe tener recursos. ¡Más que muchas cosas a las que les estamos destinando millones de dólares y todavía estamos queriendo entender por qué diablos lo estamos haciendo!

¿Será primitivo de mi parte? De repente, sí; ¡me dicen tantas cosas! Pero antes de tener un Antel Arena, ¿no era prioritario el Poder Judicial? No sabemos si el Antel Arena cuesta US$ 80.000.000 o US$ 90.000.000 o si va a terminar costando más de US$ 100.000.000; no sabemos si es verdad lo que nos dicen que va a costar. Tendremos que investigar, pero ¡claro! después no tendremos fiscales ni jueces para investigar. ¡Ni qué hablar de la utilización política de esas cosas! ¿El Poder Judicial no era más prioritario?

Me lo pregunto como ciudadana ignorante, absolutamente ignorante. ¡Sentido común, por favor! Lo digo, siguiendo a Eduardo Couture, el gran procesalista uruguayo, traducido a decenas de idiomas. ¡Las normas de la sana crítica, las normas del sentido común son las que nos tienen que mover! Inclusive, cuando se indica a los jueces cómo tienen que juzgar la prueba, ¿con respecto a qué lo hacen? ¡Con respecto a las normas de la sana crítica, del sentido común!

Si no se da dinero a los órganos de control, de arranque -voy a insistir, y esta es la última oportunidad en el ámbito de la discusión de la ley de Rendición de Cuentas- va a pasar lo que sucedió en el año 2015,

que ni siquiera se hizo mención al Inciso, de forma deliberada y humillante para el Poder Judicial. Ni qué hablar de todas las discrepancias, peleas, críticas y menosprecios permanentes de personas que ocupan cargos políticos de designación directa -nadie los votó sino que forman parte, legítimamente, de un Poder Ejecutivo que designó el presidente de la República, en uso de sus facultades-, denigrando y diciendo cualquier cosa de la Suprema Corte de Justicia.

Miren, en este país hubo una sola oportunidad en la historia del siglo XX y en lo que va del XXI -agregamos esto- en la que se menospreció a la Suprema Corte de Justicia, y fue durante la dictadura. Primero, se creó un ministerio de justicia. En un futuro podremos discutir si es o no necesario, pero el ministerio de justicia se creó durante la dictadura para controlar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Saben una cosa, de la que a veces nos olvidamos? ¡Hasta se le cambió el nombre en la dictadura! Se le sacó el "suprema" y se pasó a llamar Corte de Justicia.

Bueno, yo no hago comparaciones simplistas, pero tengo el derecho de decir, como ciudadana y contribuyente, cómo en un gobierno democrático se menosprecia a un Poder del Estado que es tan importante para la sobrevivencia de la República y la democracia.

En el Uruguay, señor presidente, quienes pretenden evitar los controles tienen una dificultad: un Poder Judicial pobre pero independiente. Entonces, se trata de hacerlo más pobre, para ver si lo pueden hacer menos independiente. Siempre se recurre a los ejemplos que vienen de Argentina. Ayer me aburrí de escuchar cosas de Argentina, donde sucede al revés: los jueces son designados políticamente, según los presidentes de turno. Acá no sucede así. Entonces, hay que controlarlos de otra manera.

La verdad es que, como ciudadana, me dio pena escuchar, no lo que decía la presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctora Elena Martínez -es un orgullo que esté al frente de la corporación, como sucedió con los otros presidentes, sean hombres o mujeres, porque lo que importa es que sean capaces; no me interesa si son trans o gais, solo que sean capaces-, sino la especie de catarsis que hizo con los legisladores, que sabía la entendíamos cuando hablaba de las cosas que no pueden hacer. Como es muy responsable y una excelente profesional del derecho, se sentía responsable de no poder responder a las exigencias y a las necesidades de la sociedad y la ciudadanía. Ella sabe que ese Poder tiene en sus manos el derecho y las libertades de la gente. Los constituyentes, cuando imaginaron la República Oriental del Uruguay, pensaron y crearon un Poder Judicial absolutamente independiente.

Ahora, si soy pobre, soy menos independiente. Si tengo menos dinero, soy menos independiente, por una razón muy sencilla: no puedo hacer las cosas que considero que tengo que hacer.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA LIBSCHITZ (Margarita).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA LIBSCHITZ (Margarita).- Señor presidente: quiero enfocarme en la ley. En diciembre, cuando la discutimos, todos y todas nos centramos en que era una ley que, como sociedad, nos iba a costar aplicar, ya que la violencia contra las mujeres está radicada culturalmente en todos nosotros y todas nosotras. ¡Claro que faltan recursos para aplicarla! ¡Faltan muchos recursos! Pero el discurso que desde principios de año se está llevando adelante -primero desde la Suprema Corte de Justicia, con el expresidente Chediak, y después con Elena Martínez-, diciendo que la ley no se iba a poder aplicar, más allá de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia se retractó en la Comisión, es un discurso derrotista,

que no aporta a la solución ni a un cambio real en las políticas relativas a la violencia contra las mujeres.

¡Claro que falta! Este presupuesto es muy pobre en cuanto a los recursos para aplicar la ley, pero faltan recursos para generar políticas de vivienda hacia las mujeres víctimas de violencia, faltan recursos para las políticas sociales y de acompañamiento a las mujeres víctimas, a sus hijas e hijos. Faltan un montón de recursos, pero no faltan en el Poder Judicial. Es cierto que faltan recursos, pero no necesariamente en dicho Poder del Estado.

En realidad, lo que va a hacer el Poder Judicial es reasignar y redistribuir las denuncias en los juzgados especializados a crearse. Habrá juzgados penales que dejarán de recibir esas, que van a pasar a los juzgados especializados; habrá juzgados laborales que dejarán de recibir denuncias, que van a pasar a los juzgados especializados; habrá juzgados de familia que dejarán de procesar gran cantidad de las denuncias que se realizan, ya que estas van a pasar a los juzgados especializados.

Entonces, los recursos se necesitan, pero no es real la catástrofe de la que se habla desde el Poder Judicial, diciendo que la ley no se podrá aplicar por falta de recursos. En la Comisión se preguntó a la señora ministra y a sus asesores qué estudios habían hecho sobre las denuncias que pasarán de un juzgado a otro, para tener una referencia de cuántas serían. Se habla de dieciséis nuevos juzgados a crearse en Montevideo. Cuando preguntamos qué tipo de denuncias les pasarían a esos juzgados y en qué se basaban para decir que serían dieciséis y no diez o cuarenta y cinco, no hubo respuesta. Se dijo que había un estudio, con sus números, pero no lo hay, porque dos días antes la respuesta oficial de la Suprema Corte de Justicia a la Intersocial Feminista, que fue mencionada también en sala, fue que no existía.

Por ende, decir que la falta de recursos trancará la aplicación de la ley es trabajar en contra de la aplicación real de esta ley, que no es un retroceso, sino un gran avance para la calidad de vida de las mujeres, niñas y niños de este país.

Así que hablemos de falta de recursos, pero no he escuchado decir, desde ninguna banca de la oposición, dónde hay que aplicar recursos que, ciertamente, no es en el Poder Judicial.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Saludamos a los alumnos del tercer año del Liceo Nº 18 de Montevideo, que se encuentran en la segunda barra. ¡Bienvenidos!

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: más que aclarar, quiero dejar constancia, sin ánimo de prolongar la discusión -tenemos mucha tarea por delante-, de que el Partido Nacional confía plenamente en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia.

Lo que se nos dijo categóricamente en la Comisión -figura en la versión taquigráfica- es que la estimación presupuestal que se nos presentó responde al trabajo de una comisión, que encabezó el doctor Cavalli, un magistrado muy serio, ministro de los tribunales de apelaciones de familia y fervoroso defensor, no solo de la política de género y de la protección de la mujer, sino de esta ley, no de cualquier ley de violencia de género, sino de esta, de la que aprobó el Parlamento.

Se nos dijo que la proyección que esa comisión realizó y presentó al Parlamento era, como expresé antes, una hipótesis de mínima. En realidad, la comisión había elaborado otra propuesta presupuestal bastante más ambiciosa, que era la solución ideal que conducía a la prestación de un servicio mucho más ambicioso, más

completo, mucho mejor. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, con una dosis de realismo importante, resolvieron recortar o restringir esa propuesta y establecer otra, que era la mínima indispensable para empezar a funcionar. Eso figura en la versión taquigráfica.

Entonces, inferir o sostener que la Suprema Corte de Justicia actuó con deshonestidad, que aprovechó esta circunstancia para insinuar que la ley es inaplicable, para sacarse la ley de encima, porque no la comparte o tiene una visión diferente con relación a estos temas -se haya afirmado en estos términos o se haya insinuado en términos diferentes-, es otra cosa. Ese es el concepto que queda flotando en esta sala, cuando estamos discutiendo este tema.

Rechazo absolutamente esa visión. Creo que la Suprema Corte de Justicia actuó con absoluta honradez administrativa, con total honestidad intelectual, con sentido profesional y con conciencia de lo que le corresponde hacer, que es ejercer un Poder del Estado de primera importancia, como sin duda es aquel que administra la Justicia en el Uruguay.

Por tanto, estamos ante un problema serio, que no se soluciona ni elude echando la culpa a otro Poder del Estado. Todos los poderes tenemos que asumir la cuota parte de responsabilidad que nos corresponde. En esto, le cabe mucha responsabilidad al Poder Ejecutivo, que envió el proyecto de ley original y, también, al Poder Legislativo, que en la definición de este asunto actuó con imprudencia. ¿Por qué actuó con imprudencia? Por el contenido y el alcance de la ley que aprobó y porque en la Cámara de Diputados no hubo oportunidad de discutir el tema más que una semana. Este proyecto de ley ingresó en determinado momento y se aprobó a la semana siguiente. Salvo los legisladores que integraban la comisión que analizó la iniciativa durante esa semana, los demás vinimos a notificarnos de ella durante el tratamiento en el plenario. A mi juicio, es una imprudencia, y así lo dijimos en su debido momento.

Por ende, se trata de actuar con madurez y de asumir los hechos en toda su rotundidad y, también, la responsabilidad que corresponde, sin echar la culpa a los jueces ni a la Suprema Corte de Justicia.

El Partido Nacional cree en la separación de poderes como un principio cardinal de la democracia y cree en el Poder Judicial, en la honestidad de sus procederes y en el sentido de responsabilidad con que ejerce su función jurisdiccional. Por lo tanto, lo respalda absolutamente en esta instancia, así como en todas las demás.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Gracias, señor presidente.

En las consideraciones generales acerca de este Inciso queremos hablar de lo que ha está siendo una política de los gobiernos del Frente Amplio.

Está muy claro que desde el año 2005 el Poder Judicial no ha recibido los aumentos que ha reclamado para funcionar de buena manera. Esto se ha reiterado en el tiempo: en la Ley de Presupuesto Nacional y en cada una de las rendiciones de cuentas, ya que el Poder Ejecutivo no incluyó todo el mensaje del Poder Judicial.

Crecí escuchando a algunos actores políticos del oficialismo hablar de la autonomía financiera del Poder Judicial. Inclusive, se llegó a mencionar la posibilidad de utilizar algunos de los instrumentos que contiene la Constitución para reformarla y que hubiera un plebiscito por el cual decidiera la gente. Siempre se escucharon argumentos en ese sentido. También se juntaron firmas para lograr esa tan mentada autonomía financiera del Poder Judicial.

Sin embargo, cuando el Frente Amplio llegó al Gobierno en el año 2005 parece que

todos esos reclamos quedaron por el camino. Este proyecto de Rendición de Cuentas nuevamente está enmarcado dentro de la política de debilitamiento de los órganos de contralor y jurisdiccionales. Obviamente, el debilitamiento no solo se produce en el Poder Judicial; como aquí se ha dicho, también se produce en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Jutep. Esto se ha reiterado en cada una de las instancias presupuestales, y esta Rendición de Cuentas no es ajena a esa política.

Digo que esta es una política que se ha llevado adelante porque cuando sucede una vez, puede pasar, por ejemplo, por cuestiones presupuestales. Cuando sucede otra vez, puede ser casualidad, pero cuando sucede una tercera, una cuarta y una quinta vez, ya no es casualidad: es una política. Entonces, aquí ha habido una política de debilitamiento de los órganos de contralor y jurisdiccionales de la República.

En el caso puntual de esta Rendición de Cuentas, en el artículo 11 del mensaje del organismo se requieren algunos rubros que son importantes para dar cumplimiento a lo que establece la Ley N° 19.580, de violencia hacia las mujeres basada en género, aprobada en diciembre de 2017. El año pasado esa norma se discutió mucho, pero si no existen los recursos suficientes el Poder Judicial va a tener problemas para implementarla; eso es notorio.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia dijo en la Comisión que es voluntad del organismo dar cumplimiento a toda ley que esté vigente. Así que no hay reticencias en cuanto al cumplimiento de la normativa. El problema es que si no hay recursos para la creación de juzgados, para tener más cantidad de defensores y para contratar funcionarios y actuarios, no se podrá dar cabal cumplimiento a una ley que requiere un esfuerzo económico muy importante, entre otros motivos porque debe implementarse en todo el país.

En la Comisión, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia dijeron claramente qué estrategia seguirían para lograr la creación de la cantidad de juzgados necesarios a fin de implementar esta ley: transformarían juzgados ya existentes. Por ejemplo, van a transformar ocho juzgados especializados en violencia doméstica para que pasen a ser ocho juzgados especializados en cuestiones de género; dos juzgados letrados de adolescentes para que sean dos juzgados de género, y cuatro juzgados letrados de familia, para que sean cuatro juzgados de género. A pesar de estos esfuerzos y estas estrategias para dar cumplimiento a la ley, se precisa refuerzo de rubros para crear, por lo menos, doce juzgados más.

Entonces, la realidad es que con bombos y platillos el año pasado se aprobó una ley -algunos podrán tener diferencias, pero está vigente-, y el Poder Judicial necesita crear juzgados para poder implementarla y no tiene el refuerzo de rubros necesario.

Sé que la Suprema Corte de Justicia ha suprimido juzgados en la capital y juzgados departamentales de paz para crear otros juzgados especializados en materias en las cuales la ley ha puesto un acento especial, pero no se puede seguir eliminándolos porque se empezará a retacear el acceso a la Justicia a las personas que deben acudir a estos.

En su mensaje, el Poder Judicial solicita $ 989.000.000, pero ni el proyecto del Poder Ejecutivo ni la iniciativa que está a consideración de la Cámara recogen esa cifra. El artículo 11 del mensaje del organismo refiere específicamente a la ley de violencia basada en género, para cuya aplicación la Suprema Corte de Justicia requiere un refuerzo de $ 630.000.000. Reitero: nada de eso nada figura en el mensaje del Poder Ejecutivo ni, lamentablemente, en la iniciativa que estamos analizando. En consecuencia, parecería que se va a dar -esperemos que no suceda en la votación- un nuevo ninguneo al

Poder Judicial, que es tan importante en la República para ejecutar lo que establece la ley, para juzgar y para ejecutar lo juzgado.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: varios legisladores, inclusive del último diputado preopinante, han manifestado que desde la llegada del Frente Amplio al poder ha habido un desconocimiento de los órganos de contralor y, en particular, del Poder Judicial.

Me voy a referir al Poder Judicial, aunque en algunos casos es genérico para otros órganos de control.

En primer lugar, en el Presupuesto quinquenal de 2005 el Poder Judicial recibió un aumento del 40 %, un aumento histórico, un aumento real que nunca había tenido, producto de las políticas que se habían aplicado hasta el año 2004 por quienes hoy reclaman que se les reconozca su jerarquía institucional. Reitero que hubo un 40 % de incremento en la masa salarial del Poder Judicial.

En el presupuesto del año 2010 el Poder Judicial no pidió mayores aumentos porque habían tenido aumentos importantes. Todos recordamos el conflicto que se generó por la interpretación que se dio a una disposición en ese presupuesto, que no tenía que ver con el Poder Judicial, pero en el que no vamos a entrar en detalle. A raíz de ese conflicto, y luego de finalizado, la masa salarial del Poder Judicial creció un 20 %, porque ese es el aumento que se les reconoció -retroactivo a 2012 o 2013- a todos los integrantes del Poder Judicial.

Obviamente, mientras estaba vigente este conflicto había una posibilidad de que se produjera un incremento real de las retribuciones de todos los integrantes del Poder Judicial -el Poder Ejecutivo había ofrecido soluciones-, que al final se concretó en el acuerdo firmado en los últimos meses, y que en esta Rendición de Cuentas conlleva más de $ 800.000.000 para cumplir durante este año, y algo similar el año siguiente. O sea que no puede decirse que en el acumulado de estos tres períodos no se hayan dado recursos para remuneraciones del Poder Judicial. Hay un aumento significativo del ingreso real de todos los integrantes del Poder Judicial, no solamente de los funcionarios sino, inclusive, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y, de allí para abajo, todas sus jerarquías.

Otro tema que también se manejó era que increíblemente se negaran recursos al Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial, en función del cumplimiento de la sentencia que surgió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obligación que establece la Corte al Estado uruguayo, es que proporcione recursos para la capacitación en el tema derechos humanos a los distintos ámbitos de actuación del Estado. Dice "el Estado", y el Poder Judicial forma parte del Estado. Era el Poder Judicial el que, de sus recursos, debía habilitar partidas -como ya establecimos cuando se produjo la discusión- para fortalecer la formación de sus funcionarios. En ese momento, tenía recursos más que suficientes para hacerlo.

En cuanto a la solicitud del Poder Judicial de $ 900.000.000 en esta Rendición de Cuentas, casi el 25 % correspondía a recursos para abonar a sus funcionarios el salario vacacional, beneficio que los funcionarios de los otros dos poderes del Estado no tienen. Por lo tanto, no pongamos arriba de la mesa que el reclamo fue por más de $ 900.000.000 para otros destinos, de los cuales se ha estado hablando de la aplicación de algunas de las leyes. El 25 % era para otorgarles un beneficio que no tienen otros funcionarios del Estado.

En general, se dice que estamos retaceando a todos los órganos de control. Señor presidente: en esta Rendición de

Cuentas, que es muy austera, no hay incrementos, salvo para aquellas prioridades como la educación, y hay rebaja de presupuestos de la Administración central y, en particular, del Poder Ejecutivo -para que quede claro: Presidencia de la República y ministerios- en las reasignaciones que se han hecho. Ya en el mensaje del Poder Ejecutivo y en lo que hemos hecho en esta Cámara quitamos recursos a la Administración central para redistribuirlos en la creación de cargos para la ANEP, que se entienden necesarios para cumplir con la función primordial de ese ente autónomo de enseñanza.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: no es cierto que el presupuesto del Poder Judicial se incrementó en el año 2005 en los guarismos que afirma el diputado Asti -perdón que lo nombré-; no es así. Y menos que hubo un incremento a los funcionarios en los guarismos que se dicen. Eso no es cierto.

Que luego se tuvo que dar cumplimiento -por un muy largo conflicto de los funcionarios- a lo que estaba establecido en una ley de presupuesto y que, en definitiva, dio lugar a reclamos judiciales y a una negociación que posteriormente llevó adelante el Poder Ejecutivo con la asociación de funcionarios, es un tema muy diferente. Si se hizo lugar a algunos aumentos a partir del año 2013 -eran aumentos retroactivos-, fue debido al conflicto y porque existían juicios que estaban amparados por una ley aprobada por el Parlamento.

Más allá de las discusiones que pueda haber, el Poder Ejecutivo llevó adelante una negociación y, efectivamente, una cantidad importante de funcionarios accedió a una transacción. Pero reitero que no es cierto que hubo un aumento del 40 % para el Poder Judicial en el año 2005. Lo digo categóricamente. Lo sé porque me comprenden las generales de la ley, ya que yo revistaba como funcionario en el Poder Judicial. Claramente y con toda propiedad digo que no es cierto.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Señor diputado: alusión personal no tuvo, y alusiones políticas hay una.

——Deberíamos evitar las alusiones de alusiones, pero vamos a cerrar el diferendo dándole la palabra al diputado Asti, y pidiendo por favor que en las respuestas no volvamos a aludir. Gracias.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: yo dije claramente que en el año 2005 hubo un 40 % de aumento a la masa salarial. Cómo lo distribuyó la Suprema Corte de Justicia entre sus funcionarios es otro tema. Hubo un 40 % real previsto para el aumento de la masa salarial, y podemos ir al artículo correspondiente que, si es necesario, buscaremos en el correr de la sesión.

Gracias, señor presidente.

6.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continúa la consideración del asunto motivo de la convocatoria.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: creo que debemos basarnos en lo que dijo la Suprema Corte de Justicia cuando vino a la Comisión -es lo que podemos entender quienes no manejamos el tema-, que fue muy claro. Dijeron que la ley de violencia basada en género iba a ser muy difícil de aplicar en su integridad, como era el deseo de esta Cámara al aprobarla. Además, fueron muy claros al establecer que aun

aumentando la cantidad de juzgados, sería imposible aplicar esta ley, porque para ello no solo se necesitan jueces, como en otras materias, sino un equipo técnico multidisciplinario.

Por otra parte, el Poder Judicial afirmó que pedía lo mínimo de lo mínimo, que su primera propuesta había sido casi el doble y habían achicado la cifra, que terminó en $ 900.000.000. Aun teniendo en cuenta que se destinara un 25 % de las partidas a los beneficios de los funcionarios, dicho monto quedaría en $ 650.000.000.

Quiere decir que el dilema no es entre $ 600.000.000 o $ 900.000.000, porque para esto no vino nada del Poder Ejecutivo.

Por último, no se puede tomar el conflicto con los funcionarios judiciales y decir que fue la voluntad del Poder Ejecutivo para mejorar la masa salarial. Hubo un conflicto, y creo que todos recordarán que a través del artículo 150 -si no recuerdo mal-, de la Rendición de Cuentas pasada, el Poder Ejecutivo intentó dilatar el pago de este reclamo o no pagarlo.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: queremos dejar algunas constancias.

Vamos a acompañar los artículos del proyecto que viene de la Comisión, relativos al Inciso del Poder Judicial, excepto el artículo 243, por las mismas razones que señaló el señor diputado Sánchez, que nos parecen absolutamente de recibo.

Quiero advertir también que en los fundamentos de voto y en las consideraciones generales del capítulo del Poder Judicial hemos reeditado un debate. En su momento, votamos en general la llamada ley integral de género y acompañamos los primeros cuatro capítulos, pero en nombre del Partido Independiente fundamentamos nuestro voto negativo al Capítulo V en adelante, en virtud de dos aspectos que, a nuestro juicio, eran esenciales. Por un lado, los cambios en el proceso penal, que representaban un retroceso, ya que volvíamos a la versión del Código que ya no estaba vigente, y ese aspecto nos parecía fundamental, porque las incorporaciones que se proponían estaban absolutamente fuera de lugar. Y, por otro, por lo que había dicho el doctor Cavalli, integrante de un Tribunal de Apelaciones de familia -citamos especialmente varios párrafos de su intervención en las comisiones respectivas-, quien alertó con total claridad sobre lo que representaban estos cambios y agregó que, si no se instrumentaban recursos, la ley sería letra muerta.

En nuestro fundamento de voto dijimos que esa ley integral de género era una expresión de intenciones, un saludo a la bandera -esa es la realidad-, y hoy eso queda absolutamente confirmado. Para instrumentar esa ley se requiere, entre lo que pide el Poder Judicial -los $ 630.000.000 a que hacía referencia el diputado Conrado Rodríguez- y lo que solicita la Fiscalía -$ 300.000.000- US$ 30.000.000, que claramente no están ni estarán, ya que la economía del país no lo permite.

En consecuencia, cuando el Poder Ejecutivo propone una ley debe ser suficientemente responsable para saber si va a disponer de los fondos y de los recursos humanos necesarios para aplicarla; esa es la responsabilidad que implica la iniciativa del Poder Ejecutivo y, en el caso de la ley integral de género, la iniciativa fue del Poder Ejecutivo.

Entonces, es necesario bajar los discursos y las buenas intenciones a la realidad, y esta nos impone pensar si existen los recursos humanos y materiales necesarios para instrumentar lo que queremos. Esa es la limitación y la tarea de un gobernante.

Por supuesto, cuando se plantea este tipo de leyes uno está dispuesto a acompañarlas, porque desea que las cosas

cambien, que haya una transformación trascendente en el enfoque integral del tema de género, pero incorporar una cantidad de cosas que no se van a cumplir porque no hay recursos me parece una mala señal que la Política -con mayúscula- da a la ciudadanía.

Nos parece importante dejar estas constancias en la medida en que el tema se desarrolló durante la discusión; por lo menos, pretendíamos expresar nuestro punto de vista en este debate.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 234 al 245, inclusive, excluyendo el 243, que fuera desglosado y el 241, que ya fue votado.

——Ochenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el artículo 243.

En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Seis en ochenta y cuatro: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 17 "Tribunal de Cuentas", que no tiene artículos en el proyecto que viene de Comisión, pero es el que corresponde, según el orden, y se presentaron dos hojas con aditivos.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 16, presentada por los señores diputados Gustavo Penadés, Sebastián Andújar, Wilson Aparicio Ezquerra Alonso, Benjamín Irazábal y Omar Lafluf Hebeich.

——En discusión.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: este aditivo simplemente permite incrementar en $ 21.000.000 el crédito presupuestal del Tribunal de Cuentas.

No vamos a alegar más a favor de cubrir las necesidades que tiene el Tribunal de Cuentas, porque ya lo hicimos en la discusión general y porque fue más que contundente, por lo menos, en la Comisión, lo que sostuvo la delegación de ministros, encabezada por la contadora Susana Díaz, para explicar la situación de precariedad del organismo para cumplir las funciones básicas que la Constitución de la República le asigna.

Lo paradójico es que el Tribunal de Cuentas tiene plata suya en el Tesoro Nacional, producto de los servicios que presta a terceros por concepto de control de la más diversa índole, y lo que pide es que le habilitemos el crédito presupuestal correspondiente para poder utilizarla. Lo que no existe es la habilitación del crédito presupuestal para poder utilizar ese dinero.

Los legisladores del Partido Nacional solicitamos que se habilite en $ 21.333.000 el aumento en gastos de funcionamiento, con los que cuenta el Tribunal de Cuentas hoy, pero -reitero- no puede utilizar, producto de no tener el crédito presupuestal habilitado. Por ello, mocionamos para que el aditivo que figura en esta hoja sea incluido como artículo en la Rendición de Cuentas.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: discutimos esto en la Comisión y queremos hacer la misma aclaración que en esa asesora.

Esto tiene costo presupuestal, aumenta el déficit fiscal del que tanto hemos hablado y acerca del que tanta preocupación seguramente tenemos todos -o casi todos- en esta sala, aunque con distintas interpretaciones.

Reiteramos que hemos tenido que postergar muchas otras solicitudes de distintos organismos, no solo de los de

control. Por ejemplo -como veremos en un rato-, uno de esos organismos es la Universidad de la República, porque tenemos una restricción presupuestal muy importante. Lo hemos dicho; hemos fundamentado que esa restricción fiscal tiene que equilibrarse entre prioridades y restricciones.

En este caso, no podemos acompañar esta iniciativa porque representa un incremento del costo presupuestal de $ 21.000.000 cifra que, inclusive, es mayor que el reclamo de muchos otros organismos, absolutamente justificados, ya que debemos manejar el equilibrio entre restricciones y prioridades.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: en primer lugar, me alarma el argumento del señor diputado preopinante en el sentido de que otorgar $ 20.000.000 al Tribunal de Cuentas implica la posibilidad de desequilibrar el déficit fiscal, porque este está desequilibrado desde hace bastantes años.

En segundo término, el Tribunal de Cuentas tiene este dinero; quiere decir que ni siquiera tiene costo de caja y, menos, presupuestal. Lo único que se está pidiendo es habilitar el crédito para usarlo.

Ahora bien, es realmente lamentable que se argumente que se posterga al Tribunal de Cuentas, al organismo de control del Estado, que no se le dan $ 20.000.000 porque se puede desequilibrar y agravar el déficit fiscal, sobre todo con el antecedente de que el año pasado tampoco le dimos nada y no recuerdo qué pasó el anterior.

Planteamos este tema porque cuando vino el Tribunal de Cuentas a la Comisión dijo que no podía cumplir ni siquiera con lo mínimo para controlar al Estado. Nosotros apelamos a que se vote el artículo aditivo que proponemos porque, por lo menos, sería un mensajecito -no digo un mensaje; un mensaje sería otra cosa-, una lucecita para al Tribunal de Cuentas; sería como decirle: "No los queremos liquidar del todo; por lo menos, les damos esto".

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 16, presentado por los señores diputados Gustavo Penadés, Sebastián Andújar, Wilson Aparicio Ezquerra Alonso, Benjamín Irazábal y Omar Lafluf Hebeich.

——Treinta y seis en ochenta y dos: NEGATIVA.

Se pasa a considerar los artículos aditivos que figuran en la Hoja N° 17, presentados por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso, y que en su momento votaremos por separado.

——En discusión.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: en cuanto al Inciso correspondiente al Tribunal de Cuentas -como se ha señalado anteriormente-, quiero decir que, en su oportunidad, el Poder Ejecutivo y el Parlamento nacional habilitaron a ese organismo a ampliar su sede, sus instalaciones. Una vez concluida esa obra, parece de sentido común que el Tribunal de Cuentas tenga acceso a los créditos necesarios para incorporar a la ampliación de ese inmueble los recursos imprescindibles para ocuparlo y, de esa manera, facilitar y posibilitar su funcionamiento.

Es en esa dirección que con el señor diputado Conrado Rodríguez presentamos estos aditivos que estamos fundamentando, los que financiamos con otro cambio que incluimos en esta Rendición de Cuentas -también lo pusimos a consideración de la Comisión-: a través de los ahorros que se producirían en la medida en que, temporalmente, no se proveyesen todas las vacantes generadas en el Estado, exceptuando los organismos del Poder Ejecutivo, de la Administración central, que tienen más necesidades, como los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, la enseñanza y la salud.

Muchas gracias.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Propongo que se voten en bloque los dos artículos aditivos propuestos en la Hoja N° 17.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos aditivos que figuran en la Hoja N° 17, presentados por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——Treinta y seis en ochenta y seis: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 18 "Corte Electoral", que comprende el artículo 246.

——En discusión el artículo 246.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública", que comprende los artículos 247 a 254, inclusive.

Se deja constancia de que el artículo 247 tiene un sustitutivo en la Hoja N° 18 y el artículo 249, uno en la Hoja N° 19. Además, hay un artículo aditivo que figura en la Hoja N° 20.

——En discusión el artículo 247.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: seré muy breve, porque la brevedad es lo que está articulando nuestro accionar en esta Rendición de Cuentas, pero como entiendo que es costumbre plantear alguna consideración

general sobre cada inciso, no puedo dejar de hacer un comentario al respecto, sin intención de generar un debate, aunque sería interesante que, efectivamente, estuviéramos lo más cerca posible de la realidad.

En primer lugar, queremos aclarar que se hicieron muchas cosas positivas. Realmente, la Administración Nacional de Educación Pública desarrolló mucho más los bachilleratos tecnológicos, algo que en otras épocas era considerado neoliberal y que fue muy combatido en las reformas de la década del noventa. Se dieron cuenta de que los estudiantes no se aburrían, como dice el informe que se dio a conocer estos días, producto de una investigación nacional e internacional.

La descentralización de la educación terciaria en el interior, en realidad, no es una descentralización estricta, sino una desconcentración, porque en la Administración Nacional de Educación Pública pocas veces la autoridad estuvo tan concentrada como ahora, sobre todo, en el Consejo Directivo Central. O sea que lo estuvo mucho menos en los emprendimientos en el interior, que a esta altura ni siquiera tienen autonomía en los centros educativos. Eso debe quedar claro.

La Administración Nacional de Educación Pública -es decir, los contribuyentes- hizo un esfuerzo grande con respecto a la mejora de los edificios, y nadie lo niega. No voy a hacer comparaciones porque ya lo hice en otra oportunidad, con motivo de la interpelación. Pero no pienso que la solución pase por los edificios; eso también lo dije y lo sigo sosteniendo, como técnica en educación. Sucede que el tema de los edificios es una muy buena forma de no tener problemas con los sindicatos -que, además, ahora tienen representación en los consejos-, y una buena manera de sacarnos la responsabilidad cuando usamos mal el dinero. Evidentemente, los edificios son importantes, pero no estaban tan mal como se dice y tampoco fueron tantas las cosas que se hicieron.

Se considera una intervención edilicia cuando se hacen reparaciones. En cuanto a los edificios nuevos, se mantuvo un nivel medio y medio para abajo.

Reitero: no quiero hacer comparaciones porque en décadas anteriores el presupuesto era de US$ 480.000.000; recuerdo cuando se suscitó el enfrentamiento por las reformas del noventa, iniciadas por el profesor Gabito y, después, profundizadas por el profesor Rama. Pero resulta que si comparamos la cantidad de edificios, su calidad y, en particular, los resultados, estos fueron retrocediendo.

Ayer se habló -lo digo con el mayor de los respetos- de dos tipos de concepciones: la de Alicia en el país de las maravillas y la del reino del terror. En realidad, no creo en ninguna de los dos, porque no considero que estemos como Alicia en el país de las maravillas. Acabo de leer una información publicada hoy en la prensa, sobre un organismo nacional con aportes internacionales, que dice que el 40 % de la población está en peligro de caer en la pobreza.

Hemos dicho ene veces que con una educación de poca calidad, con una educación pública de mala calidad, con malos resultados, con alta deserción, con bajo nivel académico, lo que hacemos es profundizar las diferencias sociales; lo que hacemos es fracturar la sociedad uruguaya, que es lo que está pasando. Después, compramos armas, patrulleros, etcétera; pero no, con la represión esto no se soluciona.

Debemos lograr una educación pública de calidad que sea un factor integrador, como fue en el Uruguay hace mucho tiempo. Nosotros no tenemos que mirar a otros países, sino nuestro propio pasado.

¿Qué es lo que nos preocupa? Volvieron a salir cifras en cuanto a

deserción en la educación media, ¡otra vez! Otra vez se ratificó en la prensa lo que se recogió ayer. Hubo intervenciones del señor presidente del Codicén. Entonces, yo me acordé -no tanto por el señor presidente del Codicén, sino en general- de la actitud del Poder Ejecutivo con respecto a la educación. El Ministerio de Educación y Cultura tiene responsabilidades en la educación; es falso que no las tenga. El Ministerio -sea quien sea el titular- preside la comisión coordinadora de la enseñanza, que tiene en sus manos la responsabilidad de controlar no solo la coordinación, sino la política pública más importante del Estado lo que, además, la propia fuerza de gobierno ha resaltado. Tampoco se explica por qué durante el primer semestre del gobierno, cayeron sus dos referentes es decir, Filgueira y Mir, cuando se iba a hacer el cambio de ADN.

Me acordé de otro síndrome, la en educación; lo siento mucho. Me refiero al síndrome que se está estudiando. Hasta el nobel de economía ganó su premio porque considera que los factores psicológicos son importantes en las decisiones de la economía, inclusive, de la macroeconomía. ¡Imagínese qué sucede en las otras actividades del Estado! Se trata del síndrome de Hubris. Yo, honestamente, lo aplico a lo que ha pasado con la educación en el Uruguay en estos años.

En cuanto al síndrome de Hubris, hay libros escritos en los países desarrollados que se dedican a analizar cuáles son las causas que motivan las decisiones de los líderes políticos, algo muy importante para poder restablecer el Estado social de derecho. Hubris proviene del vocablo griego *hybris*, que refiere a no poder contener la soberbia, arrogancia y autoconfianza; de esa forma, el ser humano se embriaga de poder.

Voy a terminar, a pesar de que necesitaría más tiempo; este es un comentario general.

Con todo respeto, entiendo que la que mencioné es la única manera de explicarse cómo las autoridades de la educación no han podido revertir dos problemas fundamentales. Uno es el nivel académico, que ha caído sistemática y permanentemente. Otra vez estamos por debajo del 30 % de alumnos que empiezan primaria y terminan bachillerato. Ahora sí que somos el último país de América Latina. Ya no estamos como Honduras, El Salvador y Guatemala: los igualamos para abajo, lo cual condena al país a no tener futuro, no solo a las personas individualmente consideradas que no se pueden pagar una educación de calidad. Y no digo que sea la privada, porque si no tiene la competencia de una educación pública de calidad, la educación privada tampoco tiene calidad.

Otro aspecto fundamental es retener a los estudiantes. Me acaban de preguntar: "¿Usted por qué considera que los estudiantes se aburren?". Resulta que estuvieron en el gobierno casi quince años y dispusieron de US$ 2.000.000.000 por año -en el primer quinquenio, de US$ 1.500.000.000- para estudiar por qué se aburren. Desde el punto de vista estructural no se tocó nada; no se tocó la currícula; no se tocó la evaluación; no se tocó nada del clima institucional; no se hizo absolutamente nada en lo básico para que un sistema educativo funcione.

Yo sé que los salarios docentes aumentaron. Pero los docentes -me considero identificada con ellos- supimos ponernos al hombro la educación pública sin que nos importaran los salarios. ¿Está bien? No; está mal. Pero estoy segura de que un docente que consigue estos pésimos resultados sería capaz de resignar parte de su salario -como los docentes y funcionarios de la Udelar- para mejorar dichos resultados y evitar que los más pobres no se sigan quedando por el camino, cada vez más pobres e incultos porque están marginados culturalmente.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señor presidente: vamos a hablar en general del tema educativo, intentando no caer en una visión que hoy, lamentablemente, se ha vuelto muy común en nuestra sociedad; me refiero a la que acaba de exponer la señora diputada preopinante. Se trata de una visión que habla del fracaso, de errores, de mala gestión.

Yo creo que eso le hace muy mal a la educación pública. Esto no tiene que ver con arrogancia ni con pensar que hicimos todo bien o que no tenemos autocrítica. Creo que en el debate político es bueno hablar de la realidad, de los números, de lo que realmente ocurre en los centros educativos, de lo que pasaba antes y de lo que sucede ahora. Y, sin duda, los primeros en saber qué falta somos nosotros, los frenteamplistas.

Que no se diga que en Uruguay no hay movilidad social, como se señaló en la sesión de ayer y se repitió en esta, porque la enorme mayoría de los uruguayos vive mejor ahora que hace diez años. Por supuesto que hay personas que pueden correr el riesgo de caer en la pobreza, pero el 55 % de la población vive mejor hoy que hace diez años. Quizás a algunos esto les duela, pero es la realidad.

Por otro lado, considero que no se puede hablar de fracaso cuando año tras año incluimos sectores que antes estaban afuera del sistema. Se nos puede decir que no mejoramos la calidad educativa. Ahora bien, yo me pregunto: ¿cómo hacían los niños y jóvenes que estaban fuera del sistema para aprender? Hay variadas muestras de ello, y no un solo indicador. Después me voy a referir a la educación media.

Si hay algo con lo que en el Parlamento estamos todos de acuerdo es con que es bueno que existan escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, quizás no tanto por una cuestión educativa, sino social. Desde que en el Uruguay la mujer se integró al mercado de trabajo, el cuidado va quedando, cada vez más, en manos de las instituciones. En ese marco, el incremento de la cobertura en jardines y escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido pasó de 29.000 niños en 2005 a 62.000. Creo que eso no se puede calificar de fracaso.

Quiero detenerme en lo siguiente. Todos sabemos que los cuidados y la alimentación de los niños son fundamentales para el aprendizaje. Eso está bastante estudiado, aunque no precisamente en nuestro país. Los niños que reciben cuidados y alimentación tienen mayores posibilidades de desarrollarse intelectual y físicamente que aquellos que no los reciben.

En el año 2005 había apenas 5.000 niños de tres años que tenían cobertura y, hoy hay 14.000. Me parece que eso no se puede calificar de fracaso.

Hay más escuelas, más locales para la educación media y más escuelas técnicas, por lo que tampoco se puede decir que sea un fracaso. Repito, creo que no puede decirse que eso sea un fracaso.

Además, aumentaron no solo los salarios -lo que fue muy importante-, sino la cantidad de cargos. Parte de la calidad educativa tiene que ver con el número de estudiantes por grupo, y sabemos claramente que todavía hay grupos con más de treinta alumnos, lo que es un problema. Pero los vínculos laborales casi se duplicaron en la ANEP, y esos son cargos muy necesarios, que hacen a la calidad educativa.

Por otro lado, es verdad lo que dice la diputada Bianchi, que es profesora, en cuanto a que hay un problema con el

modelo educativo; estoy de acuerdo con eso. Pero no se puede decir que en esta Administración no se han desarrollado nuevas modalidades, porque si algo ha hecho el Gobierno del Frente Amplio fue generar un montón de alternativas para los jóvenes; antes no tenían otra chance que el modelo tradicional propedéutico de enseñanza media. Ese es un aprendizaje que debemos hacer todos quienes estamos en la educación, porque no hay fórmulas para la inclusión. Quizás, en esta sesión, más tarde, discutamos algunos modelos de gestión privada. Entonces podremos ver que la educación pública no sale tan mal parada en términos de inclusión, si consideramos -como hacemos en las rendiciones de cuentas- los aspectos presupuestales.

Se dice que debemos que trabajar en el tema de la inclusión. En realidad, si se analiza la asistencia hace diez años a los centros de enseñanza de los diferentes sectores y tramos por edades y se los compara con lo que sucede hoy -los invito a revisar el mensaje presupuestal de la ANEP; todos los legisladores disponemos de ese material-, se advierte que el porcentaje de asistencia mejoró en todas las edades. ¡Claro!, el desafío es que cada vez haya una mejor educación.

Hace unos años, apenas el 67 % de los jóvenes de diecisiete años asistía a un centro educativo y hoy lo hace el 80 %; todavía nos queda el 20 % de ellos.

Debemos desarrollar propuestas educativas. Esta Rendición de Cuentas incluye, entre otras cosas, un enorme plan de obras para generar espacios educativos que no existían. Parte de la historia trágica de la educación pública uruguaya tiene que ver con eso. Por ejemplo, si todos mis compañeros del Liceo Nº 18 -precisamente, recién nos visitaron estudiantes de ese centro de estudios- hubieran querido continuar su trayectoria educativa en la década de los noventa, no habrían tenido dónde hacerlo. Ese es un problema que recién ahora se está terminando de resolver: el espacio. Y además del espacio tiene que venir la creación de cargos. Después de que resolvamos todo eso quizás sí podamos sentarnos a hablar de cuáles son los mejores programas.

Ahora bien, lo que está claro es que sin equipos multidisciplinarios, sin infraestructura adecuada, sin programas de becas y de tutorías es mucho más difícil. Y los que quedan por el camino son los que siempre quedaron por el camino.

Entonces, no hago un discurso triunfalista porque estoy convencido de que tenemos que invertir mucho más en educación de lo que se destina en la actualidad. Pero para dar un debate concienzudo y responsable debemos ver la realidad. Y la realidad indica que hoy los más pobres tienen más oportunidades y muchas más chances que antes. Siempre digo que me hubiera gustado tener dieciocho años ahora, porque tendría muchas más posibilidades de estudiar, muchas más carreras entre las que optar que las que había en su momento.

Este es un desafío-país. Ningún gobierno, sea cual sea el color político, y ninguna propuesta de las que hemos escuchado de la oposición habló de invertir menos en educación; ninguno. Por eso creo que hay que ser cuidadoso cuando se habla de fracasos, porque no es cierto que se haya fracasado.

Por lo tanto, voy a votar convencido, sabiendo que la educación pública del Uruguay necesita de mucha más inversión.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: hay cosas que no dije; se trajeron las cosas hechas y no me

escucharon. Yo reconocí las cosas buenas que se hicieron y dije que se cometieron muchos errores.

Podría contestar esta alusión diciendo que yo también fui al Liceo N° 18; tengo sesenta y cuatro años de edad, y mis compañeros no eran ricos ni millonarios -como no lo era yo-, sino que todos éramos de clase trabajadora, de clase baja. Es más: iban los compañeros del Consejo del Niño, como se llamaba en aquel entonces.

Lo que sucede -lo dije ene veces y lo vuelvo a repetir- es que el mundo cambió y, en general, para bien. Antes, no se necesitaban tantos años de escolarización para llegar a los mismos empleos. Obviamente, hoy es necesario profundizar la formación académica no solo en calidad, sino también en cursos de grado y de posgrado.

Antes, con una muy buena educación primaria, como la que tuvimos, alcanzaba; después, comenzó la expansión de la educación media, que no es obligatoria desde ahora, sino desde la Constitución de 1967. La Carta recoge esa expansión. No voy a aburrir con las cifras, pero -¡por favor!- que no se mienta y se diga que antes los alumnos de los sectores sociales más bajos no podíamos concurrir a los liceos. ¡Por supuesto que íbamos! ¡Y a la universidad también! Y no éramos la excepción.

También podría contestar con el perdona *tutti,* el permiso o el no sé qué firmado con UPM. ¿Qué hicieron con UPM? ¿Qué dijo UPM, entre todas las exigencias que nos impuso, ante las que dijeron amén? ¡Que tenemos que cambiar la educación! Esto lo pusieron como una condición para venir al país. ¡Qué bien que se gastaron los miles de millones de dólares de los contribuyentes durante todos estos años, si una multinacional de un país que hace muy pocos años estaba mucho más atrasado que Uruguay viene a decirnos eso! Y no solo en economía, sino también educación. Reitero que estaba mucho más atrasado que nuestro país; no se podía comparar con Uruguay. Sin embargo, ahora nos dice qué tenemos que hacer porque, evidentemente, no estamos haciendo las cosas bien. Ahora ese país sí tiene buenos resultados, y no me digan que es porque tiene un PBI alto. ¡Es al revés! Tiene un PBI alto porque invirtió en educación. ¡Es exactamente al contrario!

Hace unos días, conjuntamente con el colega diputado Mario García, participé en la conferencia de una educadora de Singapur. Si no lo dije antes, lo hago ahora: Singapur tiene 687 kilómetros cuadrados -por eso construyen edificios altos; si no lo hacen, no cabe la gente-, 5.500.000 habitantes y está entre los primeros diez países del mundo por sus resultados educativos. ¡Por favor! ¡Dejemos de hablar del tamaño del país y del PBI!

Sí sostenemos que hay que invertir en educación, más del 6 %; si se quiere concretar esto, estamos dispuestos, pero primero hay que presentar un proyecto. Porque el presupuesto se hace al revés. ¿Cuál es el proyecto? ¿En qué se va a gastar? ¿Cuánto se va a gastar en los distintos niveles educativos? ¿Cuánto gastaremos en formación docente universitaria? Veremos el próximo gobierno. ¡Hasta somos capaces de votar más del 6 %! Por estos motivos, en el programa de gobierno de la agrupación Todos no figura el 6 %, porque es una especie de zanahoria que se pone delante del burro. ¿Cuánto se necesita? ¿10 %? ¡10 %! ¿11 %? ¡11 %! ¡Proyecto y resultados!

Lo que dijo el otro día la conferencista Joy Tan es que los resultados en Singapur se dieron en dos años. ¡Es mentira que los resultados en educación demoren en verse! ¡Es mentira! ¡Es falso!

Asimismo, perdimos matrícula en educación primaria. ¿De qué me están hablando? Es cierto que estamos

extendiendo los niveles cuatro y tres. ¡Bienvenidos a la reforma de Rama! Tampoco querían la educación inicial. Recibieron el gobierno prácticamente con toda la cobertura para el nivel cuatro y ahora se extiende al nivel tres. ¡Perdimos el 20 % de la matrícula de educación primaria: el 2 % por falta de crecimiento demográfico y el 18 % por fuga a la educación privada! Estas son cifras durísimas -¡durísimas!-, que tendrían que hacer bajar la soberbia, como dije al comienzo de mi intervención.

Además, no es cierto que en secundaria haya más alumnos. Sí hay más alumnos inscritos, pero no se los retiene. Reitero que tenemos la tasa de deserción más alta de América Latina. ¡No los retenemos!

——Entonces, experiencias exitosas como las de la UTEC, las de la ANEP -que ha instalado bachilleratos tecnológicos, inclusive, en el interior del país- y las de la Universidad de la República son para una élite, porque si de diez alumnos que comienzan primaria solo tres finalizan bachillerato y el resto abandona… A ver, señores: dos más dos son cuatro, aquí y en la China.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señor presidente: se dijo que no había escuchado. Yo escuché lo que manifestó la señora diputada Bianchi; tal vez no le haya gustado lo que le respondí. Eso es diferente.

Se habló de posgrados, y entiendo que es uno de los puntos más importantes que tenemos para desarrollar. En el año 2004 había 66 carreras y 133 posgrados, y hoy, 96 carreras y 287 posgrados. Estos son datos de la Udelar. A esto me refería con las posibilidades que hoy tienen los chiquilines.

Además, cuando se habla de las pérdidas en primaria, obviamente, hay razones de corte demográfico, y si uno mira la relación histórica entre la educación pública y la privada, advierte que estamos en ese promedio histórico. Entonces, esto a mí no me quita el sueño; quizás el problema es que la gente no tiene hijos, pero eso no lo resolverá la educación.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA (Mario).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GARCÍA (Mario).- Señor presidente: es la primera vez que hago uso de la palabra en el tratamiento de esta Rendición de Cuentas. Permítaseme felicitar a la bancada del Partido Nacional, sobre todo, a los integrantes de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y a su capitán; ya que estamos hablando de educación, creemos que el señor diputado Lafluf ha salvado con muy buena nota esta primera experiencia en dicha Comisión.

No soy especialista en temas educativos, pero lo siento como la principal batalla que el país debe librar, y trabajo desde esa motivación.

Hay algunas cosas que debemos aclarar. El proceso educativo es uno solo, desde que el individuo comienza, a sus tres años de edad -por suerte-, hasta que finaliza su formación y preparación para integrar el mundo en el que vivimos.

El informe en mayoría de la fuerza política de Gobierno resalta como un logro la ampliación de la cobertura preescolar -aunque por ahí se decía que también fue gracias a los váuchers educativos que se entregan a los padres para que elijan la institución, aun privada, donde quieran mandar a sus hijos; detalle menor- y la

transición entre primaria y secundaria. Ahora, el proceso es uno solo: tenemos que ver los resultados de todo el proceso educativo.

Lo que ocurre en América Latina -como decía la señora diputada Bianchi- es que el abandono del proceso educativo condiciona nuestras economías, porque el individuo no se prepara para el mundo en que le toca vivir. Mi padre terminó la escuela, y no siguió estudiando; sus hijos pudieron terminar la universidad.

Es decir, tenemos que enfocarnos en determinar el problema. En este momento, podemos afirmar que la promesa del Gobierno de destinar el 6 % del PBI para invertir en educación no se va a cumplir; no se cumplirá con el 75 % de egreso de la educación media superior, tal como prometió el doctor Tabaré Vázquez durante la campaña política, y tampoco se cumplirá con el cambio del ADN en la educación.

Desde mi ignorancia, divido el tema educativo en dos sectores bien diferenciados: por un lado, los trabajadores del sistema educativo y, por otro, los alumnos del sistema educativo. Estos dos grupos, en cualquier parte del mundo, son los grandes protagonistas de la educación.

¿Qué hemos visto desde el punto de vista de los trabajadores? Que se han mejorado los salarios, y nadie lo puede dudar. Desde el 2004 a la fecha ha habido un 89 % de aumento real, de acuerdo con el Informe Económico-Financiero del Gobierno. También es cierto que ha recibido un aumento superior al del resto de los trabajadores públicos, que ha sido del 50 %. Esto es indudable, y bienvenido sea. Era algo que nos faltaba.

Creo que nadie lo puede discutir: lo hemos apoyado y también lo vamos a apoyar en esta Rendición de Cuentas.

También ha habido un aumento en el gasto por alumno. Hoy se están invirtiendo alrededor de $ 80.000 por alumno en primaria y en secundaria, y $ 90.000 en la UTU. Nadie lo va a discutir.

Se va a llegar al cumplimiento del convenio del año 2015 de $ 25.000 para los maestros Grado 1. Creo que, hoy están por los $ 30.000 -no tengo el detalle-, y considero que eso también es muy bueno.

Ha aumentado la cobertura escolar; también es muy bueno. Asimismo, se ha mejorado la infraestructura; lo hemos visto a lo largo y ancho del país. Esta es la parte que -si se quiere, en mi primitiva definición- abarca a los trabajadores de la educación.

Ahora vamos a la parte que abarca a los alumnos. En este aspecto es en el que los resultados -créame, señor presidente- nos interpelan muy duramente. Ya lo dice claramente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), -gran creación del Gobierno del Frente Amplio-: "[…] en otros aspectos que hacen a la calidad educativa no parece haber avances significativos, como los aprendizajes que logran los alumnos y las inequidades en los logros que se da entre estudiantes de diferente nivel socioeconómico. A su vez, parecen persistir las dificultades para que los estudiantes culminen los ciclos educativos y que lo hagan en el tiempo estipulado". ¡Ni qué hablar cuando referimos a la diferencia de aquellos que terminan el ciclo educativo secundario en los diferentes quintiles! Uruguay está último en América Latina: superamos a Honduras, a El Salvador y a Guatemala. ¡Y ni qué hablar de los contextos socioeconómicos más complicados: de cada diez, uno termina secundaria!

Esa es la realidad que nos duele. Esto es lo que a nosotros nos duele en materia educativa: que quienes menos tienen, menos pueden progresar en la vida. Lo sabemos y lo dijimos: si no nos preparamos, si no se prepara el individuo, puede terminar en el mercado informal de trabajo, que hoy, en América Latina,

constituye prácticamente la mitad de la economía.

La situación que está viviendo el país en materia de seguridad pública ha puesto en escena una zona de Montevideo muy compleja, como Unidad Casavalle, que los diputados de la capital deben conocer. Eso me motivó a realizar un pedido de informes sobre la cantidad de personas en edad escolar y la diferente oferta educativa existente en Casavalle. En el pedido de informes que hice en el año 2016 y que se contestó en julio de 2018 -ese es un detalle absolutamente menor; se trata de una información muy completa-, en grandes números, pudimos establecer que hay un horizonte de 24.510 personas de entre tres y diecisiete años. El informe comprende hasta los diecisiete años, pero sabemos que el rezago estudiantil lleva a que muchos alumnos con extraedad estén cursando o pretendan cursar la educación media.

En ese sentido, se nos informó que en la zona de la cuenca de Casavalle hay dieciocho escuelas públicas; cuatro jardines de infantes; cuatro colegios habilitados: tres liceos públicos, dos liceos privados y tres UTU, una de ellas en modalidad de FPB. Cuando preguntamos el contenido en materias que se dicta en educación secundaria, ¡vaya sorpresa! Hasta el año 2016, ninguno de los liceos de Casavalle contaba con bachillerato. O sea que en doce años de crecimiento de la economía uruguaya no se formó un bachillerato en Casavalle. Sí hay dos cursos, creo que en el Liceo N° 73, a partir del año 2017, e innovó el Liceo Impulso, que en el año 2016 ya empezó con el primer curso de bachillerato en la cuenca de Casavalle. Esto es duro; esto duele. Esto es falta de visión de hacia dónde hay que apuntar.

Después escuchamos, como dijo el fiscal de Corte, que la población carcelaria de 2005 a la fecha ha aumentado exponencialmente de cuatro mil a doce mil o trece mil reclusos, y que la mayoría de ellos son jóvenes, pobres, adictos y analfabetos funcionales que no terminaron sus estudios. Esta es la consecuencia por no generar un proyecto educativo que los atrape. Hoy -la diputada Bianchi daba información en tal sentido-, a los jóvenes les preguntan: "¿Y ustedes por qué abandonan?". Y responden: "Porque no nos interesa lo que se está enseñando en los liceos". Y eso pasa en todos lados, porque en el Parlamento se hacen discursos que a los legisladores no les interesa, seguramente se aburren: algunos se retiran de sala y otros conversan de otra cosa. Pero en los liceos, ¿qué hacen? Se desenganchan y terminan abandonando, y después vemos el crecimiento exponencial que ha tenido la delincuencia, sobre todo en los estratos más sumergidos de nuestra sociedad.

Por eso reclamamos el cumplimiento de transformaciones en el sistema educativo que miren, privilegien y prioricen la situación del estudiante. Lo dijo el expresidente Mujica hace pocos días: en este país hay que hacer menos asistencialismo y más promoción de la juventud a través de políticas educativas. Mujica dijo: "Más y mejor educación". Habiendo ilusionado a un país durante todo el año 2010 con "educación, educación y más educación", lamentablemente hoy vemos que los resultados no son buenos. El sistema educativo en general, y el próximo Gobierno en particular, tendrá que realizar acuerdos para lograr transformaciones que refieran, sí, a un cambio de ADN; que tengan que ver con atrapar al estudiante, con seducirlo. Ya hoy se habla en el mundo de que el papel del maestro escolar es diferente.

——Con esto finalizo, señor presidente.

El maestro tiene que capacitar a los alumnos desde otro punto de vista, porque hoy toda la información está en un celular.

Por eso deberemos hablar de autonomía de centros educativos, de

reforma del estatuto docente, de elección de horas docentes, de ausentismo docente, de un marco curricular. Todas esos aspectos van a quedar para el próximo Gobierno que, como todos sabemos -o, por lo menos, olfateamos-, no va a tener mayoría absoluta. Entonces, entre todo el sistema político, deberemos generar los cambios que los jóvenes demandan, que el país necesita y reclama en forma urgente.

Muchas gracias.

SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).- Señor presidente: hace un tiempo, en una media hora previa, hablábamos de la posverdad. La posverdad supone eliminar el límite entre la verdad y la mentira, y creo que esto viene muy bien cuando analizamos temas educativos. Según lo que he escuchado en las sesiones de esta semana, y también en la prensa y en las redes sociales, el fenómeno de la posverdad claramente se centra en temas educativos.

Hemos escuchado decir que la educación es un caos, que a pesar de los recursos -se ha dicho varias veces-, somos los últimos en términos de medidas educativas. Se invirtió y no se avanzó: también hemos escuchado decir eso.

En ese sentido, quiero señalar que hay un error de concepto. Todos hablan de educación, y me parece bien: hablan aquellos que pasaron mucho tiempo por la educación, y quizás la educación no pasó por ellos -pero hablan-; hablan algunos que nunca pasaron cerca de un acto educativo, pero hablan. Y está bien que hablen, porque creo que la educación, la seguridad y la salud no son temas de los docentes, de la policía y de los médicos únicamente: son temas de todos. Por eso, está bien que hablen.

Expresaba que advierto un concepto equivocado, y es pensar que la educación es un algoritmo matemático, es decir: dinero para salario, más dinero para lo edilicio, más dinero para programas, es igual a mejores resultados académicos de los alumnos. Pero hay muchas variables a considerar: el tiempo, la inversión sostenida, el contexto sociocultural y sociofamiliar. Esto también tiene que ver con procesos.

Se hablaba de Finlandia, que comenzó a invertir muy fuerte en educación a los inicios de los setenta para lograr, recién cuarenta años después de inversión sostenida, resultados académicos interesantes en algunas pruebas estandarizadas internacionales, que no miden calidad educativa ni aprendizaje, como son las pruebas PISA, sino que establecen un *ranking* de países sobre la base de determinados contenidos que algún grupo de personas cree que son los relevantes.

Entonces, despejado el error conceptual, debemos ver una serie de avances, y voy a enumerar rápidamente diez.

En primer lugar, el notable avance en educación y en cobertura de la primera infancia.

En segundo término, la muy próxima universalización de cuatro años y el incremento de la cobertura para tres años. Esto ha logrado achicar brechas en el acceso a la educación, y antes no existía esta posibilidad.

En tercer lugar, el descenso de las altas tasas de repetición en educación primaria. Las escuelas del interior del país -esto también es positivo- lograron reducir sus tasas de repetición en forma más pronunciada que las de Montevideo, partiendo de los mismos niveles que los de la década del noventa.

En cuarto término, la enseñanza de la segunda lengua fue una realidad para 93.245 alumnos al finalizar 2017.

En quinto lugar, la matrícula en educación media pública, en todas las modalidades, cubría 319.114 alumnos en 2017, casi 27.000 más que en 2010.

Me pregunto qué hacían antes estos alumnos, porque los uruguayos somos los mismos hace mucho tiempo. ¿Qué hacían estos alumnos hace veinte, treinta o más años? ¿A quién le importaba retener o proteger sus trayectorias para que no se perdieran de educación primaria a educación media?

En sexto término, el egreso de educación media básica -es cierto que nos falta, pero menos-, que en 2017 alcanzó el 74 %. En la última década se registraron mejoras sostenidas en este indicador, que supuso un incremento de 6,6 % desde 2006. También el egreso de educación media superior ha ido mejorando en forma lenta.

Esto no se da debido a hechizos mágicos o a mundos idílicos, como se ha dicho; se da porque hay propuestas, programas, trabajo, gente y docentes comprometidos en esto.

El séptimo avance refiere a la creación, en marzo de 2017, de la Unidad de Gestión de la Educación en Contextos de Encierro, en virtud de los convenios existentes con secundaria, con el INR y con el Inisa. En 2017, la matrícula correspondiente a la población adulta fue de 2.896; de este total, 75 egresaron del ciclo básico, 53 de bachillerato y 1.842 continúan el proceso. Esto conforma un 68 % de la población que ha obtenido logros académicos, de gran importancia porque tiene que ver con otras situaciones y problemáticas que la comunidad entera necesita afrontar.

El octavo avance tiene que ver con las diversas acciones que el Consejo de Formación en Educación llevó adelante durante 2017 con el objetivo de lograr una formación de nivel universitario dentro del marco jurídico actual; por ejemplo, convenios con universidades internacionales, entre otras transformaciones. En lo que refiere al nivel universitario, estamos trabajando en ese sentido y ojalá haya acuerdos para que la Universidad de la Educación sea una realidad en este país.

El noveno avance refiere -podría tomarse como una anécdota, pero es un síntoma- a que algunos de nuestros alumnos concurren a diversos centros del mundo, como Estados Unidos, China. En la actualidad, están en México alumnos de la UTU, del Liceo N° 1 de la ciudad de Mercedes. ¿Esto fue producto de que tuvieron suerte? No. Fue producto del desarrollo de la tecnología, del trabajo sostenido, del apoyo permanente de la sociedad, de sus docentes, de sus equipos de dirección. No son una élite, ni de colegios privados.

El décimo avance se vincula con la Udelar y la UTEC, que no es el tema que estamos analizando, pero ayuda a ver el avance producido en el interior del país.

Por otra parte, me quiero referir a dos o tres aspectos ya manifestados en esta sesión, que están en el límite entre la verdad y la mentira, que constituyen una posverdad.

Se dijo que no se tocó la currícula. Les puedo decir que en el Consejo de Educación Inicial y Primaria se cambió totalmente la currícula, y no se hizo por imposición de las autoridades de la educación, sino a través de la consulta a las ATD de cada uno de los centros educativos y a la ATD nacional, con el aporte de los docentes. Sin embargo, cuando se quiere avanzar como ciudadanos, por ejemplo, en educación sexual, es decir, en derechos y obligaciones, respetando y aceptando la diversidad, parece que no se puede tocar la currícula. Vamos a ponernos de acuerdo:

o avanzamos en mejorar la currícula o no avanzamos.

También se habló de que no ha habido evaluaciones. Recién decía muy bien el señor diputado Mario García que, por primera vez en años, hay un Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Antes no existían instrumentos de evaluación y ahora sí. Asimismo, hay un sistema de evaluación de aprendizajes. Esto es nuevo y se hace, entre otras cosas, a través del desarrollo del Plan Ceibal. Hay un sinnúmero de aspectos para avanzar y completar estos temas evaluativos.

——Por otra parte, evaluando lo que se ha hecho, queremos señalar que se realizó el Congreso Nacional de Educación, que fue abierto y contó con la participación de todo el país, aunque hubo algunos sectores que se autoexcluyeron, que no participaron y no aportaron. Nos parece que ese era un ámbito interesante para dar un buen debate sobre los temas educativos, pero algunos no tuvieron en cuenta este instrumento.

Por último, queremos señalar que vamos a votar este Inciso referido a educación, que el Gobierno, a pesar de los escasos rubros con que cuenta, sigue priorizando. Queremos resaltar también los esfuerzos realizados por los diputados que reasignaron recursos para la educación a fin de completar, por ejemplo, los procesos de incorporación de los auxiliares de servicio. Recordemos que partíamos de la base de que los auxiliares de servicio en este país debían ser contratados por la comisión de fomento, y para pagarles el salario había que vender tortas fritas. Hoy, se está completando un proceso a ese respecto y también para solucionar inequidades que vienen de larga data.

Tendremos que seguir trabajando, buscando nuevos recursos, profundizando en las reformas tributarias, acompañando los procesos de pasaje de los alumnos de educación inicial a educación media y de educación media a terciaria. Sin duda, el camino está marcado y es largo, y en educación siempre debemos apostar a los procesos.

Muchas gracias.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señora presidenta: simplemente, quería señalar que tenemos que tomar los datos como información que viene de las instituciones que llevan adelante las estadísticas del país, y a las que debemos creer porque están hechas por técnicos que pertenecen a cualquiera de los sectores políticos con representación parlamentaria y entraron por concurso.

Los docentes que ahora ocupamos estas bancas y que trabajamos durante mucho tiempo en la educación secundaria -es mi caso-, en primaria, en la universidad, etcétera, podemos hacer una constatación de la realidad, y decir que las cosas han cambiado, que no son estáticas.

La realidad indica que la educación básica media es la que ha sufrido los mayores cambios en estos momentos -la educación primaria ya tenía niveles de matriculación del 90 % al año 2005, y también anteriormente- y es la que ha experimentado más avances en cuanto a retener e incluir alumnos. Esa es la gran noticia de la educación media: ha empezado a incluir poblaciones que antes no llegaban a esa instancia. Los que trabajamos en liceos de educación media -en mi caso, en el Liceo Nº 18, del que fue alumno el diputado Sabini; él lo comentó porque alumnos de ese liceo estaban en la barra- sabemos bien que esos centros de estudio tenían poblaciones procedentes de barrios muy carenciados y que han empezado a incluir de una forma distinta y a retener alumnos.

Todo esto tiene que ver con la brecha educativa. La buena noticia es que la brecha socioeconómica disminuyó, pasando de 13,2 % a 10,6 % para los jóvenes de quince años, de 24,8 % a 18,3 % para los jóvenes de dieciséis años y de 33,4 % a 21,5 % para los jóvenes de diecisiete años. Es una buena noticia, porque lo que permite disminuir la brecha educativa es que los jóvenes estén incluidos en la educación media. Los resultados en la educación media son a mediano y largo plazo; no podemos decir que empezamos a cambiar la educación media y ya obtuvimos resultados porque, como decía, son de mediano y largo plazo. Como ya han dicho varios legisladores, la educación es un proceso: primero tenemos que incluir para después ir viendo los resultados.

Para demostrar que realmente hubo un gran esfuerzo de estos gobiernos para generar cambios en la educación media, podemos decir, por ejemplo, que la Escuela Nº 168, de la zona de Casavalle, tiene un centro educativo asociado. ¿Qué quiere decir esto? Es un centro educativo que integra a la UTU; se inauguró entre 2017 y 2018.

Recuerden que cuando hablamos de educación media básica nos estamos refiriendo a la educación secundaria, y también a la educación técnico-profesional, la UTU, que históricamente ha sido la cenicienta del sistema. Siempre se consideró que los alumnos que no podían ir al liceo porque se entendía que no tenían capacidades para cursar una educación secundaria que les permitiera llegar a la universidad, debían ir a la UTU. Ese paradigma cambió radicalmente. La UTU y la educación secundaria están al mismo nivel. Inclusive, la UTU ha mejorado tanto su oferta educativa, que hoy los alumnos optan por ella, por lo cual la matrícula ha crecido mucho.

En la zona de Casavalle hay una UTU que tiene cursos de FPB, es decir, Formación Profesional Básica, inaugurados en el año 2010.

También hay una UTU en el barrio 40 Semanas, en la zona de José Batlle y Ordóñez, inaugurada hace dos años, en la que se cursa el ciclo básico.

Asimismo, en la zona de Casavalle están los Liceos Nos. 73, 67 y 69, con ciclo básico.

Esos liceos fueron inaugurados durante estos últimos años. ¿Por qué? Porque creció la relación entre la inversión en educación y el PBI y más aún el porcentaje de la educación en el presupuesto del Estado, llegando al 57 %.

Todo esto hace a la cobertura en educación media y a la inclusión en la educación media básica, porque si los alumnos no están incluidos en la educación media básica, mal van a poder terminar su escolaridad y cambiar la relación de la educación en este país.

Me parece que esto es sumamente importante.

Entiendo que también es muy importante la inclusión digital, que en Uruguay llega a 100 %. Por más que no queramos valorar este aspecto, es sumamente importante, sobre todo hoy, cuando estamos hablando de una economía digital, de nuevas tecnologías y de que nos comunicamos con el mundo de manera digital. Hay que tener en cuenta la importancia de aprender, desde chicos, la utilización de nuevas tecnologías, para poder incluirse en los nuevos modelos de producción.

Hoy, en la universidad, los alumnos acceden en forma gratuita a revistas arbitradas internacionalmente, de muy altos costos.

Tenemos un sistema nacional de investigadores, que permite que los investigadores de Uruguay se comuniquen gratis con los de distintos sitios del mundo

a través, precisamente, de la inclusión digital.

Lo que mencionaba sobre las revistas arbitradas es muy importante por la expansión del conocimiento generado en nuestras universidades, que puede ser compartido a través del mundo. Me parece que es sumamente importante y no lo estamos teniendo en cuenta.

Quiero hacer referencia a un evento que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo hace unos meses. Fruto de una coordinación entre varias instituciones -entre ellas, los ministerios de Educación y Cultura y de Industria, Energía y Minería y la ANEP- tuvo lugar un encuentro de estudiantes con investigadores y se presentaron varios proyectos, algunos de los cuales ganaron premios internacionales, y por eso los conocemos, y otros no. El presidente de la Cámara de Representantes, diputado Jorge Gandini, presentó ese evento y dijo públicamente que estaba comprometido con la Universidad de la Educación, porque es muy importante formar educadores para este país. En dicho encuentro había jóvenes mostrando lo que habían inventado, distintos trabajos de robótica, de investigación y demás. Se decía que si se juntaban todos los jóvenes de educación básica media y de educación básica superior con los investigadores de este país -centro Clemente Estable, Instituto Pasteur, etcétera- podían llegar a ocupar el estadio Centenario.

Los legisladores que ese día estuvimos presentes recordaremos el evento, así como lo manifestado por el presidente de la Cámara de Representantes, diputado Jorge Gandini, que en este momento ingresa a sala.

Quiero referirme a una encuesta, de diciembre de 2017, que refleja la percepción de la gente. Esta encuesta recoge la valoración que de la educación hacen los padres de los alumnos que estudian en este país.

——Adviértase que la educación inicial tiene un 70 % de aprobación; la educación primaria, 57 %; la educación técnica y media, 51 %, y la educación secundaria, 45 %. De manera que no se puede decir que todo está mal y que la gente percibe que la educación no ha avanzado.

SEÑOR VIERA (Nicolás).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR VIERA (Nicolás).- Señor presidente: hago mías las palabras de la señora diputada Galán y del señor diputado Sabini, quienes me representan a cabalidad.

Quisiera dar una opinión personal, que seguramente será compartida por algunos compañeros diputados y compañeras diputadas.

Este es un tema central. Por eso genera debate. Es bienvenido en la medida en que los legisladores y las legisladoras, que tenemos la responsabilidad de destinar dineros y redistribuir recursos económicos para un área tan sensible como la educación, lo hagamos desde el debate respetuoso y desde la responsabilidad que ello implica.

Es real que el compromiso que el Frente Amplio asumió ante la ciudadanía en su programa de Gobierno habla de tender al 6 % del PBI para la educación. Si bien no vamos a llegar, entendemos que el objetivo de nuestra sociedad debe seguir siendo alcanzar ese porcentaje porque nunca el país ha tenido tanta inversión en cantidad y en calidad con respecto a la materia educativa como durante los gobiernos del Frente Amplio. Ese es uno de los mayores logros que debemos defender. Si bien en los centros faltan cuestiones de infraestructura edilicia -hay que ver cómo los recibió el Gobierno del Frente Amplio al

asumir en 2005-, se ha podido sumar llegando a la ciudadanía más desposeída, lo que hace a esta realidad de la inversión presupuestal.

Uruguay tendría que darse tiempo para el debate en profundidad del tema, debido a su complejidad. Si recorremos el país, advertiremos que hay una escuelita rural cada pocos kilómetros. Eso obedeció a un paradigma de infraestructura y de inversión educativa del país hace ochenta o cien años relativo a sembrar escuelitas rurales para llegar a todos lados con la educación del Estado. Y también para escolarizar al peón de estancia y a sus hijos, en principio varones y después también mujeres, que vivían en esas comarcas rurales. Si lo pensamos, hay muy pocos liceos en el medio rural. En gran porcentaje, los liceos rurales se han construido durante el Gobierno del Frente Amplio. Así es que debemos quebrar el paradigma que decía que los hijos de los trabajadores no podían ir al liceo ni acceder a la Universidad. Hoy, advertimos que el 52 % de los gurises que egresan de la Universidad son los primeros de su familia en tener un título universitario. ¿Acaso como sociedad uruguaya no hay logros para festejar? Quizás la crisis de la educación, la crisis presupuestal que se intenta vender a la sociedad no repercute, porque si miramos la barra advertiremos que solo hay dos personas. Evidentemente, no hay una convulsión social que amerite que las barras se llenen de gente para reclamar al Parlamento en materia educativa.

Hablar de las mejoras que Uruguay ha tenido en materia de infraestructura edilicia es también hablar de lo que todos vivimos, de lo que todos padecimos en nuestros centros educativos. Yo fui a un liceo en el que estaba prohibido entrar al salón 8 porque se inundaba todos los días. Eso hace a la calidad educativa, que también tiene que ir de la mano de la política que el Estado quiera llevar adelante.

Me preocupa mucho y me quiero desapegar del discurso que criminaliza la pobreza: "Si sos pobre, parece que sos más delincuente que el resto". Si ahora entramos a Internet, vamos a ver que en estos días también hay algún guante blanco procesado con prisión, y que no es pobre ni de Casavalle ni de ningún otro lugar.

Vamos a hablar en serio. Hablemos de lo que realmente importa: la inversión histórica que Uruguay ha tenido en materia educativa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar la señora diputada Lilián Galán.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- He finalizado, señor presidente.

SEÑOR GARCÍA (Mario).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GARCÍA (Mario).- Señor presidente: queremos aclarar que lo de la criminalidad no lo dijimos nosotros; lo dijo el señor fiscal Jorge Díaz. Expresó que la gran mayoría de la población carcelaria, que aumentó de cuatro mil a doce mil reclusos, son jóvenes, pobres, adictos y analfabetos funcionales. Creo que es un dato de la realidad sobre el que debemos trabajar.

Hemos recorrido y visitado las instituciones educativas de la zona de Casavalle; el sistema de información geográfica acerca de la oferta educativa de la ANEP indica que sobre un universo de 10.000 individuos en edad liceal, hoy están escolarizados 1.853 en secundaria y 915 en la escuela técnica. O sea que falta muchísimo. Esto sin contar a los individuos de más de diecisiete años, que deben ser decenas de miles.

Nosotros traemos estos datos, que quizás no tengan el rigor científico del

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero sí tienen el rigor de la realidad. Cuenca de Casavalle es una zona de la que el Estado está ausente, como muchas veces vemos, escuchamos y sentimos. Una parte importante de esa ausencia refiere a políticas educativas que miden a esos individuos que no tienen dónde culminar su formación. Hay dos cursos de bachillerato iniciados en 2017; evidentemente, es demasiado poco.

¿Que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar. El compromiso está. Las escuelas rurales son un centro de referencia en las comunidades, pero no educativo sino social. Detrás de una escuela rural, está toda la población; en el interior créaseme que es así.

Bueno, en Cuenca de Casavalle, como en todas las zonas de contexto crítico, debemos lograr que los centros educativos cumplan una función social, como dijeron varios estudiantes en el Parlamento. Para eso, hay que seguir edificando.

Lamentablemente, el plan de inversiones previsto para este quinquenio, en la modalidad PPP, va a ser postergado. Hay cincuenta y ocho centros planificados, que seguramente se van a construir en 2020 y 2021. Esto se desprende de la comparecencia de la ANEP a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Ese es el trabajo que hay por delante: ver la realidad, asumirla e intentar transformarla.

Hoy vemos -lo queremos decir- que existen propuestas lanzadas en campaña electoral relativas a la creación de 163 centros educativos modelos en zonas de contexto crítico. ¡Bienvenidos sean si los concretamos! No podemos negar que en Casavalle hay modelos que están funcionando. El Liceo Impulso es uno de ellos. Los chicos ven una luz de esperanza para su futuro; no solo ellos, también los padres y la comunidad en general. Asimismo se ha acortado la brecha educativa entre los que menos tienen y los que más tienen.

Era nuestra necesidad aclarar este punto.

Reitero que los datos no cuentan con el rigor científico del Instituto de Evaluación Educativa, pero sí surgen de una zona determinada de Montevideo -Casavalle- que, lamentablemente, es noticia un día sí y otro también por los hechos de violencia y por el delito que allí campean.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: evidentemente, la brecha socioeconómica, que mencionamos, es lo que hizo que hoy las cárceles estén llenas de jóvenes y de pobres; no nos cabe la menor duda. Por eso decíamos que esa brecha se ha ido acortando y que, en lugar de estar en la cárcel, esos jóvenes están incluidos en la educación media.

No podemos decir que en Casavalle el Estado está ausente. Precisamente, en Casavalle el Estado está muy presente. Lo vemos en la televisión todo el tiempo cuando se habla de los realojos de Casavalle y de la intervención de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Interior. En ese barrio hay seis escuelas públicas, una de las cuales ha sido modelo.

En la plaza pública se encuentran las familias y se realizan espectáculos. Para ver los partidos del mundial en pantalla gigante, se reunieron en la plaza de Casavalle los alumnos de las escuelas públicas de la zona, acompañados por sus maestros y por algunas autoridades.

——Señor presidente: le pido que me ampare en el uso de la palabra…

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- La Mesa solicita que se haga silencio para escuchar a la oradora.

Puede continuar, señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: decía que en Casavalle está la Seccional Nº 17, del Ministerio del Interior, y los cuartelillos de bomberos.

Como ya dijimos, antes del año 2005, solo estaba el Liceo Impulso, que no avalamos como liceo público -aunque reciba fuertes donaciones del Estado-, porque lo pagamos todos, pero solo van alumnos seleccionados.

En Casavalle están -lo reitero, porque parece que no se escuchó y es un dato de la realidad: ¡es innegable la cobertura en educación en el Uruguay de hoy!-: el Liceo Nº 67, el Liceo Nº 73, la UTU, con un FPB en el 2010, el Liceo Nº 69 y una UTU muy importante en la zona de Batlle y Ordóñez y Propios, donde antes había dos grandes asentamientos, Paso de las Duranas y Joanicó, ahora realojados. Hoy es el parque perimetral. No hay más asentamientos.

Antes, como no había liceos ni educación media, los alumnos se trasladaban a otros lugares, pagando boletos, para concurrir a otros centros de educación media superior. Hoy, esos centros educativos están instalados en esa zona. Como decía: están el Liceo Nº 67, el Liceo Nº 65, la UTU FPB, la Escuela Nº 168, con un centro educativo asociado 2017-2018.

Por último, ya que se habla de la presencia del Estado, quiero señalar, que cinco niños de la Escuela Casavalle -salió en todos los informativos- están hoy en China presentando proyectos que elaboraron junto a sus maestros y el aporte de otras instituciones, como el Ministerio de Industria, Energía y Minería -que brinda material para la creación de robots y demás- y la Facultad de Ingeniería.

Así que hay presencia del Estado en Casavalle, y ese es un dato de la realidad.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señor presidente: se trajo el tema del barrio Casavalle. A todos nos preocupa cómo el Estado aterriza en el barrio. Me pregunto -este es un relacionado con las políticas públicas- si cada centro educativo tiene que recibir solo a chiquilines de su barrio, y si no sería positivo, para el desarrollo de la convivencia que allí llegaran gurises de diferentes barrios, rompiendo con la estratificación de ingresos.

Se habló del Liceo Impulso, y quizás discutamos sobre esto más adelante, en el correr del debate de esta Rendición de Cuentas. Lo primero a decir es que en un 81,5 % se financia con recursos estatales, con recursos públicos. En el año 2017, la suma de esos recursos fue de $ 68.000.000.

Hace un momento, la señora diputada Lilián Galán mencionaba los liceos públicos de la zona. En ningún centro educativo público ponemos más plata por estudiante que en el Liceo Impulso. Entonces, cuando se habla de éxito educativo y de modelo a seguir, bueno, creo que en una rendición de cuentas esto hay que considerarlo.

Además, fui generoso, porque dije que se pusieron $ 68.000.000 en el 2017 para 517 estudiantes. Eso nos da $ 133.000 por estudiante, cuando el Estado gasta $ 80.000 por estudiante en la educación media. Hay una diferencia bastante importante. Decía que fui generoso, porque a esa cifra hay que agregar casi el 20 %, que es lo que efectivamente terminan donando las empresas, y lo

correspondiente a las exoneraciones del artículo 69. Es decir que, por estudiante, el Liceo Impulso gasta mucho más que cualquier centro educativo público de la zona.

A veces, somos un poco injustos con la educación pública cuando le exigimos excelentes resultados y la comparamos con centros que son modelo. Claro, quiero saber cuántos centros educativos del país cuentan con la inversión que recibe el Liceo Impulso. Creo que muy pocos.

Ahora, el Liceo Impulso tiene como un enorme *lobby* a su alrededor, entre otras cosas, porque fue generado por uno de los actuales candidatos a presidente y por el principal asesor en educación del Partido Nacional, lo que es totalmente loable y factible; no lo cuestiono, pero creo que debemos balancear las críticas al sistema educativo público cuando no tiene los elementos para generar un sistema que otorgue a los chiquilines todo lo que necesitan.

Por ejemplo, el Liceo Impulso cuenta con un excelente equipo multidisciplinario. Por suerte, hay psicopedagogos, psicólogos, docentes que hacen tutorías para esos quinientos estudiantes. En algunos departamentos del país, tenemos ese mismo equipo para todo el departamento.

Quería introducir esto en el debate, aunque sé que puede generar molestias, porque ya que estamos hablando de presupuesto, debemos discutir con los números arriba de la mesa.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Antes de dar la palabra a la señora diputada Graciela Bianchi Poli, digo que es de esperar que no se genere un debate paralelo a través de las aclaraciones, porque hay legisladores anotados que están esperando para intervenir.

De todos modos, asiste derecho a quien sienta que es necesario hacer una aclaración en medio del debate.

Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: ya se habló de la Universidad y de la UTEC, que corresponde tratar después, en otros Incisos; en este caso, tenemos que hablar de la ANEP.

Pedí la palabra para hacer una aclaración antes de que se hiciera alusión al Partido Nacional. No entendí lo del candidato a la presidencia ni lo del asesor. Honestamente, hay cosas que ni siquiera me molesto en contestar. Todos conocemos el origen del Liceo Impulso. Punto y aparte. No vale la pena contestar.

Ahora, nunca pensé que un gobierno, presuntamente de izquierda, fuera a hacer una relación costo-beneficio de lo que se gasta por estudiante, pero es así.

¿Saben una cosa? Conozco el Liceo Impulso porque era de la zona y muchos de los chicos del liceo que yo dirigía, el Bauzá, venían de allí, lo mismo que al Jubilar, y he tenido contacto con sus directores. ¿Soy partidaria de esos centros de educación pública y financiación privada? En principio, no. No existían antes; surgieron por algo: porque el Estado no daba la cobertura adecuada. Que haya liceos y escuelas no quiere decir que den una cobertura adecuada.

Se habla mucho de las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. El otro día, tuve la desgracia -uno sale deprimido- de ir a una, pero no la voy a nombrar, porque no quiero estigmatizar a la institución ni a la zona. Los chicos van de la hora 8 a la hora 16. Se les da el desayuno, el almuerzo y la merienda y se van a las cuatro de la tarde. Le pregunté a la directora: "¿Cuándo aprenden?". ¡Nunca!

No estamos tan bien. Lo cierto es que hay que darles todas las comidas. Imaginen lo que esto significa en una escuela con más de doscientos chicos cuando hay que entrarlos al comedor y sacarlos tres veces. ¡Parece un chiste!

Con respecto a la relación costo-beneficio, lo primero que quiero decir es que la plata del Estado siempre es plata del contribuyente. ¿Quién es el Estado? ¿Es el Gobierno? ¿Volvemos a confundir? El Estado es el contribuyente, y el contribuyente es dueño de su dinero y puede direccionar parte de su altísima carga impositiva.

Antes de continuar, aclaro que es mentira que en el Liceo Impulso -de la misma manera que con respecto al Jubilar- se selecciona. Eso es falso. Si quieren criticarlo por otras razones, háganlo, pero no por eso, porque es falso; lamento mucho tener que usar ese tipo de término, pero no tengo más remedio.

Vuelvo a referirme a la relación costo-beneficio.

Reitero que de 2005 a 2010 se destinaron US$ 1.500.000.000 por año y, en adelante, más de US$ 2.000.000.000 por año. ¿Saben qué? Realmente, se gastó mal. Lo digo teniendo en cuenta la diferencia que existe con lo que se invierte -no se gasta; tampoco es de izquierda decir que se gasta en educación- en el Liceo Impulso, que aparentemente, son alrededor $ 120.000 por alumno, y los resultados que obtienen. ¡Denme muchos liceos con esos resultados!

¿Para qué quiero tener abiertas instituciones educativas que a esta altura del año están vacías? Vayan a la mayor parte de las instituciones educativas y verán que es así. El otro día también fui al Liceo N° 50 -esta vez, lo menciono, porque estoy autorizada por los consejos; espero que no le pase nada a la directora-, y en el turno vespertino había un promedio de cinco alumnos por grupo. Como nadie pierde el año porque no se controlan las inasistencias, las instituciones están vacías. Después, tenemos estos resultados.

En consecuencia, se está gastando mal. Dicho de otra manera: prefiero gastar $ 120.000 por alumno y que haya muy buenos resultados y no gastar $ 85.000 y que no haya resultados. Esa es la realidad; todo el mundo lo dice. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor Arim, dijo hace unos días que el 20 % de los muchachos que llega a esa institución no conoce el idioma español. Yo no sé a quién vota Arim ni me importa; el problema es que está desesperado.

Entonces, ¿quieren seguir negando la realidad? Es el síndrome de Hubris, sin ninguna duda.

SEÑOR GARCÍA (Mario).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GARCÍA (Mario).- Señor presidente: voy a ser muy breve.

Simplemente, quiero decir que puse el modelo del Liceo Impulso porque es el que conozco; hay otras instituciones similares de gestión privada.

En el Liceo Impulso el horario es desde las 8 hasta las 18, de lunes a viernes, y de la hora 9 a las 12 los sábados. A los alumnos se les dan los uniformes, los materiales de trabajo y tres comidas diarias. Como decíamos hoy, el índice de repetición es de 3 % y el de desvinculación de 4 %.

Lo cierto es que ese modelo funciona. No se puede medir esto en cuánto sale cada alumno. Entonces, es hacia donde debemos apuntar.

Hablamos de que se invierte más en educación. Es cierto y hay que seguir invirtiendo mucho más, pero hay que hacerlo mucho mejor. Cuando los modelos funcionan, hay que tenerlos en cuenta. Los mencionamos con esa intención: poner

sobre la mesa los proyectos que están funcionando. No soy técnico en la materia -lo dije al principio de mi intervención-, pero me siento en la obligación de decir lo que pienso: si hay un modelo que funciona, por lo menos, deberíamos analizarlo. Además, funciona con la plata de todos los uruguayos.

Por lo tanto, esa era nuestra intención al referirnos a este modelo. Seguramente, será objeto de propuestas electorales. ¡Ojalá el tema de la educación esté en la próxima campaña electoral como la principal prioridad de todas las fuerzas políticas, porque el país lo reclama!

Gracias, señor presidente.

SEÑORA MATIAUDA (Graciela).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA MATIAUDA (Graciela).- Gracias, señor presidente.

Después de escuchar con mucho respeto a todos los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, siento desagrado, disgusto y dolor, porque lo único que algunos tienen para destacar del Liceo Impulso -el diputado que intervino hace uno momento ya dijo que es de tiempo completo y mencionó todo lo que se le proporciona al alumno-, el único título o rótulo que le ponen es que fue dirigido por alguien que se postula a presidente de la República. Lo digo con lástima.

En vez de eso, el diputado tendría que decir: "¡Muchos más Liceos Impulso necesita el país!". Necesitamos muchos más institutos en lugares estratégicos como en el que está anclado este liceo.

También lamento que se olvide que el dinero que se le da al instituto Impulso, sea público o privado, es de todos los uruguayos. No hay dineros de primera ni de segunda; hay un solo tipo de dinero.

Gracias, señor presidente.

11.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

——Continúa la consideración del asunto en debate.

La Cámara estaba discutiendo el Inciso 25, ANEP.

Tiene la palabra el señor diputado Walter Gonzalo Martínez.

SEÑOR MARTÍNEZ (Walter Gonzalo).- Señor presidente: vinimos a esta Rendición de Cuentas con mucha motivación, porque teníamos expectativas de seguir avanzando en la obtención de más recursos para la educación o, por lo menos, para algunas de sus áreas, como sucedió en la rendición de cuentas anterior. Sin embargo, nos encontramos con otra realidad: una austeridad absoluta, contundente en cuanto gasto social, más allá de unas pocas monedas que se dan a algunas áreas.

Este debate comenzó hace dos días, coincidiendo con el Día de los Mártires Estudiantiles, con esa inmensa marcha de estudiantes y trabajadores de la educación y del pueblo en general que partió de la Universidad -una vez más- y llegó hasta el Parlamento cuando comenzaba votarse la Rendición de Cuentas. Esa marcha tuvo y tiene como objetivo homenajear a los estudiantes asesinados por luchar, entre otras cosas, por un mayor presupuesto, por una educación de calidad. Esa lucha implicó en aquel momento -y sigue implicando- enfrentarse al gobierno de turno, que es el que niega la concreción de esas reivindicaciones.

En la sesión de ayer se dijo algo que compartimos plenamente: el mejor homenaje a los mártires estudiantiles es otorgar el 6 % del PBI a la ANEP y a la Udelar. Eso sucedería si el Gobierno hubiese cumplido con su promesa electoral.

En dos oportunidades escuchamos decir en esta Cámara que no hay gente en la barra, que está vacía porque la gente no tiene nada de qué quejarse. Decir eso es negar la realidad. Decir eso es desoír a las organizaciones sociales y a las instituciones educativas que han pasado por el Parlamento, por la Comisión que analizó la Rendición de Cuentas. Decir eso es ignorar la cantidad de estudiantes que estuvieron ayer en la movilización. Decir eso es negar la cantidad de ocupaciones por presupuesto que hubo en todos los centros educativos en los meses anteriores.

Creer que no hay gente en la barra porque todo está bien sí es vivir en el país de las maravillas. Nosotros creemos que si no hay nadie en la barra es porque el mensaje del Gobierno ha sido muy claro: no se va a dar el 6 % del PBI para la ANEP y la Udelar; no se va a cumplir con la promesa electoral. Si no hay nadie en la barra, es porque ya todos sabemos que el Gobierno seguirá prefiriendo beneficiar a las multinacionales y pagar de la deuda externa antes que cumplir con las necesidades educativas, porque no se le da el 6 % a la ANEP ni a la Udelar, pero sí se destina esa misma cantidad de plata, unos US$ 3.400.000.000 este año para pagar la deuda, y también se dirige una cifra muy similar al 6 % del PBI para continuar beneficiando a las multinacionales, librándolas del pago de impuestos, que recaen sobre los trabajadores.

En esta Rendición de Cuentas también vemos cómo el Gobierno le da mucha plata a UPM y a las PPP, más que a toda la educación junta. Basta con ver los artículos; allí vamos a encontrar las cifras.

Creemos que hay que entender que el 6 % no es un capricho antojadizo de las organizaciones sociales, sino una necesidad material concreta de la educación, además de ser un consejo de las organizaciones internacionales. Obviamente, no hay que seguir todos los consejos, pero algunos sí.

Estamos convencidos de que las condiciones materiales determinan la conciencia y la forma de vida de los individuos; la educación no escapa a ello; veamos lo que pasa con el presupuesto que recibe. Veamos los problemas concretos de la educación a raíz de ese poco presupuesto.

El salario es el ingreso económico con el que cuentan los trabajadores para resolver su supervivencia. En ese sentido, el Gobierno no cumple con garantizar el salario digno para los trabajadores de la educación, para todos los trabajadores de la educación.

En esta instancia, se dan unos pocos millones de pesos, que no son suficientes, y el Gobierno lo sabe. Por eso, habilita a usar en otra cosa plata que la ANEP ya tiene destinada a inversión, y también, se vuelve a utilizar el fondo por inasistencias para contener urgencias.

Y como si esto fuera poco, una vez más se plasma una expresión de deseo, en este caso, en uno de los artículos finales, el artículo 347, que establece que en caso de que haya un incremento de ganancias superior al previsto, daremos plata a la educación. Una vez más, aparece una expresión de deseos del Gobierno en una rendición de cuentas.

En sala se dijo que el Gobierno ha avanzado en el camino del cambio de las propuestas educativas. ¡Vaya si lo habrá hecho! Profundizó en las políticas neoliberales, esas que convierten la educación en una mercancía. Se impulsaron, por ejemplo, los proyectos Promejora y Profime. Se abrieron las puertas a las empresas privadas para que tuvieran plena injerencia en la educación pública.

También se manifestó que muchos nos negamos a participar en los últimos congresos educativos. Es así. También se negó la FEUU. Nuestra fuerza política se negó, y el motivo es bien claro: no vamos

a definir el rumbo de la educación pública con aquellos que se enriquecen con ella. Participar en un congreso de estas características es desconocer las resoluciones del congreso Maestro Julio Castro. Se trata de resoluciones que no han sido aplicadas, que fueron negadas en cada uno de los congresos y, por supuesto, de la ley de educación.

Se habló de los recursos humanos en los centros educativos -compartimos esa afirmación-, y se expresó con total claridad que la inmensa mayoría de los centros no cuenta con equipos multidisciplinarios. Eso se resuelve con presupuesto, ¡no hay vuelta! Esos equipos multidisciplinarios estarían destinados a resolver los problemas sociales y psicológicos de los estudiantes y, por supuesto, de los docentes. Estos equipos multidisciplinarios vendrían muy bien para aplicar la ley de violencia de género, y para ello faltan recursos económicos, ¡no hay vuelta!

Se plantea el crecimiento en infraestructura, y a nosotros nos da la sensación de que cuando se alude a esto se tiene el mismo criterio que usa el gobierno cuando habla de soluciones habitacionales. Nunca se habla de una casa concreta; nunca se habla de un liceo concreto o de una escuela concreta; se habla de soluciones educativas, de soluciones habitacionales.

Veamos, por ejemplo, lo que sucede con los *containers:* uno arriba de otro en patios que se inundan; cuando llueve no se escucha lo que se dice adentro; cuando se rompe el aire acondicionado, se mueren de frío o de calor, según el clima. Se prefiere ir por este camino en vez de utilizar los recursos estatales, como la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¡Vaya que sí se utiliza para resolver los problemas edilicios que dejan las empresas privadas! Se prefiere avanzar por el lado de la privatización con las PPP, destinando millones de dólares a algo que no es una solución real, porque se pierde control.

Nos preocupa el avance privatizador que se esconde en muchos de estos artículos y en los anteriores, habilitando más centros educativos privados y carreras como la formación docente en universidades privadas y, obviamente -como ya se dijo en sala-, avanzando en la PPP.

Creemos que recursos hay; por eso hicimos un conjunto de propuestas en las que se argumenta y se define con claridad de dónde sacar la plata. Algunas las argumentaremos cuando llegue el momento, otras ya las defendimos en oportunidades anteriores y no contaron con los votos del oficialismo. Se sigue prefiriendo beneficiar a las multinacionales, el pago de la deuda externa, avanzar en los consejos que da el Fondo Monetario Internacional y no en la liberación nacional y el socialismo -¡tan simple como eso!-; no se apuesta por una educación emancipadora. Además, se habilita a que los privados tengan injerencia, a que tomen decisiones estratégicas en políticas educativas.

A un congreso de esos es claro que no vamos a ir. La izquierda no estaba presente en ese congreso.

Repito: creemos que la plata está; como decíamos, lo vamos a argumentar en la discusión de cada artículo que presentemos. Apelamos a que en lo que queda por delante de la Rendición de Cuentas contemos con los votos del oficialismo, por ejemplo, para tocar las reservas internacionales y resolver de una vez los problemas de infraestructura, sin tener que apelar a los *containers* o a la PPP.

Podemos cortar con el subsidio a las carreras de caballos; aquí está la propuesta. La Universidad pide ajustar las partidas presupuestales de alimentación, de medicamentos y de construcción, que

es exactamente el 10 % de lo que se le da a los premios de las carreras de caballos.

——Pero el Gobierno prefiere seguir cubriendo las carreras de caballos en vez de actualizar las partidas de alimentación, de medicamentos y de construcción para la Universidad.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR URRUTIA (Nicolás).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR URRUTIA (Nicolás).- En el análisis del Inciso 25, relativo a la educación pública, se da eso que en la teoría tantas veces nos dicen: los extremos se terminan juntando.

Podemos analizar algunas incongruencias. Por ejemplo, se plantea de dónde sacar los recursos, pero cuando se consideró en la Cámara el impuesto a las jubilaciones de privilegio en las Fuerzas Armadas, fuerzas que se dicen de izquierda no lo votaron. Nos plantean esos argumentos de izquierda… ¡justo al Frente Amplio se lo dicen! ¡Por favor!

Más que nada me quería referir a lo que plantea la derecha, haciendo referencia a un comparativo. No podemos hablar solo de lo que queremos hacer cuando seamos gobierno, sino de lo que hacemos nosotros y de lo que ya hicieron ellos en algún momento. No podemos olvidar que si uno estuvo en el ejercicio del poder e hizo ciertas cosas, no puede decir que hará otras, porque ideológicamente tiene el chip de que se deben hacer de determinada forma.

Hace poco lo vimos en el caso de Macri. Durante la campaña electoral en Argentina, en un debate televisivo en el que participó con Scioli, prometió que no iba a hacer muchas cosas; sin embargo, hizo cada una de ellas, afectando -obviamente- a toda la población argentina, sobre todo, a la clase trabajadora, llevando al país hermano a una pobreza de más del 30 %, niveles similares a los de Nicaragua y países del Caribe, cosa que antes no se veía.

Quiero hacer referencia al último Gobierno del Partido Nacional y al primer Gobierno del Frente Amplio. En un documento relativo a crecimiento e inclusión, se compara el Gobierno de Lacalle con el primer Gobierno de Vázquez. Se dice que en ambos períodos se dieron condiciones favorables desde el exterior, que hubo crecimiento, pero no se distribuyó de igual manera. También se plantea que, a pesar de que Lacalle no recibió un país en crisis -como sí le ocurrió a Vázquez-, comenzó con un ajuste fiscal y limitó el incremento salarial a 15 %, cuando la inflación era de 33 % en promedio anual en el quinquenio. La pérdida salarial fue importante durante el mandato de Lacalle, y recién hubo una pequeña recuperación al final del período; esa recuperación fue del 20 % en el primer período del Frente Amplio: siete veces más.

En el primer quinquenio de los noventa, las políticas neoliberales llevaron a la pérdida de más de noventa mil empleos en la industria, y el rubro industrial es uno de los que mejor redistribuye a través del salario de los trabajadores. En ese mismo período, la inversión en salud y en educación se incrementó -es verdad: se incrementó- un 15 %; en el primer período de Vázquez ese aumento fue de 60 %.

Con relación al tema que estamos tratando, en ese documento figura que, en su primer período, el Frente Amplio llevó la inversión en educación al 4,5 % del PBI, mientras que en el primer quinquenio de los noventa fue tan solo del 2,3 % del PBI.

Nos dicen: "Está muy bien que se haya aumentado el rubro para la educación; ¡ojalá sea más!", pero también tenemos que fijarnos qué pasó en aquel período; el hombre es el único ser condenado a

tropezar dos veces con la misma piedra. Creo que hay que fijarse no solo en lo que hay que hacer, sino en lo que hicimos cuando ejercimos el gobierno.

Por eso creo que la gente no debe tener en cuenta tanto las promesas, sino ver si los partidos, cuando gobiernan, realmente cumplen con lo que dicen.

Varios diputados de nuestra fuerza política lo dijeron: hay muchas metas que no hemos podido alcanzar, pero mejoramos muchísimo los niveles en los que estaban muchos sectores cuando la derecha gobernaba este país.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR ACOSTA (José Luis).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado José Luis Acosta.

SEÑOR ACOSTA (José Luis).- Señor presidente: en el marco de la discusión y aprobación de la Rendición de Cuentas, es de orden saludar el trabajo de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, especialmente, el de su presidenta; el de los compañeros de la bancada del Frente Amplio, y el de los colegas legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, que -como ya se ha dicho- se llevó a cabo en un clima muy ameno, de buena discusión.

Sin que esta intervención represente algún tipo de alusión personal ni política, diré que una legisladora habló de la *hybris* de los griegos, ese pecado que ellos querían evitar: la soberbia, la desmesura. Los griegos creían que la vida trataba de simetrías: pasaban tantas cosas buenas y tantas cosas malas. Entonces, si venías en una racha muy buena, sabías que algo malo te podía pasar.

Nos gustaría contextualizar algunas cosas. Cuando recibimos a la ANEP, el presidente del Codicén, profesor Netto, al hacer la presentación del articulado, expresó: "La discusión del presupuesto en función de recursos materiales a veces no nos genera los espacios y los tiempos para discutir sobre los avances o dificultades de las propuestas presentadas por la Administración. Esos tiempos siempre son escasos, muy exiguos, y no nos permite fortalecer las instituciones y habilita a que cada uno crea que la educación debe ser como lo entiende cada uno, o que la educación solo tiene condiciones de avanzar en función de que se haga lo que cada uno cree se debe hacer.- […] Es la primera vez que en la Administración Nacional de Educación Pública se presentan metas cuantitativas para hacer un seguimiento real e informar al Parlamento y a la población respecto de sus logros y debilidades".

Al cumplirse tres años de este tercer gobierno del Frente Amplio, creemos que es importante contextualizar algunas cosas. El nuestro es uno de los países de América Latina y el Caribe con menos pobreza. Mientras que la pobreza afecta al 30,7 % de los latinoamericanos, en Uruguay ese porcentaje -según la Cepal- desciende al 9,4 %. Uruguay también es líder en inclusión social en Sudamérica, y se ubica en el octavo puesto en el mundo, según el *ranking* de economías emergentes inclusivas del Foro Económico Mundial; conjuntamente con Chile y Costa Rica Uruguay es uno de los tres países latinoamericanos con mejor índice en progreso social, según la organización Social Progress Imperative, demostrando que el crecimiento con distribución y equidad es la mejor manera de alcanzar el progreso social.

También el nuestro es el país más igualitario de América Latina en acceso a internet. Uruguay ocupa el primer lugar en la región en velocidad, precio de banda ancha e internet, y cobertura LTE. Somos referentes en materia de sociedad de la información: ocupamos el primer lugar en la medición de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones y obtuvimos el Premio Mundial al Desarrollo Digital Sostenible de las Naciones Unidas.

Asimismo, nuestro país tiene la mayor cobertura de energía eléctrica en América Latina, con una tasa de 99,7 %, gracias a la introducción de energía eólica, a la construcción de la planta de ciclo combinado, a los emprendimientos de biomasa y fotovoltaicos, y a una planificación estratégicamente pensada.

Ahora bien, en este contexto, corresponde hablar de algunas metas educativas que hemos alcanzado.

Hoy hay casi trescientas escuelas de tiempo completo. La educación uruguaya apuesta a dar respuesta educativa adecuada a las situaciones sociales de la época en la que vivimos. Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada vez más hijos de padres con bajo nivel educativo alcanzan estudios universitarios. Hemos reducido la brecha digital a través de la entrega de ceibalitas y de *tablets* para preescolares, liceales y docentes.

Los niños de familias carenciadas no solo tienen computadoras gratis, sino internet gratuito. Hoy, el 100 % de las escuelas del país están conectadas a internet. Somos referentes para la región y el mundo en conectividad escolar. Nuestro país invierte por año $ 1.250.000.000 en boletos gratuitos de 120.000 estudiantes de educación secundaria para favorecer su acceso a la formación.

En 2005 comenzó una tendencia constante al alza del salario docente. El salario real de los docentes ha crecido un 82 % entre el 1º de enero de 2005 y el 1º de enero de 2017. Creo que por ser reiterativo uno es aburrido, pero es interesante repasar esto.

En 2005, creamos el programa Maestros Comunitarios, que atiende a escolares en situación de vulnerabilidad social con bajo rendimiento escolar. Ideamos el programa de Salud Visual, totalmente gratuito y voluntario, que atiende a escolares de cinco años. Creamos los centros universitarios regionales, descentralizando el acceso a la educación. Avanzamos en descentralización educativa mediante la creación de la Universidad Tecnológica, que ofrece carreras terciarias de perfil tecnológico, en distintos puntos del país.

Entre 2007 y 2016, la oferta académica para el interior pasó de 41 a 81 carreras, y el ingreso de estudiantes provenientes de esa zona creció a un promedio anual de 14 %.

Apostamos a mayor equidad en el acceso a la lectura a través de la Biblioteca Ceibal, que dispondrá de dos mil libros gratuitos para toda la población.

Unos 80.000 jóvenes participan cada año en los clubes de ciencia, un escenario de educación no formal en que niños, jóvenes y adultos pueden potenciar sus ideas y creatividad a través de la investigación.

Creemos que construir un fuerte sistema educativo público, como gran herramienta de transformación social, requiere responsabilidad con respecto a lo que dice cada uno cuando opina; cuáles son las expectativas que se generan según lo planteado; cuáles son los espacios, los recursos, los medios, las dificultades y los desafíos. Por eso creemos que, cuestionando esa vida simétrica en la que creían los griegos, si pasamos raya y hacemos la cuenta, son más las cosas buenas que las cosas malas.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Hay un artículo sustitutivo al 247, que figura en la Hoja Nº 18, presentado por la señora diputada Lilián Galán.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 247, tal como viene de la Comisión.

——Cero en setenta y ocho: NEGATIVA. Unanimidad.

Se va a votar el sustitutivo que figura en la Hoja Nº 18.

——Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 248.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el artículo 249.

Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 19, presentado por la señora diputada Lilián Galán.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 249, tal como viene de Comisión.

——Cero en ochenta: NEGATIVA. Unanimidad.

Se va a votar el sustitutivo de la Hoja Nº 19.

——Ochenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 250.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 251.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 252.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 253.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 254.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 20, presentado por los señores diputados Gustavo Penadés, Sebastián Andújar, Omar Lafluf Hebeich y Benjamín Irazábal.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- ¿Me permite, señor presidente?

El Partido Nacional retira esta propuesta, porque ya está incluida en un artículo que se votó en el Inciso del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Entonces, se retira la Hoja Nº 20.

Se pasa a considerar el Inciso 26 "Universidad de la República", que comprende los artículos 255 a 259, inclusive.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: hoy tuvimos el placer de leer las palabras del rector Markarian en el diario *El País*; siempre nos gusta escucharlo y verlo actuar.

Para referirme al tema de la Universidad de la República, voy a tomar algunas de sus palabras. Una frase

concreta, dice: "[…] el colchón de dinero de la Udelar se va achicando y no hay nada para nuevas políticas".

Lo demás no está entrecomillado, porque simplemente saqué lo medular para hacer la cita lo más sucinta posible a fin de evitar discusiones -supongo-, porque es el rector Markarian quien lo está diciendo. Afirma que la Universidad recibirá $ 430.000.000 extra, cuando pidió $ 9.133.000.000, y agrega que no se podrá aumentar el número de becas, instrumentar más posgrados, instrumentar la carrera de ingeniería física-matemática e ingeniería de medios ni poner en funcionamiento la especialización en enfermería.

Dijo algo positivo con respecto a la propuesta de legisladores del Partido Nacional de obtener $ 80.000.000 por el ahorro de combustible, teléfono y electricidad de los ministerios.

Para terminar -porque creo que cuando habla Markarian está todo muy claro-, en la Comisión preguntamos al rector qué pensaba con respecto a que menos del 2 % de los alumnos de los quintiles más bajos -los más pobres, para entendernos mejor- llegue a la Universidad, situación que se mantiene desde hace muchos años y no varió. Cuando entré a la Universidad en 1972 nos recibió en el Paraninfo César Aguiar, lamentablemente fallecido muy joven, y nos dijo que la pirámide de clases se invertía en la Udelar, es decir, la mayor cantidad de alumnos provenía de los sectores más ricos -clase media alta y media- y la punta de la pirámide que quedaba hacia abajo correspondía a los sectores sociales más bajos. La tendencia se mantiene exactamente igual, lo que fue ratificado por el doctor Markarian, lo que le preocupa enormemente.

Ante la pregunta de qué pasaba con el nivel académico, manifestó su enorme preocupación. Si bien aumentó el egreso, nosotros sabemos -por distintos actores institucionales con responsabilidades en poderes del Estado, instituciones y los propios decanatos- que no está acompasado con el aumento del nivel académico.

Otra preocupación que el rector señaló en la Comisión fue que el 80 % de la investigación en Uruguay se hace en la Universidad de la República, y con el recorte de recursos se le dio el 4,3 % de lo que pidió, por lo que la investigación será otra de las áreas que estará muy afectada.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: mocionamos para votar en bloque de los artículos 255 al 259, tal como figuran en el proyecto que viene de Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar el procedimiento indicado.

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión los artículos 255 a 259.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: acompañamos todos estos artículos.

Conocemos el muy buen trabajo que ha realizado la Universidad de la República en todos estos años, siempre con menos presupuesto del solicitado.

En la Comisión, la Universidad presentó -está a disposición de todos- sus logros en descentralización, en nuevas carreras, en nuevos posgrados, en las cifras de egresados, alcanzando un aumento del 58 %.

Por supuesto, hubiésemos querido complacer el pedido de la Universidad, al igual que el de la ANEP, pero ambas solicitudes sumaban el 1 % del PBI, aspiración que sería imposible cumplir, en función del déficit fiscal, del que hablaron, inclusive, legisladores de otros partidos.

Estamos seguros de que, al igual que en años anteriores, la Universidad seguirá creciendo, descentralizándose, aumentando la cantidad de egresados, muchos provenientes de familias que no habían tenido acceso a esta.

La Universidad está en ese camino y nos sumamos al esfuerzo del Poder Ejecutivo para votar las partidas a fin de continuar mejorando el salario docente.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR BACIGALUPI (Marcelo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR BACIGALUPI (Marcelo).- Señor presidente: los artículos 257 y 258 plantean cuestiones administrativas, y constituyen un llamado de atención con respecto a la gestión administrativa, para que la Universidad de la República, que es nuestra propia casa de estudios, tome nota y pueda regularizar estas situaciones que afectan a los trabajadores.

En definitiva, lo más importante es que la Universidad se pueda reorganizar desde el punto de vista administrativo, porque seguramente este tipo de medidas obedezca a retrasos permanentes en las altas y bajas en el padrón del Banco de Previsión Social de los funcionarios docentes y no docentes de la Universidad de la República, lo que para nosotros sería un aporte importante en la racionalización de los recursos y en la descentralización de este tipo de trámites, que hoy están absolutamente automatizados y requieren no más de sesenta segundos para hacerlos

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Hay un aditivo que figura en la Hoja N° 21, presentado por el señor diputado Rubio.

——En discusión.

SEÑOR MARTÍNEZ (Walter Gonzalo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR MARTÍNEZ (Walter Gonzalo).- Señor presidente: seguimos con mucha atención las distintas declaraciones que hicieron las instituciones educativas, tanto la Udelar como la ANEP. Particularmente, vino con una propuesta consensuada con todos los órganos del cogobierno, lo cual para nosotros tiene mucho valor. Es una propuesta de catorce artículos suponiendo que el Gobierno cumpliría su promesa electoral de dar el 6 % a la ANEP y a la Udelar, cosa que no sucedió, y por eso se ha visto obligada a hacer muchos recortes en distintos programas para continuar con lo que hasta el momento ha logrado, pero que difícilmente pueda sostener, en la medida en que no se le dé lo que pide o, por lo menos, un poco más de lo que se le está dando, porque si bien creció en centros educativos no hay funcionarios ni siquiera para abrirlos, mucho menos para el trabajo administrativo o de mantenimiento.

Por ejemplo, los diputados del departamento de Rivera saben muy bien que el Centro Universitario no podrá funcionar en condiciones humanas adecuadas, porque la bancada del partido de gobierno no votará el presupuesto que pide la Udelar.

Por eso presentamos este aditivo, que consiste en siete artículos; algunos rescatan las propuestas que hizo la Udelar, otros fueron considerados en la Comisión y se incorporaron -habida cuenta de que no

tienen costo presupuestal- y agregamos aquellos artículos que no fueron considerados en la Comisión que, precisamente, buscan exonerar del aporte patronal de la Udelar para lograr un beneficio económico. El artículo que aparece en primer lugar implicaría un ahorro de $ 10.000.000 -¡$ 10.000.000!- que permitiría a la Udelar, por ejemplo, aumentar la cantidad y el monto de las becas para estudiantes que brinda Bienestar Universitario. También planteamos una reducción del 19,5 % al 7,5 % para lograr la equiparación con otras empresas del Estado y de la industria. Para la Universidad de la República representaría un ahorro de $ 1.800.000.000, y le permitiría avanzar en el cumplimiento de algunos de los convenios salariales que ha firmado con los funcionarios no docentes.

Otro conjunto de artículos pretende actualizar los indicadores de las distintas partidas que recibe la Universidad de la República para financiar las becas, la alimentación hospitalaria y estudiantil, los medicamentos hospitalarios y la construcción.

Cabe mencionar que en esta Rendición de Cuentas hay muchos artículos que logran ese objetivo, es decir, actualizar las partidas que reciben los distintos ministerios y organismos, de acuerdo con el indicador correspondiente. Entonces, si lo hacemos para unos, ¿cómo no hacerlo para la Universidad de la República?

Pretendemos que se avance en la adecuación, que representaría US$ 1.500.000, aproximadamente. Lo que la Universidad de la República pide para actualizar los montos -lo dijimos en una intervención anterior- equivale al 10 % del dinero que la Dirección General de Casinos del Estado otorga a la multinacional Hípica Rioplatense para financiar los premios de las carreras de caballos. Entendemos que sería mucho más justo destinar el dinero a la Universidad que a la hípica.

La Universidad de la República está solicitando inmunidad impositiva para adquirir los insumos, el mismo beneficio de que hoy gozan las multinacionales, las zonas francas y las empresas amparadas en la ley de inversiones. Nos parece que es más que importante que la Universidad, mínimamente, pueda adquirir sus insumos sin la carga impositiva que hay en estos momentos.

El último artículo tiene relación con los que fueron votados en la Comisión. Se trata de ajustar los certificados que otorga el BPS para algunas operaciones que necesita realizar la Universidad de la República. Si bien con esto no se cumple con el 6 % del PBI para la educación, sería un desahogo importante a fin de cumplir con sus necesidades, que hasta el momento no han sido satisfechas.

Por lo expuesto, sugerimos a los señores diputados que quieren respaldar la universidad pública que voten estos artículos, y si se sugiere desglosar alguno, con mucho gusto lo haremos.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, y todos están de acuerdo, se van a votar en bloque los siete artículos contenidos en la Hoja N° 21.

——Uno en noventa y uno: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 22, presentado por los señores diputados Gustavo Penadés, Sebastián Andújar, Wilson Aparicio Ezquerra Alonso, Benjamín Irazábal y Omar Lafluf Hebeich.

——En discusión.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: quiero aportar alguna información, pues tal vez algunos señores diputados aún no tuvieron acceso a la versión taquigráfica de la Comisión.

Quiero referirme a tres o cuatro cosas importantes que mencionaron los representantes de la Universidad de la República cuando concurrieron a la Comisión.

En primer lugar, menciono el pedido de la Udelar de $ 9.000.000.000, de los cuales el Poder Ejecutivo otorgó $ 430.000.000. Se hizo referencia a muchos aspectos de la Udelar y, entre otros, me gustaría destacar que toda su descentralización en el interior del país está necesitando recursos para aumentar la oferta.

Es cierto que con los recursos de que dispone solo van a poder mantener lo que hoy tienen, pero les gustaría -y a quienes somos del interior también- que se aumentara la oferta educativa. Si dispusiera del doble de recursos de los que hoy tiene, podría ejecutarlos en su totalidad.

También dijeron que el 85 % del estudiantado está en Montevideo. Es decir, faltan recursos para desarrollar la Universidad de la República en el interior del país.

El rector afirmó que la gran dadora de formación universitaria o terciara es la Udelar. En este aspecto -que tiene que ver con nuestro artículo aditivo- mencionó que hay cincuenta docentes que desean tener dedicación total, pero que no cuentan con los recursos; son grado 2, y lo que más preocupa es que se trata de gente joven, docentes a quienes les gustaría dedicarse solamente a la enseñanza en la Universidad de la República.

Con referencia a la Regional Norte, dijo que los docentes son muy pocos para toda la actividad de enseñanza. También manifestó algo muy grave: que no pueden tener abiertas las bibliotecas muchas horas porque no cuentan con personal. Por supuesto, se habló mucho más.

Con respecto a los $ 9.000.000.000 que necesita la Universidad de la República, los diputados del Partido Nacional de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda mantuvimos dos o tres entrevistas con el rector, a quien le expresamos que no podíamos solicitar esa suma porque no conseguiríamos nada. Entonces, le pedimos que nos dijera qué era lo indispensable, lo prioritario, lo mínimo que necesitarían. Nos dijo que precisaba los recursos que planteamos en este aditivo, al que voy a dar lectura.

——Esto es lo mínimo que precisaría la Universidad de la República. Por supuesto, no estamos pidiendo lo que solicitó en primera instancia el Inciso. Hablamos con el rector y le pedimos que nos dijera lo mínimo que se necesitaba, que fuera lógico y razonable.

Este es el fundamento del aditivo que presentamos.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: queremos dejar constancia de que nos pareció muy importante la alocución del señor rector, quien explicó todos los avances que ha habido en la Universidad de la República en todo el país y los requerimientos para

enfrentar los nuevos desafíos, sobre todo en lo que tiene que ver con el plan estratégico de cara al futuro.

Se ha dicho que la Universidad de la República solicita un refuerzo de rubros muy importante, de más de $ 9.000.000.000. El articulado enviado por el Poder Ejecutivo asigna un refuerzo de $ 430.000.000 para aumento de salarios docentes y no docentes, lo que a juicio de la Universidad termina siendo poco para la planificación que tiene de cara al futuro. Por tanto, consideramos que el aditivo que figura en la Hoja N° 22, presentado por el Partido Nacional, es de recibo y tiene una muy buena intencionalidad a fin de otorgar algunos recursos que el propio rector -como explicó el diputado Lafluf- ha estimado como lo mínimo que precisarían para poder avanzar.

El Partido Colorado está dispuesto a votar la hoja presentada por los legisladores del Partido Nacional, en el sentido de que no genera mayor gasto, porque se establece claramente que esto es a partir de un ahorro en suministros que se realizan dentro de los Incisos de la Administración central.

Por lo tanto, no hay un costo extra para el Estado; esa es la razón por la que el Partido Colorado va a acompañar la Hoja N° 22.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 22.

——Treinta y seis en ochenta y siete: NEGATIVA.

13.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con el tratamiento del asunto motivo de la convocatoria, se pasa a considerar el Inciso 27 "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay", que comprende los artículos 260 a 265, inclusive.

——Se pasa a considerar el artículo 260. Hay un sustitutivo que figura en la Hoja N° 23, presentado por la señora diputada Lilián Galán.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 260, tal como viene de la Comisión.

——Dos en ochenta y siete: NEGATIVA.

Se va a votar el sustitutivo que figura en la Hoja Nº 23.

——Sesenta y uno en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

——Cincuenta y uno en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 261.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y dos en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 262.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y dos en ochenta y nueve: AFIRMATIVA

En discusión el artículo 263.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 264.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y ocho en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 265.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

15.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continuando con el asunto motivo de la convocatoria, se pasa a considerar el Inciso 29 "Administración de Servicios de Salud del Estado", que comprende los artículos 266 a 284, inclusive.

——La Mesa quiere aclarar que para este Inciso se presentó un artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 24.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: el Partido Nacional está en condiciones de votar en bloque los artículos correspondientes a este Inciso.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- La Mesa quiere recordar que el artículo 271 requiere mayoría absoluta porque se crea un cargo de particular confianza. Por lo tanto, si los artículos se votan en bloque todos deben ser aprobados por esa mayoría.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Simplemente quiero hacer una corrección verbal con respecto al artículo 266.

Solo debe cambiarse de lugar la referencia "incluido aguinaldo y cargas legales". Esa frase debe incluirse después de la segunda cifra que figura en el artículo, es decir, después de "$ 37.500.000 (treinta y siete millones mil quinientos pesos uruguayos)".

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- ¿Se comprendió el cambio que solicita el diputado Asti?

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- Sí, señor presidente.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: voy a solicitar que se desglosen algunos artículos del bloque propuesto por el señor diputado Penadés.

Solicito que se desglosen los artículos 266, 268, 270, 271, 273, 274 y 278.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: solicitamos que la frase "incluido aguinaldo y cargas legales" se incluya después de las dos cifras que figuran en el artículo 266.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Para hacer honor a su claridad, señor diputado, la Mesa le solicita que lea cómo quedaría redactado el artículo.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- El artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "[…] en el ejercicio 2018, un monto de $ 12.500.000 (doce millones quinientos mil pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, a efectos de financiar la creación de cargos a partir de la promulgación de la presente ley, e increméntase en el ejercicio 2019 en $ 37.500.000 (treinta y siete millones quinientos mil pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, a efectos de financiar la erogación anual de los cargos creados en el ejercicio 2018".

Por lo tanto, la frase "incluido aguinaldo y cargas legales" debe agregarse después de la segunda cifra que figura en el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Entonces, así quedará redactado.

Existe acuerdo para votar en bloque los artículos 267, 269, 272, 275, 276, 277 y 279 al 284.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: ¿el artículo 273 también quedó desglosado?

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Sí, señor diputado.

En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 266.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación propuesta por el señor diputado Asti.

——Ochenta y cuatro en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 268.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y ocho en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 270.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y nueve en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 271.

Para aprobar este artículo se requiere mayoría absoluta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 273.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y siete en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 274.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y ocho en noventa y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 278.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Setenta y ocho en noventa: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 24, presentado por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado Germán Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: en la Comisión presentamos este aditivo con el diputado Conrado Rodríguez con el objetivo de dar cumplimiento a una obra muy anunciada en el departamento de Maldonado, que integra toda la zona este del país y hace a la atención de los servicios de salud de la población.

Desde el año 2013 aproximadamente, en el período de gobierno anterior, ASSE viene anunciando la instalación del centro de atención oncológica en el Hospital Alvariza de la ciudad de San Carlos para la zona este del país. Desde luego, esto es muy importante y determinante para la calidad de vida de las personas que requieren tratamiento contra enfermedades oncológicas en el departamento de Maldonado, y en el resto de los departamentos de la zona este, como Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Lavalleja. La concreción de esta obra, evitaría que los enfermos deban trasladarse a Montevideo, con todo lo que ello implica, y las demoras en recibir las atenciones que necesitan.

Esta obra se ha ido dilatando, pero a través de los diferentes ejercicios presupuestales y de las rendiciones de cuentas, desde la oposición la hemos reclamado, le hemos dado impulso y apoyo, en paralelo con la iniciativa llevada adelante por las autoridades de la salud.

En febrero de este año, el gerente general de ASSE en funciones, anunció en el departamento de Maldonado que la semana siguiente -pongámosle marzo- se estaría adjudicando la licitación y la ejecución de las obras, y en los meses siguientes estaría instalado y funcionando este centro de atención a la salud tan importante.

Lamentablemente, al igual que en el año 2013, ha pasado el tiempo y no se ha concretado. En cuanto cambiaron las autoridades de ASSE por razones de pública notoriedad, los legisladores del departamento de Maldonado tuvimos una reunión con las autoridades. Una vez más, interrogamos tanto a los miembros del directorio como al gerente general acerca de la previsibilidad para la ejecución de esta obra. En esa instancia, se nos aseguró que se hacía y se mantenía en los mismos términos.

Transcurrida esta etapa de Rendición de Cuentas, cuando comparece el directorio de ASSE a la Comisión, lo interrogamos nuevamente por la demora en la concreción de la obra y la respuesta que se nos dio fue que el proyecto se había devuelto a la División Arquitectura de ASSE para que fuera recotizado, recatalogado -esa fue la respuesta que se nos dio-, en

virtud de que costaba mucho más que el dinero que ASSE tenía disponible para ejecutar, una partida de $ 9.000.000 de este año y $ 9.000.000 del año próximo; se nos informó que eso no alcanzaba y para hacer realidad esta obra se requería una partida extra de $ 23.000.000.

Hemos estudiado con nuestros compañeros técnicos y colaboradores los diferentes sobrantes de las distintas partidas en rendiciones de cuentas y encontramos que en el Inciso 02, "Presidencia de la República", en el Programa 481 "Política de Gobierno", en las últimas rendiciones de cuentas ha habido sobrantes del orden de los $ 300.000.000 destinados a programas que no han sido ejecutados. Por lo tanto, tomamos solamente el 6,5 % de esa partida que está disponible y no ha sido ejecutada para dar cumplimiento a esta tan necesaria obra, con el fin de generar mejor calidad de vida y dar atención a los usuarios de la salud de toda la zona este del país que padecen enfermedades oncológicas. Este ha sido el ánimo, señor presidente.

Además, queremos dejar de manifiesto que antes de presentar el aditivo lo hemos conversado con el gerente general de ASSE; lo hemos puesto en conocimiento de la partida que advertimos no ha sido ejecutada y nos ha manifestado su visión favorable en cuanto a que ejerciéramos esta redistribución de gastos en la Rendición de Cuentas. Además, señaló que desde el momento de contar con esta partida, estaríamos asegurando la adjudicación para concretar la obra en los próximos meses.

Muchas gracias.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Señor presidente: quiero dejar constancia de que el Partido Nacional va a acompañar la votación de este aditivo por los argumentos que ha expresado el señor diputado Germán Cardoso. Creemos que refleja una necesidad indispensable.

No compartimos la reducción presupuestal en un nuevo proyecto que no conocemos.

Además, deseo señalar que hace cuarenta y ocho horas el diputado Cardoso informó a seis de los siete diputados del departamento de Maldonado -a quienes integran lo que llamamos "la bancada Maldonado"- acerca de esta propuesta y de la financiación que sus técnicos habían buscado dentro del presupuesto nacional. Por tanto, compartimos el fin y la financiación.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Señor presidente: al igual que quienes me antecedieron en el uso de la palabra, vamos a acompañar este aditivo por entenderlo necesario para el departamento.

Incluso, cuando se votó el Presupuesto en el año 2015, se eliminó la Unidad Ejecutora hospitalaria de San Carlos con la intención de desarrollar otro tipo de centros como al que le estamos votando una partida para que se viabilice su concreción.

Entendemos que esta partida es necesaria para completar la obra planteada inicialmente y es en ese entendido que el Partido Independiente va a acompañar esta iniciativa.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: no vamos a hablar sobre la importancia de este centro en Maldonado porque creemos que las palabras vertidas en sala son elocuentes; por algo el centro estuvo dentro de las prioridades de la administración de ASSE.

Es cierto que la construcción de este centro ha sufrido una demora de acuerdo con lo que estaba proyectado. El diputado Cardoso nos anunció su intención de buscarle financiamiento y en función de esa situación nos pusimos en contacto con las autoridades de ASSE, y puedo afirmar, como coordinador de la bancada del Frente Amplio, que el rediseño del centro ya está pronto.

El proceso será el siguiente. En el mes de setiembre será abierto el llamado a licitación; en noviembre y diciembre se hará la adjudicación; el equipamiento y los recursos humanos se resolverán en el año 2019 con recursos que ya tiene ASSE. Por lo tanto, con los recursos que son de $ 9.000.000 este año, más $ 9.000.000 el año próximo, se podrá construir el centro; el equipamiento y los recursos humanos será fruto de un proceso de redistribución de recursos dentro de ASSE y se pondrá en funcionamiento en el año 2019.

En función de estas consideraciones no vamos a acompañar esta hoja aditiva. Más allá de la demora que hubo, los procesos que se están llevando adelante nos permiten afirmar que el rediseño del centro ya está realizado y que el cronograma de ejecución será como dijimos: en setiembre el llamado a licitación, en diciembre la adjudicación y en el correr de 2019 la inauguración. Asimismo, se irán incorporando recursos humanos y de funcionamiento, y redireccionando recursos que la propia ASSE ya tiene para ese fin.

Compartimos la preocupación que se ha expresado en sala, pero no vamos a acompañar esta hoja porque creemos que el procedimiento que ya está en marcha es el más conveniente.

SEÑOR BACIGALUPI (Marcelo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR BACIGALUPI (Marcelo).- Señor presidente: vamos a acompañar esta hoja. Pensamos que son de recibo las dos posiciones, pero los pacientes no disponen de los tiempos que tienen los presupuestos del Estado para empezar a ejecutar las obras. Consideramos que esta es una realidad muy sensible que debería ser atendida.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Hoja Nº 24.

——Cuarenta y cuatro en noventa y cuatro: NEGATIVA.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: conocemos la propuesta porque nos la hizo llegar el señor diputado Cardoso, cuyo trabajo reconocemos, pero reafirmo lo que acaba de decir el coordinador de bancada. Este proyecto tiene financiación, se va a ejecutar y no necesita trasposición de rubros.

Quiero recordar que similar comportamiento tuvieron los partidos de la oposición en el Parlamento cuando en la Junta Departamental, en el período pasado, el Partido Nacional y el

Partido Colorado votaron la trasposición de un predio en los accesos a San Carlos para la construcción de este centro, pero ello no se materializó porque ASSE resolvió ubicarlo en el centro hospitalario, en la unidad de San Carlos. En su momento, la Intendencia de Maldonado aportó como contribución una partida de US$ 200.000, que desconozco si se ha transferido. Hay una coherencia en el planteo de los señores diputados de la oposición, pero pertenezco a la bancada del Frente Amplio y podemos asegurar la concreción de esta obra.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: enhorabuena recibimos la información del señor diputado Sánchez, coordinador de la bancada oficialista, sobre esta obra tan importante y esencial, no solo para el departamento de Maldonado, sino para toda la región este del país, que realmente está necesitando este centro oncológico.

La gran virtud de la presentación de este artículo es dar trascendencia a esta situación para que las autoridades públicas tomen nota. Nos quedamos satisfechos porque esto está encaminado y dentro de muy poco se podrá contar con este centro oncológico.

Felicito el trabajo de nuestro compañero de bancada, señor diputado Cardoso, por haber puesto de manifiesto la situación tan sensible que viven tantos ciudadanos necesitados de este tipo de centros para atender sus dolencias.

Todo el Partido Colorado ha acompañado esta hoja aditiva porque nos parece muy importante atender esta situación puntual de salud de muchos uruguayos que viven en el este del país.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor presidente: de más está decir la importancia de este artículo y, en particular, lo que se ha planteado.

Quiero dejar la constancia de que el Partido Nacional ha acompañado la propuesta del señor diputado Germán Cardoso quien tuvo la gentileza, como ya expresaron mis compañeros de bancada, de hacérnosla conocer días atrás. La compartimos en pleno porque era una forma concreta de asegurarnos de que el centro se iba a llevar adelante tal como estaba planificado, ya que a través de su iniciativa se buscaba contar con los recursos que originalmente requería.

Recibimos con beneplácito el compromiso de la bancada oficialista en cuanto a buscar la solución para concretarlo. Nos queda una duda que se puede resumir en una simple palabra: "redefinición", ya que no conocemos en qué consiste; no sabemos si va a ser de menor envergadura o si tendrá distintas características. De todas maneras, se genera una incertidumbre. Por esa razón, preferíamos apoyar la moción del señor diputado Cardoso que específicamente encontraba recursos que no habían sido utilizados en el desarrollo y la ejecución del presupuesto nacional, y aseguraban la concreción tal como estaba prevista.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Señor presidente: hemos acompañado este artículo porque $ 18.000.000 no es lo mismo que $ 23.000.000 y porque el proyecto original no es igual al proyecto reestructurado que se plantea ahora y que no conocemos. Además, porque las últimas concreciones importantes que ha tenido el departamento de Maldonado en materia presupuestal han quedado plasmadas, como el juzgado para la ciudad de San Carlos, el CTI público para el hospital de Maldonado y la comisaría de la mujer, también para la ciudad de San Carlos. Hubiésemos preferido, por mayor garantía, que esto figurara en la Rendición de Cuentas.

Por supuesto, agradecemos la información que nos ha dado el señor diputado Sánchez.

Con respecto a la coordinación que hacemos en el departamento de Maldonado, creo que es de buen talante, de buenas políticas de Estado y de buen entendimiento, sentarse en torno a una mesa para dialogar; por ello no dejo de pertenecer a mi Partido. Hoy hemos visto que los diputados de Paysandú se han reunido para buscar una solución para la empresa Pili y lo vimos hace un mes, cuando los legisladores del departamento de Salto, de todos los partidos políticos, se reunieron por los problemas de inseguridad. En Maldonado hemos recorrido este camino y ha dado muy buenos resultados en los últimos tiempos, y por eso lo vamos a seguir recorriendo.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: por la sensibilidad que este tema despierta, más allá de la votación en un sentido o en el otro, agradezco el apoyo que los miembros de todos los partidos de la oposición representados en este Parlamento han dado a este aditivo.

Me genera mucha satisfacción el anuncio del señor diputado Alejandro Sánchez. Ojalá pueda el Gobierno -lo digo desde la más plena honestidad y buena fe- dar cumplimiento a lo que ha anunciado porque lo que estábamos buscando en esta Rendición de Cuentas era dejar asegurado y establecido por norma lo que se ha dilatado desde el año 2013. Estaremos atentos y seguiremos reclamando por los intereses legítimos de la población del departamento que representamos que nos ha traído a esta Cámara para que seamos su voz.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: quería dejar una constancia antes de terminar este Inciso. Cuando hicimos la votación en bloque de los artículos pertenecientes a ASSE, estaba incluido el artículo 283. En esos artículos está la transformación de lo que antes era el programa de salud bucal, que estaba en Presidencia de la República, y ahora pasa a ASSE. Entre esas disposiciones, el artículo 283 refiere a la posibilidad de acceder a las donaciones especiales, que ya estaba establecida.

Al votarse en bloque no nos dimos cuenta de que no es correcto votar este artículo tal como lo hicimos, sino que debimos incluirlo dentro del artículo 345 "Donaciones Especiales", por una cuestión de técnica legislativa, pero podremos solicitarlo luego. El artículo que votamos hace referencia al artículo 462 de la Ley Nº 16.226, de 1991, que si bien está vigente, ha caído en desuso. Sería mucho mejor, reitero que por razones de técnica

legislativa -lo planteamos en la Comisión-, incluirlo en el listado de las instituciones a las que, por el artículo 345, se les puede otorgar donaciones especiales.

Hago esta aclaración y cuando tratemos el artículo 345, en todo caso, plantearemos la modificación para mejorar esta disposición desde el punto de vista legislativo e incluirla dentro de "Donaciones Especiales".

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- ¿Puede repetir, diputado, por favor, cuál es el artículo que usted plantea reubicar?

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Es el artículo 283, pero más que reubicar sería incluirlo dentro de la nómina de entidades beneficiadas por las donaciones especiales. Lo tratamos, en todo caso, cuando lleguemos a ese artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Según entiendo, no es esta redacción la que hay que mantener, sino que lo que usted plantea es incluirlo en el artículo de las donaciones especiales con otra redacción.

Por lo tanto, proponemos que cuando lleguemos al artículo 345 usted nos lo recuerde. Reconsideraremos el artículo 283, lo votamos en forma negativa y sería conveniente tener la redacción pronta para incorporarlo al artículo 345. Por ahora, lo mantenemos como está.

Se pasa a considerar el Inciso 31, "Universidad Tecnológica" (UTEC), que comprende los artículos 285 y 286 y dos aditivos, que figuran en las Hojas Nº 25 y 26.

——En discusión el artículo 285.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

——Ochenta y nueve en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 286.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Antes de ingresar a la consideración de las hojas aditivas, queremos saludar a los alumnos y alumnas del Instituto Profesional de Educación Periodística (IPEP) quienes, como parte de su formación están presenciando parte de esta sesión desde la primera barra. Los saludamos y les damos la bienvenida.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 25, presentado por los señores diputados Gustavo Penadés, Sebastián Andújar, Omar Lafluf Hebeich, Wilson Aparicio Ezquerra Alonso y Benjamín Irazábal.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: este artículo refiere a la reasignación de recursos a las horas docentes del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura". Detectamos que de los $ 270.000.000 que se destinan a horas docentes -daría para un debate que no vamos a tener ahora, lo aclaro para tranquilidad de la Cámara- $ 50.000.000 no se ejecutaron el año pasado.

Entendemos que si no se ejecutaron $ 50.000.000, porque evidentemente no tuvieron la capacidad de contratar todas las horas docentes que tienen por todo concepto para contratar, se puede reasignar esos $ 50.000.000 a la UTEC, dejando constancia expresa en el aditivo que de las horas docentes que pretendíamos, a pesar de ser un sobrante, destinar

a la Universidad Tecnológica del Uruguay, no se podían tocar las horas docentes del Instituto Clemente Estable ni del Centro de Capacitación de Producción.

Este artículo no tiene costo, está perfectamente financiado; es solo una reasignación de recursos.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señor presidente: creo que el artículo hay que leerlo al revés de como lo leyó el señor diputado Penadés: estos son fondos para infraestructura, que se van a destinar por única vez al pago de horas docentes.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Como nadie entendió, vamos a seguir adelante.

Se va a votar la Hoja Nº 25, según el entendido de cada uno.

——Treinta y uno en ochenta y ocho: NEGATIVA.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: lo que tenemos que aplaudir en educación en el Uruguay es a la UTEC.

Voy a ser muy breve, porque todos estamos de acuerdo con lo que representaron y representan las carreras que allí se dictan, que nos ponen en los primeros lugares del mundo, además, con vinculación con carreras tecnológicas, en este caso, a nivel universitario, construcción de edificios, instalaciones, laboratorios, porque la UTEC nació de cero y realmente es muy interesante.

Solo quería dejar constancia en la versión taquigráfica, y todo el mundo la puede leer, pero quedamos muy preocupados porque, por lo que no se le asigna -la diferencia entre lo que ellos piden y no se le asigna a través de la Rendición de Cuentas- hay carreras que no van a poder funcionar, previstas para el año próximo y hay otras -no voy a detallarlas para no insumir más tiempo- en las que probablemente no se pueda continuar con los cursos. Hay generaciones que llegaron a segundo año -para que nos entendamos- y no pueden continuar. Eso lo dejaron especialmente establecido los miembros del directorio de la Universidad Tecnológica. Así que, en estos casos, tiene que quedar constancia cuando hay una disociación entre lo que decimos y la plata que adjudicamos.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- ¡Que se rectifique la votación de la Hoja N° 25!

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar nuevamente la Hoja N° 25. La Mesa asume que el conteo no fue correcto.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en noventa: NEGATIVA.

En discusión la Hoja N° 26, presentada por los diputados Germán Cardoso y Conrado Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 26 tiene que ver con los requerimientos que hace la UTEC, que constan en el mensaje que envió al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para considerar en oportunidad de la Rendición de Cuentas.

En su artículo 1º solicitaba un monto total de casi $ 653.000.000, lo que no figura en el aditivo que presentamos nosotros. En la Hoja que volvemos a incorporar a la discusión del plenario se solicita un refuerzo de rubros para la UTEC de $ 203.292.000, que son para remuneraciones, gastos de funcionamiento e inversiones.

Según lo que nosotros recogimos en la comparecencia de la UTEC en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, estos montos son muy importantes para finalizar las carreras que empezaron hace muy poco tiempo, que de lo contrario correrían algún riesgo. Si bien en el articulado que se está poniendo a consideración de la Cámara se le da un refuerzo de $ 100.000.000, la UTEC está precisando otros números para poder funcionar.

Nosotros le damos una fuente de financiamiento, que es la de todas nuestras redistribuciones, y parte de la no provisión de vacantes en la Administración central y en las empresas públicas por el plazo de dos años. A partir de esos ahorros se podrían volcar estos $ 203.000.000 a la UTEC para que pueda realizar todos los planes a los que nos hemos referido. Esa es la razón por la cual presentamos este artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 26.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 26.

——Siete en ochenta y siete: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 32 "Instituto Uruguayo de Meteorología" (Inumet), que comprende el artículo 287.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación", que comprende los artículos 288 a 297.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: proponemos que se voten en bloque los artículos 293 a 297, inclusive.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: el Partido Nacional está en condiciones de proponer dos bloques: uno conteniendo los artículos 288, 289, 290 y 292, y el otro, los artículos 291, 293, 294, 295, 296 y 297.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- La señora diputada Lilián Galán manifiesta estar de acuerdo. Por lo tanto, la Mesa consulta al Partido Colorado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: nosotros queremos excluir de los bloques propuestos los artículos 288, 292 y 293.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Existe acuerdo para votar en bloque los artículos 289 y 290.

En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y seis en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 291.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar los artículos que el Partido Colorado propuso desglosar.

En discusión el artículo 288.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 292.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 293.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y uno en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

Existe acuerdo para votar en bloque los artículos restantes, del 294 al 297, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: culminado el tratamiento del Inciso 33 queremos dejar constancia de que el Partido Nacional ha votado negativamente los artículos 288, 289 y 290 por las razones que adelantamos en este debate hace ya algunas horas.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: queremos dejar constancia de que hemos votado afirmativamente todos los artículos que se presentaron en sala e integraban el Inciso correspondiente a la Fiscalía General de la Nación.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se pasa a considerar el Inciso 34 "Junta de Transparencia y Ética Pública" (Jutep), que no contiene ningún artículo en el proyecto que viene de Comisión, pero existe un artículo aditivo -que consta de tres artículos- que figura en la Hoja Nº 27, presentada por los diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

(Texto del artículo aditivo:)

».

——En discusión.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: lo que hacemos mediante este artículo aditivo es tomar los artículos presentados por la Jutep en su mensaje.

Es indudable que en los últimos años la Jutep ha visto incrementar en forma notoria su labor, y ante los diferentes compromisos asumidos internacionalmente y por la aplicación de casos que afectan la ética de la función pública requiere más recursos. Por lo tanto, ante esta mayor actividad, es imprescindible reforzar el equipo de asesores de la institución a efectos de que se puedan cumplir con eficiencia los cometidos que le han sido asignados.

Esa es la razón por la cual incorporamos este artículo a la discusión del plenario, nuevamente financiado a través de la no provisión de vacantes de la Administración central y de las empresas públicas por el plazo de dos años.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Saludamos a los alumnos de sexto año del Liceo N° 1 de Ciudad del Plata, que han venido a visitarnos y se encuentran en la segunda barra.

17.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continúa la consideración del asunto en debate.

Si no se hace uso de la palabra y si los diputados firmantes no tienen inconveniente, se van a votar en bloque los artículos aditivos que figuran en la Hoja N° 27, presentada por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——Treinta y ocho en noventa: NEGATIVA.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: dejo constancia de que el Partido Nacional ha acompañado la propuesta del Partido Colorado, que recoge una iniciativa de la Jutep y que en la discusión general de la Rendición de Cuentas reclamamos como una necesidad, por razones que, obviamente, no reiteraremos ahora.

Creo que esta medida podría haberse adoptado, en tanto supone una redistribución de los funcionarios que se encuentran en comisión en el organismo, y no implica mayores impactos desde el punto de vista presupuestal. Es una pena que no se haya contado con las voluntades suficientes.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: durante la discusión en la Comisión y en presencia de las autoridades de la dirección de la Junta de Transparencia y Ética Pública, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado, manifestamos -como consta en la versión taquigráfica- que estamos tratando modificaciones a la actuación de la Junta, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con las declaraciones juradas de funcionarios públicos, de acuerdo con la Ley N° 17.060. En nuestra intervención en la Comisión, preguntamos al presidente, contador Ricardo Gil, si quería adelantar algunas de esas normas y él manifestó que prefería que se aprobara el proyecto tal como lo estábamos trabajando en la otra Comisión.

En los artículos del proyecto que estamos trabajando está el tema del tratamiento de los pases en comisión y otros, pero no reclamamos el voto de alguno de los artículos sin costo que plantea la Jutep porque preferimos tratarlo directamente con ellos en el marco del proyecto que propone modificar algunas de las funciones y controles que puede realizar la Junta en materia de declaraciones juradas. Más o menos así fue que empezó a existir la

Jutep, que adquirió su independencia técnica fuera del Ministerio de Educación y Cultura -donde estaba anteriormente-, convirtiéndose en un organismo descentralizado.

Por eso, seguramente en un ambiente más propicio, seguiremos tratando este tema. En este momento, como integrante de la Comisión y como su ocasional presidente, comprometo el tratamiento del proyecto en tiempos acordes con lo necesario.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH.- Señor presidente: antes que nada, quiero hacer una aclaración sobre un aditivo anterior presentado por el Partido Nacional, referido a la UTEC. En dicha propuesta pedíamos traspasar horas docentes del Ministerio de Educación y Cultura a la UTEC, que fue lo que solicitaron sus representantes, porque necesitan esos recursos para terminar las carreras. El señor diputado Sabini fundamentó su postura diciendo que eran fondos de infraestructura que no podían ir a horas docentes.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Señor diputado: estamos un poco confundidos. Si usted está haciendo una aclaración, está fuera de hora. Si está haciendo un fundamento de voto, no puede aludir. Busquémosle la vuelta para que pueda decir lo que tenga para decir, pero que la alusión no nos conduzca a un debate por la vía de la respuesta a alusiones. Simplemente, quiero enmarcar lo que usted va a decir, a fin de que podamos centrarnos en lo que estamos discutiendo.

Puede continuar el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Simplemente, quería decir que el aditivo presentado por el Partido Nacional es correcto en tanto se trata de horas docentes del Ministerio de Educación y Cultura que podían pasar a horas docentes de la Universidad Tecnológica.

Con respecto a la Jutep, ayer se conversó este tema y volvimos a señalar la falta de recursos de los organismos de control. Lo reafirmamos, porque es la realidad. Es cierto que el presidente de la Jutep dijo que tendrían que alquilar los garajes del edificio para tener recursos; por lo tanto, es buen desafío para el Parlamento tratar de encontrar fondos. ¿Para qué? Para que un organismo de contralor no dependa de servicios que le pueda vender a terceros. No es bueno; es preferible que tenga la estructura técnica y los recursos necesarios para hacer el control correspondiente, sin depender de nadie fuera del organismo.

Por otro lado, como decía el señor diputado, es cierto que hicieron alguna referencia a los temas que estamos tratando, por ejemplo, que deben controlar 20.000 declaraciones juradas y lo hacen mal. Es preferible controlar menos, pero hacerlo bien.

Gracias.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: por razones de técnica legislativa y de necesidades de un servicio que es tan importante en este momento, y teniendo en cuenta las declaraciones del presidente de la Jutep, contador Gil Iribarne -está muy preocupado por el grado de corrupción, no solo pública, sino privada que hay en el Uruguay-, deberíamos actuar con la diligencia necesaria, en primer lugar, para

que lo antes posible tuvieran lo que pidieron que, además, no representa gastos. En segundo término, deberíamos hacerlo por cuestiones de técnica legislativa, porque es ahora cuando se lo tenemos que dar y porque advierto mucho más la relación de causa-efecto en esta instancia que cuando se vaya a tratar el proyecto de ley sobre declaraciones juradas que tiene a estudio la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado. No sé el tiempo que nos llevará el tratamiento del proyecto de ley en esa Comisión, que yo también integro.

Quiero hacer hincapié en una observación que hizo el contador Gil Iribarne en cuanto a que al trabajar con pases en comisión, circunstancial o permanentemente, se corre el riesgo de que la experiencia acumulada y el conocimiento se pierdan si ese pase en comisión se revoca por cualquier motivo, si el funcionario decide retirarse, etcétera. Esta cuestión hace a la estabilidad de un organismo joven, pero de una responsabilidad enorme en los momentos que estamos viviendo, precisamente, con respecto a la ética pública.

Lamentamos profundamente que no se haya aprobado este artículo que, además -reitero-, no tenía costo alguno.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se pasa a considerar el Inciso 35 "Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente", que comprende los artículos 298 a 305.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: propongo que se voten en bloque los artículos 302 a 305.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- ¿Me permite, señor presidente?

El Partido Nacional está en condiciones de votar dos bloques: uno con los artículos 298, 300, 301, 302, 303 y 304, y el otro, con los artículos 299 y 305.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- ¿Me permite, señor presidente?

Nosotros queremos excluir de los bloques propuestos los artículos 303, 304 y 305.

SEÑOR POSADA (Iván).- ¿Me permite, señor presidente?

Nosotros estamos en condiciones de votar todo el articulado del organismo, excepto el artículo 301.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¿Me permite, señor presidente?

Nosotros vamos a proponer un cambio de redacción al artículo 301.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Teniendo en cuenta la diversidad de pedidos, considero más conveniente considerar artículo por artículo, que es lo más prolijo y lo más rápido.

En discusión el artículo 298.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor presidente: votamos por la afirmativa este artículo porque entendemos que es necesario fortalecer la estructura del Inisa. Conocemos de primera mano la necesidad de organizar y estructurar los cargos a la medida de los requerimientos de la institución, que ha presentado sus debilidades debido a su separación del

INAU. El Inisa comenzó su vida institucional con los mecanismos que tenía y con escasos recursos y medios. Ahora este esfuerzo tiene que trascender; si no, impactará directamente en la atención de los adolescentes internados, que están privados de libertad.

Hace muy pocos días, nos reunimos con el Directorio del Inisa y ese fue uno de los temas de los que estuvimos hablando, así como de la preocupación por los aspectos edilicios y el hacinamiento de los jóvenes.

No quiero dejar pasar una cuestión: el debate que hubo en el día de hoy sobre educación fue muy enriquecedor, y espero que en el próximo se incluya a los jóvenes que están privados de libertad, ya que coincidimos con la señora presidenta del Inisa en cuanto a que el sistema educativo abandonó y marginó a los adolescentes que están en esas condiciones.

Muchísimas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 299.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 300.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 301.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: cuando las autoridades respectivas comparecieron ante la Comisión, plantearon la necesidad de hacer una modificación a este artículo, que luego no recogimos en la votación. Hablamos de los funcionarios públicos provenientes de los organismos que integran el presupuesto nacional, que se encuentran desempeñando tareas en comisión. La creación del Inisa supuso la separación paulatina del INAU, y esto derivó en que algunos funcionarios que estaban en comisión en el INAU luego pasaran al Inisa y el proceso quedara inconcluso.

Lo que planteamos para que el artículo quede bien es eliminar la parte que dice "a la fecha de promulgación de la presente ley", de manera que quedaría: "Los funcionarios públicos provenientes de organismos integrantes del presupuesto nacional que se encuentren desempeñando tareas […]" y luego el texto seguiría tal como está, porque esto se aplica a funcionarios que cumplan tres años de antigüedad y a la fecha de promulgación de la presente ley no hay ninguno. Nos referimos a cinco funcionarios en comisión que están desempeñando tareas en el Inisa, que es muy importante permanezcan allí, según nos han informado las autoridades.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 301 con la modificación propuesta por el señor diputado Sánchez.

——Ochenta y siete en noventa y uno: AFIRMATIVA.

——En discusión el artículo 302.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 303.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 304.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 305.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y tres en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", que comprende los artículos 306 a 310.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: quiero dejar una constancia que se refiere a un organismo que hemos olvidado. El que lo olvidó primero fue el Ministerio de Educación y Cultura; luego, lo recordamos algunos integrantes de la Comisión, invitamos a sus representantes y plantearon necesidades para poder seguir funcionando. Me refiero al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Volvemos a un caso puntual sobre el que hoy estuvimos hablando mucho, aunque realmente deberíamos haber debatido un poco más o, por lo menos, tendríamos que haberle dado recursos, porque es una innovación de este período de gobierno; concretamente, está en la ley de educación que se aprobó en el primer Gobierno del presidente Vázquez.

El Ministerio de Educación y Cultura no lo incluyó en su mensaje; es un organismo descentralizado. Como dije, citamos a sus autoridades, se presentaron y plantearon que necesitaban una pequeña cantidad -no la recuerdo de memoria-, precisamente, para el censo, que es muy importante para la evaluación que están llevando a cabo sobre el sistema educativo uruguayo.

Me confirmó el diputado Penadés, que es nuestro representante en la Comisión, que no se les dio nada. Así que antes de pasar a la Sección VI quería dejar dos constancias: vinieron porque los citó la Comisión y no se les otorgó ninguna asignación de recursos.

Gracias.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: estamos en condiciones de votar en bloque todos los artículos del Inciso 21, salvo el 307, que pedimos sea desglosado.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no hay objeciones, se van a votar en bloque los artículos 306, 308, 309 y 310, inclusive.

——Ochenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 307.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve en noventa: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 23 "Partidas a reaplicar", que comprende los artículos 311 y 312.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: estamos en condiciones de votar en bloque los dos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no hay objeciones, se van a votar en bloque los artículos 311 y 312.

La Mesa recuerda a los señores diputados que tenemos una hoja desglosada para considerar a continuación.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: no estamos en condiciones de votar los dos artículos juntos. Pedimos que se voten por separado, porque no acompañaremos el artículo 311.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Así se procederá.

En discusión el artículo 311.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa en noventa y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Gracias, señor presidente.

No hemos acompañado este artículo porque el Gobierno plantea una contradicción que no nos parece de recibo. Acordamos generar esta partida anual de estímulo a la asiduidad, pero no puede ser a costa de recortar vacantes, de cercenar fuentes de trabajo que son necesarias para cubrir tareas que el Estado debe cumplir. Hay múltiples organismos que están reclamando más gente; entonces, el hecho de cumplir con esta partida salarial no puede depender del recorte del gasto estatal, precisamente, en materia de vacantes.

Por lo tanto, no acompañamos esta propuesta de recortar trabajo para cumplir con compromisos salariales.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 312.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Se pasa a considerar el aditivo que figura en la Hoja Nº 7, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio, que habíamos dejado pendiente para considerar en el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", porque era más ajustado tratarlo con estas disposiciones que donde se había ubicado originalmente.

——En discusión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: simplemente, quiero recordar que en este caso sí proponemos un recorte del gasto, que no compromete en absoluto el funcionamiento de los organismos. Se trata de un recorte del 5 % anual en material de oficina, propaganda, publicidad, lo que representa una cifra importante que proponemos dedicar a financiar gastos de funcionamiento asociados con el aumento de espacios educativos en obras nuevas y aplicaciones de Educación Primaria construidas en la modalidad tradicional para centro educativo de tiempo completo, educación común y escuela rurales. Ese 5 % representaría US$ 5.000.000 por año.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo que figura en la Hoja Nº 7,

presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

——Cuarenta en ochenta y ocho: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el Inciso 24 "Diversos créditos", que comprende los artículos 313 a 316, inclusive.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: estamos en condiciones de votar en bloque todo el Inciso 24.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 313 a 316, inclusive.

——Ochenta y nueve en noventa: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar la Sección VII "Recursos", que comprende los artículos 317 a 327, inclusive.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: gracias a los oficios de la señora Irene Caballero, que tiene un registro de cómo votó cada uno de los partidos, puedo adelantar que estamos en condiciones de hacer un bloque, excluyendo los artículos 317, 318, 320 y 325.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- El diputado Penadés propone votar en un bloque los artículos 319, 321,322, 323, 324, 326 y 327.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- ¿Me permite, señor presidente?

También solicito el desglose del artículo 322.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Bien.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- ¿Me permite, señor presidente?

Solicito que también se desglose el artículo 326.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión los artículos 319, 321, 323, 324 y 327.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 317.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa y uno en noventa y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 318.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve en noventa y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 320.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: vamos a hacer una modificación verbal al artículo 320. Al final, cuando dice "dichos instrumentos", vamos a agregar: "Esta exoneración será de carácter opcional".

Esto apunta a no encarecer el procedimiento y lo relativo a la exoneración de impuestos para la adquisición de títulos de deuda pública. Si no hiciéramos este agregado, se podría terminar en un perjuicio, por encarecer la adquisición de títulos de deuda pública. Por eso planteamos esta modificación en el

texto que sustituirá el literal U) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 320, con el agregado que el diputado Sánchez expresó en forma verbal.

——Ochenta y dos en noventa y uno: AFIRMATIVA.

——En discusión el artículo 322.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 325.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en noventa y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 326.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y nueve en noventa y uno: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 28, presentado por la señora diputada Graciela Bianchi Poli y los señores diputados Gustavo Penadés, Amin Niffouri, Federico Casaretto, Martín Lema, Benjamín Irazábal, Omar Lafluf Hebeich y José Quintín Olano.

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LEMA (Martín).- Señor presidente: es conocida y ha trascendido por distintos medios la situación que muchas veces atraviesan varios pacientes a quienes sus médicos tratantes les indican procedimientos o medicamentos de alto costo y se encuentran con que su prestador de servicios de salud no se los da. En ese caso, el paciente va al Fondo Nacional de Recursos, que puede o no facilitarle el tratamiento, según se encuentre comprendido en sus prestaciones.

Durante todo este tiempo hemos tratado de realizar propuestas para mejorar el acceso a estos tratamientos de alto costo, partiendo de la base de que, obviamente, es muy difícil cubrir todas las indicaciones médicas. Pero el hecho de que sea difícil no nos conforma; debemos plantear propuestas para que la mayor cantidad de tratamientos llegue a la mayor cantidad de pacientes.

No compartimos algunas de las acciones promovidas por el Poder Ejecutivo. Ya en 2015 se pretendió evitar que los pacientes recurrieran a la Justicia, a través de acciones de amparo, para conseguir este tipo de tratamientos y en el artículo 188 de esta Rendición de Cuentas, advertimos el mismo espíritu de procurar impedir que el paciente recurriera al Poder Judicial para acceder al tratamiento indicado. Si bien no compartimos esa forma de actuar, sí entendemos algunos de los argumentos expresados por el Ministerio de Salud Pública en cuanto a que los recursos son finitos.

Por supuesto que entendemos que los recursos son finitos, señor presidente, pero no queremos quedarnos solo con el diagnóstico ni con la dificultad que presenta un tema de esta sensibilidad y características. Es por ello que, con varios legisladores del Partido Nacional, promovimos este aditivo que pretende que diferentes particulares obtengan el incentivo fiscal para aportar al Fondo Nacional de Recursos cuando se trate de prestaciones que no están comprendidas originariamente en el Fondo.

Obviamente, este tipo de disposiciones no solucionarán todo el problema; sería ingenuo de nuestra parte creer que con este tipo de iniciativas se resuelve el tema de fondo, que es mucho más complejo, esté quien esté en el gobierno y sea del

partido político que sea. Pero si bien podemos decir que esto no soluciona el tema de fondo o la totalidad del problema, nos permite reducir injusticias. Y si permite reducir injusticias, ¿por qué no optar por uno de los caminos que mejoran el acceso de tantos pacientes a procedimientos y medicamentos de alto costo?

Cuando hablamos de procedimientos, podemos dar ejemplos como la endoprótesis aórtica y los implantes cocleares, respecto de los que, hoy por hoy, por protocolo, el límite de edad es muy bajo. A medida que la ciencia avanza, siguen apareciendo procedimientos cuyos costos son tan elevados que, muchas veces, no se pueden incluir con carácter universal, y lo mismo ocurre con los medicamentos de alto costo. Por ello, permanentemente, nos enteramos de situaciones en las que pacientes que tienen ese problema no saben adónde recurrir.

Con la propuesta que presentamos, el Fondo Nacional de Recursos podría recibir fondos de los contribuyentes del IRAE para resolver algunas injusticias.

A la vez, esto va en la línea de algunas medidas que propusimos y que ha tomado el Ministerio de Salud Pública, como el procedimiento administrativo abreviado. Hoy por hoy, en el Ministerio de Salud Pública se estudia caso a caso. Quiere decir que ya hubo diferentes acciones que no necesariamente van en sintonía con la universalidad; se va teniendo en cuenta la situación clínica de cada paciente con este tipo de indicación médica de procedimientos o medicamentos de alto costo. Como no nos quisimos quedar en el diagnóstico, propusimos este aditivo, con la exclusiva finalidad de pudieran financiarse prestaciones y medicamentos de alto costo que no se encontraran incluidos en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) ni en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM); de esta forma, muchos pacientes que necesitaran este tipo de tratamientos se podrían unir con particulares que tienen la intención de contribuir, lográndose mayor accesibilidad a partir de ese nexo.

Ese es el espíritu de esta propuesta. Como señalamos hace un momento, estamos de acuerdo con que no soluciona todo el problema, pero ayuda a disminuir la cantidad de situaciones sensibles e injustas que atraviesan muchos de nuestros compatriotas.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 28, presentado por la señora diputada Graciela Bianchi Poli y los señores diputados Gustavo Penadés, Amin Niffouri, Federico Casaretto, Martín Lema, Benjamín Irazábal, Omar Lafluf Hebeich y José Quintín Olano.

——Treinta y ocho en ochenta y nueve: NEGATIVA.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: no dudamos de la buena intención que animó a elaborar el contenido de la Hoja que acaba de considerarse.

En oportunidad de la comparecencia del señor ministro de Salud Pública a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, se dio un largo debate con respecto al artículo 188. Allí todos los partidos acordamos que el ámbito para discutir sobre los medicamentos de alto costo fuera la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Desglosamos el artículo 188 porque todos los partidos entendimos que había que hacer algo para balancear el derecho de las personas a acceder a los medicamentos para garantizar su salud y los intereses corporativos.

Seguramente, todo ese debate va a implicar el perfeccionamiento del sistema

actual, con las canastas, el financiamiento y la forma como se van a ir generando estas soluciones. Entonces, tanto el artículo 188 como esta Hoja serán el puntapié para que la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social discuta el conjunto de temas relacionados con el Fondo Nacional de Recursos. Eso fue lo que nos pareció más pertinente, habida cuenta de que todas las bancadas estamos de acuerdo con que hay que trabajar en este tema, como quedó de manifiesto en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Estas iniciativas, como otras que busquen mejorar lo que existe en el país, podrán concentrarse en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, a fin de trabajar en una ley integral que abarque estos temas y que siga mejorando el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque la reforma fue muy buena. De esta manera, las mejoras se podrán seguir construyendo en ese espacio.

Por esas razones, no hemos acompañado este aditivo.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: somos conscientes de lo que se había hablado en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda en cuanto a desglosar el artículo y enviarlo a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

El diputado Martín Lema planteó este aditivo en nombre del Partido Nacional porque todos sabemos lo que pasa en las comisiones con los diferentes temas, con razón, porque hay que estudiarlos, analizarlos, llamar a diferentes organismos y ministerios. Sin embargo, este es un tema que nunca tiene plazo; siempre es urgente. Entonces, se planteó este aditivo para dar soluciones a casos que se presentan todos los días. Todos somos conscientes de que siempre salen en los medios de prensa colectas para alguna persona. Esta es una responsabilidad del Estado frente a la salud de la población. Por lo tanto, nos parece que mientras se discute el tema en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social -lo que va a demandar mucho tiempo- este aditivo permitiría a una familia que está frente a un tema puntual, de vida o muerte, tener acceso a una donación especial. Ese era el motivo.

En el futuro, en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social podrá surgir otra solución, pero reitero que este tema no tiene plazo, es perentorio, es ya; por eso planteamos este aditivo.

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LEMA (Martín).- Señor presidente: en estos temas tan importantes uno debe pasar a la acción.

Cuando en la Ley de Presupuesto de 2015 apareció una iniciativa muy parecida a la del artículo 188 también se dijo que se iba a discutir el tema en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Hemos convocado al ministro de Salud Pública una cantidad de veces a discutir este tema y la única explicación que encontramos es la dificultad que existe para solucionarlo, que es indudable. Pero quienes ocupamos estas bancas tenemos que rendir cuentas y no solo decir que es un tema difícil. Precisamente, como lo es, requiere de mayor tratamiento y de acciones concretas; si no, nos convertimos en una suerte de teóricos de lo que deberíamos hacer, pero no actuamos en consecuencia.

Como tengo oportunidad de tratar con muchas familias que padecen este problema -al igual que legisladores de otros partidos políticos que lo hacen con la mayor sensibilidad-, entiendo la urgencia

que recién destacaba el diputado Lafluf. Estamos hablando de un tema urgente.

Permanentemente, el Ministerio de Salud Pública manifiesta que los recursos son finitos, y como este tipo de iniciativa es materia presupuestal, el ámbito natural para tratarlo es el de la rendición de cuentas. Entonces, no puede llamar la atención que en esta oportunidad discutamos esta iniciativa.

A lo largo de todo el período nos hemos encontrado con que la actitud del Gobierno siempre es patear el tema para adelante, y ya no podemos hacerlo más, porque estamos cerca de su finalización. Si queremos ser serios, hay que hacer algo más por este tema, aunque no sea una solución definitiva, porque quizá no la haya ya que, seguramente, en este momento, en algún lugar del mundo la ciencia esté evolucionando con nuevos tratamientos. Es muy difícil correr detrás de la ciencia. Sin embargo, es posible mejorar la accesibilidad a tratamientos y, en este caso, se podía hacer a través de una propuesta concreta, uniendo a aquel que quiere contribuir con aquel que lo necesita.

Esta iniciativa fue presentada en 2016 a través de una minuta de comunicación por competencia privativa. Hace mucho tiempo venimos insistiendo con esta propuesta. Y como no queremos quedarnos solo en el discurso -necesitamos tranquilidad de conciencia-, actuamos en consecuencia.

Cuestionamos la postura del Poder Ejecutivo en cuanto a promover en la Rendición de Cuentas un artículo como el 188, que es totalmente inconveniente y no refleja los valores de nuestra sociedad. Pero como no solo nos quedamos en la crítica, promovimos esta iniciativa, que lamentamos no haya prosperado.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Señor presidente: comparto lo que manifestó el coordinador de bancada del Frente Amplio en cuanto a que los partidos políticos acordamos discutir responsablemente este tema, que nos preocupa desde hace muchísimo tiempo.

No sé si la Hoja que presentan los partidos de la oposición no refleja más inequidad. Si se hubiera tratado de incentivos o exoneraciones fiscales para medicamentos que están en el PIAS o en el FTM, sería otro el cantar; pero como no sabemos cuál es el monto, seguramente estaríamos tratando a un par de pacientes, que vaya a saber cómo se elegirían.

Como bancada del Frente Amplio, nos comprometemos a tratar este tema con responsabilidad en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, como habíamos quedado.

Muchas gracias.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: mientras estos asuntos se discuten, el Poder Ejecutivo, nuestro Gobierno y el Frente Amplio construyen y hacen cosas que son datos de la realidad.

Todo en la vida es perfectible y, naturalmente, también la conducción política del Frente Amplio. Para eso están las distintas comisiones y allí se escuchan las propuestas de los diferentes partidos políticos. Pero en este caso, para hablar de hechos y no de teorías, tengo que decir que el Fondo Nacional de Recursos, desde 2005, incrementó la cifra de tratamientos de alto precio entregados: se multiplicó por cuarenta el número de pacientes que recibieron medicación de alto precio. De 181 medicamentos en 2005 pasaron a 7.311; ¡cuarenta veces más en trece años! Mientras, discutimos cómo ajustamos

todos estos mecanismos para proceder mejor.

En nuestro país, desde hace trece años, se invierten más de US$ 50.000.000 anuales para cubrir cincuenta y seis medicamentos de veintidós patologías como cáncer, esclerosis múltiple y enfermedades crónicas. Advierta, señor presidente: discutimos, escuchamos, tratamos de ajustar, pero construimos y hacemos.

Uruguay, Canadá y Colombia son los únicos países de América Latina con una cobertura similar.

——La señora diputada me acaba de mencionar que no solo es América Latina, porque mencioné a Canadá. Para eso somos amigos, para eso es escribana y me ayuda.

——Es escribana, abogada y buena profesora.

——Con esta fundamentación de voto, decimos que escuchamos, que debatimos, que tratamos de cambiar el Uruguay, como estamos haciendo desde hace trece años. También creemos, como dijimos en los inicios, que sería bueno que la oposición acompañara, porque así después, cuando se escriba la historia, tendrían para contar "ahí estuve yo". Invitamos, pero si no se suman, excede nuestras posibilidades.

Creemos que con estos datos de la realidad el Gobierno del Frente Amplio no solo habla, propone y escucha sino que, además, promueve acciones.

Reitero: desde 2005 hasta ahora se multiplicó por cuarenta el número de pacientes que recibió medicamentos de alto precio.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 29, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: acá proponemos, como hemos hecho en otras rendiciones de cuentas, la derogación de la ley de inversiones. Es una propuesta que nos generaría recursos.

No quiero caer en lugares comunes, como decir que los extremos se tocan, o en refranes y manifestar que no por mucho madrugar amanece más temprano, sino mencionar realidades como, por ejemplo, dónde nació la idea de la promoción de inversiones.

Este formato arranca por el año 1980, en pleno auge del neoliberalismo, con Reagan en Estados Unidos y con Thatcher en el Reino Unido.

¿Cuál ha sido el resultado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la tasa impositiva se redujo un 50 % mediante exoneraciones? En ese mismo período, el 1 % más rico de Estados Unidos triplicó sus ingresos y crecieron el desempleo y el empleo precario, lo que generó la crisis que nos trajo esta figurita de Trump.

En el Uruguay, el objetivo era mejorar la inversión. Hay que ver qué pasó con la recaudación, con la inversión, con el empleo, con la innovación y con el cuidado del medio ambiente. Según los datos que tenemos, en los años 2012, 2013 y 2014 perdimos de recaudar más de US$ 600.000.000 anuales. Podríamos decir, con un cálculo prudente, que hoy estaríamos perdiendo US$ 650.000.000 por año. Ese monto que dejamos de recaudar por beneficios otorgados, especialmente, a las multinacionales, es superior al presupuesto anual de vivienda, del Mides, del INAU y de la Udelar.

La pregunta que surge es si la inversión creció a partir de esta exoneración fiscal. Si analizamos la

formación bruta de capital fijo, la relación inversión-producto bruto interno, advertiremos que entre 2005 y 2017, con la inversión privada, más allá de algunos puntos altos en 2012, no hubo un crecimiento significativo: está alrededor del 14 % ahora como en 2005. La inversión pública sí se estancó y nunca superó el 5 %; está por debajo.

Vamos a ver los resultados. ¿Creció el empleo? No. Si comparamos junio de 2015 con marzo de 2018, hay treinta mil empleos menos. Ahora se habla de casi cincuenta mil menos. Además, hay un problema de subempleo entre los que están ocupados, precarización del trabajo, primarización de la economía y mayor dependencia.

Por todo eso, señor presidente, proponemos que se derogue esta ley: para empezar a recuperar un espacio de inversión realmente productiva, recaudar y recuperar capital de aquellas inversiones que vienen, simplemente, a saquear nuestro país, porque regalamos todo.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Uno en ochenta y ocho: NEGATIVA.

Se pasa a considerar la Sección VIII "Disposiciones varias", que comprende los artículos 328 al 353, inclusive.

——La Mesa les recuerda que restan seis hojas con artículos aditivos que se votarán al final.

En discusión el artículo 328.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo 329.

Hay tres sustitutivos para este artículo.

El primero figura en la Hoja Nº 30, presentada por el señor diputado Eduardo Rubio.

——El segundo artículo sustitutivo figura en la Hoja Nº 31, presentada por los señores Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——Y el tercer artículo sustitutivo figura en la Hoja Nº 32, presentada por los señores diputados Gustavo Penadés, Sebastián Andújar, Omar Lafluf Hebeich, Wilson Aparicio Ezquerra Alonso y Benjamín Irazábal.

——En discusión.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el artículo 329 -que en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo figuraba, con otra redacción, como 310- merece, desde nuestro punto de vista, un análisis particular.

¿Por qué? Porque a través de este artículo el Poder Ejecutivo está destinando el excedente del Fondo de Estabilización Energética a la inversión que requiere el proyecto de infraestructura Ferrocarril Central.

En la Comisión de Presupuestos integrada con la Hacienda, en oportunidad de la visita del señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, entre los reclamos o requerimientos que realizamos -como consta en la versión taquigráfica-, figura el de si el Poder Ejecutivo había realizado un análisis de la relación costo-beneficio que entrañaría, en su globalidad, el emprendimiento de UPM II.

Parece obvio que para tomar una decisión de la envergadura de afectar recursos a las obras del Ferrocarril Central, por las que se asumirán compromisos extraordinarios -en su mayoría afectarán al

próximo período de gobierno-, el Estado uruguayo debe saber cuáles son las contrapartidas de las distintas variables que componen una inversión de esta naturaleza, como la generación de fuentes de trabajo y los aportes que se verterán al Estado vía impuestos. Por un lado, debe tener en cuenta todos los ingresos y beneficios que entrañará una inversión de esta importancia y, por otro, todos los costos, inclusive, los de carácter ambiental; en esto hago especial hincapié.

Por lo tanto, nosotros preguntamos si existía un documento o si el Poder Ejecutivo había realizado un estudio de relación costo-beneficio, y el señor ministro Astori nos dijo que sí. Por esa razón, a renglón seguido, reclamamos que dicho documento o informe se enviara a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

Nos consta que, reiteradamente, la Mesa de la Comisión -la presidenta y los secretarios- realizó su trabajo requiriendo esa información al Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, cuando se analizó el Inciso correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas, reiteramos la solicitud ante el subsecretario Ferreri, que fue quien compareció en esa oportunidad, y nos dijo que esa información iba a ser enviada al Parlamento.

Quiero hacer especial hincapié en la opacidad con la que se está tomando esta decisión. ¿Cuánto se está comprometiendo? ¿Alguno de los diputados presentes sabe cuál es el compromiso que está asumiendo el Estado hacia el futuro? ¿Alguno sabe qué otros beneficios que nos traerá la inversión de UPM II?

En realidad, con respecto a los costos conocemos muy poco, ya que como se está en el proceso de licitación no podemos saber exactamente cuáles son las cotizaciones que establecieron las empresas que en este momento están compitiendo. De todos modos, debemos recordar que la obra del Ferrocarril Central se llevará a cabo por contratos de participación público privada. En consecuencia, quien gane la licitación no solo cobrará por el costo de la obra, sino por el financiamiento de dicho costo, que es algo que deberá pagar el Estado durante veinte años.

La pregunta es: ¿qué compromiso asumirá el Estado durante veinte años como consecuencia de la decisión que tomó de manera unilateral? Hay que tener en cuenta que, en realidad, esta decisión no fue acordada con la empresa, sino que el Estado asumió el compromiso, por sí y ante sí, de construir la obra del Ferrocarril Central.

En ese sentido, antes de votar el artículo 329, el Parlamento debería conocer cuánto se está comprometiendo hacia el futuro. Sabemos que se están destinando fondos, pero no sabemos qué deuda quedará, como consecuencia de las obras del Ferrocarril Central, para los futuros gobiernos. Esta decisión comprometerá cuatro períodos de gobierno: el próximo y tres más. Durante veinte años se pagarán los costos de inversión en el Ferrocarril Central, y sobre ellos hubo diversas estimaciones. Se ha hablado de US$ 700.000.000, aunque esa cifra se ha modificado, ya que hay estimaciones que indican que el costo será de US$ 1.000.000.000. Asimismo, se me ha dicho -en función de la experiencia de otras obras de estas características- que el costo final podría ser del orden de los US$ 1.500.000.000.

Si la cifra fuera US$ 1.500.000.000, agregando los costos de financiamiento, no sería extraño que se llegara a los US$ 4.000.000.000, lo que implicará que el Estado uruguayo pagará US$ 200.000.000 por año, durante veinte años.

Entonces, que el Poder Ejecutivo no nos dé información, que estemos absolutamente a oscuras ni más ni menos que en el Poder Legislativo en cuanto a los

compromisos que asume un Gobierno con respecto a los próximos cuatro períodos, me parece una verdadera irresponsabilidad, lo que nos lleva a no votar este artículo 329. Por eso, de antemano, señalo que el Partido Independiente va a votar negativamente este artículo.

Además, seguimos reclamando una información que entendemos el Poder Legislativo -me refiero a los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado -, tiene derecho a conocer. ¡Debemos saber cuál es el compromiso que asume el Poder Ejecutivo en la construcción de la obra del Ferrocarril Central! Hoy existe una total ignorancia al respecto. No conocemos siquiera las estimaciones que se hicieron. Por eso nuestro voto negativo, señor presidente.

Gracias.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: para hacer un poco de historia, el Fondo de Estabilización Energética fue creado en la Ley de Presupuesto del año 2010, precisamente, porque en los años 2008 y 2009 hubo importantes sequías en el país y se necesitaba un fondo de contingencia climática para que, ante cualquier eventualidad como la vivida en esos dos años, hubiera dinero suficiente para costear energía o para utilizar otro tipo de matriz energética que, obviamente, sería más costoso para UTE. Esto se hacía para que las tarifas públicas de electricidad no subieran demasiado.

En definitiva, la composición de este fondo fue realizada a través de dos vías. Una, con el aporte de Rentas Generales, o sea, de los contribuyentes y, otra, la más importante, con el de los usuarios: los clientes de UTE. Este aporte se dio a través de un sobrecosto de facturas, de tarifas de electricidad. De esta forma, el fondo logró obtener una composición de US$ 300.000.000.

Ahora bien: este año, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley en el cual estimó que la composición de ese fondo ya era excesiva y que, por lo tanto, con US$ 120.000.000 podía funcionar bien. Es así que estimó que había un excedente de US$ 177.000.000.

Cuando en esta Cámara discutimos la disposición final de ese exceso que estableció el Poder Ejecutivo -el excedente del Fondo de Estabilización Energética- dijimos claramente que eso tenía que volver a los verdaderos titulares, a los verdaderos propietarios; era una cuestión de legitimidad que volviera a los usuarios y clientes de UTE, sin otro destino.

En mayo de este año, la Cámara entendió -con los votos del oficialismo- que este excedente tenía que ir a Rentas Generales, para luego darle un destino en la próxima instancia presupuestal que es esta Rendición de Cuentas.

Cuando se inicia la discusión, cuando nos hacemos del articulado enviado por el Poder Ejecutivo, aparece el artículo 310 -ahora 329-, por el cual se le da un destino claro y específico: para las obras de infraestructura del Ferrocarril Central, para la empresa UPM.

Nosotros volvemos a decir, como manifestamos en mayo, que por un tema filosófico, de legitimidad, de propiedad, este excedente no puede tener un destino diferente que UTE, con el fin exclusivo de bajar las tarifas eléctricas a los usuarios, esto es, a las familias y a las empresas.

Este tema nos parece meridianamente claro y legítimo. A mi juicio, cualquier otra utilización que se le dé a este excedente es improcedente e ilegítima. Esta es la razón por la cual el Partido Colorado está presentando nuevamente -como hizo en mayo de este año- un sustitutivo para modificar el destino del excedente del

Fondo de Estabilización Energética y que, en definitiva, vuelva a UTE con el fin exclusivo de bajar las tarifas eléctricas a sus clientes.

En la referida transferencia se debe tener como límite las sumas que UTE haya vertido a Rentas Generales con destino al Fondo de Estabilización Energética mencionado. Estas son las razones por las cuales no vamos a acompañar el artículo 329 e impulsaremos el aditivo que figura en la Hoja Nº 31.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Todos conocen nuestra posición respecto a este tema, pero me gustaría decir que en el año 2016 este asunto se empezó a manejar en una presentación del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, manifestando la voluntad de enviar estos fondos a la obra del ferrocarril central. En ese momento, varios legisladores le hicieron ver al ministro Astori que eso precisaba aprobación parlamentaria. Por lo tanto, se planteó en la Comisión de Hacienda que fuera a Rentas Generales para que el Parlamento definiera en la instancia de rendición de cuentas el destino de ese fondo. Así pasó. Nosotros votamos en contra y lo fundamentamos en el plenario.

El Fondo de Estabilización Energética, como decía hace un momento el diputado Rodríguez, se crea para paliar alguna crisis climática que afecte al país, por si hubiera que echar mano a la Central Batlle o comprar energía.

Se decía, como señaló el ministro Kreimerman hace algunos años, que el día que tuviéramos energías renovables, especialmente los parques eólicos, la tarifa de energía eléctrica bajaría casi un 30 %. Hoy tenemos el 45 % de la generación de energía en el país a través de energías alternativas, algunas por biomasa, especialmente UPM -también se le va a comprar lo que produzca en la segunda planta, que será el doble de lo que produce en Fray Bentos- y un desarrollo de los parques eólicos realmente espectacular. Hay que felicitar esa política. Sin embargo, lo único que no bajó fueron las tarifas de UTE; sucedió al contrario: la subió todos los años y en varias oportunidades.

Nosotros entendemos que está bien que quede un Fondo de Estabilización Energética de US$ 120.000.000; lo que se precisa son US$ 80.000.000 y se le agrega un plus por cualquier cosa de US$ 40.000.000, y sobran US$ 177.000.000. Ahora, estos US$ 177.000.000 tienen que volver a la población, porque fue la que habilitó este fondo a través del pago de la tarifa que, en definitiva, subió sistemáticamente todos los años. A su vez, UTE, en los cinco años, generó ganancias por US$ 1.919.000.000 y en estos dos últimos años pasó US$ 437.000.000 a Rentas Generales para soportar el presupuesto del país.

Quiere decir que la población sigue poniendo plata. Puso los US$ 437.000.000, le dio la ganancia de los US$ 1.919.000.000 a UTE -de los cuales salieron los US$ 437.000.000- y ahora pone US$ 177.000.000 más para la obra del ferrocarril central.

Todos saben que no estoy en contra de la inversión de UPM. Lo único que pido es que se haga en las mismas condiciones que se hizo UPM 1, ya que la empresa usó los mecanismos que existen en el país. Y el país tiene ley de promoción de inversiones, ley de zonas francas, y una política fiscal dirigida a la inversión, especialmente, a la extranjera; así se hizo UPM 1.

Yo no estoy en contra de la inversión, porque prefiero, con todos los cuidados posibles, que las 1.200.000 hectáreas de bosque salgan industrializadas y no seguir

viendo que salen en troncos por el puerto de Fray Bentos. Pero eso no me habilita a decir que esto está bien, porque esta UPM usa beneficios que no tenía la primera, ni cerca. Es peor, porque se está invirtiendo.

La PPP para el ferrocarril central es de US$ 853.000.000 y yo tiemblo, porque cuando el Gobierno habla de UPM dice la "posible inversión". Tiemblo, y tendríamos que estar temblando todos, porque la inversión que estamos haciendo es para la "posible inversión". ¿Cómo se decide esa inversión? La decide la empresa, por sí y ante sí, en el 2020. No quiero tratar a nadie de irresponsable. Le dije al ministro Astori que deseo que exista certeza de que la inversión se hará porque, de lo contrario, será una catástrofe. Además, no es cierto que el ferrocarril central funcionará con o sin UPM. No hay producción que sustituya las 2.000.000 de toneladas que va a generar UPM de Paso de los Toros a Montevideo. Nosotros creemos que esto está mal. Piensen un segundo. El total que adjudica el Poder Ejecutivo en esta Rendición de Cuentas es US$ 145.000.000 para todo. Y andamos rascando la lata. Con respecto a la soja, el subsecretario dijo que la producción crecería; pero el año pasado primero hubo seca y después inundación, como decía Tabaré Etcheverry. Está bien, ahora partimos de la base de que va a crecer sobre lo pasado, cuando ya perdimos el 57 % de la soja. Tal vez pueda crecer un poquito, pero no es la cosecha récord del 2017.

Lo otro, son las utilidades del Banco de la República. Ayer se dijo de dónde sale la mayoría de las utilidades de la institución. Nosotros creemos que esto es un gravísimo error, y por supuesto no vamos a votar este artículo. Además, ahora viene un agregado. ¿Saben cuánto se saca a los US$ 177.000.000 que van al ferrocarril central de UPM 2? $ 200.000.000, es decir, US$ 6.500.000. Entonces, está nuestro planteo, otro del Partido Colorado y otro del señor diputado Rubio. Esto tiene que volver a la población. ¿Saben cómo? En la misma forma en que se devuelve el Fonasa.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: hemos presentado un sustitutivo al artículo 329. En sala se efectuaron intervenciones que compartimos plenamente.

El señor diputado Posada hacía un resumen de la realidad del emprendimiento de UPM 2, del secretismo con que se ha tratado y de la exagerada generosidad para privilegiar a una multinacional, exagerada con respecto a lo ya exagerado de la ley de inversiones que nosotros pretendíamos derogar, prototipo de una política neoliberal. Pero se va más allá.

Ayer, en una mesa redonda de entes, que se hacía en la carpa instalada frente a la plaza 1º de mayo, se hablaba de UTE, de la energía eólica. Obviamente, estamos todos a favor de la energía eólica, pero el problema es cómo se consiguió: privatizando la generación de energía, generando más regalías que las que propone la ley de inversiones, de manera tal que la inversión se recuperaba prácticamente en el acto y vendiéndonos energía obligatoria, aunque no la usáramos. La tarifa no baja porque la energía se compra fija. Es una inversión redonda, ponen el molino y venden energía aunque no la necesitemos. Para los privados está garantizado el negocio. Es difícil entender por qué el Estado no lo hizo.

Con relación a este artículo, cuando el ministro Astori anunciaba la voluntad de dar a UPM para las obras del tren los excedentes del Fondo de Estabilización Energética, el Parlamento reclamó que era

su potestad dar destino a esos recursos. Entonces, lo que se hizo fue esperar un poco más para mandárselo a UPM a través de la Rendición de Cuentas.

Somos conscientes de que en la bancada del partido de Gobierno hubo una pelea interna por la educación. Nosotros reconocemos y acompañamos esa pelea, pero el resultado es magro. Son $ 400.000.000, algo así como el 7 % del total del excedente del fondo; unos US$ 13.000.000 de los US$ 180.000.000. Lo que se hace es vestir esta propuesta, como para decir que no se la damos solo a UPM, sino que también va para la educación: el 7 %; el resto va derecho para UPM.

Nuestra propuesta original era que se enviara todo el excedente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para fortalecer las políticas de construcción de vivienda. Hemos dicho que en este país hay un presupuesto paupérrimo en vivienda: el 0,4 % del PBI. Con esto, fortalecíamos ese presupuesto para todos los planes de construcción de vivienda nueva, incluyendo cooperativas y los distintos planes actuales del ministerio o los que pueda haber.

A partir de la modificación que hizo la bancada oficialista, modificamos nuestro sustitutivo; mantenemos los $ 400.000.000 que la bancada del partido de Gobierno propone que vayan a la ANEP e insistimos para que el saldo, la mayor parte, el 93 % restante, se destine a políticas de vivienda. Creemos que UPM no necesita más regalías. No los convencemos con esto para que vengan o no; eso dependerá de la ecuación que hagan. Pero si seguimos regalando para que vengan, capaz que nos quedamos sin el pan y sin la torta. Nosotros no estuvimos con UPM 1, con Montes del Plata ni con UPM 2, porque es la concreción de un modelo de país al servicio de las multinacionales, de primarización de la economía. Además, no exportamos celulosa, seguimos exportando troncos porque la celulosa sale de una zona franca y ya no es territorio nacional. Continuamos exportando troncos para seguir exonerando de impuestos y privilegiando a una multinacional.

Por lo tanto, nuestra propuesta, que figura en la Hoja Nº 30, es mantener los $ 400.000.000, $ 200.000.000 y $ 200.000.000 para la ANEP y el resto que vaya, también en dos tandas, en 2019 y 2020 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para construcción de vivienda nueva.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: no vamos a discutir si UPM sí o UPM no. En particular, se ha reiterado que el proyecto de ferrocarril central se va a concretar -es la decisión del Poder Ejecutivo, incluido dentro de su plan de infraestructura pública- se haga UPM o no. Por lo tanto, no vamos a discutir si UPM sí o UPM no. Esto fue varias veces reiterado por el Poder Ejecutivo, antes y durante el tratamiento de esta Rendición de Cuentas.

UTE factura internamente, sin considerar las importaciones, US$ 1.651.000.000 anuales, por lo que este fondo representa un aproximado al 10 % de la facturación anual, por única vez, mientras que la facturación anual se repite todos los años.

Las propuestas que se han hecho sobre la posibilidad de devolver a sus auténticos dueños -que serían los usuarios de UTE- no tiene en cuenta que la energía eléctrica y, por lo tanto, los usuarios, representan aproximadamente el 99,9 % de la población, porque esa es la cobertura que hoy tiene UTE de energía eléctrica en los hogares y en las empresas.

Por lo tanto, no hay una gran diferencia entre que se les devuelva a los

usuarios de UTE y se invierta en algo que va a ser propiedad de todos los uruguayos, no de UPM, que es un ferrocarril que una el centro del país con Montevideo en condiciones de hacer competitiva y segura esa forma de transporte.

Por eso es que en principio se pensó en darle este destino. Se reclamó -correctamente, nosotros también lo apoyamos- que el destino de esos US$ 170.000.000 se decidiera en una instancia presupuestal. Entonces, en esta instancia presupuestal estamos dando a la ANEP recursos para inversión y el saldo para prever los gastos adicionales a la licitación, cuyo monto conoceremos dentro de muy pocos días; ya no será más una incógnita ni necesitaremos especular si son US$ 700.000.000, US$ 1.000.000.000, US$ 1.500.000.000 o US$ 4.000.000.000, como se manejó más temprano. Estamos esperando; hubo una simple prórroga de la apertura de los sobres por reclamos de las empresas, pero ya sabremos cuánto es el costo.

Estos son costos adicionales que, inclusive, aclaramos son para gastos y obras, previos y necesarios para que se pueda concretar la obra del ferrocarril central. Son para expropiaciones y algunas modificaciones de acceso a ciudades que van a ser atravesadas por la línea férrea, que no van a entrar, por supuesto, en lo que se le va a pagar a la empresa adjudicataria por participación público privada. Entonces, están previstos estos fondos adicionales por lo que implicará la licitación por participación público privada que, como dije, se conocerá en pocos días.

A nuestro entender, no podemos, no es lógico prever que esto vaya a una baja de tarifas de UTE, porque implicaría rebajarla un año y, al siguiente, subirla en forma importante, en términos reales con respecto a lo que se bajó. Esto no ha sucedido hasta ahora; en términos reales las tarifas se han ajustado permanentemente por debajo de la inflación.

Por lo tanto, señor presidente, vamos a acompañar el texto tal cual está, dando recursos a la ANEP para inversiones y dejando el saldo para el proyecto de complementar la inversión que va a hacer el país en la construcción del ferrocarril central, más allá de lo que implica la licitación de la participación público privada.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Señor presidente: me siento totalmente identificado y representado por las palabras del señor diputado Posada. Creo que la argumentación que dio es totalmente clara respecto al negocio de UPM y, en particular, al del ferrocarril central.

Quiero agregar de dónde proviene este fondo. Proviene de la transformación de la matriz productiva de UTE, lo que saludamos abiertamente. UTE ha transformado la matriz permitiendo tener un ahorro energético y un aumento del Fondo de Estabilización Energética que ha llevado a que hace algunos meses esta Cámara votara que podría ser utilizado en otros objetivos. Nosotros acompañamos que se definiera un tope a ese fondo, pero no que no tuviera un destino marcado. Y acá está el destino que se le da, que proviene, en definitiva, de lo que cada uno de los usuarios de UTE paga de más por sus tarifas. En definitiva, creemos que eso debe ser volcado de una u otra forma a cada uno de los ciudadanos de este país.

También queremos agregar que según este artículo, ese fondo se usará para ejecutar obras adicionales y adelanto a cuenta del pago por disponibilidad de un

proyecto de PPP, que es un instrumento de financiación de distintas obras que ha resultado un fracaso rotundo, porque muy pocas de las anunciadas se han concretado.

Entonces, creemos que insistir con un instrumento de este tipo no es la mejor forma de darle destino a una inversión prevista, más allá de la explicación del señor diputado Posada.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor presidente: hemos escuchado con atención varias propuestas que plantean un conjunto de temas y de cuestionamientos.

Por un lado, se habla de la posibilidad de rebajar las tarifas. En particular, hemos estado trabajando en alguna propuesta y todos sabemos que no compete a los legisladores, al Parlamento, regular las tarifas de UTE y pienso, sin duda, que los avances obtenidos en el transcurso de estos años en materia de energías alternativas, han permitido en gran medida afrontar determinadas situaciones de crisis energética en el país. Ha sido un gran acierto.

Según la información recabada, en el Uruguay, con nuestros recursos, estamos produciendo toda la energía que se necesita y obteniendo un excedente de 10 %. Es por eso que quiero adelantar nuestra opinión en cuanto a que sí es necesario trabajar en torno a algunas alternativas, tendientes a buscar mecanismos y propuestas que nos permitan reducir el costo de la energía.

En alguna oportunidad hemos planteado que el 10 % de ese excedente se puede destinar, por ejemplo, a los parques agroindustriales ubicados al norte del Río Negro, a fin de lograr la competitividad necesaria para el desarrollo de esa zona, así como la generación de empleo y trabajo.

El artículo 329, referido a la Ley Nº 19.620 que nosotros discutimos y aprobamos, propone una partida de US$ 173.000.000, por única vez, y da una señal al destinar $ 200.000.000 a la Administración Nacional de Educación Pública. Pero en virtud de que se ha cuestionado que se saquen estos dineros específicamente para el funcionamiento del ferrocarril central -en su momento también hemos presentado alguna iniciativa en esta dirección-, quiero decir que consideramos que no se está entendiendo la importancia que este tiene para el desarrollo del país.

Según surge de los datos de esta Rendición de Cuentas, de esos US$ 825.000.000 de inversión inicial, esta es una partida específica tendiente a solucionar algunos de los inconvenientes que se van a generar, pero la idea clara es lograr el desarrollo del ferrocarril central en esos 273 kilómetros para el ingreso a Montevideo, con una vía doble -tal como se ha presentado en varias oportunidades-, que como bien se dijo va a conectar Paso de los Toros con Montevideo.

También se ha hecho mucho hincapié en el tema de UPM, por lo que quiero dejar claro que es un gran negocio que le va a permitir al ferrocarril desarrollar otro tipo de emprendimientos vinculados con la infraestructura en el Uruguay, porque no estamos hablando solo de las cargas de UPM sino también de otras cargas. A través de ese mecanismo se podrán sacar muchísimos camiones de la circulación por nuestras rutas y cuando eso se logre también vamos a conseguir un ahorro importante para el mantenimiento en condiciones de la infraestructura vial de nuestro país.

Por eso acompañamos este artículo: creemos que en gran medida representa un avance para el país. También quiero dejar claro el compromiso de trabajar y

profundizar en el análisis de los mejores mecanismos para rebajar las tarifas de energía que se factura a los ciudadanos de nuestro país, ya que las ganancias de UTE están por encima de los US$ 400.000.000.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Recordamos que la Cámara se encuentra considerando el artículo 329, para el que se han presentado tres Hojas conteniendo artículos sustitutivos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 329, tal como viene de Comisión.

——Cincuenta en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

Por lo tanto, quedan descartados los artículos sustitutivos que mencionamos.

En discusión el artículo 330.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y cuatro en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 331.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y siete en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 332.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y dos en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 333.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 334.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 335.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo 336.

Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 33, presentado por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 336, tal como viene de la Comisión.

——Cincuenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 337.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y siete en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 338.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis por la afirmativa. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 339.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y tres en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 340.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 341.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 342.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 343.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: proponemos una modificación al final del inciso primero de este artículo; consiste en eliminar la palabra "exclusivamente". Por lo tanto, donde dice "ómnibus con motorización exclusivamente eléctrica" debe decir "ómnibus con motorización eléctrica".

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 343 con la modificación verbal propuesta por el señor diputado Sánchez.

——Ochenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

——En discusión el artículo 344.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 345.

Hay un sustitutivo que figura en la Hoja N° 40, presentado por el señor diputado Alfredo Asti.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: cuando estábamos considerando el articulado correspondiente a ASSE, anunciamos que, por cuestiones de mejor técnica legislativa, presentaríamos un artículo sustitutivo al artículo 283, relativo a la nueva Unidad Educación, prevención y diagnóstico de la salud escolar, a la que se otorgaba la posibilidad de recibir donaciones especiales, además, citando un artículo que ya no está en uso. La propuesta es que esta Unidad figure en el numeral 3), correspondiente a Salud, agregando un literal S), conjuntamente con las demás entidades que pueden recibir donaciones especiales, exonerando del impuesto a la renta a quienes las hagan.

Todos los legisladores y todas las legisladoras tienen en sus bancas la nueva propuesta de redacción del artículo 345, incluyendo la facultad que ya había sido votada en el artículo 283, por lo que debe ser reconsiderado y votado en forma negativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar si se reconsidera el artículo 283.

——Noventa por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se reabre la discusión del artículo 283.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 283.

——Cero en noventa: NEGATIVA. Unanimidad.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 345, tal como viene de la Comisión.

——Cero en noventa: NEGATIVA. Unanimidad.

Se va a votar el sustitutivo de la Hoja N° 40.

——Noventa por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 346.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y cuatro en noventa: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 347.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: hemos votado negativamente este artículo porque ata una posible redistribución dentro del presupuesto nacional para determinados incisos a la contingencia de un crecimiento diferente al establecido en la exposición de motivos y el Informe Económico Financiero que envió el Poder Ejecutivo.

Creemos que este artículo es inconstitucional porque en la ley de presupuesto y en las leyes de rendiciones de cuentas se deben establecer claramente los gastos, y nada puede quedar atado a una contingencia y menos aún el Parlamento puede delegar al Poder Ejecutivo el otorgar estos aumentos. A nuestro juicio, se violentan los artículos 86, 214 y 229 de la Constitución, y esa es la razón principal por la cual decidimos no acompañar este artículo. Realmente creemos que es inconstitucional.

Muchas gracias.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: obviamente, votamos convencidos porque este artículo presenta dos definiciones importantes. Tiene la impronta de toda esta Rendición de Cuentas, que es evitar el aumento del déficit fiscal, pero superada esta restricción, la prioridad es la educación y, en particular, el financiamiento de los incrementos salariales en la ANEP para el año 2020. Es necesario buscar el equilibrio entre las dos patas de una misma rendición de cuentas y modificaciones presupuestales. Por lo tanto, consideramos absolutamente atinado este tipo de disposiciones que ya hemos utilizado en otras oportunidades para dar una señal clara de a dónde deben dirigirse los recursos en caso de que sean superiores a los que se han previsto en esta Rendición de Cuentas.

Había solicitado que luego de votado lo reubicáramos al final del articulado, precisamente por su carácter, para que no quede en medio de otras disposiciones que tienen aplicación a partir del 1° de enero de 2019.

SEÑOR POSADA (Iván).- ¿Me permite, señor presidente?

Solicito la reconsideración del artículo 346.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar si se reconsidera el artículo 346.

——Ochenta y siete en ochenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se reabre la discusión del artículo 346.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 346.

——Cuarenta y nueve en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 348.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

El señor diputado Asti mocionó para que el artículo 347 fuera ubicado al final del articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Sesenta en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: quiero dejar constancia de un problema de técnica legislativa y de fondo. Si tenemos que poner este artículo al final, quiere decir que, efectivamente, es inconstitucional, porque buscamos sacarlo del cuerpo normativo, que es la Rendición de Cuentas. Estoy convencida de que es inconstitucional porque, a largo plazo, le digo al Poder Ejecutivo algo así como que si le queda superávit… Ni siquiera me interesa el contenido porque, además, sabemos que no va a pasar, pero supongamos que sí pasara.

Ahora bien, lo que menos entiendo -por eso voté en contra; a fin de cuentas, en algún momento los diarios de sesiones se leen- es qué cambiamos poniéndolo al final, porque forma parte del mismo proyecto de ley; en consecuencia, cuando la ley entre vigencia, el artículo también va a entrar en vigencia. Lo que pasa es que se votó un artículo que se llama condición suspensiva, o sea, "tiene efecto si". Yo nunca vi una cosa igual.

En definitiva, voté en contra de la reubicación, por un mínimo de coherencia porque, nos guste o no, va a entrar en vigencia cuando entre en vigencia el resto del cuerpo normativo que es la Rendición de Cuentas.

Disculpen, pero quiero que cuando se lean los diarios de sesiones quede por lo menos alguna constancia de la observación de técnica legislativa y de derecho de fondo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 349.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: a los efectos de cumplir con lo que establece el literal M) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara, quiero declarar mi carácter de jubilado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, porque el artículo 349 establece el cese de los aportes al adicional en el mismo momento en que se verifica el cese de los aportes al Fondo de Solidaridad.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: también declaro que estoy comprendido en lo que establece el literal M) del artículo 104, por haber accedido a la jubilación profesional.

Por otra parte, me parece que el artículo 349 debería necesariamente incluirse luego del artículo 351, que es en el que se establecen causales para el cese de la obligación de pagar el Fondo de Solidaridad. Como el artículo 349 se refiere a un adicional y al cese de aportes, debería votarse primero el artículo 351, que es el que dispone las condiciones de cese de aportes al Fondo, y luego este, que estipula que el pago del adicional cesará en el momento en que cesen los aportes al Fondo.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: solo quiero dejar constancia de que yo también soy jubilada, pero de la Caja Notarial.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Estamos llegando al final. La ansiedad a veces nos empuja un poco y nos entreveramos. Vamos a votar lo que tenemos que votar ahora, que es el artículo 349; luego veremos su ubicación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 349.

——Noventa y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 350.

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Señor presidente: no acompañaré este artículo, y quiero llamar la atención de los colegas de la Cámara en cuanto a de su contenido.

Entiendo perfectamente el espíritu con que fue propuesto, pero es evidente que se trata de un artículo inconstitucional, que sugiere cómo se debe hacer parte del cálculo del valor de la patente de rodados en cada ejercicio, en cada departamento, dado que el párrafo final, dispone que "[…] se deberá considerar la cotización del dólar estadounidense interbancario comprador vigente al último día hábil de noviembre del año anterior". Claramente, la Constitución otorga esta materia a los gobiernos departamentales. Son los intendentes y las juntas departamentales los que deben fijar y aprobar, con las consideraciones correspondientes, el valor de la patente cada año. Por lo tanto, esta disposición es violatoria de los artículos 273 y 275 de la Constitución, en los que se establece esta potestad exclusiva de los gobiernos departamentales.

Reitero que entiendo el espíritu que animó a proponer esto, pero me parece que es una intromisión en la autonomía de los gobiernos departamentales. Por lo tanto, votaré negativamente.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: este tema puede ser muy discutible, no el hecho de si viola la Constitución, sino lo que refiere a la autonomía de los gobiernos departamentales, porque el artículo involucra una acción que solo pueden realizar las autoridades de los gobiernos departamentales. Por lo tanto, no me pronunciaré al respecto, porque no soy titular de esa acción.

Creo que los intendentes pueden accionar y el único que puede resolver en ese sentido no es el Parlamento, sino la Suprema Corte de Justicia, que es la que responde tanto acerca de los recursos de inconstitucionalidad como sobre la violación de la autonomía departamental.

Pienso que este artículo puede tener algún vicio en ese sentido, dado que el artículo 4º que se modifica, parte de la base de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presentará una propuesta de valores al Congreso de Intendentes.

Entonces, en una ley nacional establecemos una propuesta que debe ser aceptada por el Congreso de Intendentes, para poder hacer efectivo lo determinado en la Constitución en cuanto a su derecho a fijar este tipo de tributos sobre los vehículos automotores.

Dejo esa constancia, pero reitero que por no ser titular de la acción, no me corresponde a mí definir si esto viola la autonomía departamental. Simplemente, separo el hecho de que el artículo 4º de la Ley Nº 18.860 refiere a una propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo, que debe ser aprobada por el Congreso de

Intendentes. El agregado final es una definición en cuanto a qué tipo de cotización tomar cada año. Es un avance que no estaba previsto.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: he escuchado con mucha atención al señor diputado Asti, y francamente se me genera una duda importante, en particular, porque no soy titular de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y no intervine en el proceso que condujo a esta definición. Me preocupa mucho, frente a las atendibles observaciones y aprensiones que planteaba el señor diputado Viera, que el señor diputado Asti, que es quien defiende el artículo, nos diga que puede haber algún margen de duda en cuanto a la lesión de las autonomías municipales y que respecto a eso prefiere no pronunciarse porque él no es el titular de esa acción de lesión de autonomía sino, por supuesto, los gobiernos departamentales, ahora o, más bien, en el futuro. No estamos en un cenáculo académico, discutiendo si en ese caso hay una inconstitucionalidad o no. Nosotros tenemos que legislar con la certeza de que no hay inconstitucionalidad de ningún tipo. Y si, eventualmente, tenemos alguna duda, debemos abstenernos de legislar.

Yo tampoco me estoy pronunciando, y lo digo con franqueza. Lo que ocurre es que llego a este debate y me encuentro con que quien defiende la fundamentación de este artículo nos dice que tiene dudas. Porque implícitamente queda claro que el diputado Asti está dudando. No alcanza con decir: "Yo no tengo la legitimación activa" o: "Serán los gobiernos departamentales los que habrán de accionar y la Suprema Corte de Justicia resolverá". Eso lo sabemos todos. Pero antes de que alguien accione y antes de que la Suprema Corte de Justicia resuelva, los legisladores tenemos que tomar la decisión que nos corresponde, que es aprobar las leyes y, por supuesto, abstenernos de legislar de forma inconstitucional, si esa fuera la hipótesis.

Mi Partido tiene dudas con relación a esto, y según me han dicho mis compañeros de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, vamos a votar en contra. Ahora bien, si alguna duda nos quedaba, el señor diputado Asti nos la acaba de evacuar, porque -reitero- en nombre de la mayoría o de quienes sustentaron esta decisión nos dice: "Estamos frente a una duda en cuanto a la inconstitucionalidad. Veremos, en todo caso, si alguien acciona y, si alguien lo hace, qué resuelve la Suprema Corte de Justicia".

Francamente, he llegado a la conclusión de que votar esto puede llevarnos a legislar de forma inconducente; solo estoy razonando a partir del sentido común.

Creo que las observaciones del diputado Viera son de sustento. Tienen que ver con la autonomía de los gobiernos municipales y con la potestad tributaria que les cabe con relación a los tributos que explícitamente la Constitución define como privativos de los gobiernos departamentales.

Reitero: creo que la explicación que acabamos de escuchar lo único que hace es avivar las dudas y acrecentarlas de manera significativa.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Asti.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente…

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: el artículo dice lo que puede decir, porque hay un acuerdo entre el Congreso de Intendentes y el gobierno nacional, que data del período pasado. Ese acuerdo solo opera en la persona jurídica del Congreso de Intendentes, hasta que este lo convalide. Lo que hace esta ley es generar un mecanismo de acuerdo con el Congreso de Intendentes, para fijar el valor de la patente de rodados. Ni el Parlamento ni el Poder Ejecutivo podrían forzar otra situación. Y si algún gobierno departamental se bajara de ese acuerdo político por considerar que quizás sería más beneficioso pelear por más recursos -como sucedía en este país antes de este acuerdo, en la época de la guerra de patentes-, lo podrá hacer. Y podrá ir a la Suprema Corte de Justicia a decir: "Vengo a interponer este recurso de inconstitucionalidad que resolvió este acuerdo". En el marco institucional y teniendo en cuenta la autonomía, es la única forma de llevar adelante el acuerdo entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo para la ratificación de la ley. No viola ningún aspecto constitucional, porque si alguien se bajara de ese acuerdo podría ejercer su derecho de presentarse ante la Justicia, por considerar que es una violación a la autonomía departamental.

Lo que hace este artículo es dar vigencia a un acuerdo que desarticuló la guerra de patentes. Se estableció un acuerdo -que esperamos siga prosperando- que asegura que los ciudadanos paguen el mismo monto de patente en cualquier lugar del país. Si así no fuera, significaría volver a aquellos orígenes.

El proyecto establece el acuerdo entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo. El Parlamento llegará hasta donde la voluntad de los actores principales lo admita.

Gracias, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor diputado Asti.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: en lo personal, no soy promotor del agregado final que se le hace al artículo. Quizás algún legislador no lo haya percibido, pero lo que se está proponiendo es lo siguiente: "A los efectos del cálculo del valor de la patente de rodados de cada ejercicio se deberá considerar la cotización del dólar estadounidense interbancario comprador vigente al último día hábil de noviembre del año anterior".

Esto no afecta el acuerdo que hay de la patente única a nivel nacional. Este agregado refiere a una forma de cálculo que se establece preceptivamente; lo otro es una propuesta que debe ser aceptada por el Congreso de Intendentes.

Aclaro que no somos los proponentes; lo vamos a acompañar porque así lo ha resuelto nuestra bancada.

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Señor presidente: debemos manifestar nuestra discrepancia y extrañeza porque se diga que podemos votar leyes inconstitucionales, ya que el organismo capaz de definir las inconstitucionalidades es la Suprema Corte de Justicia y no el Parlamento. No podemos hacer lo que queramos; debemos hacer lo que debemos.

Y respecto de que esta ley no es inconstitucional porque solo viola la autonomía municipal, hay que decir que la

autonomía municipal está establecida en la Constitución, no en el *Libro Gordo de Petete*.

Repito: el último agregado al artículo 350 del proyecto es inconstitucional, porque otro error en el que incurren en este momento algunos diputados preopinantes es decir que el valor de la patente de rodados es sugerido por el Poder Ejecutivo o la OPP. ¡No! El artículo 4° de la Ley N° 18.860 -la que creó el Sucive- estableció la comisión que se menciona, conformada por delegados de los intendentes, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas; es conocida como la comisión de aforos.

La mencionada ley establece que esta comisión estudiará todos los aspectos para hacer la sugerencia, tratando de que el valor sea homogéneo, pero agrega expresamente: "[…] sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275 y en el numeral 6° del artículo 297 de la Constitución de la República". Esto es, teniendo en cuenta, en todo caso, la intervención de la junta departamental de cada departamento y las atribuciones de los intendentes en esta materia ya que, según el mencionado artículo 297 de la Constitución, serán fuente de recursos de los gobiernos departamentales, decretados y administrados por estos, entre otros, los impuestos a los vehículos de transporte. Esta comisión eleva las propuestas al Congreso de Intendentes. ¡El Congreso termina homologando y, luego, cada gobierno departamental lo vota en la junta departamental! O sea que hasta el último inciso de este artículo ¡está perfecto! Pero establecer la condición de que deberá -no dice "se sugiere"- tener en cuenta el valor del dólar condiciona, aunque sea en algo menor, la potestad constitucional de los gobiernos departamentales; es violatorio de la autonomía departamental, que fue establecida en la Constitución.

Voten lo que quieran, señores legisladores, pero está mal.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: discutimos este tema en la Comisión y tengo que aceptar que había entendido el planteo del diputado Posada. Luego, en conversación con algunos intendentes, supe que ellos ya habían hecho llegar un documento, elaborado por juristas importantes, asesores del Congreso de Intendentes, en el que se establece la fundamentación que ha hecho el diputado Viera; por lo tanto, no es como se dijo en sala, que el valor de la patente sea sugerencia del Poder Ejecutivo.

Cuando se crea el Sucive, se forma una comisión integrada por delegados de los intendentes, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas, para elevar al Congreso de Intendentes una propuesta de valores de aforos, alícuotas, etcétera, y se agrega "así como todo otro aspecto que contribuya a la homogeneidad del monto del tributo a nivel nacional".

Por ende, el Congreso dice que este artículo es claramente violatorio de la autonomía y, por ende, inconstitucional.

Más allá de esta fundamentación, señor presidente, pregunto si tenemos necesidad de enfrentar a dos órganos del Estado; si tenemos necesidad de que el Congreso de Intendentes tenga que presentar un recurso de inconstitucionalidad por esta cuestión.

Creo que no es un tema de tanta trascendencia como para meternos en este problema. Por lo tanto, veremos qué decide la bancada de mi Partido; personalmente, voy a votar en contra.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: algunos señores diputados se preguntaban de dónde había salido esta iniciativa. Pues bien, fue presentada por quien habla en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y acompañada con la firma de todos los diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado; también obtuvo el respaldo de la bancada del Frente Amplio al momento de la votación y resultó aprobada por unanimidad en la Comisión.

¿Por qué coincidimos todos los representantes en esas circunstancias? Porque todos éramos conscientes de una situación que se dio a la hora de reglamentar esto, en lo que el Congreso de Intendentes llama el "texto ordenado". Históricamente, en los años 2012, 2013, 2014, 2015 e, inclusive, cuando se cobró la patente de 2016, la referencia que se tomó a los efectos de calcular el valor de los vehículos cero kilómetro, que está fijado en dólares, fue del tipo de cambio del dólar americano al último día hábil del mes de noviembre. Invariablemente, durante cinco años, desde que entró en vigencia la Ley N° 18.860, el Congreso de Intendentes adoptó ese criterio.

¿Qué pasó cuando fue a cobrar la patente de 2017? Resulta que algún creativo advirtió que durante 2016, el año que debía tomarse como referencia para el cálculo de la patente de 2017, la tendencia del dólar había sido a la baja. El dólar durante todo el año 2016 se comportó a la baja. Miraron la cotización de esa fecha y era de unos $ 28; para ser más precisos, al 30 de noviembre de 2016, era de $ 29,014. Entonces, seguramente a los efectos de lograr un ingreso mayor, a alguien se le ocurrió: "¿Y qué pasa si vamos unos meses para atrás?". Y fueron unos meses para atrás y se quedaron con la cotización del 30 de junio de 2016. O sea que, a diferencia de lo que habían dicho en cada uno de los textos ordenados de los cobros de patentes de los años anteriores, en este establecieron que la cotización iba a ser la del 30 de junio de 2016.

Pero hete aquí que el dólar siguió bajando y en 2018 -este año-, cuando fueron a establecer el texto ordenado, fijaron el mismo precio de referencia del año anterior. Es decir que congelaron el precio del valor del dólar en $ 30,617, que era el la cotización del dólar el 30 de junio de 2016. Esto, que constituye una verdadera felonía, una verdadera deslealtad con los administrados, no es gratis; supuso que para cada vehículo cero kilómetro el factor de ajuste para la patente de 2017 se incrementara en $ 1,60. Dicho así parece una diferencia insignificante, pero si suponemos que el precio promedio de un automóvil cero kilómetro es de US$ 20.000 y el precio de referencia sin IVA es US$ 16.393, en tal caso ese humilde $ 1,60 multiplicado por los US$ 16.393 determina un incremento del valor imponible que asciende a US$ 26.229, que aplicando la alícuota vigente para ese año, implicaba un aumento de la recaudación por cada vehículo de $ 1.180.

Como en 2017 se vendieron 54.522 autos, eso representó que en promedio se recaudaran US$ 1.121.000 más. Pero eso no queda ahí, porque ese valor se fija y se ajusta por IPC. Por lo tanto, esta situación se repite a lo largo de la vida útil del vehículo. Lo mismo pasó en 2018, cuando la diferencia generó US$ 1.000.000 adicionales.

Por eso, todos los diputados integrantes de la Comisión estuvimos de acuerdo con apoyar una iniciativa de esta naturaleza, y algunos representantes del Partido Nacional y del Partido Colorado que no son miembros de esa asesora también la firmaron, porque comparten el razonamiento que planteamos.

Me llama mucho la atención que se esté hablando de violación de la autonomía. Yo recuerdo la discusión cuando se aprobó la Ley N° 18.860; tengo la versión taquigráfica en mi poder. Esa ley fue aprobada con el voto de la bancada del Frente Amplio y de tres legisladores del Partido Nacional; el resto de los legisladores del Partido Nacional la votó en contra y todos fundamentaron basándose en la inconstitucionalidad de la norma. Les recuerdo que el inciso final del artículo 1º establece: "La actuación del Sucive" -esta es la prueba del nueve- "no implicará desplazamiento ni menoscabo alguno de las competencias constitucionales propias de los órganos de los Gobiernos Departamentales". Entonces, ¿se muestran sorprendidos o señalan la inconstitucionalidad de este agregado cuando los intendentes del Partido Nacional y el intendente del Partido Colorado aceptaron la violación de la autonomía a través de esa ley!

Los que no la aceptaban argumentaron que era porque implicaba la pérdida de recursos. En sala hay algunos exintendentes que participaron de Anchorena II, como le llamaron a aquella reunión. Lo primero que deberían tener es un poco de respeto por sí mismos, ¡un poco de respeto por sí mismos! Si tuvieran respeto por sí mismos no harían el planteo que están haciendo hoy. ¡Respeto por sí mismos!

No voy a agregar nada más, señor presidente; creo que está todo dicho.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: la verdad es que cada vez me afilio más a Borges: a esta altura a mí me une el espanto.

Con total honestidad, haya firmado el Partido Nacional, haya firmado el Partido Colorado o quien sea, digo que este artículo no lo voto porque tengo la absoluta certeza de que es inconstitucional. Las motivaciones del artículo son otro tema. La Constitución es clara. No es verdad que en el derecho haya dos bibliotecas. Ese es un problema de filosofía del derecho, y este no es el momento de tratar esa cuestión. Cuando un actor de la Justicia -llámese juez, miembro de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo- toma el texto de una ley y lo aplica a una situación determinada, puede adoptar distintos criterios porque -por suerte- el derecho nunca podrá ser robotizado; si lo fuera, sí se perderían la libertad, la democracia y la república. Nunca va a ser así, porque el derecho se interpreta. Pero eso sucede cuando el actor titular de la acción jurisdiccional o administrativa lo aplica. Y si a alguien se le ocurre decir que en esto hay dos bibliotecas, debo decirle que no.

Hace unos días se discutió lo mismo. No podemos legislar partiendo de la base de que si algo es inconstitucional no importa, porque después lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Somos legisladores; no somos simples administrados. No podemos pensar que tenemos la legitimación activa para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Si quieren que lo explique jurídicamente, lo hago: tenemos la carga, que es un concepto jurídico, es el imperativo del propio interés, de ser legisladores, y no solo de no generar conflictos, sino de sentar las bases.

Días pasados asistí a una charla en la que estaba el doctor Delpiazzo, asustado y preocupado, y advirtió a los legisladores de los distintos partidos que estábamos allí: "Tengan cuidado, porque en los últimos años no se está huyendo del derecho público al derecho privado: se está huyendo del Estado de derecho". Cuando me lo dice Delpiazzo, por cierto que me preocupa. Cuando tengo un problema y voy al médico, trato de buscar al mejor; a

lo sumo, le digo lo que siento, pero el diagnóstico me lo da él, que es el que sabe. No cualquiera puede opinar de cualquier cosa. Esa es una costumbre que se ha instalado en el Uruguay, y no voy a hacer alusiones políticas para que esto no se agrave más.

No hay motivación posible que justifique violar la Constitución. Puede haber objetivos profundamente altruistas; puede haber objetivos económicamente justos, pero no se puede violar la Constitución. Naturalizar la violación de la Constitución tiene consecuencias preocupantes para el país. Realmente, estoy espantada, porque estas cosas se toman hasta en broma.

Este artículo es inconstitucional. No se puede violar la autonomía municipal. Si quieren intervenir en ella, sigan el procedimiento que establece la Constitución para modificarla y eliminen la autonomía municipal; después pongan todas las cosas que quieran poner. ¡Por favor! Les doy mi palabra de honor de que me dio vergüenza que Delpiazzo nos dijera que tuviéramos cuidado porque estábamos huyendo del Estado de derecho. Eso es lo que debemos tener en cuenta como legisladores, y no quién tiene que resolver el recurso de inconstitucionalidad. ¡Por favor! Tomemos más en serio lo que estamos haciendo, porque esto es grave. Estamos dando una señal muy grave. Los legisladores no somos fulano, mengano, zutano y perengano; tenemos detrás a la gente que nos votó, a quienes confiaron en nosotros, en nuestra seriedad, en nuestra formación; es a esa gente a la que representamos. Se está vulnerando el principio básico de la democracia, que es la representatividad.

En este ámbito no somos personas individualmente consideradas; representamos el poder de la ciudadanía. No podemos tomarnos livianamente estas cosas.

No hay dos posiciones con respecto a la autonomía municipal. Lamento mucho si eso incluye a colegas del Partido Nacional. Realmente, lo lamento, pero por ningún motivo alguien me va obligar a votar algo que tengo la absoluta certeza de que es inconstitucional.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: no es el primer artículo que vino de la Comisión que modificamos; también lo hicimos con otros. Cuando firmamos este artículo lo entendimos claramente. Ahora bien, si a uno le demuestran que está algo mal, hay que ser poco gente para no cambiarlo.

Voy a decir algo que me pasó hace dos minutos y que tal vez no tendría que expresar en la Cámara.

Pensé que la discusión era por el valor del dólar, pero no le voy a aceptar al diputado Posada, y lo hago en nombre de los diecinueve intendentes que hicimos el Sucive, que me diga en la cara: "Mujica le mostró la plata y ahí fueron todos atrás de él". No es así. No es así.

El Sucive fue una excelente ley; solucionó un problema de toda la vida. Es más, no fue lo único que hicimos. Hubo otras cosas importantes para los gobiernos departamentales, por lo menos, lo que me tocó, y con Mujica de presidente. ¿Por eso voy a soportar un agravio así? ¡No! Repito: lo hago en nombre de los diecinueve intendentes. Y fue en Anchorena así como me dijo, diputado.

Pregunto si vale la pena enfrascarnos en una discusión relativa al Congreso de Intendentes. No vale la pena. Bastantes problemas tenemos como para, encima, meternos en otro más.

Era lo único que quería aclarar. Perdóneseme, pero tenía que decirlo.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Muy bien!

19.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2017. (Aprobación)

Continúa la consideración del asunto en debate.

Estaba en discusión el artículo 350.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y cuatro en noventa: AFIRMATIVA.

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor presidente: quiero dejar constancia de que hemos votado negativamente. Nos hacemos eco de los argumentos que, en profundidad, han expresado nuestros compañeros de bancada respecto de este voto negativo.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 351.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: este artículo proviene de una discusión y posterior acuerdo en la Comisión de Hacienda, sobre una omisión que cometimos al modificar las condiciones para posibilitar el cese del aporte al Fondo de Solidaridad. Habíamos omitido a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias de la nómina de los organismos que podían acceder a una pasividad y, por lo tanto, estar dentro en condiciones de cesar de aportar al Fondo. Se corrige eso y también una interpretación acerca de la actividad profesional remunerada, que tenga directa relación con la formación profesional.

Creo que se da un paso adelante al aclarar expresamente las condiciones de cese de la actividad profesional y, por ende, del cese del aporte al Fondo.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Ochenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se va a votar la propuesta del diputado Asti de colocar el artículo 349 detrás del 351.

——Ochenta y seis en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 352.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cincuenta y uno en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 353.

Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 41, presentado por el señor diputado Asti.

——En discusión.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: este artículo es el resultado de las negociaciones que hemos realizado en la bancada con los compañeros del Poder Ejecutivo, para redistribuir partidas de algunos Incisos. En particular, hay un cuadro donde figuran los Incisos de la Administración central y los importes de dinero para realizar las reasignaciones.

Al final de dicho cuadro deberíamos agregar un inciso que diga: "A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto

precedentemente, en el Inciso 02 'Presidencia de la República' se podrá disminuir créditos correspondientes a gastos de funcionamiento del Inciso 24 'Diversos Créditos', Unidad Ejecutora 02 'Presidencia de la República'".

¿A qué se debe este cambio? A que tanto en rendiciones de cuentas anteriores como en esta -eso fue expresado claramente en la exposición de motivos-, la Presidencia de la República y otros ministerios sufrieron bajas considerables de sus créditos presupuestales. Por lo tanto, en este caso estamos habilitando -manteniendo que la Presidencia de la República aportará estos $ 100.000.000- que $ 15.000.000 puedan ser utilizados de los créditos del Inciso 02 "Presidencia de la República" o del Inciso 24 "Diversos Créditos", que maneja la Presidencia de la República.

No voy a hacer aclaraciones sobre el resto del artículo porque refiere a los acuerdos realizados para financiar los incrementos para la ANEP, la Fiscalía General de la Nación y el Centro de Rehabilitación Física de Maldonado, que se financian, en parte, con estos $ 100.000.000 que se bajan de la Administración central.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 353 tal como viene de la Comisión.

——Cero en ochenta y seis: NEGATIVA. Unanimidad

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo sustitutivo que figura en la Hoja Nº 41.

——Ochenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CASARETTO (Federico).- Señor presidente: dejamos constancia de que hemos votado afirmativamente este artículo y, con mucho beneplácito, el numeral 3), ya que después de una larga lucha de muchos años conseguimos que el Gobierno nacional se involucrara en la financiación del Centro de Rehabilitación Física de Maldonado.

Este Centro funciona desde 2010 y atiende a personas con capacidades diferentes de todo el país, y lo hace aplicando una política de salud que no le corresponde asumir a un Gobierno departamental. Sin embargo, hasta el día de hoy la Intendencia de Maldonado aportó una cifra cercana a los $ 700.000 por mes, correspondiente a dinero en efectivo, servicios públicos, personal y traslados.

Sin duda, la aprobación de este artículo constituye un avance, y aunque solo implica, aproximadamente, el 50 % de lo que aporta el Gobierno departamental, se sienta un precedente, ya que el Gobierno nacional empezará a asumir la responsabilidad que le corresponde, puesto que hablamos de una política de salud nacional.

Por otra parte, perdimos tres años, porque durante ese tiempo la Intendencia volcó a este Centro el dinero que estaba destinado a otra cosa, debido a la falta de financiación y compromiso de los organismos nacionales con respecto a una materia tan sensible como la salud y la rehabilitación de personas con capacidades diferentes.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARRASCO (Andrés).- Señor presidente: votamos con agrado este artículo, ya que los diputados de Maldonado peleamos durante varios años para

conseguir que el Cerema, que atiende a personas en rehabilitación de todo el país, fuera beneficiado con una partida.

Sabemos que esta partida no alcanzará para cubrir su presupuesto, pero será de gran ayuda. Además, constituirá un punto de partida, un paso más para buscar la financiación de los centros de salud privados, ya que el Cerema no solo atiende a pacientes derivados de ASSE, sino a los del servicio mutual de todo el país, no solo del departamento de Maldonado.

Como se dijo anteriormente, este Centro ha sido financiado, en parte, por el aporte de los gobiernos departamentales de Maldonado y, si bien es cierto que las partidas anuales han ido decreciendo a lo largo del tiempo, los diputados del departamento tratamos de conseguir apoyo financiero de ASSE. Con el directorio anterior no tuvimos éxito, pero con el actual logramos que este artículo, y este inciso en particular, fuera incluido en la Rendición de Cuentas, que votamos con mucha alegría.

Muchas gracias.

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor presidente: sentimos una enorme alegría al ver que esto se hace posible en la noche de hoy.

Como bien dijeron varios diputados preopinantes, los representantes de Maldonado hicimos un gran esfuerzo para conseguir este aporte, pero también debemos reconocer la larga lucha que dieron los funcionarios, los familiares y los pacientes, junto a la dirección del Centro para ser escuchados y entendidos, ya que como ocurre con tantos otros temas, el centralismo de la capital no comprende las realidades y las necesidades del interior del país.

También es justo reconocer el trabajo llevado a cabo por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, que se puso al hombro este tema y se unió a la lucha que llevaron adelante los funcionarios, los pacientes, los familiares, la dirección del Centro y los representantes de Maldonado.

Sin duda, es bueno ver y reconocer estos ejemplos, más allá de que el camino fue lento y largo, y generó muchísimas angustias. Eso llevó a una situación límite, ya que en un momento dado parecía que nadie entendía o escuchaba lo que decíamos, porque las puertas se golpeaban pero no se abrían. Finalmente, llegamos al día de hoy.

Por otra parte, hay que reconocer los aportes realizados por las distintas administraciones departamentales que han soportado el funcionamiento de este Centro.

Además, destacamos que, más allá de esos aportes, más allá de lo que hoy se votó, la verdadera sustentabilidad del Centro está en el poderoso proyecto de ley que refiere a la creación de los centros de referencia en salud; no debemos olvidarlo a fin de dar una real sustentabilidad al Cerema de cara al futuro.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: al igual que los colegas de mi departamento, siento una gran satisfacción por que se haya votado este artículo, ya que será un gran aporte para el Centro de Rehabilitación Física que trabaja con personas con distintos tipos de discapacidad y funciona en el departamento de Maldonado.

Este Centro es el único que hay en el interior del país, y no solo da cobertura y

asistencia a personas de nuestro departamento, sino a aquellos que, fuera de Maldonado, necesitan diferentes tratamientos de rehabilitación.

Quiero dejar una reflexión: creo que ASSE está dando es un muy buen primer paso y un excelente ejemplo. Quedará por delante y será tarea del Ministerio de Salud Pública -la policía sanitaria del país y el encargado de controlar los diferentes prestadores de salud, tanto públicos como privados-, junto con el Poder Legislativo, encontrar la manera de que los prestadores del servicio de salud privada hagan el aporte económico necesario para realizar este tipo de tratamiento a los pacientes.

La rehabilitación de las personas es tan importante como la primera asistencia cuando se salva una vida o se sale de una situación muy complicada. Lo que queda por delante en la vida de ese paciente y en la de su familia es un camino bien difícil, bien empinado.

Por lo tanto, el Estado hoy está dando un excelente ejemplo que servirá para seguir avanzando e incluir a futuro a los prestadores de servicio de la salud privada.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: quiero reconocer el trabajo de los compañeros de la bancada, de la coordinación y de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, que junto al Poder Ejecutivo trabajaron en esta fórmula.

Además, debo reconocer en ese proceso el trabajo realizado por el diputado Amado, quien en la Rendición de Cuentas anterior participó de un acuerdo para conseguir aportes.

Quiero destacar que en 2010, en Maldonado, durante el Gobierno del Frente Amplio, el actual director del Banco de la República, exedil y dirigente del Partido Colorado, Eduardo Elinger, dirigió las políticas diferenciales que concretaron este Centro de Rehabilitación Física. Recuerdo que lo gestionaba una comisión, con aportes departamentales, cuyos recortes hicieron insuficiente la viabilidad económica.

Maldonado está llamado a prestar servicios en la región este; lo hará con el Centro Regional de Tratamiento Oncológico, y el próximo lunes ASSE inaugurará un centro de salud mental en San Carlos. Esto es fruto de una concertación de mucho tiempo entre el Gobierno departamental, los gobiernos locales y el Gobierno nacional. El proceso que se concreta en el día de hoy, con una cifra de $ 4.000.000, crea la inmensa expectativa de considerar cómo el Sistema Nacional Integrado de Salud incorpora el tratamiento de las discapacidades a su sistema público y privado. Creo que es parte del desafío de las nuevas institucionalidades que se van creando.

Existen algunos puntos del país con mayores potencialidades y posibilidades económicas que desarrollan condiciones, como el Cerema y el Centro Universitario de la Región Este, y el Estado, distribuyendo ingresos -como se ha hecho en los presupuestos y en esta Rendición de Cuentas-, va generando más equidad.

En Río Negro existe otro centro de tratamiento de discapacidad; esto forma parte de pensar el Uruguay en otra dimensión; quedarse en una reivindicación, sería una actitud muy menor frente a los desafíos que plantea la atención de este sector de la sociedad.

Hago un reconocimiento a los actores políticos de otros partidos y, particularmente, a los compañeros de nuestra bancada que actuaron en la coordinación de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).-Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Solicito a la Cáma-ra la reconsideración del artículo 336 que, por equivo-cación, no tuvimos la oportunidad de fundamentar.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar la reconsideración del artículo 336.

——Ochenta y tres en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Agradezco a los colegas legisladores.

Este artículo refiere a los cometidos de la Corporación Nacional para el Desarrollo y hace algunas modificaciones a la redacción anterior. En la Hoja Nº 33 figura el artículo al que agregábamos un último inciso que dice: "Cuando los servicios se presten a órganos y organismos del Estado sometidos al control del Tribunal de Cuentas de la República y de ellos se derive la utilización de fondos públicos, será de aplicación lo dispuesto en el TOCAF en todos los procedimientos de contratación que se cumplen en dicho marco".

¿Qué sucede con la redacción que hace unos momentos votó la Cámara? Que, por ejemplo, la celebración de acuerdos por entidades públicas con la Corporación Nacional para el Desarrollo -por ejemplo, la ANEP y el Mides- para la prestación de servicios de fideicomiso y administración de fondos o de recursos humanos, implica una huída de los fondos públicos que se ejecutan en el marco de dichos convenios fuera de las reglas del Tocaf.

Por ejemplo, la construcción de una escuela solicitada por la ANEP a la Corporación Nacional para el Desarrollo no solamente implica encomendar la realización de procesos a una entidad —que se supone cuenta con una organización y un equipo especializado que permitirá una mejor ejecución de los proyectos—, sino que conlleva que la utilización de los recursos se realice por fuera del control del Tribunal de Cuentas, violentando claramente las disposiciones legales y constitucionales.

La razón por la cual en el sustitutivo al artículo 336 agregamos este último inciso, precisamente es evitar la perforación del control que debe tener el Tribunal de Cuentas sobre las obras que pueda realizar la Corporación Nacional para el Desarrollo, a pedido de algunos organismos públicos, que sí tienen el control del Tribunal de Cuentas.

Esa era la fundamentación que queríamos hacer sobre este artículo y, nuevamente, pedimos disculpas a la Cámara por no haberlo hecho en tiempo y forma.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- En discusión el artículo 336.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Cuarenta y nueve en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Hemos votado por la negativa el artículo 336 porque, precisamente, cuando el Tribunal de Cuentas concurrió a la Comisión dijo que había constatado en

forma reiterada que la Corporación Nacional para el Desarrollo realizaba actuaciones por fuera de su competencia y había observado varios convenios. Además, generaba reparos en cuanto el Tribunal de Cuentas otorgaba flexibilidad para gestionar recursos públicos por fuera de los procedimientos del gasto previsto para este tipo de fondos.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- He votado afirmativamente el artículo 336 porque entiendo que se dan más potestades a la Corporación Nacional para el Desarrollo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la prestación de servicios fiduciarios.

Esto abriría una puerta para que en el futuro se pudiera pensar en la posibilidad de que el fideicomiso de los cincuentones fuera invertido en infraestructura.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Acabamos de reconsiderar el artículo 336. En la votación original, ese artículo fue aprobado por cincuenta votos, y esta vez fue aprobado por cuarenta y nueve. El Reglamento no admite dudas: en su reconsideración un artículo debe ser aprobado por la misma o mayor cantidad de votos con los que fue aprobado inicialmente. De lo contrario, la votación se debe proclamar negativa. Por lo tanto, se va a rectificar la votación del artículo 336.

——Cincuenta en noventa y uno: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 34, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

——En discusión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: en esta Rendición de Cuentas hemos hablado permanentemente de la necesidad de que haya más recursos para invertir en áreas esenciales de la vida del país, y el Gobierno siempre nos ha dicho que los recursos no están.

Nosotros venimos con la propuesta de emplear las reservas utilizables, que no están comprometidas, que en palabras del señor ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda ascienden a US$ 7.800.000.000. Se nos planteó que utilizar el 10 % de estas reservas nos generaba deuda y, sin duda, la deuda es un problema que tiene el Uruguay. Hoy se aprobó, aunque no con nuestro voto, aumentar el tope de deuda en más de US$ 200.000.000 este año y otro tanto el año que viene. Al final del período la deuda habrá crecido en US$ 5.800.000.000 con la autorización de la mayoría del Parlamento. ¿Para qué esa deuda? Hemos contraído deuda comprando deuda, emitiendo letras de regulación monetaria por US$ 2.300.000.000. Hemos contraído deuda nueva por recompra o canje de anteriores. En 2017 perdimos US$ 397.000.000 por diferencia de interés, y eso es deuda que crece. Aquí no estamos proponiendo aumentar la deuda, sino utilizar recursos del país manteniendo una cifra importante para contingencias. Si tenemos US$ 7.800.000.000 en reserva y usamos US$ 780.000.000, nos quedan alrededor de US$ 7.000.000.000. ¿Y para qué proponemos utilizar este dinero? No es para endeudarnos más ni para comprar más deuda. No es para salir a comprar dólares y mantener su precio, o para cubrir déficit, como se ha hecho el año pasado con la utilización de $ 295.000.000, o como se piensa hacer con otro tanto, lo que está bien. Lo que proponemos es inversión pública en infraestructura edilicia para la ANEP, en infraestructura edilicia para la Udelar, para llegar al 1 % del PBI de

inversión en políticas de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y para implementar las políticas establecidas por la Ley Nº 19.580, de diciembre de 2017, de violencia contra las mujeres basada en género. Obviamente, esto no sería aprobado por el Fondo Monetario Internacional ni por el Banco Mundial, que no comparten la idea de utilizar reservas en este tipo de inversión; sin embargo, entiendo que una política medianamente progresista debería utilizar estos recursos con los fines que proponemos.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Uno en ochenta y nueve: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 35, presentado por el señor diputado Eduardo Rubio.

——En discusión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: esta sí es una propuesta que va a conseguir respaldo.

Estamos planteando el fortalecimiento de una política de salud que ha tenido expresiones en otros rubros, como en la política contra el tabaco o contra el alcohol. Proponemos generar herramientas o recursos para combatir la diabetes, que crece en el país y tiene un peso importante. Según datos del Ministerio de Salud Pública, un 6 % de la población padece esta enfermedad.

Sin duda, el consumo de bebidas con azúcar agregado juega un papel importantísimo en el desarrollo de esta dolencia que va creciendo. Uruguay tiene, además, el raro y cuestionable privilegio de estar en el segundo lugar en América Latina, después de México, en el consumo de bebidas con azúcar agregado. Proponemos incrementar la tasa del Imesi para las bebidas con azúcar agregado, llevándola del 22 % al 30 % en algunos casos, y del 30 % al 50 % en otros, según el detalle de los numerales del artículo. De acuerdo con los datos de la DGI sobre el consumo de estas bebidas y la liquidación del Imesi, eso nos permitiría generar una recaudación anual de US$ 10.000.000. Proponemos que ese dinero se utilice de la siguiente forma. El 40 % se destinaría al Fondo Nacional de Recursos, para que a través del PIAS pueda comprar las bombas de insulina y los insumos para su mantenimiento que permitan mejorar la atención y la calidad de vida de las personas que son insulinodependientes. Un 10 % se destinaría a la conformación de un equipo técnico multidisciplinario para la redacción de los protocolos y la capacitación de pacientes para el uso de la bomba de insulina. Otro 10 % sería para la incorporación, compra y accesibilidad a través del PIAS de toda la nueva tecnología para el automonitoreo e insulinoterapia que redunde en el mejor control metabólico de la persona con diabetes. El 40 % restante proponemos sea destinado para obras de la planta edilicia del Hospital de Clínicas, a fin de contribuir a la mejora de la atención de salud y de hacer más funcional la educación.

Esta propuesta no genera deuda ni incremento del gasto público; lo único que implica es que las multinacionales que controlan el comercio de las bebidas -cada vez más concentrado-, que además generan y amasan ganancias cuantiosas, contribuyan a hacer realidad aquello de que los que tienen más, colaboren con un poquito más para resolver los problemas de los que no tienen tanto o están sufriendo problemas. Esto no perjudicaría a nadie, ni siquiera a los que hacen el negocio con la venta de bebidas, y

estaríamos avanzando hacia la resolución de problemas que afectan una parte importante de la población.

Esa es la propuesta y esa mi fundamentación, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar.

——Uno en ochenta y siete: NEGATIVA.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Señor presidente: queremos reiterar cuál es el argumento de la bancada del Frente Amplio para no acompañar este artículo.

En realidad, entendemos que el ámbito para la discusión de este tipo de medidas o propuestas, así como de otras que se han desglosado en la discusión de la Rendición de Cuentas, es la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes.

También queremos dejar constancia de lo mismo que mencionamos en la Comisión: tenemos que hacer un trabajo conjunto con todos los actores sociales involucrados. Sabemos que hay apoyo de la sociedad organizada para este tipo de iniciativas, pero para que nuevos tratamientos, dispositivos o medicamentos se incorporen al Formulario Terapéutico de Medicamentos y efectivamente estén registrados en el PIAS se debe cumplir con una serie de procedimientos tendientes a lograr una mejor efectividad en su aplicación. Estos procedimientos tienen que ver con la evaluación de la patología o la condición de salud en la que se aplican y con el estudio de datos epidemiológicos; también se analizan las características de la población que será beneficiada. Esto pasa por un comité de evaluación técnica, según nos explicó la delegación del Fondo Nacional de Recursos cuando se refirió a la incorporación de nuevos medicamentos o tratamientos al Formulario Terapéutico de Medicamentos.

Queríamos dejar esta constancia y manifestar que la bancada del Frente Amplio -seguramente, también el resto de las bancadas- asumirá en breve el compromiso de abordar estas problemáticas y demandas que son muy sensibles para la población y para nosotros en el ámbito que corresponde: el de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: obviamente, votamos la propuesta que planteamos en la Comisión.

Se ha manifestado la disposición de debatir esto en otro ámbito. Sin duda, la propuesta de incrementar el Imesi tiene que ver con la Rendición de Cuentas tanto como en anteriores rendiciones el tema de la cerveza, por ejemplo.

En cuanto al compromiso asumido, esta propuesta tiene el respaldo de las organizaciones sociales comprometidas con el tema. En particular, la Asociación de Diabéticos del Uruguay y la Fundación Diabetes Uruguay han expresado su respaldo a la iniciativa que nos comprometemos a llevar como proyecto de ley a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Señor presidente: compartimos plenamente la propuesta del señor diputado Rubio.

Como bancada del Frente Amplio, nos comprometemos a estudiar en serio este tema tan sensible y a abordarlo lo más rápidamente posible en la comisión en la que tenemos a estudio un proyecto de ley contra la diabetes. Obviamente, invitaremos al diputado Rubio para que nos presente el proyecto, de modo de poder empezar a trabajar.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 36, presentado por los señores diputados Conrado Rodríguez y Germán Cardoso.

——En discusión.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: quiero expresarme en el mismo sentido que los diputados preopinantes.

Hicimos una propuesta concreta a fin de obtener recursos para algo tan importante como salvar vidas o dar medicamentos que ayuden a los pacientes a tener una mejor calidad de vida.

En febrero de este año, presentamos un proyecto de ley cuyo articulado repetimos en esta Rendición de Cuentas y que trata, precisamente, de la posibilidad de utilizar parte de los valores decomisados por la Justicia especializada por la comisión de determinados delitos como narcotráfico, lavado de activos, trata de personas. El 50 % de los valores obtenidos por los decomisos sería transferido al Fondo Nacional de Recursos, con la finalidad exclusiva de financiar medicamentos de alto costo y procedimientos de medicina altamente especializada. Por supuesto, tienen que ser aquellos que no están incorporados al FTM ni al PIAS, como ya se ha dicho.

Esta es una fuente genuina, que no genera distorsiones en el presupuesto nacional, porque no quita recursos de otros ítems y, en definitiva, permite contar con importantes recursos para financiar medicamentos de alto costo y procedimientos de medicina altamente especializada, para salvar vidas.

Esa es la fundamentación del artículo que figura en la Hoja N° 36.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 36.

——Treinta y nueve en ochenta y nueve: NEGATIVA.

Se pasa a considerar el artículo 191.

Hay un sustitutivo que figura en la Hoja N° 38, presentado por el señor diputado Alejandro Sánchez.

Debemos recordar que en la consideración del articulado desglosamos el artículo 191 para encontrar una redacción que contemplara varios planteos que se habían realizado. A la Mesa llegó una propuesta de acuerdo, lo que nos llevaría a votar negativamente el artículo 191 y, luego, a considerar el sustitutivo que figura en la Hoja Nº 38. Al respecto, corresponde señalar que hay una modificación verbal, ya que en el último inciso debe decir: "Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley" en lugar de: "Este artículo entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente ley".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 191, tal como viene de Comisión.

——Cero en noventa: NEGATIVA.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: en el día de ayer, cuando consideramos este artículo, se hizo referencia a que esta norma violentaba la Ley Nº 18.331, que refiere a la protección de datos y acción de *habeas data*; lamento que el señor diputado que hizo las afirmaciones no se encuentre en sala. En particular, se hizo referencia a que violentaba uno de los principios generales señalados en el literal D) del artículo 5º de esa Ley, que es el previo consentimiento informado.

Me parece importante, a efectos de levantar las observaciones y aseveraciones que se hicieron en el marco de la consideración del artículo 191, traer a colación lo que efectivamente establece el artículo 9º, cuando define el principio del previo consentimiento informado. Dice: "El tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse.- El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 12 de la presente ley". Y agrega que "No será necesario el previo consentimiento cuando: A) Los datos provengan de fuentes públicas de información, tales como registros o publicaciones en medios masivos de comunicación"; y el literal B), que es el que encuadra la historia clínica y electrónica, hace referencia a que "Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado".

En este punto podría estar encuadrado el artículo 191, porque una de las funciones de un poder del Estado, como el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, es velar por la salud pública. Eso está incluido, pero es aún más claro, porque ese literal finaliza agregando: "[…] o en virtud de una obligación legal", y la obligación legal está estipulada y, además, ratificada en el artículo 191.

Por tanto, creo que las dudas u objeciones que existían respecto al cumplimiento del Ministerio de Salud Pública quedan absolutamente despejadas al proponer el artículo 191. Se ha actuado en el marco del respeto a la ley, de acuerdo con lo que se establece en la ley de protección de *habeas data* y apelando a una de las excepciones establecida a texto expreso en el artículo 9º, que define el principio del previo consentimiento informado.

Estamos en condiciones de votar el artículo tal como vino de la Comisión o la propuesta que se ha hecho, que creo hace referencia a uno de los principios. En realidad, me parece que a esta altura era mejor la propuesta que venía del Poder Ejecutivo, con el agregado que se le había hecho, referido a la protección de datos.

Quería dejarlo establecido porque este tema fue particularmente discutido. En su momento, no se dio la respuesta adecuada ni se discutió, pero como se hicieron aseveraciones en cuanto a la valoración del artículo 191 que, a nuestro juicio, son absolutamente infundadas, correspondía que diéramos nuestra opinión, en la medida en que creemos que ha habido un estricto cumplimiento de la Ley Nº 18.331 en lo que refiere a la historia clínica electrónica.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: la bancada del Partido Nacional insiste en la necesidad de que este tema sea desglosado y, como tantos otros, enviado a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

En el transcurso de esta tarde hemos escuchado en reiteradas oportunidades a señores diputados del partido de gobierno decir que estos temas y muchos otros deben ser tratados en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, con el compromiso de una rápida votación. Como sabemos que eso no va a suceder, el señor coordinador de la bancada del Frente Amplio nos hizo llegar un texto que intenta aclarar algunas de las preocupaciones y dudas que ayer manifestaron diputados del Partido Nacional. Entendemos que el texto es un avance y estamos de acuerdo con las modificaciones que se proponen, pero somos realistas y sabemos que a esta altura de la noche no nos enfrascaremos en un debate acerca de este tema. Por ello, dejamos constancia en la versión taquigráfica de que, a raíz de algunas de las afirmaciones hechas en la sesión de ayer, con las que coincidimos, sería mucho más garantista si el artículo estableciese que la plataforma de la historia clínica electrónica nacional será de responsabilidad del Ministerio de Salud Pública en su calidad de ente rector de la salud pública nacional; creo que eso garantiza aún más quién será el responsable.

Asimismo, debería establecer que desde el punto de vista tecnológico la entidad garante de dicha plataforma será la Agesic -lo que también redundaría en las garantías que el artículo ofrece-, que responderá civil y penalmente, en caso de corresponder, frente a situaciones tales como vulneraciones de la seguridad.

Como sabemos que esta propuesta no será acompañada por la bancada del partido de gobierno y, por ende, no tendrá los votos para ser aprobada, simplemente, queríamos que quedara la constancia de que para el Partido Nacional sería mucho más garantista que esto figurara en el artículo 191. Como no será así, vamos a votar el artículo 191 con las incorporaciones que nos hizo llegar el coordinador de la bancada del Frente Amplio, señor diputado Sánchez, que entendemos avanzan en la dirección de lo que pretendíamos garantizar.

Nada más.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: debido a que ya llevamos mucho tiempo en el tratamiento de la Rendición de Cuentas -aunque estamos batiendo un récord y debemos felicitarlo por cómo condujo esta sesión-, solo quiero dejar una constancia, teniendo en cuenta los planteos que se han hecho.

Para la bancada del Frente Amplio no había duda de que el artículo 191 no violentaba la Ley N° 18.331 -uno de cuyos principios es incorporado-, y parte de la fundamentación del diputado Posada es similar a la que realizó la bancada del partido de gobierno en el momento en que lo discutimos. De todos modos, dado que había una serie de requerimientos de otros señores legisladores que podían ser atendidos, accedimos a desglosar el artículo 191 y a considerar la posibilidad de incorporarle la redacción que se propone

en la Hoja N° 38. En definitiva, creo que todos queremos hacer lo mismo: establecer claramente las garantías en torno a cuál va a ser el tratamiento de la información. Ese ha sido el tema del debate que se ha dado en este Cuerpo.

Debido a lo avanzado de la hora y a la forma en que se ha trabajado, voy a hacer una consulta. El diputado Penadés dijo que el Partido Nacional acompañaría la Hoja N° 38; si ese fuera el caso, nosotros la votaríamos; de lo contrario, reconsideraríamos el artículo 191 y votaríamos el que trajimos de la Comisión. Como han anunciado que van a acompañar la Hoja N° 38, vamos a mantenerla para votarla.

Insisto, a nuestro juicio, el artículo 191 estaba bien, pero a efectos de generar más garantías y en el marco de construcción con diferentes bancadas, incorporamos la Hoja N° 38.

Quería dejar esa constancia, sabiendo que todos queremos que prevalezcan los derechos que tienen que ver con el uso de los datos personales de los ciudadanos y que no sean utilizados para fines ajenos a su beneficio. Por lo tanto, vamos a mantener la Hoja N° 38.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Hoja N° 38, con la modificación verbal propuesta.

——Noventa y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se reconsidere el sustitutivo del artículo 169 que figura en la Hoja N° 13!

—Señores diputados: hemos terminado la consideración del articulado y de los aditivos. En tres sesiones que representaron largas jornadas, aprobamos la ley más extensa que a consideración de la Cámara -probablemente la más importante que trata cada año el Parlamento-: la rendición de las cuentas públicas y el balance de ejecución presupuestal, en este caso, del año 2017.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar.

——Noventa y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se reabre la discusión del artículo sustitutivo que figura en la Hoja N° 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el sustitutivo del artículo 169 que figura en la Hoja N° 13.

——Cero en noventa y uno: NEGATIVA. Unanimidad.

Se pasa a considerar el sustitutivo que figura en la Hoja N° 39, presentada por los señores diputados Alejandro Sánchez, Alfredo Asti, Iván Posada, Gustavo Penadés, Conrado Rodríguez, Pablo Abdala y Eduardo Rubio.

Se trata de una modificación al sustitutivo del artículo 169 que oportunamente se votó.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

——Noventa y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Se va a votar.

——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

Les quiero agradecer a todos la colaboración.

——Lo hemos hecho en un buen tiempo, con un debate correcto, apasionado a veces, pero siempre respetuoso y, por lo tanto, creo que debemos felicitarnos por el trabajo realizado y extender el saludo a los funcionarios que trabajan, incluso después de que nosotros nos vamos, para que esto sea posible.

——Felicito a todos los que lo han hecho, a los periodistas que han estado presentes, a la gente de CX 36, que durante los tres días cubrió esta tarea, lo que no es menor; antes lo hacían muchos medios de comunicación.

——Se levanta la sesión.

Sr. JORGE GANDINI
PRESIDENTE

Sr. Juan Spinoglio
Secretario relator

Dra. Virginia Ortiz
Secretaria redactora

Arq. Julio Míguez
Director del Cuerpo Técnico de Taquigrafía

Dep. Legal N° 322.569/01
Impreso en la División Ediciones